ANDRE HORI:

Honako hau jakinarazten dizut: Eusko Jaurlaritzak, 2019ko uztailaren 23an egindako bilkuran, **Ingurumen administrazioari buruzko LEGE-PROIEKTUA** onartu du.

Hori ziurtatu egiten dut eta, Jaurlaritzak erabakitakoa betez, horren berri ematen dizut, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean exijitutakoa betez.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko irailaren 4a.

EXCMA. SRA.:

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 23 de julio de 2019, ha procedido a la aprobación del **PROYECTO DE LEY de administracion ambiental de Euskadi.**

Lo que certifico y, en cumplimiento de lo acordado por el Gobierno, traslado a V.E., de conformidad con lo exigido por la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Vitoria-Gasteiz, a 4 de septiembre de 2019.

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio

SECRETARIO DEL GOBIERNO
JAURLARITZAKO IDAZKARIA

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO/
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA

INGURUMEN ADMINISTRAZIOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE EUSKADI

HONEKIN BATERA AURKEZTEN DIREN AGIRIAK

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

BIDALKETA-IDAZKIA

OFICIO DE REMISIÓN

I. LEGE PROIEKTUAREN TESTUA

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

II. MEMORIA

MEMORIA

III. EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOKO IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

OFICIO DE REMISIÓN /
BIDALKETA-IDAZKIA

INGURUMEN ADMINISTRAZIOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE EUSKADI

ANDRE HORI:

Honako hau jakinarazten dizut: Eusko Jaurlaritzak, 2019ko uztailaren 23an egindako bilkuran, **Ingurumen administrazioari buruzko LEGE-PROIEKTUA** onartu du.

Hori ziurtatu egiten dut eta, Jaurlaritzak erabakitakoa betez, horren berri ematen dizut, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean exijitutakoa betez.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko irailaren 4a.

EXCMA. SRA.:

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 23 de julio de 2019, ha procedido a la aprobación del **PROYECTO DE LEY de administracion ambiental de Euskadi.**

Lo que certifico y, en cumplimiento de lo acordado por el Gobierno, traslado a V.E., de conformidad con lo exigido por la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Vitoria-Gasteiz, a 4 de septiembre de 2019.

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio

SECRETARIO DEL GOBIERNO
JAURLARITZAKO IDAZKARIA

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO/
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA

I

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY /
LEGE PROIEKTUAREN TESTUA

INGURUMEN ADMINISTRAZIOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE EUSKADI

PROYECTO DE LEY
DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE EUSKADI

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 8
TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 14
Artículo 1. Objeto 14
Artículo 2. Definiciones. 15
Artículo 3. Principios. 18
Artículo 4. Utilidad pública e interés social. 19
Artículo 5. Derechos de las personas. 19
Artículo 6. Deberes de las personas. 20
TÍTULO SEGUNDO. COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 20
Artículo 7. Competencias en materia de medio ambiente. 20
Artículo 8. Ejercicio de competencias por las administraciones públicas. 21
Artículo 9. Programa Marco Ambiental. 22
Artículo 10. Consejo Asesor de Medio Ambiente. 22
Artículo 11. Composición. 23
TÍTULO TERCERO. INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA AMBIENTAL 24
Artículo 12. Información ambiental. 24
Artículo 13. Difusión de la información ambiental. 24
Artículo 14. Solicitud de Información Ambiental. 25
Artículo 15. Participación ambiental. 26
Artículo 16. Acción pública. 26
Artículo 17. Administración electrónica. 27
TÍTULO CUARTO. ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE. 27
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 27
Artículo 18. Regímenes de intervención ambiental. 27
Artículo 19. Plazos para el inicio de las actividades autorizadas. 28
Artículo 20. Finalidades. 29
Artículo 21. Consultas previas 29
Artículo 22. Concurrencia de los regímenes de intervención ambiental con la evaluación de impacto ambiental. 29
Artículo 23. Obligaciones de las administraciones públicas. 30
Artículo 24. Obligaciones de los titulares de las actividades e instalaciones. 31
Artículo 25. Capacidad técnica y responsabilidad. 32

ARTÍCULO 26. CONFIDENCIALIDAD. 33

ARTÍCULO 27. TRANSMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 33

ARTÍCULO 28. CESE DE LA ACTIVIDAD Y CIERRE DE LA INSTALACIÓN 33

ARTÍCULO 29. MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INSTALACIONES. 34

CAPÍTULO II. AUTORIZACIONES AMBIENTALES. 34

ARTÍCULO 30. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA. 34

ARTÍCULO 31. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA. 35

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES COMUNES A LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y A LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA. 35

ARTÍCULO 32. INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO. 35

ARTÍCULO 33. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. 36

ARTÍCULO 34. SUBSANACIÓN. 38

ARTÍCULO 35. INFORMACIÓN PÚBLICA. 38

ARTÍCULO 36. INFORME MUNICIPAL EN ACTIVIDADES SUJETAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA. 38

ARTÍCULO 37. INFORME DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES EN MATERIA DE VERTIDOS. 39

ARTÍCULO 38. OTROS INFORMES. 39

ARTÍCULO 39. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y AUDIENCIA DEL INTERESADO. 40

ARTÍCULO 40. RESOLUCIÓN. 40

ARTÍCULO 41. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES. 41

ARTÍCULO 42. CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA. 41

ARTÍCULO 43. VIGENCIA Y REVISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES. 44

ARTÍCULO 44. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS. 45

ARTÍCULO 45.PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES ÚNICAS 45

ARTÍCULO 46. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES ÚNICAS 47

ARTÍCULO 47.COMUNICACIÓN DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO O APERTURA. 47

CAPÍTULO IV. LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA 48

ARTÍCULO 48. LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA. 48

ARTÍCULO 49. SOLICITUD DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA. 49

ARTÍCULO 50. INFORMACIÓN PÚBLICA Y EMISIÓN DE INFORMES. 49

ARTÍCULO 51. INFORME DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 50

ARTÍCULO 52. CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD. 50

ARTÍCULO 53. COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA O APERTURA. 51
ARTÍCULO 54. REVISIÓN DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA. 52
CAPÍTULO V. COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA. 52
ARTÍCULO 55. COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA. 52
ARTÍCULO 56. PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA. 53
ARTÍCULO 57. CONTENIDO Y EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA..... 53
ARTÍCULO 58. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 54
TÍTULO QUINTO EVALUACIÓN AMBIENTAL. 54
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 54
ARTÍCULO 59. EVALUACIÓN AMBIENTAL. 55
ARTÍCULO 60. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 55
ARTÍCULO 61. COMPETENCIAS. 56
ARTÍCULO 62. NULIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS NO EVALUADOS. 57
ARTÍCULO 63. CAPACIDAD TÉCNICA Y RESPONSABILIDAD. 57
ARTÍCULO 64. CONFIDENCIALIDAD. 58
ARTÍCULO 65. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EXCLUIDOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 58
ARTÍCULO 66. PROYECTOS QUE PUEDEN SER EXCLUIDOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL CASO POR CASO. 59
ARTÍCULO 67. – DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES ORDINARIAS. ... 59
ARTÍCULO 68. PUBLICIDAD. 61
ARTÍCULO 69. RELACIONES INTERCOMUNITARIAS Y TRANSFRONTERIZAS. 61
ARTÍCULO 70. REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS INTERESADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 62
CAPÍTULO II. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS 62
ARTÍCULO 71. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. 62
ARTÍCULO 72. INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS. 62
ARTÍCULO 73. NATURALEZA Y CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. 63
ARTÍCULO 74. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 63
CAPÍTULO III. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 64
ARTÍCULO 75. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 64
ARTÍCULO 76. INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS. 64
ARTÍCULO 77. NATURALEZA Y CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 64
ARTÍCULO 78. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 65
TÍTULO SEXTO. INSTRUMENTOS DE IMPULSO DE LA MEJORA AMBIENTAL 66
ARTÍCULO 79. ACUERDOS MEDIOAMBIENTALES 66

ARTÍCULO 80.FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA COMUNITARIO DE GESTIÓN Y AUDITORÍAS MEDIOAMBIENTALES (EMAS). 66
ARTÍCULO 81. FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA. 67
ARTÍCULO 82. HUELLA AMBIENTAL. 68
ARTÍCULO 83. COMPRA PÚBLICA VERDE. 68
ARTÍCULO 84. ECOINNOVACIÓN. 69
ARTÍCULO 85. FISCALIDAD AMBIENTAL. 69
ARTÍCULO 86. INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN. 70
ARTÍCULO 87. VOLUNTARIADO AMBIENTAL. 70
ARTÍCULO 88. MEDIDAS DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO. 71
TÍTULO SÉPTIMO. INSPECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL. 71
CAPÍTULO I. ENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL. 71
ARTÍCULO 89. ENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL. 72
CAPÍTULO II. INSPECCIÓN AMBIENTAL. 72
ARTÍCULO 90. FINALIDAD DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL Y COMPETENCIAS INSPECTORAS. 72
ARTÍCULO 91. DEBER DE SOMETIMIENTO A LA ACTUACIÓN INSPECTORA. 73
ARTÍCULO 92. EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN AMBIENTAL. 73
ARTÍCULO 93. ACTA E INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL. 73
ARTÍCULO 94. PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL. 74
ARTÍCULO 95. PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN AMBIENTAL. 75
TÍTULO OCTAVO. RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS MEDIOAMBIENTALES. 75
CAPÍTULO I. RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL 75
ARTÍCULO 96. ACTIVIDADES SIN AUTORIZACIÓN, LICENCIA O COMUNICACIÓN PREVIA. 75
ARTÍCULO 97. CORRECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS O DEFICIENCIAS. 76
ARTÍCULO 98. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 76
ARTÍCULO 99. PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL. 77
ARTÍCULO 100. EJECUCIÓN FORZOSA DE LAS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL. 78
CAPÍTULO II. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 79
ARTÍCULO 101. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y DE SU AMENAZA INMINENTE. 79
ARTÍCULO 102. RÉGIMEN COMPETENCIAL. 79
TÍTULO NOVENO. DISCIPLINA AMBIENTAL. 80
ARTÍCULO 103. INFRACCIONES Y SANCIONES. 80
ARTÍCULO 104. TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES. 80

ARTÍCULO 105. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES. 82
ARTÍCULO 106. SANCIONES. 82
ARTÍCULO 107. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. 84
ARTÍCULO 108. DECOMISO. 84
ARTÍCULO 109. PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES 84
ARTÍCULO 110. COMPETENCIAS. 85
ARTÍCULO 111. MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL. 85
ARTÍCULO 112. OBLIGACIÓN DE REPONER E INDEMNIZACIÓN. 86
ARTÍCULO 113. MULTAS COERCITIVAS Y EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. 86
ARTÍCULO 114. PROHIBICIÓN DE CONTRATAR. 87
ARTÍCULO 115. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 87
ARTÍCULO 116. PUBLICIDAD. 87
ARTÍCULO 117. PRESTACIÓN AMBIENTAL SUSTITUTORIA. 88
ARTÍCULO 118. DESTINO DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS. 88
DISPOSICION ADICIONAL ÚNICA. 89
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. PROCEDIMIENTOS EN CURSO. 89
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. INSTALACIONES EXISTENTES. 89
DISPOSICION DEROGATORIA. 90
DISPOSICION FINAL PRIMERA. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7.C) 6. DE LA LEY 27/1983, DE 25 DE NOVIEMBRE, DE RELACIONES ENTRE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LOS ÓRGANOS FORALES. 91
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7.4 DE LA LEY 4/2019, DE 21 DE FEBRERO, DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA. 91
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. ADECUACIÓN AL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO. 91
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. ADECUACIÓN AL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN LA LEY 1/2006, DE 23 DE JUNIO, DE AGUAS. 92
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. HABILITACIÓN NORMATIVA PARA ADECUAR LOS ANEXOS 92
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. ENTRADA EN VIGOR. 92
ANEXOS 93
ANEXO I.A INSTALACIONES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA. 93
ANEXO.I.B. ACTIVIDADES E INSTALACIONES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA. 100
ANEXO.I.C. ACTIVIDADES E INSTALACIONES SOMETIDAS A LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA. 101
ANEXO. I.D. ACTIVIDADES E INSTALACIONES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA. 103
ANEXO. I.E. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN DE UNA ACTIVIDAD O INSTALACIÓN COMO SUSTANCIAL. 105

ANEXO II.A. PLANES Y PROGRAMAS QUE DEBEN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA. 107

ANEXO II.B. PLANES Y PROGRAMAS QUE DEBEN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 108

ANEXO II.C. CRITERIOS PARA DETERMINAR CUÁNDO UN PLAN O PROGRAMA SOMETIDO A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA DEBE SOMETERSE A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA. 109

ANEXO II.D. PROYECTOS QUE DEBEN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA. 110

ANEXO II E. PROYECTOS QUE DEBEN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 124

ANEXO II.F. CRITERIOS PARA DETERMINAR CUÁNDO UN PROYECTO SOMETIDO A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA DEBE SOMETERSE A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA. 132

ANEXO II.G. DEFINICIONES A EFECTOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL. 134

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco supuso el establecimiento de un marco normativo unificado para el ejercicio de la política ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta Ley, pionera en su momento, estableció los pilares básicos de la política ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en sus distintos ámbitos tales como la evaluación ambiental, la gestión de residuos y el control de la contaminación, entre otros. Sin embargo, desde la aprobación de la citada ley algunos de estos ámbitos han sido regulados por leyes y reglamentos específicos de la Comunidad Autónoma o por la normativa básica del Estado. Por este motivo la presente ley no regula todos los ámbitos sectoriales que si regulaba la citada Ley General de Protección del Medio Ambiente.

Una de las señas de identidad de la normativa ambiental en los últimos años ha sido la profusión de normas promulgadas desde distintos ámbitos y niveles, adaptándose, de esta forma, a las necesidades emergentes que la propia sociedad demanda.

Habida cuenta de lo expuesto, esta Ley establece un marco jurídico garante de un alto nivel de protección del medio ambiente adaptado a la realidad económica y social vasca actual. Es por ello que la norma incorpora los últimos desarrollos normativos y aporta nuevas técnicas de intervención administrativa en aras a la simplificación y agilización del procedimiento administrativo y con el objetivo de lograr una efectiva protección del medio ambiente compatibilizando las distintas actividades económicas con el entorno en el que se desarrollan.

La presente Ley determina los derechos y los deberes de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, subrayando el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, toda vez que promueve una economía sostenible mediante la gestión eficiente de los recursos naturales, en aras al fomento de una sociedad hipocarbónica que limite la influencia del cambio climático. Alcanzar estos objetivos requiere de acciones decididas que cuenten con una base normativa firme que les confiera seguridad jurídica y máxima eficacia.

Con este anhelo la Ley persigue impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente, ya que la búsqueda de soluciones a los retos medioambientales a los que se enfrenta la sociedad vasca requiere, de forma ineludible, la ejecución de actuaciones conjuntas entre las administraciones públicas, el sector económico y la ciudadanía en general, habida cuenta de los objetivos comunes perseguidos, como una oportunidad para lograr la mejora de la

calidad de vida y el bienestar general, pretendiendo un decidido cambio de modelo de producción y consumo que sitúe a la Comunidad Autónoma del País Vasco como referente a nivel europeo.

Algunas de estas oportunidades se refieren a la innovación, la ecoeficiencia o la compra pública verde; actuaciones basadas, indefectiblemente, en la mejora continua y el diálogo con los agentes socioeconómicos, el derecho a la información y el desarrollo de un sistema fiscal ecológico, que fomente y promueva las mejores prácticas ambientales en el desarrollo de las actividades.

Como ya se ha expuesto, la aprobación de directivas, reglamentos y otros actos de alto contenido técnico por parte de las instituciones de la Unión Europea se ha incrementado notablemente en las dos últimas décadas, asumiendo unas mayores exigencias y estándares de protección del medio ambiente. Este hecho, en su versión negativa, ha supuesto la creación de multitud de procedimientos complejos de autorización que podrían erigirse como un obstáculo para el desarrollo de actividades económicas que pudiese redundar en una menor protección de los objetivos de protección del medio ambiente para los cuales dicha normativa se dicta.

El contenido de la presente Ley se articula bajo la premisa del concepto de "normativa inteligente" enunciado por la Comisión Europea, que promueve una aprobación de normas por parte de los Estados miembros que refuercen el papel de la ciudadanía, analicen los impactos de la normativa en la vida socioeconómica en general y tiendan a una simplificación administrativa unificando procedimientos y suprimiendo trámites innecesarios, lo que mejorará sustancialmente tanto la labor de las administraciones públicas como el desarrollo de las actividades vascas.

Por esta razón son fundamentales las medidas diseñadas por esta Ley para agilizar y simplificar el funcionamiento de la Administración Ambiental con el objeto de reducir y simplificar la intervención administrativa. Se configura así, un sistema que regula las diferentes técnicas de intervención sobre las actividades con incidencia ambiental satisfaciendo el interés general de la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos y ciudadanas, pero a la vez garantizando la transparencia, la eficiencia, la economía y la eficacia en la actuación de los poderes públicos, elementos estos esenciales de lo que debe ser una buena administración.

Indispensable es, también, mejorar el conocimiento y la información sobre el medio ambiente, al que la sociedad en su conjunto tiene derecho, facilitando en todos los procedimientos administrativos la participación pública, ya que únicamente mediante una fluida interrelación público-privada será posible avanzar en un mayor conocimiento ambiental que promueva la consecución de los objetivos comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que impulse la responsabilidad compartida de la ciudadanía, de modo que ésta se convierta en un agente activo que se involucre

en la prevención del deterioro del medio ambiente y promueva su defensa y recuperación.

La presente Ley, que encuentra su amparo legal en la competencia establecida en el artículo 11.1.a) del Estatuto de Autonomía para el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y ecología, contiene 116 artículos que se estructuran en 9 títulos.

El Título I, de disposiciones generales, plasma el objeto de la Ley y los objetivos que con ella se persigue alcanzar, configurando el marco normativo de la protección del medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, junto con los principios en los cuales se fundamenta y que constituyen las pautas de actuación de las administraciones públicas y los criterios que servirán para interpretar las normas que regulan dicha protección. Además, en este título se formulan los derechos y los deberes de las personas públicas y privadas en relación, entre otros aspectos, con el derecho al disfrute del medio ambiente, su protección, conservación y mejora.

El Título II regula las competencias que en materia de medio ambiente corresponden a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y a las administraciones forales y locales, estableciendo como instrumentos de coordinación de la política ambiental el Programa Marco Ambiental en el que se contendrán las líneas estratégicas y los compromisos para mejorar la calidad del medio ambiente durante su periodo de vigencia. Asimismo, se procede a modificar la composición y las funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente creado por la Ley 3/1998, de 27 de febrero, configurándolo como un órgano consultivo y de cooperación entre las administraciones públicas y los sectores que representan a los intereses sociales y económicos en la elaboración, consulta y seguimiento de las políticas ambientales. La Ley suprime la Comisión Ambiental del País Vasco, integrando sus funciones en las propias del Consejo.

El Título III, dedicado a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, tiene como finalidad el diseño de una nueva sistemática en la relación entre la Administración pública ambiental y la ciudadanía vasca, facilitando la participación en la toma de decisiones en materia ambiental y regulando aspectos tales como el derecho a la información en materia de medio ambiente y su difusión. El sistema que permitirá integrar toda la información sobre el medio ambiente que generen tanto las entidades públicas como privadas a fin de que sea utilizada en la gestión, la difusión y la toma de decisiones también es regulado con la finalidad de que el acceso a la información ambiental se garantice del modo más amplio y tecnológicamente avanzado en consonancia con los requerimientos de una administración electrónica.

El Título IV procede a regular la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente bajo las premisas de simplificación y unificación de los procedimientos administrativos previstos en la normativa sectorial de protección del medio ambiente, integrando las condiciones y requisitos que en la misma se establecen y eliminando los obstáculos jurídicos y administrativos al desarrollo de las actividades. Se establece, así, un nuevo sistema de intervención administrativa para todos los grupos de actividades e instalaciones comprendidos en el Anexo I de la Ley, de modo que exista un único procedimiento con una única resolución administrativa que incorpore todas las medidas preventivas frente a los impactos ambientales.

Así, se establecen los regímenes jurídicos de la autorización ambiental integrada, cuya regulación se mantiene fiel a la normativa europea sobre prevención y control integrados de la contaminación, y la nueva autorización ambiental única emitida por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en las que se integran en un solo procedimiento las autorizaciones, permisos e informes que actualmente se encuentran dispersos en la normativa sectorial protectora del medio ambiente. Además, incluye la regulación de la licencia de actividad clasificada y la comunicación previa de actividad clasificada que gestionarán por las entidades locales introduciendo algunas modificaciones relevantes.

En este sentido, y en aras a garantizar un reparto equilibrado de funciones interinstitucional, las competencias que en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónomas y los Órganos Forales se atribuían a estos órganos en relación con calificación, señalización de medidas correctoras, inspección y sanción en relación con actividades, que puedan establecerse, en suelo urbano residencial, se sustituyen por las facultades de imposición de medidas protectoras y correctoras en aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes, y en los municipios de 10.000 o más habitantes, si así lo solicita el ayuntamiento correspondiente al órgano foral competente.

Asimismo, en aras a agilizar la tramitación de los diferentes procedimientos de intervención ambiental, sin disminuir las garantías de participación de las personas interesadas, se elimina el trámite de notificación a los vecinos inmediatos al lugar donde se vaya a emplazar una actividad, sustituyéndolo por la publicación en el Boletín Oficial correspondiente y en la sede electrónica y el dictado de edictos municipales por parte del órgano competente para otorgar la autorización o licencia.

Asimismo, la ley integra en los procedimientos de autorización ambiental integrada y autorización ambiental única el procedimiento para el otorgamiento de la autorización de vertidos al dominio público hidráulico de las cuencas gestionadas por la Administración General del Estado y por la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, la integración no modifica el régimen económico financiero

previsto por la legislación de aguas ni el resto de competencias que corresponden a dichas administraciones en materia de protección del dominio público hidráulico. En particular, no se alteran las competencias relativas a vigilancia e inspección ni la potestad sancionadora.

El Título V, de evaluación ambiental, actualiza el régimen de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos recogidos en el Anexo II de la Ley en aras a hacer efectiva la integración de los aspectos ambientales en su elaboración, aprobación o autorización, seleccionando las alternativas que resulten ambientalmente viables y estableciendo las medidas de todo tipo para prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente. Se regulan así los procedimientos de evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada de planes y programas que permiten, en el primer caso, determinar los efectos significativos de aquellos, estableciendo, si procede, las condiciones que deban adoptarse para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales y, en el segundo caso, determinar si procede o no el sometimiento al procedimiento ordinario y los términos que en que deba ser aprobado.

Por su parte, los dos procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos, ordinaria y simplificada, se regulan, en el primero de los supuestos con el fin de valorar los efectos significativos de un proyecto en el medio ambiente y, si procede, fijar las condiciones para su ejecución, explotación, y desmantelamiento y, con la finalidad, en el segundo, de que se evalúe el sometimiento o no al procedimiento ordinario o bien determinar las medidas que sean precisas para la protección del medio ambiente y los recursos naturales, compatibilizando de esta forma el desarrollo de proyectos con la adecuada protección del entorno.

Con la finalidad de garantizar la participación efectiva de las personas que deban ser consultadas según lo dispuesto en la normativa sobre evaluación ambiental, se crea el Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental, registro que dependerá administrativamente del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Título VI contempla los instrumentos de impulso de la mejora ambiental entre los cuales se encuentran los acuerdos medioambientales, el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorias Medioambientales (EMAS) y la etiqueta ecológica de la Unión Europea, como elementos que posibiliten la corresponsabilidad público privada en la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las obligaciones que se fijan en la normativa reguladora de esta materia. El análisis del ciclo de vida de los productos y organizaciones con el fin de medir su impacto ambiental potencial y analizar su reducción, la eco-innovación en productos y procesos que permitan aprovechar las oportunidades de mercado que genera el medio ambiente y el establecimiento de un sistema de fiscalidad ambiental dedicado a la promoción y mejora del medio

ambiente son las herramientas y los nuevos retos que la sociedad vasca debe asumir en la protección del medio ambiente. Asimismo, la compra pública verde se configura en la Ley como un mecanismo básico para el cumplimiento de sus objetivos encomendando a las administraciones públicas su promoción y puesta en valor. En este sentido, y para el caso de los contratos de obras y suministros, se contempla la posibilidad de establecer como condición para su ejecución, la utilización de subproductos, materias primas secundarias o materiales reciclados dada la vinculación directa del objeto de este tipo de contratos con dicha condición. La investigación, la educación y la formación son también objeto de la norma partiendo de la mejora en la base de conocimiento sobre el medio ambiente como medio tractor para extender, entre la ciudadanía y el conjunto de instituciones, actuaciones, valores y comportamientos que redunden en la mejora de medio ambiente. En esta misma dirección se prevé la participación de los ciudadanos y ciudadanas en acciones de voluntariado para la realización de actividades de interés general con contenido ambiental y las acciones de reconocimiento para aquellos contribuyan a la protección, conservación y difusión de los valores medioambientales de la Comunidad Autónoma.

El Título VII, en el que se regula la inspección y el control ambiental, contempla, por un lado, a las entidades de colaboración ambiental a las que las administraciones públicas pueden encomendar el desempeño de funciones de verificación y control de actividades. Su funcionamiento, nivel de actividad y alcance de sus actuaciones serán objeto de desarrollo reglamentario. Por otro lado, la inspección ambiental que garantice la adecuación a la legalidad ambiental de las actividades sometidas a la Ley es objeto de regulación pormenorizada en cuestiones como el personal encargado de las labores de control, vigilancia e inspección ambiental que podrán realizarse bien directamente por el personal al servicio de las administraciones públicas o, a instancia y en nombre de aquéllas, por entidades de colaboración ambiental; la planificación de la inspección ambiental, que deberá plasmarse en planes que se elaborarán periódicamente con el contenido mínimo que la Ley señala y que se concretarán en programas de inspección en los que se incluirán las frecuencias de las visitas para los distintos tipos de actividades con incidencia ambiental basándose en una evaluación sistemática de los riesgos medioambientales que tome en consideración los criterios que esta norma fija y otros que podrán ser establecidos reglamentariamente.

El Título VIII, regula la restauración de la legalidad ambiental y responsabilidad por daños ambientales, de modo que se detallan las medidas a adoptar para la legalización de las actividades en funcionamiento cuando no dispongan de autorización o licencia, o no hayan sustanciado los trámites del procedimiento de comunicación previa o, cuando disponiendo de ellas, se adviertan deficiencias en su funcionamiento. El procedimiento para restaurar la legalidad ambiental, autónomo

del procedimiento sancionador, es también objeto de regulación en la Ley incluyendo la posible ejecución forzosa de las medidas que resulte oportuno adoptar. La responsabilidad por daños ambientales se contempla en ley con la finalidad de prevenir, evitar y reparar dichos daños cuando tengan carácter significativo, junto con las amenazas inminentes de que los mismos sean ocasionados, en la forma y condiciones reguladas en la normativa sobre responsabilidad ambiental.

Finalmente, el Título IX regula la disciplina ambiental y recoge la tipificación de los hechos constitutivos de infracción clasificándolos como muy graves, graves y leves. La graduación de las sanciones se fija para cada tipo de infracción estableciéndose que en su imposición se deberá guardar la adecuación con la gravedad de la infracción considerando los criterios que la ley especifica. Se prevé también, dentro del régimen disciplinario, la obligación de reponer la situación alterada como consecuencia de los hechos constitutivos de infracción, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración pública. Como medidas complementarias, que desincentiven la comisión de infracciones se establece la prohibición de contratar con la Administración pública o la imposibilidad de obtener subvenciones públicas en aquellos casos en los que se hayan cometido infracciones muy graves o graves hasta en tanto no se hayan ejecutado las medidas protectoras y correctoras pertinentes o se haya satisfecho el importe de la sanción, así como la creación de un registro de personas infractoras en el que se inscribirán las personas públicas y privadas infractoras sobre las que haya recaído una resolución firme. El objetivo exclusivo de este registro es contar con información fehaciente a disposición de las administraciones públicas sobre las sanciones impuestas a los efectos de la valoración de la existencia de una posible reincidencia o de la imposición y seguimiento de sanciones accesorias como es la prohibición de contratar o de obtener subvenciones. En esta misma línea se prevé dar publicidad a las sanciones impuestas por la comisión de dichas infracciones, así como de la identidad de sus responsables. Por último, se contempla la prestación ambiental sustitutoria de las sanciones consistentes en la imposición de multas que podrá consistir en acciones de restauración, conservación o mejora que redunden en beneficio del medio ambiente, en las condiciones y términos que el órgano que imponga la sanción determine.

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo para la protección, conservación y mejora del medio ambiente en la Comunidad Autónoma

del País Vasco, determinando los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:

a) Proteger a sus ciudadanos y ciudadanas frente a las presiones y riesgos medioambientales.

b) Proteger el medio ambiente, prevenir su deterioro y restaurarlo donde haya sido dañado.

c) Gestionar eficientemente los recursos promoviendo una economía sostenible, circular e hipocarbónica.

d) Limitar la incidencia del cambio climático.

e) Impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente.

f) Agilizar el funcionamiento de la Administración ambiental mediante la simplificación y unificación de los procedimientos administrativos, regulando las técnicas de intervención sobre las actividades con incidencia ambiental integrando las condiciones y requisitos que en la misma se establecen.

g) Establecer mecanismos eficaces de inspección y de suministro y difusión pública de información que faciliten el control de las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta Ley.

h) Impulsar las medidas necesarias para coordinar el ejercicio de competencias por los diferentes órganos y administraciones públicas competentes en la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente.

i) Mejorar la base de conocimientos e información sobre el medio ambiente.

j) Fomentar la educación ambiental en todos los niveles educativos, así como la concienciación ciudadana y del conjunto de actores sociales en relación con la protección y mejora del medio ambiente.

k) Garantizar un desarrollo ambientalmente sostenible, contribuyendo a la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas.

Artículo 2. Definiciones.

1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por:

a) Acuerdo medioambiental: acuerdo suscrito entre la Administración ambiental competente y una empresa, o los representantes de un sector, colectivo u organización determinada, según la cual ambas partes se vinculan voluntariamente para el cumplimiento de unos objetivos de protección ambiental.

b) Autorización ambiental integrada: la resolución escrita del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la que se permite, a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una actividad o instalación de las contempladas en el Anexo I.A, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta Ley y la normativa que le resulte de aplicación. Tal autorización podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación de acuerdo con el ámbito de aplicación contemplado en la presente Ley.

c) Autorización ambiental única: la resolución escrita del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la que se permite, a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una actividad o instalación de las contempladas en el Anexo I.B, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta Ley y la normativa que le resulte de aplicación. Tal autorización podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación de acuerdo con el ámbito de aplicación contemplado en la presente Ley.

d) Actividad clasificada: cualquier actividad de titularidad pública o privada susceptible de originar daños al medio ambiente, a las personas o a sus bienes, generar riesgos de producir tales daños o causar molestias a las personas y que no estén sujetas a autorización ambiental integrada ni a autorización ambiental única.

e) Actividad o instalación existente: cualquier actividad o instalación autorizada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

f) Comunicación previa de actividad clasificada: documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento del órgano competente de la administración local que las actividades o instalaciones contempladas en el Anexo I.D se encuentran habilitadas para el inicio de la actividad.

g) Ecoinnovación: toda forma de actividad innovadora cuyo resultado u objetivo es una mejora significativa de la protección del medio ambiente. Incluye los nuevos procesos de fabricación, los nuevos productos o servicios, y los nuevos métodos empresariales o de gestión, cuya utilización o ejecución pueda prevenir o reducir sustancialmente los riesgos para el medio ambiente, la contaminación u otros impactos negativos del uso de recursos, a lo largo del ciclo de vida de las actividades a ellos vinculadas.

h) Efecto significativo sobre el medio ambiente: alteración desfavorable de magnitud apreciable de cualquiera de los aspectos de la calidad del medio ambiente, especialmente si es de carácter permanente o de larga duración. En caso de los espacios Red Natura 2000, se considerará que un efecto es de carácter significativo si puede empeorar los parámetros que definen el estado de conservación de los

hábitats o especies objeto de conservación en el lugar, o, en su caso, dificultar su restablecimiento.

i) Instalación: cualquier unidad técnica fija o móvil en donde se desarrolle una o más de las actividades enumeradas en el Anexo I y en el Anexo II de esta Ley, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación u otros efectos sobre el medio ambiente.

j) Licencia actividad clasificada: resolución escrita del órgano competente de la administración local por la que se permite el desarrollo de una actividad clasificada bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta Ley y la normativa que le resulte de aplicación.

k) Medidas correctoras: medidas impuestas por el órgano con competencias ambientales en orden a disminuir la magnitud o la extensión de los efectos sobre el medio ambiente, de forma que éstos dejen de ser significativos a medio o largo plazo.

l) Medidas protectoras: medidas impuestas por el órgano con competencias ambientales en orden a evitar efectos significativos sobre el medio ambiente.

m) Mejores técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión y otras condiciones de la autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las personas.

A estos efectos se entenderá por:

m.1. «Técnicas»: la tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada.

m.2. «Técnicas disponibles»: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económica y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en la Unión Europea como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.

m.3. «Mejores técnicas»: las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto.

n) Modificación sustancial: cualquier modificación realizada en una actividad o instalación autorizada que, en opinión del órgano competente para otorgar dicha autorización, licencia o recepción de su comunicación previa, y de acuerdo con los

criterios establecidos en esta Ley, pueda tener repercusiones significativas en el medio ambiente, la seguridad o la salud de las personas.

o) Modificación no sustancial: cualquier modificación de las características o del funcionamiento, o de la extensión de la actividad o instalación autorizada, que, sin tener la consideración de sustancial, pueda tener consecuencias en el medio ambiente, la seguridad o la salud de las personas.

p) Órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco: Viceconsejería competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco u órgano que la sustituya.

q) Personas interesadas: todos aquéllos en quienes concurran cualesquiera de las circunstancias previstas en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23.1 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los Derechos de Acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente.

r) Promotor: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende implementar un plan, programa o proyecto.

s) Público en general: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.

t) Titular: Cualquier persona física o jurídica que explote, total o parcialmente, la actividad o instalación.

u) Valores límite de emisión: la masa o la energía expresada en relación con determinados parámetros específicos, la concentración o el nivel de una emisión, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados.

2. En el anexo II.G se recogen definiciones adicionales a efectos de la evaluación ambiental.

Artículo 3. Principios.

1. La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios:

a) Cautela y acción preventiva, prevención de la contaminación en su origen y "quien contamina paga".

b) El acceso a la información, la transparencia y la participación de la ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

c) Utilización racional de los recursos naturales y uso eficiente de la energía.

d) Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones.

e) Adaptación al progreso técnico de las instalaciones y actividades para la protección del medio ambiente.

f) Responsabilidad compartida entre los agentes públicos y privados.

2. Las medidas que se adopten para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley se aplicarán de acuerdo con los principios de agilidad, simplificación procedimental y reducción de cargas administrativas.

3. Los principios de esta Ley constituyen pautas de actuación de las administraciones públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y criterios de interpretación de las correspondientes normas de protección del medio ambiente y de la salud de las personas.

Artículo 4. Utilidad pública e interés social.

Las actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta Ley podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos, y en particular a los expropiatorios respecto de los bienes o derechos que pudieran resultar afectados, de conformidad todo ello con lo que establece la legislación en la materia.

Artículo 5. Derechos de las personas.

De acuerdo con lo previsto en la presente Ley, todas las personas tienen derecho:

a) A disfrutar de un medio ambiente adecuado en igualdad de condiciones, ya sean hombres o mujeres

b) A participar, directamente o por medio de asociaciones, y en los términos que establezcan las correspondientes normas, en el diseño de las políticas y en las decisiones para la protección del medio ambiente.

c) A obtener información sobre el estado del medio ambiente y de los recursos naturales y a acceder a la justicia en materia de medio ambiente.

d) A ejercer la acción pública para exigir a las administraciones públicas vascas el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación ambiental.

e) A que los órganos de las administraciones públicas competentes, actúen de acuerdo con los principios de una buena administración, garantizando la transparencia, la eficiencia, la economía y la eficacia con el objetivo de satisfacer el interés general.

Artículo 6. Deberes de las personas.

De acuerdo con lo previsto en la presente Ley, todas las personas tienen el deber de:

a) Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.

b) Evitar o, en su caso, reducir la generación de residuos, las emisiones a la atmósfera, el ruido, las vibraciones, los olores, la contaminación lumínica y los vertidos a las aguas y el suelo.

c) Restaurar, en su caso, el medio ambiente alterado.

d) Contar con el título administrativo correspondiente para realizar cualquier actividad, dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, que pueda incidir en el medio ambiente y la salud de las personas y cumplir las condiciones establecidas para su ejercicio.

TÍTULO SEGUNDO. COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

Artículo 7. Competencias en materia de medio ambiente.

1. Corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y ecología, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

b) La elaboración y aprobación de los planes y estrategias ambientales a nivel autonómico.

c) La adopción de las medidas necesarias para la directa aplicación de los reglamentos de la Unión Europea y el desarrollo y ejecución de las obligaciones establecidas por las directivas y el resto de la normativa europea.

d) El ejercicio de las competencias atribuidas en esta Ley en relación con la ordenación, inspección y disciplina de las actividades con incidencia en el medio ambiente y la salud de las personas.

e) El ejercicio de otras competencias atribuidas por la presente Ley y por el resto de la normativa sectorial en materia de medio ambiente.

f) La potestad para dictar normas adicionales de protección ambiental que eleven el nivel requerido por la legislación básica o europea.

2. Corresponden a los Órganos Forales de los Territorios Históricos además de las competencias reconocidas en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónomas y los Órganos Forales, las siguientes:

a) La elaboración y aprobación de los planes y estrategias ambientales a nivel de Territorio Histórico y, en particular, el desarrollo de la planificación marco de gestión de residuos urbanos, a través de sus correspondientes planes forales.

b) Asistir a los ayuntamientos en relación con las actividades e instalaciones sometidas al procedimiento de licencia de actividad clasificada y de comunicación previa de actividad clasificada que se regulan en la presente Ley.

c) La emisión de las declaraciones e informes con los que concluyen los procedimientos de evaluación ambiental cuando la competencia sustantiva para la aprobación definitiva o para la autorización del plan, programa o proyecto resida en los órganos forales de los Territorios Históricos de acuerdo con lo que establece esta Ley.

d) La coordinación, en el ámbito de cada territorio histórico, de las actuaciones municipales en orden a garantizar la prestación integral de servicios en materia de residuos domésticos.

e) El impulso de infraestructuras supramunicipales de gestión de residuos domésticos.

f) El ejercicio de otras competencias atribuidas por la presente Ley y por el resto de la normativa sectorial en materia de medio ambiente.

3. Corresponde a las entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el ámbito de sus competencias:

a) El ejercicio de las competencias atribuidas en esta Ley en relación con la ordenación, inspección y disciplina de las actividades con incidencia en el medio ambiente y la salud de las personas.

b) El ejercicio de otras competencias atribuidas por la presente Ley, por el resto de la normativa en materia de medio ambiente, así como por la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Artículo 8. Ejercicio de competencias por las administraciones públicas.

1. En el ejercicio de sus competencias en materia de medio ambiente, las diversas administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, cooperación, coordinación e integración de los requisitos de protección del medio ambiente en el resto de políticas públicas. En particular, deberán prestarse la debida asistencia para asegurar la eficacia y coherencia de sus actuaciones,

suministrándose mutuamente información para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley.

2. A tal fin, las administraciones públicas diseñarán y gestionarán mecanismos de colaboración ajustando sus actuaciones a los principios de información mutua y colaboración con el fin de impulsar la gestión integrada de las políticas ambientales, económicas y sociales de los municipios de forma consensuada entre dichas administraciones y la ciudadanía.

3. Para garantizar la coherencia de la política ambiental, corresponde al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco el ejercicio de las facultades de coordinación que demande el interés público ambiental.

Artículo 9. Programa Marco Ambiental.

1. La política ambiental del País Vasco se concretará en un Programa Marco Ambiental que contendrá un diagnóstico sobre la situación del medio ambiente, las líneas estratégicas y los compromisos a llevar a cabo para la mejora de su calidad durante su periodo de vigencia.

2. El Programa Marco Ambiental será elaborado por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y aprobado por el Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo de Medio Ambiente. El Programa, que podrá desarrollarse mediante planes específicos, establecerá su periodo de vigencia y procedimiento para su seguimiento y revisión.

Artículo 10. Consejo Asesor de Medio Ambiente.

1. El Consejo Asesor de Medio Ambiente, como órgano consultivo y de cooperación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tiene como finalidad favorecer la relación y participación de las administraciones públicas y los sectores representativos de intereses sociales, económicos y de la Universidad, en la elaboración, consulta y seguimiento de las políticas ambientales. El Consejo está adscrito al Departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. Corresponden al Consejo Asesor de Medio Ambiente las siguientes funciones:

a) Asesorar e informar en materia de política ambiental con respecto a los planes y programas que sean sometidos a su consideración y guarden relación con el medio ambiente.

b) Informar los anteproyectos de Ley y los proyectos de disposiciones generales, que guarden relación con la protección del medio ambiente.

c) Informar el Programa Marco Ambiental y sus planes de desarrollo específicos.

d) Proponer o emitir informes, así como medidas que conecten las políticas ambientales con la generación de empleo, el desarrollo sostenible, la coordinación de la iniciativa económica pública y privada y la participación, educación y sensibilización ciudadana en materia medioambiental.

e) Realizar las labores de seguimiento pertinentes de todas aquellas actuaciones que, en el área de medio ambiente, sean desarrolladas por las instituciones representadas en el Consejo.

f) Impulsar la participación de las universidades y centros de investigación en la política ambiental.

g) Ejercer las demás funciones que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

3. El Consejo Asesor de Medio Ambiente adoptará sus normas de funcionamiento interno y creará, en su caso, secciones, cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.

4. Los informes, recomendaciones y propuestas del Consejo Asesor de Medio Ambiente no tendrán carácter vinculante.

Artículo 11. Composición.

1. El Consejo Asesor de Medio Ambiente está presidido por la persona titular del Departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco y forman parte del mismo los vocales que se designen en representación de:

a) El Parlamento Vasco.

b) El Gobierno Vasco.

c) Los Órganos Forales de los Territorios Históricos.

d) Los municipios.

e) Las asociaciones o movimientos ciudadanos representativos de sectores ambientales.

f) Las organizaciones de personas consumidoras y usuarios.

g) Las organizaciones y agrupaciones empresariales.

h) Las organizaciones sindicales.

i) Los centros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología.

j) Las universidades con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

k) Personas expertas de reconocido prestigio en materia de medio ambiente.

2. Reglamentariamente se detallará la composición del Consejo Asesor de Medio Ambiente, el procedimiento de designación de sus miembros, garantizando una representación equilibrada de mujeres y hombres, y sus reglas básicas de organización y funcionamiento.

TÍTULO TERCERO. INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA AMBIENTAL

Artículo 12. Información ambiental.

1. A los efectos de esta Ley se considera información ambiental toda la que en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma material, obre en poder de las administraciones públicas y de los demás entes pertenecientes al sector público o en el de otros sujetos en su nombre, tal y como se establece en las Directivas europeas sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y su normativa de transposición, de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. La Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco elaborará y publicará cada año un informe de coyuntura sobre el estado del medio ambiente y cada cuatro años un informe completo. Estos informes incluirán datos sobre la calidad del medio ambiente y las presiones que éste sufra, incluida la artificialización del suelo, así como un sumario no técnico que sea comprensible para el público.

Artículo 13. Difusión de la información ambiental.

1. El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá disponer de un sistema de información de acceso público que contenga, al menos, datos suficientes sobre:

a) El estado y calidad de las aguas, el aire, la gea, el suelo, la fauna, la flora, la geodiversidad y biodiversidad, los servicios de los ecosistemas, el paisaje, la Red Natura 2000 y los espacios naturales protegidos del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, incluidas sus interacciones recíprocas.

b) Los planes y programas de gestión ambiental y demás actuaciones públicas de protección ambiental o que hayan afectado o puedan afectar a los elementos y condiciones del medio ambiente.

c) Los objetivos y las normas de calidad sobre el medio ambiente.

d) Las autorizaciones ambientales integradas y las autorizaciones ambientales únicas emitidas.

e) Las declaraciones e informes ambientales emitidos por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre planes, programas y proyectos.

f) La lista de autoridades públicas ambientales en cuyo poder obre la información ambiental.

2. Las autoridades públicas garantizarán el correcto ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental que obre en su poder o en el de otros sujetos que la posean en su nombre y facilitarán su difusión y puesta a disposición del público de la manera más amplia, sistemática y tecnológicamente avanzada garantizando la igualdad de acceso, la accesibilidad universal y la reutilización de los datos públicos.

La difusión de la información ambiental por parte de las autoridades públicas se realizará según lo establecido en la Directiva sobre los derechos de acceso a la información en materia de medio ambiente y su normativa de transposición de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. Con este fin, entre otros, se crea INGURUNET, Sistema de Información Ambiental del País Vasco, dependiente del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá por objeto la integración de toda la información alfanumérica, gráfica o de cualquier otro tipo sobre el medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, generada por todo tipo de entidades públicas o privadas productoras de información ambiental, para ser utilizada en la gestión, la investigación, la difusión pública, la educación ambiental y la toma de decisiones.

4. Al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco le corresponde la organización, gestión y evaluación del Sistema de Información Ambiental, así como aprobar las normas y criterios que normalicen dicha información y garanticen su uso compartido y su reutilización. Dichas actuaciones serán objeto de desarrollo reglamentario.

5. Para garantizar el flujo de la información ambiental disponible, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco fomentará políticas de colaboración con otras administraciones públicas, universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones sociales, entre otros, con el fin de integrar y coordinar, en su caso, los sistemas de información existentes.

Artículo 14. Solicitud de Información Ambiental.

1. Las solicitudes de información ambiental se tramitarán de conformidad y con las garantías establecidas en la Directiva sobre los derechos de acceso a la información en materia de medio ambiente y su normativa de transposición de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. Cuando una determinada y concreta información ambiental no haya sido difundida o no esté disponible para su acceso público, cualquier persona podrá solicitarla a la autoridad pública en cuyo poder obre la información.

3. La autoridad pública en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, o de dos meses en el caso de que de la información solicitada tengan un gran volumen o complejidad, deberá facilitar la información solicitada o bien denegarla determinando los motivos.

4. Serán motivos de denegación de información los establecidos en la Directiva sobre los derechos de acceso a la información en materia de medio ambiente y su normativa de transposición de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que en todo caso deberán ser objeto de interpretación restrictiva.

Dichos motivos de denegación se podrán aplicar en relación con las obligaciones de difusión contempladas en el artículo anterior.

5. Contra la resolución denegatoria de la información cabrán los correspondientes recursos administrativos.

Artículo 15. Participación ambiental.

1. Las administraciones públicas y los demás entes pertenecientes al sector público promoverán y garantizarán el correcto ejercicio del derecho de participación, real y efectiva, en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente y cuya elaboración o aprobación les corresponda.

2. En particular, las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, promoverán y garantizarán la participación de las personas interesadas y del público en general en los procedimientos de intervención ambiental y en la elaboración, modificación, revisión y aprobación de planes, programas y disposiciones de carácter general relacionadas con el medio ambiente. Dicha participación se realizará tomando en consideración la perspectiva de género.

3. Las personas interesadas y el público en general podrán hacer uso de su derecho de participación en los citados procedimientos antes de que se adopte cualquier decisión, mediante la presentación de comentarios, observaciones o alegaciones.

Artículo 16. Acción pública.

1. Será pública la acción para exigir ante las administraciones con competencias ambientales del País Vasco el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, así como en el resto de la legislación sectorial ambiental.

2. Cualquier persona podrá solicitar a las administraciones competentes la adopción de las medidas de restauración de la legalidad ambiental, de

responsabilidad por daños ambientales, así como denunciar las actuaciones que se presuman infracciones según lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 17. Administración electrónica.

La utilización de los servicios electrónicos en las actuaciones llevadas a cabo por las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco de la presente Ley será preceptiva, de conformidad a lo dispuesto en la normativa básica reguladora del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y se llevará a cabo con pleno sometimiento a los derechos reconocidos en la normativa reguladora del acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos.

TÍTULO CUARTO. ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 18. Regímenes de intervención ambiental.

1. Las actividades e instalaciones públicas y privadas relacionadas en el Anexo I de esta Ley quedan sometidas a los siguientes regímenes de intervención ambiental:

a) Las actividades e instalaciones del Anexo I.A, al régimen jurídico de autorización ambiental integrada.

b) Las actividades e instalaciones del Anexo I.B, al régimen jurídico de autorización ambiental única.

c) Las actividades e instalaciones del Anexo I.C, al régimen jurídico de licencia de actividad clasificada.

d) Las instalaciones y actividades del Anexo I.D, al régimen jurídico de comunicación previa de actividad clasificada.

2. La determinación del sometimiento de las actividades e instalaciones a los diferentes regímenes de intervención ambiental regulados en esta Ley se realiza con base en la mayor o menor afección de dichas actividades sobre el medio ambiente y la salud de las personas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) La dimensión y capacidad de producción de la instalación.

b) El consumo de agua, energía y otros recursos.

c) La cantidad, peso y tipología de los residuos generados.

d) Las potenciales emisiones a la atmosfera y a las aguas.

e) Las potenciales emisiones acústicas.

f) El riesgo de accidente.

g) El uso de sustancias peligrosas.

3. Los regímenes jurídicos de licencia de actividad clasificada y comunicación previa de actividad clasificada previstos en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de la realización de los trámites de comunicación, notificación o registro ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco u otras administraciones públicas que sean preceptivos de acuerdo con lo que a tal fin establezca la normativa sectorial aplicable.

4. Los ayuntamientos no podrán conceder licencias de obras para actividades sujetas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental única o licencia de actividad clasificada en tanto no se haya concedido el correspondiente título habilitante.

5. Cuando una actividad o instalación incluida en alguno de los regímenes de intervención ambiental previstos en este artículo deba de someterse a otro de dichos regímenes como consecuencia de una ampliación o modificación de la actividad, tal cambio se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento correspondiente establecido en esta Ley, en tanto en cuanto se determine reglamentariamente un procedimiento específico al efecto.

6. Las actividades e instalaciones, o parte de las mismas, dedicadas a investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos no se someterán a los regímenes de intervención ambiental previstos en este artículo sin perjuicio de que el órgano que fuera competente para su autorización, si estuvieran sometidos a la misma, establezca las medidas preventivas necesarias para proteger el medio ambiente y la salud de las personas, para lo cual, el promotor deberá presentar una comunicación e información suficiente sobre las características y la estimación de la duración de la actividad proyectada al citado órgano.

Artículo 19. Plazos para el inicio de las actividades autorizadas.

1. Los plazos para el inicio de las actividades a las que se les ha otorgado la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única serán de cinco y tres años respectivamente.

2. El plazo para el inicio de las actividades a las que se les ha otorgado la licencia de actividad clasificada o han presentado comunicación previa de actividad clasificada será de un año.

3. Transcurridos dichos plazos sin haber dado inicio de forma efectiva a la actividad por causa imputable al titular, el órgano competente resolverá la caducidad de su habilitación para desarrollar la actividad.

4. Dichos plazos serán susceptibles de una única prórroga por razones debidamente justificadas a solicitud del interesado, sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de los mismos.

Artículo 20. Finalidades.

Los regímenes de intervención ambiental que se regulan en este título tienen como finalidades:

a) Prevenir, o cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo, al objeto de alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas.

b) Preservar la diversidad del medio natural de las afecciones que pudieran derivarse de las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de este título.

c) Velar por el uso sostenible de los recursos naturales y la correcta gestión de los residuos.

Artículo 21. Consultas previas.

1. Con anterioridad al inicio de los procedimientos relativos a los regímenes de intervención ambiental, la persona física o jurídica promotora de la actividad podrá solicitar al órgano competente para su tramitación, información sobre los requisitos administrativos y técnicos de dicho procedimiento. Dicha consulta deberá adjuntar una memoria resumen descriptiva en la que se detallen las características básicas de la actuación y el soporte gráfico del emplazamiento en el que se vaya a desarrollar.

2. El órgano competente deberá responder, con carácter informativo, a la petición recibida en el plazo máximo de tres meses y para ello podrá elevar consultas a las personas, instituciones y administraciones públicas previsiblemente afectadas por la actividad y sobre los contenidos específicos a incluir en la documentación que se presente junto con la solicitud o comunicación.

Artículo 22. Concurrencia de los regímenes de intervención ambiental con la evaluación de impacto ambiental.

Cuando una actividad se encuentre a la vez sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada y a alguno de los regímenes

de intervención ambiental previstos en esta Ley, su tramitación deberá realizarse de acuerdo con las siguientes normas:

a) Cuando la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la actividad se encuentre sometida al régimen de autorización ambiental integrada o al de autorización ambiental única, los procedimientos administrativos correspondientes a ambos regímenes y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria se integrarán. Asimismo, el contenido de la declaración de impacto ambiental formará parte de la autorización ambiental integrada o de la autorización ambiental única, emitiéndose ambos pronunciamientos en el mismo acto administrativo

b) Cuando la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la administración foral y la actividad se encuentre sometida al régimen de licencia de actividad clasificada, la declaración de impacto ambiental deberá emitirse con anterioridad a la concesión por el ayuntamiento correspondiente de la licencia de actividad. La declaración de impacto ambiental será vinculante para la autoridad local.

c) Cuando la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la administración foral y la actividad se encuentre sometida al régimen de comunicación previa de actividad clasificada, esta comunicación no podrá presentarse ante el ayuntamiento antes de la publicación de la correspondiente declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental serán vinculantes para la autoridad local.

d) Cuando corresponda a la Administración general del Estado formular la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental, en los términos previstos en la normativa básica de evaluación ambiental, no podrá otorgarse autorización, licencia de actividad clasificada o presentar comunicación previa de actividad clasificada sin que previamente se haya emitido dicha declaración o informe.

Artículo 23. Obligaciones de las administraciones públicas.

Las administraciones públicas que actúen en los procedimientos de intervención ambiental regulados en el presento título estarán obligadas a:

a) Gestionar los regímenes jurídicos de intervención ambiental de acuerdo con el principio de información mutua, cooperación y colaboración entre administraciones públicas y de servicio a la ciudadanía.

b) Velar por el cumplimiento de las condiciones y requisitos que se establezcan en los instrumentos de intervención ambiental y en la normativa sectorial protectora del medio ambiente.

c) Aprobar las disposiciones e instrucciones técnicas que sean necesarias para facilitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los regímenes de intervención ambiental.

d) Garantizar el acceso a la información ambiental relativa a las actividades objeto de la presente Ley y su impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

e) Fomentar la participación de las personas interesadas y del público en general desde una fase temprana en los procedimientos de intervención previstos en la presente Ley.

f) Impulsar el reconocimiento del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS), el sistema de etiqueta ecológica de la Unión Europea y la ecoinnovación como medios para el cumplimiento de las obligaciones en materia de medio ambiente y la mejora continua del desempeño ambiental de las organizaciones.

g) Cualquier otra obligación que se establezca en esta Ley y en la demás normativa aplicable.

Artículo 24. Obligaciones de los titulares de las actividades e instalaciones.

Quienes sean titulares de las actividades e instalaciones que son objeto de regulación en este título están obligados a:

a) Disponer del correspondiente título de intervención en los casos en que éste sea preceptivo y cumplir con las condiciones derivadas del mismo o del régimen jurídico de comunicación previa.

b) Cumplir con las obligaciones de suministro de información que se deriven de la presente Ley y de la normativa sectorial protectora del medio ambiente.

c) Poner en conocimiento de los órganos de las administraciones públicas competentes cualquier hecho derivado del funcionamiento normal o anormal de una actividad que pueda afectar significativamente al medio ambiente y la salud de las personas.

d) En el supuesto de que se produzca un incumplimiento de las condiciones de su autorización o de la normativa de aplicación, la persona titular de la actividad o instalación deberá tomar sin demora las medidas correctoras necesarias y ponerlas en conocimiento de las administraciones ambientales competentes.

e) Informar de la transmisión de las habilitaciones legales ambientales para el desarrollo de actividades al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el caso de las actividades de los apartados A y B del Anexo I y de aquéllas otras actividades e instalaciones sujetas a comunicación o declaración responsable ante el citado órgano ambiental por disposición de otra normativa ambiental de aplicación. Esta obligación corresponderá al transmitente, sin perjuicio de que la nueva persona titular pueda comunicar dicha transmisión.

f) Informar de la transmisión de las habilitaciones legales ambientales para el desarrollo de actividades al ayuntamiento correspondiente en el caso de las actividades de los apartados A, B, C y D del Anexo I. Esta obligación corresponderá al transmitente, sin perjuicio de que la nueva persona titular pueda comunicar dicha transmisión.

g) Prestar la colaboración necesaria para la correcta realización de las actuaciones de inspección desarrolladas por las diferentes administraciones públicas.

h) Presentar la comunicación previa de inicio de funcionamiento o apertura de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental única y aquéllas otras actividades e instalaciones sujetas a comunicación o declaración responsable ante órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto al citado órgano como al ayuntamiento donde se ubique la instalación.

i) Presentar la comunicación previa de inicio de funcionamiento o apertura de las actividades sujetas a licencia de actividad clasificada ante el ayuntamiento donde se ubique la instalación.

j) Cualquier otra obligación que se establezca en esta Ley y en el resto de normativa aplicable.

Artículo 25. Capacidad técnica y responsabilidad.

1. Los proyectos y documentación técnica, incluidos los estudios y documentos ambientales previstos en la normativa sobre evaluación ambiental, que formen parte de las solicitudes de inicio de los procedimientos previstos en este título, deberán ser realizados por personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales.

2. Dicha documentación técnica tendrá la calidad necesaria para cumplir las exigencias de esta Ley. Con esta finalidad deberá identificarse a su autor o autores indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada. Los autores de los citados documentos y el promotor serán responsables solidarios de su contenido y de la fiabilidad de la información, excepto en lo que se refiere a los datos recibidos de la administración de forma fehaciente.

Artículo 26. Confidencialidad.

1. Las administraciones públicas que intervengan en los procedimientos de intervención ambiental deberán respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el promotor que, de conformidad con la normativa aplicable tengan dicho carácter teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público.

2. El promotor deberá indicar qué parte de la información contenida en la documentación presentada considera que debería gozar de confidencialidad. La administración competente decidirá sobre la información que, según la legislación vigente, esté exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la información amparada por la confidencialidad, ponderando el principio de información y participación pública real y efectiva en materia de medio ambiente con el derecho a la confidencialidad.

3. En el supuesto de que se deniegue total o parcialmente el carácter confidencial de la información indicada por el promotor se deberá emitir una resolución motivada con indicación de los recursos que correspondan.

Artículo 27. Transmisión de los títulos de intervención para el desarrollo de las actividades.

1. Cuando se transmitan los títulos de intervención ambiental para el desarrollo de actividades o instalaciones sujetas a autorización, licencia o comunicación, será preceptivo ponerlo en conocimiento de la administración competente otorgante del correspondiente título o receptora de la comunicación previa.

2. El nuevo titular se subrogará en los derechos, obligaciones y responsabilidades del transmitente. No obstante, responderán solidariamente respecto de las obligaciones y responsabilidades en tanto no se realice la comunicación a la que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 28. Cese de la actividad y cierre de la instalación.

1. El cese temporal o definitivo de las actividades o cierre de las instalaciones sujetas a esta Ley, deberá ser comunicada a la administración autorizante, detallando las medidas tomadas o que se prevean tomar y su secuencia temporal, al objeto de evitar cualquier riesgo de contaminación.

2. A los efectos de la presente Ley, se considerará que una actividad ha cesado definitivamente cuando haya transcurrido el plazo de un año sin desarrollarse la misma y no medie comunicación fehaciente del titular a la administración autorizante en la que se expongan justificadamente los motivos de dicha situación.

Artículo 29. Modificación de las actividades e instalaciones.

1. El titular de la actividad o instalación deberá comunicar al órgano competente para autorizarla, cualquier modificación que pueda tener consecuencias en el medio ambiente y que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la actividad o instalación sometida a autorización, licencia o comunicación.

2. Cuando el titular de la actividad o instalación considere que la modificación no es sustancial deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización, licencia o recibir la comunicación indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas para tal consideración. Dicha modificación podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se hubiese pronunciado en contra el citado órgano competente en el plazo de un mes.

En cualquier caso, se considerará la modificación como no sustancial cuando se reduzcan las emisiones o no se modifiquen, siempre y cuando dicha modificación no haya de ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria de acuerdo con la normativa sobre esta materia.

3. Cuando la modificación sea considerada sustancial por el titular o por la autoridad competente para autorizarla o para recibir la comunicación previa, esta no podrá llevarse a cabo hasta que no se produzca la modificación de su título autorizatorio por medio del procedimiento previsto en la presente Ley, o se presente una nueva comunicación previa.

4. Se considerará que se produce una modificación sustancial cuando la modificación de la actividad o instalación represente una mayor y significativa incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas y concurra cualquiera de criterios recogidos en el Anexo I.E de la presente Ley.

CAPÍTULO II. AUTORIZACIONES AMBIENTALES.

Artículo 30. Autorización ambiental integrada.

1. Está sometida al régimen de autorización ambiental integrada la explotación de las actividades e instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I.A de la presente Ley y que, en su caso, alcancen los umbrales de capacidad establecidos en el mismo. Esta autorización precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se adaptará a las modificaciones que se produzcan en las instalaciones.

2. Mediante la autorización ambiental integrada se integrarán en un solo acto y en un solo procedimiento administrativo previo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las autorizaciones de producción y gestión de residuos, vertidos a colector, al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre y emisiones a la atmósfera, fijándose los valores límite de emisión que correspondan con base en las mejores tecnologías disponibles.

3. La autorización ambiental integrada se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deban exigirse para la ocupación o utilización del dominio público, de conformidad con lo establecido en la normativa de aguas, de costas y demás normativa que resulte de aplicación.

Artículo 31. Autorización ambiental única.

1. Está sometida al régimen jurídico de autorización ambiental única la explotación de actividades e instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I.B de la presente Ley. Esta autorización precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se adaptará a las modificaciones que se produzcan en las instalaciones.

2. Mediante la autorización ambiental única se integrarán en un solo acto y en un solo procedimiento administrativo previo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las autorizaciones de producción y gestión de residuos, vertidos a colector, al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre, emisiones a la atmósfera, fijándose los valores límite de emisión que correspondan según lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable.

3. La autorización ambiental única se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deban exigirse para la ocupación o utilización del dominio público, de conformidad con lo establecido en la normativa de aguas, de costas y demás normativa que resulte de aplicación.

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES COMUNES A LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y A LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA.

Artículo 32. Informe de compatibilidad urbanística del ayuntamiento.

1. Previa solicitud del interesado, el Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación deberá emitir en el plazo de treinta días informe de compatibilidad urbanística del proyecto, actividad o instalación sometido a autorización ambiental.

En caso de no hacerlo, dicho informe se suplirá con una copia de la solicitud del mismo.

2. En todo caso, si el informe urbanístico regulado en este artículo fuera negativo, con independencia del momento en que se haya emitido, pero siempre que se haya recibido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco con anterioridad al otorgamiento de la autorización ambiental, dicho órgano dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones.

Artículo 33. Contenido de la solicitud.

1. La solicitud de la autorización ambiental integrada y de la autorización ambiental única, se presentarán ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y contendrán:

a) Proyecto técnico que incluya, al menos, los siguientes aspectos:

1º Descripción detallada y alcance de la actividad y de las instalaciones, los procesos productivos y el tipo de producto.

2º En su caso, documentación que el interesado presenta ante la Administración pública competente para el control de las actividades con repercusión en la seguridad, salud de las personas o el medio ambiente de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

3º En su caso, estado ambiental del lugar en el que se ubicará la instalación y los posibles impactos que se prevean, incluidos aquellos que puedan originarse al cesar la explotación de la misma.

4º Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y energía empleados o generados en la instalación.

5º Fuentes generadoras de las emisiones de la instalación.

6º Tipo y cantidad de las emisiones previsibles de la instalación al aire, a las aguas y al suelo, así como la determinación de sus efectos significativos sobre el medio ambiente, y, en su caso, tipo y cantidad de los residuos que se vayan a generar.

7º Las medidas relativas a la aplicación del orden de prioridad que dispone la jerarquía de residuos de los residuos generados por la instalación.

8º Medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente.

En el caso de instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada el proyecto técnico incluirá, además:

- La tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para prevenir y evitar las emisiones procedentes de la instalación o, y si ello no fuera posible, para

reducirlas, indicando cuales de ellas se consideran mejores técnicas disponibles de acuerdo con las conclusiones relativas a las mejores tecnologías disponibles.

- Un breve resumen de las principales alternativas a la tecnología, las técnicas y las medidas propuestas, estudiadas por el solicitante, si las hubiera.

b) Informe urbanístico del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico.

c) En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas y de costas para la autorización de vertidos a las aguas continentales o desde tierra al mar.

Cuando se trate de vertidos a las aguas continentales de cuencas gestionadas por la Administración General del Estado, esta documentación será inmediatamente remitida al organismo de cuenca por el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada y única, a fin de que manifieste si es preciso requerir al solicitante que subsane la falta o complete la documentación aportada.

d) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.

e) Cualquier otra información y documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación aplicable incluida, en su caso, la referida a fianzas o seguros obligatorios que sean exigibles, entre otras, por la legislación de responsabilidad ambiental.

f) Cuando la actividad implique el uso, producción o emisión de sustancias peligrosas relevantes, teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas en el emplazamiento de la instalación, se requerirá un informe base antes de comenzar la explotación de la instalación o antes de la actualización de la autorización con la información necesaria para determinar el estado del suelo y las aguas subterráneas, a fin de hacer la comparación cuantitativa con el estado tras el cese definitivo de las actividades.

2. A la solicitud de la autorización ambiental integrada y de la autorización ambiental única se acompañará un resumen no técnico de todas las indicaciones especificadas en el párrafo anterior, para facilitar su comprensión a efectos del trámite de información pública.

3. En el caso de que la actividad o instalación esté sometida además a evaluación ambiental ordinaria o simplificada, la solicitud deberá contener un documento técnico en el que se integren los contenidos exigidos en los epígrafes a y c del párrafo primero, junto con los contenidos propios del estudio de impacto ambiental o del documento ambiental, en su caso.

Artículo 34. Subsanación.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior, se requerirá al interesado para que en el plazo de quince días la subsane con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en la legislación básica estatal sobre procedimiento administrativo.

Artículo 35. Información Pública.

1. Una vez presentada la solicitud y comprobado que la documentación aportada está completa, el proyecto de instalación o actividad se someterá, previo anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica del Gobierno Vasco, a un período de información pública de treinta días hábiles, al objeto de que puedan presentarse alegaciones. Para darle una mayor difusión, dicho anuncio será comunicado al ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la actividad o instalación para su exposición, por parte de la entidad local, en su tablón de edictos.

2. El período de información pública será común para aquellos procedimientos que se integren en el procedimiento de autorización ambiental integrada y autorización ambiental única, y en su caso, para la evaluación de impacto ambiental y para los procedimientos de autorizaciones sustantivas que precise la instalación.

3. Se exceptuarán del trámite de información pública aquellos datos de la solicitud que gocen de confidencialidad de acuerdo con la legislación vigente y lo señalado en el artículo 26 de la presente Ley.

Artículo 36. Informe municipal en actividades sujetas a autorización ambiental integrada y autorización ambiental única.

1. El procedimiento de autorización ambiental integrada o el de autorización ambiental única sustituirá en todos sus trámites al procedimiento de licencia de actividad clasificada.

2. Simultáneamente al período de información pública y a solicitud del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los municipios en cuyo término se pretenda desarrollar una actividad o instalación sometida a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental única, emitirán un informe preceptivo en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción del expediente, sobre aquéllas cuestiones propias de competencia municipal. De no emitirse el informe en plazo se proseguirán las actuaciones.

3. En el caso de que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco recibiera alegaciones durante el período de información pública, éstas serán

trasladadas al ayuntamiento en el que se ubique la actividad o instalación para su consideración en su informe municipal, para lo cual dispondrá de un plazo ampliado de un mes adicional desde el momento de la recepción de dichas alegaciones por parte del órgano ambiental.

Artículo 37. Informe de los organismos competentes en materia de vertidos.

1. En los supuestos en los que la actividad sometida a autorización ambiental integrada o autorización ambiental única precise, autorización de vertido al dominio público hidráulico o al dominio público marítimo terrestre, el organismo competente deberá emitir un informe preceptivo y vinculante en el plazo máximo de seis meses, por el que se determinen las características del vertido y las medidas correctoras a adoptar.

2. En los supuestos en los que la actividad sometida a autorización ambiental integrada o autorización ambiental única precise autorización de vertido a colector, el titular del mismo deberá emitir un informe preceptivo y vinculante en el plazo máximo de tres meses, por el que se determinen las características del vertido y las medidas correctoras a adoptar.

3. Transcurridos los plazos previstos en los párrafos anteriores sin que se hubiesen emitido los informes, se podrá otorgar la autorización, contemplando en la misma las características del vertido y las medidas correctoras requeridas, que se establecerán de conformidad con la legislación sectorial aplicable. No obstante, los informes recibidos fuera del plazo señalado y antes del otorgamiento de la autorización deberán ser tenidos en consideración por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. Si los informes regulados en este artículo considerasen que es inadmisible el vertido y, consecuentemente, impidiesen el otorgamiento de la autorización, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco dictará resolución motivada denegatoria.

Artículo 38. Otros informes.

1. Simultáneamente al período de información pública, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco solicitará un informe sanitario de carácter preceptivo y vinculante, así como los informes técnicos que resulten necesarios según la naturaleza de la actividad a todos aquéllos órganos que deban pronunciarse para que en el plazo de un mes a la vista de la solicitud presentada informen sobre las materias que sean de su competencia.

2. En el caso de que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco recibiera alegaciones durante el período de información pública, éstas serán trasladadas a aquellos órganos que deban pronunciarse para su consideración en su informe, para lo cual dispondrá de un plazo adicional de un mes.

3. De no emitirse tales informes en el plazo señalado se proseguirán las actuaciones, si bien los informes recibidos fuera de plazo, pero antes de dictarse resolución por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser valorados por éste.

Artículo 39. Propuesta de resolución y audiencia del interesado.

1. A la vista de la documentación presentada, del resultado del trámite de información pública y de los informes antes citados, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco elaborará una propuesta de resolución que someterá a un trámite de audiencia para el interesado por un plazo de quince días.

2. Cuando en el trámite de audiencia al que se refiere el párrafo anterior se hubiesen realizado alegaciones, se dará traslado de las mismas, junto con la propuesta de resolución, a los órganos que hayan emitido los informes sobre los que se hayan formulado alegaciones, para que, en el plazo máximo de quince días, manifiesten, en su caso, lo que estimen oportuno.

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no realizar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificantes, se tendrá por cumplimentado el trámite.

Artículo 40. Resolución.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento de autorización ambiental integrada o autorización ambiental única determinará las condiciones de funcionamiento de la instalación o del desarrollo del ejercicio de la actividad a los meros efectos ambientales, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.

2. La resolución motivada otorgando o denegando la autorización ambiental integrada se dictará en un plazo máximo de nueve meses desde la presentación de la solicitud. La falta de resolución en plazo tendrá efectos desestimatorios.

3. La resolución motivada otorgando o denegando la autorización ambiental única se dictará en un plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud. La falta de resolución en plazo tendrá efectos desestimatorios.

4. La resolución motivada otorgando o denegando las autorizaciones se notificará a los interesados, al ayuntamiento donde se ubique la instalación, a los distintos órganos que hubiesen emitido un informe y, en su caso, al órgano

competente para otorgar las autorizaciones sustantivas. La autorización ambiental integrada se publicará íntegramente en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La autorización ambiental única se publicará en la sede electrónica del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5. La resolución motivada otorgando o denegando las autorizaciones incluirá, entre otros aspectos, información sobre las alegaciones formuladas en el trámite de información pública, sobre la valoración de las mismas por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sobre el contenido de los informes emitidos en el procedimiento administrativo.

Artículo 41. Valores límite de emisión de las autorizaciones ambientales.

1. La determinación de los valores límite de emisión en la autorización ambiental integrada se hará con base en las mejores tecnologías disponibles, y en particular se deberá tener en cuenta:

a) La información suministrada, en relación con las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles, sin prescribir la utilización de una técnica o tecnología específica.

b) Las características técnicas de las instalaciones en donde se desarrolle alguna de las actividades e instalaciones enumeradas en los anexos I.A, y I., su implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente.

c) La naturaleza de las emisiones y su potencial traslado de un medio a otro.

d) Los planes aprobados, en su caso, para dar cumplimiento a compromisos establecidos en la normativa comunitaria o en tratados internacionales.

e) La incidencia de las emisiones en la salud humana potencialmente afectada y en las condiciones generales de la sanidad animal y vegetal.

f) Los valores límite de emisión fijados, en su caso, por la normativa en vigor en la fecha de la autorización.

2. En la determinación de los valores límite de emisión en la autorización ambiental única se tomarán en consideración, en su caso, las mejores tecnologías disponibles, de conformidad con lo expuesto en el párrafo anterior.

Artículo 42. Contenido de la autorización ambiental integrada y de la autorización ambiental única.

1. La autorización ambiental integrada tendrá el contenido mínimo siguiente:

a) Los valores límite de emisión para las sustancias contaminantes y, en su caso, los parámetros o las medidas técnicas equivalentes que complementen o sustituyan a estos valores límite. Asimismo, deberán especificarse las mejores técnicas disponibles contenidas en las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles que son utilizadas en la instalación para alcanzar los valores límite de emisión.

b) Las prescripciones que garanticen, en su caso, la protección del suelo y de las aguas subterráneas.

c) Los procedimientos y métodos que se vayan a emplear para la gestión de los residuos generados por la instalación, teniendo en cuenta la jerarquía de gestión de residuos.

d) Las prescripciones que garanticen, en su caso, la minimización de la contaminación con efectos negativos intercomunitarios o transfronterizos a larga distancia o transfronteriza.

e) Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de todo tipo de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.

f) Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de puesta en marcha y parada, fugas, fallos de funcionamiento y paradas temporales.

g) Cualquier medida o condición establecida por la legislación sectorial aplicable. En particular, para las instalaciones en las que se realicen una o más operaciones de tratamiento de residuos.

h) Las condiciones en que debe llevarse a cabo el cierre de la instalación.

i) La obligación de comunicar al órgano competente regularmente y al menos una vez al año:

ii) Información basada en los resultados del control de las emisiones mencionado en la letra e) y otros datos solicitados que permitan al órgano competente verificar el cumplimiento de las condiciones de la autorización; y

iii) Cuando se apliquen valores límite de emisión que superen los valores de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles, un resumen de resultados del control de las emisiones que permita compararlos con los niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles.

j) Los requisitos adecuados para el mantenimiento y supervisión periódicos de las medidas adoptadas para evitar las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas con arreglo a la letra b) y, en su caso, los requisitos adecuados para el control periódico del suelo y las aguas subterráneas por lo que respecta a sustancias peligrosas que previsiblemente puedan localizarse, teniendo en cuenta la posibilidad

de contaminación del suelo y las aguas subterráneas en el emplazamiento de la instalación.

k) Las condiciones para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión.

l) En caso de que la autorización sea válida para varias partes de una instalación explotada por diferentes titulares, las responsabilidades de cada uno de ellos.

2. La autorización ambiental única tendrá el contenido mínimo siguiente:

a) Los valores límite de emisión para las sustancias contaminantes y las prescripciones que garanticen, en su caso, la protección del suelo y de las aguas subterráneas.

b) Los procedimientos y métodos que se vayan a emplear para la gestión de los residuos generados por la instalación, teniendo en cuenta la jerarquía de gestión de residuos.

c) En su caso, las prescripciones que garanticen la minimización de la contaminación con efectos negativos intercomunitarios o transfronterizos a larga distancia o transfronteriza.

d) Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.

e) Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de puesta en marcha y parada, fugas, fallos de funcionamiento y paradas temporales.

f) Las condiciones en que debe llevarse a cabo el cierre de la instalación.

g) Cualquier medida o condición establecida por la legislación sectorial aplicable o, motivadamente, por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación ambiental de carácter sectorial, el otorgamiento de las autorizaciones ambientales previstas en la presente Ley podrá supeditarse motivadamente por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al depósito de una fianza, aval o seguro que garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas o la reparación o minimización de los daños que pudieran ocasionarse por la actividad o instalación autorizada.

Las citadas garantías podrán minorarse por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el supuesto de que las actividades e instalaciones se encuentren inscritas en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorias Medioambientales (EMAS).

4. En el caso de que la instalación o actividad sujeta a autorización ambiental integrada o autorización ambiental única se encuentre sometida a evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, dicha autorización contendrá además los aspectos propios de la declaración de impacto ambiental o del informe ambiental según lo previsto en la presente Ley.

Artículo 43. Vigencia y revisión de las autorizaciones.

1. La autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única tienen una vigencia indefinida, sujeta a revisión periódica por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con la cláusula de progreso de las autorizaciones ambientales cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

2. En todo caso, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá realizar la revisión de la autorización ambiental integrada en un plazo máximo de cuatro años desde la publicación de las conclusiones de las mejores técnicas disponibles, que sean de aplicación a la instalación o actividad autorizada, con el fin si fuera necesario de adaptarlas y de garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia de las mejores técnicas disponibles aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada y cualquier información obtenida a partir de los controles o inspecciones.

3. Cuando una instalación o actividad sujeta a autorización ambiental integrada o autorización ambiental única no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán conforme a la cláusula de progreso referida en el párrafo primero de este artículo.

4. En cualquier caso, la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única serán revisadas de oficio cuando:

a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.

b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.

c) Se produzca una variación importante en los valores límite de inmisión del medio receptor.

d) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.

e) El organismo competente en materia de vertidos estime que existen circunstancias que justifiquen la revisión de la autorización ambiental concedida en lo relativo a la materia de su competencia. En este supuesto, el citado organismo requerirá, mediante informe vinculante al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco a fin de que inicie el procedimiento de revisión.

f) Así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la actividad o instalación o sea necesario cumplir normas nuevas o revisadas de calidad ambiental.

5. La revisión de las autorizaciones ambientales no dará derecho a indemnización.

Artículo 44. Procedimiento de modificación sustancial de las autorizaciones ambientales integradas.

El procedimiento para la modificación sustancial mencionada en el artículo 29 de la presente Ley, en los supuestos de actividades sujetas a autorización ambiental integrada será el previsto en la normativa básica que desarrolla la legislación de prevención y control integrados de la contaminación.

Artículo 45. Procedimiento de modificación sustancial de las autorizaciones ambientales únicas.

1. En el supuesto de actividades sujetas a autorización ambiental única el procedimiento de modificación sustancial se ordenará de acuerdo con los siguientes trámites:

a) La solicitud de modificación sustancial contendrá, al menos, la siguiente documentación:

a) Un proyecto básico que incluya, según corresponda:

1º. La parte o partes de la instalación afectada por la modificación.

2º. Los posibles impactos ambientales que se prevean con la modificación sustancial que se pretende, abarcando aquellos que puedan originarse al cesar la explotación de la misma.

3º. Medidas previstas para evitar, corregir o, en su caso, compensar los citados impactos ambientales.

b) La documentación exigida por la normativa en materia de vertidos, en su caso.

c) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con la normativa vigente.

d) Cualquier otra información y documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación aplicable, incluida, en su caso, la referida a fianzas o seguros obligatorios que sean exigibles.

e) En el caso de que la actividad o instalación esté sometida además a evaluación ambiental ordinaria o simplificada, la solicitud deberá contener un documento técnico en el que se integren los contenidos exigidos en los epígrafes a y b de este párrafo, junto con los contenidos propios del estudio de impacto ambiental o del documento ambiental, en su caso.

2. En la solicitud no se aportará el informe urbanístico del Ayuntamiento, salvo que se varíen las circunstancias urbanísticas sobre las que se informó; tampoco se deberá presentar aquella otra documentación referida a hechos, situaciones y demás circunstancias y características técnicas de la instalación, del proceso productivo y del lugar del emplazamiento, que ya hubiera sido aportada al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco con motivo de la solicitud de autorización original.

3. Una vez recibida la solicitud de modificación sustancial, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco requerirá, en su caso, al titular para que subsane la falta o acompañe la documentación necesaria en el plazo máximo de quince días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

4. Presentada la documentación completa, el órgano competente:

a) La someterá a información pública por un plazo de veinte días.

b) La remitirá, en caso de que se produzcan modificaciones en las características del vertido autorizado, al organismo competente en materia de vertidos para que elabore el informe mencionado en el artículo 37, en el plazo máximo de cuatro meses.

5. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco remitirá al Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación y al resto de órganos que deban informar sobre las materias de su competencia, el expediente completo para que emitan los informes correspondientes.

6. Cuando en el trámite de información pública al que se refiere el párrafo anterior se hubiesen realizado alegaciones, se dará traslado de las mismas, a los órganos que hayan emitido los informes sobre los que se hayan formulado alegaciones, para que, en el plazo máximo de quince días, manifiesten, en su caso, lo que estimen oportuno.

7. A la vista de la documentación presentada, del resultado del trámite de información pública y de los informes antes citados, el órgano ambiental Comunidad

Autónoma del País Vasco elaborará una propuesta de resolución que someterá a un trámite de audiencia para el interesado por un plazo de diez días.

8. Cuando en el trámite de audiencia al que se refiere el párrafo anterior se hubiesen realizado alegaciones, se dará traslado de las mismas, junto con la propuesta de resolución, a los órganos que hayan emitido los informes sobre los que se hayan formulado alegaciones, para que, en el plazo máximo de diez días, manifiesten, en su caso, lo que estimen oportuno.

9. El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco dictará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de cuatro meses. Transcurrido dicho plazo de cuatro meses sin haberse notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada.

10. Tras la resolución de la modificación sustancial, la parte o partes afectadas por la misma podrán iniciar su puesta en funcionamiento en los términos previstos en el artículo 47 de esta Ley.

Artículo 46. Procedimiento de modificación no sustancial de las autorizaciones ambientales únicas.

1. Recibida por parte del órgano ambiental del Comunidad Autónoma del País Vasco la comunicación y documentación justificativa del carácter no sustancial de una modificación en los términos del artículo 29 de la presente Ley, se procederá a su valoración para confirmar dicho carácter no sustancial y, en caso afirmativo, se adaptará la autorización anteriormente concedida.

2. Dicha adaptación será notificada al titular y será objeto de publicidad activa a través del sistema de información ambiental del País Vasco dependiente del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. Transcurridos treinta días sin que medie pronunciamiento del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco el titular de la actividad o instalación podrá llevarla a cabo en los términos expuestos en su comunicación.

Artículo 47. Comunicación de inicio de funcionamiento o apertura.

1. Con carácter previo al inicio de una actividad sometida a autorización ambiental integrada o autorización ambiental única será necesaria la presentación de una comunicación por parte del titular de la autorización ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y ante el ayuntamiento donde se ubica la instalación en la que acredite bajo su responsabilidad que la instalación se ajusta al proyecto aprobado y manifieste su compromiso para mantener el cumplimiento de las condiciones impuestas.

2. Dicha comunicación se realizará cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su inicio debiendo contar, en su caso, con las licencias, autorizaciones, comunicaciones o inscripciones en registros sectoriales que procedan.

3. La comunicación deberá acompañarse de un certificado suscrito por persona técnica competente, según el tipo de actividad objeto de autorización, que acredite que las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y que se ha cumplido el condicionado fijado en la autorización ambiental integrada o autorización ambiental única.

4. La presentación de la citada comunicación habilita a partir de ese momento para el ejercicio efectivo de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección por parte de las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales.

5. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore o acompañe a la comunicación o su no presentación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que en su caso concurran.

6. La resolución administrativa que declare tales hechos podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto por un plazo máximo de un año.

CAPÍTULO IV. LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

Artículo 48. Licencia de actividad clasificada.

1. Está sometida al régimen de licencia municipal de actividad clasificada la explotación de actividades e instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I.C de la presente Ley. Esta licencia precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se adaptará a las modificaciones que se produzcan en dichas instalaciones.

2. La persona física o jurídica que pretenda la explotación, traslado o modificación sustancial de una actividad clasificada deberá solicitar previamente al ayuntamiento en cuyo término municipal pretenda ubicar dicha actividad la licencia de actividad clasificada con arreglo al procedimiento previsto en esta Ley.

3. Como criterios interpretativos para determinar o no la sustancialidad de la modificación de una actividad clasificada se utilizarán los dispuestos en el artículo 29 de la presente Ley.

4. Los ayuntamientos podrán desarrollar vía ordenanza procedimientos para la tramitación de las modificaciones sustanciales o no sustanciales de las licencias de actividad clasificada otorgadas.

Artículo 49. Solicitud de la licencia de actividad clasificada.

1. La solicitud de licencia de actividad clasificada se presentará ante el ayuntamiento y deberá acompañarse de un proyecto suscrito por persona técnica competente en el que se detallarán las características de la actividad, la descripción del medio sobre el que se emplace, su posible repercusión ambiental y las medidas protectoras y correctoras que se propongan utilizar con expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad.

2. El órgano competente del ayuntamiento comprobará la pertinencia de la documentación presentada y, si ésta fuera insuficiente, se requerirá al solicitante para que la complete en el plazo de diez días, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en la legislación básica estatal sobre procedimiento administrativo.

3. En el supuesto de que el proyecto esté sujeto al trámite de evaluación de impacto ambiental ya sea ordinaria o simplificada, deberá acompañarse del estudio de impacto ambiental o el documento ambiental, en su caso.

Artículo 50. Información pública y emisión de informes.

1. Salvo que proceda la denegación expresa de la licencia por razones de competencia municipal, basadas en el planeamiento urbanístico o en las Ordenanzas Municipales, el Ayuntamiento someterá la solicitud a información pública mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, en la sede electrónica de dicha institución, así como por edicto municipal.

2. El período de información pública será de un mes al objeto de que puedan presentarse alegaciones. Simultáneamente al período de información pública, el ayuntamiento solicitará un informe sanitario de carácter preceptivo y vinculante, así como los informes técnicos que resulten necesarios según la naturaleza de la actividad a todos aquéllos órganos que en virtud de sus competencias deban pronunciarse para que en el plazo de quince días a la vista de la solicitud presentada emitan su informe.

3. En el caso de que se recibieran alegaciones durante el período de información pública, éstas serán trasladadas a aquellos órganos que deban pronunciarse para su consideración en su informe, para lo cual dispondrá de un plazo adicional de quince días.

4. De no emitirse tales informes en el plazo señalado se proseguirán las actuaciones, si bien los informes recibidos fuera de plazo, pero antes de dictarse resolución por parte del ayuntamiento deberán ser valorados por éste.

Artículo 51. Informe de imposición de medidas protectoras y correctoras.

1. Los municipios de menos de 10.000 habitantes, deberán solicitar informe de imposición de medidas protectoras y correctoras al órgano con competencias ambientales de la Diputación Foral correspondiente. Dicho informe, que tendrá carácter preceptivo y vinculante, incluirá las medidas protectoras y correctoras ambientales que sean exigibles al objeto de compatibilizar la actividad con el entorno.

2. Los municipios de 10.000 o más habitantes, podrán solicitar el informe señalado en el párrafo anterior al órgano con competencias ambientales de la Diputación Foral correspondiente. En caso de no solicitarse dicho informe, serán los propios municipios quiénes fijen las medidas protectoras y correctoras ambientales de la actividad o instalación sujeta a licencia de actividad clasificada.

3. Una vez recibido el expediente completo, el órgano con competencias ambientales de la Diputación Foral correspondiente deberá emitir el citado informe en el plazo máximo de quince días desde su solicitud por parte del Ayuntamiento.

4. En el caso de que la actividad o instalación esté sujeta a evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, no será necesario el citado informe que será suplido por la declaración o informe ambiental que en su caso se dicte por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la Diputación Foral, según corresponda.

Artículo 52. Concesión de la licencia de actividad.

1. A la vista de la documentación presentada, las alegaciones y los informes, el ayuntamiento deberá resolver y notificar el otorgamiento o la denegación de la licencia en el plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la solicitud.

2. Transcurrido el plazo de cuatro meses sin que se haya dictado y notificado la resolución, podrá entenderse desestimada la solicitud de licencia de actividad clasificada.

3. El otorgamiento de la licencia se notificará personalmente a los interesados, a los distintos órganos que hubiesen emitido informe, se comunicará a quienes hubiesen presentado alegaciones durante el trámite de información pública y se hará público en la sede electrónica del ayuntamiento correspondiente.

4. Los ayuntamientos tendrán el deber de informar al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y al órgano con competencias ambientales de la Diputación Foral correspondiente, en el supuesto de que haya emitido informe de imposición de medidas correctoras, de la concesión de licencias de actividad clasificada, de sus modificaciones sustanciales y del cese definitivo de la actividades e instalaciones previamente autorizadas.

5. Los ayuntamientos mantendrán un registro de las actividades e instalaciones sujetas a licencia de actividad clasificada que se desarrollen en su término municipal.

6. Corresponde al ayuntamiento otorgante, la comprobación, vigilancia, inspección y sanción de las actividades sometidas a licencia de actividad clasificada. Para el ejercicio de estas funciones podrán recabar la asistencia técnica de la Diputación Foral.

Artículo 53. Comunicación de inicio de actividad clasificada o apertura.

1. El inicio de la actividad requerirá la presentación por parte del titular de una comunicación ante el ayuntamiento en la que bajo su responsabilidad manifieste que la instalación se ajusta al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras adicionales impuestas, en su caso, en la licencia de actividad clasificada y su compromiso para mantener el cumplimiento de las condiciones impuestas.

2. Dicha comunicación se realizará cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su inicio debiendo contar, en su caso, con las licencias, comunicaciones o inscripción en los registros sectoriales que procedan.

3. La comunicación deberá acompañarse de un certificado suscrito por técnico competente, según el tipo de actividad objeto de licencia, que acredite que las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y que se ha cumplido el condicionado fijado en la licencia de actividad clasificada.

4. No obstante, los establecimientos públicos sujetos a la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas pueden iniciar su funcionamiento en las condiciones expresadas en el párrafo anterior cuando el certificado técnico que acompañe a la comunicación previa acredite que ello no supone riesgo para la seguridad de personas y bienes o el medio ambiente, aun cuando no se acredite el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en la licencia del establecimiento.

5. En tal supuesto, la persona titular del establecimiento debe acreditar el cumplimiento del resto de requisitos exigidos en la licencia, en un plazo de seis meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse acreditado el cumplimiento de tales requisitos, la licencia quedará sin efecto.

6. La presentación de la comunicación previa habilita a partir de ese momento para el ejercicio efectivo de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección por parte de las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales.

7. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore o acompañe a la comunicación o su no presentación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que en su caso concurran.

8. La resolución administrativa que declare tales hechos podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto por un plazo máximo de un año.

9. Los ayuntamientos mantendrán un registro de las actividades e instalaciones sujetas a comunicación previa de actividad clasificada que se desarrollen en su término municipal.

Artículo 54. Revisión de la licencia de actividad clasificada.

1. La licencia de actividad clasificada podrá ser revisada de oficio cuando:

a) La contaminación producida por la actividad o instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión o la determinación de nuevos valores.

b) Se produzca una variación importante en los valores límite de inmisión del medio receptor.

c) Así lo exija la seguridad de la instalación o actividad, o la aplicación de nuevas normas.

2. La revisión de la licencia de actividad clasificada no dará derecho a indemnización.

CAPÍTULO V. COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.

Artículo 55. Comunicación previa de actividad clasificada.

1. Quedan sometidas al régimen jurídico de comunicación previa de actividad clasificada la construcción, montaje, explotación y modificación de las instalaciones,

públicas o privadas, en las que se desarrollen las actividades que se relacionan en Anexo I.D de esta Ley.

2. Corresponde al ayuntamiento la comprobación, vigilancia, inspección y sanción de las actividades sometidas a comunicación previa de actividad clasificada. Para ejercer estas funciones podrán recabar la asistencia técnica de la Diputación Foral correspondiente.

Artículo 56. Presentación de la comunicación previa de actividad clasificada.

1. La comunicación previa de actividad clasificada se presentará cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su inicio debiendo contar, en su caso, con las licencias, autorizaciones, comunicaciones o inscripción en los registros sectoriales que procedan.

2. Si la actividad pretendida no requiere ejecutar obras en los locales en los que se vaya a desarrollar, la eficacia de la comunicación estará supeditada a la compatibilidad urbanística de la actividad que pretenda llevarse a cabo en tales instalaciones.

3. Cuando la actividad sujeta a comunicación previa de actividad clasificada deba someterse a evaluación ambiental, dicha comunicación se presentará tras haberse dictado la correspondiente declaración o informe ambiental favorable.

Artículo 57. Contenido y efectos de la comunicación previa de actividad clasificada.

1. La comunicación previa de actividad clasificada deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Proyecto o memoria en el que se describa la actividad, sus principales efectos o impactos ambientales en relación con el medio en que se ubica, especialmente en materia de emisiones, vertidos, residuos, suelos y contaminación acústica y las medidas implantadas para minimizar su posible impacto en el medio ambiente, las personas o sus bienes.

b) Certificado suscrito por persona técnica competente, según el tipo de actividad objeto de la comunicación, que acredite que las instalaciones se ajustan al proyecto o memoria presentados y que se da cumplimiento a los requisitos de la normativa ambiental sectorial que le sean de aplicación.

c) Copia, en su caso, de la declaración de impacto ambiental o informe ambiental favorable.

2. Una vez realizada la comunicación, podrá iniciarse el ejercicio de la actividad bajo la responsabilidad de las personas físicas o jurídicas titulares de la misma.

3. Las actividades o instalaciones sujetas a comunicación previa de actividad clasificada deberán cumplir los valores límite de emisión determinados en las prescripciones técnicas de la legislación ambiental que les sean de aplicación y, en su caso, las previstas en la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental.

4. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore o acompañe a la comunicación previa o su no presentación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que en su caso concurran.

5. La resolución administrativa que declare tales hechos podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto por un plazo máximo de un año.

Artículo 58. Modificación de la actividad.

1. El traslado, la transmisión y cualquier modificación que afecte a las características, procesos productivos, al funcionamiento o la extensión de la instalación será objeto de comunicación al Ayuntamiento, salvo que la modificación de la actividad conlleve el cambio en el régimen de intervención aplicable, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en esta Ley para tal régimen.

2. Cuando la modificación sea considerada sustancial por el titular y no conlleve el cambio en el régimen de intervención aplicable deberá realizarse una nueva comunicación previa de actividad clasificada según lo descrito en el artículo anterior.

3. Como criterios interpretativos para determinar la sustancialidad o no de la modificación se podrán utilizar los dispuestos en el artículo 29 de la presente Ley.

TÍTULO QUINTO EVALUACIÓN AMBIENTAL.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Artículo 59. Evaluación Ambiental.

1. Se someterán preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental los planes, programas y proyectos, y sus modificaciones y revisiones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección ambiental y de promover un desarrollo sostenible, mediante:

a) La integración de los aspectos ambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos.

b) El análisis y selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables.

c) El establecimiento de medidas que permitan prevenir, corregir, y en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

d) El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir con la finalidad de la evaluación ambiental.

2. Los planes, programas y proyectos deberán someterse al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental de forma previa a su aprobación, autorización, o adopción definitiva por parte de la Administración pública competente.

En el caso de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, la evaluación ambiental deberá realizarse de forma previa a que dicha declaración o comunicación surta efectos en el sentido de habilitar para la ejecución del proyecto.

3. La evaluación ambiental tendrá carácter instrumental respecto del procedimiento administrativo de aprobación o adopción de los planes y programas y respecto del procedimiento de autorización o aprobación de los proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a comunicación previa o a declaración responsable.

4. Sin perjuicio del régimen que resulte de aplicación a las modificaciones, no deberán someterse a evaluación ambiental los proyectos que cuenten con alguna habilitación administrativa de carácter sustantivo vigente.

Artículo 60. Procedimientos de evaluación ambiental.

1. El tipo de evaluación ambiental al que deben someterse los planes, programas y proyectos, y sus modificaciones y revisiones, será adecuado al grado de probabilidad con que dichos planes, programas y proyectos puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En consecuencia, se establecen los siguientes procedimientos de evaluación ambiental:

a) Evaluación ambiental estratégica ordinaria de los planes y programas, y sus modificaciones y revisiones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente con un alto grado de probabilidad.

b) Evaluación ambiental estratégica simplificada de los planes y programas, y sus modificaciones y revisiones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente con un grado indeterminado de probabilidad.

c) Evaluación de impacto ambiental ordinaria de los proyectos, y sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente con un alto grado de probabilidad.

d) Evaluación de impacto ambiental simplificada de los proyectos, y sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente con un grado indeterminado de probabilidad.

2. Los planes, programas y proyectos que deben someterse a evaluación ambiental se detallan en el Anexo II de la presente Ley.

Artículo 61. Competencias.

1. Corresponde al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco la emisión de las declaraciones e informes con los que concluyen los procedimientos de evaluación ambiental, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración General del Estado por la normativa básica.

2. No obstante, en aquellos casos en los que la competencia sustantiva para la aprobación definitiva o para la autorización del plan, programa o proyecto, o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, resida en los órganos forales de los Territorios Históricos, la competencia reconocida al órgano ambiental en el párrafo anterior queda atribuida a estos últimos, excepto cuando el plan, programa o proyecto supere o afecte al ámbito territorial de más de un Territorio Histórico, supuesto en el que se garantizará la participación en el procedimiento de los órganos forales.

3. Los órganos ambientales a los que se refieren los párrafos anteriores ostentarán, respecto a los planes, programas y proyectos para los que les corresponda emitir las declaraciones e informes de evaluación ambiental, las competencias que esta Ley prevé para la determinación previa del alcance de la evaluación y de la documentación, para la exención de dicho pronunciamiento, y para prorrogar la vigencia de las declaraciones e informes ambientales.

4. Corresponde a los órganos que deban impulsar los procedimientos sustantivos para la adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos, el

impulso, asimismo, de los procedimientos de evaluación ambiental, ordinaria o simplificada, que corresponda aplicar de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

Artículo 62. Nulidad de planes, programas y proyectos no evaluados.

1. Serán nulos de pleno derecho los actos de adopción, aprobación, autorización, declaración responsable o comunicación previa, de los planes, programas y proyectos, y sus modificaciones y revisiones, cuando, estando sometidos dichos planes, programas o proyectos a evaluación ambiental, dichos actos se hayan emitido sin haberse culminado el procedimiento de evaluación ambiental que les sea de aplicación, sin perjuicio, de las sanciones que, en su caso, procedan.

2. En el caso de aquellos proyectos que se encuentren parcial o totalmente ejecutados sin haberse sometido al preceptivo procedimiento de evaluación de impacto ambiental el órgano sustantivo someterá dichos proyectos al procedimiento de evaluación pertinente en el momento en el que se ponga de manifiesto tal carencia, aplicándose las especificaciones técnicas propias de una evaluación a posteriori cuando sea necesario, sin perjuicio de las posibles sanciones en las que, en su caso, se pudiera incurrir de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104.2.b) de esta Ley.

Artículo 63. Capacidad técnica y responsabilidad.

1. El promotor garantizará que los documentos técnicos necesarios para las evaluaciones ambientales sean realizados por personas que posean la capacidad técnica suficiente, de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior y que tengan la calidad y exhaustividad necesarias para cumplir las exigencias de esta ley y, en su caso, para ajustarse al alcance de la evaluación establecido por el órgano ambiental. Con esta finalidad deberá identificarse a su autor o autores indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada. Además, deberá constar la fecha de conclusión del documento y la firma del autor o autores.

2. Los autores de los citados documentos y el promotor serán responsables solidarios de su contenido y de la fiabilidad de la información, excepto en lo que se refiere a los datos recibidos de la administración de forma fehaciente.

Artículo 64. Confidencialidad.

1. Las administraciones públicas que intervengan en los procedimientos de evaluación ambiental deberán respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el promotor que, de conformidad con la normativa aplicable tengan dicho carácter teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público.

2. El promotor deberá indicar qué parte de la información contenida en la documentación presentada considera que debería gozar de confidencialidad. La administración competente decidirá sobre la información que, según la legislación vigente, esté exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la información amparada por la confidencialidad, ponderando el principio de información y participación pública real y efectiva en materia de medio ambiente con el derecho a la confidencialidad.

3. En el supuesto de que se deniegue total o parcialmente el carácter confidencial de la información indicada por el promotor se deberá emitir una resolución motivada con indicación de los recursos que correspondan.

Artículo 65. Planes, programas y proyectos excluidos de evaluación ambiental.

1. Los procedimientos de evaluación ambiental no serán de aplicación en los siguientes casos:

a) Cuando los planes o programas tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia.

b) Cuando los planes y programas sean únicamente de tipo financiero o presupuestario.

c) Cuando, debido a la escasa envergadura de las acciones que puedan derivarse de los planes, programas y proyectos, o de sus modificaciones y revisiones, los efectos que puedan producir en el medio ambiente no sean significativos de forma manifiesta.

2. El Órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá establecer criterios para determinar en qué situaciones puede considerarse que los

posibles efectos de un plan o programa, o de una modificación de un plan o programa, sobre el medio ambiente no van a ser significativos.

3. La evaluación ambiental estratégica de los planes y programas no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de los que aquéllos sean marco.

Artículo 66. Proyectos que pueden ser excluidos de evaluación ambiental caso por caso.

1. En casos excepcionales, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá exceptuar, mediante acuerdo motivado, a alguno de los proyectos recogidos en el Anexo II de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental regulado en esta Ley. En tales casos, se examinará la conveniencia de someter el proyecto eximido a otra forma de evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta Ley. El citado acuerdo será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco y notificado a la Comisión Europea.

2. Adicionalmente, se pondrá a disposición del público la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que la hayan justificado, así como el examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido.

3. Las posibilidades de exclusión reguladas en este artículo no eximirán a los proyectos de la evaluación de las repercusiones de los mismos sobre los espacios Red Natura 2000, exigida en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Artículo 67. – Determinación del alcance de las evaluaciones ambientales ordinarias.

1. El órgano ambiental determinará el alcance de la evaluación de los planes, programas y proyectos que deban someterse a un procedimiento ordinario, previa consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y, cuando sea necesario, detallará el contenido de los documentos ambientales que deban incorporarse al procedimiento, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

2. La solicitud del documento de alcance tendrá carácter obligatorio y el promotor deberá ajustarse a su contenido en la correspondiente redacción del estudio ambiental estratégico o del estudio de impacto ambiental.

3. El alcance de la evaluación y el contenido de la documentación que deba incorporarse a los expedientes de evaluación ambiental estratégica ordinaria serán adecuados y proporcionados al grado de detalle del plan o programa de que se trate. Serán coherentes con el tipo de efectos esperados y proporcionales a la magnitud de dichos efectos.

4. Cuando los planes y programas se estructuren en distintos ámbitos jerárquicos de decisión, el alcance de la evaluación ambiental en cada uno de ellos deberá determinarse teniendo en cuenta la fase de decisión en la que se encuentra el plan o programa, para evitar la duplicidad de actuaciones.

5. El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción de la solicitud completa, para realizar las consultas previstas en el párrafo primero del presente artículo y elaborar un documento de alcance del estudio ambiental estratégico. El plazo de respuesta a las consultas realizadas por el órgano ambiental será de un mes.

6. El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción de la solicitud completa, para realizar las consultas previstas en el párrafo primero del presente artículo y elaborar el documento de alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto. El plazo de respuesta a las consultas realizadas por el órgano ambiental será de un mes.

7. La resolución que determine el alcance de la evaluación de los planes, programas y proyectos se publicará en la sede electrónica del órgano ambiental.

8. El documento de alcance perderá su vigencia si, transcurridos cuatro años contados desde la notificación del mismo al promotor, el estudio ambiental estratégico o el estudio de impacto ambiental, según corresponda, no se hubiera presentado para su tramitación ante el órgano sustantivo o ante el órgano promotor. En el caso de que el promotor y el órgano promotor o, en su caso, el órgano sustantivo, coincidan en el mismo órgano de la Administración pública, el documento de alcance perderá su vigencia si, transcurrido el plazo citado de cuatro años, no se hubiera dado inicio al trámite de información pública.

9. Podrá eximirse del pronunciamiento previo del órgano ambiental en cuanto al alcance de la evaluación y de la documentación, en los términos que se establezcan reglamentariamente, en el caso de aquellos proyectos cuyos posibles efectos ambientales sean de carácter simple o bien conocidos, o bien cuando se hayan emitido instrucciones técnicas suficientes para la evaluación de determinados tipos de proyectos.

Artículo 68. Publicidad.

Las resoluciones que ponen fin a los procedimientos de evaluación ambiental se publicarán en el Boletín Oficial correspondiente y la sede electrónica del órgano ambiental.

Asimismo, se dará publicidad a los actos administrativos u otros tipos de decisiones adoptadas en relación con la aprobación definitiva o autorización de los planes, programas y proyectos sometidos a evaluación ambiental, en los términos que se desarrollarán reglamentariamente.

Artículo 69. Relaciones intercomunitarias y transfronterizas.

1. En el supuesto de actuaciones sometidas a evaluación ambiental que, teniendo lugar en otra Comunidad Autónoma, pudieran tener efectos ambientales significativos en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, esta última solicitará de aquella Comunidad información sobre dicha actuación. Asimismo, en el supuesto de que una actividad desarrollada en la Comunidad Autónoma del País Vasco tenga efectos significativos sobre el medio ambiente de otra Comunidad Autónoma colindante, aquélla procederá a facilitar información sobre dicha actuación.

2. En el supuesto de que la ejecución de las actuaciones contempladas en el Anexo II de esta ley pudiera causar efectos transfronterizos significativos sobre el medio ambiente de otro Estado, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco facilitará a las autoridades competentes del territorio afectado el estudio ambiental estratégico o, en su caso, el estudio de impacto ambiental que a tal efecto se elabore para que formule las alegaciones o consideraciones que estime oportunas, y, posteriormente, se le enviará copia de la resolución o informe definitivo, todo ello a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la normativa comunitaria y a lo regulado por las normas estatales.

Artículo 70. Registro de personas jurídicas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental.

1. Se crea el Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental a los efectos de garantizar la participación efectiva en los citados procedimientos de las personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23.1 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El Registro dependerá administrativamente del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. Las personas interesadas citadas en el párrafo anterior deberán solicitar la inscripción en este Registro, a efectos de posibilitar la consulta efectiva en los procedimientos de evaluación ambiental. Reglamentariamente se regulará la organización, funcionamiento y acceso al Registro de personas jurídicas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental.

CAPÍTULO II. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS

Artículo 71. Ámbito de la evaluación ambiental estratégica.

1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria, los planes y programas, así como sus modificaciones y revisiones, enumerados en el Anexo II.A, que se adopten por una Administración Pública y cuya elaboración venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, los planes y programas, así como sus modificaciones y revisiones, enumerados en el Anexo II.B, que se adopten por una Administración Pública y cuya elaboración venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.

Artículo 72. Información pública y consultas.

El órgano promotor del plan o programa sometido a evaluación ambiental estratégica ordinaria asegurará la participación pública en el procedimiento, mediante los trámites de información pública y de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente y, en cualquier caso, por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días.

Artículo 73. Naturaleza y contenido de la declaración ambiental estratégica.

1. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria concluirá con una declaración ambiental estratégica emitida por el órgano ambiental de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza de un informe preceptivo y vinculante.

2. El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción de la solicitud completa, para la formulación de la declaración ambiental estratégica. Dicho plazo podrá prorrogarse por dos meses más, por razones justificadas debidamente motivadas.

3. La declaración ambiental estratégica contendrá un resumen de los principales hitos del procedimiento, las determinaciones, medidas o condiciones finales que deban incorporarse en el plan o programa que se apruebe o adopte y las directrices generales para la evaluación ambiental a la que deban someterse, en su caso, los planes jerárquicamente inferiores y los proyectos contemplados en los planes y programas sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria.

4. La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que les son propios si tras su publicación no se ha procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo de dos años.

5. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental del plan o programa, salvo que solicite la prórroga de la vigencia al órgano ambiental. En este supuesto, el órgano ambiental otorgará, en su caso, un nuevo plazo de vigencia de la declaración ambiental estratégica en los términos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 74. Naturaleza y contenido del informe ambiental estratégico.

1. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada concluirá con un informe ambiental estratégico emitido por el órgano ambiental de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, tras consultar a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. El informe ambiental estratégico tendrá la naturaleza de un informe preceptivo y vinculante.

2. El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción de la solicitud completa, para realizar las consultas previstas en el párrafo anterior y elaborar el informe ambiental estratégico. El plazo de respuesta a las consultas realizadas por el órgano ambiental será de un mes.

3. El informe ambiental estratégico contendrá un resumen de los principales hitos del procedimiento y la determinación de si el plan o programa debe someterse

o no a una evaluación ambiental estratégica ordinaria. Tal determinación deberá adoptarse ajustándose a los criterios recogidos en el Anexo II.C.

4. Cuando el informe concluya determinando que el plan o programa no debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental establecerá en dicho informe los términos en los que deba adoptarse el plan o programa para garantizar que el plan o programa no pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

5. El informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que les son propios si tras su publicación no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental del plan o programa, salvo que solicite la prórroga de su vigencia al órgano ambiental. En este supuesto, el órgano ambiental otorgará, en su caso, un nuevo plazo de vigencia del informe ambiental estratégico en los términos que se determinen reglamentariamente.

CAPÍTULO III. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS

Artículo 75. Ámbito de la evaluación de impacto ambiental.

1. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos públicos o privados enumerados en el Anexo II.D.

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos públicos o privados enumerados en el Anexo II.E.

Artículo 76. Información pública y consultas.

El órgano sustantivo asegurará la participación pública en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria mediante los trámites de información pública y de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente y, en cualquier caso, por un plazo mínimo de treinta días.

Artículo 77. Naturaleza y contenido de la declaración de impacto ambiental.

1. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria concluirá con una declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de un informe preceptivo y vinculante.

2. El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción de la solicitud completa, para la formulación de la declaración de impacto ambiental. Dicho plazo podrá prorrogarse por dos meses más, por razones justificadas debidamente motivadas.

3. La declaración de impacto ambiental contendrá el resumen de los principales hitos del procedimiento y determinará si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede desarrollarse incluyendo las medidas protectoras, correctoras y compensatorias y de seguimiento que deban adoptarse.

4. La declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que les son propios si tras su publicación no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, salvo que solicite la prórroga de su vigencia al órgano ambiental. En este supuesto, el órgano ambiental otorgará, en su caso, un nuevo plazo de vigencia de la declaración de impacto ambiental en los términos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 78. Naturaleza y contenido del Informe de Impacto Ambiental.

1. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada concluirá con un informe de impacto ambiental emitido por el órgano ambiental de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, tras consultar a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. El informe de impacto ambiental tendrá la naturaleza de un informe preceptivo y vinculante.

2. El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción de la solicitud completa, para realizar las consultas previstas en el párrafo anterior y elaborar el informe de impacto ambiental. El plazo de respuesta a las consultas realizadas por el órgano ambiental será de un mes.

3. El informe de impacto ambiental contendrá el resumen de los principales hitos del procedimiento y la determinación de si el proyecto debe someterse o no a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Tal determinación deberá adoptarse ajustándose a los criterios recogidos en el Anexo II.F.

4. Cuando el informe concluya determinando que el proyecto no debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el órgano

ambiental establecerá en dicho informe los términos en los que el proyecto deba ser aprobado para garantizar que el proyecto no pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

5. El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que les son propios si tras su publicación no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, salvo que solicite la prórroga de su vigencia al órgano ambiental. En este supuesto, el órgano ambiental otorgará, en su caso, un nuevo plazo de vigencia del informe de impacto ambiental en los términos que se determinen reglamentariamente.

TÍTULO SEXTO. INSTRUMENTOS DE IMPULSO DE LA MEJORA AMBIENTAL

Artículo 79. Acuerdos medioambientales

1. Las administraciones públicas promoverán la suscripción de acuerdos para lograr la participación de todas las instancias de la sociedad en la protección del medio ambiente, bajo el principio de responsabilidad compartida.

2. Los acuerdos que se suscriban deberán establecer objetivos en el marco de los principios del artículo 3 de esta Ley, plazos para su consecución y sistemas para el seguimiento de sus resultados.

3. Las administraciones públicas deberán publicitar los acuerdos que suscriban, manteniendo actualizada y disponible al público la información que obre en su poder sobre ellos en las condiciones establecidas en el Título III de esta Ley.

Artículo 80. Fomento de la participación en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales (EMAS).

1. Las administraciones públicas promoverán la adhesión voluntaria de las organizaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco al Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales (EMAS) regulado por el Reglamento (CE) 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.

2. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, se adoptarán medidas dirigidas a:

a) Informar sobre los objetivos y requisitos del sistema

b) Apoyar a las pequeñas y medianas organizaciones.

c) Facilitar un enfoque gradual que conduzca a la adhesión al sistema.

d) Considerar la adhesión al sistema en la elaboración de legislación y en su aplicación y cumplimiento en aras a reducir y suprimir requisitos normativos.

e) Incorporar en los procedimientos de contratación pública la adhesión al sistema de acuerdo con lo que en esta materia establece la normativa sobre contratos del sector público.

3. El departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, impulsará la colaboración con sindicatos, asociaciones patronales, asociaciones de consumidores, organizaciones para la defensa del medio ambiente, instituciones locales y otras partes interesadas para promover la adhesión al sistema EMAS en el País Vasco.

4. El departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco promoverá la utilización de otros sistemas de gestión ambiental como medio para posibilitar la adhesión al sistema EMAS.

5. Los requisitos para acreditar las equivalencias entre los sistemas señalados en el párrafo anterior serán los que establezca la Comisión Europea de conformidad con lo que a tal fin establece el artículo 45 del Reglamento (CE) 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 y el Anexo II del mismo.

Artículo 81. Fomento de la utilización de la etiqueta ecológica de la Unión Europea.

1. Las administraciones públicas promoverán la utilización de la etiqueta ecológica de la Unión Europea regulada por el Reglamento (CE) 66/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.

2. A fin de promover la utilización de la etiqueta ecológica se adoptarán medidas dirigidas a:

a) Sensibilizar e informar sobre los beneficios de la utilización de la etiqueta ecológica.

b) Informar sobre los productos y servicios etiquetados y sobre sus lugares de venta o prestación.

c) Incorporar en los procedimientos de contratación pública la utilización de la etiqueta ecológica de acuerdo con lo que en esta materia establece la normativa sobre contratos del sector público.

3. El departamento competente en materia de medio ambiente del Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, impulsará la colaboración con asociaciones de consumidores, fabricantes, prestadores de servicios, comerciantes, asociaciones patronales, sindicatos y otras partes interesadas con el objeto de facilitar la adopción de las acciones señaladas en el párrafo anterior.

Artículo 82. Huella ambiental.

Las administraciones públicas promoverán la utilización en sus políticas de las metodologías reconocidas por la Unión Europea con el objetivo de medir y comunicar el comportamiento ambiental de productos u organizaciones en el ciclo de vida.

Artículo 83. Compra Pública Verde.

1. La compra y contratación pública verde tendrá como finalidad optimizar la coordinación con el mercado para garantizar que aquella incorpore la ecoinnovación y facilitar, a su vez que las administraciones públicas hagan un uso más eficiente de los recursos.

2. Los órganos de contratación de las administraciones públicas y de los demás entes del sector público incluirán en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares de sus contratos de obras, servicios y suministros criterios de adjudicación, condiciones especiales de ejecución y cláusulas o condiciones que contribuyan a alcanzar los objetivos que se establecen en esta Ley. Se promoverá especialmente la utilización de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización. A tal efecto, las administraciones públicas en el marco de sus competencias adaptarán sus instrucciones técnicas y documentos análogos para dar cumplimiento a lo establecido en este párrafo.

En particular, se podrán incluir, entre otras, consideraciones que persigan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato; una gestión más sostenible del agua; el fomento del uso de las energías renovables; la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; o el impulso de la entrega de productos a granel, productos locales y la producción

ecológica, siempre que estén vinculadas con el objeto del contrato y sean compatibles con el derecho comunitario.

3. En los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares para la ejecución de contratos de obras y suministros se indicarán los porcentajes de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización que se tengan que utilizar para cada uno de ellos. El porcentaje mínimo de utilización de dichos materiales será del 40%, salvo que por motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser reducido.

4. Asimismo, deberán establecerse los mecanismos de control adecuados y, en su caso, las cláusulas de penalización oportunas para garantizar el debido cumplimiento de las cláusulas ambientales establecidas en los pliegos y de las condiciones de ejecución previstas en el contrato. A tal efecto, a la finalización de los contratos ejecutados deberán adjuntar justificación documental relativa a la utilización de los citados materiales.

5. Lo previsto en este artículo se llevará a cabo de conformidad con lo que establece la legislación sobre contratos del sector público.

Artículo 84. Ecoinnovación.

1. Las administraciones públicas impulsarán la ecoinnovación empresarial de producto y de proceso que permita aprovechar las oportunidades de mercado que genera el medio ambiente.

2. A tal efecto, el departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco promoverá la introducción de tecnologías ambientalmente más eficaces en las actividades económicas. Para ello aprobará y actualizará periódicamente un listado de tecnologías cuyo uso podrá ser incluido en los contratos del sector público y también podrá ser considerado como criterio preferente tanto en el establecimiento de beneficios fiscales, como en la concesión de subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la mejora ambiental, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente en materia tributaria y subvencional.

Artículo 85. Fiscalidad ambiental.

1. Las administraciones públicas vascas competentes en materia tributaria promoverán, previa consulta al Departamento con competencias ambientales de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el uso de la fiscalidad ecológica y de otros instrumentos de política económica ambiental para contribuir a los objetivos de la presente Ley, pudiendo determinar que las recaudaciones obtenidas integren una partida en sus presupuestos anuales

específicamente destinada a abordar actuaciones vinculadas a la protección del medio ambiente.

2. Las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán establecer en el ámbito de sus competencias, entre otras, las siguientes medidas fiscales y financieras:

a) La creación de tasas por la emisión de las autorizaciones, licencias y la recepción de comunicaciones previas o declaraciones responsables contempladas en la presente Ley.

b) La creación de tributos u otros instrumentos fiscales que graven el desarrollo de las actividades que provoquen afecciones al medio ambiente.

c) El establecimiento de reducciones, bonificaciones o exenciones para las actividades que fomenten actuaciones que tengan por finalidad cumplir con los objetivos de esta Ley y, en especial, aquellas que fomenten la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos.

Artículo 86. Investigación, educación y formación.

1. A fin de mejorar la base de conocimiento sobre el medio ambiente los agentes públicos y privados compartirán y promoverán los esfuerzos de investigación en el marco de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología transfiriendo sus avances a las políticas públicas ambientales.

2. Las administraciones públicas impulsarán la educación y la sensibilización ambiental en todos los sectores sociales, mediante actuaciones que difundan y extiendan en la ciudadanía y en el conjunto de las instituciones, conocimientos, información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la mejora ambiental. Con tal finalidad, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en coordinación con otras administraciones públicas elaborará programas de actuación en materia de educación y sensibilización ambiental con objetivos específicos y medidas concretas para alcanzarlos.

3. Asimismo, las administraciones públicas impulsarán la formación ambiental del personal a su servicio y, en colaboración con los agentes sociales, el de todos los trabajadores para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y promover valores y actuaciones de mejora ambiental.

Artículo 87. Voluntariado ambiental.

1. Las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco promoverán, en el ámbito de sus competencias, la participación de la ciudadanía en acciones de voluntariado para la realización de actividades de interés general en

favor de la protección y mejora del medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/1998, de 25 de junio, de voluntariado y el resto de normativa de aplicación. A tal efecto, diseñarán programas para el desarrollo de actividades de conservación, restauración de la naturaleza y educación ambiental destinados a su realización por voluntarios, en aquellos centros y materias en los cuales su colaboración resulte idónea a los fines perseguidos por esta Ley.

2. Con el fin de fomentar y facilitar la acción de voluntariado ambiental, las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco desarrollarán las actuaciones de fomento previstas en la Ley 17/1998, de 25 de junio, de voluntariado y, especialmente, las siguientes:

a) La puesta en común de recursos y medios entre las organizaciones que cuenten con voluntarios y voluntarias sobre todo en materia de formación y recogida de información.

b) El otorgamiento de ayudas y la suscripción de convenios para el mantenimiento, la formación y la acción de las organizaciones de voluntarios y voluntarias.

c) La organización de campañas de información sobre voluntariado ambiental.

d) La prestación de servicios de asesoramiento, información y apoyo técnico a las organizaciones.

e) La aplicación de bonificaciones en el uso de medios públicos de transporte o en la entrada a espectáculos y equipamientos culturales de iniciativa pública.

f) El establecimiento de medidas en el marco de la normativa laboral y fiscal.

g) La implantación de medidas honoríficas para reconocer públicamente el trabajo voluntario.

Artículo 88. Medidas de reconocimiento público.

Con el fin de reconocer públicamente a la ciudadanía y organizaciones que contribuyan a la protección, conservación y difusión de los valores medioambientales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco distinguirá con medidas de tipo honorífico dichas actuaciones con la periodicidad, ámbitos y categorías que reglamentariamente se establezcan.

TÍTULO SÉPTIMO. INSPECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL.

CAPÍTULO I. ENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL.

Artículo 89. Entidades de colaboración ambiental.

1. Las entidades de colaboración ambiental son aquellas personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, que colaboran con las administraciones públicas competentes en materia de medio ambiente, para el desempeño de las actuaciones de verificación, validación y control de las actividades.

2. Las entidades de colaboración ambiental, a instancia de las administraciones públicas o cuando así se establezca normativamente, desarrollarán entre otras las siguientes funciones:

a) Validación documental de los requisitos y datos necesarios para la solicitud de autorizaciones ambientales, licencias, comunicaciones y declaraciones responsables, renovaciones y modificaciones de las anteriores, tramitación de subvenciones y cualesquiera otros documentos vinculados a trámites contemplados en la presente Ley, y en la normativa básica que, en su caso, resulte de aplicación.

b) Verificación en dependencias de la actividad de la adecuación de los equipos e instalaciones a los requisitos establecidos en dichas autorizaciones o licencias, tramitaciones administrativas o en la normativa ambiental aplicable.

c) Toma de muestras, mediciones y análisis para la evaluación de conformidad de los distintos controles y verificaciones de funcionamiento de la actividad.

3. El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco registrará a las entidades que lo soliciten, de conformidad con los requisitos necesarios y el procedimiento que reglamentariamente se establezca, que estará ordenado a garantizar su capacidad técnica, independencia e imparcialidad. Dicho registro dependerá del departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y contendrá los datos identificativos de cada una de las entidades de colaboración ambiental inscritas, el nivel de actividad y alcance de su actuación.

CAPÍTULO II. INSPECCIÓN AMBIENTAL.

Artículo 90. Finalidad de la inspección ambiental y competencias inspectoras.

1. La inspección ambiental tiene por finalidad garantizar la adecuación a la legalidad ambiental de las actividades sometidas a esta Ley, así como verificar el cumplimiento y la eficacia de las condiciones establecidas en las autorizaciones y licencias o comunicadas por los propios titulares.

2. Corresponde a las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, llevar a cabo la vigilancia e inspección ambiental sobre las

actividades, actuaciones e instalaciones, públicas o privadas, incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley.

Artículo 91. Deber de sometimiento a la actuación inspectora.

1. Los titulares de las actividades o instalaciones sujetas a esta Ley están obligados a prestar la colaboración necesaria al personal que realice actuaciones de inspección ambiental al que se refiere el artículo 92, a fin de permitirle realizar cualesquiera exámenes, controles, tomas de muestras y recogida de la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

2. Los titulares de las actividades o instalaciones sujetas a esta Ley al proporcionar la información que sea obligatoria podrán señalar los aspectos de la misma que, a su juicio, tengan carácter confidencial en lo relativo a los procesos industriales y otros cuya confidencialidad esté reconocida legalmente.

Artículo 92. Ejercicio de la actividad de inspección ambiental.

1. Las labores de control, vigilancia e inspección ambiental se realizarán directamente por el personal al servicio de las administraciones públicas que sea designado a tal efecto. Las actuaciones materiales de inspección que no estén reservadas a funcionarios públicos por entrañar el ejercicio de potestades públicas o por otras circunstancias, podrán encomendarse a entidades de colaboración ambiental debidamente registradas para su realización en nombre de las administraciones públicas.

2. El personal al servicio de las administraciones públicas que sea designado para realizar la actividad de inspección ambiental dispone de la consideración de agente de la autoridad para el ejercicio de las funciones que le son propias.

3. El personal que realice actuaciones de inspección está facultado para recabar la exhibición de cualquier documentación ambiental obrante en poder de los sujetos sometidos a esta Ley, así como para acceder y permanecer, previa identificación y sin previo aviso, en las instalaciones y demás lugares en que se desarrollen las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando para el ejercicio de sus funciones inspectoras fuera precisa la entrada en un domicilio deberá solicitarse la oportuna autorización judicial.

Artículo 93. Acta e informe de inspección ambiental.

1. En el transcurso de la visita de inspección se levantará un acta descriptiva de los hechos, haciéndose constar las condiciones en las que se desarrolla la

actividad, en su caso, las irregularidades observadas y las alegaciones que formule la persona responsable de los mismos. Asimismo, en el caso de que durante la visita de inspección se proceda a la toma de muestras o a la realización de mediciones, se deberá asegurar que estas actuaciones se llevan a cabo de conformidad con lo establecido en las instrucciones técnicas aprobadas a tal fin.

2. Las actas que el personal que realice actuaciones de inspección extienda en el ejercicio de sus facultades tendrán valor probatorio de los hechos que recojan, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar las personas interesadas en defensa de sus derechos e intereses.

3. Después de cada visita de inspección a actividades sujetas a los regímenes de autorización ambiental integrada y autorización ambiental única se elaborará un informe en el que se recogerán las conclusiones pertinentes respecto al cumplimiento de las condiciones de los títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad y de los requisitos establecidos en la normativa, así como respecto de cualquier ulterior actuación necesaria. Esta actuación será potestativa en el caso de inspecciones a actividades sujetas a otros regímenes de intervención ambiental previstos en esta Ley.

4. El informe de la visita de inspección se notificará al titular de la actividad o instalación en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que tenga lugar la visita.

5. Cuando así lo exija la normativa sectorial correspondiente y de acuerdo, en todo caso, con lo establecido en la normativa sobre acceso del público a la información medioambiental, las administraciones públicas pondrán a disposición de la ciudadanía por medios electrónicos los informes relativos a las inspecciones realizadas en el plazo de cuatro meses a partir de la visita.

Artículo 94. Planificación de la inspección ambiental.

1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán periódicamente planes de inspección ambiental que, como mínimo, deberán tener el siguiente contenido:

a) Área geográfica a la que es de aplicación.

b) Principales aspectos medioambientales.

c) Actividades sometidas a inspección.

d) Procedimientos para elaborar los programas de inspecciones ambientales.

e) Medios humanos destinados a las inspecciones.

f) Sistemas de coordinación con otras autoridades encargadas de las inspecciones.

g) Sistemas de evaluación del programa de inspecciones.

2. De acuerdo con los planes de inspección, las administraciones públicas elaborarán regularmente programas de inspección ambiental prefijadas que incluyan la frecuencia o el número de visitas para los distintos tipos de actividad.

3. Los periodos entre visitas en instalaciones sujetas al régimen de autorización ambiental integrada se basarán en una evaluación sistemática de los riesgos medioambientales de las actividades y no superarán un año en aquellas actividades que planteen los riesgos más altos y tres en las que se planteen riesgos menores.

4. La evaluación sistemática de los riesgos medioambientales citada en el párrafo anterior se basará, al menos en los siguientes criterios, sin perjuicio de aquellos otros que se establezcan reglamentariamente:

a) La repercusión posible y real de las actividades sobre la salud humana y el medio ambiente y el riesgo de accidente.

b) El historial de cumplimiento de las condiciones de los títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad y de los requisitos establecidos en la normativa.

c) La participación del titular de la actividad o instalación en el Sistema de Gestión y Auditoría Ambientales (EMAS), de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1221/2009.

Artículo 95. Publicidad de las actuaciones de inspección ambiental.

Los planes de inspección ambiental, los programas de inspección ambiental y sus evaluaciones y, los resultados de las actuaciones de inspección ambiental a actividades sujetas a los regímenes de autorización ambiental integrada y autorización ambiental única deberán ponerse a disposición del público, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y la legislación sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.

TÍTULO OCTAVO. RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS MEDIOAMBIENTALES.

CAPÍTULO I. RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL

Artículo 96. Actividades sin autorización, licencia o comunicación previa.

1. Cuando una actividad se encuentre en funcionamiento sin la autorización, licencia o comunicación previa que sea preceptiva con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las administraciones públicas competentes para su otorgamiento o recepción de su comunicación previa podrán ordenar la adopción de las medidas

previstas en los artículos siguientes y, además, llevarán a cabo alguna de las siguientes actuaciones:

a) Si la actividad pudiese legalizarse, requerirá a su titular para que regularice su situación mediante el procedimiento de intervención ambiental que sea aplicable en cada caso, concediéndole para que inicie dicho procedimiento un plazo que, salvo en casos excepcionales debidamente justificados, no podrá ser superior a un mes.

b) Si la actividad no pudiese legalizarse por incumplimiento de la normativa vigente aplicable procederá a su clausura definitiva.

c) Cuando la actividad afectada se encuentre en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 10 de la citada disposición.

2. Además de la legalización o de la clausura, se podrá ordenar la adopción de medidas correctoras o la reposición de la situación alterada cuando no se hubieran producido daños significativos al medio ambiente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 99 de este capítulo.

3. En el caso de que se hayan producido daños ambientales significativos o de que exista una amenaza inminente de dichos daños se deberán adoptar las medidas de prevención, evitación y reparación de daños ambientales de conformidad con lo dispuesto en el capítulo siguiente.

4. Las medidas y actuaciones anteriores se tomarán sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador previsto en el título siguiente.

Artículo 97. Corrección de incumplimientos o deficiencias.

Advertidos incumplimientos de las condiciones impuestas en sus respectivos títulos habilitantes o de las medidas que se comunicaron previamente para minimizar su impacto ambiental, así como deficiencias en el funcionamiento de una actividad o instalación sometida a alguno de los regímenes de intervención ambiental previstos en esta Ley, las administraciones públicas competentes para su otorgamiento o recepción, requerirán a su titular que los corrija conforme al procedimiento establecido en el artículo 99, en un plazo acorde con la naturaleza de las medidas correctoras a implementar que, salvo casos especiales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses.

Artículo 98. Suspensión de actividades.

Las administraciones públicas competentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 99, podrán ordenar la adopción de medidas preventivas y de evitación, incluyendo la paralización de las actividades que se encuentren en fase

de construcción o de explotación, total o parcialmente, por cualquiera de los siguientes motivos:

a) Comienzo de la ejecución del proyecto de actividad o desarrollo de la misma sin contar con el correspondiente instrumento de intervención ambiental, sin haber realizado el trámite de comunicación previa de actividad, o sin haber sustanciado el preceptivo procedimiento de evaluación ambiental.

b) Inexactitud u ocultación de datos esenciales, su falseamiento o manipulación maliciosa en el procedimiento de intervención o evaluación ambiental que corresponda.

c) Incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas en el correspondiente instrumento de intervención o evaluación ambiental o de las condiciones notificadas en la comunicación previa de actividad clasificada.

d) Existencia de una amenaza inminente de producción de daños medioambientales o para la salud de las personas, así como de que, una vez producidos puedan agravarse.

Artículo 99. Procedimiento de restauración de la legalidad ambiental.

1. La legalización o clausura de actividades o instalaciones, incluida la reposición de la situación alterada, la imposición de medidas correctoras en caso de incumplimientos o deficiencias y la suspensión de actividades podrán acordarse previa tramitación de un procedimiento de restauración de la legalidad ambiental o en el marco de un procedimiento administrativo sancionador.

2. El procedimiento de restauración de la legalidad ambiental deberá contemplar un trámite de audiencia al promotor o titular de la actividad y a los demás interesados, en su caso, por un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, durante el cual podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

3. El procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa se entenderá caducado.

4. En casos de urgencia inaplazable, la autoridad competente podrá actuar sin necesidad de tramitar el procedimiento administrativo para fijar las medidas de prevención y evitación de daños o para exigir su adopción.

5. Iniciado el procedimiento de restauración de la legalidad ambiental, o con carácter previo en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, se podrán adoptar de forma motivada, las medidas provisionales que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que

pudiera recaer, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

6. Como medidas provisionales se podrán adoptar, además de la suspensión de actividades y las medidas correctoras de incumplimientos y deficiencias a las que se refieren los artículos anteriores, las previstas para el procedimiento sancionador en esta Ley.

7. También podrá adoptarse como medida provisional la suspensión del suministro de agua o de energía de aquellas actividades, instalaciones y obras a las que se haya ordenado su suspensión o clausura. Para ello, se notificará la oportuna resolución administrativa a las empresas suministradoras de agua o de energía, que deberán cumplir dicho mandato en el plazo máximo de cinco días. La paralización de estos suministros sólo podrá levantarse cuando se haya o eliminado la suspensión de la actividad y así lo notifique la administración actuante a las empresas suministradoras.

8. Asimismo, podrá exigirse a los promotores o titulares de las actividades o instalaciones la prestación de una fianza que garantice la efectividad de las medidas provisionales impuestas.

Artículo 100. Ejecución forzosa de las medidas de restauración de la legalidad ambiental.

1. La Administración pública competente, previo requerimiento, podrá proceder a la ejecución subsidiaria de las medidas correctoras cuando el promotor o el titular de la actividad o instalación, tanto en funcionamiento como en situación de suspensión temporal, se niegue a adoptarlas, especialmente cuando exista una amenaza inminente de daños graves al medio ambiente o a la salud de las personas. Los gastos de la ejecución subsidiaria podrán ser exigidos al promotor o al titular de la actividad por la vía de apremio.

2. Cuando el promotor o el titular de la actividad o instalación se niegue a la adopción de las medidas correctoras y no exista amenaza inminente de daños graves al medio ambiente o a la salud de las personas o el retraso en la adopción de las medidas no ponga en peligro dichos bienes jurídicos, la Administración pública competente podrá imponer sucesivamente multas coercitivas.

La imposición de dichas multas coercitivas exigirá que en el requerimiento de cumplimiento se indique el plazo de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación impuesta. Cada multa coercitiva podrá ascender hasta un importe máximo del diez por ciento del coste estimado del conjunto de las medidas a ejecutar. En el caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se mantenga el incumplimiento que la ha motivado, podrá reiterarse por

lapsos de tiempo. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan imponer en concepto de sanción.

CAPÍTULO II. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Artículo 101. Responsabilidad por daños medioambientales significativos y de su amenaza inminente.

1. La prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales significativos y las amenazas inminentes de los mismos ocasionados por actividades económicas o profesionales se llevará a cabo en la forma y condiciones previstas por la Directiva europea sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales y su normativa de transposición de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. La responsabilidad medioambiental que se exija en aplicación de la normativa señalada en el párrafo anterior es compatible con el régimen de restauración de la legalidad ambiental y con el régimen sancionador administrativo previstos en esta Ley o en otras leyes sectoriales, así como con la responsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido, aunque los hechos que la originen sean los mismos.

3. La responsabilidad por daños medioambientales podrá ser establecida mediante el procedimiento específico previsto en la normativa a la que se refiere el párrafo primero de este artículo o, en caso de concurrir una infracción administrativa, a través del correspondiente procedimiento sancionador.

4. Los operadores a los que así se requiera de acuerdo con la normativa de transposición de la Directiva de responsabilidad medioambiental, deberán disponer, en su caso, de la garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que desarrollen en el momento en que se indique, expresamente, en la autorización o licencia.

Artículo 102. Régimen competencial.

1. Corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente del Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco la resolución de los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños medioambientales significativos cuando sea competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo dispuesto en la legislación básica aplicable, sin perjuicio de lo que se establece en el párrafo siguiente.

2. Las administraciones públicas establecerán aquellos mecanismos de colaboración que estimen pertinentes para el adecuado ejercicio de las competencias establecidas en materia de prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales significativos y de su amenaza inminente. En todo caso, ajustarán sus actuaciones a los principios de información mutua, de cooperación y de colaboración.

TÍTULO NOVENO. DISCIPLINA AMBIENTAL.

Artículo 103. Infracciones y sanciones.

1. Constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en esta Ley, las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes, sin perjuicio de las infracciones tipificadas en las normas con rango de Ley, de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que regulan sectorialmente dichas materias.

2. Las infracciones administrativas establecidas en esta Ley se entienden sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir sus autores.

Artículo 104. Tipificación de infracciones.

1. Las infracciones administrativas reguladas en la presente Ley se clasifican en muy graves, graves y leves.

2. Son infracciones muy graves los siguientes hechos:

a. La construcción, el montaje, la explotación o el traslado de actividades e instalaciones sin la preceptiva autorización ambiental integrada.

b. La ejecución de una modificación sustancial de una actividad e instalación sin que se haya producido la modificación de su autorización ambiental integrada, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.

c. Incumplir las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.

d. Incumplir, por parte de actividades e instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada, las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 111 de esta Ley cuando suponga un peligro grave para el medio ambiente o la salud de las personas.

e. El inicio de la ejecución de un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental.

3. Son infracciones graves los siguientes hechos:

a) La construcción, el montaje, la explotación o el traslado de actividades e instalaciones sin la preceptiva autorización ambiental única o licencia de actividad clasificada o sin haber realizado la oportuna comunicación previa de actividad clasificada.

b) La ejecución de una modificación sustancial de una actividad o instalación sin que se haya producido la modificación de su título autorizatorio por parte de la administración competente.

c) El inicio de la ejecución de un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada sin haber obtenido previamente el correspondiente informe de impacto ambiental.

d) El incumplimiento de las medidas provisionales y cautelares impuestas para la restauración de la legalidad ambiental o de las ordenadas en virtud del inicio de un procedimiento sancionador.

e) La aprobación de planes o programas sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria sin haber obtenido la correspondiente declaración ambiental estratégica.

f) El incumplimiento de las condiciones ambientales fijadas en la autorización ambiental integrada, en la autorización ambiental única, en la licencia de actividad o de las condiciones incluidas en la comunicación previa de actividad clasificada.

g) El incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en la declaración ambiental estratégica, la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental.

h) El incumplimiento de las medidas impuestas en los procedimientos para la restauración de la legalidad ambiental.

i) La inexactitud, falsedad u omisión de datos de carácter esencial exigidos en la documentación que se acompañe a la comunicación previa de actividad clasificada, la comunicación de inicio de funcionamiento o apertura, las solicitudes de autorización ambiental integrada o única o de licencia de actividad clasificada.

j) La inexactitud, falsedad u omisión de datos de carácter esencial exigidos en la documentación preceptiva en el marco de los procedimientos de evaluación ambiental.

k) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación, notificación e información establecidas en esta Ley, en los títulos habilitantes otorgados por las

administraciones públicas y en los pronunciamientos en el marco de los procedimientos de evaluación ambiental.

l) La obstrucción, activa o pasiva, a la labor inspectora de la Administración competente o la negativa a facilitar los datos que sean requeridos a titulares de actividades o instalaciones.

m) El incumplimiento de las condiciones exigidas a las entidades de colaboración o la realización por éstas de actividades contrarias a lo dispuesto en la normativa que les resulte de aplicación.

n) La descarga en el medio ambiente, bien sea en las aguas, la atmósfera o el suelo, de productos o sustancias, en estado sólido, líquido o gaseoso, o de formas de energía, incluso sonora, que suponga un deterioro de las condiciones ambientales o afecte al equilibrio ecológico en general y que se realice contraviniendo el ordenamiento jurídico.

4. Son infracciones leves las señaladas en el párrafo anterior como graves, cuando por su escasa incidencia sobre medio ambiente o las personas no se den los supuestos para dicha calificación.

Artículo 105. Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior prescribirán en los siguientes plazos:

a) Cinco años en caso de infracciones muy graves.

b) Tres años en caso de infracciones graves.

c) Un año en caso de infracciones leves.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

3. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma. En los supuestos de infracciones permanentes el plazo comenzará a contar desde el día que se elimine la situación ilícita. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.

Artículo 106. Sanciones.

1. Por la comisión de las infracciones administrativas previstas en el artículo 104 de esta Ley se podrán imponer todas o alguna de las siguientes sanciones:

a) Para las infracciones muy graves

- Multas entre 250.001 euros a 2.500.000 euros.
- Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones.
- Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período no inferior a dos años, ni superior a cinco.
- Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo no inferior a un año, ni superior a cinco.
- Cese definitivo o temporal de las actividades por un periodo no superior a los cinco años.
- Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período no inferior a un año, ni superior a dos.
- Pérdida definitiva de la condición de entidad colaboradora o pérdida temporal por un periodo no superior a seis años.

b) Para las infracciones graves.

- Multa de 25.001 euros a 250.000 euros.
- Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo máximo de dos años.
- Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo máximo de un año.
- Cese temporal de las actividades por un periodo máximo de tres años.
- Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período máximo de un año.
- Pérdida de la condición de entidad colaboradora por un periodo máximo de tres años.

c) Para las infracciones leves

- Multa de 600 euros a 25.000 euros.
- Apercibimiento.

2. Cuando la cuantía de la multa resultare inferior al beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la sanción será aumentada, como máximo, hasta el doble del importe del beneficio obtenido por la persona infractora.

Artículo 107. Graduación de las sanciones.

En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad de la infracción y la sanción aplicada, considerando especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción:

a) La existencia de intencionalidad.

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora por la comisión de más de una infracción cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

c) La reincidencia por comisión de más de una infracción de la misma naturaleza tipificada en esta Ley, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa, en el plazo de cuatro años siguientes a la notificación de ésta.

d) Los daños o riesgos causados al medio ambiente o salud de las personas.

e) El beneficio obtenido por la comisión de la infracción.

f) La capacidad económica de la persona infractora.

g) La adopción con antelación a la incoación de un expediente sancionador de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los efectos perjudiciales que sobre el medio ambiente o salud de las personas se deriven de una determinada actuación tipificada como infracción.

Artículo 108. Decomiso.

1. Los órganos que ejerzan la potestad sancionadora podrán acordar el decomiso de los efectos provenientes de la infracción, de los instrumentos con los que se haya ejecutado, de los objetos que constituyan su soporte material y de las ganancias derivadas de la misma, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.

2. El decomiso no podrá acordarse cuando los efectos o instrumentos pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable de la infracción que los haya adquirido legalmente, salvo que exista un riesgo inminente de daño ambiental o de riesgo para la salud de las personas.

Artículo 109. Prescripción de las sanciones.

Las sanciones impuestas por las infracciones previstas en esta Ley prescribirán, en el caso de las muy graves, a los cinco años, las impuestas por las infracciones graves a los tres años, y las impuestas por las leves al año. El plazo de prescripción

comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Artículo 110. Competencias.

1. En las materias de competencia de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco corresponderá el ejercicio de la potestad sancionadora al Consejo de Gobierno, por la comisión de las infracciones muy graves que conlleven una sanción de más de 1.500.000 de euros de multa o el cese o la clausura definitiva o temporal, total o parcial, de las actividades e instalaciones; al Consejero o Consejera competente en materia de medio ambiente, por la comisión del resto de infracciones muy graves y al Vicenconsejero o Viceconsejera competente en materia de medio ambiente u órgano que lo sustituya por la comisión de las infracciones graves y leves.

2. En las materias de competencia foral y municipal, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a los órganos competentes de acuerdo con lo que dispongan al respecto sus normas de organización y funcionamiento.

Artículo 111. Medidas de carácter provisional.

1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolverlo, por propia iniciativa o a propuesta de la persona instructora, podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y evitar el mantenimiento daños o de los riesgos de su producción para el medio ambiente y para la salud humana. Dichas medidas deberán ajustarse a los principios de efectividad y de menor onerosidad y deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las presuntas infracciones, y podrán consistir en:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño o riesgo.

b) Precintado de aparatos, equipos o vehículos.

c) Clausura temporal, parcial o total de la instalación.

d) Suspensión o cese temporal de la actividad.

e) El decomiso en los supuestos contemplados en el artículo 108.2.

2. Con la misma finalidad, el órgano competente podrá adoptar las medidas provisionales imprescindibles con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, con los límites y condiciones establecidas en la legislación básica sobre

el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y, demás normativa aplicable.

3. No se podrá adoptar ninguna medida provisional sin el trámite de audiencia previa a los interesados, salvo que concurran razones de urgencia inaplazable que aconsejen su adopción inmediata, basadas en la producción de un daño o riesgo grave para el medio ambiente o la salud humana.

Artículo 112. Obligación de reponer e indemnización.

1. Sin perjuicio de las sanciones que se impongan, las personas infractoras estarán obligadas a la reposición de la situación alterada por las mismas a su estado originario, así como a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la administración actuante, que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse a la persona infractora para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine.

2. En los casos de daños medioambientales, la persona infractora quedará obligada a la reparación de los mismos, su exigencia y la forma de la reparación deberá establecerse en la resolución sancionadora. La metodología de reparación prevista en la normativa sobre responsabilidad medioambiental podrá aplicarse en este supuesto. En el caso de tratarse de daños medioambientales significativos, la reparación de los mismos se realizará en los términos de la normativa sobre responsabilidad medioambiental.

Artículo 113. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.

1. Si las personas infractoras no procedieran a la reposición de la situación alterada y reparación de los daños, en el requerimiento correspondiente, se podrá acordar la imposición de multas coercitivas sucesivas o la ejecución subsidiaria por cuenta de la persona infractora y a su costa.

2. La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento de cumplimiento se indique el plazo de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación. En el caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se mantenga el incumplimiento que la ha motivado, podrá reiterarse por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan imponer en concepto de sanción.

3. La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará el diez por ciento de la multa fijada por la infracción cometida. En el caso de que dicha multa fuera sensiblemente inferior al coste estimado del conjunto de las medidas de

recuperación a ejecutar, el diez por ciento aplicable para el cálculo de la multa coercitiva vendrá referido a dicho coste de recuperación.

4. La ejecución forzosa de resoluciones que obliguen a realizar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales significativos, se rigen por lo dispuesto en la normativa sobre responsabilidad medioambiental.

Artículo 114. Prohibición de contratar y de obtener subvenciones.

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sido sancionadas por infracciones graves y muy graves previstas en esta Ley mediante resolución firme en vía administrativa no podrán contratar, ni obtener subvenciones del sector público en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco hasta no haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes y haber satisfecho la sanción.

2. En los supuestos en los que se viene realizando el pago de la sanción pecuniaria de modo fraccionado, a pesar de que no se haya satisfecho íntegramente la sanción, no será de aplicación la prohibición de contratar ni la de obtener subvenciones siempre y cuando se cumplan puntualmente las obligaciones de pago determinadas en la resolución en virtud de la cual el órgano competente acepta el pago fraccionado.

Artículo 115. Procedimiento sancionador.

1. En todo lo no previsto en el presente título será aplicable lo establecido en la correspondiente Ley reguladora de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o en la normativa básica estatal que regule aspectos sobre dicha materia.

2. Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento sancionador, en los términos previstos en la legislación básica, cuando el órgano competente para iniciar dicho procedimiento considere que, de acuerdo a lo previsto en esta o en otras Leyes ambientales, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.

Artículo 116. Publicidad.

1. Las resoluciones sancionadoras por infracciones muy graves previstas en esta Ley o en aquellas contempladas en otra legislación sectorial ambiental, se harán públicas en forma sumaria en el Boletín Oficial correspondiente, en su sede electrónica y, potestativamente, a través de los medios de comunicación social por

parte por las autoridades competentes para imponer las sanciones una vez sean firmes en vía administrativa.

2. Los órganos que ejerzan la potestad sancionadora podrán acordar, cuando estimen que existen razones de interés público, la publicación, en el diario oficial correspondiente, en su sede electrónica y, potestativamente, a través de los medios de comunicación social que considere oportunos, de las sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves una vez sean firmes en vía administrativa.

3. En ambos casos, la publicación incluirá la identidad de la persona responsable, la infracción cometida, la sanción impuesta, así como un resumen de las obligaciones de reposición e indemnización exigidas, en su caso.

4. El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco creará un Registro de personas infractoras de normas ambientales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el cual se inscribirán las personas físicas o jurídicas sancionadas, en virtud de resolución firme, por parte de la Administración general de la Comunidad Autónoma Vasca. El objetivo exclusivo de este registro es disponer por parte del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco de información fehaciente sobre las sanciones impuestas. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del citado registro.

Artículo 117. Prestación ambiental sustitutoria.

1. Las sanciones consistentes en multas, una vez que adquieran firmeza en vía administrativa, podrán ser sustituidas a solicitud de la persona sancionada, por una prestación ambiental de restauración, conservación o mejora que redunde en beneficio del medio ambiente, en las condiciones y términos que determine el órgano sancionador que impuso la multa.

2. A estos efectos, la persona infractora deberá solicitar la sustitución de la sanción económica por la prestación ambiental sustitutoria de valor, como mínimo, equivalente a la cuantía de la multa. La resolución sobre la solicitud deberá ser acordada y notificada al interesado en el plazo máximo de tres meses, pudiendo entenderse desestimada en caso contrario.

3. Los plazos de prescripción de las sanciones impuestas quedarán en suspenso durante los plazos de resolución de la solicitud de prestación ambiental sustitutoria anteriormente señalados.

Artículo 118. Destino de las sanciones económicas.

La recaudación obtenida por parte de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco por las sanciones que se impongan podrá ser destinada a la

realización de los fines previstos en esta Ley y, a tal efecto, podrá integrarse, en su caso, en la partida presupuestaria definida en el artículo 85.1 de la presente Ley. El resto de administraciones públicas podrán determinar en idéntico sentido que las recaudaciones obtenidas integren una partida en sus presupuestos anuales específicamente destinada a abordar actuaciones vinculadas a la protección del medio ambiente.

DISPOSICION ADICIONAL

Las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo a sus competencias, se dotarán de los recursos humanos y materiales suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Procedimientos en curso.

Los procedimientos en curso a la entrada en vigor de la presente Ley continuarán tramitándose conforme a la normativa vigente en el momento de su iniciación, salvo que el promotor del expediente solicite de forma expresa la aplicación de los procedimientos contemplados en la presente Ley conservándose, a tal efecto, los actos y trámites ya realizados.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Instalaciones existentes.

1. Los titulares de las actividades o instalaciones que cuenten con autorizaciones ambientales integradas o licencias municipales de actividad clasificada o hayan presentado comunicaciones previas de actividad clasificada seguirán disfrutando de sus derechos conforme al contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley establece, sin perjuicio de que hayan de adaptarse a ésta a tenor de las resoluciones que recaigan en virtud de los procedimientos correspondientes y conforme a lo dispuesto en los párrafos siguientes.

2. Las actividades o instalaciones existentes a la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren incluidas en el Anexo I apartado B) deberán adaptarse al nuevo régimen jurídico de autorización ambiental única previsto en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la presente Ley de conformidad a los criterios y plazos dispuestos en esta disposición.

3. Dicha adaptación se realizará por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco sin necesidad de tramitar el procedimiento previsto en esta Ley en el supuesto de que el titular de la actividad o instalación remita una declaración responsable en la que se asegure que las condiciones en base

a las cuales se emitieron sus títulos ambientales habilitantes se mantienen en términos análogos en la actualidad.

4. En los supuestos en los que las citadas actividades o instalaciones hayan llevado a cabo modificaciones no recogidas en sus títulos ambientales habilitantes, se deberá remitir una memoria descriptiva de las modificaciones realizadas respecto a los últimos títulos habilitantes concedidos para su análisis y determinación, en su caso, por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco si procede o no la adaptación prevista en el párrafo anterior que no requiere de la tramitación el procedimiento. En caso de que el órgano ambiental así lo determine estas actividades deberán iniciar el procedimiento de obtención de la autorización ambiental única determinado en esta Ley.

5. La adaptación prevista en los párrafos anteriores se realizará conforme a los siguientes criterios y plazos:

a) En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley se habrán adaptado a la misma las actividades e instalaciones sujetas a autorización de tratamiento de residuos peligrosos.

b) En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley se habrán adaptado a la misma las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera sujetas a autorización que sean priorizadas por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) En el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley se habrán adaptado a la misma las actividades de tratamiento de residuos no peligrosos.

d) En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley deberán estar adaptadas a la misma todas las actividades e instalaciones existentes.

A la entrada en vigor de esta Ley, y de conformidad a los plazos establecidos, las administraciones públicas o entes públicos que hayan tramitado y otorgado sus correspondientes títulos habilitantes en procedimientos sectoriales ambientales relativos a actividades e instalaciones que deban adaptarse al nuevo régimen jurídico de autorización ambiental única deberán trasladar copia de dichos expedientes al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

DISPOSICION DEROGATORIA.

Queda derogada la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICION FINAL PRIMERA. Modificación del artículo 7.c) 6. de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales.

Se da una nueva redacción al artículo 7.c) 6. de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónomas y los Órganos Forales, que queda redactado de la siguiente forma:

"6.– La imposición de medidas protectoras y correctoras en actividades sujetas al régimen de licencia de actividad clasificada en los municipios de menos de 10.000 habitantes, y en los municipios de 10.000 o más habitantes si así lo solicita el Ayuntamiento correspondiente, siempre que no afecte a más de un Territorio Histórico o Ente Público extracomunitario, y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a los Entes municipales".

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación del artículo 7.4 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.

Se da una nueva redacción al artículo 7.4 de la de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, que queda redactado de la siguiente forma:

"4. Cuando los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos a los que se refiere el apartado 2 se sometan a alguno de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica legalmente establecidos, no será necesario duplicar la información requerida en el apartado 3 que se haya recogido en el marco del estudio ambiental estratégico, o del documento ambiental estratégico, según proceda".

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Adecuación al régimen establecido en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

1. El procedimiento previsto en la presente Ley para la autorización de los vertidos realizados por las actividades contempladas en los anexos I.A y I.B al dominio público hidráulico de las cuencas gestionadas por la Administración General del Estado no modifica el régimen económico financiero previsto por la legislación de aguas ni el resto de competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de protección del dominio público hidráulico. En particular, no se alteran las competencias relativas a vigilancia e inspección ni la potestad sancionadora.

2. El organismo de cuenca correspondiente liquidará el canon de control de vertidos de acuerdo con las condiciones contenidas en la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única que, a estos efectos, deberá ser puesta a disposición de aquél por el órgano autonómico competente para otorgarla.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Adecuación al régimen establecido en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

1. El procedimiento previsto en la presente Ley para la autorización de los vertidos realizados por las actividades contempladas en los anexos I.A y I.B al dominio público hidráulico de las cuencas gestionadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco y los vertidos de tierra al mar no modifica el régimen económico financiero previsto por la legislación de aguas ni el resto de competencias que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco o la Agencia Vasca del Agua-URA en materia de protección del dominio público hidráulico. En particular, no se alteran las competencias relativas a vigilancia e inspección ni la potestad sancionadora.

2. La Agencia Vasca del Agua-URA liquidará el canon de control de vertidos de acuerdo con las condiciones contenidas en la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única que, a estos efectos, deberá ser puesta a disposición de la Agencia por el órgano autonómico competente para otorgarla.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Habilitación normativa para adecuar los anexos

Se faculta al Consejo de Gobierno para que, mediante Decreto y a solicitud del Departamento competente en materia de medio ambiente, pueda modificar los anexos de esta Ley con la finalidad de adaptarlos a la normativa aplicable y a los requerimientos medioambientales o de carácter técnico que en su caso sean necesarios.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

ANEXOS AL PROYECTO DE LEY

Anexo I.A Instalaciones sometidas a Autorización Ambiental Integrada.

1. Instalaciones de combustión.

1.1 Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW:

a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.

b) Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal.

1.2 Refinerías de petróleo y gas:

a) Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo.

b) Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y gases licuados del petróleo.

1.3 Coquerías.

1.4 Instalaciones de gasificación y licuefacción de:

a) Carbón;

b) Otros combustibles, cuando la instalación tenga una potencia térmica nominal igual o superior a 20 MW.

2. Producción y transformación de metales.

2.1 Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos incluido el mineral sulfuroso.

2.2 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.

2.3 Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:

a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por hora.

b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.

c) Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora.

2.4 Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día.

2.5 Instalaciones:

a) Para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.

b) Para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.

2.6 Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m3.

3. Industrias minerales.

3.1 Producción de cemento, cal y óxido de magnesio:

a) i) fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias;

ii) fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día;

b) producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas diarias;

c) producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas diarias.

3.2 Sin contenido.

3.3 Instalaciones para la fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.

3.4 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de fibras minerales con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.

3.5 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, o una capacidad de horneado de más de 4 m3 y más de 300 kg/m3 de densidad de carga por horno.

4. Industrias químicas.

A efectos de la presente sección y de la descripción de las categorías de actividades incluidas en la misma, fabricación, significa la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o biológica de los productos o grupos de productos mencionados en los puntos 4.1 a 4.6.

4.1 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos, en particular:

a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos).
b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
c) Hidrocarburos sulfurados.
d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.
e) Hidrocarburos fosforados.
f) Hidrocarburos halogenados.
g) Compuestos orgánicos metálicos.
h) Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
i) Cauchos sintéticos.
j) Colorantes y pigmentos.
k) Tensioactivos y agentes de superficie.

4.2 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos como:

a) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o floruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
b) Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.
c) Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido sódico.
d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio.

4.3 Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).

4.4 Instalaciones químicas para la fabricación de productos fitosanitarios o de biocidas, sea o no ésta su actividad principal, e independientemente de cualquiera

que sea la materia prima de partida o el proceso seguido, cuando impliquen transformación química o biológica.

4.5 Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación de medicamentos, incluidos los productos intermedios.

4.6 Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.

5. Gestión de residuos.

5.1 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una capacidad de más de 10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes actividades:

a) Tratamiento biológico;
b) Tratamiento físico-químico;
c) Combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2;
d) Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2;
e) Recuperación o regeneración de disolventes;
f) Reciclado o recuperación de materias inorgánicas que no sean metales o compuestos metálicos;
g) Regeneración de ácidos o de bases;
h) Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación;
i) Valorización de componentes procedentes de catalizadores;
j) Regeneración o reutilización de aceites;
k) Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.).

5.2 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración o coincineración de residuos:

a) Para los residuos no peligrosos con una capacidad superior a tres toneladas por hora;
b) Para residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 toneladas por día;

5.3 Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos con una capacidad de más de 50 toneladas por día, que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:

a) Tratamiento biológico;
b) Tratamiento físico-químico;
c) Tratamiento previo a la incineración o coincineración;
d) Tratamiento de escorias y cenizas;

e) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.

5.4 Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:

a) Tratamiento biológico;
b) Tratamiento previo a la incineración o coincineración;
c) Tratamiento de escorias y cenizas;
d) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
e) Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la instalación sea la digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta actividad serán de 100 toneladas al día.

5.5 Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes.

5.6 Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 5.5 en espera de la aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en el apartado 5.1, 5.2 y 5.5, con una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el sitio donde el residuo es generado.

5.7 Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total superior a 50 toneladas.

6. Industria derivada de la madera.

6.1 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de:

a) Pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas;
b) Papel o cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas diarias.

6.2 Instalaciones de producción de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.

6.3 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de uno o más de los siguientes tableros derivados de la madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros aglomerados, tableros de cartón comprimido o tableros de fibras, con una capacidad de producción superior a 600 m3 diarios.

7. Industria textil.

7.1 Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para el tinte de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias.

8. Industria del cuero.

8.1 Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados por día.

9. Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.

9.1 Instalaciones para:

a) Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas/día.

b) Tratamiento y transformación, diferente del mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de:

i) Materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche) de una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día;

ii) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un período no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera;

iii) solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por separado, con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día superior a:

– 75 si A es igual o superior a 10, o

– [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso,

donde «A» es la porción de materia animal (en porcentaje del peso) de la capacidad de producción de productos acabados.

El envase no se incluirá en el peso final del producto.

La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche.

c) Tratamiento y transformación solamente de la leche, con una cantidad de leche recibida superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).

9.2 Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de carcasas o desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día.

9.3 Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de:

a) 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral.

b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg.

c) 750 plazas para cerdas reproductoras.

10. Consumo de disolventes orgánicos.

10.1 Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de disolventes orgánicos de más de 150 kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año.

11. Industria del carbono.

11.1 Instalaciones para fabricación de carbono sinterizado o electrografito por combustión o grafitación.

12. Industria de conservación de la madera.

12.1 Conservación de la madera y de los productos derivados de la madera utilizando productos químicos, con una capacidad de producción superior a 75 m3 diarios. Se excluye el tratamiento para combatir las alteraciones cromógenas exclusivamente.

13. Tratamiento de aguas.

13.1 Tratamiento independiente de aguas residuales, no contemplado en la legislación sobre aguas residuales urbanas, y vertidas por una instalación contemplada en el presente anejo.

14. Captura de CO2.

14.1 Captura de flujos de CO2 procedentes de instalaciones incluidas en el presente anejo con fines de almacenamiento geológico con arreglo a la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

Anexo.I.B. Actividades e instalaciones sometidas a autorización ambiental única.

Siempre que se trate de actividades no incluidas en el apartado A de este Anexo I, se someterán a autorización ambiental única, las siguientes actividades e instalaciones:

1. Actividades o instalaciones sujetas a autorización de tratamiento de residuos peligrosos.

2. Actividades o instalaciones sujetas a autorización de tratamiento de residuos no peligrosos.

3. Actividades o instalaciones sujetas a autorización como potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

4. Actividades o instalaciones que generen gases de efecto invernadero y que de conformidad con la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero deberá contar con autorización de emisión.

5. Actividades o instalaciones que requieran autorización administrativa previa y expresa de la Agencia Vasca del Agua\URA por realizar vertidos industriales de clase 3 (*) directos o indirectos de aguas y de productos residuales, líquidos, sólidos o de cualquier naturaleza en las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico o marítimo-terrestre.

6. Actividades o instalaciones que requieran autorización administrativa previa y expresa del organismo de cuenca por realizar vertidos industriales de clase 3 (*) directos o indirectos de aguas y de productos residuales, líquidos, sólidos o de cualquier naturaleza en las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico.

7. Estaciones depuradoras de aguas residuales con una capacidad superior a los 100.000 habitantes-equivalentes.

8. Otras actividades que, a criterio del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, puedan tener efectos análogos sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

(*) Según Anexo IV (Cálculo del coeficiente de mayoración o minoración del canon de control de vertidos) del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Anexo.I.C. Actividades e instalaciones sometidas a licencia de actividad clasificada.

Siempre que se trate de actividades no incluidas en los apartados A y B de este Anexo I, se someterán a licencia municipal de actividad clasificada, las siguientes actividades e instalaciones:

1. Actividades extractivas.

2. Instalaciones nucleares y radiactivas.

3. Instalaciones productoras de energía eléctrica con una potencia instalada superior a 100 kW.

4. Industrias en general.

5. Talleres que realicen tratamientos superficiales u operaciones de barnizado o pintado a pistola y similares.

6. Talleres y obradores varios (mantenimiento y reparación de vehículos a motor y similares, carpinterías, caldererías, montaje, mecanización, obradores de panadería, pastelería, catering...), cuando la potencia total instalada (potencia mecánica y eléctrica, excluida la correspondiente al alumbrado) sea igual o superior a 25 kW y la superficie específicamente destinada a la producción supere los 300 m2.

7. Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio y exposición que dispongan de productos y materiales catalogados como tóxicos, peligrosos o inflamables en cantidad superior a 500 kg en instalaciones ubicadas en suelo urbano residencial, y 1.000 kg en el resto de suelos.

8. Estaciones de servicio y parque de suministro, instalación distribuidora o instalación análoga de combustibles líquidos o gaseosos.

9. Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos ubicadas en cualquier tipo de suelo con una capacidad superior a 50.000 litros.

10. Rellenos de tierras y rocas con una capacidad superior a 500.000 m3 cuya ejecución se prolongue por un tiempo superior a un año, excepto aquellos vinculados a obras de infraestructura lineal.

11. Instalaciones de depuración de aguas residuales y de tratamiento de agua potable.

12. Piscifactorías.

13. Mataderos.

14. Los establecimientos destinados a salas de fiestas, discotecas, discotecas de juventud, disco-bares, karaokes, bares especiales, pubs o similares, así como las plazas de toros permanentes.

15. Otros establecimientos de espectáculos públicos o actividades recreativas, siempre y cuando, en todos los casos, cumplan alguno de los siguientes requisitos:

- disponer de una capacidad o aforo igual o superior a 300 personas.

- disponer de algún recinto catalogado de riesgo especial alto de acuerdo con la normativa técnica en vigor.

- que se trate de edificios de valor cultural cuyas características arquitectónicas no permitan el pleno cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas con carácter general.

- que se trate de establecimientos de régimen especial conforme a la normativa de espectáculos y actividades recreativas.

16. Centros de culto con una capacidad o aforo igual o superior a 300 personas.

17. Explotaciones ganaderas y corrales domésticos de más de 20 UGM (unidades de ganado mayor) o explotaciones equivalentes según las proporciones que se indican en el apartado a) del artículo 3 del Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, o norma que lo sustituya, y guarderías caninas (cría y adiestramiento) con una capacidad superior a 25 perros, siempre que todas ellas estén ubicadas en suelo no urbanizable o suelo urbano industrial.

18. Actividades ganaderas domésticas, entendiendo por tales las instalaciones de más de 4 UGM (unidades de ganado mayor), y todo tipo de guarderías caninas, siempre que todas ellas estén ubicadas en suelo urbano residencial.

19. Otras actividades que, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, puedan tener efectos análogos sobre el medio ambiente y la salud.

Anexo. I.D. Actividades e instalaciones sometidas a comunicación previa de actividad clasificada.

Siempre que se trate de actividades no incluidas en los apartados A, B y C de este Anexo I, se someterán a comunicación previa de actividad clasificada, las siguientes actividades e instalaciones:

1. Instalaciones productoras de energía eléctrica e instalaciones de captación y transformación de energía renovable en energía eléctrica con una potencia instalada superior a 50 kW e inferior o igual a 100 kW.

2. Talleres y obradores varios (mantenimiento y reparación de vehículos a motor y similares, carpinterías, calderererías, montaje, mecanización, obradores de panadería, pastelería, catering...), salvo los incluidos en los puntos 5 y 6 del Anexo I. C.

3. Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio y exposición de productos y materiales no incluidas en el punto 7 del anexo anterior.

4. Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos que no superen los 50.000 litros de capacidad, exceptuadas aquellas que forman parte de una estación de servicio, parque de suministro, instalación distribuidora o instalación análoga.

5. Guarderías de vehículos cuya superficie construida supere los 100 m^2.

6. Actividades de servicios tales como guarderías infantiles, centros de enseñanza, centros sanitarios y de atención farmacéutica, clínicas veterinarias, comisarías y centros de seguridad, oficinas, peluquerías, salas de masaje y funerarias.

7. Hoteles, pensiones, albergues, casas de agroturismo, residencias comunitarias, residencias de personas mayores y establecimientos similares.

8. Establecimientos de espectáculos públicos o actividades recreativas que no se encuentren sujetos a licencia de actividad clasificada.

9. Centros de culto que no se encuentren sujetos a licencia de actividad clasificada.

10. Pequeñas explotaciones ganaderas y corrales domésticos no incluidos en el anexo en el que se prevén las instalaciones y actividades sujetas a licencia municipal de actividad clasificada

11. Centros de transformación.

12. Servicios de tratamiento y comunicación de la información (centros de cálculo, banco de datos, repetidores de radio y televisión, repetidores vía satélite, antenas y estaciones base de telefonía móvil, centros de tratamiento electrónico o

informático de la información, estaciones radiotelefónicas y radiotelegráficas, emisoras de radio y televisión y central de control de alarmas) y similares.

13. Instalaciones complementarias:

13.1. Sala de calderas.

13.2. Instalaciones de aire acondicionado.

13.3. Instalaciones de cámaras frigoríficas.

13.4. Instalaciones de radiodiagnóstico médico, entendiendo por tales los equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, de acuerdo con la reglamentación que resulte de aplicación.

14. Cementerios y tanatorios sin crematorio.

15. Rellenos de tierras y rocas con una capacidad de hasta 500.000 m3 cuya ejecución se prolongue por un tiempo inferior a un año, excepto aquellos vinculados a obras de infraestructura lineal.

16. Otras actividades que puedan tener efectos análogos sobre la salud y el medio ambiente.

Anexo. I.E. Criterios para la consideración de una modificación de una actividad o instalación como sustancial.

1. Cualquier ampliación o modificación que alcance, por sí sola, los umbrales de capacidad establecidos, cuando estos existan, en el Anexo I.A, o si ha de ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria de acuerdo con la normativa sobre esta materia.

2. Un incremento de más del 50 % de la capacidad de producción de la instalación en unidades de producto.

3. Un incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias primas o energía.

4. Un incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuren en la autorización o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.

5. Un incremento de la emisión másica o de la concentración de vertidos, al dominio público hidráulico, de cualquiera de los contaminantes o del caudal de vertido que figure en la autorización, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.

6. Un incremento de la emisión másica superior al 25% o del 25% de la concentración de vertidos de cualquiera de las sustancias prioritarias de acuerdo con la normativa de aguas o del 25% del caudal de vertido que figure en la autorización, así como la introducción de nuevas sustancias prioritarias de acuerdo con la normativa de aguas, cuando su destino no es el dominio público hidráulico.

7. La incorporación al proceso de sustancias o preparados peligrosos no previstos en la autorización original, o el incremento de los mismos, que obliguen a elaborar el informe de seguridad o los planes de emergencia regulados en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como el incremento de aquellos en cualquier cantidad para su uso habitual y continuado en el proceso productivo, cuando estén sujetos a convenios o acuerdos internacionales para su disminución o eliminación.

8. Un incremento en la generación de residuos peligrosos de más de 10 toneladas al año siempre que se produzca una modificación estructural del proceso y un incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.

9. Un incremento en la generación de residuos no peligrosos de más de 50 toneladas al año siempre que represente más del 50 % de residuos no peligrosos,

incluidos los residuos inertes, calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos autorizada.

10. El cambio en el funcionamiento de una instalación de incineración o coincineración de residuos dedicada únicamente al tratamiento de residuos no peligrosos, que la transforme en una instalación que conlleve la incineración o coincineración de residuos peligrosos.

11. Una modificación en el punto de vertido que implique un cambio en la masa de agua superficial o subterránea a la que fue autorizado.

Anexo II.A. Planes y programas que deben someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria.

Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes planes y programas que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración o aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno:

1. Directrices de ordenación del territorio
2. Planes Territoriales Parciales
3. Planes Territoriales Sectoriales
4. Planes Generales de Ordenación Urbana
5. Planes de Sectorización
6. Otros planes y programas cuando sean el marco para la autorización en el futuro de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural o al uso del suelo.
7. Otros planes y programas cuando, de forma directa o indirecta, solos o en combinación con otros planes, programas o proyectos, puedan afectar de forma apreciable a alguno de los espacios protegidos o que gocen de un régimen de protección, recogidos en el artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, y en los artículos 30, 42 y 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. No será necesaria la evaluación ambiental de los planes y programas que únicamente establezcan disposiciones para la gestión del lugar, salvo que se encuentren en alguno de los demás supuestos de este Anexo II.A.
8. Otros planes y programas recogidos en el Anexo II.B, cuando así lo decida el órgano ambiental tras haber sustanciado un procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, o bien, a solicitud del promotor.
9. Las revisiones y modificaciones de cualquier plan o programa, cuando constituyan el marco para la autorización en el futuro de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria y se refieran a alguna de las materias recogidas en el apartado 6 de este Anexo, o bien, cuando puedan afectar de forma apreciable a alguno de los espacios recogidos en el apartado 7 de este Anexo, en los términos especificados en dicho apartado.

Anexo II.B. Planes y programas que deben someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes planes y programas que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración o aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno:

1. Las modificaciones menores y las revisiones de los planes y programas recogidos en el Anexo II.A, siempre que no constituyan el marco para la aprobación en el futuro de un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria y, además, no puedan afectar de forma apreciable a ninguno de los espacios recogidos en el apartado 7 del Anexo II.A, en los términos especificados en dicho apartado.

2. Otros planes y programas, sus revisiones y modificaciones, cuando constituyan el marco para la aprobación en el futuro de un proyecto que, sin encontrarse sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria, pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente con un grado indeterminado de probabilidad. No se entenderán incluidos en este apartado los supuestos recogidos en el Anexo II.A.

Anexo II.C. Criterios para determinar cuándo un plan o programa sometido a evaluación ambiental estratégica simplificada debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

1. Las características de los planes y programas, considerando en particular:

a. La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones, y condiciones de funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos.

b. La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos los que estén jerarquizados.

c. La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.

d. Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.

e. La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente como, entre otros, los planes o programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos.

2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en particular:

a. La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.

b. El carácter acumulativo de los efectos.

c. El carácter transfronterizo de los efectos.

d. Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a accidentes).

e. La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la población que puedan verse afectadas).

f. El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:

1.º Las características naturales especiales.

2.º Los efectos en el patrimonio cultural.

3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.

4.º La explotación intensiva del suelo.

5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos nacional, comunitario o internacional.

Anexo II.D. Proyectos que deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

1. Los proyectos que se encuentren en alguno de los supuestos recogidos en los Grupos que forman parte de este Anexo II.D, así como los proyectos que, encontrándose fraccionados, alcancen los umbrales recogidos en dichos apartados, mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados individualmente.

2. Los proyectos que se ajusten a las especificaciones recogidas en los Grupos de este Anexo II.D cuando sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y cuya utilización esté prevista para un plazo igual o superior a dos años.

3. Cualquier modificación de un proyecto, ya autorizado, aprobado, ejecutado, o en proceso de ejecución, cuando, por sí sola o por acumulación con otras modificaciones del mismo proyecto, alcance los umbrales recogidos en alguno de los Grupos de este Anexo II.D.

4. Otros proyectos recogidos en el Anexo II.E, cuando así lo decida el órgano ambiental tras haber sustanciado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, o bien, a solicitud del promotor.

Grupo D1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería

1.a. Proyectos para destinar áreas naturales o seminaturales a la explotación agrícola o aprovechamiento forestal maderero que impliquen la ocupación de una superficie igual o superior a 50 hectáreas.

1.b. Proyectos de transformación de áreas agrícolas o forestales, naturales o no, en explotaciones agrícolas de regadío que impliquen la ocupación de una superficie igual o superior a 50 hectáreas.

1.c. Instalaciones para la agricultura intensiva que tengan una capacidad de producción igual o superior a 500 toneladas al año.

1.d. Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas que igualen o superen la capacidad equivalente a 250 UGM, de acuerdo con la tabla de equivalencias recogida en el Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas.

1.e. Proyectos de liberación intencional en el medio ambiente de organismos genéticamente modificados de conformidad con la Directiva 90/220/CEE.

Grupo D2. Industria extractiva

En todos los apartados de este grupo se incluyen las instalaciones y estructuras necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, así como acopios de estériles, balsas, líneas eléctricas, abastecimientos de agua y su depuración y caminos de acceso.

2.a. Instalaciones nuevas dedicadas a la extracción de hulla, lignito u otros minerales.

2.b. Instalaciones nuevas dedicadas a la extracción de turba.

2.c. Ampliaciones de explotaciones existentes o que han tenido lugar en el pasado, cuando supongan una nueva ocupación de superficie de extracción en una extensión igual o superior a 1 hectárea.

2.d. Depósitos de productos intermedios o estériles procedentes de la extracción y tratamiento de minerales metálicos.

2.e. Instalaciones nuevas para la extracción de petróleo y gas natural.

2.f. Ampliaciones de explotaciones existentes o que han tenido lugar en el pasado, cuando la cantidad de producción que supone la ampliación sea igual o superior a 500 toneladas por día en el caso del petróleo y de 500.000 metros cúbicos por día en el caso del gas, o bien, cuando se realicen en medio marino, cualquiera que sea la cantidad de producción.

2.g. Perforaciones para la exploración o investigación de hidrocarburos, almacenamiento de CO_2, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica.

Grupo D3. Industria energética

3.a. Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de empresas que produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción de al menos 500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos al día.

3.b. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de 50 MW o más.

3.c. Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles, cuya potencia máxima no supere 1 kW de duración permanente térmica).

Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como tales instalaciones cuando la totalidad del combustible nuclear, y de los otros elementos radiactivamente contaminados, ha sido retirada de modo definitivo del lugar de la instalación.

3.d. Instalaciones de reproceso de combustibles nucleares irradiados.

3.e. Instalaciones diseñadas para:

1.º La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.

2.º El proceso de reutilización de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta radiactividad.

3.º El depósito final del combustible nuclear gastado.

4.º Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos.

5.º Exclusivamente el almacenamiento (proyectado para un período superior a diez años) de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos en un lugar distinto del de producción.

3.f. Instalaciones para el transporte de combustible fósil de tipo fluido, de vapor y agua caliente, siempre que se desarrollen en una longitud igual o superior a 10 km,

contados de forma continua o discontinua; no se computarán los tramos situados en suelo urbano.

3.g. Construcción de líneas de transporte de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 100 kV, con una longitud igual o superior a 1 km, y sus subestaciones asociadas, salvo que las líneas discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, o por vías de comunicación existentes.

3.h. Ampliación de las zonas de servidumbre de líneas aéreas para la transmisión de energía eléctrica que supongan la restricción para el desarrollo de la cubierta arbórea y/o arbustiva en un pasillo en torno a la línea, con una longitud igual o superior a 5 km, contados de forma continua o discontinua.

3.i. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos, con una capacidad igual o superior a 200.000 toneladas.

3.j. Parques eólicos que tengan 5 o más aerogeneradores con una potencia total igual o superior a 10 MW. Parques eólicos que se sitúen a menos de 2 km de otro parque eólico, siempre que, considerando sus magnitudes conjuntas, se igualen o superen los umbrales anteriores. A los efectos de esta norma únicamente se considerarán parques eólicos las instalaciones definidas como tales en la normativa sectorial de la energía eólica.

3.k. Instalaciones de energía fotovoltaica que conlleven una ocupación de terreno igual o superior a 50 hectáreas. Se entenderán incluidas las instalaciones del mismo o de distintos titulares que, aun ocupando una superficie menor, sean colindantes con otra instalación fotovoltaica, siempre que la superficie total ocupada por las distintas instalaciones sea igual o superior a 50 hectáreas.

Quedan excluidas las instalaciones de energía fotovoltaica que se sitúen en terrenos urbanizados ya consolidados, o bien sobre edificios preexistentes.

Grupo D4. Industria metálica y del mineral.

4.a. Instalaciones para la extracción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.

4.b. Plantas integradas para la fundición inicial del hierro colado y del acero.

4.c. Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos en las que se realice alguna de las siguientes actividades:

1.º Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero en bruto por hora.

2.º Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kJ por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.

3.º Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora.

4.d. Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día.

4.e. Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, con excepción de metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, restos de fundición, etc.), con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.

4.f. Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos por proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea igual o superior a 30 metros cúbicos.

4.g. Instalaciones de calcinación y de sinterizado de minerales metálicos, con capacidad igual o superior a 5.000 toneladas por año de mineral procesado.

4.h. Nuevas instalaciones destinadas a la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio.

4.i. Ampliación de las instalaciones destinadas a la fabricación de cemento por molienda que suponga un aumento de la capacidad de producción igual o superior a 500 toneladas diarias.

4.j. Ampliación de las instalaciones destinadas a la fabricación de clínker que suponga un aumento de la capacidad de producción igual o superior a 500 toneladas

diarias, si se realiza en hornos rotatorios, o bien, igual o superior a 50 toneladas diarias, si se realiza en hornos de otro tipo.

4.k. Ampliación de las instalaciones destinadas a la producción de cal que suponga un aumento de la capacidad de producción igual o superior a 50 toneladas diarias.

4.l. Ampliación de las instalaciones destinadas a la producción de óxido de magnesio que suponga un aumento de la capacidad de producción igual o superior a 50 toneladas diarias.

4.m. Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión igual o superior a 20 toneladas por día.

4.n. Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de fibras minerales, con una capacidad de fundición igual o superior a 20 toneladas por día.

4.o. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana, con una capacidad de producción igual o superior a 75 toneladas por día y una capacidad de horneado igual o superior a 4 metros cúbicos por horno, siempre que la densidad de carga por horno sea igual o superior a 300 kg por metro cúbico.

4.p. Coquerías.

4.q. Astilleros, exceptuando las instalaciones no incluidas en el sector de industria metálica.

Grupo D5. Industria química, petroquímica, textil y papelera.

5.a. Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias mediante transformación química o biológica, de los productos o grupos de productos siguientes:

1.º Productos químicos orgánicos:

i) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos).

ii) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.

iii) Hidrocarburos sulfurados.

iv) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.

v) Hidrocarburos fosforados.

vi) Hidrocarburos halogenados.

vii) Compuestos orgánicos metálicos.

viii) Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).

ix) Cauchos sintéticos.

x) Colorantes y pigmentos.

xi) Tensioactivos y agentes de superficie.

2.º Productos químicos inorgánicos:

i) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.

ii) Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.

iii) Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido sódico.

iv) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.

v) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio.

3.º Fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes simples o compuestos).

4.º Productos fitosanitarios y de biocidas.

5.º Productos farmacéuticos mediante un proceso químico o biológico.

6.º Productos explosivos.

5.b. Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento sea igual o superior a 10 toneladas diarias.

5.c. Instalaciones para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento sea igual o superior a 12 toneladas de productos acabados por día.

5.d. Nuevas instalaciones industriales para la producción de pasta de papel, de papel y cartón y para la producción y tratamiento de celulosa.

5.e. Ampliaciones de instalaciones industriales para la producción de pasta de papel cuando supongan un aumento de la producción de cualquier magnitud.

5.f. Ampliaciones de instalaciones industriales para la producción de papel y cartón cuando supongan un aumento de la producción igual o superior a 200 toneladas diarias.

5.g. Ampliaciones de instalaciones industriales para la producción y tratamiento de celulosa cuando supongan un aumento de la producción igual o superior a 20 toneladas diarias.

Grupo D6. Proyectos de infraestructuras

6.a. Construcción de autopistas, autovías y carreteras convencionales.

6.b. Variante de trazado, ensanchado o realineado de autopistas, autovías y carreteras convencionales en una longitud continua igual o superior a 10 km.

6.c. Construcción de líneas de ferrocarril de largo recorrido.

6.d. Variante de trazado, ensanchado o realineado de una línea de ferrocarril en una longitud continua igual o superior a 10 km.

6.e. Aeropuertos con pistas de despegue/aterrizaje de una longitud igual o superior a 2.100 metros; la evaluación se hará extensiva a sus accesos.

6.f. Ampliaciones de aeropuertos, cuando supongan una ocupación del suelo de un 50 % o más de la superficie actual o siempre que igualen o superen la superficie de 5 hectáreas.

6.g. Puertos comerciales, pesqueros, vías navegables y puertos deportivos.

6.h. Ampliaciones de puertos que supongan una ampliación de la superficie abrigada de un 50 % o más de la superficie actual, o siempre que dicha ampliación sea igual o superior a 5 hectáreas.

6.i. Ampliaciones de puertos que supongan una nueva ocupación del dominio público marítimo-terrestre y/o de la zona de servidumbre de protección de una superficie igual o superior a 5 hectáreas en total.

6.j. Ampliaciones de puertos que supongan la admisión de barcos de arqueo superior a 1.350 toneladas cuando antes no se admitían.

6.k. Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusión de los muelles para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 toneladas, excepto que se ubiquen en zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

6.l. Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena sea igual o superior a los 500.000 metros cúbicos, incluyendo las tareas de extracción de arena.

6.m. Recuperación de tierras al mar.

6.n. Emisarios, oleoductos y gasoductos submarinos.

Grupo D7. Proyectos de infraestructura hidráulica, de gestión y tratamiento del agua y actuaciones en dominio público hidráulico.

7.a. Presas que igualen o superen la altura de 10 metros hasta la coronación o la capacidad de embalse de 100.000 metros cúbicos.

7.b. Otras instalaciones destinadas a retener el agua o a almacenarla permanentemente cuando el volumen de agua almacenada sea igual o superior a 10 hectómetros cúbicos.

7.c. Recrecimiento de presas cuando supongan un aumento de la superficie máxima de la lámina de agua de un 25% o superior, o bien dicha superficie sea igual o superior a 5 hectáreas.

7.d. Aprovechamientos de aguas subterráneas o recarga artificial de acuíferos cuya descarga natural suponga, al menos, el 50% de los caudales de estiaje de los cursos fluviales de su influencia o que tengan relación directa con el mantenimiento de la lámina de agua de las zonas húmedas conspicuas o del nivel piezométrico subsuperficial de los criptohumedales, y siempre que supere alguno de los siguientes umbrales:

1º. Si el volumen anual de extracción supera el 25% de la recarga anual del acuífero.

2º. Si el volumen de agua ya extraído supera el 50% de la recarga anual del acuífero y el nuevo aprovechamiento supera un volumen anual de, al menos, el 10% de dicha recarga.

3º. Si la recarga artificial supera el 50% de la recarga natural anual del acuífero.

7.e. Cualquier aprovechamiento de aguas subterráneas o recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 10 hectómetros cúbicos.

7.f. Trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando el volumen de agua trasvasada sea superior a 10 millones de metros cúbicos al año, excluidos los trasvases de agua potable por tubería.

7.g. Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces que supongan la actuación en una longitud igual o superior a 250 metros, contados de forma continua o discontinua, excluidos los tramos de cauce de zonas urbanas, de zonas urbanizadas, y los tramos encauzados existentes.

7.h. Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad igual o superior a 100.000 habitantes-equivalentes, tal como se define en el punto 6 del artículo 2 de la Directiva 91/271/CEE.

7.i. Aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica; la evaluación se hará extensiva a las obras de instalaciones y estructuras necesarias para la detracción, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y devolución de agua, así como a las infraestructuras de urbanización y caminos de acceso.

Grupo D8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.

8.a. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a eliminar definitivamente residuos radiactivos. A los efectos de la presente ley, se entenderá por almacenamiento permanente de residuos radiactivos, cualquiera que sea su duración temporal, aquel que esté específicamente concebido para dicha actividad y que se halle fuera del ámbito de la instalación nuclear o radiactiva que produce dichos residuos.

8.b. Instalaciones industriales fijas para la incineración de residuos peligrosos, así como para la eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad, tratamiento químico o cualquier otro tratamiento similar en cuanto a la posible emisión de contaminantes.

8.c. Instalaciones industriales fijas para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites usados, de una capacidad de más de 10 toneladas de residuos admitidos por día.

8.d. Instalaciones industriales fijas para la incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos residuos mediante tratamiento químico o cualquier otro tratamiento similar en cuanto a la posible emisión de contaminantes, con una capacidad igual o superior a 50 toneladas de residuos admitidos por día.

8.e. Vertederos de residuos no peligrosos, excluidos los residuos inertes, que se originen en operaciones de gestión de residuos domésticos o de residuos industriales. Vertederos de otros residuos no peligrosos o de residuos inertes de cualquier clase,

que reciban 10 toneladas al día o más, o que tengan una capacidad total de 25.000 toneladas o más.

8.f. Ampliaciones de vertederos de residuos no peligrosos, excluidos los residuos inertes, que se originen en operaciones de gestión de residuos domésticos o de residuos industriales, cuando supongan un aumento en la cantidad de residuos que se puedan admitir de 10 toneladas al día o más, o de un total de 25.000 toneladas.

Grupo D9. Otros proyectos.

9.a. Pistas y circuitos permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados que se desarrollen en el exterior con una superficie igual o superior a 1 hectárea.

9.b. Parques temáticos con una superficie igual o superior a 5 hectáreas.

9.c. Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 50 hectáreas siempre que implique la eliminación de la cubierta arbustiva o arbórea en una superficie igual o superior a 1 hectárea, medida de forma continua o discontinua, o bien, en cualquier caso, si el cambio de uso del suelo afecta a una superficie igual o superior a 100 hectáreas.

A efectos de la presente ley, se entenderá por cambio de uso del suelo la transformación de cualquier uso de suelo rural entre sí (agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización de los recursos naturales) o la transformación del uso de suelo rural en suelo urbanizable.

9.d. Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico y emplazamientos de almacenamiento, de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la captura total anual de CO2 sea igual o superior a 1,5 Mt.

Grupo D10. Proyectos en espacios protegidos

En este apartado se recogen umbrales y especificaciones para los proyectos que se desarrollen en espacios protegidos o con algún régimen de protección, recogidos en el artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, y en

los artículos 30, 42 y 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

10.a. Instalaciones de vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el Grupo 8 de este Anexo II.D, así como de residuos inertes o materiales de extracción de origen fluvial, terrestre o marino que ocupen una superficie igual o mayor a 1 hectárea.

10.b. Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a la explotación agrícola o aprovechamiento forestal maderero que impliquen la ocupación de una superficie igual o mayor 10 hectáreas.

10.c. Proyectos de transformación en regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie igual o mayor a 10 hectáreas.

10.d. Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea igual o superior a 20.000 metros cúbicos anuales, y dragados marinos cuando el volumen extraído sea igual o superior a 20.000 metros cúbicos anuales.

10.e. Tuberías para el transporte de productos químicos y para el transporte de gas y petróleo, con un diámetro igual o superior a 800 mm y una longitud igual o superior a 10 km y tuberías para el transporte de flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas.

10.f. Líneas para la transmisión de energía eléctrica con una longitud igual o superior a 3 km, excluidas las que atraviesen zonas urbanizadas.

10.g. Parques eólicos que tengan 5 o más aerogeneradores con una potencia total igual o superior a 6 MW.

10.h. Aeropuertos y sus ampliaciones, no recogidos en el Grupo 6 de este Anexo II.D.

10.i Proyectos que requieran la urbanización del suelo para polígonos industriales, usos residenciales, centros comerciales y aparcamientos, que ocupen una superficie igual o superior a 1 hectárea.

10.j. Instalaciones hoteleras con capacidad de al menos 30 plazas, en suelo no urbanizable.

10.k. Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.

10.l. Parques temáticos con una superficie igual o superior a 1 hectárea.

10.m. Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro igual o mayor de 800 mm y una longitud igual o superior a 10 km.

10.n. Concentraciones parcelarias que conlleven cambio de uso del suelo cuando suponga una alteración sustancial de la cubierta vegetal.

10.o. Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen una superficie de más de 10 hectáreas.

Anexo II E. Proyectos que deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

Con exclusión de todos los proyectos recogidos en el Anexo II.D, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los siguientes proyectos:

1. Los proyectos que se encuentren en alguno de los supuestos recogidos en los Grupos que forman parte de este Anexo II.E, así como los proyectos que, encontrándose fraccionados, alcancen los umbrales recogidos en dichos apartados, mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados individualmente.

2. Los proyectos de este Anexo II.E que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos; los proyectos similares del Anexo II.D cuya utilización esté prevista para un plazo inferior a dos años.

3. Otros proyectos cuando, de forma directa o indirecta, solos o en combinación con otros planes, programas o proyectos, puedan afectar de forma apreciable a alguno de los espacios protegidos o que gocen de un régimen de protección, recogidos en el artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, y en los artículos 30, 42 y 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

4. Cualquier modificación de un proyecto, ya autorizado, aprobado, ejecutado, o en proceso de ejecución, cuando, por sí sola o por acumulación con otras modificaciones del mismo proyecto, alcance los umbrales recogidos en alguno de los Grupos de este Anexo II.E o cuando suponga:

1º. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.

2º. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.

3º. Un incremento significativo en la generación de residuos.

4º. Un incremento significativo en la utilización de los recursos naturales.

5º. Una afección a espacios protegidos o que gocen de un régimen de protección, recogidos en el artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, y en los artículos 30, 42 y 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

6º. Una afección significativa al patrimonio cultural.

Grupo E1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería

1.a. Proyectos para destinar áreas naturales, seminaturales o incultas a la explotación agrícola, cuya superficie sea igual o superior a 10 hectáreas.

1.b. Proyectos de concentración parcelaria cuando afecten a una superficie mayor de 100 hectáreas.

1.c. Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que afecten a una superficie igual o superior a 50 hectáreas y talas de masas forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo.

1.d. Los siguientes proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura:

1.º Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie igual o superior a 100 hectáreas.

2.º Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie igual o superior a 10 hectáreas.

A efectos de esta ley, se entenderá por consolidación de regadíos las acciones que afectan a regadíos infradotados de agua, bien por falta de agua, bien por pérdidas excesivas en las conducciones, y que tienen como fin completar las necesidades de agua de los cultivos existentes. Se consideran acciones de mejora de regadíos las que afectan a la superficie regada suficientemente dotada de agua, sobre la que se prevén acciones tendentes al ahorro de agua o mejoras socioeconómicas de las explotaciones.

1.e. Instalaciones para la acuicultura intensiva que tengan una capacidad de producción igual o superior a 50 toneladas al año.

1.f. Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas que igualen o superen la capacidad equivalente a 150 UGM, de acuerdo con la tabla de equivalencias recogida en el Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas.

Grupo E2. Industrias de productos alimenticios.

2.a. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales, confituras y almíbares, para la fabricación de cerveza y malta, de féculas, de harina de pescado y de aceite de pescado, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

1º. Que esté situada fuera de polígonos industriales.

2º. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.

3º. Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.

2.b. Instalaciones industriales para el envasado y enlatado de productos animales y vegetales en las que se de alguno de los siguientes casos:

1º. Cuando la materia prima sea animal, exceptuada la leche, y tengan una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día de productos acabados (valores medios trimestrales).

2º. Cuando la materia prima sea vegetal y tengan una capacidad de producción superior a 300 toneladas por día de productos acabados (valores medios trimestrales).

3º. Cuando se empleen tanto materia prima animal como vegetal y tengan una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día de productos acabados (valores medios trimestrales).

Valor medio trimestral: teniendo en cuenta los días de producción efectiva, se hará la media de 90 días consecutivos de máxima producción.

2.c. Instalaciones industriales para la fabricación de productos lácteos, siempre que la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 toneladas por día (media de los valores diarios, a lo largo de un año natural).

2.d. Instalaciones para el sacrificio, despiece o descuartizamiento de animales con una capacidad de producción de canales igual o superior a 50 toneladas por día.

2.e. Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a las 300 toneladas.

Grupo E3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales.

3.a. Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad o la estratigrafía de los suelos y subsuelo, en particular:

1º. Perforaciones geotérmicas a una profundidad igual o mayor a 500 metros.

2º. Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares.

3º. Perforaciones para el abastecimiento de agua a una profundidad igual o mayor a 120 metros

4º. Perforaciones petrolíferas o gasísticas de exploración o investigación.

3.b. Instalaciones en el exterior y en el interior para la gasificación del carbón y pizarras bituminosas.

3.c. Exploración mediante sísmica marina.

3.d. Extracción de materiales mediante dragados marinos excepto cuando el objeto del proyecto sea mantener las condiciones hidrodinámicas o de navegabilidad.

3.e. Dragados fluviales y en estuarios cuando el volumen del producto extraído sea superior a 100.000 metros cúbicos anuales.

3.f. Instalaciones para la captura de flujos de CO_2 con fines de almacenamiento geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones no incluidas en el Anexo II.D.

3.g. Ampliaciones de explotaciones existentes o que han tenido lugar en el pasado.

3.h. Instalaciones industriales en el exterior, complementarias de la actividad de extracción de carbón, petróleo, gas natural, minerales y pizarras bituminosas.

Grupo E4. Industria energética

4.a. Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos.

4.b. Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud igual o superior a 1 km,

salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas.

4.c. Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. Tanques con capacidad unitaria igual o superior a 200 toneladas.

4.d. Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.

4.e. Almacenamiento sobre el terreno de combustibles fósiles.

4.f. Parques eólicos. A los efectos de esta norma únicamente se considerarán parques eólicos las instalaciones definidas como tales en la normativa sectorial de la energía eólica.

4.g. Instalaciones de energía fotovoltaica que conlleven una ocupación de terreno igual o superior a 5 hectáreas. Se entenderán incluidas las instalaciones del mismo o de distintos titulares que, aun ocupando una superficie menor, sean colindantes con otra instalación fotovoltaica, siempre que la superficie total ocupada por las distintas instalaciones sea igual o superior a 5 hectáreas.

Quedan excluidas las instalaciones de energía fotovoltaica que se sitúen en terrenos urbanizados ya consolidados, o bien sobre edificios preexistentes.

4.h. Instalaciones para la fabricación industrial de briquetas de hulla y lignito.

4.i. Instalaciones para la producción de energía en medio marino.

Grupo E5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales

5.a. Instalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales.

5.b. Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves.

5.c. Instalaciones para la fabricación de material ferroviario.

5.d. Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para vehículos.

5.e. Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno.

Grupo E6. Industria química, petroquímica, textil y papelera

6.a. Instalaciones industriales para la producción de productos químicos y para el tratamiento de productos intermedios.

6.b. Instalaciones industriales para la producción de pesticidas y productos farmacéuticos, pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos.

6.c. Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos y químicos con una capacidad igual o superior a 100 metros cúbicos.

6.d. Instalaciones industriales para la fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.

Grupo E7. Proyectos de infraestructuras

7.a. Proyectos de zonas industriales.

7.b. Proyectos de zonas residenciales y comerciales fuera de áreas urbanizadas, que ocupen una superficie igual o mayor a 1 hectárea.

7.c. Construcción de variantes de población.

7.d. Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones ferroviarias de transbordo intermodal y de terminales ferroviarias intermodales de mercancías.

7.e. Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.

7.f. Aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.

7.g. Obras de alimentación artificial de playas que requieran la construcción de diques y espigones.

7.h. Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la zona de servicio de los puertos.

Grupo E8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua

8.a. Instalaciones destinadas a retener el agua con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos.

8.b. Cualquier aprovechamiento de aguas subterráneas o recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 1 hectómetro cúbico.

8.c. Trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando el volumen de agua trasvasada sea superior a 5 hectómetros cúbicos al año, excluidos los trasvases de agua potable por tubería y los trasvases para la reutilización directa de aguas depuradas.

8.d. Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad igual o superior a 10.000 habitantes-equivalentes, tal como se define en el punto 6 del artículo 2 de la Directiva 91/271/CEE.

8.e. Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional igual o superior a 3.000 metros cúbicos al día.

8.f. Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro igual o superior a 800 mm y una longitud igual o superior a 40 km.

Grupo E9. Otros proyectos

9.a. Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.

9.b. Instalaciones de eliminación o valorización de residuos si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.

9.c. Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de extracción de origen fluvial, terrestre o marino que ocupen una superficie igual o superior a 1 hectárea.

9.d. Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos desechados e instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos, si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.

Se exceptúan las actividades de almacenamiento de chatarra localizadas en puertos, relacionadas con actividades de estiba y desestiba

9.e. Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.

9.f. Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.

9.g. Pistas de esquí, remontes, teleféricos y construcciones asociadas.

9.h. Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con capacidad mínima de 500 huéspedes.

9.i. Parques temáticos.

9.j Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de suelo urbanizado y construcciones asociadas.

9.k. Campos de tiro con arma de fuego con una superficie igual o superior a 1 hectárea.

9.l. Campos de golf con una superficie igual o superior a 1 hectárea.

9. m. Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o mayor a 10 hectáreas.

Anexo II.F. Criterios para determinar cuándo un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de:

a) Las dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto.

b) La acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados.

c) La utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad.

d) La generación de residuos.

e) La contaminación y otras perturbaciones.

f) Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto en cuestión, incluidos los provocados por el cambio climático, de conformidad con los conocimientos científicos.

g) Los riesgos para la salud humana (por ejemplo, debido a la contaminación del agua, del aire, o la contaminación electromagnética).

2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad, en particular:

a) El uso presente y aprobado del suelo.

b) La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad).

c) La capacidad de absorción del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

1.º Humedales, zonas ribereñas, desembocaduras de ríos.

2.º Zonas costeras y medio marino.

3.º Áreas de montaña y de bosque.

4.º Reservas naturales y parques.

5.º Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; lugares Red Natura 2000.

6.º Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación aplicable, y pertinentes para el proyecto, o en las que se considere que se ha producido un incumplimiento de dichas normas de calidad medioambientales.

7.º Áreas de gran densidad demográfica.

8.º Paisajes y lugares con significación histórica, cultural y/o arqueológica.

9.º Áreas con potencial afección al patrimonio cultural.

10.º Masas de agua superficiales y subterráneas contempladas en la planificación hidrológica y sus respectivos objetivos ambientales.

3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos de los proyectos en el medio ambiente deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los apartados 1 y 2, y teniendo presente el impacto del proyecto sobre los factores señalados en el artículo 45, apartado 1.e de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en particular:

a) La magnitud y el alcance espacial del impacto (por ejemplo, área geográfica y tamaño de la población que pueda verse afectada).

b) La naturaleza del impacto.

c) El carácter transfronterizo del impacto.

d) La intensidad y complejidad del impacto.

e) La probabilidad del impacto.

f) El inicio previsto y la duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.

g) La acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados.

h) La posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz.

Anexo II.G. Definiciones a efectos de la evaluación ambiental.

A efectos de lo dispuesto en la presente Ley en materia de evaluación ambiental, se entenderá por:

a) Administraciones públicas afectadas: aquellas administraciones públicas que ostentan competencias sobre materias tales como la salud humana, la biodiversidad, geodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, aire, ruido, paisaje, patrimonio cultural y otros aspectos de la calidad del medio ambiente que puedan ser afectados por la ejecución del plan, programa o proyecto sometido a evaluación ambiental.

b) Declaración ambiental estratégica: informe preceptivo y vinculante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica ordinaria y que se pronuncia a efectos de evaluar los aspectos ambientales y de establecer las condiciones que deben incorporarse a un plan o programa en orden a garantizar la protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

c) Declaración de impacto ambiental: informe preceptivo y vinculante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación, y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.

d) Documento de alcance: pronunciamiento del órgano ambiental que tiene por objeto determinar la amplitud de la evaluación ambiental, así como la especificación y el grado de detalle del estudio ambiental estratégico y del estudio de impacto ambiental.

e) Estudio ambiental estratégico: documento técnico en el que se identifican, describen y analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación de un plan o programa, se analizan las alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, y se determinan las condiciones que deberán incorporarse al plan o programa con el fin de prevenir, corregir o, en su caso, compensar, los efectos adversos sobre el medio ambiente, así como las necesarias para el seguimiento ambiental.

f) Estudio de impacto ambiental: documento en el que se identifican, describen y analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de un proyecto, se analizan las alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables y se determinan las medidas necesarias para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los efectos adversos sobre el medio ambiente, así como las necesarias para el seguimiento ambiental.

g) Evaluación ambiental: proceso a través del cual se analizan los posibles efectos significativos de los planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente, con carácter previo a su adopción, aprobación o autorización, y se establecen medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias, así como medidas de vigilancia y seguimiento ambiental, todo ello en orden a la protección del medio ambiente.

h) Informe ambiental estratégico: informe preceptivo y vinculante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica simplificada y que se pronuncia sobre la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan o programa.

i) Informe de impacto ambiental: informe preceptivo y vinculante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada y que se pronuncia sobre la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del proyecto.

j) Medidas preventivas o protectoras: medidas propuestas inicialmente por el promotor del plan, programa o proyecto e impuestas finalmente por el órgano ambiental en orden, en orden a evitar efectos significativos sobre el medio ambiente.

k) Medidas correctoras: medidas propuestas inicialmente por el promotor del plan, programa o proyecto e impuestas finalmente por el órgano ambiental, en orden a disminuir la magnitud o la extensión de los efectos sobre el medio ambiente, de forma que éstos dejen de ser significativos a medio o largo plazo.

l) Medidas compensatorias: medidas excepcionales, propuestas inicialmente por el promotor del plan, programa o proyecto e impuestas finalmente por el órgano

ambiental, en orden a compensar los efectos significativos sobre el medio ambiente que no puedan evitarse o corregirse (impactos residuales).

m) Medidas compensatorias Red Natura 2000: medidas específicas reguladas en el artículo 46.5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, en orden a garantizar que la coherencia global de la Red Natura 2000 quede protegida.

n) Modificaciones menores de los planes y programas: cambios en las previsiones de planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales del ámbito de actuación, de las estrategias, directrices y propuestas, o de su cronología, que pueden causar efectos significativos sobre el medio ambiente con una probabilidad indeterminada.

No se considerarán modificaciones menores las que constituyan el marco para la autorización en el futuro de proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria, ni tampoco las que puedan afectar de forma apreciable a alguno de los espacios protegidos, o que gocen de un régimen de protección, recogidos en el artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, y en los artículos 30, 42 y 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

o) Órgano ambiental: órgano de la Administración pública competente para la emisión de las declaraciones e informes con los que concluyen los procedimientos de evaluación ambiental, para la determinación del alcance de las evaluaciones ambientales, para la exención de dicho pronunciamiento y para establecer la vigencia de las declaraciones e informes ambientales.

p) Órgano promotor: órgano de la Administración pública competente para iniciar el procedimiento de formulación y/o aprobación de un plan o programa.

q) Órgano sustantivo: órgano de la Administración pública que ostenta la competencia para adoptar o aprobar definitivamente un plan o programa, para autorizar o aprobar un proyecto, o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa.

Cuando un proyecto se vea afectado por diversos conceptos que precisen autorización, aprobación o, en su caso, control de la actividad y que se hubieren de otorgar o ejercer por distintos órganos de la Administración pública, se considerará órgano sustantivo aquel que ostente las competencias sobre la obra o actividad que motiva el sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, con prioridad sobre los órganos que ostentan competencias sobre actividades instrumentales o complementarias respecto a aquellas.

r) Planes y programas: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos.

Se considerará que un plan o programa es el marco para la autorización en el futuro de proyectos cuando contenga criterios o condicionantes con respecto al tipo, a la ubicación, a las dimensiones o al funcionamiento de los proyectos mediante los cuales se prevea su ejecución.

A efectos de la evaluación ambiental estratégica, no se considerarán planes o programas las disposiciones de carácter general que únicamente propongan o desarrollen normas de protección del medio ambiente.

s) Procedimiento sustantivo: procedimiento administrativo que culmina con el pronunciamiento del órgano sustantivo en orden a la adopción o aprobación definitiva de un plan o programa, o para la autorización o aprobación de un proyecto, o bien, procedimiento en el que deben sustanciarse los trámites de declaración responsable o de comunicación previa.

t) Proyecto: cualquier actuación que consista en la ejecución o explotación de una obra, una construcción o una instalación, así como su desmantelamiento o demolición; o cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación o al aprovechamiento de los recursos naturales, incluidos el suelo, el subsuelo, las aguas y los seres vivos.

INGURUMEN ADMINISTRAZIOARI BURUZKO LEGEAREN PROIEKTUA

AURKIBIDEA

ZIOEN AZALPENA 7

LEHENENGO TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK 17

1. ARTIKULUA. XEDEA. 17

2. ARTIKULUA. DEFINIZIOAK. 18

3. ARTIKULUA. PRINTZIPIOAK. 22

4. ARTIKULUA. ONURA PUBLIKOA ETA INTERES SOZIALA. 23

5. ARTIKULUA. PERTSONEN ESKUBIDEAK 23

6. ARTIKULUA. PERTSONEN BETEBEHARRAK 24

BIGARREN TITULUA. INGURUMEN POLITIKAREN ESKUMENAK ETA KOORDINAZIOA 25

7. ARTIKULUA. INGURUMENAREN ARLOKO ESKUMENAK. 25

8. ARTIKULUA. ADMINISTRAZIO PUBLIKOEK ESKUMENAK EGIKARITZEA. 27

9. ARTIKULUA. INGURUMENEKO ESPARRU PROGRAMA. 27

10. ARTIKULUA. INGURUMENEKO AHOLKU BATZORDEA. 28

11. ARTIKULUA. OSAERA. 29

HIRUGARREN TITULUA. INGURUMEN GAIEI BURUZKO INFORMAZIOA, JENDEAREN PARTE-HARTZEA ETA AUZITEGIETARA JOTZEA 31

12. ARTIKULUA. INGURUMEN INFORMAZIOA. 31

13. ARTIKULUA. INGURUMEN INFORMAZIOAREN HEDAPENA. 31

14. ARTIKULUA. INGURUMEN INFORMAZIOA ESKATZEA. 33

15. ARTIKULUA. INGURUMENAREN ARLOKO PARTE-HARTZEA. 34

16. ARTIKULUA. AKZIO PUBLIKOA. 35

17. ARTIKULUA. ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA. 35

LAUGARREN TITULUA. INGURUMENEAN ERAGINA DUTEN JARDUEREN ANTOLAMENDUA. .. 36

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK. 36

18. ARTIKULUA. INGURUMENEAN ESKU HARTZEKO ERREGIMENAK. 36

19. ARTIKULUA. BAIMENDUTAKO JARDUERAK HASTEKO EPEAK. 38

20. ARTIKULUA. HELBURUAK. 38

21. ARTIKULUA. ALDEZ AURRETIKO KONTSULTAK. 39

22. ARTIKULUA. INGURUMENEAN ESKU HARTZEKO ERREGIMENEN ETA INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIOAREN ALDIBEREKOTASUNA. 39

23. ARTIKULUA. ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN BETEBEHARRAK. 41

24. ARTIKULUA. JARDUERA EDO INSTALAZIOEN TITULARREN BETEBEHARRAK. 42
25. ARTIKULUA. GAITASUN TEKNIKOA ETA ERANTZUKIZUNA. 43
26. ARTIKULUA. ISILPEKOTASUNA. 44
27. ARTIKULUA. JARDUERAK GAUZATZEKO ESKU HARTZEKO TITULUEN TRANSMISIOA. 44
28. ARTIKULUA. JARDUERA ETETEA ETA INSTALAZIOA IXTEA. 45
29. ARTIKULUA. JARDUEREN EDO INSTALAZIOEN ALDAKETA. 45
II. KAPITULUA. INGURUMEN BAIMENAK. 47
30. ARTIKULUA. INGURUMEN BAIMEN BATERATUA. 47
31. ARTIKULUA. INGURUMEN BAIMEN BAKARRA. 47
III. KAPITULUA. INGURUMEN BAIMEN BATERATUAREN ETA INGURUMEN BAIMEN BAKARRAREN XEDAPEN OROKORRAK 49
32. ARTIKULUA. UDALAREN HIRIGINTZA BATERAGARRITASUNAREN TXOSTENA 49
33. ARTIKULUA. ESKAERAREN EDUKIA. 49
34. ARTIKULUA. ZUZENTZEA. 52
35. ARTIKULUA. JENDAURREKO INFORMAZIOA. 52
36. ARTIKULUA. UDAL TXOSTENA INGURUMEN BAIMEN BATERATUAREN ETA INGURUMEN BAIMEN BAKARRAREN MENDEKO JARDUERETAN. 53
37. ARTIKULUA. ISURIEN ARLOKO ERAKUNDE ESKUDUNEN TXOSTENA. 53
38. ARTIKULUA. BESTE TXOSTEN BATZUK. 54
39. ARTIKULUA. EBAZPEN PROPOSAMENA ETA INTERESDUNAREN ENTZUNALDIA. 55
40. ARTIKULUA. EBAZPENA. 55
41. ARTIKULUA. INGURUMEN BAIMENEN ISURPENEN MUGAKO BALIOAK. 56
42. ARTIKULUA. INGURUMEN BAIMEN BATERATUAREN ETA INGURUMEN BAIMEN BAKARRAREN EDUKIA. 57
43. ARTIKULUA. BAIMENEN INDARRALDIA ETA BERRIKUSPENA. 60
44. ARTIKULUA. INGURUMEN BAIMEN BATERATUAK FUNTSEAN ALDATZEKO PROZEDURA. 62
45. ARTIKULUA. INGURUMEN BAIMEN BAKARRAK FUNTSEAN ALDATZEKO PROZEDURA. 62
46. ARTIKULUA. INGURUMEN BAIMEN BAKARRAK FUNTSEAN EZ ALDATZEKO PROZEDURA. 65
47. ARTIKULUA. FUNTZIONATZEN HASTEARI EDO IREKITZEARI BURUZKO JAKINARAZPENA. 65
IV. KAPITULUA. JARDUERA SAILKATUAREN LIZENTZIA 67
48. ARTIKULUA. JARDUERA SAILKATUAREN LIZENTZIA. 67
49. ARTIKULUA. JARDUERA SAILKATUAREN LIZENTZIA ESKATZEA. 67
50. ARTIKULUA. JENDAURREAN JARTZEA ETA TXOSTENAK EGITEA. 68
51. ARTIKULUA. NEURRI BABESLEAK ETA ZUZENTZAILEAK EZARTZEKO TXOSTENA. 69
52. ARTIKULUA. JARDUERA LIZENTZIA EMATEA. 70

53. ARTIKULUA. JARDUERA SAILKATUAREN HASIERARI EDO IREKIERARI BURUZKO JAKINARAZPENA. 70
54. ARTIKULUA. JARDUERA SAILKATUAREN LIZENTZIA BERRIKUSTEA. 72
V. KAPITULUA. JARDUERA SAILKATUAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENA. 73
55. ARTIKULUA. JARDUERA SAILKATUAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENA. 73
56. ARTIKULUA. JARDUERA SAILKATUAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENA AURKEZTEA. 73
57. ARTIKULUA. JARDUERA SAILKATUAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENAREN EDUKIA ETA ONDORIOAK. 74
58. ARTIKULUA. JARDUERA ALDATZEA. 75
BOSGARREN TITULUA. INGURUMEN EBALUAZIOA. 76
I. KAPITULUA. INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOAREN ETA INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIOAREN XEDAPEN OROKORRAK. 76
59. ARTIKULUA. INGURUMEN EBALUAZIOA. 76
60. ARTIKULUA. INGURUMEN EBALUAZIOKO PROZEDURAK. 77
61. ARTIKULUA. ESKUMENAK. 78
62. ARTIKULUA. EBALUATU GABEKO PLANEN, PROGRAMEN ETA PROIEKTUEN DEUSEZTASUNA. 79
63. ARTIKULUA. GAITASUN TEKNIKOA ETA ERANTZUKIZUNA. 79
64. ARTIKULUA. ISILPEKOTASUNA. 80
65. ARTIKULUA. INGURUMEN EBALUAZIOTIK SALBUETSITAKO PLANAK, PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK. ... 80
66. ARTIKULUA. INGURUMEN EBALUAZIOTIK SALBUETSI DAITEZKEEN PROIEKTUAK, KASUZ KASU. 81
67. ARTIKULUA. INGURUMEN EBALUAZIO ARRUNTEN IRISMENAREN ZEHAZTAPENA. 82
68. ARTIKULUA. PUBLIZITATEA 83
69. ARTIKULUA. ERKIDEGO ARTEKO ETA MUGAZ GAINDIKO HARREMANAK. 83
70. ARTIKULUA. INGURUMEN EBALUAZIOKO PROZEDURETAN INTERESA DUTEN PERTSONA JURIDIKOEN ERREGISTROA. 84
II. KAPITULUA. PLAN ETA PROGRAMEN INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOA 86
71. ARTIKULUA. INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOAREN ESPARRUA. 86
72. ARTIKULUA. INFORMAZIO PUBLIKOA ETA KONTSULTAK. 86
73. ARTIKULUA. INGURUMEN ADIERAZPEN ESTRATEGIKOAREN IZAERA ETA EDUKIA. 87
74. ARTIKULUA. INGURUMEN TXOSTEN ESTRATEGIKOAREN IZAERA ETA EDUKIA. 87
III. KAPITULUA. PROIEKTUEN INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIOA 89
75. ARTIKULUA. INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIOAREN ESPARRUA. 89
76. ARTIKULUA. INFORMAZIO PUBLIKOA ETA KONTSULTAK. 89
77. ARTIKULUA. INGURUMEN INPAKTUAREN ADIERAZPENAREN IZAERA ETA EDUKIA. 89
78. ARTIKULUA. INGURUMEN INPAKTUAREN TXOSTENAREN IZAERA ETA EDUKIA. 90
SEIGARREN TITULUA. INGURUMENAREN HOBEKUNTZA BULTZATZEKO TRESNAK 92

79. ARTIKULUA. INGURUMEN AKORDIOAK. 92

80. ARTIKULUA. PARTE-HARTZEAREN SUSTAPENA INGURUMEN KUDEAKETAKO ETA IKUSKARITZAKO SISTEMA KOMUNITARIOAN (EMAS) 92

81. ARTIKULUA. EUROPAR BATASUNAREN ETIKETA EKOLOGIKOAREN ERABILERA SUSTATZEA. 93

82. ARTIKULUA. INGURUMEN AZTARNA. 94

83. ARTIKULUA. EROSKETA PUBLIKO BERDEA. 94

84. ARTIKULUA. EKOBERRIKUNTZA. 96

85. ARTIKULUA. INGURUMEN FISKALITATEA. 96

86. ARTIKULUA. IKERKUNTZA, HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA. 97

87. ARTIKULUA. INGURUMEN BOLUNTARIOAK. 98

88. ARTIKULUA. PUBLIKOKI ESKERTZEKO NEURRIAK. 99

ZAZPIGARREN TITULUA. INGURUMEN IKUSKARITZA ETA KONTROLA. 99

I. KAPITULUA. INGURUMENAREN ALORREKO LANKIDETZA ENTITATEAK. 99

89. ARTIKULUA. INGURUMENAREN ALORREKO LANKIDETZA ENTITATEAK. 100

II. KAPITULUA. INGURUMENAREN ALORREKO IKUSKARITZA. 102

90. ARTIKULUA. INGURUMENAREN ALORREKO IKUSKARITZAREN XEDEA ETA IKUSKATZEKO ESKUMENAK. . 102

91. ARTIKULUA. IKUSKAPEN JARDUERARI MEN EGITEKO BETEBEHARRA. 102

92. ARTIKULUA. INGURUMENAREN ALORREKO IKUSKARITZA JARDUERA EGIKARITZEA. 103

93. ARTIKULUA. INGURUMENAREN ALORREKO IKUSKARITZAREN AKTA ETA TXOSTENA. 103

94. INGURUMENAREN ALORREKO IKUSKARITZAREN PLANGINTZA. 104

95. INGURUMENAREN ALORREKO IKUSKARITZA LANEN PUBLIZITATEA. 106

ZORTZIGARREN TITULUA. INGURUMENAREN ALORREKO LEGEZKOTASUNAREN BERREZARPENA ETA INGURUMEN KALTEENGATIKO ERANTZUKIZUNA. 107

I. KAPITULUA. INGURUMENAREN ALORREKO LEGEZKOTASUNAREN BERREZARPENA 107

96. ARTIKULUA. BAIMENIK, LIZENTZIARIK EDO AURRETIAZKO JAKINARAZPENIK GABEKO JARDUERAK. ... 107

97. ARTIKULUA. EZ BETETZEAK EDO AKATSAK ZUZENTZEA. 108

98. ARTIKULUA. JARDUERAK BERTAN BEHERA UZTEA. 108

99. ARTIKULUA. INGURUMENAREN ALORREKO LEGEZKOTASUNA BERREZARTZEKO PROZEDURA. 109

100. ARTIKULUA. INGURUMENAREN ALORREKO LEGEZKOTASUNA BERREZARTZEKO NEURRIEN DERRIGORREZKO APLIKAZIOA. 111

II. KAPITULUA. INGURUMEN KALTE NABARMENENGATIKO ERANTZUKIZUNA 112

101. ARTIKULUA. INGURUMEN KALTE NABARMENEN ETA BEREHALAKO MEHATXUAREN AURREKO ERANTZUKIZUNA. 112

102. ARTIKULUA. ESKUMENEN ERREGIMENA. 113

BEDERATZIGARREN TITULUA. INGURUMENAREN ALORREKO DIZIPLINA 114

103. ARTIKULUA. ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK. 114
104. ARTIKULUA. ARAU-HAUSTE MOTAK. 114
105. ARTIKULUA. ARAU-HAUSTEEN PRESKRIPZIOA. 117
106. ARTIKULUA. ZEHAPENAK. 117
107. ARTIKULUA. ZEHAPENEN MAILAKETA. 119
108. ARTIKULUA. KONFISKAZIOAK. 120
109. ARTIKULUA. ZEHAPENEN PRESKRIPZIOA. 120
110. ARTIKULUA. ESKUMENAK. 120
111. ARTIKULUA. BEHIN-BEHINEKO NEURRIAK. 121
112. ARTIKULUA. LEHENGORATZEKO OBLIGAZIOA ETA KALTE-ORDAINA. 122
113. ARTIKULUA. ISUN HERTSATZAILEAK ETA EGIKARITZE SUBSIDIARIOA. 122
114. ARTIKULUA. KONTRATATZEKO ETA DIRULAGUNTZAK LORTZEKO DEBEKUA. 123
115. ARTIKULUA. ZEHAPEN PROZEDURA. 124
116. ARTIKULUA. PUBLIZITATEA. 124
117. ARTIKULUA. INGURUMENAREN ALORREKO ORDEZKO PRESTAZIOA. 125
118. ARTIKULUA. DIRUZKO ZEHAPENEN ERABILERA. 125
XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA. 127
LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA. ABIAN DIREN PROZEDURAK. 127
BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA. DAUDEN INSTALAZIOAK 127
XEDAPEN INDARGABETZAILEA. 129
LEHENENGO AZKEN XEDAPENA. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE KOMUNEN ETA FORU ORGANOEN ARTEKO HARREMANEI BURUZKO AZAROAREN 25EKO 27/1983 LEGEAREN 7. C) 6. ARTIKULUAREN ALDAKETA. 129
BIGARREN AZKEN XEDAPENA. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO JASANGARRITASUN ENERGETIKOARI BURUZKO OTSAILAREN 21EKO 4/2019 LEGEAREN 7.4 ARTIKULUA ALDATZEA. 130
HIRUGARREN AZKEN XEDAPENA. UZTAILAREN 20KO 1/2001 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUAREN BITARTEZ ONARTUTAKO UREN LEGEAREN TESTU BATEGINEAN FINKATUTAKO ARAUBIDEARI EGOKITZEA. 130
LAUGARREN AZKEN XEDAPENA. UREN EKAINAREN 23KO 1/2006 LEGEAN FINKATUTAKO ARAUBIDEARI EGOKITZEA. 131
BOSGARREN AZKEN XEDAPENA. ERANSKINAK EGOKITZEKO ARAUDIA BIDERATZEA. 132
SEIGARREN AZKEN XEDAPENA. INDARREAN HASTEA. 132
I.A ERANSKINA. INGURUMEN BAIMEN BATERATUA BEHAR DUTEN INSTALAZIOAK. 133
I.B ERANSKINA. INGURUMEN BAIMEN BAKARRA BEHAR DUTEN JARDUERAK ETA INSTALAZIOAK. 144
I.C ERANSKINA. JARDUERA SAILKATUAREN LIZENTZIA BEHAR DUTEN JARDUERAK ETA INSTALAZIOAK. 145

I.D ERANSKINA. JARDUERA SAILKATUAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENA BEHAR DUTEN JARDUERAK ETA INSTALAZIOAK. 148

I.E ERANSKINA. JARDUERA EDO INSTALAZIO BATEN ALDAKETA FUNTSEZKOTZAT HARTZEKO IRIZPIDEAK. 151

II.A ERANSKINA. INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKO ARRUNTAREN PROZEDURA BETE BEHAR DUTEN PLANAK ETA PROGRAMAK. 153

II.B ERANSKINA. INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKO SINPLIFIKATUAREN PROZEDURA BETE BEHAR DUTEN PLANAK ETA PROGRAMAK 154

II.C ERANSKINA. INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIO SINPLIFIKATUA BEHAR DUEN PLAN EDO PROIEKTU BATEK INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIO ARRUNTA NOIZ BEHAR DUEN ERABAKITZEKO IRIZPIDEAK. 156

II.D ERANSKINA. INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIO ARRUNTA BEHAR DUTEN PROIEKTUAK. 158

II.G ERANSKINA. DEFINIZIOAK INGURUMEN EBALUAZIOAREN ONDORIOETARAKO. 187

ZIOEN AZALPENA

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legea onartzeak Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen politika egikaritzeko araudi esparru bateratua finkatzea ekarri zuen. Lege hori aitzindaria izan zen une hartan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen politikaren oinarrizko zutabeak finkatu zituen, hainbat arlotan; esaterako, ingurumen ebaluazioa, hondakinen kudeaketa eta kutsaduraren kontrola, besteak beste. Hala ere, lege hori onetsi zenetik, Euskal Autonomia Erkidegoko lege eta erregelamendu espezifikoek edo Estatuko oinarrizko araudiak arautu izan dituzte arlo horietako batzuk. Hori dela eta, lege honek ez ditu arautzen aipatu dugun Ingurumena Babesteko Lege Orokorrak arautzen dituen arlo sektorial guztiak.

Azken urteotan ingurumen araudiaren nortasun zeinuetako bat izan da, hain zuzen, hainbat arlo eta mailatatik aldarrikatutako arauak hedatzearena. Era horretan, azaleratzen ari diren eta gizarteak eskatzen dituen premietara egokitzen ari da.

Azaldutakoa azalduta, Lege honek esparru juridiko bat xedatzen du, zeinek ingurumen babes handia bermatuko duen, gaur egungo euskal gizarte eta

ekonomia egoerara egokituta. Horregatik, arauak azken araudi garapenak jasotzen ditu, eta administrazioan esku hartzeko teknika berriak dakartza, administrazio prozedura sinplifikatze eta arintze aldera, eta ingurumenaren babes eraginkorra lortzeko asmoz, jarduera ekonomikoak gauzatzen diren ingurunearekin bateragarri eginez.

Lege honek pertsona fisiko zein juridiko publiko zein pribatuen eskubideak eta betebeharrak xedatzen ditu, herritarrek euren garapenerako ingurumen egokiaz gozatzeko duten eskubidea nabarmenduz. Era berean, ekonomia jasangarria sustatzen du, baliabide naturalen kudeaketa eraginkorraren bitartez, klima-aldaketaren eragina mugatuko duen gizarte hipokarboniko bat sustatzearren. Helburu horiek erdiesteko, ezinbestekoa da hainbat ekintza gauzatzea, segurtasun juridikoa eta ahalik eta eraginkortasun handiena emango dien araudi oinarri irmoarekin.

Nahi horretan oinarrituta, Legeak alderdi publikoaren eta pribatuaren arteko erantzukidetasuna bultzatu nahi du ingurumenaren babesari dagokionez. Izan ere, euskal gizarteak dituen ingurumen erronketarako irtenbideak bilatzeak berarekin dakar, halabeharrez, administrazio publikoen, sektore ekonomikoaren eta herritarren artean baterako jardunak egikaritzea, lortu nahi diren helburu komunak kontuan hartuta; esaterako, bizi kalitatea eta ongizate orokorra hobetzeko aukera bat. Hala, ekoizpen eta kontsumo eredua nabarmen aldatu beharko da, Euskal Autonomia Erkidegoa Europan erreferente bihur dadin.

Aukera horietako batzuk, hain justu, berrikuntzari, ekoeraginkortasunari eta erosketa publiko berdeari buruzkoak izango dira. Eta jardun horiek guztiak, hutsik egin gabe, honako hauetan oinarrituta egongo dira: etengabeko hobekuntzan, eragile sozioekonomikoekiko elkarrizketan, informazioa jasotzeko eskubidean eta zerga sistema ekologiko baten garapenean, jarduerak gauzatzean ingurumen jardun hobeak sustatuko dituena.

Arestian aipatu bezalaxe, Europar Batasuneko erakundeek, azken bi hamarkadetan, gero eta zuzentarau, araudi eta eduki tekniko handiko bestelako ekitaldi gehiago onartu dituzte, eta horrek dakar ingurumena babesteko eskakizun eta estandar handiagoak onartzea. Gertakari horren bertsio negatiboak, berriz, baimentze prozedura konplexu ugari sortzea ere ekarri du, eta hori oztopoa izan liteke ekonomia jarduera batzuen garapenerako, ingurumena babesteko helburuak hainbeste ez babestea ekar bailezake, araudi horrek eragingo dien jarduerei dagokienez.

Lege honen edukia, hain zuzen, Europako Batzordeak adierazitako “araudi adimendun” kontzeptuaren premisapean egituratzen da. Helburua da Estatu kideek arau batzuk onar ditzaten sustatzea, honako hauek lortzeko: herritarren rola indartzea, araudiak bizimodu sozioekonomiko orokorrean dituen eraginak aztertzea, eta administrazio lanak sinplifikatzeko joera sustatzea, prozedurak bateratuz eta beharrezkoak ez diren izapideak desagerraraziz. Horrek guztiak asko hobetuko du administrazio publikoen zeregina, eta hobetu egingo du, halaber, euskal jardueren garapena.

Horregatik guztiagatik, funtsezkoak dira Ingurumen Administrazioaren funtzionamendua arintzeko eta sinplifikatzeko Legeak diseinatutako neurriak, administrazioaren esku-hartzea murriztea eta sinplifikatzea baita helburua. Era horretan, ingurumenean eragina duten jardueretan esku hartzeko teknikak arautuko dituen sistema bat osatuko da, eta, hala, ingurumena eta herritarren osasuna babesteko interes orokorra gogobeteko da. Aldi berean, botere publikoen jardunean gardentasuna, eragingarritasuna, ekonomia eta eraginkortasuna bermatuko dira, elementu horiek funtsezkoak baitira administrazio egokia zer den erakusteko.

Ezinbestekoa da, halaber, ingurumenari buruzko ezagutza eta informazioa hobetzea. Herritar guztiek dute horretarako eskubidea, eta, horregatik, administrazio prozedura guztietan jendearen partaidetza bultzatu behar da. Izan ere, alderdi publikoaren eta pribatuaren arteko elkarreragin arinaren bidez eta soilik horren bidez lortuko da ingurumen ezagutza handiagoa izatea. Horrek

Euskal Autonomia Erkidegoko helburu komunak lortu ahal izatea ekarriko du, bai eta herritarren erantzukizun partekatua bultzatzea ere; hala, herritarrak eragile aktibo bihurtuko dira, ingurumenaren narriaduraren prebentzioan esku hartuko dute, eta haren defentsa eta lehengoratzea sustatuko dute.

Lege honek bere lege babesa dauka Autonomia Estatutuaren 11.1.a) artikuluan xedatutako eskumenean, ingurumen eta ekologia gaietan Estatuaren oinarrizko legedia egikaritzeko eta legez garatzeko. Legeak, hain zuzen, 116 artikulu ditu, 9 titulutan egituratuta.

I. Tituluak, xedapen orokorrei buruzkoak, Legearen helburua eta horrekin lortu nahi diren xedeak biltzen ditu. Hala, ingurumen babesaren araudi esparrua osatzen du Euskal Autonomia Erkidegoan, bai eta administrazio publikoen jardunbide lerroak finkatzen dituzten eta horien oinarrian dauden printzipioak, eta babes hori arautuko duten arauak interpretatzeko baliagarriak izango diren irizpideak ere. Gainera, titulu honetan pertsona publiko zein pribatuek ingurumenaz gozatzeko, hura babesteko, zaintzeko eta hobetzeko dituzten eskubideak eta betebeharrak adierazten dira.

II. Tituluak, bestalde, Autonomia Erkidegoko erakunde komunei eta foru zein toki administrazioei ingurumenaren arloan dagozkien eskumenak arautzen ditu. Eta Ingurumeneko Esparru Programa finkatzen du ingurumen politikaren koordinaziorako tresnatzat, non jasoko diren berorren indarraldian ingurumenaren kalitatea hobetzeko ildo estrategikoak eta konpromisoak. Era berean, otsailaren 27ko 3/1998 Legearen arabera sortutako Ingurumeneko Aholku Kontseiluaren osaera eta eginkizunak aldatu ditu, administrazio publikoen eta ingurumen politiken osaeran, kontsultan eta jarraipenean gizarte eta ekonomia interesak ordezkatzen dituzten sektoreen arteko lankidetzarako organo eta organo aholku emaile gisa eratuta. Legeak kendu egin du Euskadiko Ingurumen Batzordea, haren eginkizunak Kontseiluarenetan txertatuz.

III. Tituluak, informazioari, jendeak parte hartzeari eta ingurumen gaietan auzitegietara jotzeari buruzkoak, helburutzat dauka ingurumenarekin lotutako

administrazio publikoaren eta euskal herritarren arteko harremanean sistema berri bat diseinatzea, horiek ere ingurumen gaietako erabakiak har ditzaten, eta hainbat alderdi arautu daitezen; esaterako, ingurumen gaietako informazioa jasotzeko eskubidea eta informazioaren hedapena. Sistemak erakunde publiko zein pribatuek ingurumenari buruz sortutako informazio guztia bilduko du, kudeaketan, hedapenean eta erabakiak hartzean erabili ahal izateko. Eta hori ere arautu egingo da, ingurumen gaiekin lotutako informaziorako sarbidea modu zabalean bermatzeko, teknologikoki modu aurreratuan, administrazio elektroniko baten eskakizunekin bat etorrita.

IV. Tituluak, berriz, ingurumenean eragina duten jardueren antolamendua arautzen du, ingurumena babesteko araudi sektorialean aurreikusitako administrazio prozedurak sinplifikatzeko eta bateratzeko premisapean. Hala, bertan xedatzen diren baldintzak eta eskakizunak jasoko ditu, eta jardueren garapenerako oztopo juridiko eta administratiboak desagerraraziko ditu. Era horretan, administrazioan esku hartzeko sistema berri bat finkatuko da; horri esker, Legearen I. Eranskinean jasotako jarduera eta instalazioetarako, administrazio erabaki bakarreko prozedura bakarra egongo da, ingurumen eraginei aurrea hartzeko neurri guztiak bilduko dituena.

Hala, ingurumen baimen bateratuaren erregimen juridikoak xedatzen dira. Horren erregulazioak leial eusten dio kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuei buruzko Europako Araudiari, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak emandako ingurumen baimen berri bakarrari ere. Horietan, prozedura bakarrean txertatzen dira ingurumena babesten duen araudi sektorialean gaur egun sakabanatuta dauden baimenak eta txostenak. Gainera, jarduera sailkatuaren lizentziaren erregulazioa eta jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenaren erregulazioa ere jasotzen ditu, toki erakundeek kudeatuko dituztenak, aldaketa garrantzitsuren bat txertatuta.

Hala, funtzioak erakundeen artean modu orekatuan banatuko direla bermatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen eta Foru Organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legean,

bizitegietarako hiri lurrean finka daitezkeen jardueren kalifikazioarekin, neurri babesleen eta zuzentzaileen adierazpenarekin, ikuskaritzarekin eta zigorrekin lotuta organo horiei esleitutako eskumenak ordezkatu egingo dira neurri zuzentzaileak ezartzeko ahalmenekin, 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan, baita 10.000 biztanle edo gehiago dituzten udalerrietan ere, baldin eta dagokion udalak hala eskatzen badio eskumena duen foru-organoari.

Era berean, ingurumenean esku hartzeko hainbat prozeduraren izapideak arintzearren (betiere, interesa duen jendeak parte hartzeko izango duen bermea mugatu gabe), jarduera bat gauzatuko den tokiaren hurbileko bizilagunei jakinarazteko izapidea desagerraraziko da, eta dagokion Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, bai eta baimen edo lizentzia hori emateko eskumena duen organoaren egoitza elektronikoan eta udal ediktuetan ere.

Bide beretik, ingurumen baimen bateratuaren eta ingurumen baimen bakarraren prozeduretan txertatzen du legeak Estatuko Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoak kudeatutako arroen jabari publiko hidraulikoetara isuriak botatzeko baimena emateko prozedura. Nolanahi ere, hori txertatzeak ez du aldatzen uraren legediak aurreikusitako finantza eta ekonomia erregimena, ez eta administrazio horiei jabari publiko hidraulikoaren babesarekin lotuta dagozkien gainerako eskumenak ere. Zehazki, ez dira aldatuko zaintzarekin eta ikuskaritzarekin lotutako eskumenak, eta ezta zehatzeko ahala ere.

V. Tituluak, ingurumen ebaluazioari buruzkoak, Legearen II. Eranskinean jasotako planen, programen eta proiektuen ingurumen ebaluazioaren erregimena eguneratzen du, bere osaeran, onarpenean eta baimenean ingurumen ezaugarriak txertatzeko modua eraginkorra izan dadin. Horretarako, ingurumenari begira bideragarriak diren aukerak hautatu beharko dira, eta era guztietako neurriak finkatu, ingurumenean eragiten diren ondorio kaltegarri guztiei aurrea hartzeko, zuzentzeko eta, hala badagokio, konpentsatzeko. Era horretan arautzen dira planen eta programen ingurumen ebaluazio estrategiko arrunterako eta sinplifikaturako prozedurak. Planek, esaterako, haien eragin

garrantzitsuak zehazten laguntzen dute, eta hala badagokio, ingurumena eta baliabide naturalak behar bezala babesteko beharrezkoak diren baldintzak finkatuko dituzte. Programek, berriz, prozedura arruntaren eraginpean jartzea badagokion ala ez finkatuko dute, bai eta zer baldintzatan onartu behar den ere.

Bestalde, proiektuen ingurumen inpaktua ebaluatzeko bi prozedurak (arrunta eta sinplifikatua) honela arautzen dira: lehenengoaren kasuan, proiektu batek ingurumenean dituen eragin garrantzitsuenak balioesteko asmoz, eta, hala badagokio, berori egikaritzeko, ustiatzeko eta desegiteko baldintzak finkatzeko; bigarren kasuan, berriz, prozedura arruntaren eraginpean egon beharra ala ez ebaluatzeko, edo ingurumena eta baliabide naturalak babesteko beharrezkoak diren neurriak finkatzeko, proiektuen garapena ingurunea behar bezala zaintzearekin bateragarri eginez.

Ingurumen ebaluazioari buruzko araudian xedatutakoaren arabera kontsulta egin behar zaien pertsonen parte-hartze eraginkorra bermatze aldera, ingurumen ebaluaziorako prozeduretan interesa duten pertsonen erregistroa sortuko da. Erregistro hori Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren mendekoa izango da administratiboki.

VI. Tituluak, bestalde, ingurumenaren hobekuntza bultzatzeko tresnak aurreikusten ditu. Horien artean daude, besteak beste, ingurumen akordioak, Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistema (EMAS) eta Europar Batasuneko etiketa ekologikoa. Elementu horiek ingurumenaren zaintzan alderdi publikoaren zein pribatuaren arteko erantzukidetasuna ahalbidetzen dute, eta gai hori arautzen duen araudian finkatutako betebeharrak betetzen direla ziurtatuko dute. Hona hemen euskal gizarteak ingurumenaren zaintzan onartu beharreko erronka berriak eta tresnak: produktuen eta erakundeen bizi zikloaren azterketa, izan dezaketen ingurumen inpaktua neurtzeko eta hori murrizteko modua aztertzeko helburuarekin; erosketa publiko berdea, Legearen helburuak betetzeko oinarrizko mekanismo gisa, administrazio publikoei eskatuz erosketa mota hori sustatzeko eta balioan

jartzeko; produktuen eta prozesuen ekoberrikuntza, ingurumenak sortzen dituen merkatuko aukerei etekina ateratzeko; eta ingurumenaren zerga sistema bat finkatzea, izaera finalista duena, eta ingurumenaren sustapena eta hobekuntza bilatuko dituena. Era berean, erosketa publiko berdea helburuak betetzeko oinarrizkoa den mekanismo modura ageri da Legean eta hura sustatzeko eta garrantzia emateko agintzen die herri administrazioei. Zentzu horretan, eta obren eta hornikuntzen kontratuen kasurako, azpiprodukTuen, bigarren mailako lehengaien edo material birziklatuen erabilera kontratu horiek gauzatzeko baldintza modura ezartzea hartu da gogoan, mota horretako kontratuak baldintza horrekiko lotura zuzena baitute. Ikerketa, hezkuntza eta prestakuntza ere arauaren xedeak dira, ingurumenari buruzko ezagutzaren oinarria hobetzen hasiz, ingurumena hobetzea ekarriko duten jardunak, balioak eta portaerak herritarren artean eta erakunde guztien artean zabaltzeko bide gisa. Norabide berean, aurreikusten da herritarrek boluntariotza ekintzetan parte hartzea, ingurumen edukian oinarritutako interes orokorreko jarduerak egiteko, bai eta autonomia erkidegoko ingurumen balioak babesteko, zaintzeko eta zabaltzeko lagungarriak direnen aitorpenerako ekintzak ere.

VII. Tituluak, ostera, ingurumen kontrola arautzen du. Eta titulu horrek aurreikusten du, alde batetik, ingurumen lankidetzarako zer erakunderi eska diezaieketen administrazio publikoek jarduerak egiaztatzeko eta kontrolatzeko funtzioak gauzatzeko. Ezinbestekoa izango da funtzionamenduari, jarduera mailari eta jardunen irismenari buruzko araudia garatzea. Bestalde, Legearen eraginpean dauden jardueren ingurumen legezkotasuna bermatuko duen ingurumen ikuskaritzak ere erregulazio zehaztua izan beharko du hainbat alderdiri dagokienez. Esaterako, ingurumen kontrol, zaintza eta ikuskaritza lanak egingo dituzten langileei dagokienez (administrazio publikoen zerbitzura dabiltzan langileek zuzenean egin dezakete, edo, bestela, horiek eskatuta edo horien izenean, ingurumen lankidetzarako erakundeek); eta ingurumen ikuskaritzaren plangintzari dagokionez (Legeak adierazitako gutxieneko edukiarekin, aldian behin egingo diren eta ikuskaritza programatan zehaztuko diren planetan jaso beharko da plangintza hori, non txertatuko diren ingurumen

eragina duten jarduera mota bakoitzerako bisiten maiztasuna, arauak finkatzen dituen irizpideak eta arauz xeda daitezkeen beste batzuk aintzat hartzen dituzten ingurumen arriskuen ebaluazio sistematiko batean oinarrituta).

VIII. Tituluak ingurumen legezkotasuna eta ingurumen kalteengatiko erantzukizuna lehengoratzeko modua arautzen du. Hala, martxan diren jarduerak legeztatzeko hartu beharreko neurriak zehazten dira, baldin eta baimenik edo lizentziarik ez badute, aurretiazko jakinarazpen prozedurarako izapideak gauzatu ez badituzte, edo horiek izanagatik, funtzionamenduan gabeziak antzematen bazaizkie. Ingurumen legezkotasuna berrezartzeko prozedura (prozedura zigortzailetik kanpo dagoena) ere araututa dago Legean, hartu beharreko neurrien nahitaezko betearazpena barne. Ingurumen kalteengatiko erantzukizuna ere legean dago aurreikusita, kalte horiek eta kalteak izateko berehalako mehatxuak nabarmenak badira, horiei aurrea hartzeko, horiek saihesteko eta konpontzeko helburuarekin, ingurumen erantzukizunari buruzko araudian araututako moduan eta baldintzetan.

Azkenik, IX. Tituluak ingurumen diziplina arautzen du, eta arau-haustea dakarten gertakarien tipifikazioa biltzen du, honela sailkatuz: oso larriak, larriak eta arinak. Zigorren mailaketa arau-hauste mota bakoitzerako finkatuko da. Eta xedatzen da jartzen den zigorrak arau-haustearen larritasunari egokitutakoa izan beharko duela, legeak zehaztutako irizpideak aintzat hartuz. Diziplina erregimenaren baitan, halaber, arau-haustea dakarten gertakarien eraginez aldatutako egoerak lehengoratzeko eta administrazio publikoari eragindako kalteak ordaintzeko betebeharra dago aurreikusita. Arau-hausteen batzordearen pizgarria kentzeko neurri osagarri gisa, arau-hauste larriak edo oso larriak eginez gero, administrazio publikoarekin kontratatzeko debekua edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera galtzea xedatzen da, harik eta dagozkion neurri babesleak eta zuzentzaileak egikaritu arte, edo zigorraren zenbatekoa ordaindu arte. Era berean, xedatzen da arau hausleen erregistro bat sortzea, non jasoko diren ebazpen irmoa jaso duten pertsona publiko zein pribatu arau hausleen izenak. Erregistro honen helburu esklusiboa ezarritako

zehapenen inguruko gezurta ezinezko informazioa herri administrazioen eskura egotea da, balizko berrerortzeak egon diren baloratzeko edo zehazpen osagarriak ezarri eta haien jarraipena egiteko, kontratatzeko edo dirulaguntzak lortzeko debekua esate baterako. Ildo beretik, arau-hausteen batzordeak ezarritako zigorrak eta erantzuleen nortasuna iragartzea ere aurreikusten da. Azkenik, zigorren ingurumen ordezko prestazioa ere aurreikusten da. Alegia, ingurumenaren onurarako lehengoratze, zaintza edo hobekuntza ekintzen bidezko isunak ezar daitezke, zigorra jartzen duen organoak erabakitako baldintzetan eta moduan.

LEHENENGO TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea.

Lege honen xedea da, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko, kontserbatzeko eta hobetzeko arau esparrua xedatzea, pertsona fisiko zein juridikoek izango dituzten eskubide zein betebeharrak finkatuz, honako helburu hauek betetze aldera:

a) Herritarrak ingurumen presio eta arriskuetatik babestea.

b) Ingurumena babestea, haren narriadurari aurrea hartzea eta kalteak izan dituen tokian lehengoratzea.

c) Baliabideak modu eraginkorrean kudeatzea, ekonomia jasangarria, zirkularra eta hipokarbonikoa sustatuz.

d) Klima-aldaketaren eragina mugatzea.

e) Ingurumenaren babesean alderdi publikoaren eta pribatuaren arteko erantzukidetasuna sustatzea.

f) Ingurumen administrazioaren funtzionamendua arintzea, administrazio prozedurak sinplifikatuz eta bateratuz, ingurumenean eragina duten jardueretan esku hartzeko teknikak arautuz, eta, betiere, bertan xedatutako baldintzak eta eskakizunak txertatuz.

g) Informazioa ikuskatzeko, hornitzeko eta jendartean zabaltzeko mekanismo eraginkorrak ezartzea, Lege honen aplikazio eremuaren baitako jardueren kontrola errazteko.

h) Ingurumenean eragina duten jardueren antolamenduan eskumena duten administrazio eta organo publikoek egikaritutako eskumenak koordinatzeko beharrezkoak diren neurriak sustatzea.

i) Ingurumenari buruzko ezagutza eta informazio oinarria hobetzea.

j) Hezkuntza maila guztietan ingurumen hezkuntza bultzatzea, bai eta herritarren eta eragile sozialen kontzientziazioa ere, ingurumena babesteari eta hobetzeari dagokienean.

k) Ingurumen garapen jasangarria bermatzea, Nazio Batuek onartutako Garapen Jasangarrirarako 2030 Agendaren helburuak lortzen lagunduz.

2. artikulua. Definizioak.

Lege honen eraginetarako, definizio hauek hartuko dira kontuan:

a) Ingurumen akordioa: eskumena duen Ingurumen Administrazioaren eta enpresa baten, edo sektore, kolektibo edo erakunde jakin baten ordezkarien artean sinaturiko akordioa. Haren arabera, bi aldeak beren borondatez elkartzen dira ingurumena babesteko helburuak betetzeko.

b) Ingurumen baimen bateratua: Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak idatzitako ebazpena, ingurumena eta pertsonen osasuna babesteko asmoz I.A Eranskinean jasotako jarduerak edo instalazioak osorik edo hein batean ustiatzeko baimena ematen duena, Lege honen xedapenak zein xedea eta aplikagarria den araudia betetzen dituela bermatzeko baldintza zehatzetan. Baimen hori baliagarria izango da, Lege honetan aurreikusitako aplikazio eremuarekin bat etorrita, kokapen bera izango du(t)en instalazio bat(zu)entzat edo horren/horien zati batzuentzat.

c) Ingurumen baimen bakarra: Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak idatzitako ebazpena, ingurumena eta pertsonen osasuna babesteko asmoz I.B Eranskinean jasotako jarduerak edo instalazioak osorik edo hein batean ustiatzeko baimena ematen duena, Lege honen xedapenak zein xedea eta aplikagarria den araudia betetzen dituela bermatzeko baldintza zehatzetan. Baimen hori baliagarria izango da, Lege honetan aurreikusitako

aplikazio eremuarekin bat etorrita, kokapen bera izango du(t)en instalazio bat(zu)entzat edo horren/horien zati batzuentzat.

d) Jarduera sailkatua: ingurumenari, pertsonei edo haien ondasunei kalteak eragin diezazkiekeen, kalte horiek eragiteko arriskua sor dezakeen edo pertsonei eragozpenak sor diezazkiekeen titulartasun publiko edo pribatuko edozein jarduera, ingurumen baimen bateratua eta ingurumen baimen bakarra behar ez dutenak.

e) Lehendik dagoen jarduera edo instalazioa: Lege hau indarrean jarri aurretik baimenduta zegoen zeinahi jarduera edo instalazio.

f) Jarduera sailkatua aurretiaz jakinaraztea: dokumentu honen bidez interesdunek toki administrazioko organo eskudunari jakinarazten diote I.D Eranskinean jasotako jarduerak edo instalazioak prest daudela jarduera hasteko.

g) Ekoberrikuntza: jarduera berritzailerako modu oro, baldin eta bere emaitza edo helburua bada ingurumenaren zaintza modu nabarmenean hobetzea. Tartean daude, ekoizpen prozesu berriak, produktu zein zerbitzu berriak, eta enpresa edo kudeaketa metodo berriak; baldin eta horiek erabiliz edo egikarituz gero nabarmen murrizten badira ingurumenak izan ditzakeen arriskuak, kutsadura edo baliabideen erabileraren bestelako inpaktu negatibo batzuk, edo horiei aurrea hartzen bazaie, horiekin lotutako jardueren bizi zikloan zehar.

h) Ingurumenean eragin nabarmena izatea: ingurumenaren kalitatearen edozein alderdiren aldaketa kaltegarri eta nabarmena, batez ere iraunkorra denean edo luze irauten duenean. Natura 2000 Sareko guneen kasuan, ondorioa nabarmentzat joko da lekuan kontserbatu behar diren habitaten edo espezieen kontserbazio egoera definitzen duten parametroak edo, hala badagokio, lehengoratzeko aukerak oztopatu baditzake.

i) Instalazioa: zeinahi unitate tekniko finko edo mugikor, non Lege honen I. Eranskinean eta II. Eranskinean zerrendatutako jarduera bat edo batzuk garatzen diren, eta baita toki horretan gauzatuko diren jarduerekin antzekotasun teknikoa dutenekin zuzeneko lotura duten beste jarduera batzuk ere, baldin eta isurpenetan eta kutsaduran ondorioak edo ingurumenean bestelako eraginak izan baditzakete.

j) Jarduera sailkatuaren lizentzia: toki administrazioan eskumena duen organoak idatzitako ebazpena, baldintza batzuen arabera jarduera sailkatu bat egitea ahalbidetzen duena, Lege honen xedapenak eta helburua, eta baita aplikagarria den araudia ere, betetzen dituela bermatzeko.

k) Neurri zuzentzaileak: ingurumen alorrean eskumenak dituen organoak ezarritako neurriak ingurumenaren gaineko ondorioen larritasuna edo hedadura murrizteko, eragin horiek nabarmenak izateari utz diezaioten epe erdian edo luzean.

l) Babes neurriak: ingurumen alorrean eskumenak dituen organoak ezarritako neurriak ingurumenaren gainean eragin nabarmenik sortu ez dadin.

m) Eskura dauden teknika onenak: teknika jakin batzuek isurpen mugen balioen oinarria eraikitzeko daukaten ahalmena eta isurpenak saihesteko, edo hori ezin bada, murrizteko, eta ingurumenean eta pertsonen osasunean daukaten eragina txikitzeko beste baldintza batzuk erakutsiko dituzten jardueren garapenaren eta horien ustiapen modalitateen faserik eraginkorrena eta aurreratuena da.

Ondorio horietarako, hauek honela ulertu behar dira:

m.1. «Teknikak»: erabilitako teknologia, instalazioa diseinatuta, eraikita, zainduta, ustiatuta eta geldituta dagoen moduarekin batera.

m.2. «Eskura dauden teknikak»: dagokion industria sektorearen testuinguruan aplikatzea ahalbidetzen duen eskala batean garatutako teknikak,

ekonomiari eta teknikari dagokienez baldintza bideragarrietan, kostuak zein onurak aintzat hartuz, nola teknikak Europar Batasunean sortu edo erabiltzen badira, hala Espainiatik kanpo; betiere, titularrak horietarako sarbidea baldin badu arrazoizko baldintzetan.

m.3. «Teknika onenak»: ingurumenaren babes maila orokor altua lortzeko eraginkorrenak diren teknikak dira.

n) Funtsezko aldaketa: baimendutako jarduera edo instalazioren batean egiten den zeinahi aldaketa, baldin eta eragin nabarmenak izan baditzake ingurumenean zein pertsonen segurtasunean eta osasunean, baimen edo lizentzia hori emateko edo aurretiazko jakinarazpena jasotzeko eskumena duen organoaren iritziz, eta Lege honetan xedatutako irizpideekin bat etorrita.

o) Funtsezkoa ez den aldaketa: baimendutako jardueraren edo instalazioaren ezaugarrietan, funtzionamenduan edo hedapenean gertatzen den zeinahi aldaketa, funtsezkotzat ez joagatik, ingurumenean eta pertsonen segurtasunean eta osasunean eragina izan badezake.

p) Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoa: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko ingurumen gaietan eskumena duen sailburuordetza edo hori ordezkatuko duen organoa.

q) Interesa dutenak: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 4. artikuluan aurreikusitako zeinahi egoeratan daudenak, eta irabazi-asmorik gabeko zeinahi pertsona juridiko, Ingurumenaren alorrean informazioa eskuratzeko, jendeak parte hartzeko eta auzitegietara jotzeko eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 23.1 artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen badituzte.

r) Sustatzailea: plan, programa edo proiektu bat inplementatu nahi duen edozein pertsona fisiko edo juridiko, publiko nahiz pribatu.

s) Publiko orokorra: zeinahi pertsona fisiko zein juridiko, bai eta horien elkarte, erakunde eta taldeak ere, aplikagarria zaien araudiaren arabera sortutakoak.

t) Titularra: instalazio edo jarduera bat osorik edo partzialki ustiatzen duen edozein pertsona fisiko edo juridiko.

u) Gehieneko isurpen balioak: parametro espezifiko jakin batzuen, isurpen baten kontzentrazioaren edo isurpen mailaren arabera adierazitako masa edo energia, zeinaren balioa ezin den gainditu finkatutako epealdietan.

2. II.G eranskinean definizio gehigarriak ageri dira, ingurumen ebaluazioaren ondoreetarako.

3. artikulua. Printzipioak.

1. Honako Lege hau printzipio hauetan oinarritzen da:

a) Arreta eta prebentzio ekintza, kutsadurari jatorrian bertan aurre egitea eta “kutsatzen duenak ordain dezala”.

b) Informaziorako sarbidea, gardentasuna eta herritarren parte-hartzea politika publikoen diseinuan eta egikaritzean.

c) Baliabide naturalen arrazoizko erabilera eta energiaren erabilera eraginkorra.

d) Ingurumen alderdiak erabakiak hartzeko prozesuan txertatzea.

e) Ingurumenaren zaintzarekin lotutako instalazioak eta jarduerak aurrerabide teknikoetara egokitzea.

f) Eragile publikoen eta pribatuen artean partekatutako erantzukizuna.

2. Lege honen helburuak betetzeko hartzen diren neurriak administrazio kargen arintasun, prozedura sinplifikazio eta murrizketa printzipioekin bat etorrita aplikatuko dira.

3. Lege honen printzipioek emango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan administrazio publikoen jardunbide lerroak, bai eta ingurumena eta pertsonen osasuna babesteko dagozkien arauen interpretazio irizpideak ere.

4. artikulua. Onura publikoa eta interes soziala.

Lege honen helburuak betetzera bideratutako jarduerak onura publikokotzat edo interes sozialekotzat jo ahal izango dira, ondorio guztietarako; eta, bereziki, Legearen eraginpean dauden ondasunen edo eskubideen desjabetzeari buruzkoak, legediak gai horri buruz xedatutako guztiarekin bat etorrita.

5. artikulua. Pertsonen eskubideak

Lege honetan aurreikusitakoarekin bat etorrita, pertsona guztiek dute honako hauetarako eskubidea:

a) Ingurumen egokiaz baldintza berdinetan gozatzeko, gizonak nahiz emakumeak izan.

b) Ingurumena babesteko hartzen diren erabakien eta politiken diseinuan parte hartzeko, zuzenean zein elkarteen bidez, eta, betiere, dagozkien arauek xedatutako baldintzetan.

c) Ingurumenaren eta baliabide naturalen egoerari buruzko informazioa eskuratzeko eta ingurumen alorrean auzitegietara jotzeko.

d) Akzio publikoa egikaritzeko eskubidea, euskal administrazio publikoei eskatzeko ingurumen legediak xedatutako betebeharrak gauza ditzatela.

e) Eskumena duten administrazio publikoetako organoek administrazio egoki baten printzipioekin bat etorrita jardun dezaten, interes orokorra asetzeko helburuarekin, gardentasuna, eragingarritasuna, ekonomia eta eraginkortasuna bermatuz.

6. artikulua. Pertsonen betebeharrak

Lege honetan aurreikusitakoarekin bat etorrita, pertsona guztiek dute honako hauetarako betebeharra:

a) Ingurumena babestu, zaindu eta hobetzekoa.

b) Hondakinen sorkuntza, atmosferara egindako isurpenak, zarata, bibrazioak, usainak, argi kutsadura eta uretara edo lurzorura egindako isurpenak saihestekoa, edo hala badagokio, murriztekoa.

c) Hala badagokio, eraldatutako ingurumena lehengoratzekoa.

d) Lege honen aplikazio eremuaren baitan zeinahi jarduera gauzatzeko dagokion administrazio titulua edukitzekoa, baldin eta horrek eragina badu ingurumenean eta pertsonen osasunean; eta, azkenik, jarduera egikaritzeko xedatutako baldintzak betetzekoa.

BIGARREN TITULUA. INGURUMEN POLITIKAREN ESKUMENAK ETA KOORDINAZIOA

7. artikulua. Ingurumenaren arloko eskumenak.

1. Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunei dagokie:

a) Estatuaren ingurumen eta ekologia gaietako oinarrizko legearen garapena eta egikaritzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuan aurreikusitakoarekin bat etorrita.

b) Autonomia erkidegoko ingurumen planak eta estrategiak osatzea eta onartzea.

c) Europar Batasuneko araudiak zuzenean aplikatzeko eta Europako gainerako araudiek eta zuzentarauek xedatutako betebeharrak garatu eta egikaritzeko beharrezkoak diren neurriak onartzea.

d) Ingurumenean eta pertsonen osasunean eragina duten jardueren antolamenduarekin, ikuskaritzarekin eta diziplinarekin lotuta, Lege honetan esleitutako eskumenak egikaritzea.

e) Lege honek eta gainerako araudi sektorialek ingurumenarekin lotuta esleitutako beste eskumen batzuk egikaritzea.

f) Europako oinarrizko legeriak eskatutako maila igotzen duten ingurumena babesteko arau osagarriak emateko ahalmena.

2. Lurralde Historikoetako foru-organoei dagozkie, bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen eta Foru Organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legean aitortutako eskumenez gainera, honako hauek:

a) Lurralde Historikoan ingurumen planak eta estrategiak osatzea eta onartzea, eta, bereziki, hiri hondakinen kudeaketa esparruaren plangintza gauzatzea, dagozkion foru planen bitartez.

b) Udalei laguntza ematea, Lege honetan araututa dauden jarduera sailkatuaren lizentzia eta jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena prozeduren eraginpean dauden jarduerei eta instalazioei buruzkoetan.

c) Ingurumen ebaluaziorako prozeduren amaierako adierazpenak eta txostenak egitea, baldin eta plana, programa edo proiektua baimentzeko edo behin betiko onartzeko funtsezko eskumena Lurralde Historikoetako foru-organoek baldin badute, Lege honek xedatzen duenarekin bat etorrita.

d) Lurralde historiko bakoitzaren esparruan udal esku-hartzeak koordinatzea, etxe hondakinen alorrean zerbitzuen prestazio integrala bermatu ahal izateko.

e) Etxe hondakinak kudeatzeko udalaz gaindiko azpiegiturak bultzatzea.

f) Lege honek eta gainerako araudi sektorialek ingurumenarekin lotuta esleitutako beste eskumen batzuk egikaritzea.

3. Euskal Autonomia Erkidegoko toki erakundeei dagozkie honako hauek, euren eskumenen eremuan:

a) Ingurumenean eta pertsonen osasunean eragina duten jardueren antolamenduarekin, ikuskaritzarekin eta diziplinarekin lotuta, Lege honetan esleitutako eskumenak egikaritzea.

b) Lege honek, gainerako araudi sektorialek, eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak ingurumenarekin lotuta esleitutako beste eskumen batzuk egikaritzea.

8. artikulua. Administrazio publikoek eskumenak egikaritzea.

1. Ingurumen arloko eskumenak egikaritzean, ingurumenaren zaintzarekin lotutako eskakizunak gainerako politika publikoetan txertatzeko, koordinatzeko, lankidetzan jarduteko eta eraginkortasunez jokatzeko printzipioekin bat etorrita jardun beharko dute administrazio publikoek. Zehazki, jardunak eraginkorrak eta koherenteak izango direla ziurtatzeko beharrezkoa den laguntza eman beharko dute, elkarri informazioa trukatuz, Lege honetan xedatutako helburuak betetze aldera.

2. Horretarako, administrazio publikoek lankidetza mekanismoak diseinatu eta kudeatuko dituzte, euren jardunak elkarrekiko informazio eta lankidetza printzipioetara egokituz, udalerrietako ingurumen, ekonomia eta gizarte politiken kudeaketa integratua sustatzeko, administrazio horien eta herritarren arteko adostasunarekin.

3. Ingurumen politikaren koherentzia bermatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari dagokio ingurumenarekin lotutako interes publikoak eskatutako koordinazio eskumenak egikaritzea.

9. artikulua. Ingurumeneko Esparru Programa.

1. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen politika Ingurumeneko Esparru Programa batean zehaztuko da. Programa horretan, ingurumenaren egoerari buruzko diagnostiko bat, ildo estrategikoak eta kalitatea hobetzeko bere indarraldian gauzatu beharreko konpromisoak jasoko dira.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak egingo du Ingurumeneko Esparru Programa eta Gobernu Kontseiluak onetsiko du, Ingurumen Kontseiluak txostena egin ondoren. Plan espezifikoen bidez garatu ahalko da programa eta bertan ezarriko dira bere indarraldia eta jarraipena egiteko eta berrikusteko prozedura.

10. artikulua. Ingurumeneko Aholku Batzordea.

1. Ingurumeneko Aholku Batzordeak, Euskal Autonomia Erkidegoko organo aholku emaile eta lankidetzarako organo gisa, administrazio publikoen eta ingurumen politiken osaeran, kontsultan eta jarraipenean gizarte, ekonomia eta unibertsitatearen interesak ordezkatzen dituzten sektoreen arteko harremana eta lankidetza bultzatzea du xede. Kontseilua, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren ingurumen gaietan eskumena duen Sailari atxikia dago.

2. Ingurumeneko Aholku Batzordeari dagozkio honako funtzio hauek:

a) Berak aintzakotzat hartu beharreko eta ingurumenarekin zerikusia duten planetan eta programetan ingurumen politikarekin lotutako gaiei buruzko informazioa eta aholkularitza ematea.

b) Ingurumenaren zaintzarekin zerikusia duten Lege aurreproiektuei eta xedapen orokorren proiektuei buruzko informazioa ematea.

c) Ingurumeneko Esparru Programaren eta hura garatzeko planen berri ematea.

d) Ingurumen politikak enplegu sorkuntzarekin, garapen jasangarriarekin, ekimen ekonomiko publiko eta pribatuaren koordinazioarekin eta ingurumen gaietan herritarren parte-hartzearekin, hezkuntzarekin eta sentsibilizazioarekin uztartzeko neurriak eta txostenak proposatzea eta ematea.

e) Batzordean ordezkaritza duten erakundeek ingurumenaren alorrean aurrera eramandako esku-hartze guztien jarraipen lanak egitea.

f) Unibertsitateek eta ikerketa zentroek ingurumen politikan parte har dezaten sustatzea.

g) Legez edo erregelamenduz esleitutako gainerako funtzio guztiak gauzatzea.

3. Ingurumen Aholku Batzordeak bere barne-funtzionamendurako arauak ezarriko ditu eta kasua bada, sekzioak sortuko ditu, landu beharreko gaiek hala eskatzen dutenean.

4. Ingurumen Aholku Batzordearen txostenak, gomendioak eta proposamenak ez dira lotesleak izango.

11. artikulua. Osaera.

1. Ingurumeneko Aholku Batzordeko burua Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko ingurumen gaietan eskumena duen Saileko titularra da, eta bertako kideak dira honako hauek ordezkatzeko izendatutakoak:

a) Eusko Legebiltzarra.

b) Eusko Jaurlaritza.

c) Lurralde Historikoetako foru-organoak.

d) Udalerriak.

e) Ingurumen sektoreak ordezkatzen dituzten herri elkarte edo mugimenduak.

f) Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteak.

g) Enpresa erakunde eta taldeak.

h) Sindikatuak.

i) Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sareko zentroak.

j) Euren egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten unibertsitateak.

k) Ingurumen gaietan ospe handia duten pertsona adituak.

2. Araudiaren arabera zehaztuko dira Ingurumeneko Aholku Batzordearen osaera, kideak izendatzeko prozedura, emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatuz, eta antolatzeko eta funtzionatzeko oinarrizko arauak.

HIRUGARREN TITULUA. INGURUMEN GAIEI BURUZKO INFORMAZIOA, JENDEAREN PARTE-HARTZEA ETA AUZITEGIETARA JOTZEA

12. artikulua. Ingurumen informazioa.

1. Lege honen ondorioetarako, ingurumen informaziotzat jotzen da administrazio publikoen edo sektore publikoko gainerako erakundeen, edo horien izenean diharduten beste subjektu batzuen esku dagoen idatzizko, ikusizko eta entzutezko informazio oro, elektronikoa edo beste edozein eratako informazioa, honako hauei buruzkoa: Europako zuzentarauek araututako gaiak, ingurumen alorreko informazioa eskuratzeari, jendeak parte hartzeari eta auzitegietara jotzeko eskubideei buruzkoa, eta Euskal Autonomia erkidegoan aplikatzeko horien transposizio araudia.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak ingurumenaren egoerari buruzko testuinguru txosten bat osatu eta argitaratuko du urtean behin, eta lau urtean behin, txosten orokor bat. Txosten horietan ingurumenaren kalitateari eta jasaten dituen presioei buruzko datuak bilduko dira, lurzoruaren artifizializazioa barne, bai eta laburpen ez tekniko bat ere, jendeak uler dezan.

13. artikulua. Ingurumen informazioaren hedapena.

1. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak sarbide publikoko informazio sistema bat eduki beharko du, gutxienez honako hauei buruzko datuak izango dituena:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko uraren, airearen, gearen, lurzoruaren, faunaren, floraren, geodibertsitatearen eta biodibertsitatearen, ekosistemen

zerbitzuen, paisaiaren, Natura 2000 Sarearen eta naturagune babestuen kalitatea eta egoera, bai eta lurraldeko babes bereziko eremuena ere, horien elkarrekiko interakzioak barne.

b) Ingurumen kudeaketarako planak eta programak eta ingurumena babesteko bestelako jardun publikoak, edo ingurumen elementu eta baldintzei eragin dietenak edo eragin diezaieketenak.

c) Ingurumenaren kalitateari buruzko helburuak eta arauak.

d) Emandako ingurumen baimen bateratuak eta ingurumen baimen bakarrak.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak planei, programei eta proiektuei buruz emandako ingurumen txostenak eta adierazpenak.

f) Ingurumen informazioa euren eskuetan duten ingurumen agintaritza publikoen zerrenda.

2. Agintari publikoek eta sektore publikoko gainerako erakundeek euren esku dagoen edo euren izenean beste subjektu batzuek daukaten ingurumen informaziorako sarbide eskubidea behar bezala egikarituko dela bermatuko dute, eta informazio hori hedatuko dela eta ahalik eta modu zabal, sistematiko eta teknologikoki aurreratuenean jendearen eskura jarriko dela ziurtatuko dute, sarbide berdintasuna, irisgarritasun unibertsala eta datu publikoen berrerabilera bermatuz.

Ingurumen alorreko informazioa eskuratzeko eskubideei buruzko zuzentarauak eta Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeko haren transposizio araudiak xedaturikoaren arabera hedatuko dute agintari publikoek ingurumen alorreko informazioa.

3. Helburu horrekin, besteak beste, INGURUNET sortu da, EAEko Ingurumen Informaziorako Sistema. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren mendekoa da, eta bere helburua izango da Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumenari buruzko informazio alfanumeriko, grafiko edo beste era bateko

guztia, ingurumen informazioa sortzen duten era guztietako erakunde publiko zein pribatuek sortua, txertatzea, kudeaketan, ikerketan, hedapen publikoan, ingurumen hezkuntzan eta erabakiak hartzean erabili ahal izateko.

4. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari dagokio Ingurumen Informaziorako Sistema antolatzea, kudeatzea eta ebaluatzea, bai eta informazio hori arautuko duten eta berorren erabilera partekatua eta berrerabilera bermatuko duten arauak eta irizpideak onartzea ere. Ezinbestekoa izango da jardun horien araudia garatzea.

5. Eskuragarri dagoen ingurumen informazioaren fluxua bermatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak lankidetza politikak sustatuko ditu, besteak beste, beste administrazio publiko, unibertsitate, ikerketa zentro, enpresa eta gizarte erakunde batzuekin, lehendik dauden informazio sistemak integratzeko, eta hala badagokio, koordinatzeko.

14. artikulua. Ingurumen informazioa eskatzea.

1. Ingurumen informazioaren eskaerak ingurumen gaietako informaziorako sarbide eskubideei buruzko Zuzentarauan eta Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeko bere transposizio arauan xedatutako bermeekin eta horiekin bat etorria izapidetuko dira.

2. Ingurumen informazio jakin eta zehatz bat ez bada zabaldu, edo informazio horrek ez badauka sarbide publikorik, zeinahi pertsonak eskatu ahal izango dio informazio hori bere esku daukan agintari publikoari.

3. Agintaritza publikoak, eskaera jaso eta gehienez ere hilabeteko epean (eskatutako informazioa bolumen edo konplexutasun handikoa bada, bi hilabeteko epean), eskatutako informazioa eman beharko du, edo, bestela, emateari uko egin, horretarako arrazoiak zehaztuz.

4. Informazioa ukatzeko arrazoiak izango dira, hain zuzen, ingurumen gaietako informaziorako sarbide eskubideei buruzko Zuzentarauak eta Euskal

Autonomia Erkidegoan aplikatzeko bere transposizio arauak xedatutakoak, baina kasu guztietan, interpretazio murriztailea egin beharko zaie.

Ukatzeko arrazoi horiek aplikatu ahal izango dira aurreko artikuluan jasotako hedapen betebeharrei dagokienean.

5. Informazioa ukatzeko erabakiaren kontra dagozkion administrazio errekurtsoak jarri ahal izango dira.

15. artikulua. Ingurumenaren arloko parte-hartzea.

1. Administrazio publikoek eta sektore publikoko gainerako erakundeek eurek osatu edo onartutako eta ingurumenean zuzenean edo zeharka eragina duten gaiei buruzko erabakiak hartzeko prozeduretan modu erreal eta eraginkorrean parte hartzeko eskubidea behar bezala egikarituko dela sustatu eta bermatuko dute.

2. Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek sustatu eta bermatuko dute interesa dutenek eta publiko orokorrak parte hartuko dutela ingurumenean esku hartzeko prozeduretan eta ingurumenarekin zerikusia duten plan, programa eta xedapen orokorren osaeran, aldaketan, berrikuspenean eta onarpenean. Parte-hartze horretan aintzat hartuko da genero ikuspegia.

3. Interesa dutenek eta publiko orokorrak aipatutako prozeduretan parte hartzeko eskubidea baliatu ahal izango dute, zeinahi erabaki hartu aurretik. Horretarako, iritziak, oharrak edo alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte, eta guztiek jaso beharko dute erantzun arrazoituren bat.

16. artikulua. Akzio publikoa.

1. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen eskumenak dituzten administrazioei Lege honetan eta ingurumenari buruzko gainerako arloko legerian xedatutakoa betetzeko eskaera akzio publikoa izango da.

2. Nornahik eskatu ahal izango die eskumena duten administrazioei ingurumen legezkotasuna berrezartzeko neurriak, ingurumen kalteengatiko erantzukizunezko neurriak, eta Lege honetan xedatutakoaren arabera arau-hausteak izan daitezkeen jardunak salatzeko neurriak hartzeko.

17. artikulua. Administrazio elektronikoa.

Derrigorrezkoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek Lege honen esparruan gauzatutako jardunetan zerbitzu elektronikoak erabiltzea, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidea arautzen duen oinarrizko arauan xedatutakoarekin bat etorrita; eta herritarrek zerbitzu publikoetarako duten sarbide elektronikoa arautzen duen araudian onartutako eskubideen eraginpean egingo da, erabat.

LAUGARREN TITULUA. INGURUMENEAN ERAGINA DUTEN JARDUEREN ANTOLAMENDUA.

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK.

18. artikulua. Ingurumenean esku hartzeko erregimenak.

1. Lege honen I. Eranskinean jasotako jarduera eta instalazio publiko zein pribatuak, hain justu, ingurumenean esku hartzeko honako erregimen hauen eraginpean egongo dira:

a) I.A Eranskineko jarduerak eta instalazioak, ingurumen baimen bateratuaren erregimen juridikoaren eraginpean.

b) I.B Eranskineko jarduerak eta instalazioak, ingurumen baimen bakarraren erregimen juridikoaren eraginpean.

c) I.C Eranskineko jarduerak eta instalazioak, jarduera sailkatuaren lizentziaren erregimen juridikoaren eraginpean.

d) I.D Eranskineko jarduerak eta instalazioak, jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenaren erregimen juridikoaren eraginpean.

2. Jarduerak eta instalazioak ingurumenean esku hartzeko Lege honetan araututako erregimenen eraginpean jartzearena jarduera horiek ingurumenean eta pertsonen osasunean duten eragin handiagoan ala txikiagoan oinarrituta egiten da, honako ezaugarri hauek kontuan hartuta:

a) Instalazioaren dimentsioa eta ekoizpen gaitasuna.

b) Ur kontsumoa, energia kontsumoa eta beste baliabide batzuen kontsumoa.

c) Sortutako hondakinen kopurua, pisua eta tipologia.

d) Atmosferara eta uretara egin litezkeen isurpenak.

e) Egin litezkeen soinu igorpenak.

f) Istripu arriskua.

g) Substantzia arriskutsuen erabilera.

3. Lege honetan aurreikusitako jarduera sailkatuaren lizentziaren eta jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenaren erregimen juridikoak aplikatuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean edo dagozkion beste administrazio publiko batzuen aurrean komunikazio, jakinarazpen edo erregistro izapideak egiteari inolako kalterik egin gabe, aplika daitekeen araudi sektorialak xedatzen duenarekin bat etorrita.

4. Udalek ezin izango dute ingurumen baimen bateratua, ingurumen baimen bakarra edo jarduera sailkatuaren lizentzia behar duten jardueretarako lizentziarik eman dagokien gaikuntza titulua izan arte.

5. Ingurumenean esku hartzeko artikulu honetan aurreikusitako erregimenen batean txertatutako jarduera edo instalazio bat horietako beste erregimen baten eraginpean jarri beharko balitz, jarduera zabaldu edo aldatu delako, aldaketa hori egitean, kontuan hartuko da Lege honetan xedatutako dagokion prozedura, horretarako berariazko prozedura arauz finkatzen ez den bitartean.

6. Produktu edo prozesu berriak ikertzera, garatzera eta esperimentatzera bideratutako jarduerak eta instalazioak, edo horietako batzuk, ez dira ingurumenean esku hartzeko artikulu honetan aurreikusitako erregimenen eraginpean jarriko, hori baimentzeko eskumena duen organoak (horren eraginpean egonez gero) ingurumena eta pertsonen osasuna babesteko beharrezkoak diren prebentzio neurriak xedatzeari kalterik egin gabe; horretarako, sustatzaileak aurreikusitako jardueraren iraupenaren ezaugarriei

eta balioespenari buruzko behar beste informazio eta komunikazio aurkeztu beharko dio aipatutako organo horri.

19. artikulua. Baimendutako jarduerak hasteko epeak.

1. Ingurumen baimen bateratua eta ingurumen baimen bakarra onartu zaien jarduerak hasteko epeak 5 eta 3 urtekoak izango dira, hurrenez hurren.

2. Jarduera sailkatuaren lizentzia eman zaien edo jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena aurkeztu duten jarduerak hasteko epea urte batekoa izango da.

3. Epe horiek igaroz gero, eta jarduera modu eraginkorrean hasi gabe badago titularrari egozteko moduko arrazoiak direla tarteko, eskumena duen organoak erabakiko du zein den bere jarduera garatzeko gaikuntzaren epemuga.

4. Epe horiek luzapen bakar bat eduki ahal izango dute, interesdunak hala eskatuta, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik; eta luzapen hori inola ere ezingo da izan berezko epearen erdia baino handiagoa.

20. artikulua. Helburuak.

Hauek dira ingurumenean esku hartzeko titulu honetan arautzen diren erregimenen helburuak:

a) Atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadurari aurrea hartzea, edo posible ez denean, murriztea eta kontrolatzea, ingurumenaren eta pertsonen osasunaren babes maila orokor altua lortzeko.

b) Ingurune naturalaren aniztasuna titulu honen aplikazio eremuaren baitan txertatutako jardueretatik erator litezkeen eraginetatik babestea.

c) Baliabide naturalen erabilera jasangarria eta hondakinen kudeaketa zuzena egiten dela zaintzea.

21. artikulua. Aldez aurretiko kontsultak.

1. Ingurumenean esku hartzeko erregimenei buruzko prozedurak hasi aurretik, jarduera sustatzen duen pertsona fisikoak edo juridikoak izapideak egiteko eskumena duen organoari eskatu ahal izango dio prozedura horren baldintza administratibo eta teknikoei buruzko informazioa. Kontsulta horri deskribapenezko laburpen memoria bat erantsi beharko zaio, non zehaztuko diren gauzatu beharreko jardunaren oinarrizko ezaugarriak eta gauzatuko den kokalekuaren euskarri grafikoa.

2. Eskumena duen organoak gehienez ere hiru hilabeteko epea izango du jasotako eskabideari informazioarekin erantzuteko, eta, horretarako, jarduerak eragin liezaiekeen pertsonei, erakundeei eta administrazio publikoei egin ahal izango die eskaerarekin edo komunikazioarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioan txertatu beharreko eduki espezifikoei buruzko kontsulta.

22. artikulua. Ingurumenean esku hartzeko erregimenen eta ingurumen inpaktuaren ebaluazioaren aldiberekotasuna.

Jarduera bat, aldi berean, ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunteko edo sinplifikatuko prozedura baten eta ingurumenean esku hartzeko Lege honetan aurreikusitako beste erregimenen baten eraginpean baldin badago, arau hauen arabera egin behar dira jarduera horren izapideak:

a) Ingurumen inpaktuaren adierazpena edo ingurumen inpaktuaren txostena egiteko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari dagokionean, eta jarduera ingurumen baimen bateratuaren erregimenaren edo

ingurumen baimen bakarraren eraginpean dagoenean, bi erregimenei dagozkien administrazio prozedurak eta ingurumen inpaktuaren ebaluazio arruntaren prozedura txertatuko dira. Ingurumen inpaktuaren adierazpenaren edukia, era berean, ingurumen baimen bateratuaren edo ingurumen baimen bakarraren parte izango da, eta administrazio ekintza berean egingo dira bi adierazpen horiek.

b) Ingurumen inpaktuaren adierazpena edo ingurumen inpaktuaren txostena egiteko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko edo foru administrazioko ingurumen-organoari dagokionean, eta jarduera hori jarduera sailkatuaren lizentziaren erregimenaren eraginpean dagoenean, dagokion udalak jarduera lizentzia eman aurretik egin beharko da ingurumen inpaktuaren adierazpena. Ingurumen inpaktuaren adierazpena loteslea izango da toki agintaritzarentzat.

c) Ingurumen inpaktuaren adierazpena edo ingurumen inpaktuari buruzko txostena egiteko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko edo foru administrazioko ingurumen-organoari dagokionean, eta jarduera hori jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenaren erregimenaren eraginpean dagoenean, jakinarazpena ezingo zaio aurkeztu udalari ingurumen inpaktuaren adierazpena edo ingurumen inpaktuari buruzko txostena argitaratu aurretik. Ingurumen inpaktuaren adierazpena edo ingurumen inpaktuari buruzko txostena lotesleak izango dira toki agintaritzarentzat.

d) Ingurumen inpaktuaren adierazpena edo ingurumen inpaktuari buruzko txostena egitea Estatuko Administrazio orokorrari dagokionean, ingurumen ebaluazioari buruzko oinarrizko araudian ezarritako baldintzetan, ezingo da baimena eta jarduera sailkatuaren lizentzia eman edo jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena aurkeztu, aldez aurretik adierazpen edo txosten hori egin gabe badago.

23. artikulua. Administrazio publikoen betebeharrak.

Ingurumenean esku hartzeko titulu honetan araututako prozeduretan parte hartzen duten administrazio publikoak derrigortuta daude hauetara:

a) Ingurumenean esku hartzeko erregimen juridikoak kudeatzea, administrazio publikoen eta herritarrei zerbitzua emateko administrazioen arteko elkarlan, lankidetza eta elkarrekiko informazio printzipioarekin bat etorrita.

b) Ingurumenean esku hartzeko tresnetan eta ingurumena babesteko araudi sektorialean xedatutako baldintzak eta eskakizunak betetzen direla zaintzea.

c) Ingurumenean esku hartzeko erregimenetatik eratorritako betebeharrak gauzatzeko beharrezkoak diren argibide teknikoak eta xedapenak onartzea.

d) Lege honen helburu diren jarduerei buruzko ingurumen informaziorako eta jarduera horiek ingurumenean eta pertsonen osasunean duten eraginari buruzko informaziorako sarbidea bermatzea.

e) Interesa dutenek eta publiko orokorrak Lege honetan aurreikusita dauden esku hartzeko prozeduretan parte har dezaten sustatzea, hasierako faseetatik.

f) Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistemaren (EMAS), Europar Batasuneko etiketa ekologikoko sistemaren eta ekoberrikuntzaren aitorpena sustatzea, ingurumen gaietako betebeharrak betetzeko eta erakundeen ingurumenarekiko jarduna etengabe hobetzeko bitarteko gisa.

g) Lege honetan eta aplikagarriak diren gainerako araudietan xedatutako beste zeinahi betebehar.

24. artikulua. Jarduera edo instalazioen titularren betebeharrak.

Titulu honetan arautu beharreko jardueren eta instalazioen titularrak derrigortuta daude hauetara:

a) Esku hartzeko dagokion titulua edukitzea, hala dagokionean, eta bertatik eratorritako edo aurretiazko jakinarazpenaren erregimen juridikotik eratorritako baldintzak betetzea.

b) Lege honetatik eta ingurumena babesteko araudi sektorialetik eratorritako informazioa emateko betebeharrak gauzatzea.

c) Eskumena duten administrazio publikoen organoei jakinaraztea jarduera baten ohiko edo ezohiko funtzionamendutik eratorritako zeinahi gertakari, baldin eta ingurumenean edo pertsonen osasunean eragin nabarmena izan badezake.

d) Baimena emateko baldintzak edo aplikagarria den araudiaren baldintzak bete ezean, jardueraren edo instalazioaren titularra den pertsonak beharrezko neurri zuzentzaileak hartu beharko ditu luzatu gabe, eta eskumena duten ingurumen administrazioei jakinarazi.

e) I. Eranskineko A eta B ataletako jardueren kasuan, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean, aplikagarria den beste ingurumen-araudi batek xedatuta, erantzukizunpeko komunikazio edo adierazpen bat egin behar duten beste jarduera eta instalazio batzuen kasuan ere, aipatutako ingurumen-organo horri informatzea jarduerak garatzeko ingurumenarekin lotutako legezko gaikuntzen transmisioaz. Betebehar hori transmisioa egiten duenari dagokio, pertsona titular berriak transmisio horren berri emateko aukerari kalterik egin gabe.

f) I. Eranskineko A, B, C eta D ataletako jardueren kasuan jarduerak garatzeko ingurumenarekin lotutako legezko gaikuntzen transmisioaren berri ematea dagokion udalari. Betebehar hori transmisioa egiten duenari dagokio,

pertsona titular berriak transmisio horren berri emateko aukerari kalterik egin gabe.

g) Administrazio publikoek egindako ikuskaritza lanak behar bezala gauzatzeko beharrezkoa den lankidetza ematea.

h) Ingurumen baimen bateratuarekin eta ingurumen baimen bakarrarekin lotutako jardueren eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean erantzukizunezko komunikazioa edo adierazpena aurkeztu behar duten bestelako instalazio edo jardueren irekieraren aurretiko edo funtzionamendua hasi aurretiko jakinarazpena aurkeztea organo horri eta instalazioa kokatuta egongo den udalari.

i) Jarduera sailkatuaren lizentziarekin lotutako jardueren irekieraren aurretiko edo funtzionamendua hasi aurretiko komunikazioa aurkeztea instalazioa kokatuta egongo den udalari.

j) Lege honetan eta aplikagarriak diren gainerako araudietan xedatutako beste zeinahi betebehar.

25. artikulua. Gaitasun teknikoa eta erantzukizuna.

1. Titulu honetan aurreikusitako prozeduren hasierako eskaeretako proiektuak eta dokumentazio teknikoa (ingurumen ebaluazioari buruzko araudian aurreikusitako ingurumen azterlan eta dokumentuak barne) beharrezkoa den gaitasun teknikoa baduten pertsonek egin beharko dituzte, lanbide prestakuntzari buruzko arauekin bat etorrita.

2. Dokumentazio tekniko horrek Lege honen eskakizunak betetzeko behar beste kalitate eduki beharko du. Helburu horrekin, egilea edo egileak zein diren identifikatu beharko da, adieraziz daukan/daukaten titulua, eta, hala badagokio, lanbide arautua. Aipatutako dokumentu horien egileak eta sustatzailea izango dira horien edukiaren eta informazioaren fidagarritasunaren

erantzule solidarioak, administraziotik modu frogagarrian jasotako datuei dagokienez izan ezik.

26. artikulua. Isilpekotasuna.

1. Ingurumenean esku hartzeko prozeduretan parte hartzen duten administrazio publikoek sustatzaileak emandako informazioen isilpekotasuna errespetatu beharko dute, aplikagarria den araudiarekin bat etorrita, kasu guztietan jendearen interesaren babesa kontuan hartuz.

2. Sustatzaileak adierazi beharko du aurkeztutako dokumentaziotik zer informazio iruditzen zaion isilpean gorde beharrekoa. Eskumena duen administrazioak erabaki beharko du, indarrean den legediaren arabera, zer informazio dagoen salbuetsita merkataritza edo industria sekretutik, eta zer informaziok daukan bermatuta isilpekotasuna; horretarako, ingurumen arloan jendearen parte-hartze erreal eta eraginkorrerako eta informaziorako printzipioa isilpekotasunerako eskubidearekin haztatu beharko da.

3. Sustatzaileak adierazitako informazioaren isilpeko izaera erabat edo partzialki ukatuz gero, ebazpen arrazoitu bat eman beharko da, dagozkion errekurtsoak adieraziz.

27. artikulua. Jarduerak gauzatzeko esku hartzeko tituluen transmisioa.

1. Baimena, lizentzia edo komunikazioa behar duten jarduerak edo instalazioak garatzeko ingurumeneko esku-hartzearen tituluak transmititzean, dagokion titulua ematen duen edo aurretiazko jakinarazpena jasotzen duen eta eskumena duen administrazioari jakinarazi beharko zaio.

2. Titular berriari subrogatuko zaizkio transmisioa egiten duenaren eskubideak, betebeharrak eta erantzukizunak. Nolanahi ere den, aurreko

paragrafoan aipatutako komunikazioa egin ezean, betebeharrei eta erantzukizunei elkartasunez erantzungo zaie.

28. artikulua. Jarduera etetea eta instalazioa ixtea.

1. Lege honen eraginpekoak diren jarduerak aldi baterako edo behin betiko etenez gero edo instalazioak itxiz gero, baimena eman duen administrazioari jakinarazi beharko zaio, hartutako neurriak edo hartzeko aurreikusitakoak eta haien denbora sekuentzia xehe azalduta, edozein kutsadura arrisku saihestu ahal izateko.

2. Lege honen ondorioetarako, ulertzen da jarduera batek behin betiko utzi diola bere martxari, urtebeteko epean ez badu jarduera lantzen, eta titularraren komunikazio frogagarririk bidaltzen ez bazaio baimena eman duen administrazioari, egoera horren arrazoiak behar bezala azaltzeko.

29. artikulua. Jardueren edo instalazioen aldaketa.

1. Jardueraren edo instalazioaren titularrak berori baimentzeko eskumena duen organoari eman beharko dio ingurumenean eragina izan dezaketen ondorioak ekarriko dituen zeinahi aldaketaren berri, baldin eta horrek eragina baldin badu baimena, lizentzia edo komunikazioa beharrezkoa duen jardueraren edo instalazioaren ezaugarrietan, ekoizpen prozesuetan, funtzionamenduan edo hedapenean.

2. Jardueraren edo instalazioaren titularrak erabakitzen duenean aldaketa ez dela funtsezkoa, baimena zein lizentzia emateko edo komunikazioa jasotzeko eskumena duen organoari jakinarazi beharko dio, arrazoituz adieraziz zergatik iruditzen zaion funtsezkoa ez den aldaketa bat dela. Komunikazio horrekin batera, hala pentsatzeko arrazoiak justifikatzeko dokumentuak aurkeztuko dira. Aldaketa hori egin ahal izango da, baldin eta aipatutako organo eskudunak ez badu kontrako iritzirik ematen hilabeteko epean.

Nolanahi ere den, aldaketa ez funtsezkotzat joko da isurpenak murrizten direnean edo aldatzen ez direnean, baldin eta aldaketa horrek ez badu ingurumen inpaktuaren ebaluazio arruntaren prozedura bete behar alor horretako araudiaren arabera.

3. Titularrak edo berori baimentzeko eta aurretiazko jakinarazpena jasotzeko eskumena duen agintaritzak funtsezkotzat jotzen badu aldaketa, aldaketa hori ezingo da egin baimena ematen dion titulua bera aldatu arte, Lege honetan aurreikusitako prozeduraren bitartez, edo aurretiazko beste jakinarazpen bat aurkeztu arte.

4. Funtsezko aldaketa bat egin dela ulertuko da, jardueraren edo instalazioaren aldaketak ingurumenean, segurtasunean eta pertsonen osasunean eragin handiagoa eta nabarmenagoa duenean, eta Lege honen I.E Eranskinean jasotako irizpideetakoren bat gertatzen denean.

II. KAPITULUA. INGURUMEN BAIMENAK.

30. artikulua. Ingurumen baimen bateratua.

1. Ingurumen baimen bateratuaren erregimenaren mendean dago titulartasun publiko edo pribatuko jarduera eta instalazioak ustiatzea, horietan lege honen I.A Eranskinean jasotako jardueraren bat garatzen bada, eta, hala badagokio, han ezarritako gaitasun atalaseetara iristen bada. Baimen hori, nolanahi ere, instalazioak eraiki, muntatu edo lekualdatu baino lehen eskuratu beharko da, eta instalazioetan egingo diren aldaketetara egokituko da.

2. Ingurumen baimen bateratuaren bitartez, egintza bakarrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak aurretiaz emandako administrazio prozedura bakarrean bateratuko dira hondakinak ekoizteko eta kudeatzeko baimenak, kolektorera, jabari publiko hidraulikora eta itsasoko eta lehorreko jabari publikora eginiko isurien baimenak eta atmosferara eginiko isurpenen baimenak, eta dagozkien isurpenen mugako balioak ezarriko dira, eskura dauden teknologia onenetan oinarrituta.

3. Ingurumen baimen bateratua emateak ez du esan nahi beste baimen edo emakida batzuk eskuratu behar ez direnik jabari publikoa okupatzeko edo erabiltzeko, aplikatu beharreko uren eta kosten araudian eta gainerako araudian ezarritakoarekin bat etorrita.

31. artikulua. Ingurumen baimen bakarra.

1. Ingurumen baimen bakarraren erregimen juridikoaren mendean dago titulartasun publiko edo pribatuko jarduera eta instalazioak ustiatzea, horietan lege honen I.B Eranskinean jasotako jardueraren bat garatzen bada. Baimen

hori, nolanahi ere, instalazioak eraiki, muntatu edo lekualdatu baino lehen eskuratu beharko da, eta instalazioetan egingo diren aldaketetara egokituko da.

2. Ingurumen baimen bakarraren bitartez, egintza bakarrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak aurretiaz emandako administrazio prozedura bakarrean bateratuko dira hondakinak ekoizteko eta kudeatzeko baimenak, kolektorera, jabari publiko hidraulikora eta itsasoko eta lehorreko jabari publikora eginiko isurien baimenak eta atmosferara eginiko isurpenen baimenak, eta dagozkien isurpenen mugako balioak ezarriko dira, aplika daitekeen arloko araudiak xedaturikoaren arabera.

3. Ingurumen baimen bakarra emateak ez du esan nahi beste baimen edo emakida batzuk eskuratu behar ez direnik jabari publikoa okupatzeko edo erabiltzeko, aplikatu beharreko uren eta kosten araudian eta gainerako araudian ezarritakoarekin bat etorrita.

III. KAPITULUA. INGURUMEN BAIMEN BATERATUAREN ETA INGURUMEN BAIMEN BAKARRAREN XEDAPEN OROKORRAK

32. artikulua. Udalaren hirigintza bateragarritasunaren txostena

1. Interesdunak aurretiaz eskatuta, instalazioa dagoen lurren udalak hogeita hamar eguneko epean igorri beharko du ingurumen baimenaren mendeko proiektuaren, jardueraren edo instalazioaren hirigintza bateragarritasunaren txostena. Hori egin ezean, txosten horren ordez, hura eskatu izanaren kopia aurkeztuko da.

2. Nolanahi ere, artikulu honetan araututako hirigintza txostena negatiboa balitz, txosten hori noiz igorri den berdin diolarik, baina betiere Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ingurumen baimena eman baino lehen jaso badu, organo horrek ebazpen arrazoitua emango du aipatutako baimena emateko, amaiera emango dio prozesuari eta artxibatu egingo ditu jarduerak.

33. artikulua. Eskaeraren edukia.

1. Ingurumen baimen bateratuaren eta ingurumen baimen bakarraren eskaera Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean aurkeztuko dira, eta honako hauek jasoko dituzte:

a) Proiektu teknikoa; gutxienez, honako alderdi hauek jasoko ditu:

1. Jardueraren eta instalazioen, ekoizpen prozesuen eta produktu motaren irismena eta deskribapen xehatua.

2. Hala badagokio, interesdunak administrazio publiko eskudunaren aurrean aurkezten duen dokumentazioa segurtasunean, pertsonen osasunean edo ingurumenean eragina duten jarduerak kontrolatzeko, aplikatu beharreko araudiarekin bat etorrita.

3. Hala badagokio, instalazioa jarriko den lekuaren ingurumen egoera eta aurreikusitako balizko inpaktuak, baita hura ustiatzeari utzi ondoren sor daitezkeenak ere.

4. Instalazioan erabilitako edo sortutako baliabide naturalak, lehengaiak eta materia osagarriak, substantziak, ura eta energia.

5. Instalazioan isurpenak sortzen dituzten iturriak.

6. Instalazioak airera, uretara eta lurzorura egin ditzakeen isurpen motak eta kantitateak, baita ingurumenean izan ditzakeen ondorioen zehaztapena ere, eta, hala badagokio, sortuko diren hondakin motak eta kantitateak.

7. Instalazioak sortutako hondakinen hierarkiaren lehentasun ordenaren aplikazioari buruzko neurriak.

8. Ingurumenerako isurpenak kontrolatzeko aurreikusitako neurriak.

Ingurumen baimen bateratuaren mendeko instalazioen kasuan, proiektu teknikoak honako hauek ere jasoko ditu:

- Instalaziotik eratorritako isurpenak prebenitzeko eta saihesteko erabilitako aurreikusitako teknologia eta beste teknika batzuk, eta hori ezin bada, murriztekoak, adieraziz horietako zein diren eskuragarri dauden teknika onentzat hartutakoak, eskuragarri dauden teknologia onenei buruzko ondorioekin bat etorrita.

- Eskatzaileak aztertutako proposatutako teknologia, teknika eta neurrien alternatiba nagusien laburpena, horrelakorik egonez gero.

b) Instalazioa dagoen lurren udalaren hirigintza txostena, proiektua hirigintza plangintzarekin bateragarria dela ziurtatzen duena.

c) Hala badagokio, ur kontinentaletara edo lurretik itsasora isuriak egitea baimentzeko uren eta kosten legediak eskatutako dokumentazioa.

Estatuko Administrazio Orokorrak kudeatutako arroetako ur kontinentaletarako isuriak badira, dokumentazio hori berehala bidaliko dio organo eskudunak arroaren erakundeari ingurumen baimen bateratua eta bakarra emateko, adieraz dezan ea beharrezkoa den eskatzaileari eskatzea akatsak konpontzeko edo aurkeztutako dokumentazioa osatzeko.

d) Eskatzailearen iritziz, isilpekotasuna behar duten datuen zehaztapena, indarrean dauden xedapenekin bat etorrita.

e) Legedia aplikagarrian ezarritako betebeharrak egiaztatzeko bestelako informazioa eta dokumentazioa; hala badagokio, besteak beste, ingurumen erantzukizuneko legediak eska ditzakeen nahitaezko fidantzak edo aseguruak barne.

f) Jarduera egiteak substantzia arriskutsu garrantzitsuen erabilera, ekoizpena edo isurpena badakar, instalazioa kokatuta dagoen lekuan lurzorua kutsatzeko eta lurpeko urak kutsatzeko arriskua aintzat hartuta, oinarrizko txosten bat eskatuko da instalazioa ustiatzen hasi aurretik edo baimena eguneratu aurretik, eta beharrezkoa den informazioa emango da lurzoruaren eta lurpeko uren egoera zehazteko, jarduera egiteari behin betiko utzi ondorengo egoerarekin konparazio kuantitatiboa egin ahal izateko.

2. Ingurumen baimen bateratuaren eta ingurumen baimen bakarraren eskaerarekin batera aurreko paragrafoan zehaztutako adierazpen guztien laburpen ez tekniko bat egingo da, errazago ulertzeko, jendaurrean jartzeko izapidearen ondorioetarako.

3. Jarduera edo instalazioa ingurumen ebaluazio arruntaren edo sinplifikatuaren mende badago, gainera, eskaerak dokumentu teknikoa izan beharko du hartan jasota lehenengo paragrafoko a eta c epigrafeetan eskatutako edukiak, ingurumen inpaktuaren azterketak edo, hala badagokio, ingurumen agiriak bere dituen edukiekin batera.

34. artikulua. Zuzentzea.

Eskaerak ez baditu betetzen aurreko artikuluan eskatutako betebeharrak, interesdunari eskatuko zaio hamabost eguneko epean zuzentzeko. Halaber, adieraziko zaio hori egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, eta, horretarako, aurretik ebazpena egin beharko da, administrazio prozedurari buruzko estatuko oinarrizko legedian ezarritako baldintzetan.

35. artikulua. Jendaurreko informazioa.

1. Eskaera aurkeztu ondoren eta aurkeztutako dokumentazioa osorik dagoela ikusi ondoren, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoan iragarrita, instalazioaren edo jardueraren proiektua jendaurrean jarriko da hogeita hamar egun baliodunetarako, alegazioak aurkez daitezen. Difusio handiagoa emateko, iragarki hori jarduera edo instalazioa kokatzen den udalerriko udalari komunikatuko zaio, jendaurrean jar dezan ediktu-taulan.

2. Jendaurreko informazioko aldia komuna izango da ingurumen baimen bateratuaren eta ingurumen baimen bakarraren prozedura osatzen duten prozeduretarako, eta, hala badagokio, ingurumen inpaktuaren ebaluaziorako eta instalazioak behar dituen funtsezko baimen prozeduretarako.

3. Jendaurreko informazioko izapidetik salbuetsiko dira isilpekoak diren eskaerako datuak, indarrean dagoen legediarekin eta lege honen 26. artikuluan ezarrikoarekin bat etorrita.

36. artikulua. Udal txostena ingurumen baimen bateratuaren eta ingurumen baimen bakarraren mendeko jardueretan.

1. Ingurumen baimen bateratuaren edo ingurumen baimen bakarraren prozedurak ordezkatu egingo du jarduera sailkatuaren lizentziaren prozedura izapide guztietan.

2. Jendaurreko informazioaren aldian, eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak eskatuta, ingurumen baimen bateratuaren eta ingurumen baimen bakarraren mendeko jarduera edo instalazioa garatu nahi den mugarteko udalerriek nahitaezko txosten bat igorriko dute, espedientea jasotzen dutenetik hogeita hamar egun balioduneko epean, udal eskumenekoak diren alderdiei buruz. Txosten hori epe barruan egin ezean, jarduerekin jarraituko da.

3. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak alegazioak jasotzen baditu jendaurreko informazioko aldian, horiek jarduera edo instalazioa dagoen lekuko udalari helaraziko zaizkio, kontuan har ditzan udal txostenean. Horretarako, epea luzatuko da eta beste hilabete bat izango du, ingurumen-organoak helarazitako alegazio horiek jasotzen dituen unetik zenbatzen hasita.

37. artikulua. Isurien arloko erakunde eskudunen txostena.

1. Ingurumen baimen bateratuaren edo ingurumen baimen bakarraren mendeko jarduerek jabari publiko hidraulikora edo itsasoko eta lehorreko jabari publikora isuriak egiteko baimena behar badute, erakunde eskudunak nahitaezko txosten loteslea igorri beharko du sei hilabeteko epean. Agiri horren

bitartez zehaztuko dira isuriaren ezaugarriak eta hartu beharreko neurri zuzentzaileak.

2. Ingurumen baimen bateratuaren edo ingurumen baimen bakarraren mendeko jarduerek kolektorera isuriak egiteko baimena behar badute, haren titularrak nahitaezko txosten loteslea igorri beharko du hiru hilabeteko epean. Agiri horren bitartez zehaztuko dira isuriaren ezaugarriak eta hartu beharreko neurri zuzentzaileak.

3. Aurreko paragrafoetan ezarritako epeak igaro eta txostenak igorri ezean, baimena eman ahal izango da, eta bertan jasoko dira isuriaren ezaugarriak eta eskatutako neurri zuzentzaileak, aplika daitekeen legedi sektorialarekin bat ezarriko direnak. Nolanahi ere, aipatutako epe horiez kanpo eta baimena eman aurretik jasotako txostenak Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak hartu beharko ditu aintzat.

4. Artikulu honetan araututako txostenek erabakitzen badute onartezina dela isuria, eta, beraz, baimena ematea eragozten badute, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ezezko ebazpen arrazoitua igorriko du.

38. artikulua. Beste txosten batzuk.

1. Jendaurrean jartzeko aldian, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak nahitaezko osasun txosten loteslea eta jardueraren izaeraren arabera beharrezkoak diren txosten teknikoak eskatuko dizkie adierazpenen bat egin behar duten organo guztiei, eskaera aurkeztu eta hilabeteko epean beren eskumeneko gaiei buruzko txostenak egin ditzaten.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak alegazioak jasotzen baditu jendaurrean jartzeko aldian, adierazpena egin behar duten organoei emango zaie horien berri, txostenean aintzat har ditzaten. Horretarako, beste hilabete bateko epea izango dute.

3. Adierazitako epean txosten horiek igorri ezean, jarduerekin jarraituko da, nahiz eta epez kanpo baina Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ebazpena eman aurretik jasotako txostenak azken horrek balioetsi beharko dituen.

39. artikulua. Ebazpen proposamena eta interesdunaren entzunaldia.

1. Aurkeztutako dokumentazioa, jendaurrean jartzeko izapidearen emaitza eta arestian aipatutako txostenak ikusi ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ebazpen proposamen bat egingo du, eta interesdunaren entzunaldi izapidean jarriko da hamabost eguneko epean.

2. Aurreko paragrafoan aipatutako entzunaldi izapidean alegazioak eginez gero, horiek helaraziko zaizkie, ebazpen proposamenarekin batera, alegazioak egin zaizkien txostenak egin dituzten organoei, gehienez ere hamabost eguneko epean egokitzat jotzen dutena adieraz dezaten.

3. Epea iraungi aurretik interesdunek adierazten badute ez dutela alegaziorik egingo eta ez dutela agiri edo frogagiri berririk aurkeztuko, izapidea betetzat joko da.

40. artikulua. Ebazpena.

1. Ingurumen baimen bateratua edo ingurumen baimen bakarra baimentzeko prozedurari amaiera emango dion ebazpenak zehaztuko ditu instalazioaren funtzionamendu baldintzak edo jarduera gauzatzeko baldintzak ingurumen ondorioetarako soilik, hurrengo artikuluan ezarriko denarekin bat.

2. Ingurumen baimen bateratua emango edo ukatuko duen ebazpen arrazoitua eskaera aurkezten denetik bederatzi hilabeteko epean emango da gehienez. Epe barruan ebazpenik ematen ez bada, ezetsitzat joko da eskaera.

3. Ingurumen baimen bakarra emango edo ukatuko duen ebazpen arrazoitua eskaera aurkezten denetik sei hilabeteko epean emango da gehienez. Epe barruan ebazpenik ematen ez bada, ezetsitzat joko da eskaera.

4. Baimenak emango edo ukatuko duen ebazpen arrazoitua interesdunei, instalazioa dagoen udalari, txostenak egin dituzten organoei eta, hala badagokio, organo eskudunari jakinaraziko zaie, funtsezko baimenak emateko. Ingurumen baimen bateratua oso-osorik argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren egoitza elektronikoan. Ingurumen baimen bakarra Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren egoitza elektronikoan argitaratuko da.

5. Baimenak emango edo ukatuko dituen ebazpenak, besteak beste, jendaurrean jartzeko izapidean eginiko alegazioei buruzko informazioa jasoko du, baita Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak horien inguruan eginiko balorazioei buruzkoa eta administrazio prozeduran eginiko txostenen edukiari buruzkoa ere.

41. artikulua. Ingurumen baimenen isurpenen mugako balioak.

1. Ingurumen baimen bateratuan isurpenen mugako balioak eskura dauden teknologia onenetan oinarrituta zehaztuko dira, eta, bereziki, hauek hartu beharko dira kontuan:

a) Eskura dauden teknika onenen ondorioei buruz emandako informazioa, teknika edo teknologia espezifiko bat erabiltzea agindu gabe.

b) I.A eta I. eranskinetan zerrendatutako instalazioen eta zerrenda horietan jasotako jardueraren bat garatzen den instalazioen ezaugarri teknikoak, kokapen geografikoa eta ingurumeneko tokiko baldintzak.

c) Isurpenen izaera eta ingurune batetik bestera lekualdatzeko ahalmena.

d) Erkidegoko araudian edo nazioarteko itunetan ezarritako konpromisoak betetzeko onartutako planak, hala badagokio.

e) Isurpenek kalte ditzaketen gizakien osasunean eta animalia eta landareen osasunaren baldintza orokorretan duten eragina.

f) Isurpenen mugako balioak, hala badagokio, baimena emandako datan indarrean zegoen araudiak emanak.

2. Ingurumen baimen bakarrean, kasua bada, isurpenen mugako balioak zehazteko eskura dauden teknologia onenak hartuko dira kontuan, aurreko paragrafoan ezarritakoarekin bat etorrita.

42. artikulua. Ingurumen baimen bateratuaren eta ingurumen baimen bakarraren edukia.

1. Ingurumen baimen bateratuak honako hau jasoko du gutxienez:

a) Substantzia kutsagarrietarako isurpenen mugako balioak eta, hala badagokio, mugako balio horiek osatuko edo ordezkatuko dituzten parametroak edo neurri tekniko baliokideak. Halaber, isurpenen mugako balioetara iristeko instalazioan erabilitako eskuragarri dauden teknika onenei buruzko ondorioetan jasotako eskuragarri dauden teknika onenak zehaztu beharko dira.

b) Hala badagokio, lurzoruaren eta lurpeko uren babesa bermatzen duten preskripzioak.

c) Instalazioak sortutako hondakinen kudeaketarako erabiliko diren prozedura eta metodoak, hondakinen kudeaketarako hierarkia kontuan izanda.

d) Hala badagokio, erkidego arteko edo mugaz gaindiko distantzia luzeko edo mugaz gaindiko eremuetan ondorio negatiboa duen kutsadura murriztea bermatzen duten preskripzioak.

e) Isurpen eta hondakin mota oro tratatzeko eta kontrolatzeko sistemak eta prozedurak, neurketa metodologia, maiztasuna eta neurketak ebaluatzeko prozedurak zehaztuta.

f) Ingurumenari eragin diezaioketen eta normalak ez diren egoeretako ustiapen baldintzei buruzko neurriak, hala nola abian jartzea eta geratzea, ihesak, funtzionamendu akatsak eta aldi baterako geldialdiak.

g) Aplika daitekeen legedi sektorialak ezarritako zeinahi neurri edo baldintza. Bereziki, hondakinen tratamendurako eragiketa bat edo gehiago egiten diren instalazioetarako.

h) Instalazioaren itxiera egiteko baldintzak.

i) Organo eskudunari aldizka eta gutxienez urtean behin honako hau jakinarazteko beharra:

ii) e) letran aipatutako isurpenen kontrolaren emaitzetan oinarritutako informazioa eta eskatutako beste datu batzuk, organo eskudunari ahalbidetuko diotenak baimenaren baldintzak betetzen direla egiaztatzea; eta

iii) Eskuragarri dauden teknika onenekin lotutako isurpenen balioak gainditzen diren isurpenen mugako balioak aplikatzen direnean, eskuragarri dauden teknika onenekin lotutako isurpen mailekin konparatzeko aukera emango duen isurpenen kontroleko emaitzen laburpen bat.

j) Lurzorura eta lurpeko uretara isurtzea ekiditeko hartutako neurriak mantentzeko eta aldian behin ikuskatzeko egokitu diren eskakizunak, b) letraren araberakoak, eta kasua bada, lurzorua eta lurpeko urak aldian behin

kontrolatzeko egokiak diren eskakizunak, aurki daitezkeen substantzia arriskutsuak direla-eta, instalazioa dagoen tokian lurzorua eta lurpeko urak kutsa ditzaketela kontuan izanda.

k) Isurpenen mugako balioak betetzen direla balioztatzeko baldintzak.

l) Baimena baliozkoa izanez gero titular desberdinek ustiatutako instalazio baten hainbat aldetarako, horietako bakoitzaren erantzukizunak.

2. Ingurumen baimen bakarrak honako hau jasoko du gutxienez:

a) Substantzia kutsakorretarako isurpenen mugako balioak eta, hala badagokio, lurzorua eta lurpeko urak babestea bermatzen duten preskripzioak.

b) Instalazioak sortutako hondakinen kudeaketarako erabiliko diren prozedura eta metodoak, hondakinen kudeaketarako hierarkia kontuan izanda.

c) Hala badagokio, erkidego arteko edo mugaz gaindiko distantzia luzeko edo mugaz gaindiko eremuetan ondorio negatiboa duen kutsadura murriztea bermatzen duten preskripzioak.

d) Isurpen eta hondakinak tratatzeko eta kontrolatzeko sistemak eta prozedurak, neurketa metodologia, maiztasuna eta neurketak ebaluatzeko prozedurak zehaztuta.

e) Ingurumenari eragin diezaioketen eta normalak ez diren egoeretako ustiapen baldintzei buruzko neurriak, hala nola abian jartzea eta geratzea, ihesak, funtzionamendu akatsak eta aldi baterako eteteak.

f) Instalazioaren itxiera egiteko baldintzak.

g) Aplika daitekeen legedi sektorialak ezarritako edozein neurri edo baldintza, edo Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak arrazoituta emandakoak.

3. Ingurumen legedi sektorialean ezarritakoari kalterik eragin gabe, lege honetan ezarritako ingurumen baimenak emateko Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, modu arrazoituan, eska dezake fidantza, abal edo aseguru bat jartzea, ezarritako baldintzak betetzea bermatzeko edo baimendutako jarduerak edo instalazioak sor ditzakeen kalteak konpontzea edo gutxitzea bermatzeko.

Berme horiek murriztu egin ditzake Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak jarduera eta instalazio horiek Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sisteman (EMAS) inskribatuta badaude.

4. Ingurumen baimen bateratuaren edo ingurumen baimen bakarraren mendeko instalazioa edo jarduera ingurumen inpaktu arruntaren edo sinplifikatuaren ebaluazioaren mende badago, horrez gain ingurumen inpaktuaren adierazpenaren edo ingurumen txostenaren berezko alderdiak jasoko ditu baimen horrek, lege honetan jasotakoaren arabera.

43. artikulua. Baimenen indarraldia eta berrikuspena.

1. Ingurumen baimen bateratuak eta ingurumen baimen bakarrak indarraldi mugagabea dute, eta aldizka berrikusten ditu Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, ingurumen baimenen aurrerapen klausularekin bat etorrita, eskuragarri dauden teknika onenetako aurrerapenek isurpenak nabarmen murrizteko aukera ematen dutenean.

2. Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ingurumen baimen bateratua berrikusi beharko du baimendutako instalazio edo jarduerari aplikagarri zaizkion eskuragarri dauden teknika onenen ondorioak argitaratzen direnetik lau urteko epean gehienez. Horren helburua da, beharrezkoa balitz, horiek egokitzea eta baimenean ezarritako baldintzak betetzen direla bermatzea. Berrikuspenak kontuan izango ditu instalazioan aplikagarriak diren teknika onenen erreferentziazko dokumentuei buruzko

ondorio guztiak, baimena eman, eguneratu edo berrikusi zenetik, bai eta kontroletatik edo ikuskapenetatik lortutako zeinahi informazio ere.

3. Ingurumen baimen bateratuaren edo ingurumen baimen bakarraren mendeko instalazio edo jardueraren bat ez badago estalita eskuragarri dauden teknika onenei buruzko ondorioetan, baimenaren baldintzak berrikusi egingo dira, eta, hala badagokio, artikulu honen lehenengo paragrafoan aipatutako aurrerapen klausularen arabera egokituko dira.

4. Nolanahi ere, ingurumen baimen bateratua eta ingurumen baimen bakarra ofizioz berrikusiko dira kasu hauetan:

a) Instalazioak eragindako kutsaduraren ondorioz ezarritako isurpenen mugako balioak berrikustea edo berriak hartzea komeni denean.

b) Isurpenak nabarmen murriztu badaitezke gehiegizko kosturik ezarri gabe eskuragarri dauden teknika onenetan izandako aldaketa garrantzitsuen ondorioz.

c) Aldaketa garrantzitsua gertatzen bada hartzaileen mugako immisio balioetan.

d) Prozesuaren edo jardueraren funtzionamenduaren segurtasunagatik beste teknika batzuk erabili behar direnean.

e) Isurien arloko organo eskudunak erabakitzen duenean bere eskumenen arloan emandako ingurumen baimena berrikustea justifikatzen duten baldintzak daudela. Kasu horretan, erakunde horrek Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari txosten loteslearen bitartez eskaera egingo dio, berrikuspen prozedura abiaraz dezan.

f) Jarduerari edo instalazioari aplikagarria zaion legedi sektorialak hala eskatzen duenean, edo ingurumen kalitateko arau berriak edo berrikusiak bete behar direnean.

5. Ingurumen baimenen berrikusteak ez du emango eskubiderik kalte-ordainik jasotzeko.

44. artikulua. Ingurumen baimen bateratuak funtsean aldatzeko prozedura.

Ingurumen baimen bateratuaren mendeko jardueretan, lege honen 29. artikuluan aipatutako funtsezko aldaketarako prozedura kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuen legedia garatzen duen oinarrizko araudian ezarritakoa izango da.

45. artikulua. Ingurumen baimen bakarrak funtsean aldatzeko prozedura.

1. Ingurumen baimen bakarraren mendeko jardueren kasuan, funtsezko aldaketarako prozedura honako izapide hauen arabera aginduko da:

a) Funtsezko aldaketarako eskaerak agiri hauek jasoko ditu gutxienez:

a) Oinarrizko proiektua, honako hau jasoko duena, dagokionaren arabera:

1. Aldaketak eragingo dion/dien instalazioaren zatia edo zatiak.

2. Egin nahi den funtsezko aldaketarekin aurreikusten diren ingurumen inpaktuak, bai eta hura ustiatzeari uztean sor daitezkeenak ere.

3. Ingurumenean inpaktu horiek saihesteko, zuzentzeko edo, hala badagokio, konpentsatzeko aurreikusitako neurriak.

b) Isurien arloko araudiak eskatutako dokumentazioa, hala badagokio.

c) Eskatzailearen iritziz, isilpekotasuna behar duten datuen zehaztapena, indarrean dagoen araudiarekin bat etorrita.

d) Legedia aplikagarrian ezarritako betebeharrak egiaztatzeko bestelako informazioa eta dokumentazioa; hala badagokio, besteak beste, eska daitezkeen nahitaezko fidantzak edo aseguruak barne.

e) Jarduera edo instalazioa ingurumen ebaluazio arruntaren edo sinplifikatuaren mende badago, gainera, eskaerak dokumentu teknikoa izan beharko du eta hartan jaso beharko dira paragrafo honen a eta b epigrafeetan eskatutako edukiak, ingurumen inpaktuaren azterketak edo, hala badagokio, ingurumen agiriak bere dituen edukiekin batera.

2. Eskaeran ez da aurkeztuko udalaren hirigintza txostena, txostena egin zen uneko hirigintza baldintzak aldatzen badira salbu. Era berean, ez da aurkeztu beharko jatorrizko baimena eskatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari aurkeztu zitzaizkion instalazioaren, ekoizpen prozesuaren eta kokapenaren gertakari, egoera eta gainerako baldintza eta ezaugarri teknikoei buruzko bestelako dokumentazioa ere.

3. Funtsezko aldaketaren eskaera jaso ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, hala badagokio, titularrari eskatuko dio akatsak konpontzeko edo falta den dokumentazioa aurkezteko hamabost eguneko epean gehienez. Gainera, adieraziko zaio hori horrela egin ezean, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela.

4. Dokumentazio osoa aurkeztu ondoren, organo eskudunak:

a) Jendaurrean jarriko du hogei egunez.

b) Baimendutako isuriaren ezaugarrietan aldaketak eginez gero, isurien arloko organo eskudunari igorriko dio, 37. artikuluan aipatutako txostena egin dezan lau hilabeteko epean gehienez.

5. Jendaurrean jartzeko izapidearen aldi berean, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak espediente osoa bidaliko die instalazioa dagoen udalerriko udalari eta beren eskumenen arloetan txostena egin behar duten gainerako organoei, dagozkien txostenak egin ditzaten.

6. Aurreko paragrafoan aipatutako jendaurrean jartzeko izapidean alegazioak eginez gero, horiek helaraziko zaizkie alegazioak egin zaizkien txostenak egin dituzten organoei, gehienez ere hamabost eguneko epean egokitzat jotzen dutena adieraz dezaten.

7. Aurkeztutako dokumentazioa, jendaurrean jartzeko izapidearen emaitza eta arestian aipatutako txostenak ikusi ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ebazpen proposamen bat egingo du, eta interesdunaren entzunaldi izapidean jarriko da hamar eguneko epean.

8. Aurreko paragrafoan aipatutako entzunaldi izapidean alegazioak eginez gero, horiek helaraziko zaizkie, ebazpen proposamenarekin batera, alegazioak egin zaizkien txostenak egin dituzten organoei, gehienez ere hamar eguneko epean egokitzat jotzen dutena adieraz dezaten.

9. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak egingo du prozedura amaituko duen ebazpena lau hilabeteko epean. Lau hilabeteko epe hori igaro eta berariazko ebazpenik jakinarazi ez bada, ulertuko da aurkeztutako eskaera ezetsi egin dela.

10. Funtsezko aldaketaren ebazpenaren ondoren, gaiak eragindako aldeak edo aldeek abian jarri ahal izango dute, lege honen 47. artikuluan adierazitako baldintzetan.

46. artikulua. Ingurumen baimen bakarrak funtsean ez aldatzeko prozedura.

1. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak lege honen 29. artikuluan jasotako baldintzetan funtsezkoa ez den aldaketa baten jakinarazpena eta justifikaziozko dokumentazioa jaso ondoren, balioztatu egingo du, funtsezkoa ez dela berresteko eta, hala bada, arestian aipatutako baimena egokituko du.

2. Egokitzapen hori titularrari jakinaraziko zaio eta iragarri egingo da Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren mendeko Euskadiko ingurumeneko informazio sistemaren bitartez.

3. Hogeita hamar egun igaro eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak adierazpenik egiten ez badu, jardueraren edo instalazioaren titularrak bere jakinarazpenean adierazitako baldintzetan gauzatu ahal izango du.

47. artikulua. Funtzionatzen hasteari edo irekitzeari buruzko jakinarazpena.

1. Ingurumen baimen bateratuaren edo ingurumen baimen bakarraren mendeko jarduera bati ekin aurretik, baimenaren titularrak jakinarazpen bat aurkeztu beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean eta instalazioa dagoen udalaren aurrean. Jakinarazpen horretan egiaztatuko da bere erantzukizunpean instalazioa onartutako proiektura egokitzen dela, eta ezarritako baldintzak betetzeko konpromisoa adieraziko du.

2. Jakinarazpen hori egingo da instalazioak martxan jartzeko gaituta daudenean, eta, hala badagokio, lizentziak, baimenak, jakinarazpenak edo inskripzioak eduki beharko ditu dagozkion erregistro sektorialetan.

3. Jakinarazpenarekin batera teknikari eskudunak sinatutako ziurtagiri bat aurkeztuko da, baimenaren helburu den jarduera motaren arabera, eta egiaztatuko du instalazioak onartutako proiektuarekin bat datozela eta bete direla ingurumen baimen bateratuan edo ingurumen baimen bakarrean ezarritako baldintzak.

4. Jakinarazpen hori aurkezteak gaitu egiten du une horretatik aurrera jarduera eraginkortasunez egiteko. Nolanahi ere, administrazio publikoek beren eskumenen arloetan egiaztapen, kontrol eta ikuskapen gaitasunak baliatu ahal izango dituzte.

5. Jakinarazpenak jasotako edo harekin batera aurkeztutako datuak, adierazpenak edo dokumentuak zehatzak ez badira, faltsututa badaude edo funtsezko zerbait agertzen ez bada, edo horrelakorik aurkezten ez bada, ezin izango da jarduera egiten jarraitu gertakari horien berri izaten den unetik. Dena dela, kasu horretan egon litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak bete beharko dira.

6. Gertakari horiek adieraziko dituen administrazio ebazpenak zehaztu ahal izango du interesdunak dagokion jarduera hasi aurretik zuen egoera juridikoa lehengoratzeko betebeharra. Gainera, ezingo du beste urtebetez, gehienez, prozedura berririk eskatu helburu berarekin.

IV. KAPITULUA. JARDUERA SAILKATUAREN LIZENTZIA

48. artikulua. Jarduera sailkatuaren lizentzia.

1. Jarduera sailkatuaren udal lizentziaren erregimenaren mende dago titulartasun publiko edo pribatuko jarduera eta instalazioak ustiatzea, horietan lege honen I.C Eranskinean jasotako jardueraren bat garatzen bada. Lizentzia hori, nolanahi ere, instalazioak eraiki, muntatu edo lekualdatu baino lehen eskuratu beharko da, eta instalazio horietan egingo diren aldaketetara egokituko da.

2. Jarduera sailkatu bat ustiatu, lekualdatu edo funtsean aldatu nahi duen pertsona fisikoak edo juridikoak jarduera hori kokatu nahi den udalerriko udalari eskatu beharko dio aurretiaz jarduera sailkatuaren lizentzia, lege honetan ezarritako prozeduraren arabera.

3. Jarduera sailkatu baten aldaketa funtsezkoa den ala ez zehaztea interpretatzeko irizpide gisa lege honen 29. artikuluan ezarritako irizpideak erabiliko dira.

4. Udalek ordenantzen bitartez garatu ahal izango dituzte emandako jarduera sailkatuen lizentzien funtsezko aldaketak edo funtsezkoak ez diren aldaketak izapidetzeko prozedurak.

49. artikulua. Jarduera sailkatuaren lizentzia eskatzea.

1. Jarduera sailkatuaren lizentziaren eskaera udalean aurkeztu beharko da eta horrekin batera, eskumena duen teknikariak sinaturiko proiektua aurkeztu beharko dira. Proiektu horretan zehaztuko dira jardueraren ezaugarriak, kokatuko den ingurunearen deskribapena, ingurumenean izan dezakeen

ondorioa eta erabiltzea proposatzen diren neurri babesleak eta zuzentzaileak, eta horien eraginkortasun maila eta segurtasun bermea ere adieraziko dira.

2. Udaleko organo eskudunak egiaztatuko du aurkeztutako dokumentazioa bidezkoa den eta, nahikoa ez bada, eskatzaileari eskatuko zaio osatzeko hamar eguneko epean. Gainera, adieraziko zaio hori horrela egin ezean, atzera egin duela ulertuko dela. Horretarako, ebazpena egingo da aurrez, eta administrazio prozedurari buruzko estatuko oinarrizko legedian ezarritako baldintzetan igorriko da.

3. Proiektua ingurumen inpaktuaren ebaluazioaren izapidearen mende badago, dela arrunta dela sinplifikatua, ingurumen inpaktuaren azterketa edo ingurumen dokumentua ere aurkeztu beharko dira, hala badagokio.

50. artikulua. Jendaurrean jartzea eta txostenak egitea.

1. Udalaren hirigintza plangintzan edo udal ordenantzetan oinarrituta, udal eskumeneko arrazoiengatik lizentzia berariaz ezesten bada salbu, udalak eskaera jendaurrean jarriko du. Horretarako, iragarki bat argitaratuko du dagokion Aldizkari Ofizialean, erakunde horren egoitza elektronikoan, bai eta udal ediktu bidez.

2. Jendaurrean jartzeko epea hogeita hamar egunekoa izango da, alegazioak aurkez daitezen. Jendaurrean jartzeko epearen aldi berean, udalak nahitaezko osasun txosten loteslea eta jardueraren izaeraren arabera beharrezkoak diren txosten teknikoak eskatuko dizkie beren eskumenak betez adierazpenen bat egin behar duten organo guztiei, hamabost eguneko epean, aurkeztutako eskaera ikusirik, beharreko txostena igorri dezaten.

3. Jendaurreko informazio epean alegazioak jasotzen badira, txostenean aintzat hartzeko adierazpenen bat egin behar duten organoei igorriko zaizkie, eta hamabost eguneko epe gehigarria izango da horretarako.

4. Aipaturiko epean ez bada txostenik igorri, jarduerekin aurrera jarraituko da. Nolanahi ere, epez kanpo, baina udalak ebazpena eman aurretik jasotako txostenak balioetsi egin beharko ditu udalak.

51. artikulua. Neurri babesleak eta zuzentzaileak ezartzeko txostena.

1. 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriek neurri babesleak eta zuzentzaileak ezartzeko txostena eskatu beharko diote dagokion foru-aldundiko ingurumen eskumenak dituen organoari. Txosten hori nahitaezkoa eta loteslea izango da eta jarduera ingurunearekin bateragarria izateko eska daitezkeen ingurumeneko neurri babesleak eta zuzentzaileak jasoko ditu.

2. 10.000 biztanle edo gehiago dituzten udalerriek aurreko paragrafoan adierazitako txostena eskatu ahal izango diote dagokion foru-aldundiko ingurumen eskumenak dituen organoari. Txosten hori eskatu ezean, udalerriek eurek ezarriko dituzte jarduera sailkatuaren lizentziaren mendeko jarduera edo instalazioaren ingurumen neurri babesleak eta zuzentzaileak.

3. Espediente osoa jasotakoan, foru-aldundiko ingurumen eskumenak dituen organoak aipaturiko txosten hori igorri beharko du gehienez ere hamabost eguneko epean, udalak eskatzen dionetik aurrera kontatuta.

4. Jarduera edo instalazioa ingurumen inpaktuaren ebaluazio arruntaren edo sinplifikatuaren mende badago, ez da beharrezkoa izango txosten hori, eta Euskal Autonomia Erkidegoko edo foru-aldundiko, dagokionaren arabera, ingurumen-organoak emandako adierazpenarekin edo ingurumen txostenarekin ordeztuko da.

52. artikulua. Jarduera lizentzia ematea.

1. Aurkeztutako dokumentazioa, alegazioak eta txostenak ikusita, udalak ebatzi eta jakinarazi egin beharko du lizentzia ematen edo ukatzen den lau hilabeteko epean gehienez, eskaera aurkezten denetik zenbatzen hasita.

2. Lau hilabete igaro eta ebazpenik igorri ez bada, ulertu ahal izango da jarduera sailkatuaren lizentziaren eskaera ezetsi egin dela.

3. Lizentzia ematen dela pertsonalki jakinaraziko zaie interesdunei eta txostenen bat egin duten organoei, eta horren berri emango zaie jendaurrean jartzeko izapidean alegazioak aurkeztu dituztenei, eta argitaratu egingo da dagokion udalaren egoitza elektronikoan.

4. Udalek Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari eta dagokion foru-aldundiaren ingurumen eskumenak dituen organoari (neurri zuzentzaileak jartzeko txostena igorri badu) jakinarazi beharko diote jarduera sailkatuaren lizentzia eman dela, bai eta funtsean aldatu dela eta aurretiaz baimendutako jarduera eta instalazioak behin betiko amaitu direla ere.

5. Udalek beren udalerrian garatzen diren jarduera sailkatuen lizentziaren mendeko jarduera eta instalazioen erregistroa edukiko dute.

6. Udal emaileari dagokio jarduera sailkatuaren lizentziaren mendeko jarduerak egiaztatzea, zaintzea, ikuskatzea eta zehatzea. Funtzio horiek egiteko, foru-aldundiaren laguntza teknikoa eskuratu ahal izango dute.

53. artikulua. Jarduera sailkatuaren hasierari edo irekierari buruzko jakinarazpena.

1. Jarduera hasteko, titularrak jakinarazpen bat aurkeztu beharko du udalaren aurrean, eta agiri horretan bere erantzukizunpean adieraziko du onartutako proiektuarekin bat datorrela eta, hala badagokio, jarduera

sailkatuaren lizentzian ezarritako neurri zuzentzaile osagarriekin. Gainera, ezarritako baldintzak betetzeko konpromisoa adieraziko du.

2. Jakinarazpen hori egingo da instalazioak martxan jartzeko gaituta daudenean, eta, hala badagokio, lizentziak, jakinarazpenak edo inskripzioak eduki beharko ditu dagozkion erregistro sektorialetan.

3. Jakinarazpenarekin batera teknikari eskudunak sinatutako ziurtagiri bat aurkeztuko da, lizentziaren helburu den jarduera motaren arabera, eta egiaztatuko du instalazioak onartutako proiektuarekin bat datozela eta jarduera sailkatuaren lizentzian ezarritako baldintzak bete direla.

4. Hala ere, jendaurreko ikuskizunen eta jolas jardueren Legepean dauden establezimendu publikoak aurreko paragrafoan adierazitako baldintzetan has daitezke funtzionatzen, aurretiazko jakinarazpenarekin batera aurkeztutako ziurtagiri teknikoak egiaztatzen badu horrela ez dela arriskuan jartzen pertsonen, ondasunen eta ingurumenaren segurtasuna, bai eta establezimenduaren lizentzian eskatutako baldintzaren bat betetzea egiaztatu gabe gelditzen den kasuetan ere.

5. Kasu horietan, lizentzian eskatzen diren gainerako baldintzak betetzen dituela egiaztatu beharko du establezimenduaren titularrak sei hilabeteko epean. Sei hilabete pasatu eta hala ere ez bada egiaztatu baldintzak betetzen direla, indarrik gabe geratuko da lizentzia.

6. Aurreko jakinarazpena aurkezteak gaitu egiten du une horretatik aurrera jarduera eraginkortasunez egiteko. Nolanahi ere, administrazio publikoek beren eskumenen arloetan egiaztapen, kontrol eta ikuskapen gaitasunak baliatu ahal izango dituzte.

7. Jakinarazpenak jasotako edo harekin batera aurkeztutako datuak, adierazpenak edo dokumentuak zehatzak ez badira, faltsututa badaude edo funtsezko zerbait agertzen ez bada, edo horrelakorik aurkezten ez bada, ezin izango da jarduera egiten jarraitu gertakari horien berri izaten den unetik.

Dena dela, kasu horretan egon litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak bete beharko dira.

8. Gertakari horiek adieraziko dituen administrazio ebazpenak zehaztu ahal izango du interesdunak dagokion jarduera hasi aurretik zuen egoera juridikoa lehengoratzeko betebeharra. Gainera, ezingo du beste urtebetez, gehienez, prozedura berririk eskatu helburu berarekin.

9. Udalek aurretiaz jakinarazi beharreko sailkatutako jardueren pean dauden jarduera eta instalazioen erregistroa egingo dute, horiek udal mugartean egingo direnean.

54. artikulua. Jarduera sailkatuaren lizentzia berrikustea.

1. Jarduera sailkatuaren lizentzia ofizioz berrikusiko da kasu hauetan:

a) Instalazioak edo jarduerak eragindako kutsaduraren ondorioz isurpenen mugako balioak berrikustea edo balio berriak ezartzea komeni bada.

b) Aldaketa garrantzitsua gertatzen bada hartzaileen mugako immisio balioetan.

c) Instalazioaren edo jardueraren segurtasunak edo arau berrien aplikazioak horrela eskatzen badu.

2. Jarduera sailkatuaren lizentzia berrikusteak ez du eskubiderik emango kalte-ordainetarako.

V. KAPITULUA. JARDUERA SAILKATUAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENA.

55. artikulua. Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena.

1. Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenaren erregimen juridikoaren mende dago instalazio publiko edo pribatuak eraikitzea, muntatzea, ustiatzea eta aldatzea, baldin eta horietan lege honen I.D Eranskinean zerrendatutako jarduerak garatzen badira.

2. Udalari dagokio jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenaren mendeko jarduerak egiaztatzea, zaintzea, ikuskatzea eta zehatzea. Funtzio horiek egiteko, foru-aldundiaren laguntza teknikoa eskuratu ahal izango dute.

56. artikulua. Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena aurkeztea.

1. Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena aurkeztuko da instalazioak martxan jartzeko gaituta daudenean, eta, hala badagokio, lizentziak, baimenak, jakinarazpenak edo inskripzioak eduki beharko ditu dagozkion erregistro sektorialetan.

2. Helburu den jarduerak ez badu eskatzen garatuko den lokaletan obrak egitea, jakinarazpenaren eraginkortasuna instalazio horietan gauzatzea helburu den jardueraren hirigintza bateragarritasunaren mendekoa izango da.

3. Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenaren mendeko jarduera ingurumen ebaluazioaren mende jarri behar denean, jakinarazpen hori aldeko ingurumen txostena edo adierazpena egin ondoren aurkeztuko da.

57. artikulua. Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenaren edukia eta ondorioak.

1. Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

a) Jarduera eta dagoen inguruneari begira izango dituen inpaktu edo ondorio nagusiak deskribatuko dituen proiektua edo memoria, bereziki isurpenen, isurien, hondakinen, lurzoruen eta kutsadura akustikoaren arloetan. Ingurunean, pertsonengan edo haien ondasunengan izan ditzakeen ondorioak murrizteko ezarritako neurriak azalduko ditu halaber.

b) Jakinarazpenaren helburu den jarduera motaren arabera, teknikari eskudunak sinatutako ziurtagiria, instalazioak aurkeztutako proiektuarekin edo memoriarekin bat datozela eta aplikagarri zaizkion ingurumeneko araudi sektorialaren betebeharrak betetzen dituela ziurtatzen duena.

c) Hala badagokio, aldeko ingurumen inpaktuaren adierazpenaren edo ingurumen txostenaren kopia.

2. Jakinarazpena egin ondoren, jarduera egiten hasi ahal izango da, jardueraren titularrak diren pertsona fisiko edo juridikoen erantzukizunpean.

3. Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenaren mendeko jarduerek edo instalazioek aplikagarri zaizkien ingurumen legediko preskripzio teknikoetan ezarritako isurpenen mugako balioak bete beharko dituzte, eta, hala badagokio, ingurumen inpaktuaren adierazpenean edo ingurumen inpaktuaren txostenean ezarritakoak.

4. Aurretiazko jakinarazpenak jasotako edo harekin batera aurkeztutako datuak, adierazpenak edo dokumentuak zehatzak ez badira, faltsututa badaude edo funtsezko zerbait agertzen ez bada, edo horrelakorik aurkezten ez bada, ezin izango da jarduera egiten jarraitu gertakari horien berri izaten den unetik. Dena dela, kasu horretan egon litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak bete beharko dira.

5. Gertakari horiek adieraziko dituen administrazio ebazpenak zehaztu ahal izango du interesdunak dagokion jarduera hasi aurretik zuen egoera juridikoa lehengoratzeko betebeharra. Gainera, ezingo du beste urtebetez, gehienez, prozedura berririk eskatu helburu berarekin.

58. artikulua. Jarduera aldatzea.

1. Instalazioaren ezaugarriei, ekoizpen prozesuei, funtzionamenduari edo hedapenari eragiten dion zeinahi lekualdaketa, transmisio eta aldaketa udalari jakinarazi beharko zaio, salbu eta jardueraren aldaketak berarekin badakar aplika daitekeen esku hartzeko erregimena aldatzea. Kasu horretan, lege honetan erregimen horretarako ezarritakoa bete beharko da.

2. Titularrak aldaketa funtsezkotzat hartzen badu eta aplika daitekeen esku hartzeko erregimenean aldaketarik ez badakar, jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpen berri bat egin beharko da, aurreko artikuluan deskribatutako moduan.

3. Aldaketa funtsezkoa den ala ez zehaztea interpretatzeko irizpide gisa lege honen 29. artikuluan ezarritako irizpideak erabili ahal izango dira.

BOSGARREN TITULUA. INGURUMEN EBALUAZIOA.

I. KAPITULUA. INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOAREN ETA INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIOAREN XEDAPEN OROKORRAK.

59. artikulua. Ingurumen ebaluazioa.

1. Ingurumen ebaluazioko prozeduraren mende jarriko dira nahitaez ingurumenean eragin nabarmenak izan ditzaketen plan, programa eta proiektuak eta horien aldaketak eta berrikuspenak, ingurumena babesteko maila handia bermatzeko eta ingurumen jasangarria sustatzeko asmoz. Horretarako, honako hauek egingo dira:

a) Planak, programak eta proiektuak egiteko, hartzeko, onesteko edo baimentzeko ingurumen alderdiak integratu.

b) Ingurumen alternatiba bideragarriak aztertu eta hautatu.

c) Ingurumenarekiko ondorio kaltegarriak prebenitzeko, zuzentzeko eta, hala badagokio, konpentsatzeko aukera ematen duten neurriak ezarri.

d) Ingurumen ebaluazioren helburua betetzeko beharrezkoak diren zaintza, jarraipen eta zehapen neurriak ezarri.

2. Planak, programak eta proiektuak ingurumen ebaluazioaren prozeduraren mende jarriko dira administrazio publiko eskudunak horiek onartu, baimendu edo behin betiko hartu baino lehen.

Erantzukizunpeko adierazpenaren edo aurretiazko jakinarazpenaren mendeko proiektuen kasuan, proiektua gauzatzeko gaikuntza emateari begira adierazpen edo jakinarazpen horrek ondorioak izan aurretik egin beharko da ingurumen ebaluazioa.

3. Ingurumen ebaluazioak izaera instrumentala izango du planak eta programak onartzeko edo hartzeko administrazio prozedurari dagokionean eta proiektuak baimentzeko edo onartzeko prozedurari dagokionean edo, hala badagokio, aurretiazko jakinarazpenaren edo erantzukizunpeko adierazpenaren mendeko proiektuak kontrolatzeko administrazio jarduerari dagokionean.

4. Aldaketei aplikatu beharreko erregimena gorabehera, ez dira ingurumen ebaluazioren mende jarriko indarrean dagoen izaera substantiboko administrazio gaikuntzaren bat duten proiektuak.

60. artikulua. Ingurumen ebaluazioko prozedurak.

1. Planek, programek eta proiektuek eta horien aldaketek gainditu beharreko ingurumen ebaluazio mota plan, programa eta proiektu horiek eta horien aldaketak eta berrikuspenak ingurumenean izan ditzaketen efektu nabarmenen probabilitate mailarako egokia izango da. Horrenbestez, ingurumen ebaluazioko prozedura hauek ezartzen dira:

a) Probabilitate maila handiarekin ingurumenean efektu nabarmenak izan ditzaketen planen eta programen eta horien aldaketen eta berrikuspenen ingurumen ebaluazio estrategiko arrunta.

b) Probabilitate maila zehaztugabearekin ingurumenean efektu nabarmenak izan ditzaketen planen eta programen eta horien aldaketen eta berrikuspenen ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifikatua.

c) Ingurumenean efektu nabarmenak izan ditzaketen proiektuen eta horien aldaketen ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta, eragina izateko aukera handia denean.

d) Ingurumenean efektu nabarmenak izan ditzaketen proiektuen eta horien aldaketen ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua, eragina izateko aukera zenbatekoa den jakiten ez denean.

2. Ingurumen ebaluazioaren mende jarri beharreko plan, programa eta proiektuak lege honen II. Eranskinean zehazten dira.

61. artikulua. Eskumenak.

1. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak igorriko ditu ingurumen ebaluazioko prozedurak erabakitzeko adierazpenak eta txostenak, oinarrizko araudiak estatuko administrazio orokorrari esleitutako eskumenei kalterik egin gabe.

2. Nolanahi ere, plana, programa edo proiektua behin betiko onartzeko edo baimentzeko edo erantzukizunpeko adierazpena edo aurretiazko jakinarazpena behar duten proiektuen jarduera kontrolatzeko funtsezko eskumena lurralde historikoetako foru-organoek badute, aurreko paragrafoan ingurumen-organoari aitortutako eskumena azken hauek izango dute, planak, programak edo proiektuak lurralde historiko bat baino gehiago gainditzean edo lurralde historiko baten baino gehiagoren lurralde eremuari eragitean izan ezik. Kasu horretan, prozeduran foru-organoek parte hartzen dutela bermatuko da.

3. Aurreko paragrafoetan aipatutako ingurumen-organoek, ingurumen ebaluazioko adierazpenak eta txostenak igorri behar dituzten plan, programa eta proiektuei dagokienez, lege honek aurreikusitako eskumenak izango dituzte ebaluazioaren eta dokumentazioaren irismena aurretik zehazteko, adierazpen hori salbuesteko eta ingurumen adierazpenen eta txostenen indarraldia luzatzeko.

4. Organoei dagokie funtsezko prozedurak sustatzea, planak, programak eta proiektuak prestatu, onartu edo baimentzeko, eta, halaber, Lege honetan ezarritakoaren arabera aplikatu behar den ingurumen-ebaluazio arruntaren nahiz erraztuaren prozedurak bultzatzea.

62. artikulua. Ebaluatu gabeko planen, programen eta proiektuen deuseztasuna.

1. Zuzenbidean erabat deuseztzat izango dira planak, programak eta proiektuak eta horien aldaketak eta berrikuspenak hartzeko, onartzeko, baimentzeko, erantzukizunpeko adierazpena egiteko edo aurretiazko jakinarazpena egiteko egintzak, plan, programa edo proiektu horien ingurumen ebaluazioaren mende egon eta egintza horiek aplikagarri zaien ingurumen ebaluazioko prozedura burutu gabe igorri badira. Kasu horretan, dagozkion zehapenak ezarri ahal izango dira.

2. Nahitaezko ingurumen ebaluazioaren prozedura bete gabe zati batean edo erabat gauzatuak dauden proiektuen kasuan, organo substantiboak proiektu horiei dagokien ebaluazio prozedura ezarriko die halakorik ez dutela bete jakiten duen unean, eta geroko ebaluazioaren zehaztapen teknikoak aplikatuko ditu behar denean. Hala ere, hori guztia ez da eragozpen izango zehapenak ezartzeko, baldin eta arau-hausterik badago Lege honen 104.2.b) artikuluan ezarritakoarekin bat.

63. artikulua. Gaitasun teknikoa eta erantzukizuna.

1. Sustatzaileak bermatuko du ingurumen ebaluazioetarako beharrezkoak diren agiri teknikoak nahikoa gaitasun teknikoa duten pertsonek egitea, kualifikazio profesionalei buruzko arauekin eta goi mailako hezkuntzako arauekin bat etorrita, eta agiri horiek beharrezko kalitatea eta zehaztasuna izatea lege honen eskakizunak betetzeko, eta, hala badagokio, ingurumen-organoak ezarritako ebaluazioaren irismenera egokitzeko. Helburu horrekin, agiri horien egilea edo egileak adierazi beharko dira, bai eta horien titulua eta, hala badagokio, araututako lanbidea ere. Horrez gain, agiria zein datatan bukatu den eta egilearen edo egileen sinadura azalduko dira.

2. Agiri horien egileak eta sustatzailea izango dira agirien edukiaren eta informazioaren fidagarritasunaren erantzule solidarioak, administraziotik modu frogagarrian jasotako datuei dagokienez izan ezik.

64. artikulua. Isilpekotasuna.

1. Ingurumen ebaluazioko prozeduretan esku hartzen duten administrazio publikoek sustatzaileak helarazitako informazioen isilpekotasuna errespetatu beharko dute, aplikagarria den araudiarekin bat etorrita izaera hori dutenena, eta, nolanahi ere, interes publikoa babestea kontuan hartuko dute.

2. Sustatzaileak adierazi beharko du aurkeztutako dokumentazioko informazioaren zer zatik izan behar duen isilpekoa bere ustez. Administrazio eskudunak erabakiko du zer informazio dagoen salbuetsita, indarrean dagoen legediaren arabera, merkataritza edo industria sekretutik, bai eta isilpeko informazioa zein den ere; horretarako, ingurumenaren arloan informazio eta parte-hartze publiko erreal eta eraginkorraren printzipioa eta isilpekotasunerako eskubidea haztatuko dira.

3. Sustatzaileak adierazitako informazioaren isilpekotasuna osorik edo zati batean ukatuz gero, ebazpen arrazoitu bat igorri beharko da, eta dagozkion errekurtsoak zein diren adieraziko da.

65. artikulua. Ingurumen ebaluaziotik salbuetsitako planak, programak eta proiektuak.

1. Ingurumen ebaluazio prozedurak ez dira aplikagarriak izango kasu hauetan:

a) Planen edo programen helburu bakarra defentsa nazionala edo babes zibila denean larrialdi kasuetan.

b) Planak eta programak finantzarioak edo aurrekontuen arlokoak direnean soilik.

c) Plan, programa eta proiektu edo horien aldaketa eta berrikuspenetatik erator daitezkeen ekintzen tamaina eskasa dela eta, ingurumenean sor ditzaketen efektuak ez direnean nabarmenak argi eta garbi.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen-organoak irizpideak ezar ditzake, plan edo programa batek (edo plan edo programa baten aldaketa batek) ingurumenean izan ditzakeen ondoreak adierazgarriak izango ez direla kontsideratzeko orduan, hori zein egoeratan egin daitekeen zehazteko.

3. Plan eta programen ingurumen ebaluazio estrategikoak ez du baztertzen haiek esparru dituzten proiektuen ingurumen inpaktuaren ebaluazioa.

66. artikulua. Ingurumen ebaluaziotik salbuetsi daitezkeen proiektuak, kasuz kasu.

1. Salbuespenezko kasuetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu Kontseiluak salbuetsi egin ahal izango du, akordio arrazoitu bidez, lege honetan araututako ingurumen inpaktua ebaluatzeko prozedura aplikatzeko II. Eranskinean jasotako proiekturen bat. Kasu horietan, salbuetsitako proiektua lege honen printzipio eta helburuak betetzen dituen beste modu bateko ebaluazio baten mende jartzearen komenigarritasuna aztertuko da. Erabaki hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da eta Europako Batzordeari jakinaraziko zaio.

2. Horrez gain, jendaurrean jarriko da baztertzeko erabakiari buruzko informazioa eta hori justifikatzen duten arrazoiak, bai eta baztertutako proiektua ebaluatzeko beste modu batzuei buruzko azterketa ere.

3. Artikulu honetan araututako baztertzeko aukerek ez dituzte proiektuak salbuetsiko haiek Natura 2000 Sareko guneen gainean izan ditzaketen eraginen ebaluaziotik, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 46. artikuluan eskatu bezala.

67. artikulua. Ingurumen ebaluazio arrunten irismenaren zehaztapena.

1. Ingurumen-organoak zehaztuko du prozedura arruntaren mendeko plan, programa eta proiektuen ebaluazioaren irismena, ukituriko administrazio publikoei eta interesa dutenei kontsulta egin ondoren, eta beharrezkoa bada, prozeduran jaso beharreko ingurumen agirien edukia zehaztuko du, erregelamendu bidez ezarritako baldintzetan.

2. Irismen agiriaren eskaera nahitaezkoa izango da eta sustatzaileak haren edukira egokitu beharko du ingurumen azterketa estrategikoa edo ingurumen efektuaren azterketa idazterakoan

3. Ebaluazioaren irismena eta ingurumen ebaluazio estrategiko arruntaren espedienteetan jaso beharreko agirien edukia egokiak eta proportzionalak izango dira planaren edo programaren zehaztasun mailari dagokionez. Esperotako efektu motekin koherenteak izango dira eta efektu horien tamainarekiko proportzionalak.

4. Planak eta programak erabaki esparru hierarkiko desberdinetan egituratzen badira, horietako bakoitzaren ingurumen ebaluazioaren irismena zehazteko kontuan izan beharko da plana edo programa zer erabaki fasetan dagoen, jarduerak ez bikoizte aldera.

5. Ingurumen-organoak, gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango du, eskaera osoa jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita, artikulu honen lehen paragrafoan aurreikusitako kontsultak egiteko eta ingurumen-azterketa estrategikoaren irismen-agiria prestatzeko. Ingurumen-organoak egiten dituen kontsultei erantzuteko epea, gutxienez, hilabetekoa izango da.

6. Ingurumen-organoak, gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango du, eskaera osoa jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita, artikulu honen lehen paragrafoan aurreikusitako kontsultak egiteko eta ingurumen-inpaktuaren azterketaren irismen-agiria prestatzeko. Ingurumen-organoak egiten dituen kontsultei erantzuteko epea, gutxienez, hilabetekoa izango da.

7. Planen, programen eta proiektuen ebaluazioaren irismena zehazten duen ebazpena ingurumen-organoaren egoitza elektronikoan argitaratuko da.

8. Irismen-agiriak bere indarra galduko du, baldin eta ingurumen-azterketa estrategikoa edo ingurumen-inpaktuaren azterketa, dagokionaren arabera, sustatzaileari jakinarazten zaionetik lau urte igaro ondoren ez balitz izapidetzeko aurkeztu organo eskudunaren edo organo sustatzailearen aurrean. Sustatzailea eta organo sustatzailea edo, hala badagokio, organo eskuduna administrazio publikoko organo bera bada, irismen-agiriak bere indarra galduko du lau urteko epe hori igaro ondoren ez balitzaio hasiera eman jendaurreko informazioaren izapideari.

9. Ingurumen-organoaren aurretiazko adierazpena salbuetsi egin ahal izango da ebaluazioaren eta dokumentazioaren irismenari dagokionez, arauz ezarritako baldintzetan izan ditzaketen ingurumen efektuak sinpleak edo ondo ezagunak dituzten proiektuen ingurumen inpaktuaren ebaluazio arruntean, edo proiektu mota jakin batzuk ebaluatzeko nahikoa argibide tekniko eman direnean.

68. artikulua. Publizitatea

Ingurumen ebaluazio prozedurei amaiera ematen dieten ebazpenak dagokion aldizkari ofizialean eta ingurumen-organoaren egoitza elektronikoan argitaratuko dira.

Era berean, argitara emango dira ingurumen-ebaluazioa egina duten planak, programak eta proiektuak behin betiko onartzearekin edo baimentzearekin lotutako administrazio-egintzak eta beste erabaki mota batzuk, erregelamenduz garatuko diren baldintzetan.

69. artikulua. Erkidego arteko eta mugaz gaindiko harremanak.

1. Ingurumen ebaluazioaren mendeko jardueren kasuan, beste autonomia erkidego batean egonda Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean ingurumen

efektu nabarmenak eduki baditzake, azken horrek jarduketari buruzko informazioa eskatuko dio erkidego hari. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen den jarduera batek autonomia erkidego mugakide baten ingurumenean eragin nabarmena badu, erkidegoak informazioa emango dio jarduketari buruz.

2. Lege honen II. eranskinean ezarritako jarduerak gauzatzean beste estatu bateko ingurumenean mugaz gaindiko efektu nabarmenak sor baditzake, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak kaltetutako lurraldeko agintari eskudunei ingurumen azterketa estrategikoa edo, hala badagokio, ingurumen inpaktuaren azterketa helaraziko dizkio, horretarako egingo dena, agintari hark egokitzat jotako alegazioak edo gogoetak egin ditzan. Ondoren, behin betiko txostenaren edo ebazpenaren kopia bidaliko zaio; hori guztia Kanpo Arazoetako Ministerioaren bitartez egingo da. Nolanahi ere, erkidegoko araudian ezarritakoa eta estatuko arauek ezarritakoa beteko da.

70. artikulua. Ingurumen ebaluazioko prozeduretan interesa duten pertsona juridikoen erregistroa.

1. Ingurumen ebaluazioko prozeduretan interesa duten pertsonen erregistroa sortu da, interesa duten irabazi asmorik gabeko pertsona juridikoek aipaturiko prozeduretan eraginkortasunez parte hartzen dutela bermatzeko, baldin eta ingurumenaren alorrean informazioa eskuratzeko, jendeak parte hartzeko eta auzitegietara jotzeko eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 23.1 artikuluan jasotako baldintzak betetzen badituzte. Erregistroa Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren mendekoa izango da administratiboki.

2. Aurreko paragrafoan aipatutako interesa duten pertsonek Erregistro horretan izena emateko eskatu beharko dute ingurumen ebaluazio prozeduretan egiazko kontsulta ahalbidetzeko. Arauz erregulatuko da

ingurumen ebaluazioko prozeduretan interesa duten pertsona juridikoen erregistroaren antolamendua, funtzionamendua eta sarbidea.

II. KAPITULUA. PLAN ETA PROGRAMEN INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOA

71. artikulua. Ingurumen ebaluazio estrategikoaren esparrua.

1. Ingurumen ebaluazio estrategiko arrunta eduki beharko dute administrazio publiko batek hartutako II.A Eranskinean zerrendatutako planek eta programek, eta horien aldaketek eta berrikuspenek, eta horiek egitea lege edo erregelamendu xedapen batek edo Gobernu Kontseiluaren akordioren batek eskatzen badu.

2. Ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifikatua eduki beharko dute administrazio publiko batek hartutako II.B Eranskinean zerrendatutako planek eta programek, eta horien aldaketek eta berrikuspenek, eta horiek egitea lege edo erregelamendu xedapen batek edo Gobernu Kontseiluaren akordioren batek eskatzen badu.

72. artikulua. Informazio publikoa eta kontsultak.

Ingurumen ebaluazio estrategiko arrunta bete behar duen planaren edo programaren organo sustatzaileak parte-hartze publikoa ziurtatuko du prozeduran, jendaurreko informazio tramitearen bidez eta ukituriko administrazio publikoei eta interesa duten pertsonei kontsulta eginez, arauz zehaztutako baldintzetan, eta betiere, berrogeita bost eguneko epean gutxienez.

73. artikulua. Ingurumen adierazpen estrategikoaren izaera eta edukia.

1. Ingurumen ebaluazio estrategiko arruntaren prozedura amaitzeko ingurumen adierazpen estrategikoa egingo du ingurumen-organoak, lege honetan ezarritakoarekin bat etorrita. Ingurumen adierazpen estrategikoa nahitaezko txosten loteslea izango da.

2. Ingurumen-organoak, gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango du, eskaera osoa jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita, ingurumen-adierazpen estrategikoa emateko. Epe hori bi hilabetez luza daiteke, behar bezala arrazoituta justifikatuz gero.

3. Ingurumen adierazpen estrategikoak planean edo programan jaso beharreko prozeduraren mugarri nagusien, zehaztapenen, neurrien edo azken baldintzen laburpen bat jasoko du, bai eta hierarkikoki azpian dauden planek eta ingurumen ebaluazio estrategiko arruntaren prozeduraren mendeko planetan eta prometan jasotako proiektuek gainditu beharko duten ingurumen ebaluaziorako jarraibide orokorrak ere, hala badagokio.

4. Ingurumen adierazpen estrategikoak indarraldia galduko du eta berezkoak dituen efektuak izateari utziko dio argitaratu ondoren ez bada hartu edo onartu plana edo programa bi urteko epean.

5. Kasu horietan, sustatzaileak berriro hasi beharko du planaren edo programaren ingurumen ebaluazioaren izapidea, indarraldia luzatzeko eskatzen ez badio ingurumen-organoari. Kasu horretan, ingurumen-organoak, hala badagokio, ingurumen adierazpen estrategikoaren indarraldirako epe berria emango dio, arauz ezarritako baldintzetan.

74. artikulua. Ingurumen txosten estrategikoaren izaera eta edukia.

1. Ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura amaitzeko ingurumen txosten estrategiko bat egingo du ingurumen-organoak, lege honetan ezarritakoarekin bat etorrita, ukituriko administrazio publikoei eta

interesa duten pertsonei kontsulta egin ondoren. Ingurumen txosten estrategikoa nahitaezko txosten loteslea izango da.

2. Ingurumen-organoak, gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango du, eskaera osoa jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita, aurreko paragrafoan aurreikusitako kontsultak egiteko eta ingurumen-txosten estrategikoa prestatzeko. Ingurumen-organoak egiten dituen kontsultei erantzuteko epea, gutxienez, hilabetekoa izango da.

3. Ingurumen txosten estrategikoak prozeduraren mugarri nagusien laburpena jasoko du, eta zehaztuko du ea plana edo programa ingurumen ebaluazio estrategiko arruntaren mendean jarri behar den ala ez. II.C Eranskinean jasotako irizpideetara egokitu beharko da hori zehazteko orduan.

4. Txostenak ondorioztatzen badu plana edo programa ez dela ingurumen ebaluazio estrategiko arruntaren prozeduraren mendean jarri behar, ingurumen-organoak txosten horretan ezarriko ditu plana edo programa zer baldintzatan hartu behar den, planak edo programak ingurumenean ondorio nabarmenak ez dituela bermatzeko.

5. Ingurumen txosten estrategikoak indarraldia galduko du eta berezkoak dituen efektuak izateari utziko dio argitaratu ondoren ez bada hartu edo onartu plana edo programa lau urteko epean. Kasu horietan, sustatzaileak berriro hasi beharko du planaren edo programaren ingurumen ebaluazioaren izapidea, indarraldia luzatzeko eskatzen ez badio ingurumen-organoari. Kasu horretan, ingurumen-organoak, hala badagokio, ingurumen txosten estrategikoaren indarraldirako epe berria emango dio, arauz ezarritako baldintzetan.

III. KAPITULUA. proiektuen ingurumen inpaktuaren ebaluazioa

75. artikulua. Ingurumen inpaktuaren ebaluazioaren esparrua.

1. Ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta beharko dute II.D Eranskinean aipatutako proiektu publikoek edo pribatuek.

2. Ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua beharko dute II.E Eranskinean aipatutako proiektu publikoek edo pribatuek.

76. artikulua. Informazio publikoa eta kontsultak.

Organo substantiboak parte-hartze publikoa ziurtatuko du ingurumen inpaktuaren ebaluazio arruntaren prozeduran, jendaurreko informazio tramitearen bidez eta ukituriko administrazio publikoei eta interesa duten pertsonei kontsulta eginez, arauz zehaztutako baldintzetan, eta betiere, hogeita hamar eguneko epean gutxienez.

77. artikulua. Ingurumen inpaktuaren adierazpenaren izaera eta edukia.

1. Ingurumen inpaktuaren ebaluazio arruntaren prozedura amaitzeko ingurumen inpaktuaren adierazpena egingo du ingurumen-organoak, lege honetan ezarritakoarekin bat etorrita. Ingurumen inpaktuaren adierazpena nahitaezko txosten loteslea izango da.

2. Ingurumen-organoak, gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango du, eskaera osoa jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita, ingurumen-inpaktuaren adierazpena emateko. Epe hori bi hilabetez luza daiteke, behar bezala arrazoituta justifikatuz gero.

3. Ingurumen inpaktuaren adierazpenak jasoko ditu prozeduraren mugarri nagusien laburpena eta zehaztuko du, ingurumen efektuei begira, proiektua egitea bidezkoa den ahal ez, eta, hala badagokio, zer baldintzatan gara daitekeen. Besteak beste, hartu beharreko babesteko, zuzentzeko eta konpentsatzeko neurriak eta jarraipena egiteko neurriak jasoko ditu.

4. Ingurumen inpaktuaren adierazpenak indarraldia galduko du eta berezkoak dituen efektuak izateari utziko dio argitaratu ondoren ez bada proiektua gauzatzen hasi lau urteko epean. Kasu horietan, sustatzaileak berriro hasi beharko du proiektuaren ingurumen inpaktuaren ebaluazioaren izapidea, indarraldia luzatzeko eskatzen ez badio ingurumen-organoari. Kasu horretan, ingurumen-organoak, hala badagokio, ingurumen inpaktuaren adierazpenaren indarraldirako epe berria emango dio, arauz ezarritako baldintzetan.

78. artikulua. Ingurumen Inpaktuaren Txostenaren izaera eta edukia.

1. Ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatuaren prozedura amaitzeko ingurumen inpaktuaren txostena egingo du ingurumen-organoak, lege honetan ezarritakoarekin bat etorrita, ukituriko administrazio publikoei eta interesa duten pertsonei kontsulta egin ondoren. Ingurumen inpaktuaren txostena nahitaezko txosten loteslea izango da.

2. Ingurumen-organoak, gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango du, eskaera osoa jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita, aurreko paragrafoan aurreikusitako kontsultak egiteko eta ingurumen-inpaktuari buruzko txostena prestatzeko. Ingurumen-organoak egiten dituen kontsultei erantzuteko epea, gutxienez, hilabetekoa izango da.

3. Ingurumen inpaktuaren txostenak prozeduraren mugarri nagusien laburpena jasoko du, eta zehaztuko du ea proiektua ingurumen inpaktuaren ebaluazio arruntaren mendean jarri behar den ala ez. II.F Eranskinean jasotako irizpideetara egokitu beharko da hori zehazteko orduan.

4. Txostenak ondorioztatzen badu proiektua ez dela ingurumen inpaktuaren ebaluazio arruntaren prozeduraren mendean jarri behar, ingurumen-organoak

txosten horretan ezarriko du proiektua zer baldintzatan onartu behar den, proiektuak ingurumenean efektu nabarmenak ez dituela bermatzeko.

5. Ingurumen inpaktuaren txostenak indarraldia galduko du eta berezkoak dituen efektuak izateari utziko dio argitaratu ondoren ez bada proiektua gauzatzen hasi lau urteko epean. Kasu horietan, sustatzaileak berriro hasi beharko du proiektuaren ingurumen inpaktuaren ebaluazioaren izapidea, indarraldia luzatzeko eskatzen ez badio ingurumen-organoari. Kasu horretan, ingurumen-organoak, hala badagokio, ingurumen inpaktuaren txostenaren indarraldirako epe berria emango dio, arauz ezarritako baldintzetan.

SEIGARREN TITULUA. INGURUMENAREN HOBEKUNTZA BULTZATZEKO TRESNAK

79. artikulua. Ingurumen akordioak.

1. Administrazio publikoek akordioak sinatzea sustatuko dute gizarteko instantzia guztiek ingurumenaren babesean parte hartzea lortzeko, erantzukizun partekatuaren printzipioari jarraiki.

2. Helburuak, helburu horiek lortzeko epeak eta emaitzen jarraipenerako sistemak finkatu beharko dituzte sinatzen diren akordioek, Lege honen 3. artikuluaren printzipioen esparruan.

3. Administrazio publikoek argitara emango dituzte sinatzen dituzten akordioak, eta Lege honen III. Tituluan finkatutako baldintzen arabera, eguneratuta eta herritarren eskura edukiko dute akordio horien inguruan duten informazioa.

80. artikulua. Parte-hartzearen sustapena Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistema Komunitarioan (EMAS)

1. Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek beren borondatez Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistema Komunitarioarekin (EMAS) bat egitea sustatuko dute administrazio publikoek. Sistema hori Europako Legebiltzarrak eta Europako Batzordeak 2009ko azaroaren 25ean onartutako 1221/2008 (EE) Erregelamenduak araututa dago.

2. Aurreko paragrafoan xedatutakoa betetzeko, neurriak hartuko dira:

a) Sistemaren helburuei eta baldintzei buruzko informazioa emateko.

b) Erakunde txiki eta ertainei laguntzeko.

c) Sistemarekin bat egitera daraman mailaz mailako fokatzea ahalbidetzeko.

d) Legeak lantzean, aplikatzean eta betetzean sistemarekiko atxikimendua aintzat hartzeko, arauzko baldintzak murrizte eta desagerrarazte aldera.

e) Kontratazio publikoko prozeduretan sistemarekiko atxikimendua txertatzeko, betiere sektore publikoaren kontratuei buruzko araudiak gai honen inguruan finkatzen duenari jarraiki.

3. Ingurumenaren alorrean eskumenak dituen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailak, lankidetza bultzatuko du sindikatuekin, enpresaburuen elkarteekin, kontsumitzaileen elkarteekin, ingurumena babesteko erakundeekin, toki erakundeekin eta interesa duten beste alde batzuekin Euskal Herrian EMAS sistemarekiko atxikimendua sustatzeko.

4. Ingurumenaren alorrean eskumenak dituen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailak, ingurumen kudeaketako beste sistema batzuen erabilera bultzatuko du EMAS sistemarekiko atxikimendua ahalbidetzeko.

5. Aurreko paragrafoan adierazitako sistemen arteko baliokidetasunak egiaztatzeko baldintzak Europako Batzordeak finkatuko ditu Europako Legebiltzarrak eta Europako Batzordeak 2009ko azaroaren 25ean onartutako 1221/2008 (EE) Erregelamenduaren 45. artikuluak eta II. Eranskinak xede horri begira xedatzen dutenari jarraiki.

81. artikulua. Europar Batasunaren etiketa ekologikoaren erabilera sustatzea.

1. Administrazio publikoek Europar Batasunaren etiketa ekologikoaren erabilera sustatuko dute. Etiketa hori Europako Legebiltzarrak eta Europako

Batzordeak 2009ko azaroaren 25ean onartutako 66/2010 (EE) Erregelamenduak araututa dago.

2. Etiketa ekologikoaren erabilera sustatzeko, neurriak hartuko dira:

a) Etiketa ekologikoaren erabileraren onurei buruz sentsibilizatzeko eta informatzeko.

b) Etiketatutako produktuei eta zerbitzuei eta haiek saltzeko edo emateko lekuei buruz informatzeko.

c) Kontratazio publikoko prozeduretan etiketa ekologikoaren erabilera txertatzeko, betiere sektore publikoaren kontratuei buruzko araudiak gai honen inguruan finkatzen duenari jarraiki.

3. Ingurumenaren alorrean eskumenak dituen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailak, lankidetza bultzatuko du kontsumitzaileen elkarteekin, fabrikatzaileekin, zerbitzu emaileekin, merkatariekin, enpresaburuen elkarteekin, sindikatuekin eta interesa duten beste alde batzuekin aurreko paragrafoan adierazitako ekintzak ahalbidetzeko xedean.

82. artikulua. Ingurumen aztarna.

Administrazio publikoek beren politiketan Europar Batasunak egiaztatutako metodologiak erabiltzea sustatuko dute produktuek edo erakundeek bizitzaren zikloan duten ingurumen portaera neurtzeko eta jakinarazteko xedearekin.

83. artikulua. Erosketa Publiko Berdea.

1. Erosketa eta kontratazio publiko berdeak merkatuarekiko koordinazioa optimizatzea du xede hark ekoberrikuntza txertatuko duela bermatzeko eta, aldi berean, administrazio publikoek baliabideak modu eragingarriagoan erabil ditzaten ahalbidetzeko.

2. Administrazio publikoetako eta sektore publikoko gainerako entitateetako kontratazio-organoek Lege honetan finkatzen diren helburuak lortzen lagunduko duten esleitzeko irizpideak, gauzatzeko baldintza bereziak eta klausulak edo baldintzak sartuko dituzte beren obra, zerbitzu eta hornidura kontratuen klausula administratiboen eta baldintza tekniko berezien orrietan. Bereziki bultzatuko da azpiprodukTuen, bigarren mailako lehengaien, material birziklatuen edo berrerabiltzeko xedean prestatzeko prozesuetatik eratorrien erabilera. Horretarako, administrazio publikoek, betiere beren eskumenen esparruan, beren jarraibide teknikoak eta gisako dokumentuak egokituko dituzte paragrafo honetan finkatutakoa betetzeko.

Bereziki, honako hauek lortzea xede duten gogoetak sartu ahal izango dira, besteak beste; berotegi efektuko gas igorpenak murriztea; kontratua gauzatzean kalteturik suerta daitezkeen ingurumen balioak mantentzea edo hobetzea; uraren kudeaketa jasangarriagoa; energia berriztagarrien erabilera bultzatzea; produktuen birziklatzearen sustapena eta ontzi berrerabilgarrien erabilera; edo produktuak ontziratu gabe eta bertako produktuak entregatzea eta ekoizpen ekologikoa bultzatzea, baldin eta kontratuaren xedearekiko lotura badute eta Europako Erkidegoko zuzenbidearekin bateragarriak badira.

3. Obra eta hornidura kontratuak egikaritzeko klausula administratiboen eta baldintza tekniko berezien orrietan, haietako bakoitzari begira erabili beharreko azpiprodukTuen, bigarren mailako lehengaien, material birziklatuen edo berrerabiltzeko xedean prestatzeko prozesuetatik eratorrien ehunekoak adieraziko dira. Gutxienez % 40an erabiliko dira material horiek, behar bezala justifikatutako arrazoi teknikoak direla eta ehuneko hori murriztea beharrezkoa denean izan ezik.

4. Era berean, kontrol mekanismo egokiak ezarri beharko dira, eta hala behar badu, dagozkion zigor klausulak, orrietan finkatutako ingurumen klausulak eta kontratuan aurreikusitako egikaritzeko baldintzak behar bezala beteko direla bermatzeko. Ondorio horri begira, gauzatutako kontratuak

amaitzean, aipatutako materialaren erabilerari buruzko txosten justifikagarria aurkeztuko dute.

5. Sektore publikoaren kontratuei buruzko legediak finkatzen duenarekin bat etorrita eramango da burura artikulu honetan aurreikusitakoa.

84. artikulua. Ekoberrikuntza.

1. Administrazio publikoek produktuen eta prozesuen enpresako ekoberrikuntza sustatuko dute ingurumenak sortzen dituen merkatuko aukerak aprobetxatu ahal izateko.

2. Horretarako, ingurumenaren alorrean eskumenak dituen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailak, jarduera ekonomikoetan ingurumenaren ikuspegitik eraginkorragoak diren teknologiak erabiltzea sustatuko du. Xede horretan, sektore publikoaren kontratuetan erabili daitezkeen teknologien zerrenda bat onartuko du eta aldian behin eguneratuko du; irizpide horrek lehentasuna izan lezake onura fiskalak finkatzeko orduan eta ingurumena hobetzeko inbertsioak egiteko enpresei dirulaguntzak emateko garaian. Hori guztia bat etorriko da zergen eta dirulaguntzen eremuan indarrean dagoen araudiarekin.

85. artikulua. Ingurumen fiskalitatea.

1. Zerga alorrean eskumena duten euskal administrazio publikoek Lege honen helburuak betetzen laguntzeko fiskalitate ekologikoaren eta ingurumenaren alorreko politika ekonomikorako beste tresna batzuen erabilera sustatuko dute, aldez aurretik ingurumenaren alorrean eskumenak dituen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailari kontsulta egin ondoren. Ildo horretatik, erabaki ahal izango dute egindako diru-bilketek kontu

sail bat osatzea beren urteko aurrekontuetan, ingurumenaren babesarekin loturiko jarduerak aurrera eramateko erabili ahal izateko.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, nork bere eskumenen esparruan, besteak beste honako neurri fiskalak eta finantzarioak ezarri ahal izango dituzte:

a) Tasak sortu ahal izango dituzte Lege honetan jasotako baimenak eta lizentziak igortzeagatik eta aurretiazko jakinarazpenak edo erantzukizunpeko adierazpenak jasotzeagatik.

b) Zergak edo beste tresna fiskal batzuk sortu ahal izango dituzte ingurumenari kalteak eragiten dizkieten jarduerak zergapetzeko.

c) Murrizketak, beherapenak edo salbuespenak ezarri ahal izango dituzte helburutzat Lege honen xedeak betetzea duten jarduerak sustatzeko eta, bereziki, hondakinen prebentzioa, hondakinak berrerabiliak izateko prestaera eta hondakinen birziklatzea sustatzen dituzten jarduerak bultzatzeko.

86. artikulua. Ikerkuntza, hezkuntza eta prestakuntza.

1. Ingurumenari buruzko ezagutzaren oinarria sendotzeko xedean, eragile publikoek eta pribatuek ikerketa ahaleginak sustatuko eta partekatuko dituzte Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sarearen esparruan, eta ingurumenaren alorreko politika publikoei helaraziko dizkiete egindako aurrerabideak.

2. Administrazio publikoek ingurumenaren alorreko heziketa eta sentsibilizazioa sustatuko dituzte herritarren artean eta erakunde guztietan ingurumena hobetzeko ezagutzak, informazioa, jarrerak, balioak, portaerak eta trebetasunak ezagutarazteko eta zabaltzeko jardueren bitartez. Helburu horrekin, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, beste administrazio publikoekin koordinatuta, ingurumenaren alorreko heziketa eta

sentsibilizazioa lantzeko programak egingo ditu, aipatu helburuak lortzeko bide eta neurri zehatzak proposatuz.

3. Era berean, administrazio publikoek beren langileen prestakuntza sustatuko dute ingurumenaren alorrean, eta eragile sozialekin elkarlanean, langile guztien prestakuntza sustatuko dute ingurumenari buruzko legedia beteko dela bermatzeko eta ingurumena hobetzeko balioak eta jarduerak sustatzeko.

87. artikulua. Ingurumen boluntarioak.

1. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, nork bere eskumenen esparruan, herritarren parte-hartzea sustatuko dute ingurumena babesteko eta hobetzeko interes orokorreko jarduerak burutzeko ekintza boluntarioetan, boluntarioei buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legean eta aplikagarri diren gainerako araudietan finkatutakoaren arabera. Xede horretan, natura kontserbatzeko, lehengoratzeko eta ingurumen heziketa emateko jarduerak garatzeko programak, boluntarioek aplikatuko dituztenak, diseinatuko dituzte; programa horiek Lege honen helburuak betetzeko boluntarioen lankidetza egokia den zentroetan eta gaietan eskainiko dira.

2. Ingurumenaren alorreko boluntarioen lana sustatzeko eta ahalbidetzeko xedean, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek boluntarioei buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legean aurreikusitako ekimenak garatuko dituzte, bereziki honako hauek:

a) Boluntarioak dituzten erakundeen baliabideak eta bitartekoak bateratuko dituzte, batez ere prestakuntzari eta informazioa biltzeari dagokienez.

b) Boluntarioen erakundeak iraunarazteko eta horien prestakuntza eta ekimenak bultzatzeko laguntzak emango dituzte eta hitzarmenak sinatuko dituzte.

c) Ingurumenaren alorreko boluntariotzari buruzko informazio kanpainak antolatuko dituzte.

d) Erakundeei aholkularitza, informazioa eta laguntza teknikoa emateko zerbitzuak eskainiko dituzte.

e) Hobariak aplikatuko dituzte garraio publikoen erabileran eta ekimen publikoko ikuskizunen edo kultur ekipamenduen sarreran.

f) Neurriak finkatuko dituzte lan eta zerga araudiaren esparruan.

g) Borondatezko lana publikoki eskertzeko ohorezko neurriak ezarriko dituzte.

88. artikulua. Publikoki eskertzeko neurriak.

Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen balioak babesten, kontserbatzen eta ezagutarazten laguntzen duten herritarrei eta erakundeei publikoki eskertzeko, ingurumenaren alorrean eskumenak dituen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailak ohorezko neurriekin sarituko ditu ekimen horiek, arauz finkatzen diren esparruetan eta bertan zehaztutako maiztasunarekin eta kategoriekin.

ZAZPIGARREN TITULUA. INGURUMEN IKUSKARITZA ETA KONTROLA.

I. KAPITULUA. INGURUMENAREN ALORREKO LANKIDETZA ENTITATEAK.

89. artikulua. Ingurumenaren alorreko lankidetza entitateak.

1. Ingurumenaren alorrean eskumena duten administrazio publikoekin batera ekimenak egiaztatzeko, ontzat emateko eta kontrolatzeko xedean elkarlanean jarduten duten pertsona fisikoak edo juridikoak, publikoak izan ala pribatuak, dira ingurumenaren alorreko lankidetza entitateak.

2. Administrazio publikoek eskatuta edo araudietan hala xedatzen denean, honako eginkizun hauek izango dituzte, besteak beste, ingurumenaren alorreko lankidetza entitateek:

a) Idatziz balioztatuko dituzte ingurumen baimenak eskatzeko baldintzak eta behar diren datu guztiak, lizentziak, jakinarazpenak eta erantzukizunpeko adierazpenak, berrituko edo aldatuko dituzte lehendik zeudenak, eta dirulaguntzak eta Lege honetan eta , hala dagokionean, aplikagarria den oinarrizko araudian aurreikusitako tramiteei lotutako beste dokumentu guztiak izapidetuko dituzte.

b) Ekimena egiten den lekuetan egiaztatuko dute ekipamenduak eta instalazioak aipatutako baimenetan edo lizentzietan, tramitazio administratiboetan eta aplikagarri den ingurumen araudian finkatutako baldintzetara egokitzen direla.

c) Laginak hartu eta neurketak eta analisiak egingo dituzte egin beharreko kontrol lanak ebaluatzeko eta jardueraren funtzionamendua egiaztatzeko.

3. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak eskaera egiten duten entitateak erregistratuko ditu, arauz finkatzen diren ezinbesteko baldintzen eta prozeduraren arabera eta beren gaitasun teknikoa, independentzia eta inpartzialtasuna bermatzen dituzten neurrien arabera. Ingurumenaren alorrean eskumenak dituen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailaren mende egongo da erregistro hori, eta izena emandako ingurumenaren alorreko lankidetza entitate bakoitza identifikatzen duten datuak eta entitate bakoitzaren jarduera maila eta irismena jasoko ditu.

II. KAPITULUA. INGURUMENAREN ALORREKO IKUSKARITZA.

90. artikulua. Ingurumenaren alorreko ikuskaritzaren xedea eta ikuskatzeko eskumenak.

1. Lege honen mendeko jarduerak ingurumenaren alorreko legediari egokitzen zaizkiola bermatzea eta titularrek berek jakinarazitako edo baimenetan eta lizentzietan finkatutako baldintzen eraginkortasuna eta betetze maila egiaztatzea ditu xede ingurumenaren alorreko ikuskaritzak.

2. Administrazio publikoei dagokie, bakoitzari bere eskumeneko esparruan, Lege honen aplikazio esparruan aintzat hartzen diren ekimenen, jardueren eta instalazioen (publikoak izan ala pribatuak) ingurumenaren alorreko zaintza eta ikuskaritza lanak egitea.

91. artikulua. Ikuskapen jarduerari men egiteko betebeharra.

1. Lege honen aplikazio esparruko jardueren edo instalazioen titularrek nahitaez lagunduko diete 89. artikuluan adierazitako ikuskapen lanak egiten dituzten langileei behar duten guztietan, ikuskatzaile horiek beren eginkizuna egiteko beharrezkoak dituzten azterketak, kontrolak, lagin hartzeak eta informazio bilketak behar bezala egin ahal izan ditzaten.

2. Lege honen mendeko jardueren edo instalazioen titularrek, nahitaez eman beharreko informazioa eskaintzean, beren iritziz isilpean gorde beharreko kontuak adierazi ahal izango dituzte, kontu horiek industria prozesuei lotuak baldin badira edo legez aitortzen diren konfidentzialtasunaren alorreko kontuak baldin badira.

92. artikulua. Ingurumenaren alorreko ikuskaritza jarduera egikaritzea.

1. Ingurumenaren alorreko kontrol, zaintza eta ikuskaritza lanak horretarako izendatutako herri administrazioen zerbitzuan ari diren langileek egingo dituzte zuzenean. Ikuskapen lan materialen kasuan, funtzionario publikoentzat erreserbatuta ez daudenean, ahalmen publikoa baliatzea eskatzen dutelako edo beste arrazoi batzuk direla medio, ingurumen lankidetzarako erakundeek gauzatu ahalko dituzte, erakunde horiek behar bezala erregistratuta badaude, administrazio publikoen izenean ikuskapen lan materialak egiteko.

2. Ingurumen alorreko ikuskapen lana egiteko izendatutako administrazio publikoen zerbitzuan ari diren langileak agintaritzaren agentetzat hartuko dira beren eginkizun horiek egikaritzeko.

3. Ikuskapen lanak egiten dituzten langileek ahalmena dute Lege horren mendeko subjektuek duten ingurumenarekin loturiko edozein agiri eskuratzeko, bai eta, nor diren adierazi ondoren eta aldez aurretik jakinarazi gabe, instalazioetara eta Lege honen aplikazio esparruaren barnean dauden jarduerak aurrera eramaten diren gainerako lekuetara joateko eta bertan egoteko. Beren ikuskapen lanak egiteko etxebizitza batean sartu behar badute, epailearen baimena eskatu beharko da.

93. artikulua. Ingurumenaren alorreko ikuskaritzaren akta eta txostena.

1. Ikuskatze bisita egiten den bitartean, ekintzak deskribatzen dituen akta egingo da, bertan jasoko da jarduera zein baldintzatan garatzen den, hala badagokio, zein irregulartasun sumatu diren eta haien ardura duen pertsonak egin dituen adierazpenak. Era berean, ikuskatze bisita egiten den bitartean laginak hartzen badira edo neurketak egiten badira, ziurtatu beharko da xede horretarako onartutako jarraibide teknikoek zehaztutakoaren arabera egin direla jarduera horiek.

2. Ikuskatze lanak egiten dituzten langileek beren ahalmenak egikaritzean egiten dituzten aktek jasotako ekintzek froga balioa izango dute, interesa duten pertsonek beren eskubideak eta interesak babesteko aurkez ditzaketen frogen kalterik gabe.

3. Ingurumen baimen bateratuaren eta ingurumen baimen bakarraren erregimenen mende dauden jardueretara egiten den ikuskatze bisita bakoitzaren ondoren txosten bat egingo da eta hartan jasoko dira jarduera aurrera eramateko gaikuntza tituluen baldintzak eta araudian jasotako baldintzak betetzeari dagokionean atera diren ondorioak, bai eta geroagoko beste edozein esku hartzeri dagokionean ere. Jardunbide hori hautazkoa izango da Lege honetan aurreikusitako beste ingurumen esku hartze erregimen batzuen mendeko jardueretara egiten diren ikuskapenetan.

4. Ikuskatze bisitaren txostenaren berri bi hilabeteko epean emango zaio jardueraren edo instalazioen titularrari, bisita hori egin den egunetik aurrera kontatuta.

5. Dagokion arloko araudiak hala eskatzen duenean eta, betiere, jendeak duen ingurumen informazioa eskuratzeko aukerari buruzko araudian xedaturikoaren arabera, administrazio publikoek, bisita egin den egunetik hasi eta lau hilabeteko epean, herritarren eskura jarriko dituzte, baliabide elektronikoen bidez, egindako ikuskapenei dagozkien txostenak.

94. Ingurumenaren alorreko ikuskaritzaren plangintza.

1. Administrazio publikoek, nork bere eskumenen esparruan, ingurumenaren alorreko ikuskaritza planak landuko dituzte aldian behin. Plan horiek gutxienez honako eduki hau izango dute:

a) Plana aplikagarri den eremu geografikoa.

b) Ingurumen alderdi nagusiak.

c) Ikuskaritzaren mendeko jarduerak.

d) Ingurumenaren alorreko ikuskaritza programak lantzeko prozedurak.

e) Ikuskaritza lanak egiteko giza baliabideak.

f) Koordinazio sistemak ikuskaritza lanez arduratutako beste agintaritzekin.

g) Ikuskaritza programa ebaluatzeko sistemak.

2. Ikuskaritza planekin bat eginik, administrazio publikoek aurrez finkatutako ingurumenaren alorreko ikuskaritza programak landuko dituzte aldian behin; jarduera mota desberdinetara egin beharreko bisitaldi kopurua edo maiztasuna zehaztuko dute horietan.

3. Ingurumen baimen bateratuaren erregimenaren mende dauden instalazioetan, jardueren ingurumenaren alorreko arriskuen ebaluazio sistematikoan oinarrituko dira bisitaldien arteko epeak, eta bisitaldien arteko epeek ez dute urte beteko epea gaindituko arrisku handiagoak planteatzen dituzten jardueretan, eta ez dute hiru urteko epea gaindituko arrisku txikiagoak planteatzen dituztenetan.

4. Aurreko paragrafoan adierazitako ingurumenaren alorreko arriskuen ebaluazio sistematikoa gutxienez ondoko irizpide hauetan oinarrituko da, arauz ezarri daitezkeen beste irizpideei kalterik eragin gabe:

a) Aintzat hartuko dira jarduerek gizakiaren osasunean eta ingurumenean izan dezaketen balizko eta benetako eragina eta ezbeharren bat gertatzeko arriskua.

b) Aintzat hartuko da jarduera bideratzeko gaitasuna ematen duten tituluetako baldintzen eta araudian finkatutako baldintzen betetze mailaren historia.

c) Aintzat hartuko da jarduera edo instalazioaren titularrak Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sisteman (EMAS) parte hartzea, Europako Batzordearen 1221/2009 (EE) Erregelamenduarekin bat etorrita.

95. Ingurumenaren alorreko ikuskaritza lanen publizitatea.

Lege honetan xedatutakoari eta ingurumenaren gaian informazioa eskuratzeko eskubideari buruzko legedian xedatutakoari jarraiki, herritarren eskura jarriko dira ingurumenaren alorreko ikuskaritza planak, ingurumen ikuskaritza programak eta dagozkien ebaluazioak eta ingurumen baimen bateratuaren eta ingurumen baimen bakarraren erregimenen mende dauden ekimenen gaineko ingurumenaren alorreko ikuskaritza lanen emaitzak.

ZORTZIGARREN TITULUA. INGURUMENAREN ALORREKO LEGEZKOTASUNAREN BERREZARPENA ETA INGURUMEN KALTEENGATIKO ERANTZUKIZUNA.

I. KAPITULUA. INGURUMENAREN ALORREKO LEGEZKOTASUNAREN BERREZARPENA

96. artikulua. Baimenik, lizentziarik edo aurretiazko jakinarazpenik gabeko jarduerak.

1. Jarduera bat abian denean Lege honetan xedatutako nahitaezko baimenik, lizentziarik edo aurretiazko jakinarazpenik gabe, baimen edo lizentzia horiek emateko, edo aurretiazko jakinarazpenak emateko edo jasotzeko eskumena duten administrazio publikoek ondoko artikulu hauetan aurreikusten diren neurriak hartzeko agindua eman ahal izango dute, eta gainera, jarraian adierazten diren urratsetatik bat egingo dute:

a) Jarduera legeztatu baldin badaiteke, titularrari eskatuko diote bere egoera kasu bakoitzean aplikagarri den ingurumenaren alorreko prozeduraren bitartez erregularizatzeko, eta epe jakin bat emango diote aipatu prozedura abian jar dezan; behar bezala justifikatutako kasu berezietan izan ezik, epe hori ez da hilabetea baino luzeagoa izango.

b) Aplikagarri den araudia betetzen ez duelako jarduera ezin legeztatu baldin badaiteke, behin betikoz itxiko da.

c) Ukituriko jarduera nekazaritza eta elikagaigintza politikari buruzko abenduaren 23ko 17/2008 Legearen aplikazio esparruan dagoenean, lege horren 10. artikuluan xedaturikoa beteko da.

2. Legeztatzeaz edo ixteaz gain, neurri zuzentzaileak hartzeko agindua eman ahal izango da, edo ingurumenari kalte nabarmenak eragin ez zaizkionean, aldatutako egoera lehengoratzeko agindua eman ahal izango da, betiere kapitulu honen 99. artikuluan finkatutako prozedurari jarraiki.

3. Ingurumenari kalte nabarmenak egiten bazaizkio, edo kalte horiek eragiteko mehatxua berehalakoa baldin bada, ingurumenaren alorreko kalteak prebenitzeko, saihesteko eta lehengoratzeko neurriak hartuko dira hurrengo kapituluan xedatutakoarekin bat etorrita.

4. Arestian adierazitako jarduerak eta neurriak hurrengo tituluan jasotako zehapen araubidearen aplikazioari kalterik eragin gabe hartuko dira.

97. artikulua. Ez betetzeak edo akatsak zuzentzea.

Dagozkien gaikuntza tituluetan ezarritako baldintzak edo ingurumen inpaktua murrizteko aldez aurretik jakinarazi ziren neurriak ez direla bete ohartuz gero, eta Lege honetan aurreikusitako ingurumenaren alorreko araubideren baten pean dagoen jarduera edo instalazio baten funtzionamenduan akatsak nabaritu badira, jarduera edo instalazio hori baimentzeko edo harrera egiteko eskumenak dauzkaten administrazio publikoek titularrari eskatuko diote haiek zuzentzeko, 99. artikuluan finkatutako prozedurari jarraiki, inplementatu beharreko neurri zuzentzaileen izaerarekin bat datorren epean; behar bezala justifikatutako kasu berezietan izan ezik, ez da sei hilabete baino luzeagoa izango epe hori.

98. artikulua. Jarduerak bertan behera uztea.

99. artikuluan finkatutako prozedurari jarraiki, eskumena duten administrazio publikoek prebenitzeko eta saihesteko neurriak aplikatzeko agindua eman ahal izango dute, eta eraikuntza edo ustiapen fasean dauden

jarduerak erabat edo partzialki geldiarazteko agindua eman ahal izango dute jarraian adierazten diren arrazoietatik edozein gertatuz gero:

a) Dagokion ingurumen interbentziorako tresnarik izan gabe jarduera proiektua gauzatzen edo garatzen hasiz gero, jarduerari ekin aurreko komunikatzeko tramitea egin gabe izanez gero edo ingurumenaren alorreko nahitaezko ebaluazio prozedura burura eraman gabe izanez gero.

b) Dagokion ingurumenaren alorreko esku hartze prozeduran edo ebaluazioan funtsezko datu ez zehatzak eman, ezkutatu, faltsutu edo maltzurki manipulatuz gero.

c) Dagokion esku hartze tresnan edo ingurumenaren alorreko ebaluazioan ezarritako edo jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioan jakinarazitako ingurumenaren alorreko baldintzak ez betez gero.

d) Ingurumenari edo pertsonen osasunari kalteak eragiteko berehalako mehatxua gertatuz gero eta, behin kalte horiek eraginda, kalteak larritzeko aukerak gertatuz gero.

99. artikulua. Ingurumenaren alorreko legezkotasuna berrezartzeko prozedura.

1. Ingurumenaren alorreko legezkotasuna berrezartzeko prozedura izapidetu baino lehen, edo zehapen prozedura administratibo baten esparruan, jarduerak edo instalazioak legeztatzea edo amaitzea erabaki ahal izango da, bai eta aldatutako egoera lehengoratzea, ez betetzeak edo akatsak izan badira neurri zuzentzaileak ezartzea eta jarduerak bertan behera uztea ere.

2. Ingurumenaren alorreko legezkotasuna berrezartzeko prozedurak, hala dagokionean, jardueraren sustatzaileari edo titularrari eta gainerako interesdunei hamar eta hamabost eguneko epean entzuteko tramitea

aurreikusiko du, eta egoki irizten dituzten alegazioak, dokumentuak eta justifikazioak aurkeztuko dituzte epe horretan interesdunek.

3. Hiru hilabeteko epean amaituko da prozedura eta epe horretan bertan jakinaraziko da jakinarazi beharrekoa. Epe hori igarota berariazko erabakia jakinarazten ez bada, prozedura iraungi dela ulertuko da.

4. Premia geroraezinetan, prozedura administratiboa izapidetu behar izan gabe esku hartu ahal izango du agintari eskudunak kalteak prebenitzeko eta saihesteko neurriak finkatzeko edo neurri horiek aplikatu daitezela eskatzeko.

5. Ingurumenaren alorreko legezkotasuna berrezartzeko prozedura abian jarrita, edo lehenago ezin atzeratu daitezkeen larrialdi kasuetan eta inplikatutako interesak behin-behinean babesteko xedean, hartu litekeen erabakiaren eraginkortasuna ziurtatzeko egoki irizten diren behin-behineko neurri arrazoituak hartu ahal izango dira, betiere proportzionaltasunaren, eraginkortasunaren eta kostu txikienaren printzipioak ardatz hartuta.

6. Neurri zuzentzaile gisa hartu ahal izango dira, aurreko artikuluetan adierazitako jarduerak bertan behera uzteko eta ez betetzeen eta akatsen neurri zuzentzaileak aplikatzeko neurriez gain, Lege honen zehapen prozedurari begira aurreikusitako neurriak.

7. Era berean, ur edo energia hornidura eten ahal izango da behin-behineko neurri gisa ixteko edo jarduera bertan behera uzteko agindua jaso duten jardueretan, instalazioetan eta obretan. Horretarako, ur edo energia enpresa hornitzaileei dagokion erabaki administratiboaren berri emango zaie, eta gehienez ere bost eguneko epean beteko dute agindu hori. Jardueraren debekua kentzen denean eta administrazio jarduleak enpresa hornitzaileei horren berri ematen dienean baizik ez dira hornidura horiek berriz ere eskainiko.

8. Era berean, jardueren edo instalazioen sustatzaileei edo titularrei eskatu ahal izango zaie ezarritako kautelazko neurrien eraginkortasuna bermatzeko fidantza bat jar dezatela.

100. artikulua. Ingurumenaren alorreko legezkotasuna berrezartzeko neurrien derrigorrezko aplikazioa.

1. Eskumena duen Administrazio publikoak, aldez aurretik adierazita, neurri zuzentzaileak aplikatu ahal izango ditu subsidiarioki, martxan dagoen edo aldi baterako geldirik dagoen jardueraren edo instalazioaren sustatzaileak edo titularrak neurri horiek aplikatzen ez dituenean eta bereziki ingurumenari edo pertsonen osasunari kalte larriak eragiteko mehatxua berehalakoa denean. Neurrien aplikazio subsidiariotik eratorritako gastuak premiamendu bidez eskatu ahalko zaizkio jardueraren sustatzaileari edo titularrari.

2. Jardueraren edo instalazioaren sustatzaileak edo tituludunak neurri zuzentzaileak hartu nahi ez dituenean eta ingurumenean edo pertsonen osasunean kalte larriak eragiteko berehalako arriskurik ez dagoenean, edo neurri horiek hartzeko orduan izandako atzerapenak ondasun juridiko horiek arriskuan jarri ez dituenean, herri administrazio eskudunak hertsapen-isunak harri ahalko ditu.

Isun hertsatzaile horiek jartzean, betetzeko errekerimenduan adierazi beharko da eginbeharra betetzeko zein epe dagoen eta jar daitekeen isuna zenbatekoa izan daitekeen. Nolanahi ere, ezarritako eginbeharra betetzeko aski izan beharko du epe horrek. Isun hertsatzaile bakoitza hartu beharreko neurri guztien kostu estimatuaren ehuneko hamarraren baliokidea izango da gehienez ere. Behin isun hertsatzailea jarri ondoren hura jartzeko arrazoi izan den ez betetzeak jarraitzen badu, denbora bitarteka errepikatu ahal izango da. Isun hertsatzaileak independenteak dira eta zehapen kontzeptuan jar daitezkeenekin bateragarriak.

II. KAPITULUA. INGURUMEN KALTE NABARMENENGATIKO ERANTZUKIZUNA

101. artikulua. Ingurumen kalte nabarmenen eta berehalako mehatxuaren aurreko erantzukizuna.

1. Europar Zuzentarauak ingurumenaren alorreko erantzukizunari begira eta ingurumenaren alorreko prebentzioari eta konponketari dagokienez aurreikusten duen moduan eta baldintzetan eta Euskal Autonomia Erkidegoan aplikagarri den transposizioaren araudian zehaztu bezala prebenituko, saihestuko eta konponduko dira jarduera ekonomikoek edo profesionalek eragindako ingurumenaren alorreko kalte nabarmenak eta kalte nabarmenen berehalako mehatxuak.

2. Aurreko paragrafoan adierazitako araudiaren aplikazioan eskatzen den ingurumen erantzukizuna bateragarria da Lege honetan edo arloko beste legeetan aurreikusitako ingurumenaren alorreko legezkotasuna berrezartzeko araubidearekin edo zehapen araubide administratiboarekin, bai eta merezi izandako erantzukizun penalarekin ere, hura eragin duten gertaerak berak izan arren.

3. Artikulu honen lehenengo paragrafoan adierazitako araudian aurreikusitako prozedura espezifikoaren bidez zehaztu ahal izango da ingurumenaren alorreko kalteengatiko erantzukizuna, edo arau-hauste administratibo bat izanez gero, dagokion zehapen prozeduraren bidez.

4. Ingurumenaren alorreko erantzukizunari buruzko Zuzentarauaren transposizioko araudiari jarraiki, baimenean edo lizentzian espresuki adierazten den unean bideratzen den edo diren jarduerei atxikiriko ingurumenaren alorreko erantzukizunari aurre egin ahal izateko berme finantzarioa erakutsi beharko dute operadoreek, hala eskatzen baldin bazaie.

102. artikulua. Eskumenen erregimena.

1. Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena baldin bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko ingurumenaren alorreko sail eskudunak du ingurumenaren alorreko kalte nabarmenengatiko ingurumen erantzukizuna eskatzeko prozeduren aurrean erabakiak hartzeko ahalmena, betiere aplikagarri den oinarrizko legedian xedaturikoari jarraiki eta hurrengo paragrafoan finkatzen denari kalterik eragin gabe.

2. Administrazio publikoek egoki irizten dituzten lankidetza mekanismoak landuko dituzte ingurumenaren alorreko kalte nabarmenak eta beren berehalako mehatxuak prebenitzeko, saihesteko eta konpontzeko gaian finkatutako eskumenak modu egokian erabiltzeko. Nolanahi ere, informazioa elkarri emateko, lankidetzan jarduteko eta laguntzeko printzipioak izango dituzte ardatz jarduera horiek.

BEDERATZIGARREN TITULUA. INGURUMENAREN ALORREKO DIZIPLINA

103. artikulua. Arau-hausteak eta zehapenak.

1. Lege honetan araututako gaietan, arau-hauste administratiboak dira hurrengo artikuluetan tipifikatutako eta zigortutako ekintzak edo hutsuneak, Euskal Autonomia Erkidegoan gai horiek arloka arautzen dituzten, aplikagarri diren eta Lege maila duten arauetan tipifikatutako arau-hausteei kalterik eragin gabe.

2. Lege honetan finkatutako arau-hauste administratiboek ez diete kalterik eragingo egileen erantzukizun zibilei, penalei edo izan ditzaketen beste maila bateko erantzukizunei.

104. artikulua. Arau-hauste motak.

1. Oso larriak, larriak eta arinak dira Lege honetan araututako arau-hauste administratiboak.

2. Oso arau-hauste larriak dira:

a) Jarduerak eta instalazioak eraikitzea, muntatzea, ustiatzea edo lekuz aldatzea nahitaezko ingurumen baimen bateraturik izan gabe.

b) Jarduera edo instalazio batean aldaketa garrantzitsu bat egiten bada, horretarako ingurumen baimen bateratua aldatu gabe, ingurumenean kalte edo gainbehera larria eragin bada edo pertsonen segurtasuna edo osasuna arrisku larrian jarri badira.

c) Ingurumen baimen bateratuan ezarritako baldintzak ez betetzea, ingurumenean kalte edo gainbehera larria eragin bada edo pertsonen segurtasuna edo osasuna arrisku larrian jarri badira.

d) Ingurumen baimen bateratuaren pean dauden jarduera eta instalazioek Lege honen 111. artikuluan bildutako behin-behineko neurrietatik eratorritako betebeharrak ez betetzea, ingurumenerako edo pertsonen osasunerako oso arriskutsua denean.

e) Ingurumen inpaktu arruntaren ebaluazioaren mende dagoen proiektu bat egikaritzen hastea, dagokion ingurumen inpaktuaren adierazpena aurretiaz jaso gabe.

3. Arau-hauste larriak dira:

a) Jarduerak eta instalazioak eraikitzea, muntatzea, ustiatzea edo lekuz aldatzea nahitaezko ingurumen baimen bakarrik edo jarduera sailkatuaren lizentziarik izan gabe edo jarduera sailkatua aurretiaz jakinarazi gabe.

b) Jarduera batean edo instalazio batean funtsezko aldaketa bat egitea eskumena duen administrazioak hura baimentzen zuen titulua aldatu gabe.

c) Ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua behar duen proiektu bat gauzatzen hastea aldez aurretik ingurumen inpaktuaren adierazpena eskuratu gabe.

d) Ingurumenaren alorreko legezkotasuna berrezartzeko ezarritako behin-behineko neurriak eta kautelazko neurriak, edo zehapen prozedura hasi izanagatik agindutakoak, ez betetzea.

e) Ingurumen ebaluazio estrategiko arrunta behar duten planak edo programak onartzea beharreko ingurumen adierazpen estrategikoa eskuratu gabe.

f) Ingurumen baimen bateratuan, ingurumen baimen bakarrean eta

jarduera lizentzian finkatutako ingurumen baldintzak, edo jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenean zehaztutako baldintzak ez betetzea.

g) Ingurumen adierazpen estrategikoan, ingurumen inpaktuaren adierazpenean eta ingurumen inpaktuaren txostenean ezarritako ingurumen baldintzak ez betetzea.

h) Ingurumen legezkotasuna berrezartzeko ezarritako neurriak ez betetzea.

i) Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenarekin edo funtzionatzen hasi edo ireki delako jakinarazpenarekin edo ingurumen baimen bateratuaren edo bakarraren edo jarduera sailkatuaren lizentziaren eskaerekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioan eskatzen diren funtsezko datuak faltsutzea, ez ematea edo zuzen ez ematea.

j) Ingurumen ebaluazio prozeduren esparruan, nahitaezko dokumentazioan eskatzen diren funtsezko datuak faltsutzea, ez ematea edo zuzen ez ematea.

k) Lege honetan, administrazio publikoek emandako gaikuntza tituluetan eta ingurumen ebaluazio prozeduren esparruko adierazpenetan jasotako komunikazio, jakinarazpen eta informazio obligazioak ez betetzea.

l) Eskumena duen administrazioaren ikuskatze lana eragoztea, aktiboki nahiz pasiboki, edo jardueren edo instalazioen titularrei eskatutako datuak ez ematea.

m) Lankidetza entitateei eskatutako baldintzak ez betetzea edo entitate horiek aplikagarri zaien araudian xedatutakoaren aurkako jarduerak gauzatzea.

n) Ingurumenean, uretan, atmosferan nahiz lurzoruan, produktuak edo substantziak, egoera solido, likido edo gaseosoan, edo energia formak deskargatzea, bai eta soinua ere, ingurumen baldintzak narriatzen badira edo, oro har, oreka ekologikoari kalte egiten bazaio, ordenamendu juridikoa urratuz egiten dena.

4. Aurreko paragrafoan larritzat hartu direnak arau-hauste arinak izango dira, ingurumenean edo pertsonengan eragin txikia izateagatik sailkapen hori edukitzeko modukoak ez direnean.

105. artikulua. Arau-hausteen preskripzioa.

1. Aurreko artikuluan adierazitako arau-hausteak ondoren adierazten diren epeetan preskribatuko dira.

a) Bost urtera oso arau-hauste larrien kasuan.

b) Hiru urtera arau-hauste larrien kasuan.

c) Urte betera arau-hauste arinen kasuan.

2. Arau-haustea gertatu den egunetik hasita kontatuko da arau-hausteen preskripzio epea.

3. Arau-hauste jarraituen kasuan, jardueraren amaiera unetik aurrera edo azken arau-haustea gertatu den unetik aurrera hasiko da preskripzio epea kontatzen. Arau-hauste iraunkorren kasuan, legez kontrako egoera kentzen denetik aurrera kontatuko da epea. Arau-haustea eragin duten gertaerak edo jarduerak ezezagunak baldin badira ageriko arrastorik utzi ez dutelako, akats horiek antzeman diren unetik zenbatuko da aipatu epea.

106. artikulua. Zehapenak.

1. Honako zehapen hauek guztiak edo baten bat ezarri ahal izango dira Lege honen 104. artikuluan aurreikusitako arau-hauste administratiboak egiteagatik:

a) Oso arau-hauste larrien kasuan

- 250.001 eurotik 2.500.000 eurora bitarteko isunak.

- Instalazioak behin betikoz ixtea, erabat edo partzialki.

- Instalazioak aldi baterako ixtea, erabat edo partzialki, bi urtetik bost urtera bitarteko epean.

- Baimena deuseztatzea edo bertan behera uztea urtebete eta bost urte bitartean.

- Instalazioak behin betikoz edo aldi baterako ixtea gehienez ere bost urteko epean.

- Jarduera garatzeko gaitasungabetzea urtebete eta bi urte bitarteko epean.

- Entitate laguntzailearen izaera behin betikoz galtzea edo aldi baterako galtzea gehienez ere sei urtez.

b) Arau-hauste larrien kasuan.

- 25.001 eurotik 250.000 eurora bitarteko isunak.

- Instalazioak aldi baterako ixtea, erabat edo partzialki, gehienez ere bi urteko epean.

- Baimena deuseztatzea edo bertan behera uztea gehienez ere urtebeteko epean.

- Instalazioak gehienez ere hiru urteko epean geldiaraztea.

- Jarduera garatzeko gaitasungabetzea gehienez ere urtebeteko epean.

- Entitate laguntzailearen izaera galtzea gehienez ere hiru urtez.

c) Arau-hauste arinen kasuan.

- 600 eurotik 25.000 eurora bitarteko isunak.

- Ohartarazpena.

2. Isunaren zenbatekoa arau-haustea egitean izandako etekina baino txikiagoa bada, isuna handitu egingo da, eta arau hausleak izandako etekinaren zenbatekoa halako bi izatera iritsiko da gehienez.

107. artikulua. Zehapenen mailaketa.

Zehapenak ezartzean arau-haustearen larritasunaren eta aplikatutako zehapenaren arteko oreka zainduko da, eta bereziki honako irizpide hauek aintzat hartuko dira zehapena mailakatzeko:

a) Nahita egin ote den.

b) Jokaera arau hausleak jarraitzea edo irautea arau-hauste bat baino gehiago egin izanagatik Administrazio bidean epai irmoak hala adierazi duenean.

c) Administrazio bidean epai irmoak hala adierazi duenean, Lege honetan sailkatutako izaera bereko arau-hauste bat baino gehiago egiteagatik errepikatu izana epai irmoa jakinarazi den egunetik kontatzen hasita hurrengo lau urteetan.

d) Ingurumenari edo pertsonen osasunari eragindako kalteak edo arriskuak.

e) Arau-haustea egiteagatik lortutako irabazia.

f) Arau hauslearen ahalmen ekonomikoa.

g) Zehapen espedientea abian jarri baino lehen, arau-hauste gisa sailkatutako jardun jakin batek ingurumenari edo pertsonen osasunari eragindako ondorio kaltegarriak konpontzen edo gutxienera eramaten dituzten neurri zuzentzaileak aplikatu ote diren.

108. artikulua. Konfiskazioak.

1. Zehatzeko ahalmena duten organoek arau-haustetik eratorritako efektuak, xede horretan erabilitako tresnak, euskarri materiala osatzen duten objektuak eta eratorritako irabaziak konfiskatu ahal izango dituzte, horiek guztiek hartu ahal izan duten itxura hartuta ere.

2. Ezin konfiskatu ahal izango da objektuak edo tresnak asmo oneko hirugarren batenak direnean, arau-haustearen erantzulea ez denean eta legez eskuratu dituenean, ez badago ingurumenari edo pertsonen osasunari kalte egiteko berehalako arriskurik.

109. artikulua. Zehapenen preskripzioa.

Lege honetan aurreikusitako arau-hausteengatik ezarririko zehapenak bost urtera preskribatuko dira oso arau-hauste larrien kasuan, hiru urtera arau-hauste larrien kasuan eta urtebetera arau-hauste arinen kasuan. Zehapena ezartzen duen epaia irmoa den egunean hasiko da preskripzio epea kontuan hartzen.

110. artikulua. Eskumenak.

1. Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde partekatuen eskumenen gaietan, Gobernu Kontseiluak izango du zehatzeko ahalmena oso arau-hauste larrien kasuetan, 1.500.000 eurotik gorako isuna dakarten kasuetan edo jardueren edo instalazioen aldi baterako edo behin betiko uztea edo ixtea, erabatekoa edo partziala, erabakitzen den kasuetan; Ingurumenaren alorreko eskumena duen Sailburuak izango du zehatzeko ahalmena oso arau-hauste larrien kasuetan, eta ingurumenaren alorreko eskumena duen Sailburuordeak edo berau ordezkatzen duen organoak izango du zehatzeko ahalmena arau-hauste larri eta arinen kasuetan.

2. Foru eta udal eskumeneko gaietan, beren antolakuntza eta funtzionamendu araudietan finkatutako organo eskudunek izango dute zehatzeko ahalmena.

111. artikulua. Behin-behineko neurriak.

1. Zehapen prozedura abiarazita, zehapena erabakitzeko organo eskudunak, bere kabuz edo izapideaz arduratzen den pertsonak proposatuta, edozein unetan hartu ahal izango ditu, ongi arrazoitutako erabakian oinarrituta, hartu litekeen ebazpenaren eraginkortasuna ziurtatzeko eta ingurumenari eta pertsonen osasunari kalteak edo arriskuak saihesteko xedean egoki irizten dituen behin-behineko neurriak. Neurri horiek eraginkortasunaren eta gastu txikienaren printzipioak izango dituzte ardatz, eta ustezko arau-hausteen larritasunarekin eta izaerarekin bat etorriko dira. Honako hauek izan daitezke:

a) Ekoizpenean kalteak edo arriskuak beren horretan jarraitzea galaraziko duten neurri zuzentzaileak edo segurtasun zein kontrol neurriak.

b) Gailuak, ekipamenduak edo ibilgailuak zigilatzea.

c) Instalazioa aldi baterako ixtea, erabat edo partzialki.

d) Jarduera aldi baterako etetea edo uztea.

e) Konfiskazioa 108.2. artikuluan bildutako kasuetan.

2. Xede berarekin, organo eskudunak ezinbestekoak diren behin-behineko neurriak hartu ahal izango ditu zehapen prozedura abian jarri baino lehen, administrazio publikoen administrazio jardunbide erkideari buruzko oinarrizko legedian eta aplikagarri diren beste araudietan finkatutako mugekin eta baldintzekin.

3. Ezin izango da behin-behineko neurririk hartu interesdunei aldez aurretik entzuteko tramitea bideratu gabe, premia geroraezineko arrazoiak direla-eta, neurri horiek berehala hartzea komeni denean izan ezik, ingurumenari edo pertsonen osasunari kalte edo arrisku larriak eragin dakizkiekeelako.

112. artikulua. Lehengoratzeko obligazioa eta kalte-ordaina.

1. Ezartzen diren zehapenez gain, arau hausleek nahitaez lehengoratuko dute eurek nahasitako egoera, eta administrazio jarduleari eragindako kalteak eta galerak ordainduko dizkiete; kalte eta galera horiek organo eskudunak zehaztuko ditu, eta kasu horretan, arau hausleari jakinaraziko dizkio ondorio horiei begira finkatzen den epean ordaindu beharrekoa ordaindu dezan.

2. Kalteak ingurumenari eragiten zaizkion kasuetan, arau hausleak nahitaez konponduko ditu zehapen ebazpenean finkatu eta eskatu beharreko moduan. Egoera horretan aplikatu ahal izango da ingurumenaren alorreko erantzukizunari buruzko araudian aurreikusitako lehengoratzeko metodologia. Ingurumenaren alorreko kalte nabarmenak gertatuz gero, ingurumenaren alorreko erantzukizunari buruzko araudian finkatutako moduan konponduko dira.

113. artikulua. Isun hertsatzaileak eta egikaritze subsidiarioa.

1. Arau hausleek aldatutako egoera lehengoratzen eta eragindako kalteak konpontzen ez badituzte, aurreko artikuluan finkatutakoaren arabera, aldizkako isun hertsatzaileak jarri ahal izango dira dagokion aginduan finkatutako epea igarotakoan, edo arau hauslearen kontura eta berak ordainduta agindu ahal izango da egikaritze subsidiarioa.

2. Isun hertsatzaileak jartzen badira, agindua betetzeko orrian nahitaez zehaztuko dira ezarri daitezkeen isunen zenbatekoak eta isun horiek

ordaintzeko epeak. Nolanahi ere, obligazioa bete ahal izateko bezain luzeak izango dira epe horiek. Behin isun hertsatzailea ezarri ondoren isun hori eragin duen errekerimendua betetzen ez bada, aldizkako isun hertsatzaile gehiago jarri ahal izango dira agindutakoa betetzeko moduko epeetan. Isun hertsatzaileak independenteak dira eta bateragarriak zehapen gisa ezar daitezkeen isunekin.

3. Isun hertsatzaile bakoitzaren zenbatekoak ez du egindako arau-haustearen ondorioz finkatutako isunaren ehuneko hamarra gaindituko. Isun hori bideratu beharreko berreskuratze neurrien multzoaren kostu estimatua baino nabarmen txikiagoa bada, isun hertsatzailea kalkulatzeko aplikagarri den ehuneko hamarra aipaturiko berreskuratze kostu horrekin lotua egongo da.

4. Ingurumenaren alorreko erantzukizunari buruzko araudian finkatutakoaren arabera bideratuko da ingurumenaren alorreko kalte nabarmenak prebenitzeko, saihesteko eta konpontzeko neurriak aplikatzera behartzen duten ebazpenen derrigorrezko egikaritzea.

114. artikulua. Kontratatzeko eta dirulaguntzak lortzeko debekua.

1. Lege honetan finkatutako arau-hauste larriengatik eta oso larriengatik administrazio bideko ebazpen irmoaren bidez zigortutako pertsona fisiko edo juridiko publiko zein pribatuek ezin izango dute kontratatu, ez eta Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuko sektore publikoko dirulaguntzak eskuratu dagozkien neurri zuzentzaileak egikaritu arte eta dagokien isuna ordaindu arte.

2. Diruzko zigorraren ordainketa zatika egiten ari den kasuetan, isuna osorik ordaindu ez bada ere, kontratatzeko eta dirulaguntzak lortzeko debekua ezin izango da aplikatu eskumena duen organoak ordainketa zatika egitea onartzen duen ebazpenean zehaztutako ordaintzeko obligazioak zintzo betetzen badira.

115. artikulua. Zehapen prozedura.

1. Titulu honek aurreikusten ez dituen gainerako kontu guztietan Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zehatzeko ahalmenari buruzko Legean edo gai horri dagozkion alderdiak arautzen dituen Estatuko oinarrizko araudian finkatutakoa aplikatuko da.

2. Zehapen prozeduraren tramitazio sinplifikatua bideratu ahal izango da, oinarrizko legedian finkatutako moduan, prozedura hori abian jartzeko organo eskudunaren iritziz, betiere Lege honetan edo ingurumenaren alorreko beste Lege batzuetan aurreikusitakoaren arabera, arau-haustea arintzat jotzeko nahikoa irizpide elementu daudenean.

116. artikulua. Publizitatea.

1. Lege honetan edo ingurumenaren alorreko beste legeetan finkatutako oso arau-hauste larriengatik ezarririko zigor ebazpenak argitara emango dituzte administrazio bidean irmoak diren zehapenak ezartzeko eskumena duten agintariek, laburbilduta eta dagokion Aldizkari Ofizialean, bere egoitza elektronikoan eta, nahi izanez gero, hedabide sozialen bitartez.

2. Interes publikoko arrazoiak daudela irizten dutenean, zehatzeko ahalmena erabiltzen duten organoek arau-hauste larriak egiteagatik ezarririko zehapenak, behin administrazio bidean irmoak direnean, dagokion aldizkari ofizialean, bere egoitza elektronikoan eta, nahi izanez gero, egoki irizten dituzten hedabide sozialen bitartez argitaratzeko erabakia har dezakete.

3. Bi kasuetan, pertsona erantzulearen identitatearen, egindako arau-haustearen eta ezarririko zehapenaren berri emango da, eta hala dagokionean, eskatutako lehengoratzeko eta kalte ordainak ordaintzeko obligazioen berri laburra emango da.

4. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ingurumenaren alorreko arauak urratzen dituzten pertsonen Erregistro bat sortuko du Euskal Autonomia Erkidegoan, bertan egongo dira jasota Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak epai irmoan oinarrituta zehatutako pertsona fisikoak edo juridikoak. Erregistro honen helburu esklusiboa ezarritako zehapenen inguruko gezurta ezinezko informazioa Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren eskura egotea da. Arauen bidez arautuko da aipatu erregistroaren antolakuntza eta funtzionamendua.

117. artikulua. Ingurumenaren alorreko ordezko prestazioa.

1. Diruzko isunak, behin administrazio bidean irmoak direnean, ingurumenaren mesederako lehengoratze, kontserbazio edo hobekuntza lanen bidez ordezkatu ahal izango dira zehatutako pertsonak hala eskatzen badu, betiere isuna jarri duen zehapen organoak finkatzen dituen baldintzetan eta moduan.

2. Ondorio horiei begira, pertsona arau hausleak gutxienez diruzko isunaren zenbatekoaren balio bera duen ingurumenaren alorreko ordezko prestazioa eman ahal izateko eskaera egingo du. Gehienez hiru hilabeteko epean erabakiko da eskaera eta epe horretan jakinaraziko zaio interesdunari; hala ez bada, eskaera aintzat hartu ez dela ulertuko da.

3. Ezarritako zehapenen preskripzio epeak eten egingo dira arestian adierazitako ingurumenaren alorreko ordezko prestazio eskaerari erantzuteko epeetan.

118. artikulua. Diruzko zehapenen erabilera.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak, jarritako zehapenen bidez, bildutako dirua Lege honek ezarritako helburuak betetzera zuzenduko

da, eta, horretarako, hala behar izanez gero, Lege honen 85.1 artikuluan ezarritako aurrekontuko partidan sartu ahal izango da. Gainerako administrazio publikoek ere ildo beretik erabaki ahal izango dute egindako diru-bilketek kontu sail bat osatzea beren urteko aurrekontuetan, ingurumenaren babesarekin loturiko jarduerak aurrera eramateko izan dadin.

XEDAPEN GEHIGARRIA.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, betiere beren eskumenen arabera, behar beste baliabide material eta giza baliabide edukiko dute Lege honetan finkatutako helburuak beteko direla bermatzeko.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA. Abian diren prozedurak.

Lege hau indarrean jartzean abian diren prozedurak haiek hastean indarrean zegoen araudiaren arabera bideratuko dira, espedientearen sustatzaileak Lege honetan finkatutako prozedurak aplikatzea espresuki eskatzen duenean izan ezik; halakoetan, aintzat hartuko dira ordurako bideratutako ekintzak eta tramitea.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA. Dauden instalazioak

1. Ingurumen baimen bateratuak edo jarduera sailkatuaren udal lizentziak dituzten edo jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena aurkeztu duten jardueren edo instalazioen titularrek beren eskubideak izaten jarraituko dute dituzten titulu administratiboen edukiaren eta Legeak berak zehazten duenaren arabera, lege horretara egokitu beharko badira ere dagozkien prozeduren ondorioz eta hurrengo paragrafoetan xedaturikoaren kariaz ematen diren ebazpenei jarraiki.

2. Lege hau indarrean jartzen denean I. Eranskineko B) atalean jasota dauden jarduerak edo instalazioak ingurumen baimen bakarraren araubide juridiko berriari egokituko zaizkio bost urteko epean Lege hau indarrean jartzen denetik kontatzen hasita, xedapen honetan finkatutako irizpideekin eta epeekin bat etorriz.

3. Egokitzapen hori Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak egingo du Lege honetan aurreikusitako prozedura izapidetu behar izan gabe jardueraren edo instalazioaren titularrak erantzukizunpeko adierazpen bat bidaltzen baldin badu eta bertan bere ingurumenaren alorreko tituluak lortzeko oinarritu ziren baldintzak egun egoera bertsuan daudela ziurtatzen baldin badu.

4. Jarduera edo instalazio horiek gaitzen duten ingurumenaren alorreko tituluetan jaso ez diren aldaketak egiten badituzte, emandako azken tituluekiko egindako aldaketei buruzko txosten deskribatzaile bat idatzi beharko da Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak aztertu dezan eta, hala behar badu, aurreko paragrafoan aurreikusitako prozedura ez izapidetzea ahalbidetzen duen egokitzapena bidezkoa den ala ez erabaki dezan. Ingurumen-organoak hala erabakitzen badu, Lege honetan zehaztutako ingurumen baimen bateratua lortzeko prozedura abiaraziko dute jarduera horiek.

5. Ondoko irizpide eta epe hauen arabera bideratuko da aurreko paragrafoetan aurreikusitako egokitzapena:

a) Lege hau indarrean jartzen denetik kontatzen hasi eta bi urteko epean egokituko dira hondakin arriskutsuak tratatzeko baimena duten jarduerak eta instalazioak.

b) Lege hau indarrean jartzen denetik kontatzen hasi eta hiru urteko epean egokituko dira Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak lehenetsitako eta baimendu beharreko atmosfera kutsa lezaketen jarduerak.

c) Lege hau indarrean jartzen denetik kontatzen hasi eta lau urteko epean egokituko dira hondakin ez arriskutsuak tratatzeko baimena duten jarduerak eta instalazioak.

d) Lege hau indarrean jartzen denetik kontatzen hasi eta bost urteko epean egokituko dira dauden jarduera eta instalazio guztiak.

Lege hau indarrean hasten denean, eta jarritako epeen arabera, ingurumen baimen bakarraren araubide juridikoari egokitu beharreko jarduerei eta instalazioei lotutako ingurumenaren alorreko prozedurak izapidetu eta eman dituzten administrazio edo erakunde publikoek espediente horien kopia bat helaraziko diote Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.

Indargabetuta geratzen da 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurumena babesteko lege orokorra, bai eta Lege honetan xedatutakoaren aurka egiten duten, kontrajarriak diren edo bateraezinak diren maila bereko edo maila txikiagoko xedapen guztiak.

LEHENENGO AZKEN XEDAPENA. Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunen eta Foru Organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 legearen 7. c) 6. artikuluaren aldaketa.

Berridatzi da Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde komunen eta Foru Organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7. c) artikulua, eta honela gelditu da idatzita:

"6.- 10.000 baino biztanle gutxiago dituzten udalerrietan, eta 10.000 biztanle edo gehiago dituzten udalerrietan dagokion udalak hala eskatuz gero, neurri babesleak eta zuzentzaileak ezarriko dira sailkatutako jarduerarako lizentzia duten jardueretan, neurri horiek Lurralde Historiko bat baino gehiago edo erkidegoaz kanpoko Erakunde Publiko bat baino gehiago ukitzen ez badituzte eta Legeak udal Erakundeei esleitutako eskumenei kalterik eragiten ez badie".

BIGARREN AZKEN XEDAPENA. Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen 7.4 artikulua aldatzea.

Idazkera berria eman zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen 7.4 artikuluari, eta honela geratu da:

«4. Bigarren apartatuan aipatutako lurraldearen antolamenduko eta hirigintzako baliabideei legez ezarritako ingurumenaren ebaluazio-prozedura estrategiko bat egin behar bazaie, ez da beharrezkoa izango 3. apartatuan eskatzen den eta ingurumen-ebaluazio estrategikoaren edo ingurumen-dokumentu estrategikoaren esparruan –dagokionaren arabera– bildu den informazioa bikoiztea.

HIRUGARREN AZKEN XEDAPENA. Uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren bitartez onartutako Uren Legearen testu bateginean finkatutako araubideari egokitzea.

1. Estatuko Administrazio Orokorrak kudeatutako arroetako jabari publiko hidraulikora I.A eta I.B eranskinetan aurreikusitako jardueretatik eratorritako isuriak baimentzeko xedean Lege honetan aurreikusitako prozedurak ez du uren legediak eta Estatuko Administrazio Orokorrari jabari publiko hidraulikoa babesteko xedean dagozkion beste eskumenek aurreikusitako araubide ekonomiko finantzarioa aldatzen. Bereziki, ez dira zaintzari eta ikuskapenari dagozkion eskumenak aldatzen, ez eta zehatzeko ahalmenari dagozkionak ere.

2. Dagokion arroko erakundeak kitatuko du isurien kontrol kanona, ingurumen baimen bateratuan eta ingurumen baimen bakarrean jasotako baldintzen arabera; ondorio horiei begira, haren eskura jarriko du aipatu kanona berau emateko eskumena duen organo autonomikoak.

LAUGARREN AZKEN XEDAPENA. Uren ekainaren 23ko 1/2006 Legean finkatutako araubideari egokitzea.

1. Euskal Autonomia Erkidegoak kudeatutako arroetako jabari publiko hidraulikora I.A eta I.B eranskinetan aurreikusitako jardueretatik eratorritako isuriak eta lehorretik itsasorako isuriak baimentzeko xedean Lege honetan aurreikusitako prozedurak ez du uren legediak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari edo URA-Uraren Euskal Agentziari jabari publiko hidraulikoa babesteko xedean dagozkien beste eskumenek aurreikusitako araubide ekonomiko finantzarioa aldatzen. Bereziki, ez dira zaintzari eta ikuskapenari dagozkion eskumenak aldatzen, ez eta zehatzeko ahalmenari dagozkionak ere.

2. URA-Uraren Euskal Agentziak kitatuko du isurien kontrol kanona, ingurumen baimen bateratuan eta ingurumen baimen bakarrean jasotako baldintzen arabera; ondorio horiei begira, Agentziaren eskura jarriko du aipatutako kanona berau emateko eskumena duen organo autonomikoak.

BOSGARREN AZKEN XEDAPENA. Eranskinak egokitzeko araudia bideratzea.

Ahalmena ematen zaio Gobernu Kontseiluari, Dekretu bidez eta ingurumenaren alorrean eskumenak dituen Sailak eskatuta, Lege honen eranskinak aldatu ahal izateko, aplikagarria den araudira, ingurumenaren alorreko errekerimenduetara edo, hala dagokionean, izaera teknikoko errekerimenduetara egokitzeko.

SEIGARREN AZKEN XEDAPENA. Indarrean hastea.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara ematen den egunaren biharamunean hasiko da indarrean Lege hau.

LEGE PROIEKTUAREN ERANSKINAK

I.A Eranskina. Ingurumen baimen bateratua behar duten instalazioak.

1. Errekuntza instalazioak.

1.1 50 MW-ko potentzia edo potentzia termiko nominal handiagoa duten errekuntza instalazioak:

a) Ohiko erregimenean edo erregimen berezian energia elektrikoa ekoizten duten instalazioak, horietan erregai fosilak, hondakinak edo biomasa erretzen badute

b) Kogenerazio instalazioak, galdarak, lurruna sortzeko makinak edo industria batean dagoen edozein errekuntza ekipamendu edo instalazio, errekuntza industria horretako jarduera nagusia izan ala ez.

1.2 Petrolio eta gas findegiak:

a) Petrolioa edo petrolio gordina fintzeko instalazioak.

b) Gas naturalaz bestelako gas erregarriak eta petrolioaren gas likidotuak ekoizteko instalazioak.

1.3 Koke fabrikak.

1.4 Honako hauen gasifikazioa eta likuefakzioa bideratzeko instalazioak:

a) Ikatza.

b) Beste erregaiak, instalazioak 20 MW-ko potentzia termiko nominala duenean edo potentzia handiagoa.

2. Metalen ekoizpena eta eraldaketa.

2.1 Mineral metalikoak, mineral sulfurosoak barne, kiskaltzeko edo sinterizatzeko instalazioak.

2.2 Altzairu gordinak urtzeko instalazioak (oinarrizko zein bigarren mailako fusioa), eta fundizio jarraituko instalazioak, orduko 2,5 tonatik gora ekoizteko ahalmena baldin badute.

2.3 Metal ferrosoak eraldatzeko instalazioak:

a) Berotasun bidez ijeztekoak, orduko 20 tonatik gora altzairu gordin ekoizteko ahalmena badute.

b) Mailuen bidezko forjaketa, talka energia 50 kilojuliotik gorakoa baldin bada mailu bakoitzeko eta erabilitako potentzia termikoa 20 MW-tik gorakoa baldin bada.

c) Metal urtuzko babes geruzak aplikatzea, orduko 2 tonatik gora altzairu gordin tratatzeko ahalmena badute.

2.4. Metal ferrosoen fundizioak, egunean 20 tonatik gora ekoizteko ahalmena badute.

2.5 Instalazioak:

a) Metal ez ferrosoak gordinean ekoizteko, mineraletatik, kontzentratuetatik edo bigarren mailako lehengaietatik abiatuta, prozedura metalurgiko, kimiko edo elektrolitikoen bidez.

b) Metal ez ferrosoen fusiorako, aleazioa barne, baita berreskurapen produktuak ere, egunean fusio gaitasun hau baldin badute: berunaren eta kadmioaren kasuan, 4 tonatik gorakoa; eta gainerako metalen kasuan, 20 tonatik gorakoa.

2.6 Metalen eta material plastikoen gainazala prozesu elektrolitikoz edo kimikoz tratatzeko instalazioak, tratamendurako erabiltzen diren kubeta edo linea osoen bolumena 30 m3-tik gorakoa baldin bada.

3. Mineralen industria.

3.1. Zementuaren, karearen eta magnesio oxidoaren ekoizpena:

a) i) zementua ehotze bidez fabrikatzeko instalazioak, egunean 500 tonatik gora ekoizteko ahalmena badute;

ii) klinkerra labe birakarietan fabrikatzeko instalazioak, egunean 500 tonatik gora ekoizteko ahalmena badute, edo bestelako labeetan fabrikatzeko instalazioetan, egunean 50 tonatik gora ekoizteko ahalmena badute;

b) karea labeetan ekoizteko instalazioak, egunean 50 tonatik gora ekoizteko ahalmena badute;

c) magnesio oxidoa labeetan ekoizteko instalazioak, egunean 50 tonatik gora ekoizteko ahalmena badute;

3.2. Edukirik gabe.

3.3 Beira, beira zuntza barne, fabrikatzeko instalazioak, egunean 20 tonatik gora urtzeko ahalmena badute.

3.4 Mineralak urtzeko instalazioak, mineral zuntzen fabrikazioa barne, egunean 20 tona baino gehiago urtzeko ahalmena badute.

3.5 Labea erabiliz zeramikazko produktuak egiten dituzten instalazioak, bereziki teilak, adreiluak, adreilu erregogorrak, azulejuak, gres zeramika edo etxerako zeramikak zein zeramika apaingarriak egiten dituztenak, egunean 75 tonatik gora ekoizteko ahalmena baldin badute, 4 m3-tik gora laberatzeko ahalmena baldin badute eta labe bakoitzean 300 kg-tik gorako karga dentsitatea baldin badute metro kubikoko.

4. Industria kimikoak.

Atal honen eta bertan jasotako jardueren kategorien deskribapenaren ondorioei begira, 4.1etik 4.6ra bitarteko epigrafeetan aipatutako produktuen

edo produktu multzoen eraldaketa kimiko edo biologikoaren bidezko industria mailako fabrikazioa adierazten du fabrikazio hitzak.

4.1. Produktu kimiko organikoak fabrikatzeko instalazio kimikoak, zehazki:

a) Hidrokarburo soilak (linealak edo ziklikoak, aseak edo asegabeak, alifatikoak edo aromatikoak).

b) Hidrokarburo oxigenatuak, hala nola alkoholak, aldehidoak, zetonak, azido organikoak, esterrak eta azetato esterren, eterren, peroxidoen eta epoxi erretxinen nahasketak.

c) Hidrokarburo sulfuratuak.

d) Hidrokarburo nitrogenatuak, zehazki, aminak, amidak, konposatu nitrosoak, nitrikoak edo nitratoak, nitriloak, zianatoak eta isozianatoak.

e) Hidrokarburo fosforatuak.

f) Hidrokarburo halogenatuak.

g) Konposatu organiko metalikoak.

h) Gai plastikoak (polimeroak, zuntz sintetikoak, zelulosatik ateratako zuntzak).

i) Kautxu sintetikoak.

j) Koloregaiak eta pigmentuak.

k) Tentsioaktiboak eta gainazaleko agenteak.

4.2. Produktu kimiko inorganikoak fabrikatzeko instalazio kimikoak, zehazki:

a) Gasak eta, zehazki, amoniakoa, kloroa edo hidrogeno kloruroa, fluorra edo hidrogeno fluoruroa, karbono oxidoak, sufre konposatuak, nitrogeno oxidoak, hidrogenoa, sufre dioxidoa eta karbonilo dikloruroa.

b) Azidoak eta, zehazki, azido kromikoa, azido fluorhidrikoa, azido fosforikoa, azido nitrikoa, azido klorhidrikoa, azido sulfurikoa, azido sulfuriko fumantea eta azido sulfuratuak.

c) Baseak eta, zehazki, amonio hidroxidoa, potasio hidroxidoa eta hidroxido sodikoa.

d) Amonio kloruroa, klorato potasikoa, karbonato potasikoa (potasa), karbonato sodikoa (soda), perboratoak eta nitrato argentikoa bezalako gatzak.

e) Ez metalak, oxido metalikoak edo kaltzio karburoa, silizioa eta silizio karburoa bezalako beste konposatu inorganiko batzuk.

4.3. Ongarriak fosforoz, nitrogenoz edo potasioz (ongarri sinpleak edo konposatuak) fabrikatzeko instalazio kimikoak.

4.4. Landare osasunerako produktuak eta biozidak fabrikatzeko instalazio kimikoak, bere jarduera nagusia izan ala ez izan, eta edozein dela ere abiapuntuko lehengaia edo jarraitutako prozesua, eraldaketa kimikoa edo biologikoa dakartenean.

4.5. Botikak, tarteko produktuak barne, fabrikatzeko prozedura kimiko edo biologikoren bat erabiltzen duten instalazio kimikoak.

4.6. Leherkariak fabrikatzeko instalazio kimikoak.

5. Hondakinen kudeaketa.

5.1. Hondakin arriskutsuak balioztatzeko edo deuseztatzeko instalazioak, eguneko 10 tonatik gorako ahalmena badute eta, gutxienez, hauetako jarduera bat gauzatzen badute:

a) Tratamendu biologikoa;

b) Tratamendu fisiko-kimikoa;

c) 5.1. eta 5.2. paragrafoetan aipatutako eragiketen konbinazioa edo aurretiazko nahasketa;

d) 5.1. eta 5.2. ataletan aipatutako edozein jardueraren aurreko berrontziratzea;

e) Disolbatzaileak berreskuratzea edo berroneratzea;

f) Metalak edo konposatu metalikoak ez diren materia inorganikoak birziklatzea eta berreskuratzea;

g) Azidoak edo baseak berroneratzea;

h) Kutsadura murrizteko erabilitako osagaiak balioztatzea;

i) Katalizatzaileetatik eratorritako osagaiak balioztatzea;

j) Olioak berroneratzea edo berrerabiltzea;

k) Azaleko urtegietan isurtzea (esate baterako, hondakin likidoak edo lohiak putzuetara, urmaeletara edo aintziretara eta abarretara isurtzea).

5.2. Hondakinak balioztatzeko edo deuseztatzeko instalazioak hondakinen errausketa edo baterako errausketa instalazioetan:

a) Arriskutsuak ez diren hondakinetarako, orduko hiru tonatik gorako ahalmena badute;

b) Hondakin arriskutsuetarako, eguneko 10 tonatik gorako ahalmena badute.

5.3 Arriskutsuak ez diren hondakinak ezabatzeko instalazioak, eguneko 50 tonatik gorako ahalmena badute, baldin eta jarraian zerrendatuko diren

jardueretako bat edo gehiago hartzen badituzte (hiriko hondakin uren tratamenduari aplikagarri zaizkion arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretuan aipatzen direnak izan ezik).

a) Tratamendu biologikoa;

b) Tratamendu fisiko-kimikoa;

c) Errausketa edo baterako errausketa aurreko tratamendua;

d) Zepen eta errautsen tratamendua;

e) Tratamendua hondakin metalikoen birringailuan egitea, honako hauek barne: hondakin elektrikoak eta elektronikoak, bizitza erabilgarriaren amaieran dauden ibilgailuak eta haien osagarriak.

5.4 Arriskutsuak ez diren hondakinak balioztatzeko instalazioak, edo balioztatu eta ezabatu biak batera egiten dituzten instalazioak, eguneko 75 tonatik gorako ahalmena badute, baldin eta jarraian zerrendatuko diren jardueretako bat edo gehiago hartzen badituzte beren barruan (hiriko hondakin uren tratamenduari aplikagarri zaizkion arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretuan jasotzen direnak izan ezik).

a) Tratamendu biologikoa;

b) Errausketa edo baterako errausketa aurreko tratamendua;

c) Zepen eta errautsen tratamendua;

d) Tratamendua hondakin metalikoen birringailuan egitea, honako hauek barne: hondakin elektrikoak eta elektronikoak, eta bizitza erabilgarriaren amaieran dauden ibilgailuak eta haien osagarriak.

e) Instalazioan egiten den hondakinak tratatzeko jarduera bakarra digestio anaerobikoa denean, jarduera horren ahalmen atalasea eguneko 100 tona izango da.

5.5 Mota guztietako hondakinak hartzen dituzten hondakindegiak (hondakin geldoen zabortegiak izan ezik), egunean 10 tona baino gehiago hartzen badituzte edo guztira 25.000 tonatik gorako edukiera badute.

5.6 Aurreko 5.5. paragrafoan aipatu ez diren hondakin arriskutsuak aldi baterako biltegiratzea, 5.1., 5.2. eta 5.5. paragrafoetan adierazitako tratamenduetako bat aplikatu arte, betiere 50 tonatik gorako ahalmena badute, alde batera utzita jasotzeko zain dagoen bitartean lekuan bertan sortu diren hondakinak aldi batez biltegiratzea.

5.7 Hondakin arriskutsuak lur azpian gordetzea, guztizko edukiera 50 tonatik gorakoa denean.

6. Egurretik eratorritako industria.

6.1 Honako hauek fabrikatzeko industria instalazioak:

a) Paper orea, zura edo zuntzezko beste materia batzuk lehengai hartuta;

b) Papera eta kartoia, egunean 20 tona baino gehiago ekoizteko ahalmena izanez gero.

6.2. Zelulosa ekoizteko eta tratatzeko instalazioak, egunean 20 tona baino gehiago ekoizteko ahalmena badute.

6.3 Egurretik eratorritako honako taula hauetako bat edo gehiago fabrikatzera zuzendutako industria instalazioak: egurrezko txirbilezko taula orientatuak, taula aglomeratuak, kartoi trinkotuzko taulak edo zuntzezko taulak, egunean 600 m3-tik gora ekoizteko ahalmena badute.

7. Ehungintza industria.

7.1. Ehungintzako zuntzak edo produktuak aldez aurretik tratatzeko (ikuzi, zuritu, mertzerizatu) edo tindatzeko instalazioak, egunean 10 tona baino gehiago tratatzeko ahalmena badute.

8. Larruaren industria.

8.1 Larruak zurratzeko instalazioak, egunean 12 tona produktu amaitu baino gehiago ateratzeko ahalmena badute.

9. Nekazaritzako elikagaien industriak eta abeltzaintzako ustiategiak.

9.1. Honako hauetarako instalazioak:

a) Hiltegiak, egunean kanalean irekitako 50 tona okela baino gehiago ekoizteko ahalmena badute.

b) Honako lehengai hauen tratamendua eta eraldaketa (ontziratzeaz bestekoak), aurrez tratatuak izan ala ez, elikagaiak edo pentsuak honako hauen bidez fabrikatzekoa direnean:

i) Animalia lehengaiak (ez esnea bakarrik), baldin eguneko 75 tonatik gorako produktu amaitu ekoizteko ahalmena badute;

ii) Landare lehengaiak, egunean 300 tonatik gora produktu bukatu ekoizteko ahalmena badute; edo 600 tonatik gorakoa, baldin instalazioak, edozein urtetan ez badu erreskadan 90 egun baino gehiagotan lan egiten;

iii) animalia eta landare lehengaiak soilik, biak konbinatzen dituzten produktuetan nahiz bereiz, eguneko produktu bukatuen honenbesteko ekoizteko ahalmena badute:

- 75 A 10 edo gehiago bada, edo

– [300 – (22,5 × A)] beste edozein kasutan,

non "A" produktu bukatuak ekoizteko ahalmenaren animalia materia zatia den (pisuaren ehunekoan).

Ontzia ez da produktuaren amaierako pisuaren barruan sartuko.

Azpiatal hau ez da aplikagarria izango lehengaia soilik esnea denean.

c) Soilik esnea tratatzeko eta eraldatzeko instalazioak, egunean 200 tona baino gehiago (urteko batez bestekoa) hartzen dituztenak.

9.2 Animalia hondakinak deuseztatzeko edo aprobetxatzeko instalazioak, egunean 10 tonatik gora tratatzeko ahalmena badute.

9.3 Hegaztizaintza edo txerri hazkuntza intentsiborako instalazioak, baldintza hauek betetzen badituzte:

a) 40.000 oilo errulerentzako toki, edo beste hegazti batzuen kasuan, nitrogeno-iraizkin baliokidearenak.

b) 2.000 toki 30 kg-tik gorako gizentzeko txerrientzat.

c) 750 toki ugaltzeko txerramentzat.

10. Disolbatzaile organikoen kontsumoa.

10.1 Material, objektu edo produktuen gainazalak disolbatzaile organikoez tratatzeko instalazioak, batez ere prestatzeko, estanpatzeko, gainjanzteko eta koipegabetzeko, iragazgaizteko, lakatzeko, garbitzeko edo eransteko, disolbatzaile organikoen orduko kontsumo ahalmena 150 kg-tik gorakoa denean edo urtean 200 tonatik gorakoa.

11. Karbonoaren industria.

11.1 Karbono sinterizatua edo elektrografitoa errekuntzaz edo grafitazioz fabrikatzeko instalazioak.

12. Egurra kontserbatzeko industria.

12.1 Egurra eta egurretik eratorritako produktuak kontserbatzea produktu kimikoak erabilita, egunean 75 m3-tik gora ekoizteko ahalmena badu. Soilik nahasketa kromogenoei aurre egiteko tratamendua salbuetsita dago.

13. Urak tratatzea.

13.1 Hondakin uren tratamendu independentea, hiriko hondakin uren legediak aurreikusten ez duena, eta eranskin honetan bildutako instalazio batek isuritakoak.

14. CO2-a atzitzea

14.1 Eranskin honetan bildutako instalazioetatik eratorritako CO2 fluxuak atzitzea biltegiratze geologikorako, karbono dioxidoaren biltegiratze geologikoari buruzko abenduaren 29ko 40/2010 Legeari jarraituz.

I.B Eranskina. Ingurumen baimen bakarra behar duten jarduerak eta instalazioak.

I. Eranskin honetako A atalean jaso ez diren jardueren kasuan, ingurumen baimen bakarraren mende egongo dira honako jarduera eta instalazio hauek:

1. Hondakin arriskutsuak tratatzeko baimena behar duten jarduerak edo instalazioak.

2. Hondakin ez arriskutsuak tratatzeko baimena behar duten jarduerak edo instalazioak.

3. Baimena behar duten jarduerak edo instalazioak atmosfera kutsatu dezaketelako.

4. Berotegi efektuko gasak sortzen dituzten jarduerak edo instalazioak, berotegi efektuko gasak isurtzeko eskubideen salerosketa erregimena arautzen duen martxoaren 9ko 1/2005 Legearen arabera gas horiek isurtzeko baimena behar badute.

5. URA/Uraren Euskal Agentziaren aldez aurreko eta berariazko baimen administratiboa eskatzen duten jarduerak edo instalazioak ur kontinentaletan edo jabari publiko hidrauliko edo itsasoaren eta lehorraren arteko jabari publikoko beste edozein elementutan zuzeneko edo zeharkako 3 (*) motako ur isuri industrialak egiteagatik edo hondakin produktuak, likidoak, solidoak edo bestelakoak isurtzeagatik.

6. Aldez aurreko eta berariazko baimen administratiboa eskatzen duten jarduerak edo instalazioak ur kontinentaletan edo jabari publiko hidraulikoko beste edozein elementutan zuzeneko edo zeharkako 3 (*) motako ur isuri industrialak egiteagatik edo hondakin produktuak, likidoak, solidoak edo bestelakoak isurtzeagatik.

7. 100.000 biztanle-baliokide baino ahalmen handiagoa duten hondakin uren araztegiak.

8. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren iritziz, ingurumenean eta pertsonen osasunean antzeko ondorioak eragin ditzaketen beste jarduerak.

(*) Uren Legearen (uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuak onartua) testu bateginaren atariko titulua eta I., IV., V., VI., VII. eta VIII. tituluak garatzen dituen Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren IV. Eranskinaren arabera (Isurien kontrol kanonaren maiorazio edo minorazio koefizientearen kalkulua).

I.C Eranskina. Jarduera sailkatuaren lizentzia behar duten jarduerak eta instalazioak.

I. Eranskin honen A eta B ataletan jaso ez diren jardueren kasuan, sailkatutako jardueretarako udal lizentziaren mende egongo dira honako jarduera eta instalazio hauek:

1. Erauzte jarduerak.

2. Instalazio nuklearrak eta erradioaktiboak.

3. Energia elektrikoa ekoizten duten instalazioak 100 kW-tik gorako potentzia instalatua badute.

4. Industriak, oro har.

5. Azaleraren tratamenduak, pistola bidezko bernizatze eta pintatze lanak edo antzekoak egiten dituzten tailerrak.

6. Hainbat tailer eta lantegi (ibilgailu motordunen mantentzea eta konponketa eta antzekoak, aroztegiak, galdaragintza tailerrak, muntatze tailerrak, mekanizaziokoak, okindegiak, gozotegiak, cateringak...), baldin eta instalatutako potentzia totala (mekanikoa eta elektrikoa, argiarena kenduta) 25 kW-ekoa edo handiagoa bada eta ekoizpenerako azalera 300 m2-tik gorakoa bada.

7. Biltegiratzeko, salerosketarako eta erakusketarako jarduerak edo instalazioak, toxiko, arriskutsu edo sukoi gisa katalogatuta dauden produktuak eta materialak baldin badituzte (500 kg-tik gora, bizitegirako hiri lurzoruan, edo 1.000 kg-tik gora, gainerako lurzoruetan).

8. Gasolina zerbitzuguneak eta hornitegiak, eta erregai likidoak edota gaseosoak banatzeko instalazioak edo antzeko instalazioak.

9. Edozein motatako lurzoruan kokatutako erregai likido eta gaseosoak biltzeko instalazioak, 50.000 litrotik gorako edukiera badute.

10. 500.000 m3 baino gehiagoko edukiera duten lurrezko eta harrizko betelanak, betiere lanek urte bat baino gehiago irauten badute, azpiegitura linealetarako obrei lotuta daudenak izan ezik.

11. Hondakin urak arazteko instalazioak eta edateko ura tratatzeko instalazioak.

12. Arrain haztegiak.

13. Abere hiltegiak.

14. Dantza areto, dantzaleku, klub, diskoteka, disko-bar, karaoke, pub edo antzeko establezimenduak, baita zezen plaza egonkorrak ere.

15. Ostalaritza establezimenduak, jatetxeak eta jendaurreko ikuskizunetarako eta jolas jardueretarako beste establezimendu batzuk, baldin eta, betiere, honako baldintza hauetakoren bat betetzen badute:

– 300 lagun edo gehiagorentzako tokia izatea.

– indarrean dagoen araudi teknikoaren arabera arrisku bereziki altuko gisa katalogatutako instalazioren bat izatea.

– kultura balio handiko eraikinak izatea, beren ezaugarriek izaera orokorrez finkatutako baldintza teknikoak erabat betetzeko aukera ematen ez badute.

– ikuskizunei eta jolas jarduerei buruzko araudiaren arabera erregimen bereziko establezimenduak izatea.

16. 300 lagun edo gehiagorentzako lekua duten gurtzarako zentroak.

17. 20 ALU (azienda larri unitateak) baino gehiagoko abeltzaintzako ustiategiak eta etxeko eskortak, edo ustiategi baliokideak, irailaren 22ko 515/2009 Dekretuaren 3. artikuluko a) idatz zatian agertzen diren proportzioen arabera, edo horren ordez aterako den araudiaren arabera; txakur zaindegiak (hazkuntza eta hezkuntza), 25 txakur baino gehiago hartzeko lekua badute; denak ere, baldin eta lurzoru urbanizaezinean edo industriarako hiri lurzoruan badaude.

18. Etxeko abeltzaintza jarduerak, alegia, 4 ALU (azienda larri unitateak) baino gehiago dituzten instalazioak, eta txakur zaindegiak, den-denak, bizitegirako hiri lurzoruan baldin badaude.

19. Lege honetan xedatutakoaren arabera, osasunean eta ingurumenean antzeko eragina izan dezaketen beste jarduerak.

I.D Eranskina. Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena behar duten jarduerak eta instalazioak.

I. Eranskin honen A, B eta C ataletan jasota ez dauden jarduerak direnean, jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena beharko dute honako jarduera eta instalazio hauek:

1. Energia elektrikoa ekoizteko instalazioak edo energia elektriko bihurtzeko biltze eta eraldatze instalazioak, potentzia instalatua 50 kW-etik gorakoa eta 100 kW-ekoa edo txikiagoa baldin badute.

2. Hainbat tailer eta lantegi (ibilgailu motordunen eta antzekoen mantentzea eta konponketa, aroztegiak, galdaragintza tailerrak, muntatze tailerrak, mekanizaziokoak, okindegiak, gozotegiak, cateringak...), I.C Eranskineko 5. eta 6. puntuetan daudenak izan ezik.

3. Aurreko eranskineko 7. puntuan sartzen ez diren biltegiratze, salerosketa eta erakusketa jarduerak eta instalazioak.

4. Erregai likidoak edo gaseosoak biltzeko instalazioak, 50.000 litrotik beherako edukia dutenak; sailkapen honetatik kanpo geratzen dira gasolindegi batean, hornitegi parke batean, banatze instalazio batean edo horren pareko instalazio batean daudenak.

5. 100 m^2-tik gorako azalera eraikia duten ibilgailuak zaintzeko lekuak.

6. Zenbait zerbitzu jarduera: haurtzaindegiak, ikastetxeak, osasun eta botika zentroak, albaitaritza klinikak, polizia etxeak eta segurtasun zentroak, bulegoak, ile apaindegiak, masaje etxeak eta hiltegi zerbitzuak.

7. Hotelak, pentsioak, aterpetxeak, landa-turismo etxeak, egoitza komunitarioak, adinduen egoitzak eta antzeko establezimenduak.

8. Jarduera sailkatuetarako aurretiazko lizentziaren mende ez dauden jendaurreko ikuskizunak edo jolas jarduerak eskaintzen dituztenak.

9. Jarduera sailkatuaren lizentziarik behar ez duten gurtzarako zentroak.

10. Jarduera sailkatuen udal lizentzia behar ez duten instalazioak eta jarduerak aurreikusten dituen eranskinean ez dauden abeltzaintza ustiategi txikiak eta etxeko eskortak.

11. Eraldaketa zentroak.

12. Informazioa tratatzeko eta komunikatzeko zentroak (kalkulu zentroak, datu bankuak, irrati eta telebista hedagailuak, satelite bidezko hedagailuak, telefonia mugikorreko antenak eta oinarri estazioak, irrati-telefonoko estazioak eta estazio irrati telegrafokoak, irrati eta telebista igorgailuak eta alarmak kontrolatzeko zentralak) eta antzekoak.

13. Instalazio osagarriak:

13.1 Galdara gelak.

13.2. Airea girotzeko instalazioak.

13.3. Kamera hozkailuen instalazioak.

13.4. Erradio diagnosi medikoa egiteko instalazioak; alegia, aplikatzekoa den erregelamenduaren arabera, diagnosi medikoak egiteko helburua daukaten X izpien ekipamenduak eta instalazioak.

14. Errauste laberik gabeko hilerriak eta beilatokiak.

15. Lurrezko eta harrizko betelanak, 500.000 m3 arteko edukiera dutenak, betiere lanek urte bat baino gutxiago irauten badute, azpiegitura linealeko obrei lotuta daudenak izan ezik.

16. Osasunean eta ingurumenean antzeko eragina izan dezaketen bestelako jarduerak.

I.E Eranskina. Jarduera edo instalazio baten aldaketa funtsezkotzat hartzeko irizpideak.

1. Edozein handitze edo aldaketa, berez iristen bada I.A Eranskinean zehaztutako gaitasun atalaseetara, halakorik dagoenean, edo ingurumen inpaktuaren ebaluazio arruntaren prozedura bete behar duenean alor horretako araudiaren arabera.

2. Instalazioaren ekoizpen gaitasuna % 50 baino gehiago handitzea produktu unitateetan.

3. Uraren, lehengaien edo energiaren kontsumoan baimendutako kopuruak % 50 baino gehiago handitzea.

4. Baimenean ageri den edozein airearen kutsatzaileren isurketa masikoa edo foku igorle bakoitzean sortutako guztizko isuri atmosferikoak % 25 baino gehiago handitzea, bai eta kutsatzaile berriak kopuru handietan sartzea ere.

5. Baimenean ageri den edozein kutsatzaileren edo isurpen emariaren isurketa masikoa edo isuri kontzentrazioa handitzea jabari publiko hidraulikora, bai eta kutsatzaile berriak kopuru handietan sartzea ere.

6. Uren araudiaren arabera lehentasunezko edozein substantziaren isuri kontzentrazioaren isurketa masikoa % 25 edo % 25 baino gehiago handitzea edo baimenean ageri den isurpen emaria % 25 handitzea, bai eta uren araudiaren arabera lehentasunezko substantzia berri gehiago sartzea ere, haien xedea jabari publiko hidraulikoa ez denean.

7. Prozesuan jatorrizko baimenean aurreikusi ez diren substantzia edo prestakin arriskutsuak sartzea, edo haien kopurua handitzea, substantzia arriskutsuak tartean diren istripu larriei loturiko berezko arriskuak kontrolatzeko neurriak onartzen dituen irailaren 21eko 840/2015 Errege Dekretuak araututako segurtasun txostena edo larrialdi planak egitera behartzen dutenean, bai eta haiek edozein kopurutan areagotzea ekoizpen prozesuan eskuarki eta etengabe erabiltzeko, murrizteko edo deuseztatzeko nazioarteko hitzarmenak edo akordioak bete behar dituztenean.

8. Hondakin arriskutsuen sorrera urtean 10 tonatik gora areagotzea, baldin eta prozesuaren aldaketa estrukturala egiten bada, eta guztira sortutako hondakin arriskutsuen % 25etik gorako gehikuntza, baimendutako gehieneko hondakin arriskutsuen kopuruaren gainean kalkulatuak.

9. Hondakin ez arriskutsuen sorrera urtean 50 tonatik gora areagotzea, baldin eta hondakin ez arriskutsuen % 50 baino gehiago badira, hondakin geldoak barne, baimendutako gehieneko hondakin kopuruaren gainean kalkulatuak.

10. Hondakin ez arriskutsuak soilik tratatzen dituen hondakinen errausketa edo baterako errausketa instalazio baten funtzionamendua aldatzea, aldaketa horren ondorioz hondakin arriskutsuen errausketa edo baterako errausketa egiteko instalazio bihurtzen duenean.

11. Isurpen puntua aldatzea, aldaketa horrek baimena eman zitzaion gainazaleko edo lurpeko ur masaren aldaketa dakarrenean.

II.A Eranskina. Ingurumen ebaluazio estrategiko arruntaren prozedura bete behar duten planak eta programak.

Ohiko ingurumen ebaluazio estrategikoa egingo zaie ondoren adierazten diren planei eta programei, Administrazio publiko batek onartuak badira eta haien prestaketa eta onespena beharrezkotzat jotzen badu legezko edo erregelamenduzko xedapen batek edo Gobernu Kontseiluaren erabaki batek:

1. Lurralde antolamendurako gidalerroak.

2. Lurralde Plan Partzialak.

3. Lurralde Plangintza Sektorialak.

4. Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak.

5. Sektorizazio Planak.

6. Ingurumen inpaktuaren ohiko ebaluazioa egitera legez behartutako beste proiektuak eta programak etorkizunean baimentzeko esparrua ezartzen badute, eta honako arlo hauei buruzkoak badira: nekazaritza, abeltzaintza, basogintza, akuikultura, arrantza, energia, meatzaritza, industria, garraioa, hondakinen kudeaketa, ur baliabideen kudeaketa, itsasoaren eta lehorraren arteko jabari publikoaren okupazioa, itsas ingurunearen erabilera, telekomunikazioak, turismoa, hiri edo landa lurraldearen antolamendua edo lurzoruaren erabileraren antolamendua.

7. Zuzenean edo zeharka, bakarrik edo beste plan, programa edo proiektuekin batera, eremu babesturen bat edo Euskal Autonomoa Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuaren 13. artikuluan eta natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 30, 42 eta 50. artikuluetan jasotako babes erregimen bat duen eremu babesturen bat

nabarmen kaltetzen duten beste planak eta proiektuak. Ez da soilik lekua kudeatzeko xedapenak finkatzen dituzten planen eta programen ingurumen ebaluazioa egin beharko, II.A Eranskineko gainerako kasuren batean ez badaude.

8. II.B Eranskinean jasotako beste planak eta programak, ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifikatuko prozedura bat gauzatu ondoren ingurumen-organoak hala erabakitzen badu edo sustatzaileak hala eskatzen badu.

9. Edozein plan edo programaren berrikuspenak eta aldaketak, legez ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta behar duten proiektuak etorkizunean baimentzeko esparrua badira eta eranskin honen 6. apartatuan jasotako materietako bati buruzkoak badira, edota, eranskin honen 7. apartatuan jasotako espazioetako bati modu nabarmenean eragin badiezaiokete, aipatu apartatuan zehaztutako baldintzetan.

II.B Eranskina. Ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura bete behar duten planak eta programak

Ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifikatua bete beharko dute administrazio publikoek onartzen dituzten ondoko planek eta programek, bai eta haien aldaketek, haiek prestatzea edo onartzea legezko edo arauzko xedapen batek eskatzen duenean edo Gobernu Kontseiluak erabakitzen duenean.

1. II.A eranskinean jasotako planen eta programen aldaketa txikiak eta berrikuspenak, legez ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta behar duten proiektuak etorkizunean baimentzeko esparrua ez badira eta, gainera, II.A eranskinaren 7. apartatuan jasotako espazioetako bati modu nabarmenean eragin ezin badiezaiokete, aipatu apartatuan zehaztutako baldintzetan.

2. Beste plan eta programa batzuk, eta haien berrikuspenak eta aldaketak, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta behar ez duen eta ingurumenean tarteko probabilitate-mailako eragin nabarmena izan dezakeen proiektu bat etorkizunean onartzeko esparrua badira. Ez dira apartatu honetan sartuko II.A eranskinean jasotako kasuak.

II.C Eranskina. Ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua behar duen plan edo proiektu batek ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta noiz behar duen erabakitzeko irizpideak.

1. Planen eta programen ezaugarriak, bereziki honako hauek kontuan harturik:

a. Planak edo programak zein neurritan ezartzen duen proiektuetarako eta bestelako jardueretarako esparrua, bai kokalekuari, izaerari, neurriei eta funtzionamendu baldintzei dagokienean bai esleitu beharreko bitartekoei dagokienean.

b. Planak edo programak zein neurritan eragiten duen beste planetan edo prometan, hierarkizatuak daudenak barne.

c. Planaren edo programaren egokitasuna ingurumenarekin lotutako gogoetak txertatzeko, garapen jasangarria sustatu ahal izateko bereziki.

d. Planarekin edo programarekin loturiko ingurumen arazo nabarmenak.

e. Planaren edo programaren egokitasuna ingurumen alorreko legedi komunitarioa edo nazionala ezartzeko, hondakinen kudeaketarekin edo ur baliabideen babesarekin loturiko planak edo programak, besteak beste.

2. Ondorioen eta kaltetu ahal izan den eremuaren ezaugarriak, bereziki honako hauek aintzat harturik:

a. Ondorioen probabilitatea, iraupena, maiztasuna eta itzulgarritasuna.

b. Ondorioen metatze izaera.

c. Ondorioen mugaz gaindiko izaera.

d. Giza osasunerako edo ingurumenerako arriskuak (esate baterako, istripuen ondorioz).

e. Ondorioen larritasuna eta irismen espaziala (kaltetua gerta daitekeen eremu geografikoa eta populazioaren tamaina).

f. Honako hauen ondorioz kaltetua suertatu ahal izan den eremuaren balioa eta zaurgarritasuna:

1. Ezaugarri natural bereziak.

2. Kultur ondarean izandako ondorioak.

3. Ingurumen kalitatearen muga balioak edo helburuak gainditzea.

4. Lurzoruaren ustiapen intentsiboa.

5. Nazio mailan, Europako Erkidegoan edo nazioarte mailan aintzat hartutako babes maila duten eremuetan edo paisaietan eragindako ondorioak.

II.D Eranskina. Ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta behar duten proiektuak.

Ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta bete beharko dute ondoko proiektu hauek:

1. II.D Eranskin honen barneko Taldeetan jasotako kasuren batean dauden proiektuek, bai eta zatikatuta egonda ere, aintzat hartutako proiektu bakoitzaren magnitudeak edo dimentsioak metatuz gero aipatutako ataletan jasotako atalaseetara iristen badira.

2. II.D Eranskin honetako Taldeetan jasotako zehaztapenetara egokitzen diren proiektuek, soilik edo batez ere metodo edo produktu berriak garatzeko eta probatzeko badira eta produktu horien erabilera bi urteko epean edo epe luzeagoan aurreikusten bada.

3. Dagoeneko baimendua, onartua, gauzatua, edo gauzatze prozesuan den proiektu baten edozein aldaketa, aldaketa hori bakarrik edo proiektu berean egindako beste aldaketekin metatuta, II.D Eranskin honetako Taldeetako batean jasotako atalaseetara iristen bada.

4. II.E Eranskinean jasotako beste programa batzuek, ingurumen inpaktuaren ebaluazio estrategiko sinplifikatuko prozedura gauzatu ondoren ingurumen-organoak hala erabakitzen badu edo sustatzaileak hala eskatzen badu.

D1 Taldea. Nekazaritza, basogintza, akuikultura eta abeltzaintza.

1.a. Eremu naturalak edo erdinaturalak nekazaritza ustiapenerako edo zuraren baso aprobetxamendurako erabiltzeko proiektuak, 50 hektarea edo azalera handiagoa hartzen badute.

1.b. Nekazaritza edo baso eremuak, naturalak izan ala ez izan, nekazaritza ustiategi ureztatu bihurtzeko proiektuak, 50 hektarea edo azalera handiagoa hartzen badute.

1.c. Nekazaritza intentsiborako instalazioak, urtean 500 tona edo gehiago ekoizteko ahalmena badute.

1.d. Abeltzaintzako ustiategietan abereak hazteko instalazioak 250 ALU edo gehiago egoteko lekua dutenak, abeltzaintzako ustiategien arau teknikoak, baldintza higieniko-sanitarioak eta ingurumeneko baldintzak ezarri dituen irailaren 22ko 515/2009 Dekretuan jasotako baliokidetasun taularen arabera.

1.e. Ingurumenean genetikoki aldatutako organismoak nahita askatzeko proiektuak, 90/220/EEE Zuzentarauaren arabera.

D2 Taldea. Erauzteko industria.

Talde honetako atal guztietan barne hartzen dira minerala erauzteko, tratatzeko, biltegian gordetzeko, aprobetxatzeko eta garraiatzeko beharrezkoak diren instalazioak eta egiturak, bai eta meatzaritzako hondakinen metaketak, baltsak, linea elektrikoak, ur hornidurak eta arazketak, eta iristeko bideak.

2.a. Harrikatza, lignitoa edo bestelako materialak erauzteko instalazio berriak.

2.b. Zohikatza erauzteko instalazio berriak.

2.c. Dauden edo iraganean izan diren ustiategiak handitzea, hektarea bateko edo gehiagoko erauzte azalera berria hartu behar denean.

2.d. Mineral metalikoen erauzketatik eta tratamendutik sortutako tarteko produktuen edo produktu antzuen gordetegiak.

2.e. Petrolioa eta gas naturala erauzteko instalazio berriak.

2.f. Dauden edo iraganean izan diren ustiategiak handitzea, handitze horrek dakarren ekoizpen kopurua egunean 500 tonakoa edo handiagoa denean petrolioaren kasuan eta egunean 500.000 metro kubikokoa denean gasaren kasuan, edo bestela, itsasoan egiten direnean, edozein dela ere ekoizpen kopurua.

2.g. Hidrokarburoak esploratzeko edo ikertzeko zulaketak, CO_2 biltegiratzea, gasa eta entalpia ertain eta handiko energia geotermikoa biltegiratzea, haustura hidraulikoko teknikak erabili behar direnean.

D3 Taldea. Energiaren industria.

3.a Petrolio gordinaren findegiak (baina ez, ordea, petrolio gordinetik lubrifikatzaileak besterik ekoizten ez dituzten enpresak), eta egunean gutxienez 500 tona ikatz edo eskisto bituminoso gasifikatzeko eta likidotzeko ahalmena duten instalazioak.

3.b Zentral termikoak eta beste errekuntza instalazio batzuk, 50 MW-ko edo gehiagoko potentzia termikoa dutenak.

3.c Zentral nuklearrak eta bestelako erreaktore nuklearrak, zentral eta erreaktore horiek eraistea edo behin betiko ixtea barne hartuta (materia fisionagarriak eta emankorrak ekoizteko eta eraldatzeko ikerketarako instalazioak izan ezik), haien gehieneko potentziak 1 kW-ko iraupen termiko iraunkorra gainditzen ez badu.

Zentral nuklearrak eta bestelako erreaktore nuklearrak ez dira halako instalaziotzat hartzen erregai nuklear guztia, eta erradiaktiboki kutsatutako gainerako elementuena, behin betiko erretiratu bada instalazioaren lekutik.

3.d Erregai nuklear irradiatuak birprozesatzeko instalazioak.

3.e Helburu hauetarako diseinaturiko instalazioak:

1. Erregai nuklearra ekoiztea edo aberastea.

2. Erregai nuklear irradiatuak edo oso hondakin erradioaktiboak berrerabiltzeko prozesua.

3. Erregai nuklear erabilia behin betiko gordetzea.

4. Soil-soilik hondakin erradioaktiboak behin betiko gordetzea.

5. Soil-soilik erregai nuklear irradiatuak edo hondakin erradioaktiboak ekoiztu diren ez beste leku batean biltegiratzea (hamar urtetik gorako epe baterako proiektatua).

3.f. Jariakin motako erregai fosila, lurruna eta ur beroa garraiatzeko instalazioak, 10 km-ko luzeran edo handiagoan egiten badira, modu jarraituan edo etenean neurtuak; hiri lurzoruan dauden zatiak ez dira kontatuko.

3.g. 100 kV-ko edo tentsio handiagoa eta 1 km edo gehiagoko luzera duten energia elektrikoaren transmisiorako lineak, eta haiekin loturiko azpiestazioak, eraikitzea, oso-osorik lurzoru urbanizatuaren zorupetik, edo dauden komunikabideetatik, igarotzen diren lineak izan ezik.

3.h. Energia elektrikoaren transmisiorako aireko lineen zortasun eremuak handitzea, zuhaitz eta/edo zuhaixka estalkiaren garapenerako murrizketa dakarrenean linearen inguruko zerrendan, 5 km edo gehiagoko luzerarekin, modu jarraituan edo etenean neurtuak.

3.i. Petrolio produktuak, produktu petrokimikoak edo kimikoak biltegian gordetzeko instalazioak, 200.000 tona edo gehiago biltegiratzeko adinakoak baldin badira.

3.j. 5 haize sorgailu edo gehiago, guztira 10 MW-ko potentzia edo handiagoa dutenak, dauzkaten parke eolikoak. Beste parke eoliko batetik 2 km baino gutxiagora dauden parke eolikoak, baldin eta dituzten baterako magnitudeak aurreko atalaseetara iristen badira edo atalase horiek gainditzen badituzte.

Arau honen ondorioetarako, energia eolikoaren arloko araudian halakotzat jotako instalazioak bakarrik hartuko dira parke eolikotzat.

3.k. Energia fotovoltaikoaren instalazioak, 5 hektareako azalera edo handiagoa hartzen dutenak. Barne hartuko dira, azalera txikiagoa hartuta ere, beste instalazio fotovoltaiko baten mugan dauden titular beraren edo beste batzuen instalazioak, baldin eta instalazio horiek guztira 5 hektareako azalera edo handiagoa hartzen badute.

Kanpo gelditzen dira jada finkatutako lur urbanizatuetan, edo lehendik dauden eraikinetan kokatutako energia fotovoltaikoaren instalazioak.

D4 Taldea. Industria metalikoa eta mineralen industria.

4.a. Mineralak, kontzentratuak edo bigarren mailako lehengaiak oinarri hartuta prozesu metalurgiko, kimiko edo elektrolitikoen bidez metal ez ferrosoak gordinean erauzteko erabiltzen diren instalazioak.

4.b. Burdinurtuaren eta altzairuaren hasierako galdaketarako instalazio integratuak.

4.c. Burdin metalak egiteko instalazioak, jarduera hauetakoren bat egiten badute:

1. Berotasun bidezko ijezketa, orduko 20 tona altzairu gordin baino gehiago ijezteko ahalmena baldin badute.

2. Mailuen bidezko ijezketa, talka energia 50 kJ-tik gorakoa denean mailu bakoitzeko eta erabilitako potentzia termikoa 20 MW-tik gorakoa denean.

3. Metal urtuzko babes geruzak aplikatzea, orduko 2 tonatik gorako altzairu gordin tratatzeko ahalmena baldin badute.

4.d. Metal ferrosoen fundizioak, egunean 20 tonatik gora ekoizteko ahalmena badute.

4.e. Burdinen sailekoak ez diren metalak (metal preziatuak izan ezik), errekuperazio produktuak barne hartuta (fintzea, fundizio hondarrak eta abar), urtzeko instalazioak (aleazioa ere kontuan hartuta), egunean fusio ahalmen hau baldin badute: berunaren eta kadmioaren kasuan, 4 tonatik gorakoa; eta gainerako metalen kasuan, berriz, 20 tonatik gorakoa.

4.f. Metalen eta material plastikoen gainazala prozesu elektrolitikoz edo kimikoz tratatzeko instalazioak, tratamendurako erabiltzen diren kubeten edo linea osoen bolumena 30 m3-koa edo handiagoa baldin bada.

4.g. Mineral metalikoak kiskaltzeko eta sintetizatzeko instalazioak, urtean 5.000 tona edo gehiago prozesatzeko ahalmena baldin badute.

4.h. Zementua, karea eta magnesio oxidoa fabrikatzeko instalazio berriak

4.i. Zementua ehotze bidez fabrikatzeko instalazioak handitzea, ekoizteko ahalmena egunean 500 tona edo gehiago handitzen bada.

4.j. Klinkerra fabrikatzeko instalazioak handitzea, ekoizteko ahalmena egunean 500 tona edo gehiago handitzen bada, labe birakarietan egiten denean, edo bestela, egunean 50 tona edo gehiago beste era bateko labeetan egiten denean.

4.k. Karea ekoizteko instalazioak handitzea, ekoizteko ahalmena egunean 50 tona edo gehiago handitzen bada.

4.l. Magnesio oxidoa ekoizteko instalazioak handitzea, ekoizteko ahalmena egunean 50 tona edo gehiago handitzen bada.

4.m. Beira, beira zuntza barne, fabrikatzeko instalazioak, egunean 20 tona edo gehiago urtzeko ahalmena baldin badute.

4.n. Mineralak urtzeko instalazioak, mineral zuntzen fabrikazioa barne, egunean 20 tona edo gehiago urtzeko ahalmena badute.

4.o. Zeramikazko produktuak labean fabrikatzeko instalazioak, bereziki teilak, adreiluak, adreilu erregogorrak, azulejuak, gres zeramika edo etxerako zeramikak zein zeramika apaingarriak, egunean 75 tona edo gehiago ekoizteko ahalmena baldin badute eta labe bakoitzean 4 metro kubiko edo gehiago erretzeko ahalmena baldin badute, betiere labe bakoitzean 300 kg edo gehiagoko karga dentsitatea baldin badute metro kubikoko.

4.p. Koke fabrikak.

4.q. Ontziolak, industria metalikoaren sektorean sartuta ez dauden instalazioak izan ezik.

D5 Taldea. Industria kimikoa, petrokimikoa, ehungintza eta papergintza

5.a. Eraldaketa kimiko edo biologikoaren bidez, honako produktu edo produktu multzo hauek eskala industrialean ekoizteko instalazioak:

1. Produktu kimiko organikoak:

i) Hidrokarburo soilak (linealak edo ziklikoak, aseak edo asegabeak, alifatikoak edo aromatikoak).

ii) Hidrokarburo oxigenatuak, hala nola alkoholak, aldehidoak, zetonak, azido organikoak, esterrak eta azetato esterren, eterren, peroxidoen eta epoxi erretxinen nahasketak.

iii) Hidrokarburo sulfuratuak.

iv) Hidrokarburo nitrogenatuak, zehazki, aminak, amidak, konposatu nitrosoak, nitrikoak edo nitratoak, nitriloak, zianatoak eta isozianatoak.

v) Hidrokarburo fosforatuak.

vi) Hidrokarburo halogenatuak.

vii) Konposatu organiko metalikoak.

viii) Gai plastikoak (polimeroak, zuntz sintetikoak, zelulosatik ateratako zuntzak).

ix) Kautxu sintetikoak.

x) Koloregaiak eta pigmentuak.

xi) Tentsioaktiboak eta gainazaleko agenteak.

2. Produktu kimiko inorganikoak:

i) Gasak eta, zehazki, amoniakoa, kloroa edo hidrogeno kloruroa, fluorra edo hidrogeno fluoruroa, karbono oxidoak, sufre konposatuak, nitrogeno oxidoak, hidrogenoa, sufre dioxidoa eta karbonilo dikloruroa.

ii) Azidoak eta, zehazki, azido kromikoa, azido fluorhidrikoa, azido fosforikoa, azido nitrikoa, azido klorhidrikoa, azido sulfurikoa, azido sulfuriko fumantea eta azido sulfuratuak.

iii) Baseak eta, zehazki, amonio hidroxidoa, potasio hidroxidoa eta hidroxido sodikoa.

iv) Amonio kloruroa, klorato potasikoa, karbonato potasikoa (potasa), karbonato sodikoa (soda), perboratoak eta nitrato argentikoa bezalako gatzak.

v) Ez metalak, oxido metalikoak edo kaltzio karburoa, silizioa eta silizio karburoa bezalako beste konposatu inorganiko batzuk.

3. Fosforoa, nitrogenoa edo potasioa erabiliz egindako ongarriak (ongarri sinpleak edo konposatuak).

4. Landare osasunarentzako produktuak eta biozidak.

5. Prozesu kimiko edo biologikoren bat erabiliz egindako farmazia produktuak.

6. Leherkariak.

5.b. Ehungintzako zuntzak edo produktuak aldez aurretik tratatzeko (ikuzi, zuritu, mertzerizatu) edo tindatzeko instalazioak, egunean 10 tona edo gehiago tratatzeko ahalmena badute.

5.c. Larruak zurratzeko instalazioak, egunean 12 tona edo gehiago tratatzeko ahalmena badute.

5.d. Paper orea, papera eta kartoia ekoizteko eta zelulosa ekoizteko eta tratatzeko industria instalazio berriak.

5.e. Paper orea ekoizteko industria instalazioen handitzeak, edozein tamainako ekoizpen gehikuntza dakarrenean.

5.f. Papera eta kartoia ekoizteko industria instalazioak handitzea, ekoizpena 200 tona edo gehiago handitzen bada egunean.

5.g. Zelulosa ekoizteko eta tratatzeko industria instalazioak handitzea, ekoizpena 20 tona edo gehiago handitzen bada egunean.

D6 Taldea. Azpiegitura proiektuak.

6.a. Autobideak, autobiak eta errepide konbentzionalak eraikitzea.

6.b. Autobideen, autobien eta errepide konbentzionalen trazadura saihesbidea, zabaltzea edo berriro lerrokatzea, 10 km edo gehiagoko luzera jarraituan.

6.c. Ibilbide luzeko trenbideak eraikitzea.

6.d. Trenbide baten trazadura saihesbidea, zabaltzea edo birlerrokatzea 10 km-ko luzera jarraituan edo handiagoan.

6.e. 2.100 metro edo gehiagoko aireratzeko eta lurreratzeko pistak dituzten aireportuak; haien sarbideetara ere hedatuko da ebaluazioa.

6.f. Aireportuen handitzeak, egungo azaleraren % 50 edo gehiagoko lur okupazioa dakartenean edo 5 hektarea edo azalera handiagoa dutenean.

6.g. Merkataritza eta arrantza portuak, bide nabigagarriak eta kirol portuak.

6.h. Portuen handitzeak, azalera babestua egungo azaleraren % 50 edo gehiago handitzen bada, edo handitze hori 5 hektareakoa edo handiagoa bada.

6.i. Portuen handitzeak, itsas-lehorreko jabari publikoaren eta/edo babes zortasun eremuaren okupazio berria dakartenean eta okupazio hori guztira 5 hektareakoa edo handiagoa denean.

6.j. Kirol portuen handitzeak, 1.350 tonatik gorako itsasontziak hartzea dakartenean, lehen hartzen ez zituztenean.

6.k. 1.350 tonatik gorako itsasontziak hartzen dituzten zamalanetarako kaiak egitea, lehorrera eta kanpo portuetara lotuak (transbordadoreentzako kaiak izan ezik), I. eremuan kokatuta daudenak salbu, Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginak, irailaren 5eko 2/2001

Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 69 artikuluaren a) hizkian araututako portuko gune eta erabileren mugaketari jarraituz.

6.l. Hondartzetan hondarra ugaritzeko obrak, 500.000 metro kubiko hondar edo gehiago ekarri behar bada, hondarra erauzteko lanak barne.

6.m. Itsasoari lurrak hartzea.

6.n. Urpeko isurbideak, oliobideak eta gasbideak.

D7 Taldea. Azpiegitura hidraulikoko, ura kudeatzeko eta tratatzeko proiektuak eta jarduerak jabari publiko hidraulikoan.

7.a. Gailurreraino 10 metroko altuera edo handiagoa edo 100.000 metro kubikoko urtegiratze gaitasuna duten presak.

7.b. Ura geldiarazteko edo behin betiko biltzeko beste instalazio batzuk, bildutako uraren bolumena 10 hektometro kubikokoa edo handiagoa baldin bada.

7.c. Presak handitzea, ur xaflaren gehieneko azalera % 25 edo gehiago handitzen bada, edo azalera hori 5 hektareakoa edo handiagoa bada.

7.d. Zorupeko urak aprobetxatzea edo akuiferoak artifizialki kargatzea haien deskarga naturala, gutxienez, beren eraginpeko ibai ibilguen agorraldi emarien % 50ekoa bada edo hezegune nabarmenetako ur xafla edo kriptohezeguneen azpiazalerako maila piezometrikoa mantentzearekin lotura zuzena badute, baldin eta atalase hauetakoren bat gainditzen bada:

1. Urteko ateratze bolumenak akuiferoaren urteko kargaren % 25 gainditzen badu.

2. Jada ateratako ur bolumenak akuiferoaren urteko kargaren % 50 gainditzen badu eta aprobetxamendu berriak gutxienez karga horren % 10aren bolumena gainditzen badu urtean.

3. Karga artifizialak akuiferoaren urteko karga naturalaren % 50 gainditzen badu.

7.e. Zorupeko uren edozein aprobetxamendu edo akuiferoak artifizialki kargatzea, urtean ateratako edo ekarritako ur bolumena 10 hektometro kubikokoa edo gehiagokoa baldin bada.

7.f. Ibai arroen artean ur baliabideak isuraldatzeko proiektuak, isuraldatutako uraren bolumena 10 milioi metro kubikotik gorakoa bada urtean, hodi bidezko isuraldatzeak izan ezik.

7.g. Ibai bideratzeak eta ibilguen ibilbide aldaketak, 250 metrotan edo luzera handiagoan esku hartu behar bada, modu jarraituan ala etenean neurtuak, hiriguneetako eta eremu urbanizatuetako ibilgu zatiak eta lehendik bideratuta dauden zatiak kanpo utzita.

7.h. Hondakin urak tratatzeko plantak, 100.000 biztanle baliokideren edo gehiagoren hondakin urak tratatzeko ahalmena baldin badute, 91/271/EEE Zuzentarauaren 2. artikuluaren 6. puntuan zehaztu bezala.

7.i. Ur kontinentalak energia elektrikoa ekoizteko aprobetxatzea; ura ateratzeko, garraiatzeko, biltegiratzeko, aprobetxatzeko eta itzultzeko beharreko instalazioen eta egituren obretara hedatuko da ebaluazioa, bai eta urbanizazio azpiegituretara eta sarbideetara ere.

D8 Taldea. Hondakinak tratatzeko eta kudeatzeko proiektuak.

8.a. Soil-soilik hondakin erradioaktiboen biltegiratze iraunkorrerako edo hondakin horiek behin betiko deuseztatzeko diren instalazioak. Lege honen ondorioetarako, hondakin erradioaktiboen biltegiratze iraunkortzat hartuko da, edozein dela ere iraungo duen denbora, bereziki jarduera horretarako sortua dena eta hondakin horiek sortzen dituen instalazio nuklear edo erradioaktiboaren esparrutik kanpo dagoena.

8.b. Hondakin arriskutsuak errausteko industria instalazio finkoak, bai eta hondakin horiek deuseztatzeko zabortegian uztea, segurtasun deposituan gordetzea eta haiei tratamendu kimikoa edo antzeko beste edozein tratamendu ematea igor ditzaketen kutsatzaileei begira.

8.c. Hondakin arriskutsuak balioztatzeko industria instalazio finkoak, olio erabilien kudeaketa barne, egunean 10 tona baino gehiago onartzeko edukiera dutenak.

8.d. Hondakin ez arriskutsuak errausteko edo hondakin horiek tratamendu kimikoen edo igor ditzaketen kutsatzaileei begira antzeko beste edozein tratamenduren bidez deuseztatzeko instalazio finkoak, egunean 50 tona edo gehiago jasotzeko ahalmena baldin badute.

8.e. Etxe hondakinak edo industria hondakinak kudeatzeko lanetan sortzen diren hondakin ez arriskutsuak, hondakin geldoak izan ezik, hartzen dituzten zabortegiak. Bestelako hondakin ez arriskutsuen edo edozein eratako hondakin geldoen zabortegiak, egunean 10 tona edo gehiago jasotzen badituzte eta guztira 25.000 tona edo gehiagoko edukiera badute.

8.f. Etxe hondakinak edo industria hondakinak kudeatzeko lanetan sortzen diren hondakin ez arriskutsuak, hondakin geldoak izan ezik, hartzen dituzten zabortegiak handitzea, har daitekeen hondakin kopurua egunean 10 tona edo gehiago, edo guztira 25.000 tona handitzen bada.

D9 Taldea. Bestelako proiektuak.

9.a. Kanpoan egiten diren ibilgailu motordunen lasterketetarako eta probetarako pista eta zirkuitu iraunkorrak, hektarea bateko azalera edo handiagoa badute.

9.b. 5 hektareako azalera edo handiagoa duten parke tematikoak.

9.c. Lurzoruaren erabilera aldaketa dakarren edozein proiektu, 50 hektareako azalera edo handiagoa hartzen badu eta zuhaixka edo zuhaitz

estalkia kendu behar bada hektarea bateko azaleran edo handiagoan, modu jarraituan eta etenean neurtua, edo bestela, lurzoruaren erabilera aldaketak 100 hektareako azalera edo handiagoa hartzen badu.

Lege honen ondorioetarako, lurzoruaren erabilera aldaketatzat hartuko da edozein landa zoruren elkarren arteko eraldaketa (nekazaritza, abeltzaintza, basoa, ehiza edo baliabide naturalak erabiltzearekin loturiko beste edozein) edo landa lurzoru erabilera lurzoru urbanizagarri bihurtzea.

9.d. CO2 fluxuak atzitzeko instalazioak, biltegiratze geologikoa eta biltegiratze guneak helburu dituztenak, abenduaren 29ko 40/2010 Legeak, karbono dioxidoaren biltegiratze geologikoari buruzkoak, ezarritakoari jarraituz, karbono dioxido hori eranskin honetan jasota dauden instalazioetatik eratorria bada, edo CO2-ren guztizko atzitzea urtean 1,5 Mt-koa edo handiagoa bada.

D10 Taldea. Gune babestuetan gauzatzen diren proiektuak.

Gune babestuetan edo babes erregimenen bat dutenetan aurrera eramaten diren proiektuetarako atalaseak eta zehaztapenak jaso dira atal honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuaren 13. artikuluan, eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 30., 42. eta 50. artikuluetan jasoak.

10.a. II.D Eranskin honen 8. Taldean sartu ez diren hondakin ez arriskutsuen zabortegiak, bai eta hondakin geldoenak edo ibaietatik, lehorretik zein itsasotik erauzitako materialenak, hektarea bateko azalera edo handiagoa hartzen badute.

10.b. Landu gabeko lursailak edo sail erdinaturalak nekazaritza ustiapenerako edo zuraren baso aprobetxamendurako erabiltzeko proiektuak, 10 hektareako azalera edo handiagoa hartzen badute.

10.c. Lur ureztatu bihurtzeko edo lurrak drainatzeko proiektuak, 10 hektareako azaleran edo handiagoan eragiten badute.

10.d. Ibaiak drainatzea, ateratako bolumena urtean 20.000 metro kubiko edo gehiago baldin bada, eta itsasoak drainatzea, ateratako bolumena urtean 20.000 metro kubiko edo gehiago baldin.

10.e. Produktu kimikoak garraiatzeko eta gasa eta petrolioa garraiatzeko hodiak, 800 mm-ko diametroa edo handiagoa eta 10 km-ko luzera edo handiagoa badute, eta biltegiratze geologikoa helburu duten karbono dioxido fluxuak garraiatzeko hodiak, haiekin lotutako ponpatze estazioak barne.

10.f. Energia elektrikoa transmititzeko lineak, 3 km-ko luzera edo handiagoa dutenak, eremu urbanizatuak zeharkatzen dituztenak izan ezik.

10.g. 5 haize sorgailu edo gehiago eta guztira 6 MW-ko potentzia edo handiagoa duten parke eolikoak.

10.h. Aireportuak eta haien handitzeak, II.D Eranskin honen 6. Taldean sartu ez direnak.

10.i Lurzorua urbanizatzea dakarten proiektuak, industria poligonoak, bizitegi erabilerak, merkataritza guneak eta aparkalekuak egiteko, hektarea bateko azalera edo handiagoa hartzen badute.

10.j. Gutxienez 30 lagunentzako lekua duten hotelak, lurzoru urbanizaezinean.

10.k. Eskiatzeko pistak, erremonteak, teleferikoak eta haiei lotutako eraikuntzak.

10.l. Hektarea bateko azalera edo handiagoa duten parke tematikoak.

10.m. Ura distantzia handietara eramateko instalazioak, 800 mm-ko diametroa edo handiagoa eta 10 km-ko luzera edo handiagoa dutenak.

10.n. Lurzoruaren erabilera aldaketa dakarten lursail biltzeak, landare estalkia nabarmen aldatzen badute.

10.o. Eguzki energia baliatuta energia elektrikoa ekoizteko instalazioak, energia hori sareari saltzea xede dutenak, lehendik dauden eraikinen estalkietan edo teilatuetan ez badaude eta 10 hektarea baino azalera handiagoa hartzen badute.

II.E eranskina. Ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua behar duten proiektuak.

II.D eranskinean jasotako proiektu guztiak alde batera utzita, ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatuaren xede izango dira ondoko proiektu hauek:

1. II.E eranskin honen barneko Taldeetan jasotako kasuren batean dauden proiektuak, bai eta zatikatuta egonda ere, aintzat hartutako proiektu bakoitzaren magnitudeak edo dimentsioak metatuz gero aipatutako ataletan jasotako atalaseetara iristen badira.

2. II.E eranskin honetako proiektuak, soilik edo batez ere metodo edo produktu berriak garatzeko eta probatzeko badira; II.D eranskineko antzeko proiektuak, produktu horien erabilera bi urte baino epe laburragoan aurreikusten bada.

3. Zuzenean edo zeharka, bakarrik edo beste plan, programa edo proiektuekin batera, eremu babesturen bat edo Euskal Autonomoa Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuaren 13. artikuluan eta natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 30, 42 eta 50. artikuluetan jasotako babes erregimen bat duen eremu babesturen bat nabarmen kaltetzen duten beste planak eta proiektuak.

4. Dagoeneko baimendua, onartua, gauzatua, edo gauzatze prozesuan den proiektu baten edozein aldaketa, aldaketa hori bakarrik edo proiektu berean egindako beste aldaketekin metatuta, II.E eranskin honetako Taldeetako batean jasotako atalaseetara iristen bada edo ondorio hauek baldin baditu:

1. Atmosferara isuritako emisioen gorakada nabarmena.

2. Ubide publikoetara edo itsasertzera egindako isurien gorakada nabarmena.

3. Sortutako hondakinen gorakada nabarmena.

4. Natura baliabideen erabileraren gorakada nabarmena.

5. Eremu babestuak edo Euskal Autonomoa Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuaren 13. artikuluan eta natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 30, 42 eta 50. artikuluetan jasotako babes erregimen bat duten eremu babestuak kaltetzea.

6. Kultura ondareari kalte nabarmenen bat egitea.

E1 Taldea: Nekazaritza, basogintza, akuikultura eta abeltzaintza.

1.a. Eremu naturalak, erdinaturalak edo landugabeak nekazaritza ustiapenerako erabiltzen hasteko proiektuak, 10 hektareako azalera edo handiagoa hartzen badute.

1.b. Lursailak biltzeko proiektuak, 100 hektareatik gorako azalera hartzen badute.

1.c. Basotzeak, azaroaren 21eko 43/2003 Legeak, mendiei buruzkoak, 6.g) artikuluan emandako definizioaren arabera, 50 hektareatan edo azalera handiagoan eragiten badute, eta baso mozketak, lurzoruari beste erabilera bat ematea helburu izanez gero.

1.d. Nekazaritzarako ur baliabideak kudeatzeko proiektu hauek:

1. Lur ureztatuak finkatzeko eta hobetzeko proiektuak 100 hektarea edo azalera handiagoa hartzen badute.

2. Lur ureztatu bihurtzeko edo lursailak drainatzeko proiektuak, 10 hektareatan edo azalera handiagoan eragiten badute.

Lege honen ondorioetarako, ureztatzeak finkatzeko ekintzak izango dira, bai ur ezagatik, bai hodietan galera handiegiak izateagatik, ur gutxiz hornituta

dauden ureztatutako azaleretan eragina dutenak, eta dauden laboreen ur beharrak osatzea xede dutenak. Ureztatzeak hobetzeko ekintzak izango dira ur hornidura nahikoa duten ureztatutako azaleretan eragina dutenak, haietan ura aurrezteko edo ustiategietan hobekuntza sozioekonomikoak bideratzeko ekintzak aurreikusi direnean.

1.e. Akuikultura intentsiborako instalazioak, urtean 50 tona edo gehiago ekoizteko ahalmena badute.

1.f. Abeltzaintzako ustiategietan abereak hazteko instalazioak 150 ALU edo gehiagorentzako lekua dutenak, abeltzaintzako ustiategien arau teknikoak, baldintza higieniko-sanitarioak eta ingurumeneko baldintzak ezarri dituen irailaren 22ko 515/2009 Dekretuan jasotako baliokidetasun taularen arabera.

E2 Taldea. Elikagaien industria.

2.a. Landare eta animalia koipeak eta olioak, konfiturak eta ziropak egiteko, garagardoa eta malta, fekulak, arrain irina eta arrain olioa egiteko industria instalazioak, baldin eta instalazioak ondoko baldintza hauek betetzen baditu aldi berean.

1. Industrialdeetatik kanpo egotea.

2. Bizitegi gune batetik 500 metro baino gertuago egotea.

3. Gutxienez hektarea bateko azalera hartzea.

2.b. Animalia eta landare produktuak ontziratzeko eta potoratzeko industria instalazioak ondoko kasu hauetakoren bat gertatzen denean: Edukia jatorrizkoaren berdina da baina forma aldatzen da.

1. Lehengaia animalia denean (esnea izan ezik) eta egunean 75 tonatik gora produktu bukatu ekoizteko ahalmena badute (hiruhileko batez besteko balioak).

2. Lehengaia landarea denean, eta egunean 300 tonatik gora produktu bukatu ekoizteko ahalmena badute (hiruhileko batez besteko balioak).

3. Lehengaia animalia nahiz landarea denean, eta egunean 75 tonatik gora produktu bukatu ekoizteko ahalmena badute (hiruhileko batez besteko balioak)

Hiruhileko batez besteko balioa: egiazko ekoizpen egunak kontuan hartuta, ekoizpen goreneko ondoz ondoko 90 egunen batez bestekoa egingo da.

2.c. Esnekiak ekoizteko industria instalazioak, egunean 200 tonatik gora esne jasotzen baldin badute (eguneko balioen batez bestekoa urte natural batean zehar).

2.d. Animaliak hiltzeko, zatikatzeko edo laurdentzeko instalazioak, egunean kanalean irekitako 50 tona okela edo gehiago ekoizteko ahalmena badute.

2.e. Azukre olak, egunean 300 tonatik gora lehengai tratatzeko ahalmena baldin badute.

E3 Taldea. Zulaketak, dragatzeak eta meatzaritzako eta industriako beste instalazio batzuk.

3.a. Zulaketa sakonak (lurzoruen eta zorupearen egonkortasuna edo estratigrafia ikertzeko zulaketak izan ezik), zehazki:

1. 500 metro edo sakonera handiagoko zulaketa geotermikoak.

2. Hondakin nuklearrak biltegiratzeko zulaketak.

3. Ur hornidurarako zulaketak 120 metro edo sakonera handiagoan.

4. Petrolioa edo gasa ateratzeko aukerak esploratzeko edo ikertzeko zulaketak.

3.b. Ikatza eta arbel bituminosoak gasifikatzeko barruko eta kanpoko instalazioak.

3.c. Itsas sismikaren bidez esploratzea.

3.d. Itsas dragatzeen bidez materialak erauztea, proiektuaren helburua baldintza hidrodinamikoei eta nabigagarritasunari eustea den kasuetan izan ezik.

3.e. Ibaien eta estuarioen dragatzea, erauzitako produktuaren bolumena urtean 100.000 metro kubikotik gorakoa baldin bada.

3.f. CO2 fluxuak atzitzeko instalazioak, biltegiratze geologikoa helburu dutenak, abenduaren 29ko 40/2010 Legeak, karbono dioxidoaren biltegiratze geologikoari buruzkoak, ezarritakoari jarraituz, karbono dioxido hori II.D. Eranskinean jasota ez dauden instalazioetatik eratorria bada.

3.g. Dauden edo iraganean izan diren ustiategiak handitzea.

3.h. Kanpoko industria instalazioak, ikatza, petrolioa, gas naturala, mineralak eta arbel bituminosoak erauzteko jardueraren osagarriak.

E4 Taldea. Energiaren industria.

4.a. Hondakin erradioaktiboak prozesatzeko eta biltegiratzeko instalazioak.

4.b. 15 kV-ko edo tentsio handiagoa eta 1 km edo gehiagoko luzera duten energia elektrikoaren transmisiorako lineak eraikitzea, oso-osorik lurzoru urbanizatuaren zorupetik igarotzen direnean izan ezik, bai eta haiekin loturiko azpiestazioak ere.

4.c. Gas naturala lurzoruaren gainean biltegiratzea. 200 tona edo gehiagoko edukiera unitarioa duten andelak.

4.d. Gas erregaiak zorupean biltegiratzea.

4.e. Erregai fosilak lurzoruaren gainean biltegiratzea (aurreko eranskinean sartuta ez daudenak).

4.f. Parke eolikoak. Arau honen ondorioetarako, energia eolikoaren arloko araudiak halakotzat hartutakoak soilik joko dira parke eolikotzat.

4.g. Energia fotovoltaikoaren instalazioak, 5 hektareako azalera edo handiagoa hartzen dutenak. Barne hartuko dira, azalera txikiagoa hartuta ere, beste instalazio fotovoltaiko baten mugan dauden titular beraren edo beste batzuen instalazioak, baldin eta instalazio horiek guztira 5 hektareako azalera edo handiagoa hartzen badute.

Kanpo gelditzen dira jada finkatutako lur urbanizatuetan, edo lehendik dauden eraikinetan kokatutako energia fotovoltaikoaren instalazioak.

4.h. Harrikatzezko eta lignitozko briketen fabrikazio industrialerako instalazioak.

4.i. Itsas ingurunean energia ekoizteko instalazioak.

E5 Taldea. **Industria siderurgikoa eta mineralen industria. Metalak ekoiztea eta lantzea.**

5.a. Zuntz mineral artifizialak ekoizteko instalazioak.

5.b. Aireontziak ekoizteko eta konpontzeko instalazioak.

5.c. Trenetako materiala fabrikatzeko instalazioak.

5.d. Ibilgailu motordunak fabrikatzeko eta muntatzeko instalazioak, eta ibilgailuentzako motorrak fabrikatzeko instalazioak.

5.e. Lehergailuen edo lursail hedagailuaren bidez, hondoa enbutitzea.

E6 Taldea. Industria kimikoa, petrokimikoa, ehungintza eta papergintza.

6.a. Produktu kimikoak ekoizteko eta tarteko produktuak tratatzeko instalazioak.

6.b. Pestizidak, farmazia produktuak, pinturak eta bernizak, elastomeroak eta peroxidoak ekoizteko industria instalazioak.

6.c. Petrolio produktuak, produktu kimikoak eta petrokimikoak biltegian gordetzeko industria instalazioak, 100 metro kubiko edo gehiagoko edukiera baldin badute.

6.d. Elastomeroak oinarri hartuta produktuak ekoizteko eta tratatzeko industria instalazioak.

E7 Taldea. Azpiegitura proiektuak.

7.a. Industrialdeetako proiektuak.

7.b. Eremu urbanizatuetatik kanpo kokatutako bizitegi eta merkataritza guneen proiektuak, gainazalean hektarea bat edo azalera handiagoa hartzen badute.

7.c. Herrietako saihesbideak eraikitzea.

7.d. Trenbideak eta linea aldaketa intermodalen instalazioak eta salgaien trenbide terminal intermodalak eraikitzea.

7.e. Tranbiak, zutabe gaineko eta lurpeko metroak, linea esekiak edo antzekoak, soil-soilik edo batez ere bidaiariak garraiatzeko baldin badira.

7.f. Aerodromoak egitea, uztailaren 21eko 48/1968 Legeak, aire nabigazioari buruzkoak, 39. artikuluan emandako definizioaren arabera.

7.g. Hondartzetan hondarra ugaritzeko obrak, dikeak eta kai muturrak eraiki behar badira.

7.h. Higadurari aurre egiteko itsasertzeko obrak eta kostaldea alda dezaketen itsas obrak; adibidez, dikeak, itsas hesiak, kai muturrak, eta itsasoari aurre egiteko eta babesa emateko beste obra batzuk. Salbuetsita daude obra horien mantentze lanak eta berreraikitzeak, bai eta portuetako zerbitzu guneetan egiten direnak ere.

E8 Taldea. Ingeniaritza hidraulikoko eta ura kudeatzeko proiektuak.

8.a. Urari eusteko instalazioak, 200.000 metro kubikotik gora biltegiratzeko ahalmena, berria edo gehigarria, baldin badute.

8.b. Zorupeko urak aprobetxatzea edo akuiferoak artifizialki kargatzea, urtean ateratako edo ekarritako ur kopurua hektometro kubiko bat edo handiagoa bada.

8.c. Ura arro batetik bestera isuraldatzeko proiektuak, isuraldatutako ur bolumena urtean 5 hektometro kubiko baino handiagoa baldin bada, hodi bidezko isuraldatzeak eta araztutako urak berrerabiltzeko isuraldatzeak izan ezik.

8.d. Hondakin urak tratatzeko plantak, 10.000 biztanle baliokideren edo gehiagoren hondakin urak tratatzeko ahalmena baldin badute, 91/271/EEE Zuzentarauaren 2. artikuluaren 6. puntuan zehaztu bezala.

8.e. Ura gatzgabetzeko instalazioak, egunean 3.000 metro kubiko edo gehiagoko bolumen berria edo gehigarria baldin badute.

8.f. Ura distantzia handitara eramateko instalazioak, 800 mm edo gehiagoko diametroa eta 40 km edo gehiagoko luzera izanez gero.

E9 Taldea. Bestelako proiektuak.

9.a. Ibilgailu motordunen lasterketak eta probak egiteko pista iraunkorrak.

9.b. Hondakinak deuseztatzeko edo balioztatzeko instalazioak, jarduera aire zabalean edo industrialdeetatik kanpo egiten bada.

9.c. Ibaietatik, lehorretik edo itsasotik erauzitako materialak isurtzeko edo jalkitzeko lehorreko instalazioak, hektarea bat edo azalera handiagoa hartzen dutenak.

9.d. Txatarra biltegiratzeko, baztertutako ibilgailuak biltegian gordetzeko, eta ibilgailuak ataltzeko eta deskutsatzeko instalazioak, jarduera aire zabalean edo industrialdeetatik kanpo egiten bada.

Kanpo gelditzen dira portuetan dauden txatarra biltegiratzeko jarduerak, karga eta deskarga jarduerekin loturikoak.

9.e. Motorrak, turbinak eta erreaktoreak probatzeko instalazioak edo saiakuntza bankuak.

9.f. Lehergaiak berreskuratzeko edo deuseztatzeko instalazioak.

9.g. Eskiatzeko pistak, erremonteak, teleferikoak eta haiei lotutako eraikuntzak.

9.h. Kanpatzeko dendak zein karabanak jartzeko kanpamentu iraunkorrak, gutxienez 500 kanpinlari hartzeko ahalmena dutenak.

9.i. Parke tematikoak.

9.j. Lurzoru urbanizatutik kanpoko oporretarako urbanizazioak eta hotel instalazioak, eta haiei loturiko eraikuntzak.

9.k. Tiro zelaiak, su armarekin tiro egitekoak, hektarea bateko azalera edo handiagoa dutenak.

9.l. Hektarea bateko azalera edo handiagoa duten golf zelaiak.

9.m. Lurzoruaren erabilera aldatzea dakarren edozein proiektu, 10 hektarea edo azalera handiagoa hartzen badu.

II.F Eranskina. Ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua behar duen proiektu batek ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta noiz behar duen erabakitzeko irizpideak.

1. Proiektuen ezaugarriak: Proiektuen ezaugarriak kontuan hartu beharko dira, batez ere honako alderdi hauei erreparatuta:

a) Proiektu osoaren neurriak eta diseinua. Beste proiektu batzuekin metatzea.

b) Dauden eta/edo onartu diren beste proiektu batzuekin metatzea.

c) Natura baliabideak erabiltzea, bereziki lurra, lurzorua, ura eta biodibertsitatea.

d) Hondakinak sortzea.

e) Kutsadura eta bestelako arazo batzuk.

f) Istripu larrien eta/edo katastrofeen arriskuak, dena delako proiektuarentzat adierazgarriak direnak, ezagutza zientifikoen arabera klima-aldaketak eragindakoak direnak barne.

g) Giza osasunarentzako arriskuak (esate baterako, uraren eta airearen kutsadurak edo kutsadura elektromagnetikoak eragindakoak).

2. Proiektuen kokalekua: Proiektuen eragina izan dezaketen eremu geografikoen ingurumen sentikortasunari erreparatu behar zaio, betiere jasangarritasun printzipioak kontuan harturik, zehazki:

a) Lurzoruaren egungo erabilera onartua.

b) Eremuko eta bere zorupeko natura baliabideen (lurzorua, lurra, ura eta biodibertsitatea barne) oparotasun erlatiboa, eskuragarritasuna, kalitatea eta birsortzeko ahalmena.

c) Natura ingurunearen kargatzeko eta berritzeko ahalmena, batez ere eremu hauetan:

1. Hezeguneak, erribera aldeak eta ibai bokaleak.

2. Kostaldeak eta itsas ingurunea.

3. Mendiak eta basoak.

4. Natura erreserbak eta parkeak.

5. Estatuko edo Autonomia Erkidegoetako legediek sailkatutako edo babestutako eremuak; Natura 2000 Sareko guneak.

6. Aplikagarri den legedian finkatutako ingurumen kalitatearen helburuak jada gainditu dituzten eremuak, proiektua ukitzen dutenak, edo ingurumen kalitateari buruzko arau horiek bete ez dituzten eremuak.

7. Dentsitate demografiko handiko eremuak.

8. Garrantzi historiko, kultural eta/edo arkeologikoa duten paisaiak.

9. Kultura ondareari eragin diezaioketen eremuak.

10. Plangintza hidrologikoan aintzat hartutako gainazaleko eta zorupeko ur masak eta dagozkien ingurumen izaerako helburuak.

Izan dezaketen inpaktuaren ezaugarriak: Proiektuek ingurumenean izan ditzaketen eragin nabarmenak aintzat hartu behar dira, 1. eta 2. ataletan ezarritako irizpideen arabera, eta kontuan harturik proiektuak ingurumenaren ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 45. artikuluaren 1.e atalean adierazitako faktoreetan duen eragina, eta bereziki:

a) Inpaktuaren handitasuna eta irismen espaziala (esate baterako, kaltetua gerta daitekeen eremu geografikoa eta populazioaren tamaina).

b) Inpaktuaren izaera.

c) Inpaktuaren mugaz gaindiko izaera.

d) Inpaktuaren garrantzia eta konplexutasuna.

e) Inpaktuaren probabilitatea.

f) Aurreikuspenaren arabera inpaktua noiz hasiko den, haren maiztasuna eta itzulgarritasuna.

g) Inpaktua dauden eta/edo onartu diren beste proiektu batzuen inpaktuekin metatzea.

h) Inpaktua eraginkortasunez murrizteko aukera.

II.G Eranskina. Definizioak ingurumen ebaluazioaren ondorioetarako.

Lege honetan xedaturikoaren ondorioetarako, honako definizio hauek hartuko dira kontuan ingurumen ebaluazioaren alorrean:

a) Ukituriko administrazio publikoak: giza osasuna, biodibertsitatea, geodibertsitatea, fauna, flora, lurzorua, ura, airea, zarata, paisaia eta kultur ondarea bezalako gaietan eta ingurumenaren kalitatearekin loturiko bestelako alderdietan eskumenak dituzten administrazio publikoak, ingurumen ebaluazioa behar duen planaren, programaren edo proiektuaren gauzatzeak horietan eragina izan dezakeenean.

b) Ingurumen adierazpen estrategikoa: ingurumen-organoaren derrigorrezko txosten loteslea, ingurumen ebaluazio estrategiko arrunta amaitzeko egiten dena. Ingurumen alderdiak ebaluatzeko eta planean edo programan txertatu behar diren baldintzak ezartzeko egiten da, ingurumena eta natur baliabideak babestuko direla bermatzeko.

c) Ingurumen inpaktuaren adierazpena: ingurumen-organoaren derrigorrezko txosten loteslea, ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta amaitzeko egiten dena; proiektuan ingurumen alderdiak txertatu izana ebaluatzen du, eta egikaritze zein ustiapen lanetan ingurumena eta baliabide naturalak behar bezala babesteko xedatu beharreko baldintzak zehazten ditu, edo hala badagokio, proiektua eteteko, desegiteko edo suntsitzeko baldintzak zehazten ditu.

d) Irismen agiria: udal organoaren adierazpena, ingurumen ebaluazioaren hedadura zehazteko egiten dena, bai eta ingurumen azterketa estrategikoaren eta ingurumen inpaktuaren azterketaren zehaztasun maila azaltzeko ere.

e) Ingurumen azterketa estrategikoa: dokumentu teknikoa da eta, plan edo programa baten ondorioz ingurumenean sor daitezkeen eragin nabarmenak identifikatu, adierazi eta aztertzen ditu, bai eta arrazoizko bestelako irtenbide

batzuk ere (teknikoki eta ingurumenari begira bideragarriak direnak), eta planean edo programan txertatu behar diren baldintzak zehazten ditu, ingurumenean eragin daitezkeen ondorio kaltegarriei aurrea hartzeko, zuzentzeko eta, hala badagokio, konpentsatzeko, bai eta ingurumen jarraipena egiteko beharrekoak direnak ere.

f) Ingurumen inpaktuaren azterketa: dokumentua da eta, proiektu baten ondorioz ingurumenean sor daitezkeen eragin nabarmenak identifikatu, adierazi eta aztertzen ditu, bai eta arrazoizko bestelako irtenbide batzuk ere (teknikoki eta ingurumenari begira bideragarriak direnak), eta ingurumenean eragin daitezkeen ondorio kaltegarriei aurrea hartzeko, zuzentzeko eta, hala badagokio, konpentsatzeko beharreko neurriak finkatzen ditu, bai eta ingurumen jarraipena egiteko beharrekoak direnak ere.

g) Ingurumen ebaluazioa: planek, programek eta proiektuek ingurumenean sor ditzaketen eragin nabarmenak aztertzen dituen prozesua da, plan eta proiektu horiek hartu, onartu edo baimendu aurretik bideratzen dena, eta babes neurriak, neurri zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak ezartzen ditu, bai eta ingurumen zaintza eta jarraipen neurriak ere, hori guztia ingurumena babesteko betiere.

h) Ingurumen txosten estrategikoa: ingurumen-organoaren derrigorrezko txosten loteslea, ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifikatua amaitzeko egiten dena; planaren edo programaren amaierako proposamenean ingurumen ezaugarriak txertatzeari buruz dihardu.

i) Ingurumen inpaktuaren txostena: ingurumen-organoaren derrigorrezko txosten loteslea, ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua amaitzeko egiten dena; proiektuaren amaierako proposamenean ingurumen ezaugarriak txertatzeari buruz dihardu.

j) Prebentziozko neurriak edo babes neurriak: planaren, programaren edo proiektuaren sustatzaileak hasieran proposatzen dituen neurriak eta azkenean ingurumen-organoak ezartzen dituenak, ingurumenean eragin nabarmenik sortu ez dadin.

k) Neurri zuzentzaileak: planaren, programaren edo proiektuaren sustatzaileak hasieran proposatzen dituen neurriak eta azkenean ingurumen-organoak ezartzen dituenak, ingurumenaren gaineko ondorioen larritasuna edo hedadura murrizteko, eragin horiek nabarmenak izateari utz diezaioten epe erdian edo luzean.

l) Neurri konpentsatzaileak: neurri bereziak dira, planaren, programaren edo proiektuaren sustatzaileak hasieran proposatzen dituenak eta azkenean ingurumen-organoak ezartzen dituenak, saihestu edo zuzendu ezin diren ingurumenaren gaineko eragin nabarmenak (hondarreko inpaktuak) konpentsatzeko.

m) Natura 2000 Sarerako neurri konpentsatzaileak: neurri bereziak dira, natura ondareari eta biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 46.5 artikuluan arautuak, Natura 2000 Sarearen koherentzia globala babestuta geratzen dela bermatzeko.

n) Planen eta programen aldaketa txikiak: jada hartutako edo onartutako planen edo programen aurreikuspenetan egiten diren aldaketak, esku hartze esparrua, estrategiak, ildoak eta proposamenak, edo kronologia, funtsean aldatzen ez dituztenak, ingurumenaren gainean probabilitate maila zehaztugabeko eragin nabarmenak sor ditzaketenak.

o) Ez dira aldaketa txikitzat hartuko ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta behar duten proiektuak etorkizunean baimentzeko esparrua direnak, ez eta naturagune babesturen bati (EAEko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuaren 13. artikuluan eta Ondare Naturalaren eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 30., 42. eta 50. artikuluetan jasotakoa) nabarmen eragin diezaioketenak edo babes-araubidea dutenak ere.

p) Ingurumen-organoa: administrazio publikoko organoa, ingurumen ebaluaziorako prozedurak amaitzeko adierazpenak eta txostenak egiteko eskumena duena, ingurumen ebaluazioen irismena zehazteko, adierazpen horretatik salbuesteko eta ingurumen adierazpenen eta txostenen indarraldia finkatzeko.

q) Organo sustatzailea: administrazio publikoko organoa, plan edo programa bat formulatzeko eta/edo onartzeko prozedura hasteko eskumena duena.

r) Organo substantiboa: administrazio publikoko organoa, plan edo programa bat behin betiko hartzeko edo onartzeko, proiektu bat baimentzeko edo onartzeko, edo erantzukizunpeko adierazpena edo aurretiazko jakinarazpena bete behar duten proiektuen jarduera kontrolatzeko eskumena duena.

Proiektu batean eragina baldin badute baimena, onarpena edo, hala badagokio jardueraren kontrola behar duten zenbait kontzeptuk, eta horiek administrazio publikoko hainbat organok eman eta burutu behar badituzte, proiektuak ingurumen inpaktuaren ebaluazioa behar izatea eragin duen obraren edo jardueraren gainean eskumenak dituena hartuko da organo substantibotzat, eta lehentasuna izango du haiekiko jarduera instrumentalen edo osagarrien gainean eskumenak dituzten organoen aurretik.

s) Planak eta programak: behar sozialak asetzeko estrategien, ildoen eta proposamenen multzoa, zuzenean egikaritu ezin direnak, proiektu baten edo batzuen bidez baizik.

Plan edo programa bat etorkizunean proiektuak baimentzeko esparrutzat hartuko da hura aurrera eramateko aurreikusten diren proiektuen motari, kokalekuari, neurriei edo funtzionamenduari buruzko irizpideak edo baldintzatzaileak jasotzen dituenean.

Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren ondorioetarako, ez dira plan edo programa kontsideratuko ingurumena babesteko arauak proposatu edo garatu baino egiten ez duten xedapen orokorrak.

t) Prozedura substantiboa: organo substantiboaren adierazpenarekin bukatzen den administrazio prozedura, plan edo programa bat behin betiko

hartzeko edo onartzeko, edo proiektu bat baimentzeko edo onartzeko, bai eta erantzukizunpeko adierazpen eta aurretiazko jakinarazpen tramiteak bideratzeko prozedura. Proiektua: obra bat, eraikuntza bat edo instalazio bat egikaritzeko edo ustiatzeko, edo desegiteko edo suntsitzeko, edozein jarduera; edo ingurumen naturalean edo paisaian egiten den edozein esku-hartze, bai eta baliabide naturalak, lurzorua, zorupea, urak eta izaki bizidunak barne, ustiatzeko edo aprobetxatzeko direnak ere.

II

MEMORIA / MEMORIA

INGURUMEN ADMINISTRAZIOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE EUSKADI

MEMORIA DE TRAMITACIÓN DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DE EUSKADI. FASE DE APROBACIÓN, TRAS AUDIENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN, CONSULTA A OTRAS ADMINISTRACIONES, INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNOS LOCALES DE EUSKADI (CGLE), DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO (CES); INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO (OCE) DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA Y DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI (COJUAE).

La presente Memoria se elabora en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, publicada en el BOPV nº 254, de 30 de diciembre de 2003.

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL.

La aprobación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco supuso en su momento el establecimiento de un marco normativo unificado para el ejercicio de la política ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta Ley, pionera en su tiempo, ha sido la que ha liderado durante los últimos años dicha política en sus distintos ámbitos: evaluación ambiental, gestión de residuos y control de la contaminación, entre otros.

Una materia como la ambiental, sin embargo, se encuentra en continua adaptación a las necesidades emergentes que la propia sociedad demanda y, como consecuencia de ello, en los últimos años se han aprobado diversos textos normativos que han incidido en la materia regulada por la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

Transcurridos 20 años desde la aprobación de la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco se ha producido un importante desarrollo del corpus legal medioambiental impulsado desde la Unión Europea y trasladado a normativa básica estatal que hace necesario una actualización del marco normativo de la Administración Ambiental en Euskadi.

Por tanto, en el ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía reconoce al País Vasco en su artículo 11 y conforme a lo dispuesto en Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, procede promover la elaboración de una nueva norma en materia de medio ambiente que venga a sustituir a aquélla Ley 3/1998, de 27 de febrero, y fijar, también desde la experiencia acumulada durante este periodo, las bases de una renovada política ambiental a nivel de Comunidad Autónoma que pueda hacer frente a los cambiantes retos y demandas sociales en materia de medio ambiente.

Así mismo, trascurridos 12 años desde la aprobación de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, inicialmente, se consideró necesario proceder a la modificación de la misma con el fin de adecuar su contenido al actual marco normativo.

Nahi izanez gero, J0D0Z-T1QEF-GS21 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T1QEF-GS21 en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 06 — 01010 Vitoria-Gasteiz

2.- TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY

FASES DE INICIACIÓN E INSTRUCCIÓN

2.1.- Ordenes de Inicio y aprobación previa

Con este objetivo se dictó la Orden de 13 de febrero de 2018 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda que acordó el inicio del procedimiento para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi.

En idéntica fecha, y con carácter previo a la elaboración del borrador del texto normativo, **se trasladó a la ciudadanía** información relativa a: a) los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; b) la necesidad y oportunidad de su aprobación; c) los objetivos de la norma y d) las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias, invitándola a que se pronunciara al respecto a través de la **consulta pública previa** establecida en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Dicha consulta se inició el 13 de febrero de 2018 y se publicitó mediante anuncio en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Con fecha 25 de mayo de 2018, habiéndose elaborado ya un primer texto del Anteproyecto de Ley estructurado y acorde con los planteamientos de la Orden de inicio del procedimiento para su elaboración, se dictó la Orden del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda por la que se acordó la aprobación previa del Anteproyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi.

2.2.- Trámites de audiencia, información pública, participación y consulta a otras Administraciones e informe de órganos colegiados

El Anteproyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi ha sido sometido a los trámites preceptivos de audiencia, información pública y participación y consulta a otras Administraciones, de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos 8 y 9 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, de Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

Además del trámite de **información pública** para la ciudadanía en general anunciado a través del BOPV del día 4 de junio de 2018, en paralelo y a efectos de contar con la opinión de los distintos sectores económicos y sociales que pudieran verse afectados por la iniciativa, se abrió un **trámite de audiencia** individualizado a medio centenar de organizaciones representativas de intereses colectivos afectados por la norma. Entre ellas se encontraban asociaciones ecologistas, sindicatos, patronales, colegios profesionales, cámaras de comercio, clústeres, consorcios municipales, etc.

Se ha dado participación, asimismo, a distintas administraciones que podrían verse afectadas directamente por la regulación prevista. Así, las Administraciones públicas a las que se les ha realizado el trámite de **participación y consulta a otras Administraciones** previsto en el artículo 9 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, han sido las siguientes: Administración del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y las Confederaciones Hidrográficas, las tres Diputaciones Forales y los Ayuntamientos de Euskadi, a través de EUDEL.

Teniendo en cuenta la incidencia que la regulación tiene en sus respectivos ámbitos competenciales, la iniciativa normativa **se puso a disposición de varios**

Departamentos de la Administración general de la CAPV mediante la herramienta de tramitación telemática de disposiciones de carácter general (Tramitagune) para que la analizaran y, si fuera el caso, realizaran aportaciones.

Es un hecho a destacar que todos y cada uno de los trámites anteriores han sido realizados electrónicamente y que tanto las organizaciones como las administraciones a los que se les ha dado pie a realizar alegaciones, más de medio centenar, han dispuesto en la Sede Electrónica del Gobierno Vasco, en el apartado Mi Carpeta, de un canal electrónico para realizar sus aportaciones.

Cumpliendo el compromiso de la Viceconsejería de Medio Ambiente en relación a la garantía del ejercicio real y efectivo de los derechos de participación pública en materia de medio ambiente, en cumplimiento de los principios informadores de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, se ha dado cuenta de todas estas actuaciones y trámites tanto en la sede electrónica del Gobierno, como en Irekia y la página web departamental http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/.

Asimismo, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en aras a favorecer y facilitar el cumplimiento del derecho de la ciudadanía a participar en la elaboración de normas relacionadas con el medioambiente consagrado en el artículo 16 de la citada Ley 27/2006, de 18 de julio, ha llevado a cabo un **proceso de participación presencial** dirigido a dar a conocer en mayor medida el proyecto normativo, dinamizar a los agentes más directamente afectados y a recabar de manera directa su punto de vista y sus propuestas de mejora. Durante este proceso se han llevado a cabo cinco sesiones participativas en los tres Territorios Históricos dirigidas a empresas, clústeres, asociaciones empresariales y sindicatos agrarios; colegios profesionales, centros tecnológicos y universidades (Foro empresas); otros Departamentos del Gobierno Vasco, entidades públicas y Diputaciones Forales (Foro DDFF) y, finalmente, con Ayuntamientos (Foro ayuntamientos). De todo ello se dio cuenta en el documento “Proceso de participación del Anteproyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi. Informe Final de Síntesis. Julio 2018”, en el que se documenta sistematizada y sintéticamente el devenir del proceso participativo.

Como resultado de estos trámites de participación abiertos a la ciudadanía, los diferentes agentes y las instituciones afectadas, se han recibido escritos de alegaciones, observaciones y propuestas de mejora por parte de los siguientes interesados:

- ACLIMA/Basque Environment Cluster.
- Ayuntamiento de Astigarraga.
- Ayuntamiento de Bermeo.
- Ayuntamiento de Bilbao.
- Ayuntamiento de Donostia.
- Ayuntamiento de Hernani.
- Ayuntamiento de Pasaia.
- BASQUEGUR.
- Colegio de la Abogacía de Bizkaia/ICAB.
- Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles.
- Colegio Oficial Geólogos.
- Colegio Oficial Ingenieros Industriales del País Vasco.

- CONFEBASK.
- D. J.A.A.S.
- D. M.S.
- D. J.M.T.C.
- Ministerio para la Transición Ecológica.
- Diputación Foral Álava-Departamento de Agricultura.
- Diputación Foral Álava-Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo
- Diputación Foral Bizkaia-Dirección de Infraestructuras.
- Diputación Foral Bizkaia-Dirección de Medioambiente.
- Diputación Foral de Gipuzkoa.
- ENBA/Euskal Nekazarien Batasuna.
- EHNE-Euskal Herriko Nekazarien Elkartea.
- EUSKAL ARIDO.
- MERCADONA, S.A.
- MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A.
- IBERDROLA DISTRIB. ELEC, S.A.U.
- IHOBE.
- JAIZKIBEL GEONATURE.
- HAZI.
- AZTI.
- HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, S.L.U.
- Participantes del Foro Empresas.
- Participantes del Foro Ayuntamientos.
- Participantes del Foro Diputaciones Forales.

Así mismo, los Departamentos de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Hacienda y Economía y Salud de la Administración General de la CAPV han tenido a bien realizar aportaciones.

Con fecha 28 de diciembre de 2018, transcurridos más de seis meses desde la apertura del plazo de alegaciones, la Diputación Foral de Álava remite en papel un documento de alegaciones complementarias a las ya realizadas con fechas 4 y 12 de julio de 2018. Por su carácter totalmente extemporáneo no fueron analizadas ni incorporadas al informe de respuesta a las alegaciones que se encontraba ya ultimado.

Con fecha 5 de abril de 2019, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro remite un escrito de valoración del Anteproyecto de Ley de Administración Ambiental de la Comunidad Autónoma de Euskadi, desde un punto de vista corporativo, sin perder de vista la componente de servicio al interés general de la sociedad que es uno de los objetivos primordiales del Colegio. La valoración general del texto en tramitación que realiza el COAVN es, con matizaciones, favorable; indicando finalmente que el grado de afección directa de las disposiciones del Anteproyecto en el ejercicio profesional del arquitecto es alto.

Las alegaciones y aportaciones realizadas en tiempo y forma fueron analizadas elaborándose el Informe de respuesta a las alegaciones y propuestas de mejora recibidas durante la fase de instrucción del Anteproyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi de fecha 7 de enero de 2019 que obra en el expediente. En dicho informe se indicó motivadamente si tras su estudio las alegaciones y propuestas

habían sido o no estimadas procediéndose, en dicho supuesto, a modificar en consecuencia el texto inicial del Anteproyecto de Ley.

El referido informe de respuesta a las alegaciones fue puesto en conocimiento de los interesados que en los trámites de audiencia y participación y consultas formularon alegaciones y observaciones. Asimismo, se encuentra disponible en el portal de la normativa vasca (Legegunea) del área de transparencia y participación ciudadana del Gobierno Vasco junto con el texto del Anteproyecto de Ley modificado.

2.3.- Informes preceptivos

Con fecha 6 de noviembre de 2018 el Anteproyecto fue informado favorablemente y sin votos en contra por la Comisión Ambiental del País Vasco, así como por el Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Con fecha 28 de enero de 2019 se reúne el Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza en el seno del cual se informa del Anteproyecto de Ley. No se producen votos en contra.

El Consejo del Agua del País Vasco no han emitido el informe que les fueron solicitados a la fecha de la firma de la presente memoria.

En esta fase de instrucción han sido solicitados asimismo los correspondientes informes preceptivos a la Dirección de Servicios del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, EMAKUNDE, la Junta Asesora de Contratación Pública, la Dirección de Administración Tributaria del Departamento de Hacienda y Economía, la Autoridad Vasca de la Competencia, la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas del Departamento de Cultura y Política Lingüística y la Dirección de Función Pública del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.

Todos ellos han evacuado informe y sus observaciones, sugerencias y propuestas de mejora han sido convenientemente analizadas. En los supuestos en los que han sido aceptadas, se han producido las correspondientes modificaciones del texto del Anteproyecto de Ley. El detalle de dichos análisis y modificaciones se encuentra recogido en el anexo a esta memoria.

Resulta de interés señalar en esta memoria que en el BOE nº 294 del jueves 6 de diciembre de 2018 se ha publicado la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Dicha norma transpone la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y modifica sustancialmente varios aspectos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En este sentido, y a pesar del escaso tiempo del que se ha dispuesto, el nuevo texto del Anteproyecto de Ley incorpora diversas modificaciones para su adecuación a la recentísimamente modificada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, básica estatal.

Analizadas las alegaciones y observaciones recibidas y por razones de técnica legislativa se ha decidido por parte del órgano proponente proceder a la supresión de la Disposición final segunda relativa a la modificación de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

Indicar como dato final relevante que fruto del proceso participativo, de los análisis de las alegaciones y observaciones recibidas y en aras a obtener el mayor grado de consenso de los sectores afectados, ha sido modificado, con un mayor o menor alcance, en torno al 60% del articulado y sus disposiciones, así como la totalidad de los anexos inicialmente redactados.

2.4. Informe de la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi.

Con fecha 1 de febrero de 2019, la Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos ha incorporado al expediente que se viene tramitando a través de Tramitagune el informe previo preceptivo de la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi (CGLE) sobre el Anteproyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi (LAAE), de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (en adelante LILE).

Con carácter preliminar, es preciso dejar constancia de que, en virtud de lo dispuesto en el art. 88 de la LILE, la defensa de la autonomía local, y dentro de esta el reconocimiento de la capacidad autoorganizativa de los municipios, se ejercerá actuando la CGLE como órgano de alerta temprana (art. 90) o participando en la elaboración de disposiciones de carácter general (art. 91).

Dicho artículo 91 establece que serán objeto de informe previo preceptivo por parte de la CGLE los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten específicamente a competencias propias de los municipios. Indicándose expresamente que, el objeto del informe versará acerca de la idoneidad de la normativa proyectada respecto de los intereses municipales. Para la evaluación del impacto que pueda tener la norma proyectada sobre la autonomía de los entes vascos, la afectación a la autonomía local se entenderá, en todo caso, como impacto directo sobre las competencias propias de los municipios.

En este sentido, se analizarán en detalle en la presente memoria los aspectos que entendemos que *ex lege* deben ser analizados por dicha Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi en su informe, realizándose un tratamiento más somero de los aspectos colaterales sobre los que también se haya podido posicionar ese órgano.

La propia CGLE ha estructurado su informe en varios apartados en los que aborda cuestiones diversas. Siguiendo dicha estructura se procede a responder a los mismos.

Conclusión 2: *Este es el primer Informe que la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi emite sobre un anteproyecto de Ley en la presente legislatura. Tal como se expone en el cuerpo del presente informe, la CGLE quiere llamar la atención de que los objetivos de alerta temprana y de defensa de la autonomía local y de las competencias propias de los municipios pueden verse entorpecidos cuando se ejercen iniciativas legislativas a través de proposiciones de Ley. Y, por tanto, sugiere que el Parlamento Vasco incorpore en su Reglamento un trámite que suponga que cualquier iniciativa legislativa vehiculada como proposición de Ley pueda ser informada por la CGLE, siempre que tal propuesta afectara a las funciones que este órgano tiene encomendadas por la LILE.*

Toda vez que es la primera vez que se somete un anteproyecto de Ley a Informe de la CGLE dicho órgano ha realizado una serie de consideraciones generales sobre su papel y función de en este tipo de tramitaciones que, siendo de gran interés, superan sin embargo el ámbito material estricto (regulación sectorial medioambiental) sobre la que versa el ALAAE y la presente memoria de tramitación. En este sentido, en este documento simplemente se dará una respuesta a vuelapluma sobre ciertas cuestiones indicando que debieran de ser otros órganos superiores o instancias y no la Dirección impulsora del ALAAE los que se posicionen sobre dichos asuntos.

Uno de los aspectos sobre los que nada puede aportarse de interés en esta memoria es el relativo a la propuesta del informe relativa a que el Parlamento Vasco incorpore en su Reglamento interno un trámite que suponga que cualquier iniciativa legislativa vehiculada como proposición de Ley pueda ser informada por la CGLE, siempre que tal propuesta afectara a las funciones que este órgano tiene encomendadas por la LILE.

En cualquier caso, lo aportado por la CGLE, hace referencia a un poder, el legislativo, y a un estadio procedimental ulterior, si bien el contenido de su informe debería ceñirse exclusivamente al contenido del anteproyecto dentro de la tramitación que se viene realizando en el seno del órgano del poder que ostenta funciones ejecutivas y administrativas en Euskadi, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Por lo expuesto, no se considera adecuado realizar a este respecto pronunciamiento alguno por parte de este órgano, señalando que el ordenamiento jurídico contempla otros cauces para materializar la solicitud realizada en su informe al Parlamento Vasco sobre la modificación de una normativa distinta al informado ALAAE.

Conclusión 3. *La peculiaridad que ofrece el sistema de alerta temprana situado en manos del CGLE cuando el Informe trata de anteproyectos de Ley es obvia: sí el órgano proponente no aceptara parte o todas de las propuestas recogidas en este Informe y que se sintetizan en estas Conclusiones se debería constituir, en los plazos indicados y de acuerdo con /o establecido en el artículo 91 LILE, una Comisión Bilateral encargada de limar las diferencias. De ahí la trascendencia formal y material que el presente Informe tiene en este caso.*

Desde nuestro punto de vista yerra el informe del CGLE cuando afirma que su actuación en lo relativo al presente anteproyecto de Ley se enmarca en las funciones otorgadas por el art. 88.1 a) de la LILE como órgano de alerta temprana y este error de base mediatiza buena parte de los contenidos y alegaciones posteriores del informe. Recordemos que el citado artículo determina que, efectivamente, el CGLE actuará como órgano de alerta temprana (el énfasis es nuestro): “en aquellos procesos normativos (…) **que afecten exclusivamente a las competencias propias de los municipios** (…)”. En modo alguno, el ALAAE es una norma que afecte exclusivamente a este tipo de competencias de los municipios. De contrario, lo que realiza dicho anteproyecto es una regulación global de aspectos materiales y competenciales ambientales que afectan a los tres niveles de las administraciones de la CAPV (Administración General, DDFF y Entidades Locales) y no en exclusiva a los municipios y sobre una serie de competencias que, en modo alguno, deben ser consideradas como propias de los municipios.

Donde encaja realmente la actuación y el informe solicitado a la CGLE, y en esos justos parámetros y no otros deben entenderse las alegaciones realizadas, es en las funciones encomendadas en el art. 88. 1 b) de la LILE al CGLE como órgano que participa (uno más entre otros) en la elaboración de disposiciones de carácter general en los términos establecidos en su artículo 91.

Sentado lo anterior, todos los llamamientos realizados en el informe a las funciones y prerrogativas reguladas en el art. 90 de la LILE para el CGLE en su calidad de órgano de alerta temprana, como las referencias a la comisión bilateral, no serían de aplicación al supuesto del Anteproyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi y, consecuentemente, no serán tomados en consideración en el presente informe.

Conclusión 4. *El ALAAE promueve una reforma de la LTH para adecuarla a su contenido, pero nada de ello se establece cuando de afectación a las competencias municipales se trata. En efecto, la reforma de la LTH que pretende llevar a cabo el ALAAE (disposición final primera) no puede hacer olvidar o preterir las competencias propias (y las facultades a ellas ayudadas) que en esa materia de medio ambiente tienen atribuidas todos los municipios vascos por expresa mención del artículo 17.1. 8) LILE, entre las que destaca por lo que ahora importa la facultad de gestión (sin ninguna limitación) en materia de medio ambiente en las zonas urbanas. Es correcto, por tanto, que el ALAAE reforme la LTH mediante una reforma directa, expresa y fundada, pero no lo es que pretenda hacer lo mismo con la LILE (en relación con los municipios de menos de 10.000 h.) prescindiendo absolutamente de lo que esa norma estipula en el artículo 17.2 "in fine".*

De inicio, subrayar que no se comparte en modo alguno que la norma analizada olvide las competencias propias atribuidas en la materia a los municipios ni que la LILE *"atribuya a todos los municipios vascos la facultad de gestión (sin ninguna limitación) en materia de medio ambiente en las zonas urbanas"* como refiere esa parte.

Sobre el particular, recordar que el art. 17.1 de la LILE determina que los municipios podrán ejercer competencias propias en ámbitos materiales como (apartado 8) la ordenación complementaria, promoción, **gestión**, defensa y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, incluida la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas, pero siempre y en todo caso **ajustándose a lo dispuesto en el marco de lo dispuesto en la presente ley y en la legislación que sea de aplicación**.

El Anteproyecto de Ley informado, tramitado en virtud de competencias que son propias a la Administración General de la CAPV, lo que aporta no es sino el citado marco normativo para posibilitar del mejor modo posible el ejercicio de las competencias atribuidas legalmente en materia medioambiental a los ayuntamientos de la CAPV. Los ayuntamientos para ejercitar sus facultades de gestión en relación con la protección del medio ambiente urbano deben disponer de un marco normativo sectorial referencial que concrete sus competencias en un ámbito tan amplio y ominicompresivo como es la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

De ningún modo se está produciendo, como refiere el informe, una modificación de la LILE ni una limitación de las facultades de los ayuntamientos que precise, además, la reformulación específica de su articulado vía reforma legal. La modificación operada en materia de imposición de medidas correctoras no afecta en modo alguno, en nuestra opinión, a las competencias propias de los municipios vascos ni impone nuevas obligaciones a los mismos ni mucho menos limita sus funciones. Recordemos el tenor literal del artículo 51 del anteproyecto sobre el que se enfocan las alegaciones del informe del CGLE:

"Artículo 51. Informe de imposición de medidas protectoras y correctoras.

1. Los municipios de menos de 10.000 habitantes, **deberán solicitar informe** de imposición de medidas protectoras y correctoras al órgano con competencias ambientales de la Diputación Foral correspondiente. (…)

2. Los municipios de más de 10.000 habitantes, **podrán solicitar el informe** señalado en el apartado anterior al órgano con competencias ambientales de la Diputación Foral correspondiente. En caso de no solicitarse dicho informe, serán los propios municipios quiénes fijen las medidas protectoras y correctoras ambientales de la actividad o instalación sujeta a licencia de actividad clasificada."

Como se puede observar, es palmario que la función de emitir el IIMC se impone con carácter general a las DDFF, cuando hasta la fecha esta función se repartía entre el Gobierno Vasco y las DDFF en virtud de la naturaleza del suelo en el que se ubicase la actividad, y que, únicamente, en el supuesto de que los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes así lo deseen (porque entiendan que pueden realizar dicha función sin resultarle una carga inasumible) podrán asumirla. El tenor literal del artículo, incorporando el vocablo *podrán* es clarísimo en ese sentido.

Abunda esta tesis el propio informe del CGLE que en su página 18 asevera que (el énfasis es nuestro)

"*Aunque **en este caso no hay propiamente hablando una ampliación de facultades o funciones tal y como están reconocidas en el artículo 17.1.8) LILE**, sino un incremento de actividades o servicios (en algunos casos) frente a la regulación anterior que era situaba el ejercicio de tales actividades o servicios dentro de la competencia de otras instituciones que no eran los municipios. **Aquí el problema no es solo competencial,** sino que tiene implicaciones intensas en el plano de la suficiencia financiera, tal como se verá. Y este es un aspecto, que como puede intuirse, resulta fundamental".*

Por todo lo expuesto, se puede mantener de contrario que en ningún caso existe una imposición legal de incremento de actividades o servicios si no que la Ley faculta a los ayuntamientos para decidir si optan o no por asumir dichas actividades.

Los aspectos relativos a la suficiencia financiera expuestos por el informe del CGLE serán analizados en siguientes apartados de la presente memoria.

Conclusión 5. *Asimismo, la CGLE, como ya se viene advirtiendo en informes anteriores, quiere llamar la atención sobre la escasa (o nula) interiorización de la LILE en los procedimientos de elaboración de disposiciones generales por parte de los distintos departamentos del Gobierno Vasco. En el presente caso (un procedimiento de elaboración de un anteproyecto de ley), esa carencia se desvela con claridad en que la LILE apenas es objeto de atención en los diferentes Informes, Memorias o Documentos que forman parte del voluminoso expediente administrativo, sin que se hayan captado, por lo demás, las importantes consecuencias que la LILE ha tenido sobre el tejido institucional vasco y con olvido de muchas de sus reglas y principios que afectan, especialmente, a una materia tan sensible al núcleo de competencias* municipales propias como es la medioambiental.

Al respecto, indicar que el ALAAE ha tomado en consideración en todo momento la autonomía local a la hora de regular aquellos de los aspectos con afección sustantiva a las entidades locales, ver por ejemplo el art. 7 relativo a la distribución competencial, en el que expresamente se hace una referencia a la Ley 2/2016, de 7 de abril. Por lo tanto, si no se han realizado suficientes referencias explícitas al texto de la LILE o el CGLE en las memorias, informes o documentos internos del expediente no ha sido por

falta de atención a esta temática si no porque no se ha entendido que el impacto sobre las entidades locales de la nueva regulación propuesta fuera relevante.

En cualquier caso, se debe señalar que el informe debe ceñirse al objeto del ALAAE, por lo que, en este caso, el hecho de que el CGLE realice una llamada de atención sobre el general de las disposiciones elaboradas por los distintos departamentos de la Administración General de la CAPV, sin apuntar con concreción a un contenido específico del texto informado, debe ser tomado exclusivamente como una alegación expositiva.

Conclusión 6. *CGLE considera, como se indica en la fundamentación antes recogida, que, sin perjuicio de lo que actualmente establece la Instrucción aprobada por el Gobierno Vasco mediante acuerdo de 12 de diciembre de 2017, el Informe que emita en los procedimientos de anteproyectos de ley debería insertarse en la fase inmediatamente anterior a la emisión del Informe COJUA y del envió del anteproyecto para su aprobación como proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno, pues la función de esta CGLE tiene por objeto de acuerdo con lo establecido en la LILE la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana que, en el caso de no poderse activar de forma efectiva por no llegarse a un acuerdo en sede de Comisión Bilateral, tales discrepancias (mediante las actas de deliberación de la Comisión y el presente Informe) deberán ser trasladados, junto con el proyecto de Ley, al Parlamento Vasco. (…). Por consiguiente, esta CGLE quiere poner de relieve este extremo (por la importancia implícita que tiene) y sugiere la modificación del citado acuerdo del Gobierno Vasco en los términos expuestos, así como, en su caso, que se tenga en cuenta tal criterio para una futura modificación de la Ley 8/2003 por parte del Parlamento Vasco.*

La presente alegación queda extramuros de la competencia del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda toda vez que lo que se plantea es la modificación de una instrucción dictada por el Consejo de Gobierno en relación a la aplicación práctica del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General previsto en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre. En nuestra opinión, por la naturaleza de la solicitud realizada, ese CGLE debería canalizar su demanda a través de la Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno a través de un escrito autónomo y no vinculado a la tramitación de un concreto expediente de elaboración de DNCG como es el ALAAE.

Por lo expuesto, no se considera adecuado realizar a este respecto un pronunciamiento por parte de este órgano administrativo en relación con la citada solicitud de revisión de una instrucción relativa a la elaboración de disposiciones de carácter general que nada tiene que ver con el anteproyecto objeto de su informe.

Conclusión 7. *Es obvio que la LILE atribuye a los municipios vascos, a partir de su entrada en vigor, competencias propias en materia de medio ambiente (así como otras muchas conexas que ahora no procede analizar). Esta atribución se lleva a cabo en el artículo 17.1 8) LILE implica que no solo se reconoce un ámbito material de competencias sobre esa materia a los municipios Vascos, sino especialmente una reserva funcional (o reserva de facultades que en ese mismo anunciado normativo se recogen). Obviamente, esa atribución material y funcional a favor de los municipios vascos operará siempre "ex post" a la propia entrada en vigor de la LILE y, en particular, en aquellos procesos legislativos que pretendan modificar el statu quo anteriormente existente en materia de competencias municipales propias y de las facultades, así como de las actividades, prestaciones o servicios, que vinieran realizando hasta la fecha. Se quiere decir con ello que el artículo 149.1 8) LILE actúa*

como parámetro o medida de que la nueva regulación legal de carácter sectorial que se proponga respete el núcleo material y funcional que el propio perímetro normativa enuncia. Y si ese perímetro material o funcional se viera afectado, se activaría la previsión recogida en el artículo 17.2 LILE siempre que se produjera una limitación del mismo. Si se viera ampliado, en los términos que luego se dirán, se activaría, por su parte, el artículo 17.3, en relación con los artículos 18.3 y 112, todos ellos de la LILE.

En primer lugar, indicar que la LILE se compone de 121 artículos por lo que no se ha podido analizar a qué se refiere el informe de la CGLE cuando señala que es en el art. 149.1 8) (sic) de la LILE donde se encuentra *el parámetro o medida de que la nueva regulación legal de carácter sectorial que se proponga respete el núcleo material y funcional que el propio perímetro normativa enuncia.*

En la alegación, se trae a colación el art. 17.3 relativo a la atribución de nuevas competencias como propias por ley o norma foral para anudarlo a lo dispuesto en el art. 18.3 que indica, fundamentalmente, que a la atribución de nuevas competencias propias a los municipios o a la concreción de servicios, actividades o prestaciones derivadas de competencias atribuidas como propias, debe seguirse la adecuada dotación de recursos para asegurar la suficiencia financiera de los municipios.

Sin perjuicio de mantener, como ya se ha expuesto anteriormente, que en el ALAAE no se atribuyen nuevas competencias como propias a los ayuntamientos de la CAPV, indicar que los nuevos servicios, actividades o prestaciones, si así pudieran ser considerada la realización de los IIMC en actividades sujetas a licencia de actividad clasificada en los municipios de más de 10.000 habitantes, no son de obligada asunción por dichas entidades locales.

En la CAPV únicamente el 16,7% de los 251 ayuntamientos (42) tiene más de 10.000 habitantes (Fuente: Eustat).

A mayor abundamiento, indicar que la vigente Ley 3/1998,de 27 de febrero, en su artículo 62 ya contemplan un mecanismo similar al previsto en el ALAAE en el que se posibilita vía delegación competencial que los ayuntamientos que así lo decidan emitan el citado IIMC, literalmente: e*l Gobierno de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de los territorios históricos,(…) podrán delegar en aquellos Ayuntamientos que cuenten con servicios adecuados, previa petición expresa,* ***la emisión de informes sobre imposición de medidas correctoras*** *para las actividades que se determinen. En todo caso, se admitirá que el ejercicio efectivo de estas competencias pueda llevarse a cabo a través de órganos mancomunados, consorciados o en otra forma de asociaciones locales*.

En virtud de esta habilitación legal, los ayuntamientos de mayor tamaño de la CAPV que cuentan con técnicos ambientales entre su personal y disponen, por lo tanto, de un servicio adecuado al efecto, ya han solicitado la delegación competencial, asumido y vienen desempeñando esta labor de emisión del IIMC, sin que se haya producido, salvo error por nuestra parte, la exigencia de una mayor financiación por la asunción voluntaria de estas materias.

Conclusión 8. *Esta CGLE no puede compartir (pues no tiene encaje en una interpretación global de la LILE) la interpretación que pretende justificar que el listado de materias del artículo 17.1 LILE implica una petrificación del sistema de financiación municipal, pues tal lectura parte de la premisa falsa de que el modelo de financiación vigente ya financiaba unas competencias que los municipios vascos no tenían. Por tanto, sí el ALAAE incrementa las actividades o servicios que anteriormente prestaban los municipios vascos por aplicación de la Ley 3/2018, esas actividades o servicios*

que impliquen una mayor gestión y mayores recursos financieros deben tener reflejo, previa cuantificación pertinente, en un Anexo económico específico a la Ley que salvaguarde la suficiencia financiera de los municipios vascos.

En este punto, es preciso reiterar el hecho ya analizado de que no se impone en virtud del ALAAE un incremento de las actividades o servicios que anteriormente prestaban los municipios vascos que impliquen una mayor gestión y mayores recursos financieros. Asimismo, indicar que la memoria económica y justificativa del anteproyecto normativa ha realizado un análisis de los impactos económicos de la nueva regulación en los tres niveles administrativos de la CAPV al que nos remitimos en evitación de reiteraciones.

Conclusión 9. *Cabe resaltar que la conclusión final de la Memoria Económica en lo que significa el impacto del ALAAE sobre los ayuntamientos vascos no puede ser más autocomplaciente para la Administración Pública promotora de la iniciativa, así como es oportuno poner de relieve que tampoco detecta la necesidad de llevar a cabo un reajuste financiero total (esto es, de todos los niveles de gobierno) como consecuencia de la reordenación de competencias entre los tres niveles de gobierno: Comunidad Autónoma/Territorios Históricos/Municipios o, en su caso, reconocer que el ALAEE tiene impactos reales sobre el conjunto del gasto público de las Administraciones Públicas.*

De conformidad a las exigencias legales y conforme a los modelos existentes en la Administración General de la CAPV, la Dirección proponente del ALAAE ha realizado un esfuerzo importante a través de la memoria económica anexa al proyecto de norma para intentar aquilatar, entre otros muchos aspectos, la evaluación del coste que pueda derivar su aplicación para otras administraciones públicas: forales, locales, estatales y otras. Ejercicio este de una gran complejidad técnica.

En cualquier caso, insistir en que, si existe una administración pública en la que los impactos económicos del proyecto de norma puedan entenderse menores, esta es la administración local de Euskadi. En evitación de reiteraciones innecesarias, nos remitimos a lo expuesto en la citada memoria (pags.46 y ss.) al objeto de defender que el impacto económico allí estimado de la modificación legal propuesta en los ayuntamientos de la CAPV y el resto de AAPP analizadas es, en lo fundamental, correcto.

Conclusión 10. *Analizadas las ideas principales del recorrido argumentar del presente Informe, es momento de abordar las propuestas concretas que se plantean a lo largo de estas páginas. Las más relevantes, a juicio de esta Comisión, son las siguientes:*

- ***Exposición de motivos.*** *En el supuesto de que, finalmente, se pretendieran reducir o limitar alguna de las funciones o facultades que los municipios vascos tienen como competencias propias según lo establecido en el artículo 17 1. 8) LILE, tal limitación deberá justificarse de acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en la exposición de motivos del anteproyecto de Ley, tal como determina el artículo 17.2 "in fine" de la LILE.*

Tal y como hemos indicado en apartados anteriores, las disposiciones que recoge el ALAAE en relación las funciones atribuidas a los municipios de la CAPV no limitan o reducen *las funciones o facultades*. Al contrario, el anteproyecto de ley tiene como finalidad en esta materia redistribuirlas de una forma más equilibrada, tal y como subraya la exposición de motivos, que garantice una mayor eficacia en la actividad administrativa de todas las Administraciones públicas.

En todo caso, que la LILE señale en su artículo 17.2 "in fine" que "…deberá ser motivada adecuadamente…" no supone que dicha motivación deba de formar parte necesariamente de la exposición de motivos de la norma en cuestión. Será, en su caso, en las memorias e informes que acompañan al anteproyecto de Ley donde se deberán motivar estos extremos. En el supuesto del ALAAE, estas y otras cuestiones han sido analizadas y motivadas de una forma que entendemos adecuada y suficiente.

A mayor abundamiento, indicar que la apreciación realizada por el CGLE es meramente expositiva, ya que no fundamenta en concreto la presunta restricción o limitación competencial referida, entrando incluso en contradicción con aseveraciones propias respecto al aumento de competencias realizadas en el propio informe tales como " 8…) *sí el ALAAE incrementa las actividades o servicios que anteriormente prestaban los municipios vascos por aplicación de la Ley 3/2018"*, no fijando su postura de forma clara y realizando argumentaciones contradictorias en función de cada apartado de sus alegaciones.

- ***Artículo 7.2 d).*** *La competencia recogida en ese precepto, tal como se detalla en el cuerpo del Informe, no encaja con el principio de autonomía local ni con la regulación actualmente vigente tanto en la LBRL como en la LILE, tal como ha sido interpretada por la STC n 1/2016. Por tanto, se propone su supresión o, subsidiariamente, que se incluya la siguiente previsión en el enunciado: "previa solicitud de los respectivos ayuntamientos interesados aprobada en pleno".*

En principio, indicar que se debe entender que la alegación formulada se refiere al artículo 7.2 b) y no al 7.2 d) en tanto que en el apartado d) no se hace referencia alguna a competencias locales.

Si la alegación hace referencia al apartado b), en el que se prevé la asistencia de los órganos forales de los TT.HH a los ayuntamientos que lo soliciten en relación con el procedimiento de licencia de actividad clasificada y de comunicación previa regulados en el anteproyecto de Ley, ni de la STC 111/2016, traía a colación por esa parte, ni de la LBRL o de la LILE se deduce que la disposición no encaje con el principio de autonomía local ni que sean preceptivas las solicitud previa de los ayuntamientos.

En este sentido cabe recordar que el artículo 19.4 de la LILE se limita a señalar que "*En todo caso, los órganos forales competentes, en los términos establecidos en la legislación básica de régimen local y en la propia normativa foral, asistirán técnicamente a los municipios de su respectivo territorio histórico para garantizar la efectividad plena de las competencias municipales atribuidas por las leyes y, en su caso, por las normas forales".*

En cualquier caso, la disposición final primera, en referencia a la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, recoge textualmente que *"La imposición de medidas correctoras en actividades sujetas al régimen de licencia de actividad clasificada en los municipios de menos de 10.000 habitantes, y en los municipios de más 10.000 mil habitantes* ***si así lo solicita*** *el Ayuntamiento correspondiente (…)"* con lo cual, ya recoge de forma meridianamente clara la previsión de solicitud de los entes locales que plantea como aporte la alegación del CGLE.

- ***Artículo 22.*** *Se quiere poner de relieve que existe un cambio cualitativo de las facultades que tenían los municipios en esta materia, pues de pasa de funciones de gestión o ejecución (licencias), e incluso de ordenación (ordenanzas), a unas facultades de mera "participación" en un procedimiento de autorización que ordena (regula), gestiona y resuelve el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma. Si así son las cosas, no cabe duda que el ALAAE, por lo antes expuesto, debería recoger en*

la exposición de motivos una justificación de esa modificación de la LILE (reducción de las competencias de gestión, en estos casos, invocando los principios de subsidiariedad y proporcionalidad) e incluir en una disposición final tales limitaciones de las funciones o facultades que se prevén en relación con tales actividades clasificadas. de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.2 "in fine" LILE

El artículo 22 del anteproyecto de Ley regula las situaciones de concurrencia de los regímenes de intervención ambiental con la evaluación de impacto ambiental. No se observa en esta disposición el cambio cualitativo de funciones de los municipios al que se alude en el informe del CGLE. De hecho, la regulación es muy similar a la actualmente en vigor que es consecuencia de la vigente Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la normativa del Estado que regula la evaluación ambiental de proyectos o la normativa sobre las emisiones industriales. Por lo tanto, no procede motivar el inexistente, desde nuestro punto de vista, "cambio cualitativo de las facultades" al que se alude.

Además, se debe señalar que dentro del procedimiento autorizatorio sustantivo de las autorizaciones ambientales integradas y únicas se dota a la participación municipal de un carácter preceptivo al incorporar un doble pronunciamiento: sobre aspectos urbanísticos (art. 32) por un lado y sobre cuestiones propias de sus competencias (art.36) por otro. Asegurando su participación en dos momentos distintos de la tramitación; de hecho, el primer pronunciamiento del Ayuntamiento respecto a las competencias urbanísticas del municipio puede determinar el fin del trámite ambiental, como así lo recoge el ALAAE en su artículo 32: *"(…), si el informe urbanístico regulado en este artículo fuera negativo (…) el órgano ambiental competente para otorgar dicha autorización dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones"*.

Habida cuenta, además, que en la actualidad corresponde al órgano ambiental de la CAPV o a las DDFF emitir el informe de imposición de medidas correctoras dentro del trámite de licencia de actividad, no cabe afirmar que las competencias de los entes locales queden restringidas, ya que son respetadas en los mismos términos que en la normativa vigente.

- ***Artículo 47.*** *Sería oportuno prever la posibilidad de que se pudieran delegar las funciones de inspección en los municipios en los casos de gestión de AAI y AAU, de acuerdo con la regulación prevista en la LILE. Ello implicaría que el órgano de gestión ambiental de la Administración Vasca tendrá esa potestad, pero que deberá ser aceptada por el municipio correspondiente, con ello se daría satisfacción determinadas propuestas formuladas por ayuntamientos vascos en el período de alegaciones.*

En el artículo 47 del anteproyecto de Ley se regula la comunicación de inicio de funcionamiento o apertura. En su apartado 4 ya se hace referencia a que todas las AAPP, cada una en su respectivo ámbito competencial, podrán realizar inspecciones.

En todo caso, y si la alegación no se refiere específicamente al artículo 47 y es de alcance más general, es preciso señalar que, tal y como se recoge en la memoria y en el informe que dan respuesta a las alegaciones formuladas al anteproyecto de Ley, la potestad de inspección corresponde a la Administración otorgante de la autorización o licencia sustantiva. En el caso de la AAI y AAU la competencia de otorgamiento está residenciada en el departamento correspondiente del Gobierno Vasco y, en consecuencia, su eventual inspección también recae en dicho órgano. La potestad de inspección es adjetiva y se entiende siempre anudada a la potestad autorizatoria previa. No tendría mucho sentido que una administración que no conoce ni la

tramitación ni el proyecto ni el detalle de las circunstancias que han llevado a imponer las medidas correctoras por parte de unos servicios técnicos ajenos, realice una inspección sobre el funcionamiento y viabilidad operativa de las citadas medidas.

- ***Capítulo IV del Título IV (LAC);*** *sí bien es cierto que se ha podido producir una reducción del perímetro de actividades sujetas a LAC en beneficio de las sometidas a CPAC no lo es menos que en fruto del nuevo modelo de intervención ambiental buena parte del peso de gestión se desplaza desde las tareas de control previo mediante la técnica de autorización a las funciones de comprobación, control e inspección, lo que comportará un cambio cualitativo en el modo de organización de los servicios municipales y también en las tareas o funciones que debe desempeñar el personal, con el consiguiente período de adaptación transitoria, lo que, sin duda, conllevará tener que emplear recursos financieros adicionales, al menos en esa etapa transitoria. Algo que, conviene resaltarlo, no se ha tenido en cuenta expresamente (nos referimos en cuantificación) por parte de la Memoria Económica, que lapidariamente recoge que se ha producirá un efecto neutro, donde los gastos derivados del nuevo modelo se compensarán "automáticamente" con los ahorros que su implantación producirá en el mundo local.*

Las actividades sometidas a licencia de actividad clasificada y comunicación previa de actividad clasificada quedan recogidas en los Anexos I.C y I.D del ALAAE. Se debe apuntar que el citado anteproyecto no difiere de la distribución de actividades sometidas a ambos títulos que en su día fue introducida habida cuenta de la entrada en vigor de la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior; por tanto, la afirmación realizada en la alegación "*se ha podido producir una reducción del perímetro de actividades"* no queda suficientemente acreditada, ni se entiende deba ser el momento actual respecto de un reparto de actividades realizado en el año 2012, en consonancia con la normativa europea.

- ***Artículo 48.4.*** *La referencia que allí se hace debe entenderse "sin perjuicio de la potestad de Ordenanza que tienen reconocidos los municipios en esta materia por el artículo 17.1. 8) de la LILE)" y, únicamente, como una atribución específica para aprobar ese tipo de disposiciones normativas locales en un ámbito material concreto.*

El artículo 48.4 del anteproyecto de Ley señala que "*Los ayuntamientos podrán desarrollar vía ordenanza procedimientos para la tramitación de las modificaciones sustanciales o no sustanciales de las licencias de actividad clasificada otorgadas*". Desde nuestro punto de vista, esta redacción no sólo es acorde con lo dispuesto en el artículo 17.1.8 de la LILE sobre la ordenación complementaria en materia ambiental, sino que precisamente es una referencia específica para que los ayuntamientos la ejerzan sin ninguna cortapisa. Por descontado, el determinar que pueden ejercer dicha competencia en este sentido, no limita su capacidad de ordenación complementaria en la materia toda vez que esta se mantiene incólume en los términos dictados en la LILE y en el marco normativo sectorial de referencia.

8) Ordenación complementaria, promoción, gestión, defensa y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, incluida la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

- ***Artículo 50.*** *No hay en este caso un problema competencial estrictamente hablando, pero sí de gestión de una competencia nuclear de la política ambiental de los municipios vascos, por lo que se considera adecuado que, atendiendo a las*

implicaciones que el nuevo sistema representa para la organización municipal y el cumplimiento de los plazos previstos en el procedimiento, se establezca el plazo de 20 días, por paralelismo con el mínimo establecido en el artículo 82.3 LPAC.

Entendemos la referencia realizada al artículo 83.2, y no el 82.3, de la LPAC, ya que es dicho artículo el que señala un plazo mínimo de veinte días para examinar el expediente y formular alegaciones dentro del trámite de información pública en un procedimiento administrativo.

El artículo 50 del anteproyecto de Ley, está redactado en total consonancia con el citado artículo 83.2 de la LPAC y otorga mayores garantías o un mayor plazo para su ejercicio a los interesados, ya que establece un plazo mayor al mínimo legal, llegando al mes para el periodo de información pública y para la presentación de alegaciones. Si bien uno de los objetivos de la norma es la agilización de los procedimientos, no se entiende adecuado, con carácter general, acortar los plazos de tramitación disminuyendo aquéllos que posibilitan o conforman el derecho a la participación en materias ambientales de la ciudadanía.

- ***Artículo 51.*** *El artículo 51 del ALAAE tal vez sea uno de los más importantes en cuanto al objeto del presente Informe, pues altera de forma sustancial el sistema de atribución de competencias existente hasta la actualidad entre los distintos niveles de gobierno en un ámbito específico como es el informe de imposición de medidas correctos (IIMC), además con la determinación (no justificada, por cierto) de umbrales de población en el caso de los ayuntamientos y con la adición un sistema basado en la voluntariedad de su ejercicio para los ayuntamientos a los que se capacita a ejercer ese trámite y, en fin, con un rediseño de la LTH que se lleva a cabo en la disposición final primera del ALAAE.*

Sobre este precepto, la CGLE quiere exponer los siguientes puntos y propuestas:

  - *El cambio de modelo de atribución institucional del IIMC tiene impactos importantes sobre las competencias municipales y sobre la financiación de las haciendas locales.*

Tal y como se ha expuesto anteriormente en esta memoria, desde nuestro punto de vista, estas dos aseveraciones carecen de base si se atiende al literal de lo dispuesto en el ALAAE. No se ha detallado, además, cuáles serían dichos importantes impactos ni se ha cuantificado la pretendida necesidad de financiación.

  - *Ese cambio competencial (mejor dicho, de las facultades de determinadas instituciones) se lleva a cabo modificando la LTH (disposición final primera), pero sin hacerlo con la LILE, cuando las facultades de gestión reconocidas (sin excepción material) a los ayuntamientos por el artículo 17.1.8) se limitan o restringen, debiendo reflejarlo en la exposición de motivos (adecuación a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad) y de forma expresa (a través de una disposición final redactado en términos similares a la disposición final primera del ALAAE o tal como se indica al final de estas conclusiones).*

Tal y como se ha expuesto anteriormente en esta memoria, desde nuestro punto de vista, estas aseveraciones carecen de base si se atiende al literal de lo dispuesto en el ALAAE.

  - *No hay en todo el expediente del procedimiento de elaboración normativa ninguna justificación sobre cuáles son los motivos que avalan colocar un umbral de población de más o menos de 10.000 habitantes, lo que sitúa a la autonomía municipal en un plano de distinto rango o incidencia efectiva, real o*

mayor para los municipios que superen esa cifra y disminuida o menor para aquellos otros que no la alcancen. Al menos se podría haber establecido un paralelismo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, donde se establece el umbral de 7.000 habitantes (…)".

Se ha entendido, y así se ha explicado anteriormente en la presente memoria, que los ayuntamientos de mayor tamaño de la CAPV cuentan a priori con recursos bastantes, asicomo con técnicos ambientales entre su personal y disponen, por lo tanto, de un servicio adecuado al efecto, siendo candidatos idóneos a realizar estas funciones toda vez que, en la práctica, algunos de ellos ya han solicitado tal delegación competencial, la han asumido y vienen desempeñando esta labor de emisión del IIMC.

El alegante no aporta los motivos en los que se basa para determinar que el umbral utilizado no es adecuado. Tampoco aporta explicación de por qué el umbral establecido de 7.000 habitantes, en otra normativa sectorial y a otros efectos, es más idóneo que el propuesto por el órgano ambiental de la CAPV ni como se justificó aquella toma de decisión. Por lo tanto, la alegación no puede ser tomada en consideración.

- *En todo caso, esa propuesta sería subsidiaria frente a lo que ahora cabe señalar. La Ley 3/1998 y la Ley 2/2006 son ambas anteriores a la LILE. Tras la entrada en vigor de esta última el principio vector de esa nueva normativa en lo que a gestión de servicios se refiere es bien obvio: la preferencia de gestión por parte de los municipios, en su caso, por las mancomunidades u otras fórmulas asociativos municipales; mientras que la gestión por las entidades supramunicipales o, en última instancia por las diputaciones forales, es subsidiaria. Por consiguiente, tal como algunos ayuntamientos vascos defendieron en las alegaciones (por ejemplo, el Ayuntamientos de Bermeo y Pasaia), resulta mucho más adecuado con el espíritu y finalidad de la LILE atribuir sin exclusiones la facultad de emitir el IIMC a los municipios (pues es una competencia de gestión ambiental), dejando la puerta abierta a que, en su defecto, puedan solicitar la asistencia técnica de las Diputaciones forales.*

Ya ha sido explicado convenientemente en la memoria los motivos por los cuales se ha determinado la distribución de funciones entre las distintas administraciones públicas.

En cualquier caso, el artículo 7.2 b) del ALAAE ya deja abierta la vía, con carácter general, a los ayuntamientos para poder ser asistidos por parte de los Órganos Forales de los Territorios Históricos, en este tipo de tramitaciones, con lo cual, no es precisa realizar una mención específica en dicho artículo. Literalmente, sería competencia de las DDFF: *asistir a los ayuntamientos en relación con las actividades e instalaciones sometidas al procedimiento de licencia de actividad clasificada y de comunicación previa de actividad clasificada que se regulan en la presente Ley.*

- *No obstante, si esta solución no se estimara como adecuada, tal como venimos señalando, el legislador sectorial, de acuerdo con el artículo 17.2 "in fine" de la LILE deberá dejar constancia de esa limitación expresa para los municipios de menos de 10.000 h., explicitando expresamente (o materializándolo normativamente de forma expresa) y concretando, cuáles son las causas o motivos en virtud de los cuales se reducen las facultades de gestión de ese tipo de municipios, fundamentando todo ello en los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.*

Tal y como se ha expuesto anteriormente en esta memoria, desde nuestro punto de vista, estas aseveraciones carecen de base si se atiende al literal de lo dispuesto en el ALAAE. No existe la referida reducción de las facultades de gestión.

- *Todas estas cuestiones no han sido tenidas en cuenta por el ALAAE y deben corregirse oportunamente en los términos aquí expuestos.*

- ***Capítulo V del Título IV** (CPAC). También este capítulo IV es importante para los municipios vascos, entre otras cosas porque el modelo de intervención ambiental diseñado por el ALAAE implica un cambio del perímetro de actividades sujetas a LAC y la traslación de algunas de aquellas a la CPAC, en este proceso de simplificación de trámites y reducción de cargas administrativas que se ha citado al inicio. (…). En suma, en el caso de la Administración Municipal se habrá de valorar que aquellas actividades que no son ahora objeto de LAC, sí que exigen intervenir mediante técnicas de control e inspección, por lo que se deben dedicar recursos efectivos a tales cuestiones.*

Todas las AAPP han tenido y tienen que seguir reordenando sus estructuras de trabajo internas para redistribuir adecuadamente sus recursos una vez producido el cambio de paradigma que ha supuesto el paso del control previo (licencias) al control ex post (comunicaciones previas o declaraciones responsables). La apreciación realizada por el CGLE no concreta el incremento de actividades sometidas a comunicación que refiere y que, por tanto, su control sería “expost”. Como se ha indicado anteriormente, el citado anteproyecto no difiere de la distribución de actividades sometidas a ambos títulos que en su día fue introducida por la entrada en vigor de la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Desde nuestro punto de vista, no se entiende que deba ser al proyecto actual al que se achaque el incremento de funciones respecto de un reparto de actividades y sus correspondientes funciones realizado en mayo 2012, en consonancia con la normativa europea.

- ***Título VII (Entidades colaboradores e inspección ambiental).** Se trata asimismo de un Título sobre el que se han vertido numerosas alegaciones de los ayuntamientos vascos que participaron en ese trámite, sobre todo en relación con el Capítulo que tiene por objeto la Inspección Ambiental, cuyos efectos organizativos, de recursos humanos y financieros sobre los ayuntamientos vascos son muy relevantes.*

Todas las alegaciones han sido estudiadas y convenientemente respondidas en sus correspondientes fases de tramitación, por lo que lo que no cabe que el informe del CGLE haga una remisión genérica a las alegaciones presentadas en nombre de cada Ayuntamiento, al objeto de darle mayor cualificación a las mismas o, en su caso, utilizar la vía de emisión de su informe como una segunda vuelta para que determinadas alegaciones sean introducidas en el texto.

No se comparte la afirmación de que la regulación del ALAAE sobre la inspección ambiental tenga muy relevantes efectos organizativos, de recursos humanos y financieros. Como se ha expuesto, no existe una alteración significativa de la situación actual para los ayuntamientos de la CAPV, de contrario, lo que realmente ocurre es que se limita el número de actividades que deben inspeccionar por pasar al régimen de AAU.

A mayor abundamiento, indicar que únicamente cuatro Ayuntamientos del total de 251 municipios de la CAPV han realizado alegaciones en esta concreta materia, por lo que

no se puede compartir, como refiere esa parte que se han realizado *numerosas alegaciones*.

- ***Artículo 91.*** *En este artículo se utiliza de forma genérico la expresión "personal", ya que obliga a la colaboración de los titulares de las actividades con aquél. Y allí se reenvía a lo recogido en el artículo 89, donde se regulan las entidades colaboradores, ampliando el círculo de intervención de éstas, pues se dice expresamente que ese personal realizará actuaciones de inspección. Serla mucho más correcto emplear otro tipo de expresiones; actuaciones de comprobación o verificación, actuaciones de control, etc., y huir de la noción inspección porque esta revela el ejercicio de potestades públicas. Véanse, asimismo, las observaciones -que en tono similar- se hacen en el cuerpo del Informe a los artículos 92 y 93 (apartados 82 y 83 del Informe).*

Se trata de una alegación sobre aspectos técnicos de la redacción del texto normativo que, en puridad, no cabe realizar en este tipo de informes del CGLE.

En cualquier caso, tal y como se ha señalado en las memorias e informes que dan repuesta a las alegaciones formuladas al anteproyecto de Ley, la regulación del artículo 89, donde se regula el “Personal de la inspección ambiental”, responde a la necesidad de que se permita la colaboración de las entidades privadas en actuaciones que no están estrictamente reservadas a funcionarios públicos por entrañar el ejercicio de potestades públicas, siempre a demanda y bajo la tutela de las administraciones públicas y tras el preceptivo procedimiento de contratación. Nos remitimos a las respuestas dadas a las alegaciones realizadas a ese capítulo en evitación de reiteraciones innecesarias.

- ***Disposición adicional (única).*** *La disposición adicional (única) del ALAEE parece establecer una suerte de "autofinanciación" para el ejercicio de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la aplicación de la futura Ley por parte de las Administraciones Públicas, lo que contravendría todas las exigencias de financiación derivadas de la aplicación de la LILE en el caso de las competencias y atribuciones o facultades nuevas que se prevén en relación con las hasta ahora desarrolladas por los municipios vascos de acuerdo con la legislación ambiental vigente en el momento de aprobarse el nuevo texto. Convendría, por tanto, introducir un párrafo en la citada disposición adicional en la que se salvaguardara expresamente la aplicabilidad de la LILE en esta materia. Ese párrafo podría quedar redactado de la siguiente forma: "Lo establecido en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 2/2016, de 2 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, en materia de suficiencia financiera de los entes locales, particularmente de lo recogido en los artículos 17, l8 y 112, así como en su disposición transitoria primera.*

Reiteradamente se ha expuesto en la presente memoria que no existen competencias y atribuciones o facultades nuevas que se prevean en relación con las hasta ahora desarrolladas por los municipios vascos de acuerdo con la legislación ambiental vigente en el momento de aprobarse el nuevo texto. Con lo que no tendría sentido realizar dicha mención.

En cualquier caso, no es necesario, e incluso resulta contrario a una buena técnica legislativa, hacer referencias cruzadas en una norma en relación con otras que, estando en vigor, puedan ser aplicables de forma complementaria. Si el anteproyecto de Ley contuviera menciones a lo largo de su articulado a todas aquellas disposiciones con rango de ley que puedan ser aplicables a las diferentes cuestiones que se regulan, muchas de ellas con una importante trascendencia por su contenido y alcance, la ley resultante correría el riesgo de ser una catalogo normativo que no aportaría mayores

garantías jurídicas puesto que la normativa produce sus efectos dese el momento en que es aprobada y entra en vigor y no por el hecho de que otra disposición se refiera a ella de forma expresa.

- ***Disposición Final Primera.*** *En el momento de analizar el artículo 51 del ALAAE esta Comisión ha esbozado las posibles soluciones alternativas que se deben adoptar para adecuar esa regulación y esa pretendida competencia foral a lo establecido en la LILE, tanto material como formalmente (…).*

Nos remitimos a lo expuesto anteriormente en la memoria ya que se ha respondido a todas y cada una de las cuestiones planteadas.

- *En cualquier caso, sí se quiere atribuir esa competencia a las Diputaciones Forales, con ese u otro alcance, se requiere inexcusablemente, tal como establece el artículo 17.2 "in fine" de la LILE justificar con base en los principios de proporcionalidad y subsidiariedad esa propuesta de modificación puntual del artículo 17.1 8) LILE, incorporando, además, una modificación expresa del ese artículo en una Disposición Final, donde se indique que en lo que afecta a las competencias de gestión medioambiental consistentes en la imposición de medidas protectoras y correctores se estará a lo establecido en el artículo 7. C) 6. de la LTH y en el artículo 51 de la presente Ley. No obstante, esta Comisión defiende que tales facultades de imponer medidas correctores a través de un informe se encuentre, con las precisiones ya aludidas, en manos de los Ayuntamientos vascos, por ser esta una competencia propia de los municipios vascos.*

Nos remitimos a lo expuesto anteriormente en la memoria ya que se ha respondido a todas y cada una de las cuestiones planteadas.

- ***Anexo Económico que garantice la suficiencia financiera de los municipios vascos por la aprobación de la futura ley de Administración Ambiental de Euskadi****. La Comisión de Gobiernos Locales considera, finalmente, que la Memoria Económica que ha sido elaborada por el Departamento proponerte de la iniciativa normativa no se adecua a las exigencias derivadas de los artículos 18.3 y 112 de la LILE (como tampoco al artículo 25.4 LBRL), en cuanto que no se ha hecho un análisis o una estimación mínimamente detallada de los posibles impactos efectivos que la implantación de este nuevo modelo comporta...*

Nos remitimos a lo expuesto anteriormente en la memoria ya que se ha respondido a todas y cada una de las cuestiones planteadas. Recordar que el CGLE reitera equivocadamente el art. 17.3 de la LILE relativo a la atribución de nuevas competencias como propias por ley o norma foral para anudarlo posterior e interesadamente a lo dispuesto en el art. 18.3 que indica, fundamentalmente, que a la atribución de nuevas competencias propias a los municipios o a la concreción de servicios, actividades o prestaciones derivadas de competencias atribuidas como propias, debe seguirse la adecuada dotación de recursos para asegurar la suficiencia financiera de los municipios.

Nos remitimos a lo dispuesto en la memoria económica del ALAAE en relación al impacto económico neutro para los ayuntamientos y a lo que, en su caso, determinen los órganos posteriores que habrán de informar en relación a lo dispuesto por el anteproyecto de Ley.

Reunión con miembros del Comisión de Gobiernos locales de 24 de abril de 2019.

Resulta de interés dejar constancia en la presente memoria de tramitación de la celebración, con fecha 24 de abril de 2019, de una reunión para abordar aspectos relativos al ALAAE y al informe emitido por parte de la CGLE con fecha 29 de enero de 2019.

Dicha reunión se celebró a solicitud de la CGLE, sin que exista una convocatoria formal con su correspondiente orden del día, con la presencia de la Viceconsejera de Medio Ambiente, el Director de Administración Ambiental y el Letrado que instruye la tramitación del expediente normativo en el Gobierno Vasco, asicomo otro Letrado del Gobierno Vasco en funciones de secretario. Por parte de la CGLE acuden dos de sus miembros, un trabajador de EUDEL y un consultor privado.

El objeto de la citada reunión es reiterar lo ya expuesto en el informe de 29 de enero de 2019. Refieren los asistentes que la CGLE no ha tenido noticia de la respuesta dada a su informe por parte de la Dirección proponente de la norma y se plantea que dicha reunión tiene el carácter de comisión bilateral descrito en el artículo 90 de la LILE. Nuevamente indican que existen en el anteproyecto de vulneraciones de las disposiciones de la LILE en relación con la autonomía local, la necesidad de modificar expresamente el texto de la LILE, que es preciso incorporar una memoria económica específica referida a la financiación de los municipios vascos debida a las alteraciones competenciales producidas.

Como cuestión previa, en relación a la necesidad de convocar una comisión bilateral, interesa a esta parte indicar que la administración promotora de la propuesta normativa se reitera en lo expuesto en su respuesta de 7 de marzo de 2019 al informe de la CGLE. Desde nuestro punto de vista, no nos encontraríamos ante un supuesto de proyecto de norma ante la cual la CGLE deba actuar en su cualidad de órgano de alerta temprana y por, consiguiente, no procedería convocar a la comisión bilateral prevista en el artículo 90.3 de la LILE en caso de existir discrepancias sobre las modificaciones propuestas en su informe. Sin perjuicio de lo cual, en base a los principios de colaboración interinstitucional, se puedan celebrar encuentros al objeto de mejorar el texto normativo, como es el caso de la reunión celebrada. Asimismo, señalar que se dan los requisitos mínimos objetivos previstos por la LILE relativos a la asistencia a estas comisiones de tres miembros por parte del CGLE.

Entrando al contenido material de las observaciones realizadas al anteproyecto, la CGLE no ha analizado la detallada respuesta dada por la Viceconsejería de Medio Ambiente a las cuestiones planteadas, y ello a pesar de que dicho documento de respuesta (la memoria de tramitación) se encuentra publicado en la página de transparencia del Gobierno Vasco y a disposición de la ciudadanía en general desde el día 7 de marzo de 2019. Este hecho provoca que en la reunión se vuelven a debatir aspectos ya analizados por la Dirección de Administración en las págs. 6 a 20 de la citada memoria, sin que se llegue a acercar posturas entre ambas partes en los aspectos sustanciales. Concretamente, no se comparte por esta parte:

- Que existan vulneraciones de la LILE por realizar el anteproyecto alteraciones competenciales municipales y que tales cambios meriten una modificación expresa de la LILE debido a lo dispuesto, fundamentalmente, en el art. 51 del ALAAE.

- Que sea preciso realizar una Anexo Económico específico que garantice la suficiencia financiera de los municipios vascos por la aprobación del anteproyecto.

En este sentido, tal y como indica el propio informe de la CGLE (pág. 28), este órgano promotor no entiende necesario incorporar un anexo específico que asegure la suficiencia financiera de los ayuntamientos porque no existe una necesidad real e imperiosa de dotar nuevos recursos a unos entes locales a los que las nuevas medidas incorporadas en el ALAAE en lugar de imponerles más y nuevas funciones, en realidad lo que hace, es restarle labores que ya venían desarrollando. Como se ha expuesto en esta memoria, no existe una imposición legal de incremento de actividades o servicios si no que la Ley faculta a los ayuntamientos para decidir si optan o no por asumir dichas actividades. A mayor abundamiento, indicar que existe un grupo muy relevante de actividades, todas las sujetas al nuevo régimen de AAU por ser actividades con un potencial contaminador importante (anexo I B), que pasan a ser competencia de la VIMA, con lo cual las labores -y los costes municipales inherentes- a la tramitación de su autorización (licencia de actividad clasificada), control y, en su caso, sanción posterior, han de ser restadas de las labores y de los gastos corrientes de los entes locales. Asimismo, se elimina con carácter general la necesidad de obtener licencia municipal en las actividades sujetas a AAI, lo cual supone un nuevo ahorro para las arcas municipales.

En relación a esta limitación de labores y consiguiente ahorro, se posiciona la memoria económica del ALAAE que, además, el informe del Departamento competente en materia de Hacienda (OCE) ha dado por bueno, solventando las dudas planteadas al respecto por el informe de la CGLE en su pág. 29.

- Enlazamos este punto con las referencias que realiza la CGLE relativas a que, si finalmente, se pretendieran reducir o limitar alguna de las funciones o facultades que los municipios vascos tienen como competencias propias según lo establecido en el artículo 17 1. 8) LILE, tal limitación deberá justificarse de acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad de Ley, tal como determina el artículo 17.2 "in fine" de la LILE.

Continuamos manteniendo que las disposiciones que recoge el ALAAE en relación a las funciones atribuidas a los municipios de la CAPV no limitan o reducen las funciones o facultades previstas en el art. 17.1. 8, que se mantienen en sus justos términos (ordenación complementaria, promoción, gestión, (…) en las zonas urbanas), sino que fijan el **marco normativo sectorial** referencial para que los ayuntamientos puedan ejercitar dichas facultades de gestión en relación con la protección del medio ambiente urbano, que es lo que prevé el propio párrafo inicial del art.17.1 de la LILE. Si bien es cierto que, con en la fijación de dicho marco a través del anteproyecto, existe un grupo de actividades (las sujetas a AAI y AAU) que escapan al ámbito de actuación de los ayuntamientos vascos al no precisar de la obtención de una posterior licencia de actividad clasificada y pasar a ser el único órgano autorizante la VIMA. Las competencias municipales se mantienen para las actividades sujetas a LAC y CPAC (se encuentran en los anexos I.C (licencia) y I.D (comunicación previa).

Esta disminución del número de actividades que están sometidas a intervención municipal por escapar del régimen de intervención como actividades clasificadas, lo cual desde nuestro punto de vista no puede entenderse como una limitación de las competencias municipales en abstracto consideradas, viene justificada, en cualquier caso, por los dictados de la Directiva de Servicios, Las Leyes Omnibus y Paraguas estatales y la Ley Omnibus Vasca, cuyo objetivo no es otro que evitar las duplicidades administrativas, limitar la existencia de autorizaciones previas y que, en suma, se garantice una mayor eficacia en la actividad administrativa de todas las Administraciones públicas.

La propia LILE, en su art. 16, relativo a la cláusula universal de competencias municipales, determina que "con el fin de evitar duplicidades en la ordenación o prestación de servicios, los municipios no podrán asumir o ejercer competencias sobre determinadas actividades, servicios o prestaciones que, según el sistema de atribución de competencias, estén reservadas expresamente por el ordenamiento jurídico a otro nivel de gobierno". En esta misma línea, la Ley de Bases de Régimen Local, en su art. 84 bis, disciplina que: "con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. (…) 3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente".

Por lo expuesto, la eliminación de la doble intervención administrativa (VIMA/AAI o AAU + Ayuntamiento/LAC) en algunas actividades e instalaciones que promueve el ALAAE queda suficientemente justificada en términos de proporcionalidad, eficacia y eficiencia. Sin perjuicio de que su efecto sea, efectivamente, que las entidades locales ejercerán sus competencias sobre un número global menor de actividades.

2.5. Dictamen del Consejo Económico y Social Vasco.

Con fecha 22 de febrero de 2019 se emite por parte del Consejo Económico y Social Vasco el Dictamen 4/19 relativo al Anteproyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi.

En las consideraciones generales del Dictamen, el CES tilda de muy oportuna la iniciativa de elaboración de la nueva norma en materia medioambiental que sustituya a la Ley General de Protección del Medio Ambiente actualmente vigente y estima que se trata de un anteproyecto bien construido y que juzga favorablemente en su globalidad, sin perjuicio de ciertas cuestiones específicas sobre las que efectúa, una serie de consideraciones.

Las citadas consideraciones son:

1. <u>En relación a la Memoria Justificativa y Económica del Anteproyecto</u>

En la memoria justificativa y económica del anteproyecto sometido a dictamen se realiza un esfuerzo importante para calcular la estimación de los gastos y costes derivados de la implantación de la ley en el ámbito de las administraciones públicas y privados, pero por el lado de los ingresos, financiación y su reflejo de presupuestos se realiza exclusivamente una referencia de conceptos tributarios y medidas genéricas de carácter fiscal.

Es por ello que nos parece conveniente que se complemente la memoria económica con simulaciones y estimaciones de ingresos dado que en el anteproyecto se estipula que las tasas, tributos e instrumentos fiscales que se desarrollen tendrán carácter finalista e integrarán una partida presupuestaria que tendrá como finalidad el cumplimiento del objetivo de la ley de administración ambiental.

Tal y como se ha expuesto en diferentes apartados de la memoria económica que acompaña al anteproyecto, lo que se hace en el mismo es otorgar la posibilidad de implantar medidas fiscales y financieras en el ámbito de la administración y protección medioambiental, aunque no se detallan los criterios ni la cuantificación de dichos

potenciales ingresos, limitándose a determinar el marco normativo para su posterior determinación legal.

Al no detallar el anteproyecto datos cuantitativos sobre dichos potenciales ingresos, no pueden realizarse estimaciones o simulaciones en relación a la magnitud de los mismos, debiendo dejarse esta labor para los desarrollos normativos que aquilaten el nuevo marco normativo general que se define en el ALAAE.

Asimismo, se debe apuntar que la competencia en materia fiscal en la CAPV queda repartida entre los tres Territorios Históricos, quienes ostentan plena capacidad en la definición de hechos imponibles, así como, en su caso, las bonificaciones o exenciones a aplicar, hecho que dificulta enormemente la estimación a realizar en relación a los ingresos cuantificados, al quedar al albur de las decisiones tomadas en el seno de otras administraciones, en este caso las forales.

2. En relación a la Exposición de Motivos

1.- *En el cuarto párrafo de la página 11 se afirma que, en aras a agilizar la tramitación de los diferentes procedimientos de intervención ambiental, se elimina el trámite de notificación a los vecinos inmediatos al lugar donde se vaya a emplazar una actividad, sustituyéndolo por la publicación en el Boletín Oficial correspondiente y en la sede electrónica y el dictado de edictos. Queremos llamar la atención sobre esta supresión, dado que no parece la mejor manera de fomentar los principios de transparencia y de participación ciudadana que proclama la Exposición de Motivos del anteproyecto.*

Se ha entendido necesario modificar, ya en pleno siglo XXI y en línea con otras normativas comparadas, modalidades de notificación que llegan de arrastre de normas anteriores como el Decreto del RAMINP del año 1961. Los propios ayuntamientos vienen trasladando a la VIMA que este tipo de notificación personal tiene un impacto real muy limitado si se toman en consideración el número de alegaciones que presentan los colindantes en relación al conjunto de las alegaciones que se reciben en los expedientes de tramitación de títulos ambientales. Indicar, asimismo, que en el texto inicial del ALAAE no se contemplaban los edictos municipales y fueron incorporados como medida adicional de publicidad a las ya recogidas en el texto del anteproyecto debido a la presentación de alegaciones de algunos municipios.

2.- En el tercer párrafo de la página 12 se indica que (…), A este efecto, estimamos oportuno añadir a dicho párrafo la siguiente cautela ***"la creación del registro de personas interesadas no eliminará el acceso a la información y el derecho a recibirla de cualquier persona legítimamente interesada de acuerdo con la normativa aplicable, aunque ésta no esté incluida en ese registro".***

Este tipo de registro se encuentra sistemáticamente ubicado y está referido a las personas interesadas en materia de evaluación de impacto ambiental, entendemos que queda claro y no es preciso explicar que los interesados en los procedimientos, de conformidad al concepto de interesado recogido en el artículo 4 de la Ley 39/2015, no verán limitados sus derechos de acceso a la información.

3. En relación al articulado.

Artículo 1.- Objeto

Se propone que la conservación del medio ambiente forma también parte de los objetivos de la normativa que se pretende instaurar, por lo que sugerimos su incorporación al texto de la disposición que explicita su objeto.

Se admite la aportación y el texto quedará redactado del siguiente modo:

Art. 1): La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo para la protección, **conservación** y mejora del medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, determinando los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:

Se propone así mismo, incorporar a la empresa y el ámbito laboral como ámbitos en los que la educación ambiental es también necesaria y debe, por tanto, también de ser fomentada:

No procede incluir el detalle de todos los actores sociales a los que les sería de aplicación el artículo. Se entiende que las empresas y los ámbitos laborales se incluyen entre el conjunto de actores sociales mencionados en el tenor literal del artículo.

Artículo 2.- Definiciones

Se propone que la definición de Acuerdo Ambiental, que se recoge en el apartado a) incorpore a los sindicatos como posible sujeto parte de un acuerdo ambiental:

Art. 2.a): Acuerdo medioambiental: acuerdo suscrito entre la Administración ambiental competente y una empresa, o los representantes de un sector, ***organizaciones sindicales****, colectivo u organización determinada, según la cual ambas partes se vinculan voluntariamente para el cumplimiento de unos objetivos de protección ambiental.*

La referencia genérica que realiza la norma a colectivos u organizaciones es omnicompresiva y no se entiende preciso, por lo tanto, hacer referencia explícita a las organizaciones sindicales. El propio artículo 79 que se dedica a regular los acuerdos medioambientales refiere que pretende lograr la participación *de todas las instancias de la sociedad*, entre las que quedarían incluidas también las organizaciones sindicales.

Se propone que la definición de "instalación" incluya también las unidades técnicas de carácter permanente y temporal:

No se entiende necesario realizar en la definición una referencia a la duración en el tiempo, permanente o temporal, de la instalación.

Asimismo, se propone incluir una definición de "huella ambiental", que permitirá una mejor comprensión del texto, particularmente del contenido del artículo 82, dedicado a este concepto.

El artículo 82 ya refiere que a través de la huella ambiental de los productos u organizaciones se busca medir su comportamiento durante su ciclo de vida y que las AAPP deben promover la utilización de metodologías reconocidas por la UE. Se entiende más oportuno estar a las definiciones que de dichas metodologías realicen las normas sectoriales o específicas en la materia en lugar de aportar una definición en esta norma que tiene un carácter más general.

Artículo 5. Derechos de las personas

En la enumeración de los derechos que de acuerdo con el anteproyecto de Ley ostentarán todas las personas, proponemos efectuar una supresión en el apartado a)

Concretamente, consideramos oportuno suprimir en el apartado a) la especificación indicada en subrayado de que sean "ya sean hombres o mujeres". Si la disposición indica que todas las personas tendrán derecho, ello ya incluye a todas las personas, sean hombres, sean mujeres, sean de una condición o de otra.

La adicción ha sido específicamente solicitada por Emakunde en su informe preceptivo y vinculante al Anteproyecto de Ley. No procede por lo tanto acoger la propuesta del CES.

Artículo 10. Consejo Asesor de Medio Ambiente

Con relación al Consejo Asesor del Medio Ambiente, consideramos que el carácter superior en el ámbito medioambiental de este Consejo consultivo y de cooperación en materia de medio ambiente debiera quedar expresamente recogido en la norma.

Art. 10: El Consejo Asesor de Medio Ambiente, como órgano consultivo ***superior en el ámbito medioambiental*** *y de cooperación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tiene como finalidad favorecer la relación…..*

No se entiende preciso realizar dicha adicción.

Artículo 11.- Composición

De conformidad con la normativa aplicable, planteamos la adición de "más representativas" respecto de las organizaciones empresariales y organizaciones sindicales que componen el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Art. 11: g) Las organizaciones empresariales ***más representativas****.*

h) Las organizaciones sindicales ***más representativas***

Ni la Ley 3/98, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco que lo creo ni el Decreto 7/2008, de 15 de enero, del Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco y sus posteriores modificaciones hicieron distingo entre organizaciones empresariales o sindicales por su carácter de más representativos.

El objetivo del Consejo Asesor es dar voz a colectivos representativos de intereses sociales y los sindicatos y las asociaciones empresariales lo pueden llegar a ser sin perjuicio de que tengan o no la consideración, en virtud de las normas laborales, de más representativos.

Artículo 18.- Regímenes de intervención ambiental

Proponemos la siguiente adición, con el fin de que la afección quede detalladamente expresada.

Art. 18.2: La determinación del sometimiento de las actividades e instalaciones a los diferentes regímenes de intervención ambiental regulados en esta Ley se realiza con base en la mayor o menor afección de dichas ***actividades sobre el medio ambiente,*** *teniendo en cuenta los siguientes aspectos:*

Se estima la alegación presentada y se añadirá el texto siguiente: "(…) actividades sobre el medio ambiente y la salud de las personas".

Artículo 35.- Información pública

A fin de garantizar una mayor difusión del periodo de información pública, planteamos la posibilidad de que el anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco de sometimiento a periodo de información pública de los proyectos de instalación o actividad para los que se solicite autorización ambiental integrada o autorización ambiental única, sea también expuesto en el tablón de edictos del ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la actividad o instalación, mediante la adición de un segundo párrafo que así lo estipule.

Art. 35.1: Una vez presentada la solicitud y comprobado que la documentación aportada está completa, el proyecto de instalación o actividad se someterá, previo anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica del Gobierno Vasco, a un período de información pública de un mes, al objeto de que puedan presentarse alegaciones. ***Asimismo, una copia de dicho anuncio se expondrá en el tablón de edictos del ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la actividad o instalación.***

Se estima la alegación. El texto final quedará redactado de la siguiente forma:

"Para darle una mayor difusión, dicho anuncio será comunicado al ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la actividad o instalación para su exposición, por parte de la entidad local, en su tablón de edictos.

Artículo 38.- Otros informes

La redacción de esta disposición deja en la indefinición la determinación de la autoridad o entidad a la que habrá de solicitarse el informe sanitario de carácter preceptivo al que se hace referencia. Es por ello que sugerimos la conveniencia de introducir una mayor especificación, como que este informe sea público, o en su defecto señalar que será objeto de desarrollo reglamentario.

Desde nuestro punto de vista, y habida cuenta del arraigo que tiene la solicitud de este tipo de informes sanitarios que vienen siendo solicitados por los ayuntamientos en Euskadi al menos desde la entrada en vigor de la Ley 3/98, de 27 de febrero, no es preciso realizar la acotación relativa a que el informe sanitario debe ser exigido a una administración pública.

Asimismo, se deduce del texto la referencia explícita a "todos aquellos órganos que en virtud de sus competencias deban pronunciarse" no pueden revestir de otro carácter que no sea público.

Al analizar la alegación presentada y releer el tenor literal del artículo, se ha considerado necesario realizar una pequeña mejora técnica del precepto, suprimiendo una referencia redundante a las competencias de los órganos que deben informar.

Artículo 40.- Resolución

Esta disposición establece los contenidos y plazos de emisión de las resoluciones que ponen fin a los procedimientos de autorización ambiental integrada y autorización ambiental única, fijando un plazo de 9 meses para la primera y de 6 meses para la segunda. Hemos de manifestar que plazos de tal extensión no resultan compatibles

con la agilidad que requiere la puesta en marcha de los proyectos y actividades económicas que suscitan la solicitud de las mencionadas autorizaciones. Es por ello por lo que solicitamos un acortamiento significativo de dichos plazos.

Desde nuestro punto de vista, sería óptimo, pero no resulta realista acortar más unos plazos, como el de nueve meses en las AAIs, que las administraciones públicas en la actualidad ya tienen problemas para cumplir.

En cualquier caso, se entienden los citados plazos como de término máximo, pudiendo reducirse materialmente durante la tramitación del procedimiento en cuestión, en función de las oportunas circunstancias que se pudieran darse en el momento concreto de su impulso.

Artículo 43.- Vigencia y revisión de las autorizaciones

No resulta oportuno que una disposición legislativa contenga expresiones de carácter cualitativo y genérico como las utilizadas en el apartado b) del artículo 43.4, que prevé los supuestos en que la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única serán revisadas de oficio, dejando la posibilidad de una revisión de oficio al arbitrio de la autoridad competente y de cómo valore ésta si "es posible reducir significativamente las emisiones" "sin imponer costes excesivos" " a consecuencia de importantes cambios".
Es por ello por lo que proponemos que tales expresiones puedan ser concretadas, introduciendo en la norma una remisión a un posterior desarrollo reglamentario.

No se puede acoger la alegación. Se trata de cláusulas abiertas que vienen así referenciadas en la normativa ambiental comparada toda vez que pretenden dar sustento a un principio básico de intervención administrativa (la cláusula de progreso) en virtud del cual, las administraciones públicas, deben poder disponer de herramientas para actualizar las autorizaciones emitidas en una fecha determinada pero que son de tracto sucesivo.

No se trataría en ningún caso de una actuación arbitraria de la autoridad competente, sino de una actuación basada en su discrecionalidad técnica orientada a la búsqueda del interés general. No cabe pensar que una autorización emitida en una fecha determinada a una instalación no deba revisarse al albur del progreso técnico; y como dicho progreso técnico no puede ser conocido de antemano y tampoco puede obligarse a las empresas a adaptarse a cualquier tipo de cambio, este debe sustentarse y justificarse por reducción significativas y no imponerse costes desorbitados.

El tenor literal de lo recogido en el ALAAE es coherente con lo dispuesto en otras normativas ambientales comparadas y, además, es copia literal de lo señalado en el art. 26.4 b) del RDL 1/2016, de 16 de diciembre, de IPPC, con carácter básico.

En cualquier caso, el progreso técnico no requiere de refrendo legal para determinar que puede ser aplicado al caso concreto, en aras de la protección del medio ambiente.

Artículo 59.- Evaluación ambiental

De forma análoga a como se ha alegado respecto del artículo 43, no resulta oportuno que una disposición legislativa contenga expresiones de carácter cualitativo y genérico que se dejen al arbitrio de la autoridad competente.

Art. 59.1: Se someterán preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental los planes, programas y proyectos, y sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, ***de acuerdo con la normativa de aplicación y del desarrollo reglamentario que de esta ley se establezca,*** *con el fin de garantizar un elevado nivel de protección ambiental y de promover un desarrollo sostenible, mediante:*

No puede acogerse la alegación, referencias como "que puedan tener efectos significativos" se encuentran en el acervo normativo de la evaluación ambiental desde la regulación originaria.

Tanto la legislación básica como el anteproyecto definen que deben entenderse por efectos significativos:

> Art. 2.h) Efecto significativo sobre el medio ambiente: alteración desfavorable de magnitud apreciable de cualquiera de los aspectos de la calidad del medio ambiente, especialmente si es de carácter permanente o de larga duración. En caso de los espacios Red Natura 2000, se considerará que un efecto es de carácter significativo si puede empeorar los parámetros que definen el estado de conservación de los hábitats o especies objeto de conservación en el lugar, o, en su caso, las posibilidades de su restablecimiento.

Nos remitimos a lo respondido en las consideraciones previas al Título V (evaluación Ambiental) en la fase de audiencia del ALAAE en evitación de reiteraciones innecesarias, sin perjuicio de resaltar que la evaluación ambiental se aplica a los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, bien cuando exista una certeza (alto grado de probabilidad) de que dichos efectos vayan a producirse, o bien, cuando exista una incertidumbre (grado de probabilidad indeterminado). Por el contrario, no debe aplicarse cuando exista una certeza de que dichos efectos no van a poder producirse (de forma manifiesta). La determinación de tales conceptos se encuentra recogida en la puesta en relación (directa o indirecta) de los mismos con el doble listado de proyectos del anexo II.

Artículo 62.- Nulidad de planes, programas y proyectos no evaluados

Entendemos que el texto debiera especificar que los proyectos total o parcialmente ejecutados sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental serán sometidos a la misma, sin perjuicio de las posibles sanciones en que se pudiera incurrir por haber omitido la evaluación. Y ello porque, tal conducta no puede subsanarse sin más, actuándose la tramitación omitida sin mayores consecuencias, dado que ha sido, de hecho, tipificada como infracción muy grave en el Título Noveno, dedicado a la Disciplina Ambiental, en el artículo 104.2.b).

Art. 62.2: En el caso de aquellos proyectos que se encuentren parcial o totalmente ejecutados sin haberse sometido al preceptivo procedimiento de evaluación de impacto ambiental el órgano sustantivo someterá dichos proyectos al procedimiento de evaluación pertinente en el momento en el que se ponga de manifiesto tal carencia, aplicándose las especificaciones técnicas propias de una evaluación a posteriori cuando sea necesario, ***sin perjuicio de las posibles sanciones en las que se pudiera incurrir de acuerdo con el artículo 104.2.b) de esta Ley.***

Se acoge la alegación y se modifica el texto legal.

Artículo 65.- Planes, programas y proyectos excluidos de evaluación ambiental

Estimamos necesario incorporar a la relación de planes, programas y proyectos excluidos de evaluación ambiental los ***planes y programas de carácter fiscal****.*

Se encuentran excluidos de evaluación ambiental los planes y programas de tipo financiero o presupuestario, de conformidad con lo dispuesto, literalmente y con carácter básico, en el artículo 8.1 b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Entendemos que no procede excluir expresamente otros tipos específicos de planes, como aquéllos que lo sean de carácter fiscal, toda vez que podría achacarse que el ALAAE disminuye en Euskadi el régimen de protección medioambiental que la legislación básica estatal establece con carácter general.

Por otro lado, para el supuesto contemplado en el apartado segundo, de que el órgano ambiental establezca criterios de determinación de las situaciones en las que los posibles efectos sobre el medio ambiente de planes o programas no serán significativos, consideramos que el establecimiento de estos criterios no ha de ser potestativo sino obligatorio, por lo que proponemos los cambios necesarios a estos efectos en la redacción del texto.

El criterio fundamental para considerar que un plan, programa o proyecto concreto no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental, es que, de forma manifiesta, es decir, sin incertidumbres, no haya posibilidad de que se produzcan efectos significativos sobre el medio ambiente.

Por el contrario, en caso de que exista una incertidumbre sobre si el plan, programa o proyecto puede o no tener efectos significativos sobre el medio ambiente, la legislación básica en la materia ha establecido que debe seguirse un procedimiento de evaluación simplificada, tal como se recoge en el proyecto de Ley. Y todo ello sin perjuicio de que, sin ánimo exhaustivo, puedan darse a conocer determinados supuestos, extraídos de la experiencia del órgano ambiental en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los que la probabilidad de que puedan darse efectos significativos sobre el medio ambiente sea bien conocida y muy reducida.

Artículo 68.- Publicidad

A los efectos de dar a conocer las resoluciones de los procedimientos de evaluación ambiental, consideramos importante garantizar también que los interesados obtendrán si así lo solicitan una copia de la resolución.
Art. 68: Las resoluciones que ponen fin a los procedimientos de evaluación ambiental se publicarán en el Boletín Oficial correspondiente y la sede electrónica del órgano ambiental. ***Se facilitará copia a aquellas entidades o personas interesadas que lo soliciten.***

No se entiende preciso realizar esta acotación. Las entidades o personas interesadas que soliciten una copia de las resoluciones publicadas en el boletín oficial o en la sede electrónica serán tratadas en los términos dispuestos en el Título III (Información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental) del ALAAE y la normativa básica relativa a dichas solicitudes de información ambiental, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental.

Artículo 83.- Compra Pública Verde

Compartimos que la compra pública verde puede ser un mecanismo adecuado para la consecución de objetivos medioambientales que contempla el anteproyecto de ley en su artículo 83.

En este contexto, y en relación con el artículo 80, dedicado al fomento de la participación en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales (EMAS), y para cuyo cumplimiento el anteproyecto contempla la incorporación de la adhesión al sistema en los procedimientos de contratación pública, consideramos importante señalar lo siguiente: el sistema EMAS está reconocido por su especial nivel de exigencia pero también existen otros sistemas de certificación, igualmente avalados internacionalmente, como el sistema ISO, que además cuenta con la ventaja de estar más extendido en las empresas vascas.

A efectos de conciliar ambas realidades proponemos incorporar en el apartado 83.3 una cláusula que prevea la inclusión en los procedimientos de contratación pública de estos sistemas de certificación y de gestión medioambiental, tales como el EMAS, y que estos sistemas sean valorados en el procedimiento en función del nivel de exigencia que comportan.

La referencia al EMAS y su relación con la contratación pública se encuentra realizada en el artículo 80.2 e) del ALAAE.

Literalmente se indica que las administraciones públicas deben adoptar medidas dirigidas a: incorporar en los procedimientos de contratación pública la adhesión al sistema (EMAS) de acuerdo con lo que en esta materia establece la normativa sobre contratos del sector público.

Asimismo, recordar que el Reglamento Europeo EMAS obliga a las AAPP a la promoción de este tipo de estándares con carácter preferente y diferencial con respecto a los SGM contemplados en normas privadas que, en cualquier caso y hasta el momento, no son equivalentes al EMAS.

Asimismo, la compra pública verde, objeto del artículo, no hace referencia tanto a la existencia de un sistema de gestión ambiental dentro de una organización, como a la reintroducción en el mercado de residuos procedentes del reciclado, valorización o preparación para la reutilización de los mismos, hecho que en ningún caso es objeto de valoración por parte de los procedimientos incluidos en el Reglamento EMAS, por lo que la citada solicitud tiene difícil encaje en este artículo.

Por otro lado, y en la misma disposición, se contempla la indicación en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas de contratación pública de los porcentajes de subproductos, materias primas secundarias, etc. que hayan de ser utilizados, con fijación de un porcentaje mínimo del 40% de utilización, salvo motivos técnicos justificados. Este Consejo desconoce las razones por las que se fija en un 40% el porcentaje de la utilización de los distintos materiales a indicar en las bases de contratación pública cuando la realidad es tan diversa, cuando el referenciar a un porcentaje fijo en el propio texto de la ley puede resultar poco realista y cuando podría aprovecharse el desarrollo reglamentario para un referenciación más ajustada a la casuística existente y adaptable a los avances tecnológicos.

Por cuestiones de técnica normativa se considera que el desarrollo en detalle de la compra pública verde deberá ser objeto de una regulación reglamentaria posterior. Efectivamente en dichas órdenes o reglamentos se podrá ajustar dicho porcentaje a la casuística existente, sin embargo, se ha entendido necesario fijar con carácter de Ley un ambicioso suelo mínimo del 40% que, además, reconociendo la diversa casuística que pueda darse, podrá verse reducido por motivos debidamente justificados.

Artículo 87.- Voluntariado ambiental

Proponemos precisar que las actuaciones que la administración se compromete a promover en el ámbito del voluntariado para la realización de actividades de interés general en favor de la protección y mejora del medio ambiente se ciñan a aquellas definidas por la normativa específica de esta figura.

Art. 87.1: Las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco promoverán, en el ámbito de sus competencias, la participación de la ciudadanía en acciones de voluntariado para la realización de actividades de interés general en favor de la protección y mejora del medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/1998, de 25 de junio, de voluntariado y el resto de normativa de aplicación, ***siempre que estas acciones lo sean realmente de voluntariado en los términos señalados por su normativa específica.*** *A tal efecto, diseñarán programas para el desarrollo de actividades de conservación, por esta Ley.*

No puede acogerse la alegación ya que se sobreentiende que lo que se promueve realmente son acciones de voluntariado, máxime, si expresamente se indica que se están regulando estas acciones de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/1998, de 25 de junio, de voluntariado y el resto de normativa de aplicación.

Artículo 89.- Entidades de colaboración ambiental y Artículo 92.- Ejercicio de la actividad de inspección ambiental

Estimamos necesario:

- *Solventar la heterogeneidad terminológica empleada en la Exposición de Motivos y el articulado del Título Séptimo "Inspección Medioambiental" respecto del desempeño de las diferentes actuaciones de verificación, validación, control e inspección, estableciendo con nitidez el ámbito de intervención de las Entidades de Colaboración Ambiental (ECA), por un lado, y de las administraciones públicas a través de sus funcionarios, por otro.*

Se modifica la exposición de motivos aclarando, como solicita el CES, que la vigilancia e inspección ambiental podrán realizarse bien directamente por el personal al servicio de las AAPP o, a instancia y en nombre de aquéllas, por entidades de colaboración ambiental.

- *Una clara delimitación de las labores que en el ámbito de la inspección ambiental entrañan el ejercicio de potestades públicas o que, tal como reza el art. 92.1, presentan "otras circunstancias" de las que no lo entrañan, y que determinan la exclusión de su realización por entidades de colaboración ambiental y la reserva de su ejecución directa por parte del personal al servicio de las administraciones públicas.*

El apartado 2 del art. 89 ya determina cuáles son las funciones que pueden desarrollar las ECAS. Se incluyen la validación documental, la verificación in situ del cumplimiento de los requisitos establecidos en autorizaciones y normas ambientales y toma de muestras. Todas estas actuaciones están claramente delimitadas y podrán realizarse por parte de las ECAS.

Tal y como se ha indicado en las respuestas a las alegaciones recibidas, es preciso disponer de este mecanismo que permita la colaboración de las entidades privadas en actuaciones que no están estrictamente reservadas a funcionarios públicos por entrañar el ejercicio de potestades públicas, siempre bajo la tutela de la AAPP y tras el preceptivo procedimiento de contratación. A modo de ejemplo, una actuación que no podría ser realizada por parte de una entidad acreditada sería la toma de medidas cautelarísimas prevista en el art. 32 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las AAPP de la CAPV.

- *La garantía de que las actuaciones de las Entidades de Colaboración Ambiental y de las del personal de las administraciones públicas no produzca un solapamiento de actividades desempeñadas por unas y por otras.*

Toda vez que las actuaciones de las ECAS en esta materia son solicitadas por parte de las AAPP para supuestos en los que no pueden abordarlas con medios propios, es poco probable que se produzcan los solapamientos que se mencionan en el dictamen del CES.

Artículo 93. Acta e informe de inspección ambiental

El plazo de dos meses estipulado para la notificación del informe de visita de inspección al titular de la actividad ha de entenderse como un máximo y así indicarse en la norma.

Art. 93.4: El informe de la visita de inspección se notificará al titular de la actividad en el plazo ***máximo*** *de dos meses a partir de la fecha en que tenga lugar la visita.*

Entendemos que la norma es clara en este sentido y que cuando señala el plazo de dos meses para la notificación no hay margen de duda en relación a que se trata del plazo máximo.

Artículo 103.- Infracciones y sanciones.

En la disposición general sobre infracciones y sanciones observamos la ausencia de referencia al sujeto autor o autora de tales infracciones. Por razones de seguridad jurídica consideramos necesario que la norma contenga una definición del sujeto responsable de las infracciones, por lo que sería conveniente traer a este punto del anteproyecto lo que a este respecto establece la normativa básica.
Indicar que, además de la normativa básica estatal en la materia, en Euskadi existe una Ley General vasca de potestad sancionadora, la Ley 2/1998, de 20 de febrero, que debe ser aplicada por todos los entes que ejerzan su potestad sancionadora en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En dicha norma, artículos 8 a 10, se regulan las personas responsables, la autoría y la determinación de los responsables de los ilícitos administrativos, con lo cual entendemos que no resulta procedente incorporar en una ley sectorial ambiental todos aquellos aspectos que están ya regulados con carácter general por una Ley específica que regula dicha materia sancionadora.

Artículo 104.- Tipificación de infracciones

Observamos que el inicio de la ejecución de un proyecto sin haber obtenido la preceptiva licencia ambiental queda contemplado en el anteproyecto como constitutivo de una infracción muy grave. Sorprende a este Consejo, sin embargo, que el plus de gravedad que dicha actuación reviste cuando de la misma se han derivado daños para el medio ambiente y se ha puesto en peligro la seguridad de las personas, su salud o sus bienes, no haya quedado expresamente plasmado en el anteproyecto con el añadido reproche jurídico que correspondería.

Atendiendo a varias alegaciones presentadas en la fase de información pública, se ha dado una nueva redacción al artículo 102 inicial (actual 104). En dicho nuevo artículo se tipifican las infracciones, procurando darles un carácter más objetivo, en tres categorías (muy graves, graves y leves) y se traslada al ámbito de la graduación de las

sanciones (art. 107) los aspectos mencionados por el CES como pudieran ser, entre otros, los daños o los riesgos causados.

En el caso de las dos únicas infracciones consideradas como muy graves en el ALAAE, indicar que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en su art. 55.2, indica con carácter básico que es una: *"infracción muy grave el inicio de la ejecución de un proyecto (…) sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental",* motivo este que meritaría su inclusión en esta categoría. La restante infracción muy grave viene determinada por la realización de incumplimientos palmarios de las obligaciones legales básicas (por ejemplo, construir o explotar una instalación IPPC sin disponer de su correspondiente AAI) en relación, recordemos, a las instalaciones con un mayor potencial contaminador como son las instalaciones IPPC.

2.6. Informe de la Oficina de Control Económico (OCE) del Departamento de Hacienda y Economía

Con fecha 7 de marzo de 2019 se solicita control interventor económico-normativo de la Oficina de Control Económico (OCE) del Departamento de Hacienda y Economía, de conformidad con el artículo 25.1 del Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Con fecha 14 de mayo de 2019 se recibe el citado informe de la OCE para su incorporación al expediente tramitado.

A pesar de que en su día la Dirección impulsora de la norma ya solicitó y fue emitido informe de la Dirección de Administración Tributaria, la OCE ha vuelto a requerir un segundo informe a dicha instancia tributaria, el cual ha sido emitido con fecha 6 de mayo de 2019, que se incorpora al expediente remitido por dicha Oficina.

Asimismo, la OCE ha recabado también informe de la Dirección de Función Pública, a pesar de que en su día ya informó favorablemente a la propuesta, si bien dicho órgano se ha remitido a posteriores procedimientos, que en su caso se tramiten, para emitir un nuevo posicionamiento.

Por otro lado, se indica que se ha solicitado Informe de la Dirección de Presupuestos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, y artículo 27.4 del DL 2/2017, de 19 de octubre, el cual se ha emitido por dicha Dirección con fecha 2 de abril de 2019 (dicho informe se ha incorporado al expediente del proyecto en Tramitagune).

Se procede de seguido a responder a los aspectos subrayados en dicho documento, siguiendo el esquema del propio texto.

II.2.1. INCIDENCIA ORGANIZATIVA

En relación a la incidencia organizativa, merece atención la observación de la OCE cuando menciona que

El anteproyecto prevé la existencia de varios registros (registro de entidades de colaboración ambiental, registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental, registro de personas infractoras de normas ambientales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que, si bien los mencionados registros necesitarán de reglamentación posterior (momento en que habrán de concretarse en

todo caso los medios materiales y personales con los que se atenderá su implementación) señalar que en la memoria del proyecto no se hace previsión, siquiera estimativa, del coste que pudiera conllevar su implantación para el departamento gestor, tanto en recursos iniciales como en su funcionamiento y mantenimiento anual.

Sobre el particular indicar que, tal y como expone la propia OCE, la memoria inicial del proyecto no ha bajado al detalle de estimar el coste de la implantación, funcionamiento y mantenimiento anual de aquellos registros que precisen para su implementación de un desarrollo reglamentario posterior. Será en dicho futuro expediente de elaboración normativo, concretamente en su memoria económica y justificativa, cuando se deba realizar el conveniente y más preciso análisis de los costes derivados de su puesta en funcionamiento.

II.2.2. INCIDENCIA EN LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS

En relación a la incidencia en los estados presupuestarios de gastos el informe refiere que

Del análisis del expediente remitido, se desprende potencial incidencia presupuestaria, en los estados de gasto de esta Administración, de la aplicación de determinadas medidas en la ley propuesta.

(…)

Como apreciación general sobre los contenidos de la memoria económica remitida apuntar que, en opinión de esta Oficina, la memoria económica remitida, si bien se extiende (a veces de manera reiterada) sobre aquellos aspectos que pudieran generar un mayor gasto (particularmente los gastos de personal), no entra -con las excepciones que citaremos más adelante- en detalle suficiente cuando se trata de valorar cuantitativamente todos los costos adicionales esperados en cada concepto susceptible de generar una variación en el actual nivel de créditos presupuestarios, que, por otro lado, no son convenientemente identificados en todos los casos.

En la citada memoria, figura un apartado [a.2.2.4] donde se analizan las novedades del actual proyecto con transcendencia económica, aunque no realiza un contraste, en términos cuantitativos, entre los gastos derivados de las diferentes medidas y actuaciones reguladas en la ley propuesta y aquellos otros gastos en los que ya viniera incurriendo esta administración en cumplimiento de la normativa vigente hasta el momento, lo que dificulta una apreciación adecuada del alcance real de la incidencia económica de la nueva norma en su presupuesto de gastos.

La memoria económica, en lo que al apartado a.2.2.4. sobre novedades con trascendencia económica se refiere, inicia su exposición señalando que “el Anteproyecto incorpora una serie de nuevos derechos y obligaciones que afectarán a los agentes implicados”, esto es, no solo describe las novedades que puedan tener trascendencia económica para la administración pública, sino también para los distintos agentes que puedan estar en el ámbito de aplicación del Anteproyecto de Ley que podrán beneficiarse de las reducciones de plazos en sus tramitaciones, con el consiguiente beneficio económico que se deriva de las situaciones y circunstancias concretas de cada uno de los posibles interesados en los procedimientos (tiempo ahorrado de personal en función del convenio regulador que resulte de aplicación, situaciones de financiación dispares y su implicación durante las fases de los distintos procedimientos administrativos que recoge el anteproyecto, atractivo inversor en determinados sectores, etc.), por lo que no pueden ser previsibles en su conjunto más

allá de la afirmación que del anteproyecto se deduce un beneficio económico para los mismos.

Respecto a las novedades incluidas que dependen propiamente de la administración, se procede a modificar la memoria económica en el apartado a.2.2.4. (a través de una adenda), con referencia explícita al nuevo sistema de tramitación electrónica de INGURUNET, previéndose para el mismo, en función de lo solicitado por el informe de la OCE, no solo las necesidades derivadas del personal para el correcto funcionamiento del mismo, sino que además se detallan las inversiones acometidas y se realiza una previsión de la dotación económica necesaria para asegurar la mejora continua del mismo, relacionándolo, además, con las previsiones que realiza este órgano sobre la eliminación del sistema IKS-eeM y la afección presupuestaria en su conjunto.

Destacaremos, siguiendo a la memoria, los siguientes aspectos, por su potencial afección al presupuesto de gastos de la administración proponente:

1. En cuanto a necesidades de personal,

No se identifican, en cualquier caso, las partidas presupuestarias concretas de financiación del coste de personal que se estima necesario en la memoria, la periodificación del costo (en particular en su afección al ejercicio 2019), reflejándose únicamente el importe global del presupuesto del capítulo I del programa 4421 en el servicio 11 (Dirección de Administración Ambiental) que en los presupuestos generales de la CAE para el ejercicio 2018 consignaban un crédito inicial de 4.271.343,-€.

En este sentido, se debe apuntar que, si bien se refleja el importe total del capítulo I del programa 4421 en el servicio 11, se ha hecho una estimación de las necesidades de personal con un desglose económico específico para cada una de ellas. Como se recoge en el párrafo anterior, habida cuenta que para la materialización de las mismas es necesario contar con el pronunciamiento favorable tanto de la Dirección de Función Pública como de la Dirección de Presupuestos, resulta imposible determinar la periodificación de los mismos, ya que no se puede adelantar a fecha actual ni el pronunciamiento de los citados órganos ni las circunstancias específicas de cada momento que sirvan de base para los citados pronunciamientos.

En relación a las nuevas plazas estimadas como necesarias, el informe indica que:

Sea como fuere, nos remitiremos aquí a lo expresado por el Informe de la Dirección de Función Pública, donde ya se recuerda que la creación de nuevos puestos debe autorizarse por el Consejo de Gobierno siempre que se cuente con consignación presupuestaria necesaria y previo informe favorable de esta Dirección de Función Pública. En este informe se analizarán las nuevas necesidades generadas por la Ley y la posibilidad de cubrirlas, inicialmente, con personal que se encuentre prestando servicios en esta Administración…// Una vez se verifique la necesidad de crear nuevos puestos, la Ley 6/89 de 6 de julio de la función pública vasca concreta que las relaciones de puestos son el instrumento mediante el cual las Administraciones

públicas racionalizan y ordenan sus estructuras internas, determinan sus necesidades de personal…".

Efectivamente y de igual forma, la Dirección impulsora de la norma se remite a lo indicado, por dos veces, por la Dirección de Función Pública. En el momento procesal oportuno se determinará como han de cubrirse las necesidades de personal generadas por la entrada en vigor de la nueva Ley.

2. En relación con los gastos de funcionamiento ordinario,

En el ap.2.3.1.8 se menciona el "nuevo gasto en relación al mantenimiento de Ingurunet, si bien la partida antes dedicada al mantenimiento del sistema IKSeeM será dedicada al mantenimiento del sistema INGURUNET", de lo que cabría también deducir que no se generaría más gasto ordinario (capítulo II) por el mantenimiento de esta nueva plataforma. De hecho, la memoria espera [ap.2.4.2] que la partida 05.4421.11.23880.001 de la DAA vaya reduciéndose paulatinamente en la medida en que el sistema IKS-eeM sea sustituido por INGURUNET, mientras que "en la partida de la DPNCC referente al mantenimiento de equipos y sistemas para el proceso de información, se deberá destinar una nueva partida (05.4421.12.22500) para el servicio de mantenimiento (externo) de INGURUNET" aunque tampoco se estima aquí, cuantitativamente, dicho ahorro diferencial.

Se ha procedido a completar el apartado 2.3.1.8. de la memoria económica respecto a las inversiones ya acometidas para el diseño y la puesta en marcha del sistema INGURUNET y se realiza una previsión de los gastos de funcionamiento previsibles del mismo; además, se relaciona lo expuesto con la desaparición progresiva del sistema IKS-eeM y la cuantía económica adscrita a este sistema.

3. También parecen asociarse gastos por inversiones ligados a las nuevas necesidades de personal, en concepto de mobiliario y de equipamiento informático *que según indica la memoria [ap.2.3.2] "no se consideran significativos", aunque se ignora la razón de tal consideración, pues dicho aspecto habría de ser, en todo caso, tratado en la memoria económica, así como cuantificado [independientemente de la apreciación sobre la importancia de su montante] e identificadas sus fuentes presupuestarias de financiación, aun y cuando no se espere incurrir de forma inmediata en tal coste, tal y como parece deducirse del ap.2.4.2 de la misma memoria cuando matiza que "en el momento en el que se concreten las dotaciones y en caso de justificarse necesidades de nuevos activos, se deberá contemplar el importe de las mismas en la partida presupuestaria habilitada para las inversiones".*

En este sentido, reiterar que los gastos asociados a las necesidades del nuevo personal (mobiliario y equipos informáticos) habrán de aquilatarse en el momento en el que el solicitado aumento de plantilla sea informado favorablemente por la Dirección de Función Pública.

Si se prevé [ap.2.4.1], gasto para el desarrollo del programa INGURUNET en las partidas de inversiones reales (Capítulo VI), apartado aplicaciones informáticas, por importe de 538.899,-€, cuya financiación se prevé con cargo a la partida 05.4421.11.632.01.001 para "Proyecto teletramitación. Administración Ambiental. Crédito de compromiso 2019: 0,20 M", de los presupuestos generales de la CAE del ejercicio 2018 prorrogados para 2019. Ha de recordarse en todo caso la necesidad de contar con crédito adecuado y suficiente en el momento de su efectiva materialización tras haberse seguido el procedimiento adecuado a la naturaleza de dicho gasto.

Como se ha indicado anteriormente, se ha procedido a completar la memoria económica respecto a la inversión ya acometida para el diseño y la puesta en marcha del sistema INGURUNET y se realiza una previsión de los gastos de funcionamiento previsibles del mismo.

***4.** Nos detendremos también en las previsiones de **fomento** que, en materia de medio ambiente, pueda encerrar la norma propuesta. Así, entre las medidas para fomentar la participación en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales (EMAS), por parte de las administraciones públicas, se recoge la de [art.80.2.b)] Apoyar a las pequeñas y medianas organizaciones, así como la de promover [art.80.4] "la utilización de otros sistemas de gestión ambiental como medio para posibilitar la adhesión al sistema EMAS". A falta de mayor concreción sobre los organismos promotores de tales medidas –las administraciones públicas- se echa en falta en la memoria del proyecto alguna mención de las que pudieran estar barajándose por parte de esta administración, así como una estimación de plazos y costos derivados de la implantación de tales medidas.*

Con la indicación apoyar y promover recogida en el texto legal se dota de un sentido lo más amplio posible al término. Puede tratarse de cualquier tipo de medida clásica de fomento, como honorífica, de bonificación fiscal, etc., es por ello que no se han mencionado específicamente en la memoria porque no se entiende que exista un númerus clausus de tales medidas y, por lo tanto, los plazos y costos de su implantación son impredecibles.

*Cabe citar también el mandato de **promoción de la participación de la ciudadanía en acciones de voluntariado**, a que se refiere el artículo 87.1, en la medida en que se prevean acciones diferentes o adicionales a las incluidas en los programas de fomento que esta administración ya mantiene en la actualidad. En cualquier caso cabría plantearse la virtualidad de la previsión del artículo 87.2 cuando demanda de las administraciones públicas el desarrollo de las actuaciones de fomento previstas en la Ley 17/1998, de 25 de junio del voluntariado (citando especialmente algunas de ellas), en el entendimiento de que será esta última Ley la que ampare los instrumentos oportunos para el cumplimiento de sus propias previsiones.*

Se trata de una observación más que de una propuesta concreta de modificación o mejora del texto. Desde nuestro punto de vista, sí tiene virtualidad referenciar en la que vienen a ser llamada como normativa ambiental básica en Euskadi aquéllas de las medidas concretas que se entiende pueden ser especialmente relevantes para

fomentar y facilitar la acción de voluntariado ambiental; sin perjuicio de que, obviamente, no se trate de un númerus clausus.

Por otro lado, no se proporciona información ***sobre eventuales previsiones de creación de nuevas líneas subvencionales o replanteamiento de las existentes****. En lo que concierne a los créditos presupuestarios de los capítulos IV y VI del programa 4421 de protección de medio ambiente (que recogen las partidas de gasto en transferencias y subvenciones para gasto corriente y de capital, respectivamente), la memoria ha identificado las concretas partidas subvencionales recogidas en dichos capítulos, aunque no se establece conexión ni previsiones de variación de las mismas por incidencia de las diferentes medidas previstas en la ley propuesta, en cuanto que se prevea alteren también tal presupuesto vigente.*

No existen, en este momento, previsiones de creación de nuevas líneas subvencionales o replanteamiento de las existentes. En cualquier caso y a futuro, se atenderán las indicaciones que realiza la OCE sobre la necesidad de planificación estratégica previa y la regulación de las bases de las futuribles nuevas líneas subvencionales y todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones

5. *La memoria económica identifica también determinados* ***objetivos, acciones e indicadores*** *del programa 4421 que estarían relacionados directa o indirectamente con el anteproyecto y que requerirían ser modificados, recomendando al efecto la introducción de variaciones en los indicadores de medición de tales objetivos, aunque no asocia magnitudes concretas a los mismos.*

En cuanto a los indicadores que se proponen, se observa que muchos de ellos se limitan a medir un número de actuaciones por parte de la administración ambiental (nº de: expedientes gestionados, expedientes tramitados, reuniones del CMA y el OCRU, entidades inscritas en el Registro…), no tanto a los resultados esperados de la aplicación de las medidas previstas en la materia afectada, que midan los efectos de las mismas –aquellos que se correspondan con los objetivos finalmente perseguidos- y no se detengan únicamente en el nº de tareas, trámites o actuaciones administrativas. En este sentido, esta Oficina ya viene recordando en sus informes la necesidad de consignar parámetros indicadores que, sin limitarse a computar un número determinado de actuaciones, vayan más allá atendiendo al sector al que se dirigen y que permitan efectuar atinadamente la evaluación de su grado de eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos perseguidos.

Se acoge la observación y será tomada consideración para mejorar los indicadores citados en el momento que procedimental oportuno.

Para terminar en este apartado sobre la incidencia del proyecto en el presupuesto de gastos de esta administración, procede traer a colación el Informe de la Dirección de Presupuestos de 2 de abril de 2019 (que se incorpora al expediente como anexo al presente Informe, y cuyas consideraciones nos remitimos, en todo caso), y que en referencia a las nuevas necesidades de gastos concluye que "La valoración del

aumento de puestos de trabajo y su correspondiente coste económico, debería referirse exclusivamente a las necesidades derivadas de las nuevas funciones incluidas en el anteproyecto de ley", así como que "En cuanto a los mayores recursos requeridos deberán tener encaje presupuestario, con las oportunas reasignaciones a partir del ejercicio en el que esté prevista su necesidad".

La Dirección proponente estará a lo que en su momento determine la Dirección de Función Pública en relación a la valoración de las necesidades de nuevos puestos de trabajo.

II.2.3. INCIDENCIA EN LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS

La memoria económica remitida identifica en su apartado 2.3.3. Ingresos por operaciones corrientes las previsiones de la ley relativas a la posibilidad de creación de tasas, tributos u otros instrumentos fiscales, y al establecimiento de reducciones, bonificaciones o exenciones, en relación con las actividades que atiendan a los objetivos de la ley, si bien concluye que "El anteproyecto de Ley no detalla los criterios ni la cuantificación de dichos potenciales ingresos, sino que determina el marco normativo para su posterior determinación legal". Tampoco cuantifica la incidencia en los estados de ingresos que pudiera derivarse de las variaciones en el régimen sancionador recogido en la norma propuesta, aún y cuando en el análisis de las novedades normativas que se hace en el apartado 2.2.3 de la memoria se destaca un "Aumento de las infracciones tipificadas como muy graves".

No se realiza, pues, previsión cuantitativa, siquiera estimativa, de los ingresos presupuestarios que se espera recaudar a futuro de la implantación de las medidas previstas en esta nueva norma (incluyendo las posibles reducciones por implementación de medidas fiscales como exenciones y bonificaciones), por diferencia, aquí también, sobre los niveles de ingresos que ya vinieran recaudándose en la actualidad en las áreas concernidas por la misma (ingresos derivados tasas en materia de medio ambiente, sanciones, multas coercitivas). Así pues, no se identifican las partidas de imputación de tales ingresos en la actualidad, ni las variaciones que se prevean para futuros escenarios presupuestarios.

Se recomienda completar la memoria en tal sentido.

Atendiendo a las indicaciones de la OCE, se procede a completar el apartado 2.3.3 de la memoria económica en este sentido, realizando una previsión de ingresos vinculados al ejercicio de competencias del órgano ambiental.

II.2.3. OTROS ASPECTOS HACENDÍSTICOS

1. *En primer lugar, y en materia de* ***régimen presupuestario****, hemos de referirnos a lo previsto en el artículo 85 sobre fiscalidad ambiental (…)*

Por su parte, el artículo 118 del proyecto, en la misma línea del artículo 85.2, dispone que "La recaudación obtenida por parte de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco por las sanciones que se impongan tendrá un carácter

finalista destinándose exclusivamente a la realización de los fines previstos en esta Ley y, a tal efecto, se integrará en la partida presupuestaria definida en la presente Ley" (aunque tal previsión no resulta novedosa respecto a lo ya dispuesto en el artículo 102.6 de la vigente Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco).

Se observa, en primer lugar, que las referencias subrayadas sobre el carácter finalista de los ingresos vienen referidos a la Administración de la CAE y no a los que puedan fijar otras Administraciones Públicas Vascas.

En este sentido, indicar que, efectivamente, el órgano promotor estimó las observaciones planteadas en el informe inicial de DAT corrigiendo la generalización del carácter finalista de la recaudación obtenida por los tributos ambientales, reduciéndose a la esfera de la Administración general de la CAPV.

En lo que afecta a esta Administración, ***advertir que lo preceptuado en ambos artículos art.85 (párrafos 2 y 3) y art.118, constituye una salvedad al principio presupuestario de no afectación de ingresos a gastos (supone una quiebra al principio general del régimen presupuestario mediante el que el total de los ingresos obtenidos financian el total de los gastos previstos), recogido en el artículo 41 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco*** *(Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre),* ***por lo que habría de ser la normativa específica que regule, en su día, el régimen de cada uno de los ingresos de que se trate, la que previera, en su caso, la excepción al principio mencionado.***

Ese artículo 41, recoge tal principio general que rige para la Hacienda General del País Vasco en términos equivalentes a otras Haciendas Públicas ***estableciendo que los ingresos se destinarán a financiar el conjunto de las obligaciones de la entidad que sea titular del mismo****. Así, aun cuando el propio artículo 41 prevé su eventual excepción lo hace en los términos "la normativa específica de cada ingreso – establezca otra cosa" y que, "cuando se trate de ingresos derivados de liberalidades destinadas a fines determinados, no se requerirá la disposición expresa de afectación siempre que aquéllas sean aceptadas conforme a la normativa en cada momento vigente" (artículo 41.2 de la LPOHGPV).*

Se recuerda, en cualquier caso, que ***el establecimiento de tasas, tributos u otros instrumentos fiscales se trata de materia reservada a Ley*** *y, que, según se recoge en el Informe de la Dirección de Administración Tributaria, el establecimiento de su eventual carácter finalista para un concreto tributo, habría de contar al menos con el consenso del Departamento competente en materia de Hacienda.*

Así pues, por nuestra parte acerca de las previsiones referidas a la vinculación finalista de estos ingresos tributarios entendemos que, más allá de las consideraciones hechas por la DAT, insoslayables en cuanto al rango normativo legal de la medida con la que abordarlas, no existe fundamentación suficiente que permita juzgar la razonabilidad de implantar el mecanismo finalista que se

pretende para tales recursos evitando el principio general de financiación global de la Hacienda Pública, por lo que esta Oficina de Control Económico ha de mostrar su parecer disconforme a un tratamiento singular de la financiación con recursos públicos de un ámbito concreto de la actividad pública.

En relación a estas observaciones, se debe señalar la premisa de partida del informe de la OCE recabado cuando menciona expresamente el tenor literal del articulado del Decreto Legislativo 1/1997, para subrayar y poner especial énfasis en lo establecido en su artículo 41:

> "Artículo 41.– Destino.
>
> 1**.– Salvo que otra cosa se establezca en la normativa específica de cada ingreso,** su producto se destinará a financiar el conjunto de las obligaciones de la entidad que sea titular del mismo.
>
> 2.– Cuando se trate de ingresos derivados de liberalidades destinadas a fines determinados, no se requerirá disposición expresa de afectación siempre que aquéllas sean aceptadas conforme a la normativa en cada momento vigente."

Por tanto, y si bien el Anteproyecto de Administración Ambiental no pretende establecer concretamente tributos de ningún tipo, sí establece determinadas características básicas de lo que el órgano ambiental entiende que debiera ser la denominada "fiscalidad ecológica", que, por otra parte, no ha sido implantada en la CAPV, por lo que se considera el momento actual como el más pertinente y el anteproyecto como el vehículo más adecuado para la definición propuesta.

Por tanto, y la vista de lo recogido en el informe, se deduce que, en ningún caso lo propuesto en el artículo 85 sea contrario a ninguna disposición del ordenamiento jurídico vigente, es más, el ordenamiento reconoce expresamente esta posibilidad cuando indica expresamente en su propio texto la posibilidad de excepción **(salvo que otra cosa se establezca en la normativa específica de cada ingreso)**, siempre que se articule mediante las disposiciones adecuadas y en consenso con los departamento competentes.

La opinión de la OCE en este sentido versa sobre tres cuestiones:

- La necesidad de, en el futuro, la regulación propia de cada tributo al amparo de la "fiscalidad ecológica" se realiza mediante disposiciones con rango de Ley, hecho que convenientemente será observado y que encaja perfectamente con el tenor del artículo 85 del anteproyecto.

- La necesidad de respeto de la competencia para el establecimiento de tributos del Departamento de Hacienda, que, como no puede ser de otra manera, la colaboración del citado Departamento será ineludible en la definición de las características concretas del tributo y su encaje con la normativa autonómica en materia tributaria y fiscal.

- Por último, el informe cuestiona el carácter finalista de los tributos que pudieran gravar hechos imponibles con contenido ambiental, por erigirse, según el tenor literal del artículo 85, como excepción al principio general por el que "los ingresos se destinarán a financiar el conjunto de las obligaciones". A este respecto se debe considerar que:

El derecho ambiental se asienta en una serie de principios legalmente definidos y socialmente aceptados, ubicándose entre los mismos un principio de carácter esencial para entender el propio concepto de derecho ambiental como es el principio de "quien contamina paga". Pues bien, lo que resulta indiscutible en este sentido es que el establecimiento de tributos al amparo de la "fiscalidad ecológica", cuyo objeto no es en sí mismo la recaudación (especialmente cuando el hecho imponible a gravar son actuaciones que suponen un claro impacto ambiental), es el mejor ejemplo de la materialización del citado principio.

Esta clara manifestación del principio "quien contamina paga" respecto de posibles figuras tributarias que graven la contaminación tiene un carácter eminentemente preventivo de forma que aquellos operadores que estén vinculados al hecho imponible y opten por una forma de gestión con impactos ambientales más significativos en el entorno deben saber que pagaran más frente a quién apueste por otras alternativas con menor coste ambiental. Por tanto, desde esta perspectiva, el espíritu del contenido del artículo 85 del anteproyecto no es la creación de nueva fuente de ingresos públicos con fines genéricamente fiscales per se, sino unos tributos finalistas encaminados a corresponsabilizar a los creadores de riesgos para el medio ambiente y la estimulación de actividades menos perturbadoras del mismo.

Un sistema tributario, y en su caso aquellos otros ingresos derivados del ejercicio de la actuación administrativa ambiental cuya finalidad primordial es tutelar el medio ambiente del territorio de la CAPV, se enmarca a la perfección en el mandato dirigido a los poderes públicos establecido en el artículo 45 de la Constitución Española, algo que resultaría de mayor dificultad en su comprensión si se sustrae el carácter finalista al mismo. Es decir, el fin último de los posibles ingresos debiera ser contribuir y compensar a la sociedad en su conjunto el coste que soporta por el ejercicio de determinados hechos con mayor incidencia ambiental y, al mismo tiempo, erigirse en beneficiarios de los ingresos obtenidos en el ejercicio de las actuaciones administrativas de los poderes públicos que han de velar por la protección de su derecho al disfrute de un medio ambiente adecuado y a frenar el deterioro del entorno natural, destinándose los ingresos a financiar medidas y programas de carácter medioambiental según los objetivos establecidos en el propio anteproyecto.

Se debe subrayar que, con carácter general, el establecimiento de tributos ambientales se erige como un aspecto fundamental en la protección del medio ambiente, ya que gravar, en su caso, el ejercicio de determinados aspectos de actividades con un alto poder de incidir, alterar o suponer un riesgo de deterioro del medio ambiente aportaría ingresos adicionales (sin ser el fin último de su establecimiento) y, al mismo tiempo, contribuiría a desincentivar actividades que puedan suponer un mayor coste en el futuro tanto para la administración como para la

ciudadanía en general en tareas adicionales a realizar en relación con la limpieza o descontaminación de entornos altamente antropizados derivados de hechos con fuerte impacto ambiental. Estos ingresos suplementarios podrían, asimismo, sustituir los recortes en el gasto. De hecho, cuesta obtener ejemplos claros en el sistema impositivo cuyo objetivo prioritario sea incidir en la reducción de comportamientos contaminantes o en el fomento de alternativas ambientalmente más adecuadas.

El objetivo último del establecimiento de un sistema de fiscalidad ecológica es promover que los titulares de actividades generadoras de riesgos asuman su responsabilidad a través del abono de un tributo finalista que pretende frenar aquellas otras cuya ejecución supone una incidencia en principio negativa sobre el medio ambiente y favorecer el mantenimiento y mejora del entorno ambiental, en cualquiera de sus formas, que pudiera resultar afectados por las citadas actividades con impacto.

Habida cuenta de lo expuesto, parece a todas luces no solo lógico, sino también conveniente, que todas las actuaciones de naturaleza administrativa e índole ambiental que supongan un ingreso a la administración tengan carácter finalista, y sean destinadas en exclusiva a las medidas encaminadas a hacer efectiva las políticas ambientales mediante la consecución de los fines establecidos en el propio anteproyecto con el fin de alcanzar los objetivos, entre otros, de prevención, reutilización, reciclado y valorización de alta calidad, sensibilización, educación y formación, mejora de los sistemas productivos en la CAPV o el mantenimiento y mejora del medio ambiente en cualquiera de sus variables.

En conclusión, los instrumentos de política ambiental de tipo económico (fiscalidad ambiental, fijación de tasas, ejercicio de potestad sancionadora, etc.) consisten penalizar o premiar a los agentes económicos según su comportamiento ambiental. El ejemplo más claro es la fiscalidad ambiental o ecológica, que se puede definir como la utilización del sistema fiscal como medio para incentivar cambios de comportamiento que se consideran positivos desde el punto de vista ambiental. Bajo dicho enfoque, el objetivo principal de la imposición ambiental no es por tanto recaudar, sino cambiar conductas, siendo la recaudación y su destino cuestiones secundarias que debieran ser dedicadas de forma prioritaria a resolver los problemas ambientales que pudieran dar lugar al impuesto o a la actuación administrativa en cuestión. Observadas estas premisas, el carácter finalista de lo expuesto establecido en el artículo 85 debe erigirse como excepción al principio general invocado por la OCE (que no vulneración del ordenamiento jurídico) se considera perfectamente argumentada.

Por su reciente aprobación, merece la pena traer a colación como colofón a este apartado los dictados de Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. Comunidad Foral de Navarra, «BON» núm. 120, de 22 de junio de 2016 «BOE» núm. 157, de 29 de junio de 2018. Dicha norma dispone sin ambages que, el impuesto que se crea sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos (Artículo 31) “es un tributo indirecto, de naturaleza real y de carácter extrafiscal que grava la eliminación en vertedero y la incineración de los residuos en instalaciones situadas en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra (…) Su finalidad es

fomentar la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos, así como desincentivar la eliminación en vertedero y la incineración.

En cuanto a su afectación (art.31) se expone que los ingresos procedentes del impuesto integrarán una partida presupuestaria con afectación específica, en los Presupuestos Generales de Navarra del año siguiente, denominada «Fondo de Residuos». La recaudación del impuesto se destinará exclusivamente a la realización de los fines previstos en esta ley foral.

Asimismo, su art. 73, relativo a la afectación de las sanciones en materia de residuos indica, textualmente, que: "con independencia del procedimiento sancionador tramitado, las sanciones de multa por la comisión de infracciones en materia de residuos impuestas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, se integrarán en la partida de los Presupuestos Generales de Navarra denominada «Fondo de Residuos».

En relación a este fondo, son de gran interés losa artículos 42 y 43, que manifiestan meridianamente que se trata de un fondo que se nutre de ingresos públicos que deben ser destinados a financiar medidas que tengan por objeto mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la generación y gestión de residuos; y que el destino de la partida presupuestaria «Fondo de residuos» se distribuirá anualmente por el departamento con competencias en materia de medio ambiente, previa consulta al Ente Público de Residuos de Navarra, de acuerdo con el criterio de priorización de los escalones superiores de la jerarquía de residuos, el cumplimiento de los objetivos, urgencia ambiental (…).

Como se puede observar, los postulados del ALAAE coinciden con las tendencias normativas de las regiones más avanzadas de nuestro entorno; por lo cual, habiendo estas salvado todos los parámetros de legalidad, la Dirección proponente mantiene la apuesta por su mantenimiento desde el convencimiento de su utilidad para la salvaguarda del interés general y de ajuste a la normativa general de aplicación.

A esta misma conclusión llega la Dirección de Presupuestos *a la que se ha remitido el anteproyecto para recabar su opinión acerca de las afecciones derivadas del anteproyecto, señalando en su Informe de fecha 2 de abril de 2019: "****Esta Dirección de Presupuestos entiende que debe ser eliminado del texto del anteproyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi toda vinculación entre ingresos y gastos del presupuesto referida en los artículos 85 y 118".***

En la misma línea anterior, ***se propone también la supresión de la prevención contenida en el párrafo 3 del artículo 85, pues no parece ser objeto de la ley propuesta establecer el modo en que se materializarán en los presupuestos de la CAE*** *las mencionadas medidas, siendo la mecánica de presupuestación una disciplina que atiende a sus propias reglas en el marco del régimen presupuestario vigente en cada momento.*

La propuesta realizada, desde nuestro punto de vista, en ningún momento es obstáculo, ni pretende regular con carácter general el modo en que se materializarán

en los presupuestos de la CAE, ya que en ningún caso se modifica el sistema de distribución de los mismos, respetando escrupulosamente la mecánica de presupuestación y las reglas que la misma ha de observar en cada momento, siendo la partida presupuestaria propuesta en el artículo 85 perfectamente compatible con el citado sistema, habida cuenta de la dedicación finalista de la misma a la protección del medio ambiente, mandato que las administraciones públicas deben atender y que redunda, con carácter general, en la sociedad en su conjunto, dedicando los ingresos obtenidos a velar de forma efectiva por el acceso al derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

En este punto, indicar que no procede atender las observaciones realizadas por la OCE. Es un objetivo, una apuesta clara, específica y concreta del anteproyecto de Ley, que los ingresos recaudados tengan un carácter totalmente finalista y que se destinen íntegra y exclusivamente a la realización de los objetivos medioambientales previstos en el texto. La apuesta de la Viceconsejería de Medio Ambiente debe mantenerse salvo que se indique y justifique que es palmariamente contraria al ordenamiento jurídico.

En este punto recordar que la vigente Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, en su apartado 102.6, ya prevé que los fondos económicos obtenidos por sanciones impuestas deban destinarse íntegramente a medidas dirigidas a la mejora del medio ambiente, no habiéndose determinado hasta la fecha, salvo error u omisión, la falta de acomodo al ordenamiento jurídico de esta norma.

***2.** Sobre las posibles afecciones de la norma presupuestaria **al régimen tributario** vigente, además de lo señalado en el punto anterior, nos remitiremos a lo ya expresado en el Informe de la Dirección de Administración Tributaria, de 5 de septiembre de 2018, relativo al presente proyecto, así como al segundo Informe de la misma Dirección, de 6 de mayo de 2019, en el que se analizan los cambios introducidos en la última versión del proyecto que afectan a las consideraciones de aquél primero (y que se incorpora como anexo del presente Informe).*

En los apartados anteriores de esta memoria se ha puesto de manifiesto el punto de vista de la Dirección impulsora de la norma. Se ha analizado el nuevo informe de 6 mayo de 2019, el cual realiza algunos comentarios en relación a los aspectos modificados y no modificados tras su informe inicial.

***3.** En lo que afecta al **régimen subvencional** vigente, el artículo 84.2 prevé que el departamento competente en materia de medio ambiente aprobará y actualizará periódicamente un listado de tecnologías cuyo uso <u>podrá</u> ser considerado como criterio preferente en la concesión de subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la mejora ambiental. Recordar aquí que el régimen de concesión de subvenciones se encuentra regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), cuya normativa de carácter básico habrá de respetarse en todo caso.*

Apuntar, desde esa óptica, que la posibilidad de utilización del mencionado catálogo como un instrumento para priorizar los proyectos que se presentan a un procedimiento

de concesión de subvenciones no obsta, ni resulta excluyente, en el planteamiento de la ley propuesta, para la utilización de cualquier otro criterio que, resultando adecuado al objeto pretendido por un programa subvencional, se incorpore a sus bases reguladoras en el marco de la citada ley subvencional. El precepto ha de considerarse, pues, desde el punto de vista del régimen subvencional vigente, más bien informativo de la existencia tal instrumento [cuya elaboración, aprobación y mantenimiento, por otro lado, si se presenta como obligatoria para el precitado departamento], como posibilidad y en la medida en que pueda resultar de utilidad a los objetivos previstos en un determinado programa subvencional.

Efectivamente, se trata de un artículo de carácter recordatorio o informativo. En aras a dejar manifiestamente claro este aspecto se ha procedido a modificar su tenor literal haciendo una referencia a la normativa sectorial (subvencional) que, en todo caso, le resulta de aplicación.

*En cuanto **a la prohibición [artículo 114] de obtener subvenciones por parte de las empresas que hayan sido sancionadas (…)**, recordar también que tal limitación encuentra su reflejo entre los requisitos exigidos a los beneficiarios de las ayudas en el artículo 13 LGS, cuyo apartado 2.h) veta el acceso a la condición de beneficiario a las personas o entidades en quienes concurra la circunstancia de "Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan".*

Aunque tal previsión no es nueva (también se recoge en el artículo 117 de la Ley 3/1998), se observa que únicamente se impone tal prohibición a las "Las empresas que hayan sido sancionadas….", no así personas o entidades de otra naturaleza, en la medida en que pudieran encontrarse también incursas en dichas sanciones, aunque nada se explica al respecto en la documentación obrante en el expediente.

Se acoge la observación realizada y se modifica el tenor literal del artículo para incorporar y hacerlo extensivo a todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas.

*Por su parte, el artículo 89.2 prevé que **las entidades de colaboración ambiental, a instancia de las administraciones públicas o cuando así se establezca normativamente, desarrollarán, entre otras funciones, las de tramitación de subvenciones**. Recordar, aquí también, que el régimen de las entidades colaboradoras en la gestión de programas subvencionales se encuentra regulado con carácter básico en la LGS, por lo que habrá de atenderse a tal normativa en la regulación que se haga en las bases de dichos programas.*

Se acoge la observación y se modifica el texto normativo para referenciar la normativa básica que les pueda resultar de aplicación, por ejemplo, en materia de subvenciones.

*Cabe, también, realizar alguna consideración sobre lo señalado en **el punto 2.7 de la memoria económica, intitulado "Ayudas y subvenciones"** que hace referencia a la posibilidad de establecer reducciones, bonificaciones o exenciones…[art.85.4] y*

señala que "dichas medidas deberán ser recogidas en el Plan estratégico de Subvenciones del Departamento…" ya que el precepto se refiere en realidad a medidas fiscales, que se sujetan a su propia normativa (así, son las normas que regulan cada tributo las que incorporan, en su caso, ese tipo de exenciones o bonificaciones, y no se materializan en un mayor gasto para la administración, sino en un menor ingreso), y hay que diferenciarlas de los programas subvencionales que, como ya se ha dicho, se sujetan a la normativa básica recogida en la Ley General de Subvenciones (y suponen en todo caso un gasto para la administración).

Es precisamente, dicha normativa básica subvencional, la que deja fuera del concepto de subvención los beneficios fiscales [(art. 2.4.g) de la LGS], por lo que a tales medidas fiscales no les afectan las previsiones de la LGS, ni han de ser recogidas en el plan estratégico de subvenciones, como demanda la memoria económica remitida, que habría de ser corregida en ese punto.

Se asume, que puede existir un error terminológico en la memoria económica en los términos expuestos por la OCE. En la presente memoria de tramitación se deja constancia del mismo no procediendo, desde nuestro punto de vista, modificar la memoria económica que está finalizada y rubricada en una fecha anterior sino realizar esta acotación en el presente documento.

***4.** El artículo 42.3 del anteproyecto prevé que "… el otorgamiento de las autorizaciones ambientales previstas en la presente Ley podrá supeditarse motivadamente por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, **al depósito de una fianza, aval o seguro que garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas o la reparación o minimización de los daños que pudieran ocasionarse por la actividad o instalación autorizada**. (…)*

*La posibilidad de exigir **fianzas u otras garantías** no es nueva en la normativa medioambiental vigente (art. 90 de la Ley 3/1998 de 27 de febrero). Recordaremos aquí que tal régimen de garantías a favor de la administración se encuentra recogido en el capítulo III del título I de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, (artículo 13 y ss.) (…).*

Se trata de una observación meramente expositiva que, a la postre, refuerza la tesis de la Dirección proponente de la norma favorable a la imposición motivada de fianzas cuando la potencialidad contaminadora de la actividad así lo requiera: actividades sujetas a autorización ambiental integrada (AAI) o autorización ambiental única (AAU).

***6.** El Anteproyecto establece en su artículo 4 que "Las actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta Ley podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, (…)". El precepto resulta impreciso en la determinación de las mencionadas actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta Ley. La memoria del proyecto no realiza mensuración alguna sobre las previsiones que la instancia proponente haya realizado en tal área, lo que hubiera sido deseable habida cuenta la trascendencia y relevancia que puede tener la opción expropiatoria.*

Efectivamente, se trata de un artículo abierto toda vez que no es factible realizar una acotación apriorística de todas y cada una de las actividades que, coadyuvando al logro de los objetivos de la norma ambiental, meriten ser declaradas de utilidad pública o interés social. Existe un antecedente en la propia Ley 3/1998, de 27 de febrero, de artículo también de corte abierto (infraestructuras de gestión medioambiental que afecten directamente a intereses generales de la Comunidad Autónoma) en relación a la consideración de algunas actividades como de interés general.

En cualquier caso, en ese tipo de procedimientos ***habrá de estarse a lo establecido en el régimen expropiatorio vigente****, y* ***tener en cuenta además****, en lo que respecta a esta Administración, lo dispuesto en del* ***Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskad****i, aprobado por Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, en particular lo preceptuado en su artículo 48 sobre adquisiciones por expropiación.*

Esta previsión está contemplada en el propio artículo 4 (in fine) cuando determina que, la declaración de utilidad pública y los efectos expropiatorios, entre otros, se encuadran en lo dispuesto por la normativa sectorial específica sobre la materia:

Artículo 4. Utilidad pública e interés social.

Las actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta Ley podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos, y en particular a los expropiatorios respecto de los bienes o derechos que pudieran resultar afectados, de conformidad todo ello con lo que establece la legislación en la materia.

II.2.4 INCIDENCIA ECONÓMICA EN OTRAS ADMINISTRACIONES, LOS PARTICULARES Y EN LA ECONOMÍA EN GENERAL.

El estudio de la incidencia económica que se pueda derivar de la aplicación de la ley propuesta para otras administraciones, así como para los particulares y la economía en general, y el impacto económico sobre el empleo, la renta y la producción, se ha recogido en los apartados 2.8, 2.9 y 2.10 de la memoria económica.

Sobre este apartado subrayar que la Dirección de la Administración General de la CAPV con competencias sobre la materia no ha realizado objeción alguna a las disposiciones de la memoria económica a pesar de que, a la fecha de su informe, constaban observaciones sobre el particular realizadas por otros organismos.

II.3. OTRAS CONSIDERACIONES AL TEXTO DEL PROYECTO

Se detecta en el texto de la norma proyectada alguna previsión que, a juicio de esta Oficina, adolece de un ***grado de indeterminació****n que, en razón de la seguridad jurídica exigible de cualquier norma, conviene concretar o precisar en mayor medida, como pueda ser la previsión referida a la revisión de oficio de la AAI y AAU "Cuando resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles" [art.43.4.b9], o la que previene "….que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente con un alto grado de probabilidad." [art.60.1]. Se observa que el texto*

del anteproyecto se refiere en numerosas ocasiones a los efectos significativos en el medio ambiente, habiéndose previamente definido como tal efecto [art.2.h)] la "alteración desfavorable de magnitudn apreciable de cualquiera de los aspectos de la calidad del medio ambiente, especialmente si es de carácter permanente o de larga duración. En caso de los espacios Red Natura 2000, se considerará que un efecto es de carácter significativo si puede empeorar los parámetros que definen el estado de conservación de los hábitats o especies objeto de conservación en el lugar, o, en su caso, las posibilidades de su restablecimiento", definición que, a nuestro juicio, contiene elementos cuya determinación debiera preverse en la norma (bien sea por remisión, en su caso, a aquella otra que los haya concretado).

Sobre el particular, indicar que en la normativa medioambiental existen, y es pacífica la aceptación de su necesidad, conceptos jurídicos con un alto grado de indeterminación dado lo complejo e inaprensible de muchos aspectos, institutos y relaciones que deben regularse a través de normas ambientales. Los términos que señala el informe de la OCE, por ejemplo, son términos que se encuentran recogidos de manera prácticamente literal y con idéntico o mayor grado de indeterminación en la normativa básica a la que pretende realizar una remisión a efectos de su concreción (ver el artículo 26.4, Revisión de la autorización ambiental integrada, del RDL 1/2016, de 16 de diciembre, o la definición de efecto significativo recogida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental). Es preciso significar aquí que, en particular sobre aspectos indeterminados presentes en la normativa sobre evaluación ambiental, el anteproyecto de Ley ha procurado concretar aspectos en los que la normativa ambiental básica se dejan amplios márgenes interpretativos. Resulta de interés remitirnos a la página 107 del informe de respuesta a las alegaciones al proyecto de norma en la cual se trata, específicamente, este concreto aspecto relativo a la indeterminación de algunos conceptos jurídicos del ALAAE.

*Se recomienda también especificar en la propia regulación propuesta **los supuestos en los que se podrá exceptuar** la aplicación del procedimiento de evaluación, a los que se hace mención en el artículo 66.1, y, en su caso, aquellos que se someterán a otra forma de evaluación, sobre lo que tampoco se precisa nada más en el precepto.*

Sobre este particular, en evitación de reiteraciones innecesarias, nos remitimos a la respuesta a las alegaciones realizadas sobre estos artículos en la fase de información pública del anteproyecto de Ley (págs. 103-107, 129-138 del informe de respuesta a las alegaciones y 36-39 del anexo a la memoria de tramitación)

2.7. Ajustes técnicos del texto anteriores a su remisión a la COJUAE.

La relectura del proyecto normativo realizada con ocasión de la recepción y análisis subsiguiente de los informes preceptivos y escritos de alegaciones, ha llevado a la Dirección proponente del ALAAE a realizar algunos ajustes técnicos del borrador del texto en tramitación. En concreto:

- Se incorpora la **definición de titular**, como la persona física o jurídica que explote, total o parcialmente, la actividad o instalación, al objeto de aclarar que lo que interesa al órgano ambiental sustantivo es tener identificado a quien dispone del control

efectivo de la explotación de la actividad o instalación que será, además, el titular del título de intervención ambiental que corresponda y el responsable de su justo cumplimiento ante la autoridad administrativa competente.

Carece de relevancia, a efectos ambientales, quien sea el propietario a efectos civiles o societarios de las instalaciones en las que se desarrollan las actividades necesitadas de los títulos de intervención descritos en el proyecto de norma y, por ello, se pretende asegurar el conocimiento de quien es el titular (explotador) de la instalación. A tal efecto, se modifica el artículo 24, que hacía referencia a las obligaciones de los promotores de los promotores de las actividades, para hablar de los titulares de las instalaciones o actividades.

Se ajustan algunos preceptos del texto para diferenciar entre el citado titular, de títulos o habilitaciones ambientales ya emitidos, del promotor de la actividad, que lo sería en tanto en cuanto obtenga los citados títulos.

En coherencia, se modifica también el artículo 27.1, relativo a **la transmisión de los títulos de intervención** para el desarrollo de las actividades, y no de las propias instalaciones o actividades, quedando redactado así:

.

1. Cuando se transmitan los títulos de intervención ambiental para el desarrollo de actividades o instalaciones sujetas a autorización, licencia o comunicación, será preceptivo ponerlo en conocimiento de la administración competente otorgante del correspondiente título o receptora de la comunicación previa.

- Se incorporan expresamente algunos **plazos** en el Título V, relativo a la evaluación ambiental, que inicialmente se había planteado que fueran contemplados en la normativa reglamentaria de desarrollo. Dichos plazos no divergen sustancialmente de los contemplados, con carácter no básico, en la normativa estatal.

- Se incorpora una nueva **Disposición Adicional segunda** en virtud de la cual se modifica parcialmente el artículo 7.4 de la reciente Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.

El objetivo de dicha modificación es clarificar que no ha de ser dentro del procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos donde se incardine el nuevo estudio de sostenibilidad energética creado en virtud de dicha norma.

En primer lugar, porque no todos los instrumentos indicados precisarán necesariamente de evaluación ambiental y, en segundo lugar, porque no ha de ser el órgano con competencias ambientales quien fiscalice que el citado estudio es correcto, desde un punto de vista formal o de contenido, ni quien imponga medidas correctoras al plan o programa en relación a su sostenibilidad energética.

2.8) <u>Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUAE).</u>

Con fecha 12 de julio de 2019, el Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, en adelante COJUAE, emitió por unanimidad el Dictamen nº 126/2019, en relación al proyecto normativo de referencia, concluyendo que el anteproyecto de Ley de referencia puede elevarse al Consejo de Gobierno, una vez consideradas las observaciones formuladas en el mismo.

Se pude indicar de inicio que el Dictamen, con carácter general, realiza una valoración positiva tanto de la tramitación realizada del procedimiento de elaboración de la

disposición normativa como del contenido sustantivo del articulado de la misma. A continuación, se realizará un análisis de las observaciones recogidas en el citado Dictamen emitido por la COJUAE, haciendo hincapié en aquellos aspectos, los menos, que no han sido tomados en consideración por parte del órgano promotor de la iniciativa legislativa.

1.- Resaltar que, en relación al debate sobre el informe de la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi (CGLE), si bien la COJUAE interpreta que el anteproyecto de norma se encontraría en el ámbito de aplicación del art. 90.1 de la LILE, expone que el órgano promotor ha seguido materialmente las pautas previstas en el sistema de alerta temprana, y se ha dado cumplimiento sustantivo a lo expuesto en dicha norma para dicha eventualidad (apartados 94 y 95).

2.- Asimismo, en relación a la afección a las competencias municipales y al principio de autonomía local, la COJUAE indica, literalmente, que: a) el reconocimiento de la autonomía local no impide que las instituciones comunes puedan ejercer sus propias competencias –en este caso legislativas- en materia de medio ambiente (apartado 128); b) los efectos sobre la actual actividad municipal en el área de las actividades clasificadas resultan razonables e, incluso, ineludibles (apartado 130); c) el texto sometido a dictamen resulta respetuoso con las competencias locales y, en concreto, con las competencias propias de los municipios que contempla la LILE (apartado 132).

3.- Se acoge la observación realizada por la COJUE en sus apartados 152 a 154 y se realizará una modificación de la exposición de motivos clarificadora de la opción normativa de no regular todos los ámbitos sectoriales ambientales recogidos en la norma a derogar (Ley 3/1998). No se entiende preciso por razones de técnica legislativa, empero, incorporar una disposición final o derogatoria que mantenga el apoyo legal de los diferentes reglamentos desarrollados vigente la citada norma.

4.- En relación con la incorporación al Consejo Asesor de Medio Ambiente de las funciones que actualmente desempeña el Consejo Asesor de la Naturaleza– Naturzaintza, nos remitimos a lo señalado en su memoria definitiva de tramitación por la Dirección impulsora de la normativa sobre protección de la naturaleza que se está tramitando con carácter paralelo al presente Anteproyecto de LAAE.

5.- Se ha modificado el art. 22 del anteproyecto para dar cabida a las observaciones y sugerencias de aclaración realizadas por la COJUAE en sus apartados 190 a 194. El art. 22.d) incorporará una referencia general a la aplicabilidad de la normativa básica estatal cuando corresponda a la Administración general del Estado formular la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental, que cubriría tanto la calificación como determinante de los pronunciamientos estatales en la materia y la resolución de discrepancias como otros variados aspectos que han de tenerse en cuenta para estos supuestos concretos como podrían ser, por ejemplo, los plazos de emisión de dichas declaraciones e informes.

6.- En relación al registro municipal para las actividades clasificadas sujetas a comunicación previa de actividad clasificada (apartado 200), se acoge la observación de la Comisión y se incorpora un nuevo párrafo 9 al artículo 53 de la norma del siguiente tenor:

> “Los ayuntamientos mantendrán un registro de las actividades e instalaciones sujetas a comunicación previa de actividad clasificada que se desarrollen en su término municipal”.

7.- En relación al título V, evaluación ambiental, indicar que la COJUAE (apartado 203 y 209) considera razonable y que favorece la claridad y comprensión del texto, el hecho de que se remitan a un desarrollo reglamentario posterior muchas de las cuestiones de índole procedimental y de detalle. Asimismo, en relación al artículo 65, exclusión del ámbito de aplicación de la evaluación ambiental, la Comisión dictamina que la interpretación realizada por el órgano promotor, fundada en el contexto normativo europeo e interno, es coherente y se encuentra bien fundada.

8. No obstante, en relación al apartado 2 del art. 65 la COJUAE (apartados 218 a 228) estima que el establecimiento de criterios para determinar en qué situaciones puede considerarse que un plan o programa puede tener efectos no significativos debe realizarse por una disposición reglamentaria.

En este sentido, no puede acogerse la propuesta y debe mantenerse el texto en los términos proyectados ya que dicha redacción es más flexible y permite que, en función del alcance de los citados criterios propuestos por el órgano medioambiental de la Comunidad Autónoma, se pueda optar como vehículo para su fijación bien por una disposición normativa o, simplemente, por una instrucción técnica o guía interpretativa. Esto es, si la regulación versara sobre aspectos esenciales relativos al ámbito de la evaluación de planes y programas, resulta cuestión indubitada que la forma a adoptar debería ser un instrumento de carácter normativo, y en este sentido, el órgano ambiental únicamente lo promovería ya que no tiene asignadas funciones normativas. Ahora bien, en el supuesto en que el órgano ambiental únicamente pretenda aclarar determinados aspectos no esenciales del ámbito de aplicación tendentes a facilitar la comprensión a los posibles interesados en los procedimientos de evaluación ambiental, se podría dictar una instrucción de naturaleza no normativa, siguiendo el ejemplo de las que ya ha emitido el órgano ambiental en diferentes ámbitos de su competencia.

9.- En relación al cómputo de plazos (apartados 229 a 231) para ciertos trámites desde la recepción de la solicitud completa, indicar que se trata de una traslación al anteproyecto de los dictados de la normativa básica estatal en materia de evaluación de impacto ambiental que, en sus artículos 17.4, 25.1, 31.1, 33.4, 40.1 y 47.1. indican que el órgano ambiental ha de posicionarse desde la recepción *del expediente completo* o *desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar.*

Asimismo, indicar que de conformidad a lo dispuesto en la Disposición Final 8ª, no tienen carácter básico y por tanto sólo serán de aplicación a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos, los plazos establecidos en los artículos 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y en la disposición adicional décima. A sensu contrario, las demás disposiciones de dichos artículos que no se refieren específicamente a los plazos, tienen la consideración de legislación de carácter básico y deben tener reflejo en el anteproyecto de LAAE.

10.- En relación a las observaciones realizadas por la COJUAE (apartado 238 y ss.) sobre la compra pública verde, indicar que se ha realizado una modificación de la exposición de motivos para dar cabida a sus indicaciones e indicar que, en determinados contratos de obras y servicios, el objeto del contrato está conectado con la necesidad de exigencia de criterios medioambientales.

11.- En el apartado 258 del Dictamen, se reflexiona sobre las consultas previas previstas en el artículo 85.1 del artículo relativo a la fiscalidad ambiental y se cuestiona si no deberían perfilarse algunos aspectos, aunque fuera de forma sintética, en el

propio anteproyecto, como su sentido, ámbito, preceptividad o articulación práctica. Al respecto, indicar que se trata de una mera consulta previa a la Administración General de la CAPV en relación a la promoción del uso de la fiscalidad ecológica y de otros instrumentos de política económica (ámbito), con el sentido de que dichas actuaciones sean conocidas por dicho órgano para el mejor ejercicio de sus competencias. Su preceptividad está expresamente recogida en el anteproyecto sin determinarse que el posicionamiento posterior del órgano ambiental no tenga efectos vinculantes para los promotores; por lo expuesto, no se entiende preciso dar un mayor grado de detalle en el anteproyecto de Ley. En cualquier caso, y habida cuenta de la referencia realizada en el informe elaborado por la COJUAE (apartados 249 y 250) al criterio expresado por el Departamento de Hacienda sobre algunas cuestiones relativas al artículo 85, se acogen las propuestas y se procede a modificar el artículo 85 eliminando los apartados 2 y 3 y dándose una nueva redacción al artículo 85.1.

12.- Las menciones relativas a las entidades de colaboradoras y la función inspectora realizadas por la COJUAE han sido atendidas modificándose los artículos 91 y 92 del anteproyecto.

13.- En los apartados relativos a la responsabilidad por daños medioambientales la COJUAE sugiere la realización de modificaciones del artículo 100 del anteproyecto que han sido tomadas en consideración.

Sin embargo, es preciso indicar que no es lo mismo la amenaza inminente de daños graves al medio ambiente o la salud de las personas prevista en el párrafo 1 de dicho artículo 100 que los daños medioambientales significativos y su amenaza inminente previstos en el capítulo II sobre responsabilidad medioambiental y que vienen definidos expresamente en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

14.- Se han incorporado las infracciones muy graves previstas en la legislación sobre control y prevención integrados de la contaminación que la COJUAE ha indicado en los apartados 295 y ss. de su dictamen toda vez que, es cierto, que su consideración como tales en la normativa básica estatal “no rebasa el ámbito de lo básico” y deben ser siempre consideradas como tales por el legislador autonómico.

15.- Asimismo, se ha suprimido la referencia como infracciones graves del artículo 104.3 h) relativa a la responsabilidad por daños ambiental toda vez que sobre esta concreta materia la LAAE lo que realiza es una remisión en bloque a lo dispuesto en la legislación básica estatal sobre responsabilidad medioambiental.

16.- Se ha suprimido también y de manera completa el apartado o) del art. 104.3) siguiendo los dictados de la Comisión.

17.- En relación al decomiso, se ha incorporado como una nueva medida provisional en el artículo 11. En los siguientes términos.

“e) El decomiso en los supuestos contemplados en el artículo 108”.

18.- Se han considerado ajustadas a derecho y han sido acogidas, con las modificaciones correspondientes del artículo 113 del anteproyecto, las observaciones realizadas en los apartados 313 y ss. sobre la imposición de multas coercitivas en relación a la insatisfacción de deudas líquidas.

19.- En relación a la obligación de contratar (apartados 328 al 330) se asume lo indicado por la COJUAE y se modifica el artículo correspondiente para darle una

mayor claridad a la opción pretendida de que se aplique a todo el sector público en el ámbito territorial de la CAPV.

Se modifica, además, el párrafo 2 de dicho art. 114 para incorporar a las excepciones de aplicación del régimen a la obtención de subvenciones siempre y cuando se cumplan puntualmente las obligaciones de pago determinadas en la resolución en virtud de la cual el órgano competente acepta el pago fraccionado.

20.- En relación a la publicidad de las personas infractoras, se entiende adecuadamente acotado el ámbito de su aplicación remitiéndonos a lo explicado ya en la memoria en las distintas fases de alegaciones.

21.- En relación al registro personas infractoras indicar que se modificará la exposición de motivos para clarificar que dicho registro nace con el objetivo de proveer de información fehaciente a las Administraciones Públicas para el mejor ejercicio de sus competencias en relación a las personas físicas o jurídicas que han sido sancionadas y que, en ningún caso, como otros registros en los que se incorpora información sensible, se articula como un registro de acceso público para la ciudadanía en general.

22.- Existen dos secciones finales en el Dictamen 126/2019 de la COJUAE (VIII- otras cuestiones de carácter puntual, y IX- otras observaciones de técnica legislativa) que han sido asumidas en su práctica totalidad. Sólo se harán menciones en este punto a los aspectos u observaciones que este órgano promotor no ha entendido preciso acoger.

22.1. Apartado 375. No se entiende preciso exigir a los promotores el aporte de una información de la que dispone el propio órgano ambiental de la CAPV ya que es el gestor del Registro de empresas incluidas en el Sistema EMAS de Euskadi. La propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, veta a las administraciones públicas la exigencia a los particulares de información de la que ya dispone.

22.2. Apartado 377. Los Valores Límite de Emisión (VLE) ligados a la Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) han surgido y están vinculados y pensados para las instalaciones más contaminantes, las sujetas a la normativa de prevención y control integrados de la contaminación, IPPC. Es por ello, que su utilización para otra tipología de instalaciones, como las sujetas a autorización ambiental única, sólo podrán utilizarse, en su caso, como elemento a tomar en consideración y no con carácter de regulación legal de obligada utilización por parte de la administración.

22.3 Apartado 383. Disposición Adicional Única. Se entiende que tiene virtualidad su mantenimiento por las causas ya expuestas en las respuestas a las alegaciones recibidas en la tramitación del anteproyecto de LAEE y porque, para los promotores del texto, resulta de gran importancia disponer del refrendo en este sentido del Parlamento Vasco orientado a que las unidades administrativas de las administraciones públicas con competencias ambientales no vean desestimados o limitados, por razones de índole interno, sus requerimientos de recursos humanos y materiales para destinarlos al ámbito medioambiental.

22.4. Apartado 391. No procede definir este concepto ya que, además de no encontrarse entre las definiciones listadas en la normativa básica, lo relevante de este documento ambiental es su contenido que, además, varía para cada uno de los procedimientos de evaluación ambiental previstos en la normativa básica y en el ALAAE.

22.5. Apartado 393. Se acoge parcialmente la observación. Se modifica el art. 13.

22.6. Apartado 401. Se entiende necesario su mantenimiento por tratarse de una situación de las previstas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (artículo 7) que, por poder afectar a distintas administraciones públicas, merita su incorporación a una Ley que tiene vocación de fijar los principios generales de actuación en la CAPV.

FASE DE APROBACIÓN.

Como hitos finales de la tramitación del proyecto normativo indicar que resta:

1.- Comunicar a la Oficina de Control Económico, con anterioridad a su aprobación, las modificaciones que se han introducido en el proyecto de disposición normativa como consecuencia de las sugerencias y propuestas contenidas en el dictamen de la COJUAE, de conformidad a lo dispuesto en el art. 27 del Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Actuación que se realizará por medio de la remisión de la presente memoria, así como del texto que finalmente será remitido al Consejo de Gobierno para su aprobación.

2.- Elevar el Anteproyecto de Ley para su aprobación final al Consejo de Gobierno.

3.- Remitir al Parlamento Vasco el proyecto normativo y el resto de documentación que resulte procedente, de conformidad a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/1981, de 30 junio, de Gobierno.

4.- Comunicar a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUAE), la disposición que finalmente se ha adoptado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora, y en el artículo 34 de su Reglamento de organización y funcionamiento (aprobado por Decreto 167/2006, de 12 de septiembre), que disciplina que el órgano o autoridad consultante notificará al secretario o a la secretaria de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi la terminación del procedimiento, mediante la comunicación de la disposición aprobada o el acto dictado. Dicha comunicación se realizará dentro del plazo de 15 días desde su remisión al Parlamento Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma

Ingurumen Administrazioaren zuzendaria
Director de Administración Ambiental

IVAN PEDREIRA LANCHAS
(Firmado electrónicamente)

ANEXO: RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS CONTENIDAS EN LOS INFORMES PRECEPTIVOS.

TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES				
ARTÍCULO	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
Artículo 1. Objeto	EMAKUNDE	Solicita la incorporación como objeto la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.	Se acoge la sugerencia siendo incorporado como apartado 1.k) k) Garantizar un desarrollo ambientalmente sostenible, contribuyendo a la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas.	Se estima
Artículo 2. Definiciones	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	De contemplarse, deben recogerse las definiciones en los mismos términos contenidos en la legislación básica estatal; sin perjuicio del establecimiento de medidas de protección adicionales, que pueden ser más severas que las estatales y no infringen el sistema constitucional de distribución de competencias.	No se especifica en la alegación cuáles son las definiciones discordantes con la legislación básica de las presentes en el texto inicial. En cualquier caso, tal y como indica la propia alegante, las definiciones pueden separarse de la literalidad de la definición contemplada en la legislación básica si lo que hacen es aclarar el alcance de las mismas, así como establecer medidas de protección ambiental más severas. Esta es la intención del anteproyecto de Ley para los supuestos en los que las definiciones difieren un tanto de las contenidas en las distintas legislaciones sectoriales de carácter básico. Indicar, asimismo, que han sido trasladadas a un nuevo anexo	Se desestima

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 06 — 01010 Vitoria-Gasteiz

			específico (Anexo II.G) una serie de definiciones a efectos del título V, evaluación ambiental.	
	AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	El anteproyecto recoge entre sus principios fundamentales la participación ciudadana en el diseño y ejecución de políticas públicas. A la hora de determinar el concepto de "público interesado" el artículo 2 q) remite a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y extiende el mismo a las personas jurídicas que reúnan los siguientes requisitos, - Persona jurídica sin ánimo de lucro - Constituidas con al menos dos años de antigüedad - Fines en sus Estatutos la protección del medio ambiente en general o de algunos de sus elementos en particular - Que los fines puedan ser afectados por la toma de una decisión en su ámbito territorial de actuación Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter fundamental que el anteproyecto otorga a la participación ciudadana en el diseño y ejecución de políticas públicas en materia de medio ambiente, el Departamento proponente deberá analizar y valorar si los requisitos establecidos a las personas jurídicas para ser consideradas como interesadas resultan proporcionales y no conllevan discriminación entre personas jurídicas	El concepto de persona jurídica interesada tiene su base en la legislación básica sectorial que regula y desarrolla los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la Ley 27/2006, de 18 de julio. Dicha norma, en su art. 2, define lo que se debe entender por: 1. Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación. 2. Personas interesadas: a) Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23 de esta Ley. Precisamente, el anteproyecto recoge literalmente los requisitos del art. 23 de la citada norma; por lo tanto, no procede acoger la alegación ya que, lejos de suponer una discriminación, lo que se realiza es una apertura a todo el tercer sector con intereses ambientales a participar en la toma de decisiones.	Se desestima

Artículo 3. Principios	AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	Dada la relevancia que otorga el anteproyecto a la simplificación de procedimientos y la eliminación de trabas en la actividad económica, se recomienda establecer entre los principios que fundamentan la Ley (art. 3.1), la sujeción a los principios de regulación económica eficiente, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. De esta manera dichos principios, al igual que el resto de los incluidos en el artículo 3.1, construirían pautas de actuación de las Administraciones Públicas y criterios de interpretación de la normativa de protección del medio ambiente Así, por ejemplo en el supuesto que los planes y proyectos sometidos a evaluación ambiental provenían de las Administraciones Públicas y supongan una limitación a actividades económicas no sólo deberían superar dicha evaluación sino también la adecuación a los principios de regulación económica eficiente	Tal y como se expone en la exposición de motivos del Anteproyecto éste se ha redactado bajo la premisa del concepto de normativa inteligente promovido por la Unión Europea. Así, la norma ha seguido en su concepción los principios de buena regulación (art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) que disponen que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actúen de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. En cualquier caso, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Artículo 3. Principios generales), determina que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho; y que deberán respetar en su actuación y relaciones, entre otros, los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.	Se desestima

			d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. Por lo expuesto, no se estima necesario incorporar expresamente estos principios de obligado cumplimiento para todas las AAPP en el art. 3 como propone el alegante	
Artículo 5. Derechos de las personas	EMAKUNDE	Solicita la inclusión de una mención a que el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, más allá de su contenido declarativo, exige medidas para que su disfrute sea en igualdad de condiciones, ya sean hombres o mujeres.	A pesar de que el concepto personas ya es omnicomprensivo, se acepta la propuesta de Emakunde, quedando el texto redactado así: “A disfrutar de un medio ambiente adecuado en igualdad de condiciones, ya sean hombres o mujeres”.	Se estima

TITULO SEGUNDO. COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN DE LA POLITICA AMBIENTAL				
ARTÍCULO	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
Artículo 8. Ejercicio de competencia por las Administraciones Públicas	EMAKUNDE	Se recomienda recoger que las diversas Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, arbitrarán los medios necesarios para garantizar que sus políticas y programas en materia de medio ambiente, vivienda, urbanismo y transporte integren la perspectiva de género, considerando entre otras, cuestiones relativas a la seguridad de las personas, a facilitar la realización del trabajo doméstico y de cuidado de las personas y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como a fomentar una mayor participación de las mujeres en el diseño y ejecución de las citadas políticas y programas.	Se considera Innecesario en una ley sectorial ambiental en la que lo que se regulan son procedimientos administrativos y técnicas de intervención sobre actividades que tengan una incidencia sobre el medio ambiente.	Se desestima
Artículo 9. Programa Marco Ambiental	EMAKUNDE	Se recomienda contar con el asesoramiento experto de la unidad administrativa encargada del impulso y coordinación de las políticas de igualdad en el departamento.	Se valora positivamente la aportación y se arbitrarán los mecanismos para que en la redacción de los documentos de planificación se cuente con el asesoramiento de la unidad administrativa indicada.	Expositivo
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEL DMAPTV	Refiere que, a diferencia con la regulación actual del mismo, si bien necesariamente éste deberá ser informado por el Consejo de Medio Ambiente, se suprime la colaboración de este último en la elaboración del documento.	En ningún caso se suprime la colaboración del Consejo de Medio Ambiente en la elaboración del PMA puesto que esta se materializa a través del informe específico recogido en el art. 10.2 c) del anteproyecto de ley.	Se desestima
		Refiere que conforme a la redacción actual del artículo parece que el único objetivo del PMA es la mejora del medio ambiente, cuando en	No queda claro el sentido de la observación.	Se desestima

		realidad este es un instrumento para establecer objetivos y prioridades, por lo que se sugiere la revisión de esta redacción.		
Artículo 10. Consejo de Medio Ambiente	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	Siendo voluntad del Departamento aunar en un solo órgano colegiado, las funciones hasta ahora encomendadas a los 3 órganos colegiados con competencias en estos ámbitos –COMA, CAMA y Naturzaintza-, deberán coordinarse las redacciones de los anteproyectos normativos en marcha (LAA y LPNE) en función de las previsiones en cuanto al orden de aprobación. El anteproyecto que primero se apruebe debe ser el que se encargue de la creación del órgano y del establecimiento de su regulación fundamental y el anteproyecto posterior recoger una redacción con una referencia al órgano ya creado y, en su caso una atribución de concretas competencias en su concreto ámbito material. Además el primero de los dos textos en aprobarse deberá recoger una disposición transitoria expresa al respecto.	El Anteproyecto pretende modificar la composición y funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente ya creado por la Ley 3/1998, de 27 de febrero, configurándolo como un órgano consultivo y de cooperación entre las Administraciones públicas y los sectores que representan a los intereses sociales y económicos en la elaboración, consulta y seguimiento de las políticas ambientales. La Ley, efectivamente, suprime la Comisión Ambiental del País Vasco, integrando sus funciones en las propias del Consejo. Para darle una mayor claridad se modifica la exposición de motivos y el inicio del art. 10.1. No procede realizar disposición transitoria en el presente Anteproyecto de Ley en los términos expuestos en la observación; sin embargo, se elimina el apartado d) del anteproyecto por tratarse de proyectos relacionados con los espacios protegidos que deben ser regulados en su legislación sectorial específica.	Se desestima
		Se recomienda incorporar entre las funciones del Consejo la de “realizar las labores de seguimiento pertinentes de todas aquellas actuaciones que, en el área de medio ambiente, sean desarrolladas por las instituciones representadas en la Comisión”.	El texto del artículo no prohíbe tal posibilidad, aunque no la prevea expresamente, teniendo en cuenta que se trata de un órgano de cooperación. No obstante, nada impide que se pueda incluir la recomendación solicitada entre las funciones del Consejo. Se incorpora como apartado 10.2 e).	Se estima

		Tampoco se entiende el motivo por el cual configurándose el Consejo de Medio Ambiente como un órgano de cooperación elimina la posibilidad de que otras administraciones publicas puedan solicitarle la emisión de informes y propuestas en materia ambiental tal y como se recoge en el artículo 13.b) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, en el que se enumeran las funciones del actual Consejo Asesor de Medio Ambiente.	Se considera que en ningún caso se ha suprimido dicha posibilidad. La expresión "ser sometido a su consideración" del artículo 10.2 es una redacción muy abierta que habilita a cualquier Administración pública.	Se desestima
		Puesto que en la memoria justificativa no se desarrolla ni justifica la creación de este órgano, no queda claro el encaje del mismo como órgano consultivo por lo que se sugiere eliminar ese calificativo o justificarlo adecuadamente en la documentación que acompaña al anteproyecto normativo. (…) Por otro lado, su carácter de órgano colegiado se deduce de la configuración y composición del mismo. A esta cuestión le sería de aplicación el régimen específico establecido en la sección tercera del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (…)	Efectivamente, la dicción literal del art. 10 al indicar que se crea el Consejo de Medio Ambiente puede induce a error con respecto a este órgano. Lejos de tratarse como un órgano creado ex novo, la voluntad de la Dirección proponente es consolidar el ya existente Consejo Asesor de Medio Ambiente (art. 12 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero) y aglutinar en él las funciones que ejercía otro órgano que sí se pretenden eliminar: la Comisión Ambiental del País Vasco. Por lo tanto, se ha mejorado el texto para indicar que se trata del existente Consejo Asesor de Medio Ambiente y eliminar las referencias a funciones que, por razón de la materia, puedan ser acometidas por otros órganos consultivos. Asimismo, indicar que el Consejo no deja de ser un órgano consultivo, aunque no se defina como tal. De hecho, tal y como se ve en el listado de sus funciones, estas son principalmente consultivas, de informe y propuesta.	Se estima parcialmente

			No es, evidentemente, un órgano con competencias resolutorias.	
	HERRI ADMINISTRAZIOETAN HIZKUNTZA NORMALIZATZEKO ZUZENDARITZA	Aurreproiektuaren 10. eta 11. artikuluetan Ingurumen Kontseilua eta bere osaera arautzen dira. Kontseilukideek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan egon daitekeen dokumentazioa kudeatu beharko dutenez, zein Kontseiluko gainontzeko kideen hizkuntza eskubideak modu eraginkorrean bermatzeko eta administrazioak jarraitu beharreko efikazia eta efizientzia irizpideei jarraituz, komenigarria ikusten dugu jarraian proposatzen dugun testua edo antzekoa txertatzea Legean bertan edo alor honi buruzko bere garapenean: Kontseiluko kideak izendatzerakoan kontuan hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan nahikoa gaitasun edukitzea eta gizonen eta emakumeen arteko oreka bilatuko da. Kontseiluko kideek euren jardunean hizkuntza ofizialetako edozein erabili ahal izango dute. Euskararen normalizazioa helburu Kontseiluak horrela erabakitzen badu bilera deialdiak, gai zerrendak, aktak, ziurtagiriak eta testu idatziak oro har, euskaraz bideratu ahalko dira. Bestelakoa erabakitzen bada Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da.	Nahiz eta alegazioaren azken helburuekin ados egon, Lege mailak duen arau-testu batean txertatzea ez da komenigarritzat jotzen. Ildo horretatik, izapidetzen ari den Lege-aurreproiektua indarrean jarri ondoren erregelamendu bidez garatzeko eman beharreko arauak aztertu eta, hala izanez gero, arau horietan txertatu beharko dira aspektu horiek.	Ez da onartzen

Artículo 11. Composición del Consejo de Medio Ambiente.	EMAKUNDE	De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se recuerda que en la composición del Consejo de Medio Ambiente, se debe garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada.	Se estima y se procede a modificar el apartado 2 del artículo 11 del anteproyecto en el sentido de la alegación: Reglamentariamente se detallará la composición del Consejo Asesor de Medio Ambiente, el procedimiento de designación de sus miembros, garantizando una representación equilibrada de mujeres y hombres, y sus reglas básicas de organización y funcionamiento.	Se estima
	DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA	El artículo 11.2. del Anteproyecto establece que reglamentariamente se detallará la composición del Consejo de Medio Ambiente, el procedimiento de designación de sus miembros y sus reglas básicas de organización y funcionamiento. Habrá que esperar al desarrollo reglamentario para informar acerca de los aspectos anteriores, así como, en su caso, de las compensaciones económicas a los miembros del Consejo que serán las previstas en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio.	Expositivo.	Expositivo.
Artículo 12. Información ambiental	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	Esta definición estaría sistemáticamente mejor ubicada en el art. relativo a las definiciones.	Se considera que para mayor claridad del título y de su regulación el contenido del derecho a la información ambiental debe explicitarse en el citado artículo 12.	Se desestima
		El párrafo segundo incorpora los informes sobre el estado del medio ambiente previstos en el artículo 8 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, de carácter básico.	Efectivamente esto es así, sin embargo nada obsta para su previsión en una Ley autonómica.	Se desestima

Artículo 13. Difusión de la información ambiental	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	Se echa en falta la inclusión de los informes sobre el estado del medio ambiente contemplados en el artículo 12.2 del anteproyecto, que sí contempla el citado artículo 7 de la Ley 27/2006, de 18 de julio.	La redacción del artículo 13.1.a) del anteproyecto ya da cabida a este tipo de informes. Asimismo, el art. 12.2 ya establece de forma expresa la obligación de publicar dicho informe. En consecuencia, si se publica se entiende difundido.	Se desestima
Artículo 14. Solicitud de información ambiental	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	Al no contener el anteproyecto de ley una definición de lo que ha de entenderse por autoridad pública, pueden surgir problemas interpretativos en la medida en que en el párrafo segundo del artículo en cuestión, se alude al "órgano o autoridad competente de cualquiera de las Administraciones del País Vasco en cuyo poder obre la información" que no parece englobar a las corporaciones de derecho público y demás personas físicas o jurídicas cuando ejerzan, con arreglo a la legislación vigente, funciones públicas, incluidos Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, como sí lo hace expresamente la Ley 27/2006, de 18 de julio (art. 2.4.1.d).	Efectivamente, el art. 2.4 1 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, determina, quienes tendrán la condición de autoridad pública a los efectos de dicha norma. Con un carácter amplio determina que tendrán tal carácter: los gobiernos, las administraciones públicas y sus entidades de Derecho Público dependientes o vinculadas, los órganos públicos consultivos, las Corporaciones de derecho público y demás personas físicas o jurídicas cuando ejerzan funciones públicas, incluidos Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y, con efectos y alcance limitado, las personas físicas o jurídicas cuando asuman responsabilidades públicas, ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos relacionados con el medio ambiente bajo la autoridad de cualquiera de las entidades, órganos o instituciones anteriormente citados. Se modifica el artículo en este sentido. Al determinar el propio artículo 14.1 del anteproyecto "que los derechos de acceso a la información se tramitarán de conformidad y las garantías establecidas en la Directiva sobre los derechos de acceso a la información en materia de medioambiente y su normativa de transposición …" lo que se hace es una remisión en	Se estima

			bloque a lo allí dispuesto, con lo cual, y en aras a evitar problemas interpretativos las referencias deberán realizarse a la autoridad competente que podrá o ser una administración pública estricto sensu.	
		El párrafo tercero de este artículo 14 establece el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, o de dos meses en el caso de que la información solicitada tenga un gran volumen o complejidad, para que la autoridad pública competente facilite la información solicitada o bien la deniegue determinando los motivos, apartándose así de lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que establecía un único plazo máximo de dos meses.	Es preciso recordar que la Ley 27/2006, básica, establece un plazo de un mes. Además, nada impide que una nueva ley autonómica estime más oportuno un plazo distinto al ya establecido en una, también autonómica anterior, máxime a teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación de esta última.	Se desestima

		El párrafo cuarto del artículo 14 hace una nueva remisión a la Directiva sobre los derechos de acceso a la información en materia de medio ambiente y su normativa de transposición de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los efectos de determinar los motivos de denegación de información. Precisamente, el artículo 13.3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, dispone que las excepciones a la obligación de facilitar la información ambiental previstas en los párrafos 1 y 2 de dicho artículo, se podrán aplicar en relación con las obligaciones de difusión contempladas en el capítulo II del Título II de la citada Ley. No estaría de más que el artículo 14 del anteproyecto contuviera una previsión semejante que excluya en tales casos la obligación de difusión.	Si la Administración decide no difundir alguna información por alguna causa de las referidas, procederá en su caso la solicitud de la persona que pudiera estar interesada y es entonces, cuando en respuesta negativa a tal solicitud, se podría invocar alguna de las causas de denegación expresamente previstas. Se considera que las excepciones previstas para el suministro de información se podrán aplicar en relación con las obligaciones de difusión contempladas en el capítulo II de este Título. A tal efecto se incorpora en el artículo 13.2 la referencia recomendada por la Dirección.	Se estima parcialmente

Artículo 15. Participación Ambiental	EMAKUNDE	El proceso participativo se debe realizar atendiendo a una participación equilibrada de mujeres y hombres y considerando la perspectiva de género y la diversidad de colectivos y situaciones. Más allá del equilibrio numérico, es importante, también, desarrollar estrategias que tengan en cuenta las posibles diferencias respecto a la capacidad y oportunidad de participación de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de toma de decisiones sobre asuntos que incidan en el medio ambiente. Asimismo, y con la intencionalidad de realizar una posterior evaluación y seguimiento, se recomienda explicitar la necesidad de recabar datos desagregados por sexo sobre la participación, así como tipología de propuestas realizadas.	Se considera apropiado atender parcialmente la alegación e incorporar en el artículo 15.2 lo siguiente: “El proceso participativo se debe hacer tomando en consideración la perspectiva de género”.	Se estima parcialmente.

TITULO CUARTO. ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES				
ARTÍCULO	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
Artículo 19. Plazos para el inicio de las actividades autorizadas	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	En relación a las prórrogas previstas para el inicio de las actividades sometidas a los regímenes autorizatorios establecidos en el artículo 19, cabe comentar que la ampliación de plazos viene regulada en el 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, y que conforme al mismo, en ningún caso se pueden prorrogar plazos vencidos y que la ampliación no podrá exceder de la mitad de los mismos (así lo indica el artículo 19.4).	No se trata en puridad de una ampliación de plazos legales de los procedimientos como los que son referidos en la alegación. Se trata de plazos establecidos ex lege para la puesta en marcha o inicio del funcionamiento de las actividades autorizadas, de manera que el clausulado de la autorización o el contenido del informe mantienen su vigencia durante ese plazo, transcurrido el cual la autorización o declaración caducará. Se han establecido unos plazos razonables que en cualquier caso pueden ser discutibles, pero esta previsión es común en la legislación sectorial ambiental que regula estas técnicas de intervención.	Se desestima
Artículo 22. Concurrencia de los regímenes de intervención	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	Respecto a la integración de las evaluaciones de impacto ambiental ordinaria con los diferentes regímenes autorizatorios, si bien ésta es una medida aplaudible por la simplificación de trámites a realizar por las personas administradas, no se desarrolla adecuadamente esa integración.	Es en el articulado del propio texto donde se expone en cada caso la forma de integración. No se comparte que exista la falta de un desarrollo adecuado de dicha integración y, en cualquier caso, la observación no aporta justificación de tales afirmaciones por lo que debe entenderse como una apreciación subjetiva.	Se desestima

ambiental con la evaluación de impacto ambiental		Se indica que “La declaración de impacto ambiental será vinculante para la autoridad local” cuando el artículo 2.e de la norma ya define la declaración de impacto ambiental como un informe vinculante. Se sugiere la eliminación de la citada frase por resultar reiterativa	Se considera más clarificador incluir la referencia al carácter vinculante de la declaración de impacto ambiental también en este artículo 22 del anteproyecto.	Se desestima
Artículo 23. Obligaciones de las Administraciones Públicas	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	En ausencia de mención expresa en la memoria justificativa del proyecto, no se entiende la necesidad reflejada en el artículo 23, de recordar a las administraciones públicas que actúen en los procedimientos de intervención ambiental regulados en este Título, sus obligaciones en relación a cuestiones reflejadas en otros apartados del texto normativo y/o en otras leyes y normativas aplicables.	En nada empece, como hacen otras muchas normas ambientales, recordar tanto a los promotores como a las Administraciones públicas sus obligaciones. Se trata de un mandato que deriva del artículo 45 CE.	Se desestima
Artículo 24. Obligaciones de los promotores	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	La redacción sólo contempla la obligación por parte de los promotores de informar de la transmisión de las actividades e instalaciones de los apartados A y B del anexo I pero no así las de los apartados C y D.	Se estima explicitar, en relación con los Ayuntamientos, la obligación de informar sobre la transmisión de las actividades de los apartados A, B, C y D.	Se estima parcialmente
		El cometido de informar de tales transmisiones constituye una obligación para el transmitente, pero es discrecional para el nuevo titular. De ello puede seguirse que el tipo infractor previsto en el artículo 102.2.d) ocupa únicamente al transmitente. No obstante, moviéndonos en el ámbito del derecho administrativo sancionador, en aras de la claridad y seguridad jurídica sugerimos que se determine de forma precisa en la letra d) del párrafo 2º del referido artículo 102 del anteproyecto.	Atendiendo a esta y otras alegaciones relativas al régimen sancionador, se ha dado una nueva redacción al anterior artículo 102 d) para incorporar también que es sancionable no comunicar al Ayuntamiento la transmisión, toda vez que se articula un nuevo ilícito genérico a las obligaciones de comunicación, notificación e información previstas en el anteproyecto.	Se estima parcialmente

		El contenido de esta última previsión hay que hilarlo con lo dispuesto en el artículo 27.2 del anteproyecto, a cuyo tenor el nuevo titular que no hubiera puesto en conocimiento de la Administración competente otorgante del correspondiente título o receptora de la comunicación previa, la transmisión de las actividades o instalaciones sujetas a autorización, licencia o comunicación, responderá solidariamente con el transmitente de las obligaciones y responsabilidades en tanto no se realice dicha puesta en conocimiento. De este modo, se relativiza en cuanto a sus consecuencias jurídicas el carácter facultativo de la comunicación por parte del nuevo titular contenido en el art. 24.e). Por otro lado, en el párrafo 1º de este artículo, en abierta contradicción con lo dispuesto en el art. 24 e), se establece la preceptividad de comunicar la citada transmisión, incluyendo aparentemente las actividades de los apartados C y D del anexo I y alterando el destinatario de tal comunicación, que en esta ocasión no será el órgano ambiental de la CAPV y el ayuntamiento correspondiente sino la Administración otorgante del título habilitante o receptora de la comunicación previa. Deben subsanarse tales discordancias.	Por su parte, se considera que el artículo 27 es claro en cuanto a la obligación de comunicación de la transmisión; sin embargo, se ha incorporado en el art. 24.e) el siguiente apartado: (…) Esta obligación corresponderá al transmitente, sin perjuicio de que la nueva persona titular pueda comunicar dicha transmisión.	
Artículo 25. Capacidad técnica y responsabilidad	AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	Se recomienda establecer en los artículos 25 y 63 una simple referencia al "técnico competente" para la realización de la documentación de la evaluación ambiental, obviando referencias a títulos o profesiones reguladas que podrían ser utilizados por operadores previamente instalados para restringir el acceso a la prestación de dichos servicios Ello, además, resultaría congruente con la técnica normativa utilizada	En la línea de las respuestas a las alegaciones realizadas por otros interesados, se acoge parcialmente la alegación modificándose el texto del anteproyecto para referirse únicamente a personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales. Se elimina la referencia a la educación superior.	Se estima parcialmente

		por el propio anteproyecto en la redacción de los artículos 47 y 53, que hacen referencia únicamente al técnico competente en los supuestos de la comunicación del inicio de la actividad. Asimismo, con la redacción que ofrece el artículo 89 del mismo, relativo al personal de la inspección ambiental, que reconoce a personas o entidades con capacidad técnica facultades de actuaciones materiales de inspección que no estén reservadas a funcionarios públicos por entrañas ejercicio de potestades públicas o por otras circunstancias. Por su parte, cabe valorar favorablemente la necesidad de identificación del autor de la documentación técnica de la evaluación, necesaria para la determinación de la Independencia de los mismos, así como de las responsabilidades que pudieran corresponder.		
Artículo 28. Cese de la actividad y cierre de la instalación	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV.	En el artículo 28, párrafo 1º se alude a la Administración competente mientras que en el párrafo 2º se hace a la Administración autorizante sin que se aclare si en ambos casos se trata de la misma Administración.	La intención de la norma es señalar a la misma Administración, que en ambos casos es la Administración autorizante. Se acepta la mejora propuesta y se modifica el texto en consecuencia.	Se estima

TITULO CUARTO. ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE CAPITULO II. AUTORIZACIONES AMBIENTALES CAPITULO III. DISPOSICIONES COMUNES A LA AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA Y A LA AUTORIZACION AMBIENTAL UNICA				
ARTÍCULO	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
Artículo 34. Subsanación	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	El último párrafo del art. ignora lo dispuesto en el artículo 21.3.b) en relación con el artículo 22.1.a), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, elaborada al amparo del artículo 149.1. 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado, entre otros aspectos, la competencia para regular el procedimiento administrativo común. Así, pues el transcurso del plazo máximo legal para resolver ambos procedimiento y notificar la resolución, que será de 6 meses, se podrá suspender cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, lo cual no equivale a considerar como fecha de la presentación de la solicitud la de aquella en que haya sido realizada la subsanación, y es por ello que habrá de seguir situándose en la fecha que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.	Se asume la alegación presentada y se elimina la última frase del artículo. El precepto se redactó en dichos términos siguiendo el esquema previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental que posibilita que el órgano ambiental disponga de plazos de respuesta" desde la recepción del expediente completo" esto es, tras su subsanación, si fuera el caso. La extrapolación de esta posibilidad pretendía evitar la presentación de solicitudes incompletas cuyo examen puede demorarse en el tiempo y que dichos plazos se entendieran indubitadamente achacables al promotor.	Se estima

Artículo 36. Informe Municipal en actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada y Autorización Ambiental Única	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	Refiere albergar dudas de si esa sustitución en todos sus trámites incluye la salvedad en lo relativo al otorgamiento de la licencia de actividad clasificada por parte del ayuntamiento. Ni qué decir tiene que habría sido más acertado que la ley básica hubiera procedido a la supresión definitiva de la licencia de actividades clasificadas en los casos de actividades sometidas además a autorización ambiental integrada, siempre que se garantizara la participación municipal en el procedimiento de su otorgamiento, lo cual queda plenamente cubierto con el informe urbanístico, contemplado en el artículo 15, así como con el informe "sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos aspectos que sean de su competencia", previsto en el artículo 18, ambos del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Tal parece ser la finalidad pretendida por el anteproyecto de ley al aludir a todos los trámites del procedimiento de licencia de actividad clasificada, si bien qué no de forma concluyente. Por ello, al objeto de disipar nuevas dudas y vacilaciones al respecto en el futuro creemos que ésta es una buena oportunidad para dejar resuelta definitivamente esta cuestión y en tal sentido sugerimos que se adicione al párrafo contenido en el párrafo 1º del art. 36 una referencia al trámite del otorgamiento de la licencia por el ayuntamiento, para descartarlo, del siguiente tenor: *"1. El procedimiento de autorización ambiental integrada o el de autorización ambiental única sustituirá en todos sus trámites al*	Buena parte de la observación es meramente expositiva. Efectivamente, en las actividades sometidas a AAI o AAU el anteproyecto ha considerado innecesaria la licencia municipal de actividad clasificada, sin perjuicio de la intervención municipal en el procedimiento de otorgamiento de dichas autorizaciones a través de los preceptivos informes que en él se prevén. Se ha optado por prescindir de exigir a estas instalaciones la licencia de actividad clasificada, siendo suficiente con la AAI o AAU en lo que se refiere a aspectos ambientales, haberla mantenido hubiese supuesto una duplicación innecesaria a un puro "acto mecánico" por parte de los Ayuntamientos, a un acto debido. Esta opción está en línea con las últimas modificaciones de la Ley de Bases de Régimen Local (ver art. 84 bis 3) que, buscando la evitación de trámites innecesarios, refiere que: en caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente. El hecho de que el anteproyecto haya prescindido de otorgar esta licencia no supone en absoluto que los municipios queden al margen del procedimiento autorizatorio, ya que, con carácter	Se desestima

		procedimiento de licencia de actividad clasificada, incluida, en su caso, la resolución definitiva de la autoridad municipal." En todo caso, entendemos que sustraer a los ayuntamientos la competencia para la resolución definitiva de la licencia de actividades clasificadas en los casos en que las actividades estén sometidas además a autorización ambiental integrada o única, no vulneraría la autonomía local, en primer lugar, porque el ayuntamiento sigue contando con la posibilidad de resolver sobre la denegación de la licencia siempre que su pronunciamiento se base en otras razones diferentes de las ambientales y que sean de su competencia, como lo son las urbanísticas; y, segundo, porque la pretendida merma del poder local en este campo lo sería exclusivamente para las actividades e instalaciones previstas en los anexos I.A y I.B, que no constituyen el núcleo más importante, ni el más numeroso de aquellas sobre las que habrá de pronunciarse el ayuntamiento	previo a la autorización, dos deben ser los informes municipales que se unan al expediente. En primer lugar, previo al trámite de información pública, es el informe de compatibilidad urbanística que debe incluir el solicitante con la solicitud de autorización y el segundo, es el que el municipio ha de elevar con posterioridad al trámite de información pública. Desde nuestro punto de vista, la literalidad del artículo es clara y no caben dudas razonables en relación a que todos los trámites del procedimiento de licencia de actividad, incluida la emisión de la resolución definitiva por parte del órgano ambiental, dejarán de ser exigibles con la entrada en vigor del anteproyecto de Ley.	

TITULO CUARTO. ORDENACION DE LAS ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE. CAPÍTULO IV. LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA				
ARTÍCULO	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
Artículo 51. Informe de imposición de medidas correctoras.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	Fruto de la modificación expresa de la LTH que dispone la Disposición Final Primera del presente anteproyecto de ley, el informe de imposición de medidas correctoras pasa a ser competencia de las administraciones locales en todos los casos, de conformidad con el artículo 51.1 del proyecto normativo: "*Los municipios de menos de 10.000 habitantes, deberán solicitar informe de imposición de medidas correctoras al órgano con competencias ambientales de la Diputación Foral correspondiente. Dicho informe que tendrá carácter preceptivo y vinculante, caso de ser obstativo, incluirá las medidas correctoras ambientales que sean exigibles al objeto de compatibilizar la actividad con el entorno."* Respecto a la redacción del artículo, se sugiere su revisión, puesto que no queda clara su redacción al no justificarse este extremo en la memoria justificativa del proyecto. Dado que la vigente Ley 3/98 determina que el informe de medidas correctoras solo *"será vinculante para la autoridad municipal cuando sea contrario a la concesión de la licencia de actividad, así como cuando determine la necesidad de imposición de medidas correctoras"*, no queda claro si el 51.1, establece el carácter vinculante del informe en caso de ser	El informe debe ser vinculante en todos los casos, tanto si es obstativo como si es favorable e impone medidas correctoras. A pesar de que el término obstativo es gramaticalmente correcto toda vez que procede del verbo obstar más el sufijo "-ivo, -iva" indicativo de "capacidad de, que sirve para" y que es una fórmula común para conformar adjetivos y sustantivos a partir de verbos por derivación; procede su supresión por si pudiera dar lugar a equívocos.	Se estima parcialmente.

		obstativo o en todos los casos. Por otro lado, consultado el diccionario de la Real Academia Española, no figura el término "obstativo".		
Artículo 52. Concesión de la licencia de actividad.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	El artículo 52 del anteproyecto de ley establece que el ayuntamiento deberá resolver y notificar el otorgamiento o la denegación de la licencia en el plazo máximo de 4 meses desde la presentación de la solicitud con la documentación completa. Ha de observarse (…) lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Por lo tanto, considerando que estamos materia procedimental (competencia exclusiva del legislador estatal), el establecer que el *dies a quo* se inicie cuando se complete la remisión de la documentación, no es ajustado a derecho.	Procede su estimación en cuanto la exigencia de que el dies a quo no se haga una vez que la documentación esté completa. Se suprime dicha referencia en el apartado 52.1.	Se estima
Artículo 53. Comunicación de inicio de la actividad clasificada o apertura	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	En el artículo 52.3, sobre la concesión de licencia de actividad, se establece el carácter negativo del silencio administrativo para el caso de la solicitud de licencias de actividad clasificada en contraposición a lo que se dispone, con carácter general ("*salvo que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma u órgano foral competente hubiera notificado su informe desfavorable y se hallase éste pendiente de ejecución por parte del respectivo Ayuntamiento*"), en la vigente Ley 3/1998. Esta modificación es ajustada a derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,	Efectivamente, se establece el silencio negativo para actividades sujetas a licencia municipal de actividad clasificada por la implicación ambiental y sobre la salud de los ciudadanos puedan tener. Más teniendo en cuenta que, tras la transposición de la Directiva de servicios, muchas actividades casi inocuas o de menor incidencia pasaron a estar sujetas a mera comunicación previa, quedando por tanto sujetas a licencia las que tienen una mayor incidencia. Lo que descarta su posible otorgamiento mediante silencio positivo. Esta exposición no es una alegación.	Se desestima

		del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el cual exige que el carácter negativo del silencio venga establecido en una norma con rango de ley. Por último, en relación al ámbito de aplicación de las actividades clasificadas, se sugiere la valoración de si procede derogar expresamente el Decreto 171/1985 de 11 de Junio, por el que se aprueban las normas técnicas de carácter general de aplicación a las actividades molestas, insalubres nocivas y peligrosas a establecerse en suelo urbano residencial.	El decreto pese a los años transcurridos sigue siendo utilizado como instrumento de apoyo en el establecimiento de medidas correctoras.	

TITULO QUINTO. EVALUACIÓN AMBIENTAL

CONSIDERACIONES PREVIAS

La existencia de varias alegaciones y propuestas que inciden sobre los mismos aspectos nos ha llevado a entender adecuado exponer una serie de consideraciones previas que servirán como explicación y respuesta general a los participantes en el proceso de información pública del Anteproyecto de Ley de Administración Ambiental.

1. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental.

De acuerdo con la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, *la evaluación de impacto medioambiental constituye un instrumento importante para la integración de consideraciones medioambientales en la preparación y adopción de algunos* ***planes y programas que puedan tener repercusiones significativas sobre del medio ambiente*** *en los Estados miembros, pues así se garantiza que se tendrán en cuenta durante la preparación, y antes de su adopción, esas repercusiones al elaborarse tales planes y programas.*

Igualmente, la Directiva señala que *todos los planes y programas preparados para una serie de sectores y que establecen un marco para la futura autorización de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; Directiva modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5), y todos los planes y programas que deban someterse a evaluación según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7; Directiva modificada por última vez por la Directiva 97/62/CE (DO L 305 de 8.11.1997, p. 42)* ***parecen tener efectos significativos sobre el medio ambiente y, como norma, deben quedar sujetos a una sistemática evaluación medioambiental.*** *Cuando establezcan el uso de pequeñas zonas a escala local o constituyan modificaciones menores de dichos planes o programas sólo se evaluarán cuando los Estados miembros determinen que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente,* y que *otros planes y programas que establezcan el marco de futura autorización de proyectos pueden no tener efectos significativos sobre el medio ambiente en todos los casos y deben evaluarse sólo cuando los Estados miembros determinen que puedan tener esos efectos.*

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva,

1. ***Se llevará a cabo una evaluación medioambiental****, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 a 9 de la presente Directiva,* ***en relación con los planes y programas*** *a que se refieren los apartados 2 y 4* ***que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.***

2. Salvo lo dispuesto en el apartado 3, serán objeto de evaluación medioambiental todos los planes y programas:

a) que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE, o

b) que, atendiendo al efecto probable en algunas zonas, se haya establecido que requieren una evaluación conforme a lo dispuesto en los artículos 6 o 7 de la Directiva 92/43/CEE.

3. Los planes y programas mencionados en el apartado 2 que establezcan el uso de zonas pequeñas a nivel local y la introducción de modificaciones menores en planes y programas mencionados en el apartado 2 únicamente requerirán una evaluación medioambiental ***si los Estados miembros deciden que es probable que tengan efectos significativos en el medio ambiente.***

4. En relación con los planes y programas distintos a los mencionados en el apartado 2, que establezcan un marco para la autorización en el futuro de proyectos, los Estados miembros determinarán si el plan o programa en cuestión puede tener efectos medioambientales significativos.

5. Los Estados miembros determinarán si algún plan o programa contemplado en los apartados 3 y 4 puede tener efectos significativos en el medio ambiente, ya sea estudiándolos caso por caso o especificando tipos de planes y programas, o combinando ambos métodos. A tal efecto, los Estados miembros tendrán en cuenta en cualquier caso los criterios pertinentes establecidos en el anexo II, ***a fin de garantizar que los planes y programas con efectos previsiblemente significativos en el medio ambiente queden cubiertos por la presente Directiva.***

Por su parte, la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, *se aplica a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos públicos y privados que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente* (art. 1), y en su artículo 2 establece que *Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos en el medio ambiente. Estos proyectos se definen en el artículo 4.*

La redacción de estos textos es muy clara en cuanto a que únicamente los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente deben someterse a evaluación ambiental. Los planes, programas y proyectos pueden tener o no efectos sobre el medio ambiente, pero procede aplicar la evaluación ambiental cuando los efectos que puedan tener sean significativos. *Sensu contrario*, no procede aplicar la evaluación ambiental cuando los planes, programas y proyectos no puedan tener efectos significativos.

La Directiva 2011/92/UE señala determinados planes y programas que *parecen tener efectos significativos sobre el medio ambiente y, como norma, deben quedar sujetos a una sistemática evaluación medioambiental*, mientras que señala que *otros planes y programas que establezcan el marco de futura autorización de proyectos pueden no tener efectos significativos sobre el medio ambiente en todos los casos y deben evaluarse sólo cuando los Estados miembros determinen que puedan tener esos efectos.*

En este sentido, la Guía sobre aplicación de la Directiva 2001/42/CE, publicada por la Comisión Europea en 2003 recoge lo siguiente:

Introducción. Apartado 1.6: *El primer paso para comprender ésta (*la Directiva*) es decidir a qué planes y programas es aplicable. El documento, por lo tanto, empieza comentando su ámbito de aplicación, centrando la atención en el concepto de «planes y programas», así como* ***en la cuestión de si es probable que tengan efectos significativos en el medio ambiente.*** *A continuación, se examinan, por orden, el contenido del informe medioambiental, los requisitos en cuanto a garantías de calidad, las disposiciones en materia de consulta, las características del requisito de supervisión y, por último, las relaciones entre la Directiva y otros actos legislativos comunitarios.*

Ámbito de aplicación de la Directiva. Apartado 3.1: *Las disposiciones que determinan el ámbito de aplicación de la Directiva están recogidas principalmente en dos artículos relacionados entre sí: el artículo 2 define determinadas características que deben poseer los planes y programas para que les sea aplicable la Directiva. A continuación,* ***el artículo 3 define unas normas para determinar cuáles de esos planes y programas es probable que tengan efectos significativos en el medio ambiente y, por lo tanto, deberán ser sometidos a una evaluación medioambiental.*** *En el apartado 3 del artículo 13 se define el ámbito de aplicación temporal (véanse los párrafos 3.64 a 3.66 del presente documento).*

Ámbito de aplicación de la Directiva. Apartado 3.44: *En algunos casos quizá fuera posible una combinación de ambos métodos (estudio caso por caso y especificación de tipos de planes o programas).* ***El método general consistiría en definir una clase de planes o programas que, en circunstancias especificadas, probablemente no tendrían efectos significativos en el medio ambiente y estipular que, en otras circunstancias, la determinación se hiciera caso por caso.***

Ámbito de aplicación de la Directiva. Apartado 3.50: *A lo largo de todo el texto de la Directiva,* ***la evaluación medioambiental se supedita a la probabilidad de que se produzcan efectos significativos en el medio ambiente****. Predecir los efectos medioambientales probables es complejo, especialmente en los planes o programas de alcance relativamente amplio, o de alto nivel, en los que puede ser difícil anticipar los resultados de la aplicación en el momento de aprobarlos.* ***El uso de «puede» o «probable» da a entender que los efectos medioambientales que hay que tener en cuenta son los que cabe esperar con un grado razonable de probabilidad.***

Ámbito de aplicación de la Directiva. Apartado 3.57: *Existe mucha i****ncertidumbre****, y la falta de datos o conocimientos suficientes puede hacer difícil el decidir si pueden producirse efectos significativos. No obstante, es de suponer que siempre será posible una estimación aproximada de los efectos.*

De forma similar a lo recogido en la Directiva 2001/42/CE (evaluación ambiental de planes y programas), la Directiva 2011/92/UE (evaluación ambiental de proyectos) diferencia tres clases de proyectos:

- Los proyectos que pertenecen a determinadas clases tienen repercusiones notables sobre el medio ambiente y deben, en principio, someterse a una evaluación sistemática.

- Los proyectos que pertenecen a otras clases no tienen necesariamente repercusiones importantes sobre el medio ambiente en todos los casos y esos proyectos deben someterse a una evaluación cuando los Estados miembros consideren que podrían tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente.

- Los Estados miembros pueden establecer umbrales o criterios a fin de determinar, basándose en la importancia de sus repercusiones medioambientales, cuáles de dichos proyectos procede evaluar. ***Los Estados miembros no tienen la obligación de estudiar caso por caso los proyectos por debajo de esos umbrales o ajenos a esos criterios.***

Hay que llamar la atención sobre la diferente técnica que utilizan ambas directivas a la hora de delimitar su respectivo ámbito de aplicación. La Directiva 2001/42/CE utiliza los conceptos de posibilidad y probabilidad de que un plan o programa pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, en relación con el tipo de proyectos de los que el plan o programa constituirá un marco para su autorización en el futuro; específicamente, la Directiva repara en si dichos proyectos se encuentran o no sometidos a evaluación de impacto ambiental. En cambio, la Directiva 2011/92/UE establece listas cerradas de tipos de proyectos y umbrales, mediante las que se determina el sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o bien la necesidad de que los Estados miembros determinen tal sometimiento mediante lo que la Directiva 2011/92/UE denomina "una comprobación previa". En ningún caso se establece la obligación de que los Estados miembros lleven a cabo tal comprobación previa, ni evidentemente una evaluación de impacto ambiental, para los tipos de proyectos que no se incluyen en el Anexo I o en el Anexo II.

Por último, la Directiva 2011/92/UE incluye entre los criterios para determinar el sometimiento de un determinado proyecto a evaluación ambiental "la probabilidad del impacto".

Así las cosas, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece en su artículo 1 (Objeto y finalidad de la Ley) que la Ley *establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente...*, por lo que cabe interpretar *sensu contrario* que la Ley no se aplica a los planes, programas y proyectos que no puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Esta interpretación se puede hacer a la vista de todo lo expuesto sobre la Directiva 2001/42/CE y su Guía de aplicación y sobre la Directiva 2011/92/UE.

La Ley 21/2013 abunda en la utilización del concepto de la posibilidad de que un plan, programa o proyecto tenga efectos significativos sobre el medio ambiente. Así, por ejemplo:

- Artículo 5. Definiciones.

a. Evaluación ambiental: *...se analizan los efectos significativos que tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos...sobre el medio ambiente...*

- Artículo 31. Informe ambiental estratégico.

2.a. El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente...

En lo que se refiere a la técnica utilizada para delimitar el ámbito de aplicación de los procedimientos de evaluación estratégica de planes y programas y el de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos, la Ley sigue fielmente a las directivas: utiliza los conceptos de posibilidad y probabilidad de que un plan o programa pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, en relación con los proyectos enmarcados en dicho plan o programa, mientras que utiliza listas cerradas en el caso de los proyectos.

En varias de las alegaciones recogidas, se señala que las directivas europeas no basan el sometimiento de los planes, programas y proyectos a evaluación ambiental a que el grado de probabilidad de sus efectos significativos sobre el medio ambiente sea “alto”. Sin embargo, ya hemos visto que la Directiva 2001/42/CE distingue determinados planes y programas que “parecen” tener efectos significativos sobre el medio ambiente, de otros planes y programas, que pueden no tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Y también, que la Guía de Aplicación de la Directiva, de la Comisión Europea, señala que el uso de “puede” o “probable” en la Directiva da a entender que los efectos medioambientales que hay que tener en cuenta son los que cabe esperar **con un grado razonable de probabilidad**. Igualmente, hemos analizado los tres tipos de conjuntos de proyectos: los que tienen repercusiones notables sobre el medio ambiente, los que no tienen necesariamente dichas repercusiones en todos los casos y, por último, los que se encuentren por debajo de un umbral y para los que los Estados miembros no tienen la obligación de llevar a cabo una comprobación previa.

También hemos visto que la Ley 21/2013 regula los procedimientos de evaluación ambiental que hay que aplicar a los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, pero no contiene ninguna obligación en el sentido de que otros planes, programas y proyectos distintos de aquéllos deban someterse igualmente a evaluación ambiental.

La Ley 21/2013 incluye entre los procedimientos de evaluación ambiental, tanto la evaluación ambiental estratégica (de planes y programas), como la evaluación de impacto ambiental (de proyectos), en sus dos modalidades, ordinaria y simplificada. Los procedimientos ordinarios vienen a constituir la transposición al ordenamiento jurídico español del procedimiento de evaluación medioambiental descrito en los artículos 4 y ss. de la Directiva 2001/42/CE y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental descrito en los artículos 5 y ss. de la Directiva 2011/92/UE. Por su parte, los procedimientos simplificados vienen a dar respuesta a lo recogido en el artículo 3.5 de la Directiva 2001/42/CE, que obliga a los Estados miembros a determinar si algún plan o programa puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque no cumpla los requisitos mínimos señalados en el artículo 3.2 (o bien, aunque cumpliéndolos, si puede considerarse que establece el uso de una zona pequeña a nivel local, o bien, que se trata de una modificación menor), así como, en relación a los proyectos, a la comprobación previa recogida en el artículo 4.2 de la Directiva 2011/92/UE.

Del contenido de la norma se desprende con toda claridad cuál es el ámbito de aplicación de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica ordinaria, evaluación de impacto ambiental ordinaria y evaluación de impacto ambiental simplificada. No ocurre lo mismo con el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica simplificada, de forma que, en los cuatro años de aplicación de la Ley, se ha podido detectar una gran inseguridad en lo que se refiere a las decisiones que deben adoptar los órganos responsables de la tramitación de los planes y programas que no se encuentran en el ámbito de la evaluación ambiental ordinaria.

El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada es de gran trascendencia, tanto desde el punto de vista de la protección del medio ambiente como desde el punto de vista de la carga administrativa que implica para la tramitación de los planes y programas. Ambos extremos, la protección del medio ambiente y la carga administrativa, al igual que en cualquier otro aspecto del quehacer administrativo, deben guardar una proporción y, como hemos visto, la carga administrativa que supone la evaluación ambiental estratégica debe asumirse únicamente cuando se prevea que los planes y programas pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En ninguna de las alegaciones recogidas se ha argumentado la necesidad o conveniencia de aplicar los procedimientos de evaluación ambiental a planes, programas y proyectos que no puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, ni tampoco se ha aportado ningún análisis

coste/beneficio en relación con los aspectos desarrollados en este párrafo.

Ahora bien, aunque no lo explica con total claridad, la Ley parece distinguir, dentro del conjunto de los planes y programas que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente, entre unos planes y programas determinados, que deben someterse al procedimiento ordinario, y otros planes y programas que deben someterse al procedimiento simplificado. Para comprender el alcance del texto legal, es imprescindible recurrir a su exposición de motivos en la que cabe destacar las siguientes expresiones:

- La obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente...

- Para determinados tipos de planes, programas o proyectos las directivas establecen la presunción iuris et de iure de que, en todo caso, tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, deben ser evaluados...de acuerdo al procedimiento ordinario. Para los restantes planes, programas y proyectos, cada Estado miembro deberá realizar un análisis, bien caso por caso, bien mediante umbrales o bien combinando ambas técnicas, para determinar si tienen efectos significativos sobre el medio ambiente. Este análisis es lo que se ha denominado procedimiento de evaluación simplificado y si concluyese que el plan, programa o proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, deberá realizarse una evaluación ordinaria.

Sin embargo, la exposición de motivos de la Ley resulta algo confusa en cuanto a que se equipara la expresión “tiene” a “puede tener”, que, a todas luces no es lo mismo.

Por otra parte, también hay que señalar una confusión en el caso del procedimiento simplificado, ya que el mismo se aplica a planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente (art. 1, puesto en relación con el art. 5. 1.a.1º). Si, como resultado del procedimiento, el órgano ambiental determina que el plan o programa puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente (art. 31.2.a), entonces, el plan o programa debe someterse a l procedimiento ordinario. Sin embargo, la condición para que el plan o programa se someta al procedimiento ordinario se cumple desde el mismo momento en que el plan o programa se encuentra sometido al procedimiento simplificado: puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Esta aparente confusión se explica únicamente mediante la premisa de que la posibilidad de que un plan o programa tenga efectos significativos sobre el medio ambiente no es igualmente probable en todos los casos, y ello a la vista de lo recogido en la Directiva 2001/42/CE y en su Guía de Aplicación.

Así, cuando la Directiva se pronuncia en el sentido de que determinados planes y programas parecen tener efectos significativos sobre el medio ambiente, ello se interpreta en términos de certeza y se articula en el proyecto de Ley de Administración Ambiental como de una posibilidad con alto grado de probabilidad. Y cuando la Directiva señala que otros planes y programas pueden no tener efectos significativos sobre el medio ambiente, se interpreta en términos de incertidumbre, o lo que es lo mismo, desconocimiento previo del grado de probabilidad con la que pueden darse efectos significativos.

Coherentemente con esta interpretación, surge un tercer conjunto de planes y programas para los que, por su escasa incidencia sobre el medio ambiente, se tiene a priori la certeza de que no van a poder tener efectos significativos sobre el medio ambiente y, en consecuencia, no se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley 21/2013.

Estos términos de certeza, incertidumbre, posibilidad, probabilidad y grado de probabilidad tienen pleno encaje tanto en la Directiva 2001/42/CE, como en la Ley 21/2013, y ayudan, y mucho, a clarificar el ámbito de aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica.

Por otra parte, parece razonable estimar la sugerencia de la Dirección de Servicios en el sentido de recoger la referencia al grado de probabilidad de forma similar en los cuatro procedimientos concernidos. En efecto, aunque la técnica para delimitar el ámbito de aplicación de los procedimientos sea diferente en los casos de planes y programas, por un lado, y de proyectos, por otro, es cierto que las directivas recogen de forma similar la certeza de que determinados planes, programas y proyectos puedan tener impactos significativos en el medio ambiente y deban someterse, en consecuencia a evaluación ambiental, junto con la incertidumbre para otros planes, programas y proyectos, para los que se establece la obligación de examinar caso por caso o mediante el establecimiento de umbrales la pertinencia de su evaluación.

Para la redacción del proyecto de Ley de Administración Ambiental, se ha interpretado que el ámbito de aplicación de la Ley 21/2013 queda restringido a los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y se ha optado por definir el ámbito de aplicación de la Ley autonómica, en materia de evaluación ambiental, tanto por inclusión (art. 59, 60, 72 y 74 bis, puestos en relación con los distintos apartados del anexo II), como por exclusión (art. 65). Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en la legislación básica en la materia, se ha recogido la posibilidad de exceptuar determinados proyectos que, aun encontrándose en el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental, pueden ser objeto de un procedimiento alternativo (otras formas de evaluación) (art. 66). En consecuencia, el texto normativo que se recoge en el Anteproyecto de Ley distingue con claridad los casos que la propia Ley considera “excluidos de su ámbito de aplicación”, de otros casos que, aún encontrándose incluidos en dicho ámbito de aplicación, “pueden ser excluidos” del procedimiento de evaluación. Esta última exclusión debe acordarse en cada caso y se reserva únicamente para casos excepcionales de proyectos, inicialmente incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley, que pueden ser objeto de otra forma de evaluación.

2. Indeterminación de algunos conceptos jurídicos.

Se han formulado alegaciones sobre la inseguridad jurídica que suscita la utilización de conceptos jurídicos indeterminados en el proyecto de Ley, en particular, en relación con las cuestiones que se desarrollan en el apartado anterior, tales como efecto significativo, certeza, incertidumbre, posibilidad, probabilidad o grado de probabilidad.

Ya se ha expuesto que dichos conceptos se utilizan en la normativa en materia de evaluación ambiental, tanto en los textos de las Directivas, como en la legislación básica del Estado y se ha argumentado que el proyecto de Ley incorpora además el concepto de grado de probabilidad, con objeto de reducir la inseguridad jurídica en cuanto al ámbito de aplicación de los distintos procedimientos de evaluación ambiental que se regulan.

Falta explicar aquí las técnicas que se utilizan en el conjunto de normas citadas (europeas, estatales y autonómicas) para reducir al máximo la inseguridad jurídica. Para ello, hay que poner de relieve, en primer lugar, que las expresiones jurídicas actuales en la materia son el resultado de un proceso complejo cuyo origen, aunque basado en conceptos técnicos anteriores (de la década de los 60), podemos establecer en aquella primera Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y

privados sobre el medio ambiente.

Es muy notable comprobar la escasa evolución que, en las tres décadas transcurridas, ha tenido la expresión inicial “que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente” hasta la actual “que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente”. Con ello se quiere ilustrar que no ha parecido necesario modificar sustancialmente tales conceptos.

En efecto, ya desde aquel primer hito, los esfuerzos para determinar el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental a partir de dichos conceptos, se han centrado en completar, afinar y definir técnicamente los tipos de proyectos que deben someterse a evaluación ambiental, sus características específicas según el tipo de proyecto y los umbrales más o menos fácilmente medibles que se pueden tener en cuenta. Es decir, que la inseguridad jurídica se ha intentado paliar dotando a los textos legales de contenidos cada vez más técnicos. Según esta reflexión, el concepto de “proyecto que pueda tener efecto significativo sobre el medio ambiente” queda determinado, de alguna manera, por su relación con un listado de casos o supuestos a los que se les supone a *priori* una capacidad de generar repercusiones importantes sobre el medio ambiente.

Ya desde el primer momento se introdujo en la Directiva la técnica de un doble listado que contenía, por una parte, los supuestos que debían someterse en todo caso a evaluación ambiental y, por otra, otra serie de supuestos para los que los estados miembros debían adoptar decisiones particulares al respecto. Hay que recordar aquí que, si bien la primera transposición de aquella Directiva al ordenamiento jurídico español tuvo lugar en 1986, ello se hizo de forma incompleta y sólo en 2001 se incorporó a dicho ordenamiento jurídico el sistema de doble listado.

En este sentido, en el apartado anterior se ha comentado de forma exhaustiva la distinción que se hace en las normas entre aquellos proyectos que muy probablemente podrán dar lugar a efectos ambientales significativos y aquellos otros para los que habrá que decidir caso por caso si existe, en efecto, una alta probabilidad.

Muchos años después, en 2001, se promulga la primera Directiva referente a la evaluación ambiental de planes y programas, que, incorporando conceptos similares para definir su ámbito de aplicación (planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente), los pone en relación con pocos y muy determinados supuestos que, en algunos casos, aún no se encuentran suficientemente determinados. De hecho, el supuesto que permite una mayor determinación respecto de los planes y programas que deben someterse a evaluación ambiental contiene una referencia clara a “un marco para la autorización en el futuro de proyectos que se encuentren sometidos a evaluación de impacto ambiental”.

El sistema de doble listado para los proyectos y de referencia a la evaluación de proyectos, en el caso de los planes y programas, permite, con un cierto grado de dificultad técnica, determinar con seguridad si un plan, programa o proyecto concreto se encuentra sometido a alguno de los procedimientos de evaluación ambiental. Sin embargo, en el momento actual aún existe cierta inseguridad con respecto a los planes, programas o proyectos que, sin encontrarse sometidos a evaluación ambiental por constituir alguno de los supuestos citados, puedan afectar de forma apreciable a los lugares de la Red Natura 2000.

El proyecto de Ley introduce el concepto de grado de probabilidad con el que pueden producirse efectos ambientales significativos y ello no supone un aumento de la inseguridad jurídica con respecto a la legislación básica del Estado. Al contrario, contribuye a que el órgano sustantivo pueda adoptar una decisión clara para aplicar una evaluación ambiental a un plan, programa o

proyecto concreto, ya que, de acuerdo con el texto normativo propuesto, si dicho órgano se ve incapaz de determinar el grado de probabilidad con el que el plan, programa o proyecto puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, o lo que es lo mismo, si mantiene una cierta incertidumbre sobre la posibilidad de que dichos efectos tengan lugar, entonces debe someter el plan, programa o proyecto, al menos, al procedimiento simplificado que corresponda.

CAPITULO I. DISPOSICIONES COMUNES A LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y A LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL				
ARTÍCULO	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
Artículo 59. Evaluación ambiental	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMPTV	El artículo 59, en el que se recogen los fines de la evaluación ambiental, se incorpora un párrafo 3º que determina que "Sin perjuicio del régimen que resulte de aplicación a las modificaciones, no deberán someterse a evaluación ambiental los proyectos que cuenten con alguna habilitación administrativa vigente". Esta cuestión más bien parece propia de un régimen transitorio por lo que si bien no se cuestiona su contenido se sugiere, por coherencia, se recoja en otro artículo o disposición.	El precepto contenido en el apartado 3 del artículo 59 es necesario para evitar efectos retroactivos en la exigencia de la evaluación ambiental a las instalaciones que recibieron una autorización o licencia cuando la evaluación ambiental no era preceptiva. Igualmente, parece innecesario volver a someter a evaluación ambiental una instalación que ya se sometió, únicamente por el hecho de que deba tramitarse una nueva autorización, como es el caso de las instalaciones que deben obtener una autorización ambiental integrada, por haberse ampliado el ámbito de aplicación de la norma, aunque no hayan sido objeto de ninguna modificación. No se trata de una cuestión transitoria, ya que puede tener lugar en cualquier momento en que, por modificación de otro texto legal, se amplíe el ámbito de aplicación de un procedimiento autorizatorio.	Se desestima
Artículo 60. Procedimientos de evaluación ambiental	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMPTV	La adecuación al grado de probabilidad con que dichos planes, programas y proyectos puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente se ve claramente en las letras a) y b), pero no se desarrolla en las letras c) y d).	Acogiendo la observación, en el nuevo texto del proyecto de Ley se ha optado por dar una redacción similar en lo referente al grado de probabilidad con que los planes, programas y proyectos pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente.	Se estima
		Respecto a las letras e) y f) sobre la determinación del alcance de la evaluación de los planes, programas y proyectos que deban	En relación a la determinación del alcance como un procedimiento autónomo indicar que se ha dado una nueva redacción al artículo	Se estima

		someterse al procedimiento ordinario, ni la memoria justificativa del proyecto, ni la propia norma dejan claro que sean procedimientos diferenciados en vez de trámites o actuaciones previas de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental, tal y como se recogen en los artículos 17.1.b) y 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, respectivamente. Por otro lado, resulta llamativo que ambos procedimientos que se relacionan como procedimientos independientes luego se desarrollen en un solo artículo, el 67.	eliminando dicha opción.	
Artículo 62. Nulidad de planes y proyectos no evaluados	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMPTV	No obstante, en relación al título del artículo y el contenido del mismo, si conforme al contenido del propio artículo 62, el mismo sería aplicable, además de a planes y proyectos, a programas, se sugiere modificar el título para salvaguardar la coherencia entre la denominación y el contenido del artículo.	Se estima y se modifica el título del precepto para incluir, conforme al contenido del precepto, el término “programas”.	Se estima
Artículo 63. Capacidad técnica y responsabilidad	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMPTV	El artículo 63 se refiere a la capacidad técnica y responsabilidad de los autores de los documentos técnicos pertinentes para realizar la evaluación ambiental reproduciendo el contenido del artículo 16 (de carácter básico) de la Ley de Evaluación Ambiental estatal, obviando la necesidad de que en tales documentos conste la fecha de conclusión y firma del autor.	Se acoge la observación y se modifica el artículo en el sentido indicado.	Se estima
	AUTORIDAD VASCA DE LA	Se recomienda establecer en los artículos 25 y 63 una simple referencia al "técnico competente “para la realización de la	En la línea de las respuestas a las alegaciones realizadas por otros interesados, se acoge parcialmente la alegación	Se estima

	COMPETENCIA	documentación de la evaluación ambiental, obviando referencias a títulos o profesiones reguladas que podrían ser utilizados por operadores previamente instalados para restringir el acceso a la prestación de dichos servicios. Ello, además, resultaría congruente con la técnica normativa utilizada por el propio anteproyecto en la redacción de los artículos 47 y 53, que hacen referencia únicamente al técnico competente en los supuestos de la comunicación del inicio de la actividad. Asimismo, con la redacción que ofrece el artículo 89 del mismo, relativo al personal de la inspección ambiental, que reconoce a personas o entidades con capacidad técnica facultades de actuaciones materiales de inspección que no estén reservadas a funcionarios públicos por entrañas ejercicio de potestades públicas o por otras circunstancias. Por su parte, cabe valorar favorablemente la necesidad de identificación del autor de la documentación técnica de la evaluación, necesaria para la determinación de la Independencia de los mismos, así como de las responsabilidades que pudieran corresponder.	modificándose el texto del anteproyecto para referirse únicamente a personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales. Se elimina la referencia a la educación superior.	parcialmente.

Artículo 64. Confidencialidad	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMPTV	Se reproduce el contenido del artículo 15 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Por otro, repite lo establecido en el 26 del propio anteproyecto de ley, para todos los procedimientos de intervención ambiental. Siendo la evaluación ambiental un procedimiento de intervención ambiental, se sugiere la revisión de dichos artículos al objeto de evitar repeticiones innecesarias en el texto normativo.	El articulado del proyecto de Ley recoge en su Título Cuarto lo referente a la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente, y, particularmente, en el artículo 18, los regímenes de intervención ambiental, entre los que no se encuentra la evaluación ambiental. La evaluación ambiental se configura como un instrumento de protección del medio ambiente distinto de los regímenes de intervención ambiental antedichos, y queda regulada en el Título Quinto del proyecto de Ley. Y todo ello sin perjuicio de que se haya considerado necesario regular sobre la confidencialidad de las informaciones proporcionadas por los promotores, de forma similar en ambos casos.	Se desestima
Artículo 65. Planes y programas excluidos de evaluación ambiental	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	Lo relevante es que excluye automáticamente de la aplicación de la Ley proyectos que tengan como único objeto la protección civil, cuestión que no se refleja expresamente en la legislación básica del estado. Sucede lo mismo con la exclusión del artículo 65 en relación a los planes y programas que "*debido a la escasa envergadura de las acciones que puedan derivarse de los planes, programas y proyectos, o de sus modificaciones, los efectos que puedan producir en el medio ambiente no sean significativos de forma manifiesta".* (…)	Dejando aparte los errores terminológicos ya corregidos, esta observación tiene el mismo contenido que otras alegaciones recibidas que han sido respondidas en los siguientes términos. Tal como se ha argumentado en las consideraciones previas expuestas al principio de este apartado, la evaluación ambiental se aplica a los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, bien cuando exista una certeza (alto grado de probabilidad) de que dichos efectos vayan a producirse, o bien, cuando exista una incertidumbre (grado de probabilidad indeterminado). Por el contrario, no debe	Se desestima

		Ambos artículos, si bien son similares no quieren decir lo mismo. Para empezar en el anteproyecto de ley hay una contradicción en el título del artículo y su contenido. Mientras que en el título únicamente se hace referencia a Planes y programas excluidos de evaluación ambiental, en el artículo se refiere a proyectos. Además, el artículo se refiere, al sometimiento de evaluación ambiental estratégica y ésta solo procede en el caso de planes y programas, y no a proyectos sometidos a otro tipo de procedimiento de evaluación ambiental. Por un lado, establece la condición de que "*la aplicación del procedimiento pueda tener repercusiones negativas sobre los objetivos de defensa nacional o de protección civil*" para excluir del ámbito de aplicación de evaluación ambiental estratégica planes, programas o proyectos cuando tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia. Finalmente, habilita al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco para establecer *criterios para determinar en qué situaciones puede considerarse que los posibles efectos de un plan o programa, o de una modificación de un plan o programa, sobre el medio ambiente no van a ser significativos,* mientras que el legislador estatal únicamente determina que la exclusión pueda darse únicamente sobre proyectos en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado tal como se recoge en el artículo 66 del anteproyecto de ley.	aplicarse cuando exista una certeza de que dichos efectos no van a poder producirse (de forma manifiesta). La determinación de tales conceptos se encuentra recogida en la puesta en relación (directa o indirecta) de los mismos con el doble listado de proyectos del anexo II. El criterio fundamental para considerar que un plan, programa o proyecto concreto no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental, es que, de forma manifiesta, es decir, sin incertidumbres, no haya posibilidad de que se produzcan efectos significativos sobre el medio ambiente. Dado el carácter de este criterio, no es coherente establecer un procedimiento para determinar tal cuestión, ya que, si para ello fuera necesario cualquier trámite con intervención de otros órganos distintos al que debe tramitar el procedimiento sustantivo, la suposición de la ausencia de afección significativa no sería manifiesta. Por el contrario, en caso de que exista una incertidumbre sobre si el plan, programa o proyecto puede o no tener efectos significativos sobre el medio ambiente, la legislación básica en la materia ha establecido que debe seguirse un procedimiento de evaluación simplificada, tal como se recoge en el proyecto de Ley. Y todo ello sin perjuicio de que, sin ánimo exhaustivo, puedan darse a conocer determinados supuestos, extraídos de la experiencia del órgano ambiental en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los que la probabilidad	

		Como ya hemos comentado anteriormente, siendo competencia exclusiva del estado la legislación básica sobre protección del medio ambiente, la doctrina constitucional tan solo admite la potestad autonómica exclusivamente para establecer “normas adicionales de protección”. En cuanto a estas normas adicionales de protección, el TC insiste en que las CCAA únicamente pueden aumentar el nivel de protección de la norma básica, pero no disminuirlo (STC 156/95, en sanciones, STC 89/00 en fórmulas de EIA, STC 109/2017 por excepciones a la EAE o SSTC 196/1996 y 16/1997), ni contradecirlo, STC 15/98, o autorizando una comercialización que la básica prohíbe en la STC 166/2002). Por todo lo anteriormente expuesto se insta a revisar y en su caso modificar el artículo 65.	de que puedan darse efectos significativos sobre el medio ambiente sea bien conocida y muy reducida. Por otra parte, el proyecto de Ley ha optado por reducir al mínimo los detalles procedimentales, máxime cuando la evaluación ambiental no queda reducida al ámbito de los instrumentos urbanísticos. Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en la legislación básica en la materia, se ha recogido la posibilidad de excluir determinados proyectos que, aun encontrándose en el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental, pueden ser objeto de un procedimiento alternativo (otras formas de evaluación). En consecuencia, el texto normativo que se recoge en el proyecto de Ley distingue con claridad los casos que la propia Ley considera “excluidos de su ámbito de aplicación”, de otros casos que, aún encontrándose incluidos en dicho ámbito de aplicación, “pueden ser excluidos” del procedimiento de evaluación. Esta última exclusión debe acordarse en cada caso y se reserva únicamente para casos excepcionales de proyectos, inicialmente incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley, que pueden ser objeto de otra forma de evaluación. En definitiva, se considera que el Anteproyecto de Ley en ningún momento restringe el ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, sino que lo explicita y aclara. Por último, se han corregido las incorrecciones detectadas en la utilización de los términos “planes y programas”, “proyectos” y	

			“evaluación ambiental estratégica”.	
Artículo 66. Proyectos exceptuables de evaluación ambiental	AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	Sin embargo, el artículo 66.1 del anteproyecto establece que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá, exceptuar. mediante acuerdo motivado, a alguno de los proyectos recogidos en el Anexo II de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental. Ello conlleva una decisión discrecional de la Administración Pública que podría conllevan una diferencia de trato entre operadores económicos. En orden a evitar o mitigar dicha consecuencia, se recomienda la concreción de la categoría de proyectos (no todos) que pueden ser eximidos de la obligación de ser sometidos a evaluación y que, en cualquier caso, la motivación se encuentre amparada en razones de interés general sin que la protección del medioambiente este en cuestión.	Tiene el mismo contenido que varias alegaciones recibidas en torno a este artículo en la fase de información pública, por lo que hay que tratarla en idéntico sentido desestimatorio. En cualquier caso, la existencia de situaciones en las que las AAPP puedan optar entre distintas soluciones posibles (discrecionalidad) es un hecho que legalmente es admisible siendo la arbitrariedad en la actuación pública lo que es imprescindible evitar. En este sentido, no existiría a priori en la supuesta diferencia de trato alegada entre operadores económicos arbitrariedad alguna, toda vez que estaría basada en un análisis específico de cada caso concreto que meritaría la toma de decisiones diferentes pero ajustadas a derecho.	Se desestima
Artículo 69. Resolución de discrepancias	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMPTV	Respecto al artículo 69, sobre resolución de discrepancias, el artículo 2 del anteproyecto de ley, establece que tanto la declaración ambiental estratégica como la declaración de impacto ambiental, son informes preceptivos y vinculantes y por lo tanto resulta llamativo que en caso de discrepancia entre el órgano ambiental y el órgano sustantivo sobre el contenido de la declaración o del informe de impacto ambiental, resuelva el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco o en su caso, de la Diputación Foral. Se sugiere valorar si procede el mantenimiento del precepto, considerando que las	Se acoge la observación y, en consecuencia, el anteproyecto de Ley considerará incompatible el carácter vinculante de la decisión ambiental con el trámite de discrepancias. Se opta por eliminar el precepto.	Se estima

		declaraciones e informes son vinculantes.		
Artículo 71. Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental	EMAKUNDE	En atención a lo previsto en el artículo 16 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, será preciso incluir la variable de sexo en el mismo, de tal modo que permita realizar una posterior recopilación y explotación de datos desagregados por sexo relativos a la participación que hacen mujeres y hombres en dichos procedimientos.	Se ha considerado necesario que el proyecto de Ley explicite que no todas las personas interesadas deberán registrarse, sino únicamente aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro que reúnan los requisitos señalados en el artículo 23.1 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Al no ser personas físicas, la alegación no puede tomarse en consideración.	Se desestima

Sin artículo específico	AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	La Administración Pública puede tener la condición de promotor de planes, programas y proyectos que deben ser sometidos a evaluación ambiental. Entre la documentación que debe ser remitida a evaluación, se encuentra el estudio ambiental (estratégico u ordinario) en el que se debe analizar los posibles efectos significativos derivados o que puedan derivarse de la aplicación del plan o proyecto. En el supuesto que la Administración Pública competente contrate la elaboración de dicho estudio con operadores económicos del mercado afectado deberá fomentarse la libre competencia de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), utilizando preferente el procedimiento abierto. Idéntica consideración debe realizarse en el supuesto que la Administración Ambiental competente contrate con operadores económicos del mercado la elaboración del Informe de impacto medioambiental.	Alegación expositiva. Las AAPP, por descontado, deberán ordenar su actuación de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), utilizando los procedimientos de contratación que sean exigibles en virtud de la misma.	Alegación expositiva.

TITULO QUINTO. EVALUACIÓN AMBIENTAL CAPITULO II. EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA DE PLANES Y PROGRAMAS				
ARTÍCULO	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
Artículo 72. Ámbito de la evaluación ambiental estratégica	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	El artículo 72 al concretar el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica determina en todo caso que la elaboración del plan o programa venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno. Procede recordar que el planeamiento urbanístico viene amparado y no exigido por disposición legal o reglamentaria y en ningún caso por acuerdo de Consejo de Gobierno, por lo que procede revisar la redacción de este artículo. En este párrafo, procede traer a colación el artículo 10 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, de carácter básico, el cual establece que “La falta de emisión de la declaración ambiental estratégica, del informe ambiental estratégico, de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, en los plazos legalmente establecidos, en ningún caso podrá entenderse que equivale a una evaluación ambiental favorable”.	La Ley 21/2013 recoge idénticos términos para establecer el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. Para la redacción del anteproyecto de Ley se ha optado por interpretar que el término “exigido” no se refiere a que una disposición legal o reglamentaria obligue por sí misma a elaborar un plan o programa, sino a que, una vez adoptada la decisión de elaborar un plan o programa, exista una exigencia de que dicho plan o programa sea elaborado y aprobado conforme a una disposición legal o reglamentaria. No se entiende la referencia al artículo 10 de la Ley 21/2013, realizada por la Dirección, en el presente contexto.	Se desestima

Artículo 73. Naturaleza y contenido de la Declaración Ambiental Estratégica	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	El tercer párrafo de este artículo versa sobre la vigencia de la declaración ambiental estratégica y prevé la posibilidad de solicitar la prórroga de su vigencia "en los términos que se determinen reglamentariamente". Esta remisión a desarrollo reglamentario también se prevé en el artículo 74.3 respecto a la solicitud de prórroga de la vigencia del informe ambiental estratégico en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica simplificada, así como en los artículos 75 y 76 respecto a las solicitudes de prórroga de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto ambiental. Procede recordar al respecto que la ampliación de plazos viene regulada con carácter básico en el artículo 32 de la LPAC: "1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. (...) 3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al	Se regulan en este precepto los plazos de caducidad de resoluciones ya adoptadas y no de plazos relativos a la tramitación de los procedimientos, por lo que no es invocable el artículo 74 de la LPAC. Por otra parte, de acuerdo con el título competencial de la Ley 21/2013, los plazos establecidos en su art. 27 no son básicos. En lo que se refiere a lo dispuesto en el artículo 32 de la LPAC, hay que señalar que el mismo resulta de aplicación a la ampliación de los plazos establecidos para la resolución de un procedimiento. Dado que la declaración ambiental estratégica es una resolución que pone fin al procedimiento, en ningún caso se debe equiparar la vigencia de la misma con dichos plazos de trámite. En cualquier caso, se ha realizado una reflexión importante sobre qué contenido de los textos recogidos en la legislación básica debían ser estrictamente reproducidos en el texto de esta Ley. Tal como se ha comentado anteriormente, se han utilizado tres criterios fundamentales en este sentido: - incorporar normas adicionales de protección del medio ambiente. - aclarar determinados aspectos de la Ley 21/2013, sujetos a interpretaciones equívocas. - evitar la desactualización de la norma autonómica en caso de que la Ley 21/2013 se vea modificada en el futuro.	Se desestima

		procedimiento.” Asimismo, conforme a la Disposición final octava de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, también tienen carácter de básicos, salvo en relación a los plazos en ellos establecidos, los artículos 27, 31, 43 y 47 de la misma Ley, respecto a la declaración ambiental estratégica, el informe ambiental estratégico y las declaraciones de impacto ambiental y los informes de impacto ambiental. Por todo lo anterior, se recomienda una revisión exhaustiva del Título V, entre otros, al objeto de determinar en qué supuestos es preciso reproducir lo establecido con carácter básico en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y determinar qué cuestiones relacionadas con la evaluación ambiental merecen realmente un desarrollo reglamentario.	Fruto de dicha reflexión se han incorporado varios artículos: El nuevo art. 72. Información pública y consultas. Los nuevos arts. 75 y 76 relativos a la evaluación ambiental de proyectos.	

TITULO SEXTO. INSTRUMENTOS DE IMPULSO DE LA MEJORA AMBIENTAL				
ARTÍCULO	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
Artículo. 77 Acuerdos medioambientales	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	Se solicita la incorporación de la definición de acuerdos en el art. 2 y presenta una propuesta de redacción de dicha definición.	Se acepta la definición propuesta incluyendo a las AA. PP en las dos partes de un acuerdo.	Se estima
Artículo 78. de Fomento de la participación en el sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales (EMAS).	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV.	El anteproyecto no prevé que el cumplimiento de las obligaciones de control derivadas de este sistema (EMAS) pueda servir como justificación del cumplimiento de las obligaciones de control propias de las autorizaciones ambientales contempladas en el Capítulo III del Título IV, como sí prevén otras normativas autonómicas tales como la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Además, tal falta de previsión en el contenido de la solicitud de la autorización ambiental integrada, así como en el de la autorización ambiental única, contrasta con los principios de agilidad, simplificación procedimental y reducción de cargas administrativas previstos en el artículo 3.2 del anteproyecto.	No se considera necesario establecer una vinculación más estricta entre el control de las autorizaciones y el sistema EMAS. Es excesivo pretender que el autocontrol establecido en el EMAS pueda sustituir a la inspección de la Administración o servir como justificación total del cumplimiento de las obligaciones legales o de las contempladas en los títulos habilitantes. El sistema EMAS es válido para simplificar trámites administrativos pero su utilización como beneficio debe ser ponderada y no utilizarse con carácter general. En todo caso la posibilidad que se alega se recoge en el articulado del anteproyecto de ley (ver artículo 78.2.d) del anteproyecto). La relativa indeterminación de este precepto se materializa en medidas concretas como la prevista en el art. 42.3 del anteproyecto.	Se desestima

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA. JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	Habrá de tenerse cuidado con la obligatoriedad manifestada en el artículo 78 del anteproyecto de la Ley de Administración Ambiental mencionado, pues como se desprende de la LCSP, la referencia al EMAS es opcional, y podrán exigirse los requisitos de solvencia técnica de acuerdo con otras normas de gestión medioambiental, y reconocerse certificados y otras pruebas de medidas equivalentes bajo las condiciones de la propia LCSP. Esta apertura a otros sistemas de gestión ambiental se fundamenta en el principio de la libre concurrencia, es decir, en que la posibilidad de participación en los procedimientos de contratación no se vea limitada por exigencias que no resulten del todo puntos imprescindibles y exclusivas de acuerdo con esta u otra Ley. Siendo este principio uno de los más básicos del Derecho de la Unión Europea en materia de contratación, entiende esta Junta que no puede menoscabarse en favor de la exigencia de un sistema único de acreditación de la solvencia, por lo que se sugiere que el texto de la letra e) del apartado 1. del artículo 78 del anteproyecto se module, con una propuesta del siguiente tenor: “e) Atender la posibilidad que la normativa de contratación pública ofrece de permitir la acreditación de la solvencia técnica o profesional con la presentación de certificados que hagan referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión Europea, u otros medios de prueba equivalentes.	Se entiende que la redacción original (art. 78.2 e) ya incluye el sentido o finalidad de la alegación, toda vez que realiza una remisión directa a lo que se establece en la normativa de contratos del sector público.	Se desestima

Artículo 79. de Fomento de la utilización de la etiqueta ecológica de la UE	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA. JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	El alegante trae a colación el art. 127 de la LCSP relativo a las etiquetas para, posteriormente indicar que: "la LCSP permite la posibilidad –una vez más, no obligación- de exigir etiquetas –entre ellas, expresamente las relacionadas con la agricultura o la ganadería ecológicas- en los procedimientos de contratación, de acuerdo con los específicos requisitos que la propia LCSP determina. Es decir, etiquetas ecológicas pueden exigirse de acuerdo con ello, pero será opción del órgano de contratación decidir si quiere hacerlo o no. Por ello se propone la redacción de la letra c) del apartado 2. del artículo 79 del anteproyecto de este modo: "c) Hacer uso cuando proceda de la posibilidad que la normativa de contratación del sector público otorga de exigir etiquetas ecológicas de acuerdo con los específicos requisitos de dicha normativa."	Desde nuestro punto de vista, la redacción inicial contemplada en el anteproyecto es perfectamente compatible con lo referido en la normativa sobre contratos del sector público ya que, literalmente, lo que se hace es referenciar que será conforme a lo que establezca dicha normativa sobre contratos como se debe promover la incorporación de la etiqueta ecológica.	Se desestima
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	En el artículo 79 del anteproyecto se dedica al fomento de la utilización de la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Así, en el párrafo 2º se establecen una serie de medidas a fin de promover la utilización de esta herramienta voluntaria para promocionar productos y servicios que respetan el medio ambiente, entre las que se omiten los incentivos fiscales, p.ej., reducir la cuota de la tasa por la tramitación de la solicitud de concesión, ampliación y renovación de la etiqueta ecológica de la UE prevista en el art. 188 y ss. del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, en particular, para	Se ha optado por una redacción amplia de las medidas de fomento de la ecoetiqueta en este artículo que, en ningún caso, suponen un numerus clausus; así como dedicar un precepto específico en el anteproyecto a la fiscalidad ambiental (actual art. 83) Dicho art. (en su apartado 4. c) ya recoge la previsión de bonificaciones, reducciones y exenciones en materia fiscal que pueden entenderse referidas por extensión a las ecoetiquetas. En cualquier caso, las medidas propuestas podrán establecerse a través de los desarrollos reglamentarios precisos del anteproyecto de Ley o de acuerdo con la política tributaria ambiental.	Se desestima

		las pequeñas y medianas empresas, así como microempresas, definidas conforme a la Recomendación de la Comisión n.º 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003. Y ello en consonancia con lo dispuesto en el art. 83.4.c) del anteproyecto.		
Artículo 81. de Compra Pública Verde	EMAKUNDE	Señalar que sería de interés considerar la posibilidad de incluir también cláusulas de igualdad en los mismos.	El objeto del anteproyecto de ley es medioambiental y el artículo concreto es el referido al de compra pública verde. Entendemos que deberá ser la legislación general de contratos la que prevea este tipo de medidas con carácter extensivo a todos los contratos del sector público.	Se desestima
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA. JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	En relación a este artículo, ha de recordarse que las cláusulas ambientales, ampliamente recogidas en la LCSP y que han sido objeto de la reciente Recomendación 2/2018 de esta Junta, no sólo se han permitido, sino que se han visto impulsadas en la reciente normativa y dicha Recomendación, pero la Ley reconoce la posibilidad de su inclusión del mismo modo que lo hace con las cláusulas sociales, las de igualdad, e incluso nuestros pliegos van más allá recogiendo también las lingüísticas. Y siempre bajo ciertas premisas entre las cuales se halla la vinculación con el objeto del contrato, en el sentido del artículo 145 LCSP, entre otras. Es por ello que se ha de actuar con cautela en su exigencia, entendiendo que deben compartir espacio y posibilidad con el resto de aspectos mencionados. El artículo 202 de la LCSP, además, dice en su primer apartado que los pliegos de cláusulas administrativas particulares han de recoger al menos una condición especial de ejecución de tipo social, ético,	El espíritu de este artículo no pretende reproducir miméticamente lo que ya contempla la legislación de contratos públicos; lo que trata es de ir más allá, siendo el anteproyecto en su conjunto y particularmente en estos apartados, una ley ambiental muy ambiciosa. En cualquier caso, el precepto establece la obligatoriedad de la medida, pero lo hace en términos muy amplios, lo que permitirá determinar en cada caso la procedencia de su exigencia por motivos técnicos. La previsión de existencia de eventuales problemas de ineficacia del control ex post no debe ser un argumento para limitar de inicio la consecución de los objetivos ambientales previstos en esta Ley.	Se desestima

		medioambiental o de otro orden, y cita ejemplos de todas ellas que podrían entrar en dichos pliegos con dicha obligatoriedad de que haya al menos una. El problema puede venir tanto de la imposibilidad de dar respuesta desde la contratación a todas las políticas mencionadas, que –sin lugar a dudas sobre su importancia estratégica y la necesidad de su impulso-, en la práctica a veces son difíciles de cumplir por muchas licitadoras, lo que impide su contratación o incluso su concurrencia a los procesos de licitación, entrando en conflicto con el principio de libre concurrencia antes mencionado. Pero más allá de eso, cuando alguna de estas cláusulas se impone en los pliegos, debe tenerse previamente claro y bien estructurado el sistema de control que permitirá verificar si lo exigido y ofertado llega luego a cumplirse en toda su extensión o no, y qué repercusión concreta tendría en su caso su incumplimiento o cumplimiento defectuoso como parte de las obligaciones contractuales que son. Así las cosas, la exigencia del apartado 2 del artículo 81 debe moderarse del mismo modo que hemos propuesto en apartados anteriores, recordando su posibilidad más que su exigencia, y en cuanto al imperativo del apartado 3. para los pliegos de obras y suministros, definitivamente suprimir la expresión “se indicarán” por “se podrán indicar”, y siempre que en el propio anteproyecto se ofrezca a continuación el método y personas encargadas de verificar que tales porcentajes exigidos son efectivamente comprobados en la ejecución de todos y cada uno de los contratos que los exijan. De otro		

		modo, se convertirían en exigencias que quedarían meramente sobre el papel, cuyo cumplimiento no podría controlarse y cuyo incumplimiento no podría demostrarse en ejecución. Así, se habría limitado la concurrencia de forma muy drástica y luego la contratista podría incumplir sin consecuencias y con un serio problema de falta de herramientas de control para la persona responsable del contrato. Esto no debe permitirse en ningún caso.		
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	Art 81.3 Esta iniciativa debe contar con el desarrollo reglamentario oportuno. A estos efectos, debe apostarse por que los citados materiales cuenten con una certificación u homologación que permita a las personas redactoras de los proyectos y a las directoras de las correspondientes, una garantía en las responsabilidades que asumen	Los desarrollos reglamentarios referidos en la alegación ya se han dado en la CAPV (Decreto de RCDs, Orden técnica de áridos) para algunas de las materias de las contempladas en el artículo. Se realizarán posteriores desarrollos normativos, si fuera preciso, para el resto de materiales mencionados.	Alegación expositiva
	AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	El artículo 1.3 de la LCSP establece que en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Sin perjuicio que esta LEA/AVC estima positivo que se puedan tener en cuenta en la contratación pública aspectos beneficiosos para el medio ambiente, interesa señalar que la adopción de medidas que tienen en consideración elementos ajenos al estricto objeto del contrato, debería realizarse compatibilizando las mismas con los principios de eficiencia, concurrencia y no discriminación entre	Alegación expositiva. Indicar, como ya se ha señalado anteriormente, que el espíritu de este artículo no pretende reproducir miméticamente lo que ya contempla la legislación de contratos públicos; lo que trata es de ir más allá, siendo el anteproyecto en su conjunto y particularmente en estos apartados, una ley ambiental muy ambiciosa. En cualquier caso, se ha dado una nueva redacción al artículo de referencia en atención a las alegaciones recibidas en la fase de información pública del Anteproyecto de Ley.	Alegación expositiva

		oferentes.		
Artículo 83. de Fiscalidad Ambiental	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1. Se solicita la supresión del artículo 83.1 la alusión al OCTE, sin que ello impida la referencia a la promoción de las herramientas tributarias y otras de política ambiental de la Administraciones públicas competentes y la apelación a la necesaria participación del departamento der la Administración General de la CAPV competente en materia de medio ambiente. 2. Se solicita la corrección de la redacción de los apartados 2 y 3 del artículo 83 dedicados al carácter finalista de la recaudación obtenida por los tributos medioambientales, al extralimitarse e invadir las competencias tributarias propias de las Instituciones Forales de los TT.HH.	1. Se considera la observación y se suprime la alusión referida Al OCTE. El texto quedaría redactado con el siguiente tenor: "85.1. Las administraciones públicas vascas competentes en materia tributaria promoverán, previa consulta al Departamento con competencias ambientales de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el uso de la fiscalidad ecológica y de otros instrumentos de política económica ambiental para contribuir a los objetivos de la presente Ley." 2. Se acoge la solicitud en lo relativo a la consideración del carácter finalista de las recaudaciones obtenidas para todas las AAPP de la CAPV. Dicho carácter finalista será predicable en virtud de esta norma únicamente para la Administración general de la CAPV, pudiendo las DDFF tomar esa misma determinación en virtud de sus competencias en materia tributaria. El texto quedaría redactado así: "85.2. Las recaudaciones obtenidas por la Administración general de la Comunidad autónoma del País Vasco tendrán un carácter finalista destinándose exclusivamente a la realización de los objetivos previstos en esta Ley. Las Diputaciones Forales, en el ejercicio de sus competencias en materia tributaria, podrán	Se estima parciamente

			determinar en idéntico sentido que las recaudaciones obtenidas tengan un carácter finalista y sean dedicadas a objetivos vinculados a la protección del medio ambiente." 85.3. Los ingresos recaudados por la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco integrarán una partida presupuestaria en sus Presupuestos Generales del año siguiente con afectación específica a los objetivos fijados por el órgano que ostente la competencia en materia ambiental. Las Diputaciones Forales podrán determinar en idéntico sentido que las recaudaciones obtenidas integren una partida en sus presupuestos anuales específicamente destinada a abordar actuaciones vinculadas a la protección del medio ambiente."	
		3. Completar la Disposición Final Segunda, promoviendo una nueva regulación completa del canon del agua (y no solo de su hecho imponible), mediante una nueva redacción del régimen económico-financiero incluido en el capítulo VIII de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.	3. Analizadas estas y otras alegaciones y por razones de técnica legislativa se ha decidido por parte del órgano proponente de la modificación legislativa proceder a la supresión de la Disposición final segunda.	
		4. En el artículo 83.4 se anima ("podrán") a las Administraciones Públicas de la CAPV a crear tasas, tributos y al establecimiento de exenciones y bonificaciones en los mismos, en el ámbito de sus competencias y desde la perspectiva medioambiental. Cuestión que se considera apropiada y respetuosa con las competencias tributarias	4 y 5. Se trata de menciones y proposiciones expositivas que serán consideradas para su reflejo en los desarrollos normativos y actuaciones posteriores del órgano ambiental de la CAPV	

		de cada institución. 5. Se refiere que podría realizarse un repaso de los servicios y actividades susceptibles de ser sometidos a tasas, e inclusión, en su caso, en el Anteproyecto.		
Artículo 85. Voluntariado Ambiental	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	En el artículo 85 se sienta la promoción de la participación de la ciudadanía en acciones de voluntariado para la realización de actividades de interés general en favor de la protección y mejora del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/1998, de 25 de julio, de voluntariado. Por su parte, el párrafo 2º enumera buena parte de las actuaciones previstas en el artículo 12 de la referida Ley 17/1998 que, a efectos del anteproyecto, interesa fomentar especialmente. Pues bien, con respecto a la actuación contemplada en la letra b), a saber, "el otorgamiento de ayudas y la suscripción de convenios para el mantenimiento, la formación y la acción de las organizaciones de voluntarios y voluntarias", debemos señalar que es con la convocatoria de las líneas de ayudas con la que se propicia el fomento de las actuaciones de voluntariado, no con su otorgamiento, de modo que anteponemos la redacción contenida en la Ley 17/1998 frente a la introducida por el promotor de la iniciativa.	No se comparte la observación planteada, ya que no únicamente con la convocatoria se propicia el fomento de las actuaciones de voluntariado. Desde nuestro punto de vista, la Dirección confunde lo que son las diferentes fases del procedimiento administrativo de concesión de ayudas con la finalidad última de las mismas que no es otra que fomentar el voluntariado.	Se desestima
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	En el artículo 85.2.f), dedicado al voluntariado ambiental, se propone para su fomento y facilitar su acción, entre otras medidas, aquellas que pudieran establecerse en el marco tributario por las	El apartado 2 del citado art. 85 está destinado al fomento y a facilitar la acción de voluntariado ambiental por parte de las AAPP, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 17/1998, de 25 de junio,	Se desestima

		Administraciones públicas competentes. No acaba de entenderse, sin embargo, cuál es el propósito final, así como los colectivos o agentes objeto de dichos tratamientos tributarios.	de voluntariado. El articulado prevé la puesta en común de recursos y medios entre las organizaciones que cuenten con voluntarios y voluntarias en materia de formación y recogida de información; el otorgamiento de ayudas y la suscripción de convenios para el mantenimiento, la formación y la acción de las organizaciones de voluntarios y voluntarias; la organización de campañas de información sobre voluntariado ambiental; la prestación de servicios de asesoramiento, información y apoyo técnico a las organizaciones; etc. En este sentido, el establecimiento de medidas en el marco de la normativa laboral y fiscal busca idéntico propósito que el resto de medidas indicadas, fomentar el voluntariado de carácter ambiental en la CAPV.	

TITULO SÉPTIMO. INSPECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL CAPÍTULO I. ENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL				
ARTÍCULO	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
Artículo 87. Entidades de colaboración ambiental	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	Cabe traer a colación el Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este Decreto ya previó en su día la creación de un Registro administrativo de entidades de colaboración ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que se inscribirían, a efectos de su publicidad, los datos de la entidad, su nivel y alcance de la actuación. Considerando que la memoria económica no se refiere a este precepto, se desconoce cuál es el motivo por el que se vuelve a normar esta cuestión por el departamento, más allá de darle un rango legal al registro de ECAs. Procede recordar asimismo, que el citado decreto de ECAs se encuentra parcialmente suspendido de conformidad con el Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación a la obligatoriedad de utilizar entidades de colaboración	Se trata de la exposición de unos hechos de los que son plenamente conscientes tanto la Dirección impulsora del texto como la Dirección alegante. Partiendo de esta situación fáctica, lo que se pretende, precisamente, es perfeccionar el marco legal para optimizar el obligado posterior desarrollo reglamentario de estas entidades.	Expositiva

		ambiental por las personas privadas.		
	AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	El desarrollo de dichas actividades de colaboración ambiental requiere contar con la capacidad técnica necesaria, sin que el precepto analizado lo recoja expresamente por lo que se recomienda introducir en el mismo la necesaria capacidad técnica de las ECAS para la realización de las labores de colaboración ambiental con la Administración Pública. Además, se recomienda establecer que el ejercicio de las actividades de colaboración con la Administración pública ambiental por parte de las ECAS (Validación documental, verificación y toma de muestras) queda sometido al régimen de comunicación previa al Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco .De esta forma la presentación de la comunicación previa permitirá el ejercicio de la actividad como entidad de colaboración ambiental' ' Las ECAS deben inscribirse en un Registro administrativo, si bien el anteproyecto no establece el carácter de la misma, por lo que para que dicha obligación sea lo menos interventora posible se recomienda contemplar en el precepto que dicha inscripción es a efectos de mera publicidad.	Se acoge la alegación relativa a la incorporación expresa del requerimiento a las ECAS del criterio de capacidad técnica necesaria en el apartado 3. Del art. 87 que queda redactado así: “El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco registrará a las entidades que lo soliciten, de conformidad con los requisitos necesarios y el procedimiento que reglamentariamente se establezca, que estará ordenado a garantizar su capacidad técnica, independencia e imparcialidad (…)”.”. Una vez que las ECAS han accedido al registro existente en la CAPV, acceso que reglamentariamente está determinado por medio de un procedimiento de comunicación previa, están habilitadas para actuar en como ECA en las áreas de actuación y con el alcance previstos legal o reglamentariamente. Indicar, a su vez, que el Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya regula en su artículo 15 que la inscripción se realiza a los únicos efectos de publicidad por lo que no se entiende preciso su incorporación al texto del anteproyecto.	Se estima parcialmente

			Art. 15. – Inscripción en Registro de Entidades de Colaboración Ambiental. Recibida la comunicación con la documentación y realizadas las comprobaciones necesarias, el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente inscribirá a la entidad solicitante en el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los únicos efectos de publicidad.	

TITULO SÉPTIMO. INSPECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL CAPÍTULO II. INSPECCIÓN AMBIENTAL				
ARTÍCULO	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
Artículo 89. Personal de la inspección ambiental	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	En la redacción del artículo 89.1, enlazándolo con el artículo 87, surge la duda de si pueden ser ECAs las personas físicas o jurídicas, por lo que la redacción actual no deja claro si además de las ECAs, otras personas pueden realizar actuaciones materiales de inspección que no estén reservadas a funcionarios públicos por entrañar el ejercicio de potestades públicas o por otras circunstancias, por lo que se sugiere revisar la redacción de este artículo y eliminar la conjunción "o personas" en el caso en que el artículo 89.1 este pensado para habilitar únicamente a las ECAs a realizar ciertas tareas. Prosigue el artículo refiriéndose al personal funcionario de las Administraciones públicas que sea oficialmente designado para realizar la actividad de inspección ambiental otorgándole la condición de agente de la autoridad para el ejercicio de las funciones que le son propias. Le sigue a esa afirmación el párrafo tercero del artículo 89, el cual inicia que "*El personal inspector está facultado para recabar la exhibición de cualquier documentación ambiental obrante en poder de los sujetos sometidos a esta Ley, así como para acceder y permanecer, previa identificación y sin previo aviso, en las*	Se acoge en parte la observación y, fruto de la suma de alegaciones a este artículo, se ha dado una nueva redacción. Ya existe en Euskadi una regulación de detalle en vigor sobre ECAS, el Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es preciso aquilatar, por lo que no se entiende a que se refiere el alegante cuando refiere que se precisa su rápida articulación reglamentaria. El texto legal no aboga por ampliar la consideración de agente de la autoridad al personal de las ECAS, es por ello que la referencia del art. 89.2 está limitada al personal al servicio de las AAPP. El art. 89.3 la referencia al personal inspector será modificada para dar cabida a todo el personal que realice actuaciones inspectoras, esté vinculado a las AAPP o pertenezca a una ECA, ya que lo que se pretende es que todos ellos dispongan de las facultades de actuación descritas en dicho apartado. En el mismo sentido que la alegación anterior, es necesario	Se estima parcialmente

		instalaciones y demás lugares en que se desarrollen las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta Ley", y en este caso no está claro si el personal inspector se refiere únicamente al personal funcionario al que se refiere el artículo anterior o incluye a las ECAs, por lo que si lo que se pretende es facultar tanto a funcionarios como a ECAs se sugiere modificar el término personal inspector, por personal de la inspección ambiental en coherencia con el título del artículo y con lo establecido en el artículo 91: "*Los titulares de las actividades sujetas a esta Ley están obligados a prestar la colaboración necesaria al personal de la inspección ambiental a que se refiere el artículo 89, a fin de permitirle realizar cualesquiera exámenes, controles, tomas de muestras y recogida de la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones"*	aclarar que el texto modificado se referirá solo a entidades acreditadas. Se considera oportuno cambiar el título del artículo y modificar el apartado 3.	

Artículo 91. Deber de sometimiento a la actuación inspectora	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	Resulta llamativo que existiendo la obligación de emitir los citados informes en el plazo de dos meses no puedan hacerse públicos en su caso hasta pasados 4. Esta cuestión tampoco se recoge en la memoria justificativa y económica. En relación a los informes, cabe comentar, que de conformidad con el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, “salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes”.	Tiene sentido que cronológicamente sea primero el titular de la actividad inspeccionada el que reciba el informe de la visita de inspección y qué con posterioridad la administración dé publicidad activa a dichas actuaciones. De esto modo dispone el titular de la actividad un plazo para alegar cuanto a su derecho convenga en relación a lo expuesto en el citado informe de inspección y así la información que sea objeto de publicidad activa habrá contado con un contraste previo de la principal persona afectada. En relación a la segunda parte de la alegación, indicar que este tipo de informes no son los informes preceptivos en un procedimiento administrativo a los que se refiere la alegante. Son informes destinados a dar transparencia y publicidad activa a la actividad del órgano ambiental.	Se desestima

Artículo 92. Planificación de La inspección medioambiental.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	El artículo 92 le otorga a la planificación y programación en materia de inspección rango de mandato legal, con las consecuencias que podrían darse en caso de incumplimiento. Además se establecen unos criterios mínimos sobre evaluación sistemática de riesgos ambientales a observar en la elaboración de los programas, pero no se determina cómo se han de valorar los mismos, por lo que se recomienda revisar la redacción del citado artículo.	No se entiende por qué la Dirección se cuestiona que la planificación de la inspección se articule a través de un mandato legal cuando la tendencia de las normativas europeas y la legislación de transposición es precisamente la contraria e incorpora expresamente la planificación de la inspección en disposiciones normativas de carácter general (Ver normativa de residuos, IPPC,…). El espíritu de la norma en esta materia es ordenar la actividad inspectora y un paso previo, imprescindible, es su adecuada planificación. Por otra parte, indicar que desde nuestro punto de vista resulta aventurado presuponer, como se hace en la observación, que no se va a cumplir dicho mandato legal. No corresponde a una norma con rango de ley entrar en el detalle técnico de la valoración sistemática de riesgos, el propio art. 92 traslada a un posterior desarrollo reglamentario el detalle sobre estos y otros aspectos.	Se desestima

TITULO OCTAVO. RESTAURACION DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES CAPÍTULO I. RESTAURACION DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL				
ARTÍCULO	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
Artículo 94. Legalización de actividades sin autorización, licencia o comunicación previa	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	El presente título, recoge en el artículo 94 las medidas a adoptar para la legalización de las actividades en funcionamiento cuando no dispongan de autorización o licencia, o no hayan sustanciado los trámites del procedimiento de comunicación previa o, cuando disponiendo de ellas se adviertan deficiencias en su funcionamiento y prevé expresamente la clausura definitiva en los casos en los que la actividad no pudiera legalizarse. El anteproyecto de ley prevé la posibilidad de requerir medidas correctoras para corregir deficiencias de funcionamiento observadas en el marco de los diferentes regímenes autorizatorios ambientales, en el marco del procedimiento de restauración de la legalidad. En ausencia de explicación alguna en la memoria justificativa sobre la inclusión de estas medidas, surge la duda de si intencionadamente únicamente habilita en los casos de deficiencias de funcionamiento o si por el contrario podrían requerirse en relación al estado de las instalaciones. Por otro lado, el proyecto normativo establece un límite temporal a estas medidas sin establecer las consecuencias de sobrepasar ese límite temporal. Tampoco se explica en la memoria justificativa cómo	Indicar de inicio que la sugerencia es bastante confusa y que no queda claro a que precepto (o preceptos se refiere). Como en apartados anteriores, la Dirección realiza constantes referencias a la supuesta falta de información en la memoria justificativa del proyecto cuando, desde nuestro punto de vista, dicho documento no está conceptualizado como una guía en la que se analizan todos y cada uno de los artículos y apartados del texto de un proyecto de disposición normativa de carácter general al objeto de facilitar los informes posteriores. Intentando responder a la observación indicar que, por un lado, el artículo 94 del anteproyecto de ley se refiere a la legalización formal de la actividad. Ese mismo precepto también se permite (apartado segundo) adoptar medidas correctoras o la reposición de la situación alterada. Las consecuencias de sobrepasar los plazos otorgados para implementar dichas medidas no es otra que la posibilidad de ejercicio de la autotutela ejecutiva de sus propios actos de la que disponen las AAPP. La resolución que establezca las medidas correctoras a implementar será un acto administrativo que, caso	Se desestima

		opera el plazo de tres meses para resolver el procedimiento de restauración de la legalidad ambiental. Por lo que se sugiere revisar esta cuestión.	de incumplirse, como en el resto de supuestos de incumplimientos de resoluciones podrá ejecutarse forzosamente utilizando los medios establecidos en los arts. 97 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Así mismo, el incumplimiento de dichas medidas ha sido configurado como un ilícito administrativo autónomo dentro del elenco de infracciones del anteproyecto. Por otro lado, indicar que sí se contempla la consecuencia del transcurso del plazo de tres meses para resolver el procedimiento de restauración de la legalidad, que es la caducidad (art. 97.3). Por su obviedad, no se trata de aspectos que deban ser explicados en la memoria justificativa como demanda la alegante.	
Artículo 97. Procedimiento de restauración de la legalidad ambiental	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	El párrafo cuarto del artículo 97 establece que "*En casos de emergencia, la autoridad competente podrá actuar sin necesidad de tramitar el procedimiento administrativo para fijar las medidas de prevención y evitación de daños o para exigir su adopción*." La expresión en casos de emergencia resulta un tanto indeterminada, por lo que se recomienda su revisión. En relación a esta cuestión observar que la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, ya contempla una definición de Emergencia de protección civil *(…)*. El párrafo 6 de este mismo artículo indica que *"Las medidas provisionales que pueden adoptarse son, además de la suspensión de actividades y las medidas correctoras a las que se refieren los artículos anteriores, las previstas para el procedimiento sancionador*	Se estima la propuesta planteada y se utilizará el término "urgencia" para las medidas provisionalísimas en consonancia con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Se desestima el resto de las sugerencias. La urgencia debe necesariamente ser un concepto jurídico indeterminado apreciable en cada caso por la Administración. El resto de consideraciones no son en puridad una alegación sino el traslado meramente expositivo de referencias normativas previstas en la legislación vasca sobre potestad sancionadora de las AAPP. Recordemos que en este título se regulan el régimen y procedimiento de restauración de la legalidad y que la adopción de medidas provisionales es factible en cualquier tipo de procedimiento no siendo éstas exclusivas del procedimiento	Se estima parcialmente

		en esta Ley". Por otro lado, la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, regula las medidas cautelares en el artículo 31 "*cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o impedir la obstaculización del procedimiento, o para evitar la continuación o repetición de los hechos enjuiciados u otros de similar significación o el mantenimiento de los daños que aquéllos hayan ocasionado o para mitigarlos*" y en el artículo 32 prevé la adopción excepcional de medidas cautelares por funcionarios inspectores y señala que "*Excepcionalmente, cuando la consecución de alguno de los objetivos a que se refiere el artículo 31.1, salvo los enunciados en primer y segundo lugar, requiera la asunción inmediata de medidas cautelares, éstas podrán ser impuestas, sin audiencia de los interesados, por los funcionarios que constaten los hechos eventualmente ilícitos, en el ejercicio de su específica función de inspección."* Cabe comentar que en estos supuestos excepcionales la Ley de la potestad sancionadora prevé que "*En los casos en que se hayan impuesto las medidas cautelares que regula este artículo se procederá con urgencia a la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, y en el acto de incoación el órgano titular de la competencia sancionadora determinará, motivadamente, la revocación, mantenimiento o modificación de las sobredichas medidas, procediéndose seguidamente a la realización del trámite de*	sancionador. El procedimiento de restauración de la legalidad ambiental previsto como novedad en el anteproyecto de Ley se sustanciará en los términos propuestos sin perjuicio de que al mismo tiempo o con posterioridad se instruya, si procede, el correspondiente procedimiento sancionador, que se regula en otros preceptos del Anteproyecto. Se desestima la alegación sobre la ley del sector eléctrico por entender, tal y como se ha explicado en la anterior alegación, que son factibles este tipo de medidas de corte del suministro eléctrico entendiéndolas lato sensu como medidas adicionales de protección ambiental en el ámbito territorial de la CAPV.	

		alegaciones posteriores contemplado en el artículo 31.2." Asimismo determina que dichas medidas cautelares se extinguirán una vez transcurridos cuatro días desde su adopción sin que se haya incoado el correspondiente procedimiento sancionador. Sorprende el precepto recogido en el artículo 97.7 por el que se determina que *"También podrá adoptarse como medida provisional la suspensión del suministro de agua o de energía eléctrica de aquellas actividades, instalaciones y obras a las que se haya ordenado su suspensión o clausura. Para ello, se notificará la oportuna resolución administrativa a las empresas suministradoras de agua o de energía eléctrica, que deberán cumplir dicho mandato en el plazo máximo de cinco días. La paralización de estos suministros sólo podrá levantarse cuando se haya levantado la suspensión de la actividad y así lo notifique la Administración actuante a las empresas suministradoras."* Una cuestión de tal envergadura requiere del análisis de la legitimidad del legislador para obligar a terceros que en principio estarían fuera de su ámbito de aplicación. Nuevamente esta cuestión no se desarrolla en la memoria justificativa del proyecto. En relación a esta cuestión, cabe comentar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica por impago a aquellas instalaciones, cuyos servicios hayan sido declarados esenciales. Considerando que esta medida podría ir en contra de lo establecido en la normativa eléctrica vigente, de carácter básico, se sugiere la revisión de la misma.		

Artículo 98. Ejecución forzosa de las medidas de restauración de la legalidad ambiental	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	En el artículo 98 del anteproyecto llama la atención que la imposición de multas coercitivas no exija, tal y como sí prevé el art. 111.2 del anteproyecto en el marco del procedimiento sancionador, que en el requerimiento de cumplimiento se indique el plazo de que dispone el promotor o el titular de la actividad o instalación para el cumplimiento voluntario de las medidas (que ha de ser suficiente en el caso del art. 111.2), así como la cuantía de la multa que pueda ser impuesta, ofreciendo menos garantías que en el procedimiento sancionador.	Se acoge la sugerencia y se considera oportuno completar el artículo con una redacción similar al del artículo 111.2 del anteproyecto de ley.	Se estima

TITULO NOVENO. DISCIPLINA AMBIENTAL				
ARTÍCULO	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
Artículo 101. Infracciones y sanciones	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	En el artículo 101.2 se establece que *"Las infracciones administrativas establecidas en esta Ley se entienden sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir sus autores"*. Examinada la redacción de este párrafo segundo, la expresión "sin perjuicio" puede interpretarse como que una conducta que inicialmente se reputa mera infracción administrativa puede llegar a ser ilícito penal pero también cabe inferir de la misma que puede sancionarse en vía administrativa sin menoscabo de la persecución criminal del mismo hecho. En tal sentido y para evitar cualquier tentación de enjuiciamientos paralelos que abocarían a un *bis in idem*, vedado en el artículo 31.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, sería conveniente añadir que en los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, absteniéndose de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia o auto de sobreseimiento firmes y sólo para el caso de no haberse estimado la existencia de delito, la Administración continuará el expediente sancionador tomando como base los hechos que los Tribunales hayan considerado probados, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la *Ley 2/1998, de 20*	No procede acoger la sugerencia presentada por ser de conocimiento general el rango constitucional del principio non bis in ídem y su regulación en la ley 40/2015, de 1 de octubre, siendo innecesaria su reproducción en el Anteproyecto. A mayor abundamiento, indicar que tal y como indica la propia alegación la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las AAPP de la CAPV, ya contiene un artículo específico relativo al principio non bis in ídem (art. 18) y otro relativo a la litispendencia penal (art. 25); con lo cual no se entiende preciso entrar al detalle de estos aspectos en una Ley general ambiental, como pretende es Dirección, ya que su ámbito natural de regulación se encuentra en la citada Ley 2/1998, especial por razón de la materia (potestad sancionadora) en la CAPV.	Se desestima

		de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.		
Artículo 102. Tipificación de infracciones	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	1.- Respecto a la tipificación de infracciones contenida en el artículo 102 y teniendo en cuenta lo prescrito en el artículo 101.1 del anteproyecto (*"… sin perjuicio de las infracciones tipificadas en las normas con rango de Ley, de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que regulan sectorialmente dichas materias"*), parece evidente que los tipos infractores previstos en las letras a) y b) del párrafo 2º en relación a la no obtención de la autorización ambiental única o al no sometimiento a sus condiciones, respectivamente, no llegarían a absorber o comprender todo el desvalor de las posibles infracciones que el responsable de iniciar o ejecutar obras, proyectos y actuaciones sin haber obtenido la autorización ambiental única o el responsable de no ajustarse a las condiciones impuestas en la misma, pudieran cometer asimismo en relación a la normativa sectorial que atañe a cada una de las materias comprendidas en dicha autorización. Ahora bien, debiendo integrarse mediante la autorización ambiental única, prevista en el artículo 31.2 del anteproyecto, las autorizaciones de producción y gestión de residuos, vertidos a colector, al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre, así como de emisiones a la atmósfera, en un solo acto y en un solo procedimiento administrativo previo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cabe preguntarse si al responsable de las infracciones previstas en las referidas letras a) y b) del art. 102.2 del anteproyecto han de imponérsele todas las sanciones	1.- Al hilo de la observación anterior, procede recordar que se dispone de una Ley General vasca de potestad sancionadora, la mencionada Ley 2/1998, de 20 de febrero, que debe ser aplicada por todos los entes que ejerzan su potestad sancionadora en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la que se regulan (capítulo II) las reglas generales sustantivas para el ejercicio de la potestad sancionadora como son (el non bis in ídem, el concurso de normas, el concurso de infracciones, etc.) con lo cual no resulta procedente incorporar en una ley sectorial ambiental todos aquellos aspectos que están regulados con carácter general por una Ley específica que regula dicha materia sancionadora. No se aprecia la referida inseguridad jurídica y no parece necesario replicar un artículo como el mencionado art. 34 del RDL 1/2016, de 16 de diciembre, cuando dicha previsión (la del concurrencia de sanciones se encuentra expresamente regulada tanto en la Ley 2/1998 de 20 de febrero, (art. 17-18) como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Principios sancionadores. 2. Se estima parcialmente las sugerencias realizadas. Atendiendo a esta y otras alegaciones presentadas en la fase de información pública, se ha dado una nueva redacción al artículo 102,	Se estima parcialmente

		correspondientes a las diversas infracciones tal y como preceptúa el artículo 17.1 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, o bien, si a tenor de lo dispuesto en su artículo 17.2, al provenir las distintas infracciones de un solo hecho o aprovechando idéntica ocasión –cuál es la de no disponer o no ajustarse a las condiciones impuestas en la autorización ambiental única–, al responsable han de imponérsele las sanciones menos graves de las establecidas para cada una de tales infracciones. Por último, podría considerarse igualmente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, que contempla el supuesto de que, existiendo puntos en común entre los bienes jurídicos protegidos o los riesgos considerados, la sanción impuesta precedentemente sirva en parte al fin protector de la infracción que se va a sancionar y se tenga en cuenta la misma para graduar en sentido atenuante la sanción posterior. En tal caso y si así lo exigiese el principio de proporcionalidad, se impondrían sanciones correspondientes a infracciones o categorías de infracciones de menor gravedad, y, excepcionalmente, en supuestos en que la sanción precedente fuese especialmente grave, podría compensarse la sanción posterior, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. Y tal incertidumbre y por ende, inseguridad jurídica, surge ante la ausencia de una previsión en el anteproyecto análoga a la que contempla el artículo 34 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, a cuyo tenor cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos, el infractor pudiese	incorporando algunas conductas que deben ser tipificadas como infracción, modificando la consideración del daño y el riesgo como uno de los elementos del tipo a los efectos de que puedan ser encuadrados posteriormente como elementos para graduar el alcance de la sanción a imponer, etc. Todo ello ha llevado a la Dirección impulsora del texto normativo a una reflexión y modificación en profundidad de este artículo dando por resultado el nuevo texto propuesto. Artículo 104. Tipificación de infracciones. 1. Las infracciones administrativas reguladas en la presente Ley se clasifican en muy graves, graves y leves. 2.Son infracciones muy graves los siguientes hechos: a. La construcción, el montaje, la explotación o el traslado de actividades e instalaciones sin la preceptiva autorización ambiental integrada. b. El inicio de la ejecución de un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental. 3.Son infracciones graves los siguientes hechos: a) La construcción, el montaje, la explotación o el traslado de actividades e instalaciones sin la preceptiva autorización ambiental única o licencia de actividad clasificada o sin haber realizado la oportuna comunicación previa de actividad	

		ser sancionado con arreglo a dicha ley y a otra u otras leyes que fueran de aplicación, de las posibles sanciones se le impondrá la de mayor gravedad. Por consiguiente, sería conveniente clarificar tan relevante aspecto del régimen sancionador con una previsión similar. 2.- Por otro lado, es de destacar que el anteproyecto no considera infracción en el ámbito de las actividades o instalaciones contempladas en su anexo I.B (las sometidas a autorización ambiental única), lo que para el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, constituyen infracciones graves –y una muy grave– en relación a las instalaciones en las que se desarrolla alguna de las actividades industriales incluidas en su anejo 1 (sometidas a autorización ambiental integrada). Refiere la alegante que resultarían atípicas pese a contemplarse como obligaciones de los promotores de las actividades e instalaciones en los artículos 24, 28 y 29 del anteproyecto, las siguientes conductas: no comunicar al órgano competente de la comunidad autónoma las modificaciones realizadas en las actividades e instalaciones, siempre que no revistan el carácter de sustanciales, en relación a las actividades e instalaciones contempladas en el Anexo I.B del anteproyecto; no informar inmediatamente al órgano competente de la comunidad autónoma de cualquier incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental única, así como de los incidentes o accidentes que afecten de forma significativa al medio ambiente; proceder al cierre definitivo de una instalación (o cese definitivo de una actividad) contemplada en el Anexo I.B del anteproyecto	clasificada. b) La ejecución de una modificación sustancial de una actividad o instalación sin que se haya producido la modificación de su título autorizatorio por parte de la administración competente. c) El inicio de la ejecución de un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada sin haber obtenido previamente el correspondiente informe de impacto ambiental. d) El incumplimiento de las medidas provisionales y cautelares impuestas para la restauración de la legalidad ambiental o de las ordenadas en virtud del inicio de un procedimiento sancionador. e) La aprobación de planes o programas sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria sin haber obtenido la correspondiente declaración ambiental estratégica. f) El incumplimiento de las condiciones ambientales fijadas en la autorización ambiental integrada, en la autorización ambiental única, en la licencia de actividad o de las condiciones incluidas en la comunicación previa de actividad clasificada. g) El incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en la declaración ambiental estratégica, la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental. h) El incumplimiento de las medidas impuestas en los procedimientos para la restauración de la legalidad ambiental y de responsabilidad por daños ambientales.	

		incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización ambiental única relativas a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas; e, incluso, la de llevar a cabo una modificación sustancial de la actividad o instalación sin la preceptiva autorización ambiental única, si bien esta conducta podría entenderse incluida en el tipo previsto en la letra a) del art. 102.2 del anteproyecto. En la norma estatal tales conductas, referidas todas ellas, eso sí, a las instalaciones -a excepción de la que atañe a la falta de información inmediata de cualquier incumplimiento de las condiciones de la autorización, que puede hacerse extensiva a las actividades- sometidas al régimen de autorización ambiental integrada, constituyen infracciones graves (las tres primeras) y muy graves (la última de ellas).	i) La inexactitud, falsedad u omisión de datos de carácter esencial exigidos en la documentación que se acompañe a la comunicación previa de actividad clasificada, la comunicación de inicio de funcionamiento o apertura, las solicitudes de autorización ambiental integrada o única o de licencia de actividad clasificada. j) La inexactitud, falsedad u omisión de datos de carácter esencial exigidos en la documentación preceptiva en el marco de los procedimientos de evaluación ambiental. k) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación, notificación e información establecidas en esta Ley, en los títulos habilitantes otorgados por las administraciones públicas y en los pronunciamientos en el marco de los procedimientos de evaluación ambiental. l) La obstrucción, activa o pasiva, a la labor inspectora de la Administración competente o la negativa a facilitar los datos que sean requeridos a titulares de actividades o instalaciones. El incumplimiento de las condiciones exigidas a las entidades de colaboración o la realización por éstas de actividades contrarias a lo dispuesto en la normativa que les resulte de aplicación. m) La descarga en el medio ambiente, bien sea en las aguas, la atmósfera o el suelo, de productos o sustancias, en estado sólido, líquido o gaseoso, o de formas de energía, incluso sonora, que suponga un deterioro de las condiciones ambientales o afecte al equilibrio ecológico en general y que se realice contraviniendo el	

			ordenamiento jurídico. n) Las señaladas en el apartado anterior como muy graves, cuando por su incidencia sobre el medio ambiente o las personas no se den los supuestos para dicha calificación. 4. Son infracciones leves las señaladas en el apartado anterior como graves, cuando por su escasa incidencia sobre medio ambiente o las personas no se den los supuestos para dicha calificación.	
Artículo 103. Prescripción de las infracciones	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV.	En el artículo 103, referido a la prescripción de las infracciones, se dedica el párrafo 3º a aclarar que en el caso de infracciones continuadas el plazo de prescripción empezará a contarse desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma, mientras que en el supuesto de las infracciones permanentes dicho plazo comenzará a contar desde que finalice la conducta infractora. El alegante indica que le parece más correcta la determinación del dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción que establece el Código Penal, cuyo art.132.1 subraya que en el delito continuado el plazo de prescripción se computa desde el día en que se realice la última infracción, mientras que en el permanente desde el día que se elimine la situación ilícita.	Se acoge íntegramente la propuesta de mejora que realiza la Dirección. Incorporar el texto propuesto “desde el día que se elimine la situación ilícita”.	Se estima
Artículo 104. Sanciones	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV.	1. En el artículo 104 del anteproyecto, teniendo en cuenta que el beneficio obtenido por la comisión de la infracción constituye un criterio para la graduación de la sanción (art. 105.e del anteproyecto) puede resultar más efectiva una previsión que contemple el supuesto	Se acoge en parte de la sugerencia y se da una nueva redacción y se incorpora un apartado 2 al actual artículo relativo a las sanciones:	Se estima parcialmente.

		de que la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la comisión de la infracción, al objeto de que en tal caso se aumente la sanción, como máximo, hasta p.ej. el duplo o triplo del importe en que se haya beneficiado el infractor, siguiendo así lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero y tal y como prevé el art. 32.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (TRLPCIC). 2. Por otro lado, no se comprende la distinción entre cese o clausura si ambas expresiones vienen referidas indistintamente tanto a las actividades como a las instalaciones. Tampoco se comprende que la sanción para las infracciones muy graves consistente en el cese definitivo de la actividad se equipare al cese temporal por un período no inferior a dos años, ni superior a cinco. En cuanto a las sanciones consistentes en la revocación o suspensión de la autorización, inhabilitación para el ejercicio de la actividad, pérdida temporal de la condición de entidad colaboradora, así como clausura y cese temporales de las actividades o instalaciones que, dependiendo de su duración, se impondrán a las infracciones graves o muy graves, entendemos que la forma más adecuada para ubicarlas en una u otra franja punitiva es la empleada para la clausura temporal, la revocación o suspensión y la inhabilitación, a saber, caso de la clausura temporal, para las infracciones muy graves, “por un período no inferior a dos años, ni superior a cinco” y para las graves “por un período máximo de dos años”. 3. Por último, el párrafo 2º de este artículo dispone que las multas	Cuando la cuantía de la multa resultare inferior al beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la sanción será aumentada, como máximo, hasta el doble del importe del beneficio obtenido por el infractor. Se acepta la alegación relativa a utilizar el término clausura para instalaciones y cese para actividades Se ha optado por estos rangos sancionadores por entenderlos proporcionados a las infracciones descritas. Se acoge la alegación y se incorpora esta previsión: “graves podrán dar lugar a la imposición de todas o algunas de las previstas en el catálogo de sanciones” en el párrafo 1 del art. 104 y se elimina el apartado 2.	

		serán compatibles con las sanciones de apercibimiento, cese temporal y clausura temporal, total y parcial, lo que contrasta con la legislación básica estatal que prevé que las infracciones muy graves podrán dar lugar a la imposición de todas o algunas de las previstas en el catálogo de sanciones, incluida la clausura definitiva. Ello determina que disminuya de forma notable la gravedad de las sanciones que la legislación básica estatal establece. Así, el artículo 31.2.c) TRLPCIC para el caso p.ej. del incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 35 TRLPCIC, cuando ello suponga un peligro grave para la salud de las personas o el medio ambiente, prevé que además de la multa se pueda imponer la clausura definitiva de las instalaciones, así como la inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período no inferior a un año ni superior a dos. Por el contrario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 104.2 del anteproyecto, al que incumpliere tales medidas (art. 102.2.h), además de la multa, no podrá imponérsele más que el cese o la clausura temporal no superior a cinco años.		

Artículo 105. Graduación de las sanciones	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	El artículo 105 regula la graduación de la sanciones a imponer. Partiendo de la necesidad de adecuar la sanción a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, se establecen una serie de criterios para la graduación de aquélla. Entre ellos, se establece *"la reiteración por la comisión de más de una infracción cuando así haya sido declarado por resolución firme"*. En este punto hemos de señalar que la existencia de reiteración, junto con la reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme, han sido dos de los criterios previstos en el artículo 131 de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre (en adelante, LRJPAC), que dieron lugar a no pocas dudas en su aplicación práctica, dadas las evidentes analogías entre una y otra figura. Así, la reincidencia incide sobre la adecuación de la sanción, incrementando incluso en determinados casos la gravedad de la infracción, con base en la repetición de infracciones de igual naturaleza, es decir, infractoras del mismo precepto u otro semejante, apreciadas en resolución firme. Por su parte, la reiteración descansa sobre la idea de repetición de infracciones de diferente naturaleza, como criterio a ponderar también para graduación de la sanción a imponer, si bien que dentro en principio de los límites señalados para la infracción concreta de que se trate. También ha sido objeto de debate el hecho de si la firmeza a la que aludía el art. 131 de la LRJPAC, se refería a la administrativa o a la jurisdiccional. Tan es así, que la sentencia de fecha 11-03-2003 de la	Atendiendo a esta y otras observaciones se ha dado una nueva redacción al artículo 105, del borrador inicial que ahora está renumerado como art. 107. Artículo 107. Graduación de las sanciones. En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad de la infracción y la sanción aplicada, considerando especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción: a) La existencia de intencionalidad. b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora por la comisión de más de una infracción cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. c) La reincidencia por comisión de más de una infracción de la misma naturaleza tipificada en esta Ley, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa, en el plazo de cuatro años siguientes a la notificación de ésta. d) Los daños o riesgos causados al medio ambiente o salud de las personas. e) El beneficio obtenido por la comisión de la infracción. f) La capacidad económica de la persona infractora. g) La adopción con antelación a la incoación de un expediente sancionador de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los efectos perjudiciales que sobre el medio ambiente o	Se estima parcialmente

Artículo 106. Decomiso	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV.	En el artículo 106.2 se establece una excepción a la imposibilidad de acordar el decomiso de los provenientes de la infracción o de los instrumentos con los que se haya ejecutado cuando éstos hayan sido adquiridos por terceros de buena fe, amparada en la concurrencia de un riesgo inminente de daño ambiental o riesgo para la salud de las personas, que es cuando menos de dudosa legalidad en los términos en que viene redactada.	No aclara la Dirección qué es exactamente lo que considera de dudosa legalidad del precepto, por lo cual no ha podido ser analizada adecuadamente para su adecuado análisis y toma en consideración, en su caso. Todo ello sin perjuicio de mantener esta parte que, desde nuestro punto de vista, la redacción del artículo es perfectamente compatible con la legalidad vigente.	Se desestima

Artículo 109. Medidas de carácter provisional	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	El artículo 109 regula la adopción de medidas de carácter provisional en el marco del procedimiento sancionador (en el artículo 97 se contemplan las medidas provisionales a adoptar en el marco del procedimiento de restauración de la legalidad ambiental). (…) En consecuencia, las disposiciones del art. 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (en adelante, LPAC), pueden aplicarse sin más a la adopción de medidas provisionales en los procedimientos administrativos sancionadores, de manera que la posibilidad de acordar dichas medidas en tales procedimientos no queda ya reducida a los supuestos en que así estuviera previsto en sus normas reguladoras, ni limitada a las medidas concretamente previstas en las correspondientes normas específicas (art. 15.2 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora), sino que, con carácter general, cabrá adoptar cualquier medida que se estime necesaria para asegurar la efectividad de la resolución que pudiera recaer. Dicho lo cual, y comoquiera que en este caso sí se ha previsto en el marco del procedimiento sancionador, le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 63 de dicha LPAC, a cuyo tenor los procedimientos de naturaleza sancionadora se han de iniciar siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. Por otro lado, en el párrafo 1º de este artículo, la expresión *"iniciado el procedimiento"* con la que comienza el párrafo, casa mal con la locución temporal *"en cualquier momento"* incorporada más adelante, que probablemente se haya arrastrado de la redacción del artículo 15	La primera parte de la observación es meramente expositiva. No se entiende la referencia realizada a que le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 63 de dicha LPAC, a cuyo tenor los procedimientos de naturaleza sancionadora se han de iniciar siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. En primer lugar, indicar que el inicio de un procedimiento para la toma de medidas provisionales no es en puridad un procedimiento sancionador o punitivo adicional sino que responde a la necesidad de proteger cautelarmente derechos o intereses en peligro. En segundo lugar, indicar que debido a la especialidad existente en Euskadi en materia sancionadora derivada de la existencia de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, es plausible, el inicio de expedientes sancionadores a instancia de parte (ver art. 35 de la Ley 2/1998) lo cual, supone una discordancia legalmente posible con respecto a lo dispuesto en el art. 63 de la LPAC que trae a colación el alegante. Valorada la propuesta realizada, se considera que la redacción es clara y no da lugar a dudas a pesar de que no siga literalmente lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No se estima contradictorio que se advierta en el anteproyecto (art. 109.1) que en cualquier momento (una vez se ha iniciado el procedimiento) se podrán adoptar medidas provisionales. En este apartado 1 se regulan las medidas cautelares a adoptar en el seno de un procedimiento sancionador ya iniciado que, como bien es sabido consta de diferentes fases y se puede dilatar en el tiempo	Se estima parcialmente

Artículo 110. Obligación de reponer e indemnización	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV.	El párrafo 2º nos merece el siguiente comentario (…) no se alcanza a comprender la previsión de dos supuestos distintos de reparación –uno en el que facultativamente podrá aplicarse la metodología de reparación prevista en la Ley 26/2007 y otro en el que necesariamente deba aplicarse– habida cuenta de que la citada ley solo contempla la reparación de aquellos daños medioambientales que produzcan efectos adversos significativos en los recursos naturales –la cual es compatible con la reposición de la situación alterada, así como con la indemnización de daños y perjuicios a la Administración– y que para los restantes daños ya se prevé su reparación en las leyes sectoriales. Por lo tanto, el supuesto de daños medioambientales no significativos previsto en los dos primeros enunciados del párrafo 2º, ya estaría amparado en la previsión del párrafo 1º pues ninguna otra reparación cabe predicarse de tales daños a salvo la de reponer la situación alterada e indemnizar de los daños y perjuicios causados a la Administración	No se trata en puridad de una sugerencia sino de la exposición de un comentario según refiere el propio alegante. El anteproyecto prevé la posible exigencia de responsabilidad por daños ambientales significativos desligando ésta de la necesidad de articular un expediente sancionador en los artículos 99 y 100. Todo ello de conformidad a lo dispuesto en la legislación básica estatal (Ley 26/2007). El supuesto que se prevé en el artículo que se está analizando es el de existencia de unos daños medioambientales cuya reparación vendrá exigida en el seno de la de un expediente sancionador. A estos efectos, se prevé que en el supuesto de encontrarnos ante daños medioambientales de carácter no significativo se utilice la metodología prevista en la Ley 26/2007 de manera potestativa toda vez que, contrariamente a lo que refiere el alegante, la normativa sectorial no incorpora metodología concreta alguna para proceder a la determinar cómo ha de repararse la situación alterada. Para el supuesto de que dichos daños puedan considerarse significativos se utilizará la metodología prevista en la normativa sobre responsabilidad medioambiental, la citada Ley 26/2007.	Alegación expositiva
Artículo 111. Multas coercitivas y ejecución	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	En el artículo 111 se regula la posibilidad de imponer multas coercitivas, así como acordar la ejecución subsidiaria a costa del infractor si éste no procediera a la reposición y reparación de los daños o no satisficiera la indemnización de los daños y perjuicios	Se acoge la sugerencia en parte y se da una nueva redacción al art. 111 (actual art. 113). Artículo 113. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.	Se estima parcialmente

subsidiaria		causados. Tales medidas se establecen con carácter alternativo sin sujeción a ninguna condición o circunstancia, tal y como para el caso de las medidas correctoras hace el artículo 98 del anteproyecto que relega la adopción de las multas coercitivas a los casos en que no exista amenaza inminente de daños o el retraso en la adopción de las medidas no pongan en peligro el medio ambiente o la salud de las personas. Persiguiendo esta disposición la reposición de la situación alterada mediante la coerción punitiva al infractor o directamente mediante su ejecución subsidiaria quizás sería conveniente establecer aquí también una previsión semejante que conceda prioridad a esta segunda medida cuando concurra una amenaza inminente al medio ambiente o a la salud de las personas derivadas del incumplimiento de la obligación de restaurar lo que, además, proporcionaría una mayor seguridad jurídica. En cuanto a la cuantía de las multas, el párrafo 1º de este artículo dispone que las mismas no superarán el 10% de la multa fijada por la infracción cometida, mientras que el artículo 98.2 del anteproyecto aplica dicho porcentaje al coste estimado del conjunto de las medidas en ejecución. Pues bien, careciendo tales multas coercitivas de naturaleza sancionadora en sentido estricto -razón precisamente por la que resultan compatibles con las sanciones impuestas por los mismos hechos (art. 103.2 de la LPAC)-, consideramos más acertado hacerlas depender, cual hace el mentado art. 98.2 del anteproyecto, del coste estimado del conjunto de medidas a ejecutar, propiciando así que guarden una misma proporción las multas coercitivas que puedan imponerse tanto en el marco de imposición de medidas	1. Si los infractores no procedieran a la reposición de la situación alterada y reparación de los daños, o no satisficieran la indemnización de los daños y perjuicios causados, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento correspondiente, se podrá acordar la imposición de multas coercitivas sucesivas o la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa. 2. La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento de cumplimiento se indique el plazo de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación. En el caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se mantenga el incumplimiento que la ha motivado, podrá reiterarse por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan imponer en concepto de sanción. 3. La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará el diez por ciento de la multa fijada por la infracción cometida. En el caso de que dicha multa fuera sensiblemente inferior al coste estimado del conjunto de las medidas de recuperación a ejecutar, el diez por ciento aplicable para el cálculo de la multa coercitiva vendrá referido a dicho coste de recuperación. 4. La ejecución forzosa de resoluciones que obliguen a	

		correctoras como en el de las sanciones.	realizar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales significativos, se rigen por lo dispuesto en la normativa sobre responsabilidad medioambiental.	
Artículo 112. Prohibición de contratar	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA. JTA ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	Teniendo todo este articulado carácter básico, y por tanto no susceptible de normativa autonómica de sustitución, se entiende que deben respetarse escrupulosamente los incumplimientos o infracciones que pueden ser causa de prohibición de contratar, así como las consecuencias y excepciones a las mismas que apareja la LCSP. Así, se propone la nueva redacción del artículo 112 del anteproyecto: "Las empresas que hayan sido objeto de sentencia o sanción firmes por incumplimiento o que hayan incumplido las cláusulas esenciales de un contrato, todo ello en materia ambiental y de acuerdo con los requisitos de la normativa de contratos públicos, no podrán contratar con el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco definido en dicha normativa salvo con las excepciones que en ella se determinan. En términos similares, habrá de estarse a la normativa reguladora de las subvenciones públicas."	En este supuesto, es preciso indicar que el objetivo del anteproyecto de Ley no es reproducir la legislación de contratos, sino de añadir una nueva prohibición de contratar que debe ser entendida como medida adicional de protección ambiental en el ámbito territorial de la CAPV. Se acoge la sugerencia relativa a que la sanción deber ser firme en vía administrativa y se añade al nuevo texto del actual artículo 114. Se incorpora, asimismo, una referencia los supuestos en los que se está produciendo el pago de la sanción pecuniaria de modo fraccionado.	Se estima parcialmente
	AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	En tanto en cuanto la empresa sancionada no haya ejecutado las medidas correctoras pertinentes y no haya satisfecho la sanción, el anteproyecto en su artículo 112 contempla como medida no sancionadora, la prohibición de contratar y obtener subvenciones del	En este supuesto, es preciso indicar, como se ha hecho anteriormente, que el objetivo del anteproyecto de Ley no es reproducir la legislación de contratos, sino de añadir una nueva prohibición de contratar que debe ser entendida como medida	Se estima

		sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco para las empresas que hayan sido sancionadas por infracciones graves y muy graves. La prohibición operaría aunque la sanción no sea firme. Sin embargo, la LCSP en su artículo 71. 2 establece con carácter básico que no podrán contratar con las entidades previstas en su artículo 3, las personas sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. Deberá tenerse en cuenta que la LCSP ha establecido con carácter básico que la prohibición de contratar sólo opera en el supuesto de infracción.	adicional de protección ambiental en el ámbito territorial de la CAPV. Se modificará el texto del anteproyecto para indicar que la sanción deberá ser firme en vía administrativa. Se incorpora, asimismo, una referencia los supuestos en los que se está produciendo el pago de la sanción pecuniaria de modo fraccionado.	
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	En el artículo 112 se prevé, a modo de sanción accesoria a las empresas que hayan sido sancionadas por infracciones graves y muy graves, la prohibición de contratar, así como de obtener subvenciones del sector público de la CAE hasta no haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes y haber satisfecho la sanción. A propósito de esta cuestión se ha pronunciado la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en el siguiente tenor: 268. La citada inhabilitación constituye un supuesto de sanción autónomo, distinto y diferente de otra sanción posible, la de "inhabilitación para el ejercicio de las actividades contempladas en esta Ley durante los cinco años siguientes, con la consiguiente revocación, en su caso, de la autorización administrativa correspondiente y, en su caso, de la homologación" [artículo 89.4 a)].	En puridad no se trata de una sugerencia sino del traslado de los argumentos que ha utilizado la COJUA para, finalmente, aceptar la legalidad de en un supuesto similar de prohibición de contratar fijado por una normativa sectorial diversa de la LCSP. Incidir en que los reparos señalados, que comparte la alegante, son de mera oportunidad y no de índole jurídico. Desde nuestro punto de vista, esta sanción accesoria supondrá un claro incentivo para la ejecución de la sanción y de las medidas reparadoras. Asimismo, podría conceptuarse como un elemento adicional de protección ambiental que sumar al elenco de instrumentos previstos en la legislación ambiental vigente.	Se desestima

		269. Técnicamente estamos ante una “prohibición de contratar” impuesta en virtud de una sanción administrativa que tiene ese contenido. Esto es, no estamos ante una circunstancia que impide contratar establecida ex lege y de forma genérica ─como la prevista por el artículo 49.1 c) LCSP─ sino de una prohibición de contratar específica impuesta por una Ley sectorial en forma de sanción administrativa ─como puede ser la que acoge el artículo 49.2 c) LCSP─. 270. Antes que nada se hace necesario mencionar que dicho precepto ─artículo 49.2 c) LCSP─ no tiene carácter básico, no siendo, por tanto, de aplicación general a todas las administraciones públicas. Entiende la Comisión que ello supone un reconocimiento implícito de la competencia del legislador sectorial, que podrá ser el autonómico, para incluir una sanción de esa clase en el posible elenco de sanciones, siempre y cuando la prohibición de contratar se circunscriba al ámbito de su competencia. 271. Ahora bien, aun aceptando que pueda presentarse con el suficiente fundamento competencial, eso no significa que su inserción resulte segura. Constituye una medida sancionadora con un importante grado de afección en el patrimonio jurídico del infractor que trasciende el sector donde se impone ─pues no se limita al ámbito de los servicios sociales─, que se establece con carácter novedoso ─ya que no figuraba en la LSS─, habiendo sido hasta ahora, por tanto, ajena a las peculiaridades y finalidades del sector, y que tampoco tiene equivalente en otras leyes con las que puede		

		compartir el mismo bien jurídico y similar riesgo de infracción —Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia—. 272. Asimismo, los reparos se proyectan sobre la forma en la que está diseñada —en el respeto del principio de proporcionalidad—, pues puede extenderse por un periodo de tiempo superior a la sanción de inhabilitación para el ejercicio de actividades en el campo de los servicios sociales —donde habrá repercutido la conducta infractora y donde cabalmente la sanción cumplirá su finalidad preventiva y reparadora—. Pues bien, hacemos extensivos tales reparos a esta disposición.		
Artículo 114. Publicidad	EMAKUNDE	Incluir la variable de sexo, de este modo, podremos conocer el número de hombres y mujeres sancionadas y la infracción que han cometido.	La práctica totalidad de las infracciones son cometidas por personas jurídicas; no obstante, se valorará la incorporación de la propuesta realizada en el desarrollo reglamentario preceptivo para poder disponer de datos desagregados por género.	Se desestima

	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	En relación al artículo 114 debemos advertir de la posibilidad de colisión de derechos que puede originarse entre la publicidad de las sanciones graves y muy graves incluyendo la identidad de las personas responsables, así como el registro de infractores previsto en el párrafo cuarto de este artículo, y lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD). Yendo ya a la iniciativa en cuestión, primeramente hay que señalar que la exposición de motivos no dedica una sola línea a fundamentar a qué fines responden tales medidas –se refiere a ellas, entre otras, como medidas complementarias que "desincentiven la comisión de infracciones"– aunque de ello se colige que obedecen a fines preventivos o disuasorios, si bien no es en absoluto despreciable su componente represor o retributivo en sí mismo debido al menoscabo en el derecho al honor de los afectados que tal publicidad supone. Finalmente, la naturaleza punitiva de tales medidas se deriva, asimismo, al margen de su ubicación en el título destinado a la disciplina ambiental, del hecho de que la publicación de la identidad de los infractores, así como su inscripción en un registro accesible al público, restringe el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de la protección de datos de carácter personal de las personas físicas. El párrafo tercero del artículo 114 dispone que esa publicidad comprenderá la identidad de la persona responsable -nombre y apellidos en el caso de las personas físicas y denominación social o razón social en el de las personas jurídicas y acaso el NIF de ambas-	La extensa y motivada justificación no nos lleva al convencimiento de que debe suprimirse el precepto que tiene una evidentemente naturaleza preventiva. Es una medida accesoria que refuerza el régimen sancionador y que está acotada a los supuestos de mayor gravedad. En su caso, la normativa reglamentaria podrá incorporar algunas de las cautelas señaladas, pero entendemos que el precepto debe mantenerse. Conviene hacer hincapié, como expone la propia Dirección, que recientes desarrollos normativos en otros ámbitos como el tributario o como, por ejemplo, en normas ambientales básicas como la Ley 22/2011, de 22 de julio, de residuos y suelos contaminados, incluyen también medidas de publicidad de los infractores como la pretendida en el anteproyecto de Ley. Dichas normas han superado todos los análisis y cautelas jurídicas necesarias para su aprobación y aplicación como esperamos se superen en este caso durante la tramitación de esta DNCG.	Se desestima

		de la comisión de infracciones graves y muy graves, la infracción cometida, la sanción impuesta, así como un resumen de las obligaciones de reposición e indemnización exigidas, en su caso. Con respecto al registro de infractores, es de notar que la única referencia al hecho de que el registro contemplado en el párrafo cuarto es accesible al público, se contiene en realidad en la exposición de motivos al indicarse a renglón seguido de la previsión de crear un registro de infractores en el que se inscribirán las personas públicas y privadas infractoras sobre las que haya recaído una resolución firme, lo siguiente: *"En esta misma línea, se prevé dar publicidad a las sanciones impuestas por la comisión de dichas infracciones así como de la identidad de sus responsables"*. En definitiva, los datos de carácter personal, relativos a personas identificadas o identificables, están sometidos a las limitaciones derivadas de la protección de los derechos del artículo 18 CE y sujetos a las prescripciones de la LOPD y, además, los que figuren en un procedimiento sancionador o disciplinario, al artículo 13.d) de la *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*, en relación con el art. 15. 1 de la *Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno*, que limita el derecho de acceso a este tipo de información, al menos de entrada, a no ser que esté amparado por la ley. Aun así, la especial naturaleza de la información que se pretende hacer pública, determina que el legislador, a la vista de la finalidad pretendida, que en este caso, insistimos, no está ni		

		mucho menos definida, deba ponderar los intereses en juego, analizando para ello el cumplimiento del principio de proporcionalidad. Pues bien, teniendo en cuenta que en el anteproyecto no se adoptan medidas para minorar la afección al derecho a la protección de datos o garantizar el denominado derecho al olvido digital, tales como evitar la publicación en un boletín oficial –que es una fuente accesible al público según la LOPD-; la publicación en un formato que evite que dicha información se pueda rastrear a través de buscadores (desindexación); limitar el plazo durante el cual el listado sea accesible, etc.; y que la publicación puede afectar a sanciones que no son firmes en vía jurisdiccional y que, por tanto, pueden verse modificadas por una resolución judicial posterior, no parece que esta medida supere el referido juicio de proporcionalidad. En conclusión, la publicidad de la identidad de la persona física responsable de una infracción grave o muy grave, no resulta adecuada, por lo que se considera que ha de suprimirse. En todo caso, de mantenerse la previsión de creación del Registro contemplado en el párrafo cuarto de este artículo, bien entendido que con omisión de los datos personales de las personas físicas infractoras, a efectos p.ej. de la apreciación de causas modificativas de la responsabilidad y de la prescripción de las sanciones, sería recomendable prever un plazo para la cancelación de tales inscripciones.		

Artículo 115. Prestación ambiental sustitutoria	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	El artículo 115 regula la prestación ambiental sustitutoria. Dicha prestación constituye una opción para el particular infractor, opción que se concreta en pedir la iniciación de un procedimiento que le pueda brindar la posibilidad de sustituir la multa pecuniaria por una prestación de restauración, conservación o mejora que redunde en beneficio del medio ambiente. Ahora bien, en aras de la observancia del principio de legalidad, debería concretarse más el contenido material de la prestación así como determinarse el procedimiento para su imposición, aun por vía reglamentaria, y limitar así la excesiva discrecionalidad que la iniciativa atribuye al órgano sancionador en los dos sentidos. En este sentido, el reglamento que la regule podría incluir un listado-guía de las posibles prestaciones, determinar el plazo para su solicitud desde que la sanción deviene firme, método para establecer las equivalencias, ejecución y reglamentación de los mecanismos de evaluación, así como las consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento.	La redacción del precepto debe mantenerse, sin perjuicio de que en el futuro desarrollo reglamentario se deban precisar algunos aspectos de la prestación ambiental sustitutoria. En cualquier caso la precisión del contenido material de la prestación que propone la Dirección es difícilmente alcanzable dada la multiplicidad de supuestos que puedan darse.	Se desestima

DISPOSICIÓN ADICIONAL				
DA	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	El contenido de la DA prevista parece obedecer al propósito de incluir en el mismo una disposición en la que se contemple y garantice la financiación de las nuevas funciones e instrumentos recogidos en el texto, a fin de dotar a las Administraciones Públicas de la CAE de recursos materiales, económicos y personales suficientes para su ejecución como consecuencia de la distribución competencial efectuada por la norma. Sin embargo, no se determinan con precisión los mecanismos que puedan garantizar la suficiencia financiera para abordar estos nuevos servicios y en tal sentido la COJUAE ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto (Dictamen nº 192/2011) señalando: *"Debe advertirse que previsión como la introducida en el artículo 27.5 no garantiza en sí misma la suficiencia financiera a tales efectos, cuando señala que "las administraciones locales, forales y autonómica se dotarán de los recursos necesarios para facilitar los procesos de participación contemplados en la presente ley", o cuando el artículo 9, señala que las entidades locales contarán con la "asistencia técnica de la Administración de la CAE y con la correspondiente suficiencia financiera", al no establecer la ley los mecanismos que garanticen la financiación de los nuevos servicios."*	En la memoria justificativa y económica que acompaña al anteproyecto se ha realizado un exhaustivo análisis de las necesidades de medios humanos y el coste que llevaría aparejado. Si bien, sólo se ha realizado para la Administración General de la CAPV, el resto de AAPP, en la medida en que la asunción de nuevas funciones y competencias precise de más medios, deberán realizar un ejercicio similar. No puede ser objeto de esta Ley determinar con precisión "los mecanismos que puedan garantizar la suficiencia financiera"; entendemos que en el seno de cada AAPP se articularán dichos mecanismos.	Se desestima

	DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA	Indica esta Dirección que, una vez aprobada la Ley de administración ambiental de Euskadi, el Consejo de Gobierno deberá autorizar la creación de nuevas dotaciones de los puestos de trabajo, siempre que se cuente con la consignación presupuestaria necesaria y previo el informe favorable de esta Dirección de Función Pública. En este informe se analizarán las nuevas necesidades generadas por la Ley y la posibilidad de cubrirlas, inicialmente, con personal que se encuentre prestando servicios en esta Administración, en la medida que ello sea posible, mediante el uso de las figuras de readscripción de puestos, programas de racionalización de recursos humanos, movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo, o por cobertura en comisión de servicios y reasignación de efectivos, en aplicación de los artículos 18.2, 22, 54 y 54 bis de la ley 6/89, de 6 de julio, de la función pública vasca y los capítulos VII y VIII del Decreto 190/2004, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas.	En puridad, no se trata de una alegación estricto sensu si no de la exposición de los trámites posteriores que deberán seguirse para dar cumplimiento a los dictados de la Disposición Adicional.	Se estima

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Y SEGUNDA				
DT	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
DT 1ª	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	En el primero se hace referencia a procedimientos iniciados y no finalizados a la entrada en vigor del presente anteproyecto mientras que en el segundo se hace referencia a situaciones consolidadas, por lo que no parece que el titulo obedezca a los dos párrafos de esta disposición por igual. Por lo anteriormente expuesto se recomienda la revisión de la disposición transitoria primera. Además, la disposición transitoria primera indica en su segundo apartado que "*las actividades o instalaciones titulares de autorizaciones ambientales integradas y licencias municipales de actividad clasificada seguirán disfrutando de sus derechos...".* Cabe comentar, que ateniéndonos a la literalidad de ese precepto, tanto las actividades, como las instalaciones, carecen de personalidad jurídica alguna, por lo que no son susceptibles de disfrutar de ningún derecho; es por ello por lo que se sugiere modificar esa redacción.	Se acogen ambas alegaciones incorporando las correspondientes modificaciones en el nuevo borrador de texto legal.	Se estima

DISPOSICIÓN DEROGATORIA				
DD	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
DD	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	La única disposición derogatoria del anteproyecto de ley recoge las disposiciones o enunciados normativos derogados, haciendo mención expresa a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. En relación a esta cuestión cabe comentar que la vigente Ley General de Medio Ambiente del País Vasco no hace referencia únicamente a la administración ambiental, sino que es mucho más amplia ya que regula, entre otros, varios aspectos relacionados con la protección del patrimonio natural, por lo que a falta de regulación sobre los temas ambientales diferentes al de la administración ambiental, procede revisar este artículo al objeto de no generar una situación de desregularización.	La derogación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, no supondrá, desde nuestro punto de vista, una situación de desregulación de aspectos relacionados con la protección del patrimonio natural como refiere la alegante. Existe una legislación sectorial específica al respecto, más prolija y moderna, que colmaría las eventuales y no identificadas supuestas lagunas de regulación que pudieran darse con la derogación de la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.	Se desestima

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA **Modificación de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas**				
DF	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
DF2ª	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA. JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	El texto del anteproyecto recoge una Disposición Final Segunda en la que modifica la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. Y entre los aspectos de tal modificación, el Decimosegundo establece la redacción del nuevo 34 bis de dicha Ley de Aguas, y le da el siguiente texto: "Artículo 34 bis. Ordenanzas locales reguladoras del ciclo integral de agua de uso urbano El régimen jurídico del servicio del ciclo integral de agua de uso urbano se regulará mediante la correspondiente ordenanza local. Las ordenanzas deberán, de acuerdo con el reglamento marco regulador del servicio que a estos efectos dicte el Gobierno Vasco a propuesta de la Agencia Vasca del Agua, regular las siguientes cuestiones: […] "d) Características del régimen de contratación. […]" Se quiere entender por esta Junta que se trata del régimen de contratación del servicio de abastecimiento de agua, pero sería deseable aclararlo así, pues por "régimen de contratación" se suele	Analizadas estas y otras alegaciones y por razones de técnica legislativa se ha decidido por parte del órgano proponente de la modificación legislativa proceder a la supresión de la Disposición final segunda..	Se estima

		entender habitualmente el de contratación pública, que nunca podría ser establecido por una ordenanza local. Si se tratase del régimen de contratación pública en el sector del agua, es el que se establece por la legislación sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.		
DF2ª	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	Mediante la **disposición final segunda** se modifica la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. Sin embargo, su formulación resulta un tanto heterodoxa desde el punto de vista de la técnica legislativa. En primer lugar, se ha de señalar que las razones que sustentan tal modificación o adición deben contenerse en la parte expositiva y no en la dispositiva. En segundo término, sugerimos la siguiente formulación: "DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas: Uno. Se modifican los apartados k) y l) y se añade un apartado s) en el artículo 7, que quedan como sigue: *«k) Informar con carácter vinculante los planes generales, normas subsidiarias, planes parciales y planes especiales después de su aprobación inicial. Este informe versará en exclusiva sobre la relación entre el planeamiento municipal y la protección y utilización del dominio público hidráulico, de sus zonas de protección y de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, y sin perjuicio de lo que dispongan*	Analizadas estas y otras alegaciones y por razones de técnica legislativa se ha decidido por parte del órgano proponente de la modificación legislativa proceder a la supresión de la Disposición final segunda.	Se estima

		otras leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales. Se entenderá desfavorable si no se emite y notifica en el plazo dos meses. *l) Informar con carácter vinculante los planes generales, normas subsidiarias, planes parciales y planes especiales antes de su aprobación inicial. Este informe versará en exclusiva sobre la relación entre las obras de interés general de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el planeamiento municipal, así como sobre la relación entre dicho planeamiento y la protección y utilización del dominio público hidráulico, de sus zonas de protección y de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, y sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales. Se entenderá desfavorable si no se emite y notifica en el plazo dos meses.»* *«s) La elaboración y remisión al Gobierno Vasco del Plan Director de Abastecimiento y de Depuración de Aguas Residuales Urbanas previsto en la presente ley.»* Dos. Se modifican los apartados a) y e) del artículo 12 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, que quedan redactados de la siguiente forma: *«a) Proponer al Gobierno, a través del departamento competente en materia de medio ambiente, la planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus modificaciones para su aprobación o tramitación de acuerdo*		

		con sus competencias.» *«e) Aprobar las ordenanzas y los estatutos de las comunidades de usuarias y usuarios y regantes de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.»* Tres. Se modifica el apartado a) y se añade un apartado j) en el artículo 13 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, que quedan como sigue: *«a) Elaborar la propuesta de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus modificaciones.»* *«j) Aprobar inicialmente y remitir al Gobierno Vasco del Plan Director de Abastecimiento y de Depuración de Aguas Residuales Urbanas previsto en la presente ley.»* Cuatro. Se añade un apartado n) en el artículo 15, que queda redactado de la siguiente forma: *«n) Proponer al Consejo de Administración el Plan Director de Abastecimiento de Agua y de Depuración de Aguas Residuales Urbanas.»* Cinco. Se modifica el artículo 22, que queda redactado de la siguiente forma: *«Artículo 22. La planificación hidrológica de Euskadi* *1. La planificación hidrológica de Euskadi se realiza mediante los*		

		planes hidrológicos, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y los Planes de Sequía de las demarcaciones hidrográficas recayentes en el territorio de la Comunidad Autonómica del País Vasco, las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental y Occidental y la demarcación hidrográfica de la Cuenca del Ebro, sus respectivos programas de medidas y los planes y programas de detalle. *2. La planificación hidrológica de las Cuencas Internas de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental, competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es ejercida por la Agencia Vasca del Agua. De igual modo, la Agencia Vasca del Agua participa en la planificación que corresponde a la Administración del Estado respecto de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental y del Ebro y de las cuencas intercomunitarias de la Demarcación Cantábrico Oriental, de acuerdo con el ordenamiento jurídico en vigor.»"* Lo anterior es suficientemente ilustrativo de cómo se debe aplicar la técnica de modificación para dar una nueva redacción a una norma anterior o a partes de ella o añadir disposiciones nuevas, por lo que nos detendremos aquí pero notando que el resto de normas modificativas contenidas en la disposición final segunda adolecen de los mismos defectos que las anteriores. Finalmente, hemos de señalar que a tenor de lo dispuesto en el art. 12.1 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, así como de las Directrices para la elaboración de proyectos de ley, decretos,		

		órdenes y resoluciones aprobadas por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 23 de marzo de 1993, figurará como anexo, cuando proceda, la relación de disposiciones derogadas o modificadas.		

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA				
DF	**ALEGANTE**	**SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN O SUGERENCIA**	**ANÁLISIS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**	**OPCIÓN**
DF5ª	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DMAPTV	En primer lugar, no es a la Administración general de la CAE a quien ha de habilitarse sino al Consejo de Gobierno, ya que la potestad reglamentaria originaria, salvo previsión expresa en contrario de la propia norma de rango legal, está atribuida al órgano colegiado Consejo de Gobierno a tenor del artículo 29 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y artículo 16 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno. En segundo término, dicha previsión, esto es, la inclusión en un texto normativo legal de una habilitación al ejecutivo para efectuar actualizaciones como la que se prevé, constituye una práctica habitual y la misma no plantea problemas de legalidad pero sí los derivados de la propia técnica normativa seguida, que determina la necesidad de establecer una cláusula de deslegalización para solventarlos. A propósito de esta técnica se ha pronunciado la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, con ocasión del dictamen nº 58/2014 emitido en relación al anteproyecto de ley para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.	Se acepta la alegación y se modifica el texto en consecuencia.	Se estima

EUSKADIKO INGURUMEN-ADMINISTRAZIOAREN LEGE-AURREPROIEKTUA EGITEKO PROZEDURAREN BEHIN BETIKO IZAPIDETZE-MEMORIA. ONESPEN-FASEA, ENTZUNALDIAREN, JENDAURREKO INFORMAZIOAREN ETA PARTE-HARTZEAREN, BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEI KONTSULTATZEAREN, EUSKADIKO TOKIKO GOBERNUEN BATZORDEAK ETA EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETAKO BATZORDEAK EGINDAKO TXOSTENAREN, OGASUN ETA EKONOMIA SAILEKO KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOAK (KEB) EGINDAKO TXOSTENAREN ETA EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOAK EMANDAKO IRIZPENAREN ONDORENGOA.

Memoria hau 2003ko abenduaren 30eko 254. EHAOean argitaratutako Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 10. artikuluaren 2. atalean xedatutakoa betez egiten da.

1.- AURREKARIAK ETA XEDAPEN OROKORRAREN BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA.

Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra onestearekin batera, bere garaian, araudi-esparru bateratu bat ezarri egin zen Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumen-politika egikaritzeko. Lege hau aitzindaria izan zen bere garaian eta horrek gidatu egin du azkenengo urteotan politika hori dagozkion eremu desberdinetan, besteak beste, hauetan: ingurumen-ebaluazioa, hondakinen kudeaketa eta kutsaduraren kontrola.

Hala eta guztiz ere, ingurumena bezalako arlo bat etengabe egokitzen da gizarteak berak eskatzen dituen premia berrietara. Horrenbestez, azkenengo urteotan, zenbait araudi-testu onetsi egin dira, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak aratutako gaian eragin dutenak.

Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorra onetsi zenetik 20 urte igaro dira eta Europar Batasunetik sustatutako eta Estatuko oinarrizko araudira helarazitako ingurumeneko lege-corpusa nabarmen garatu egin da ordutik hona. Horregatik, beharrezkoa da Euskadiko Ingurumen-administrazioaren araudi-esparrua eguneratzea.

Beraz, Autonomia Estatutuak bere 11. artikuluan Euskal Herriari aitortzen dizkion eskumenak gauzatuz eta Autonomia-elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-lurraldeetako Foruzko Ihardutze-erakundeen Arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legean xedatutakoaren arabera, bidezkoa da ingurumenaren arloan beste arau bat egitea sustatzea. Horrek otsailaren 27ko 3/1998 Legea ordeztuko du eta, horrez gain, denbora horretan zehar lortutako eskarmentutik, ingurumen-politika berritu baten oinarriak finkatuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoan, ingurumenarekin lotutako erronka aldakorrei eta gizarte-eskariei erantzuteko.

Era berean, Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legea onetsi eta 12 urte beranduago, hasiera batean, jo zen beharrezkoa zela hori aldatzea, hain zuzen ere, bere edukia egungo araudi-esparrura egokitze aldera.

2.- LEGE-AURREPROIEKTUAREN IZAPIDETZEA

Nahi izanez gero, J0D0Z-T1QEH-NGZ9 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea

La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T1QEH-NGZ9 en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador

HASIERAKO FASEA ETA INSTRUKZIO-FASEA

2.1.- Hasierako eta aurretiazko onespeneko aginduak

Helburu horrekin, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailburuaren 2018ko otsailaren 13ko Agindua eman zen, Euskadiko Ingurumen-administrazioaren Lege-aurreproiektua egiteko prozedura hastea erabaki zuena.

Data berean eta araudi-testuaren zirriborroa idatzi aurretik, **herritarrei honen inguruko informazioa eman zitzaien**: a) ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak; b) onesteko beharra eta aukera; c) arauaren xedeak eta d) balizko beste arauketa-aukera batzuk eta arauzkoak ez diren bestelako aukerak. Horrela, herritarrak gonbidatu zituzten horren inguruko iritzia eman zezaten urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluan ezarritako **aurretiazko kontsulta publikoaren** bidez. Kontsulta hori 2018ko otsailaren 13an hasi zen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoaren Iragarki-oholean iragarki bat jarriz eman zen jakitera.

2018ko maiatzaren 25erako, lege-aurreproiektuaren lehenengo testu bat zegoen eginda, egituratuta eta hori egiteko prozeduraren hasierarako aginduaren planteamenduei jarraiki. Orduan, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailburuaren Agindua eman zen, zeinaren bidez Euskadiko Ingurumen-administrazioaren Lege-aurreproiektua aurretiaz onestea erabaki zen.

2.2.- Entzunaldi, informazio publiko, parte-hartze eta beste administrazio batzuei kontsultatzeko izapideak eta kide anitzeko organoen txostena

Euskadiko Ingurumen-administrazioaren Lege-aurreproiektuak entzunaldiko, informazio publikoko eta parte-hartzeko eta beste administrazio batzuei kontsultatzeko nahitaezko izapideak bete ditu, hain zuzen ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen VI Tituluan eta Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8. eta 9. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

Herritarrei oro har zuzendutako eta 2018ko ekainaren 4ko EHAOren bidez iragarritako **informazio publikoko** izapideaz gain, paraleloki eta ekimenak eragin diezaiekeen sektore ekonomiko eta sozial desberdinen iritzia izate aldera, banakako **entzunaldi-izapidea** ireki zitzaien arauak ukitutako interes kolektiboak ordezten dituzten berrogeita hamar bat antolakuntzei. Besteak beste, hauei: elkarte ekologistak, sindikatuak, ugazabak, elkargo profesionalak, merkataritza-ganbarak, klusterrak, udal-partzuergoak, etab.

Era berean, aurreikusitako arauketak zuzenean eragin liezaiekeen bestelako administrazioek parte hartu ahal izan dute. Beraz, abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 9. artikuluan aurreikusitako **parte hartzeko eta beste administrazio batzuei kontsultatzeko** izapidea egin zaien administrazio publikoak hauek izan dira: Estatuko Administrazioa, Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren eta Konfederazio Hidrografikoen bidez; hiru foru aldundiak eta Euskadiko Udalak, EUDELen bitartez.

Kontuan hartuta arauketak dagozkien eskumen-eremuetan duen eragina, arauketa-ekimena **EAEko administrazio orokorreko sail batzuen esku jarri zen** xedapen orokorren izapidetze elektronikorako tresnaren (Tramitagune) bidez, zegokien azterketa egin zezaten eta, hala balegokio, ekarpenak egiteko.

Nabarmentzekoa da aurreko izapide guztiak elektronikoki egin direla eta alegazioak egiteko aukera izan duten antolakuntzek eta administrazioek, hau da, berrogeita hamar inguruk Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan, zehazki, Nire Karpeta atalean, kanal elektroniko bat izan dutela ekarpenak egiteko.

Ingurumen Sailburuordetzak ingurumenaren arloan parte-hartze publikoko eskubideak benetan gauzatzen direla bermatzeko duen konpromisoa betez, Ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, parte-hartze publikorako eta justiziarako sarbideko eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legearen informazio-printzipioak betez, jarduketa eta izapide horien guztien berri eman da, bai gobernuaren egoitza elektronikoan eta Irekian, bai sailaren webgunean: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ingurumena/.

Era berean, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, herritarrek uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 16. artikuluan ezarritako ingurumenarekin lotutako arauak egiteko prozesuan parte hartzeko duten eskubidea betetzen dela sustatzeko eta errazteko, **zuzeneko prozesu parte-hartzaile bat** burutu du, hain zuzen ere, neurri handiagoan ezagutzera emateko araudi-proiektua, zuzenago ukitutako eragileak dinamizatzeko eta zuzenago eskuratzeko horien iritzia eta hobekuntza-proposamenak. Prozesu honetan zehar, bost saio parte-hartzaile burutu egin dira hiru lurralde historikoetan, zehazki, hauei zuzenduta: enpresak, klusterrak, enpresa-elkarteak eta nekazaritza-sindikatuak; elkargo profesionalak, zentro teknologikoak eta unibertsitateak (enpresen foroa); Eusko Jaurlaritzaren beste sail batzuk, erakunde publikoak eta foru aldundiak (foru aldundien foroa) eta, azkenik, udalekin (udalen foroa). Hala, horren guztiaren berri eman zen dokumentu honetan: “Euskadiko Ingurumen-administrazioaren Lege-aurreproiektuaren parte-hartze prozesua. Laburpeneko azken txostena. 2018ko uztaila”. Bertan, parte-hartze prozesuaren inguruabarrak dokumentatu egiten dira modu sistematizatu eta labur batean.

Herritarrei, eragile desberdinei eta ukitutako erakundeei irekitako parte-hartze izapide horien ondorioz, honako interesdun hauek bidalitako hobekuntza-proposamen, ohar eta alegazioetako idazkiak jaso dira:

- ACLIMA/Basque Environment Cluster.
- Astigarragako Udala.
- Bermeoko Udala.
- Bilboko Udala.
- Donostiako Udala.
- Hernaniko Udala.
- Pasaiako Udala.
- BASQUEGUR.
- Bizkaiko Abokatutzaren Elkargoa/ICAB.
- Jabetzako eta Merkataritzako Erregistratzaileen Elkargoa.
- Geologoen Elkargo Ofiziala.
- Euskal Herriko Ingeniari Industrialen Elkargo Ofiziala.
- CONFEBASK.
- J.A.A.S. jauna.
- M.S. jauna.
- J.M.T.C. jauna.
- Trantsizio Ekologikorako Ministerioa.

- Arabako Foru Aldundia-Nekazaritza Saila.
- Arabako Foru Aldundia-Ingurumen eta Hirigintza Saila
- Bizkaiko Foru Aldundia-Azpiegituren Zuzendaritza.
- Bizkaiko Foru Aldundia-Ingurumen Zuzendaritza.
- Gipuzkoako Foru Aldundia.
- ENBA/Euskal Nekazarien Batasuna.
- EHNE-Euskal Herriko Nekazarien Elkartea.
- EUSKAL ARIDO.
- MERCADONA, S.A.
- MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A.
- IBERDROLA DISTRIB. ELEC, S.A.U.
- IHOBE.
- JAIZKIBEL GEONATURE.
- HAZI.
- AZTI.
- HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, S.L.U.
- Enpresen Foroko parte-hartzaileak.
- Udalen Foroko parte-hartzaileak.
- Foru Aldundien Foroko parte-hartzaileak.

Halaber, EAEko administrazio orokorreko Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura, Ogasun eta Ekonomia eta Osasun Sailek ekarpenak egin dituzte.

Alegazioak aurkezteko epea ireki zenetik sei hilabete baino gehiago igaro ostean, 2018ko abenduaren 28an, Arabako Foru Aldundiak alegazioen agiri bat egin du, paperean, 2018ko uztailaren 4an eta 12an dagoeneko egindako alegazioen osagarri modura. Erabat garaiz kanpo aurkeztu zirenez, ez ziren aztertu, ez eta alegazioei erantzuteko dagoeneko amaituta zegoen txostenean gehitu ere.

2019ko apirilaren 5ean, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioaren Aurreproiektua balioesteko idatzi bat igorri zuen, ikuspegi korporatibokoa, baina bistaz galdu gabe gizartearen interesen orokorraren aldeko osagaia, Elkargoaren funtsezko helburuetako bat.

EHAEOk tramitatzen ari den testuaren aldeko balioespena egiten du, zehaztasun batzuekin, eta adierazten du aurreproiektuak eragin handia izango duela arkitektoaren jardun profesionalean.

Garaiz egindako alegazio eta ekarpenak aztertu ziren, eta espedientean agertzen den 2019ko urtarrilaren 7ko Euskadiko Ingurumen-administrazioaren Lege-aurreproiektuaren instrukzio-fasean zehar jasotako alegazioei eta hobekuntza-proposamenei erantzuteko txostena idatzi zen. Txosten horretan, behar bezala motibatuta adierazi zen, horiek aztertu ostean, alegazioak eta proposamenak onetsi egin ziren edo ez; hala izanez gero, lege-aurreproiektuaren hasierako testua aldatuko zen.

Alegazioei erantzuteko igorritako txosten horren berri eman zitzaien interesdunei, alegazioak eta oharrak aurkeztu zituztenak entzunaldiko eta parte-hartzeko eta kontsultetarako izapideetan. Gainera, eskuragarri dago Eusko Jaurlaritzaren

Gardentasun eta Herritarren Parte-hartzerako arloaren euskal araudiaren atarian (Legegunea), aldatutako lege-aurreproiektuaren testuarekin batera.

2.3.- Nahitaezko txostenak

2018ko azaroaren 6an, Euskal Herriko Ingurumen Batzordeak aurreproiektuaren aldeko txostena, kontrako botorik gabe, egin zuen, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumeneko Aholku Batzordeak ere.

2019ko urtarrilaren 28an, Naturzaintza - Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Aholku Batzordea bildu zen, eta, bertan, Lege Aurreproiektuaren berri eman zen. Ez zen kontrako botorik egon.

Euskal Herriko Uraren Kontseiluak ez du igorri memoria hau sinatu zenean eskatu zitzaion txostena.

Instrukzio-fase honetan, nahitaezko txostenak eskatu zaizkie hauei: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Zerbitzuen Zuzendaritza; EMAKUNDE; Kontratazio Publikoko Aholku Batzordea; Ogasun eta Ekonomia Saileko Zerga-administrazioko Zuzendaritza; Lehiaren Euskal Agintaritza; Kultura eta Hizkuntza-politikako Saileko Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritza eta Gobernantza Publiko eta Autogobernuko Saileko Funtzio Publikoko Zuzendaritza.

Horiek guztiek bideratu dute txostena eta bere oharrak, iradokizunak eta hobekuntza-proposamenak behar bezala aztertu egin dira. Onetsi egin diren kasuetan, dagozkien aldaketak egin dira lege-aurreproiektuaren testuan. Analisi eta aldaketa horien xehetasuna memoria honen eranskinean dago jasota.

Interesgarriatzat jotzen dugu memoria honentan seinalatzea (2018ko abenduaren 6ko 294 zenbakiko EBOn) abenduaren 5eko, 9/2018, Legea argitaratu dela. Lege horrek, aldatzen ditu hainbat arau: abenduaren 9ko 21/2013 ingurumen-ebaluazioari buruzko Legea; uztailaren 20ko 21/2015 Legea, azaroaren 21eko 43/2003 Mendietako Legea aldatzen duena; eta martxoaren 9ko 1/2005 berotegi-efektuko gas isurtzeko eskubide merkataritzaren erregimena arautzen duena.

Aipaturiko arauak, 2014ko apirilaren 16ko 2014/52/EBa Europako Parlamentuko eta Batzordeko Zuzentaraua, 2011/92/EB Zuzetaraua aldatzen duena, proiektu publiko eta pribatu batzuen ingurumenarekiko inpaktu ebaluazioari buruzkoa eta, ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko, 21/2013 Legean hainbat alderdi sakonean aldatzen ditu.

Zentzu honetan, eta nahiz eta oso denbora gutxi izan den, Legearen Aurreproiektuko testu berrian hainbat aldaketa txertatu dira berriki aldatu den abenduaren 9ko, 21/2013 estatuko Lege oinarrizkora egokitzeko.

Alegazioak eta oharrak aztertuta eta legegintza-teknikako arrazoiengatik, proposamena egin duen organoak erabaki du Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen aldaketari buruzko bigarren azken xedapena ezabatzea.

Azken datu nabarmen bezala, honako hau aipatu behar da: prozesu parte-hartzailearen eta jasotako alegazioen eta oharren azterketaren ondorioz eta ukitutako sektoreen adostasun-maila handiagoa lortze aldera, aldatu egin da, irismen handiagoarekin edo txikiagoarekin, artikuluen eta xedapenen % 60 inguru, baita hasiera batean idatzitako eranskin guztiak ere.

2.4. Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen txostena.

2019ko otsailaren 1ean, Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzak, Tramitaguneren bidez, izapidetzen ari den espedientean sartu zuen Euskadiko Tokiko gobernuen Batzordearen aurretiazko derrigorrezko txostena, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuari buruzkoa, apirilaren 7ko Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen (2/2016 Legea) 91. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Hasteko, adierazi behar da, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 88. artikuluaren arabera, toki-autonomia defendatzeko, eta, horren barruan, udalerriek autoantolaketarako daukaten gaitasuna aitortzeko, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak alerta goiztiarreko organo gisa jardungo duela (90. artikulua), edo xedapen orokorren aurreproiektuak prestatzen parte hartuko duela (91. artikulua).

91. artikulu horrek ezartzen du Tokiko Gobernuen Batzordearen aurretiazko txostena beharko dutela udalerrien eskumen propioei berariaz eragiten dieten xedapen orokorreko proiektuek. Era berean, berariaz adieraziko da txostenaren xedea izango dela proiektuan jasotako araua udalerriaren interesentzat egokia den aztertzea. Proiektatutako arauak euskal erakundeen autonomian izan dezakeen inpaktua ebaluatzeko, toki-autonomiaren kalteari udalerrien eskumen propioek jasandako zuzeneko inpaktu esango diogu.

Zentzu horretan, memoria honetan xehetasunez aztertuko dira, *ex lege*, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak bere txostenean aztertu behar dituela uste dugun alderdiak; horrela, bada, organo hori kokatzen den albo-alderdien azaleko tratamendua egin da.

Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak zenbait apartatutan egituratu du txostena, askotariko gaiak lantzeko. Egitura horri jarraikiz, horiei erantzungo zaie.

2. ondorioa: *Honako hau Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak lege-aurreproiektu bati buruz legegintzaldi honetan egindako lehenengo txostena da. Txosten honen gorputzean adierazi den moduan, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak agerian jarri nahi du alerta goiztiarreko eta tokiko autonomiaren defentsako helburuak eta udalerrien eskumen propioak oztopatu daitezkeela legegintzako ekimenak lege-proposamenen bidez egiten direnean. Eta, horregatik, Eusko Legebiltzarrari iradokitzen dio bere Araudian izapide bat ezartzeko, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak aukera izan dezan lege-proposamen moduan bideratutako legegintzako ekimen guztien txostena egiteko, baldin eta proposamen horrek eragina badu organo horrek Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen aginduz dituen funtzioetan.*

Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak lege-aurreproiektu bati buruzko lehenengo txostena egiten duen guztietan, organo horrek zenbait oharpide orokor egin ditu horrelako izapideetan duen rolari eta funtzioari buruz; horrelako lege-aurreproiektuak oso interesgarriak diren arren, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren eta izapidetze-memoria honen esparru material hertsia gainditzen dute (ingurumeneko araudi sektoriala). Ildo horretan, dokumentu honek azaleko erantzuna soilik emango du gai jakin batzuei buruz, eta adieraziko du beste goi-mailako organo edo instantzia batzuek erabaki behar dutela gai horiei buruz, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektua sustatu duen zuzendaritzak beharrean.

Memoria honetan intereseko ekarpenik ezin da egin Eusko Legebiltzarrari egindako proposamenari buruz, zeinak iradokitzen dion bere barne-araudian izapide bat ezar dezala, zertarako eta Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak aukera izan dezan lege-proposamen moduan bideratutako legegintzako ekimen guztien txostena egiteko, baldin eta proposamen horrek eragina badu organo horrek Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen aginduz dituen funtzioetan.

Edozein kasutan, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak adierazitakoak botere legegilea eta geroagoko prozedura fase bat aipatzen ditu, baina haren txostenaren edukia funtzio betearazleak eta administratiboak dituen botere-organoan izapidetutako aurreproiektuaren edukiari buruzkoa soilik izan beharko litzateke, Euskal Autonomia Estatutuaren 29. artikuluan ezarritakoaren arabera. Esandakoagatik, ez dugu egokitzat jotzen organo honek horri buruzko erabakirik hartzea, ordenamendu juridikoak beste bide batzuk aurreikusten baititu Eusko Legebiltzarrari txostenean eskatutakoa gauzatzeko, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektua ez den araudi bat aldatzeari buruz.

3. ondorioa. *Txostena lege-aurreproiektuei buruzkoa denean, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen eskutako alerta goiztiarreko sistemak berezitasun hau du: proposamena egin duen organoak ez badu onartzen txosten honetan jasotako eta ondorio hauetan bildutako proposamenen bat edo guztiak, desadostasunak leuntzeko Bitariko Batzordea sortu beharko da, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 91. artikuluan ezarritako epeetan eta baldintzetan. Horregatik du halako garrantzi formala eta materiala txosten honek kasu horretan.*

Gure ikuspegitik, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen txostena oker dago adierazten duenean lege-aurreproiektu honi dagokionez batzordeak egin beharreko jarduera Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 88.1 a) artikuluan alerta goiztiarreko organo gisa esleitutako funtzioen barruan sartzen dela, eta jatorriko akats horrek txostenaren ondorengo edukien eta alegazioen gehiengoa baldintzatzen du. Gogora dezagun aipatutako artikuluak ezartzen duela Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak alerta goiztiarreko organo gisa jardungo duela kasu hauetan (letra lodia geurea da): «**udalerrien eskumen propioei eragiten dieten** araugintza-prozesuetan (...)». Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak ez die inola ere udalerrien eskumen horiei soilik eragiten. Aldiz, aurreproiektu horrek erabat arautzen ditu ingurumenaren arloko zenbait alderdi, materialak eta eskumenen ingurukoak, EAEko administrazioen hiru mailei dagozkienak (Administrazio Orokorra, foru-aldundiak eta tokiko erakundeak), bai eta udalerrien berezkotzat hartu ezin diren eskumen batzuk ere.

Egiaz, jarduketak eta EAEko Tokiko Gobernuen Batzordeari eskatutako txostena Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 88.1 b) artikuluan EAEko Tokiko Gobernuen Batzordeari agindutako funtzioekin datoz bat, 91. artikuluan ezarritako baldintzetan xedapen orokorrak prestatzen parte hartzen duen organoa den heinean, eta parametro horietan soilik ulertu behar dira egindako alegazioak.

Aurrekoa esanda, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 90. artikuluan araututako funtzio eta prerrogatibei buruz Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeari dagokionez txostenean esandako guztia eta bitariko batzordearen aipamenak ez dira aplikatuko Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuan eta, ondorioz, ez dira kontuan hartuko txosten honetan.

4. ondorioa. *Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak Lurralde Historikoen Legea berritzea proposatzen du, baina ez du ezer ezartzen*

udalen eskumenetan duen eraginari buruz. Hain zuzen ere, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak Lurralde Historikoen Legean egin nahi duen berrikuntzak (azken xedapenetatik lehena) ezin ditu ahatzarazi edo alde batera utzi ingurumenaren arloan euskal udalerri guztiek dituzten berezko eskumenak (eta horiekin batera doazen ahalmenak), Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean 17.1.8) artikuluak berariaz adierazten duenaren arabera; horien artean, kasu honetan garrantzia duelako, nabarmentzekoa da hiriguneetan ingurumenaren arloan (inongo mugarik gabe) kudeatzeko duten ahalmena. Beraz, bidezkoa da Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak Lurralde Historikoen Legea berritzea, zuzenean, berariaz eta arrazoi sendoz, baina ezin du gauza bera egin Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearekin (10.000 biztanletik beherako udalerriei dagokienez), guztiz alde batera utzita arau horrek 17.2 artikuluan «in fine» ezartzen duena.

Hasteko, azpimarratu behar da gure ustez aztertutako arauak ez dituela ahazten gaiari buruz udalerriei esleitutako berezko eskumenak, eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak ez diela ematen «*hiriguneetan ingurumenari buruz (mugarik gabe) kudeatzeko eskumena*» euskal udalerri guztiei, apartatu horretan adierazten den moduan.

Horri buruz, gogoratu behar da Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17.1 artikuluan adierazten dela udalerriek arlo materialetako berezko eskumenak izango dituztela, hauek, adibidez (8. apartatua): «Ingurumenaren babesa eta garapen jasangarria modu osagarrian antolatzea, sustatzea, **kudeatzea** eta defendatzea, hiriguneetan kutsadura akustikoa, argi-kutsadura eta airearen kutsaduraren aurkako babesa barne hartuta», baina **lege honetan ezarritakoarekin eta aplikatzekoa den legeriarekin bat etorriz**, betiere.

Lege-aurreproiektu informatuak –EAEko Administrazio Orokorrari dagozkion eskumenak betez izapidetu dena– arau-esparru hori ematen du ingurumenaren esparruan legez EAEko udalei esleitzen zaizkien eskumenak ahalik eta modurik egokienean gauzatu ahal izateko. Udalek, hiriko ingurumenaren babesari loturiko kudeaketa-eskumenez baliatzeko, sektorekako erreferentziako arau-esparrua izan behar dute, zeinak zehaztuko duen zein eskumen dituzten ingurumenaren babesaren eta garapen jasangarriaren eremuan, oso eremu zabala baita.

Inola ere ez da egin, txostenean adierazi moduan, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen aldaketarik, eta ez dira udalen ahalmenak mugatu, halako moldez non legezko erreforma bidez artikuluak berriz idatzi beharko diren. Gure ustez, neurri zuzentzaileak ezartzeari buruz egindako aldaketak ez die inola ere eragiten euskal udalerrien eskumen propioei, ez dizkie betebehar berriak inposatzen, eta ez ditu haien funtzioak mugatzen. Gogora dezagun zer dioen literalki aurreproiektuaren 51. artikuluak, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen txostenaren alegazioen jatorri denak:

«51. artikulua. Neurri babesleak eta zuzentzaileak ezartzeari buruzko txostena.

1. 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriek babes- eta zuzenketa-neurriak ezartzeko **txostena eskatu beharko diote** dagokion foru-aldundiko ingurumen-eskumenak dituen organoari. (…)

2. 10.000 biztanle baino gehiagoko udalerriek **txostena eskatu ahalko dute**, aurreko apartatuan dagokion foru-aldundiko ingurumen-eskumenak dituen organoa adierazita. Txosten hori eskatzen ez bada, udalek berek finkatuko dituzte

ingurumenaren arloko neurri babesleak eta zuzentzaileak, sailkatutako jarduerarako baimenaren mendeko jardueran edo instalazioan».

Ikus daitekeenez, agerikoa da neurri zuzentzaileak ezartzeari buruzko txostena egiteko funtzioa foru-aldundiei esleitzen zaiela orokorrean; orain arte, funtzio hori Eusko Jaurlaritzaren eta foru-aldundien artean banatzen zen, jarduera kokatuko zen lurzoruaren nolakotasunaren arabera. Halaber, 10.000 biztanletik gorako udalek hala nahi izanez gero (funtzio hori egin dezaketela uste dutelako, karga handiegia izan gabe), bere gain har dezakete funtzio hori. Artikulua oso argia da ildo horretan, *dezakete* hitza barne hartzen baitu.

Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen txostena bat dator tesi horrekin, 18. orrialdean honako hau adierazten baitu (letra lodia geurea da):

*«**Kasu honetan, ez dira zabaltzen Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17.1.8) artikuluan jasotako ahalmenak edo funtzioak**; aitzitik, jarduerak eta zerbitzuak (kasu batzuetan) ugaritzen dira, aurreko araudiaren aldean, zeinak udalerriak ez ziren beste erakunde batzuen eskumenen barruan kokatzen baitzuen jarduera edo zerbitzu horiek gauzatzea. **Hemen, arazoa ez da soilik eskumenei buruzkoa**; aldiz, ondorio handiak ditu finantza-nahikotasunaren arloan, ikusiko dugun moduan. Eta hori, suma daitekeen moduan, funtsezko alderdia da».*

Azaldutako guztiagatik, esan daiteke ez dagoela jarduerak edo zerbitzuak ugaritzeko legezko inposiziorik; aldiz, legeak ahalmena ematen die udalei, jarduera horiek onartu nahi dituzten erabakitzeko.

Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen txostenean finantza-nahikotasunari buruz azaldutako alderdiak memoria honen ondorengo apartatuetan aztertuko dira.

5. ondorioa. *Era berean, aurreko txostenetan ohartarazi den moduan, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak agerian jarri nahi du Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea oso gutxi barneratu dela (edo batere ez) Eusko Jaurlaritzako sailek xedapen orokorrak prestatzeko prozeduretan. Kasu honetan (lege-aurreproiektu bat prestatzeko prozedura), argi ikusten da gabezia hori, ez baita ia kontuan hartu Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea administrazio-espediente orritsuan jasotako txosten, memoria eta agirietan; halaber, ez dira hauteman Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak euskal erakundeen sarean izan dituen ondorio garrantzitsuak, eta alde batera utzi dira ingurumenari bereziki eragiten dieten arau eta printzipio asko, nahiz eta udalen eskumen propioetan oso gai sentikorra izan.*

Horri buruz, adierazi behar da Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak une oro hartu duela kontuan toki-autonomia, tokiko erakundeei benetan eragiten dieten alderdi horiek arautzean; adibidez, ikus 7. artikulua, eskumenen banaketari buruzkoa, zeinetan apirilaren 7ko 2/2016 Legea aipatzen den, berariaz. Beraz, ez badira behar beste aipatu Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea eta Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordea espediente barruko memoria, txosten eta agirietan, ez da izan gai horretan arretarik jarri ez delako; aitzitik, kontua da ez dela garrantzitsutzat jo proposatutako araudi berriak tokiko erakundeetan duen eragina.

Edonola ere, aipatu behar da txostena Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren xedera mugatu behar dela; horregatik, kasu honetan, zeinetan Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak EAEko Administrazio Orokorraren

sailek prestatutako xedapenei buruz arreta deitzen duen, txostenaren eduki jakin bat aipatu gabe, azalpenezko alegazio soil moduan hartu behar da.

6. ondorioa. *Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak uste du, aurretik azaldutako arrazoietan adierazi den moduan, ezertan eragotzi gabe 2017ko abenduaren 12ko erabaki bidez Eusko Jaurlaritzak onartutako Instrukzioak ezartzen duena, lege-aurreproiektuen prozeduren txostena Aholku Batzorde Juridikoaren txostena egin eta Gobernu Kontseiluak aurreproiektua lege-proiektu moduan onartu aurretiko fasean sartu behar dela; izan ere, Aholku Batzorde Juridiko honen xedea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak ezarritakoari jarraikiz, alerta goiztiarreko sistema bat ezartzea da; horren arabera, ezin bada aktibatu, bitariko batzordean adostasun bat lortu ez delako, desadostasun horiek Eusko Jaurlaritzara bidali beharko dira, lege-proiektuarekin batera (Batzordearen erabaki-akten eta txosten honen bitartez). (…). Ondorioz, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak gai hori nabarmendu nahi du (duen garrantziagatik), eta Eusko Jaurlaritzaren erabaki hori aipatutako baldintzetan aldatzea iradokitzen du, eta, hala badagokio, kontuan har dadila irizpide hori, Eusko Legebiltzarrak 8/2003 Legea aldatzeko etorkizunean.*

Alegazio hori Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eskumenetik kanpo geratzen da; izan ere, Gobernu Kontseiluak emandako agindu bat aldatzea proposatzen da; agindu hori abenduaren 22ko 8/2003 Legean jasotako Xedapen Orokorrak egiteko Prozeduraren aplikazio praktikoari buruzkoa da. Gure ustez, egindako eskaeraren izaeragatik, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzaren bidez bideratu beharko luke eskabidea, idazki autonomo baten bidez, Xedapen Orokorrak egiteko espediente jakin baten izapideari lotu gabe, halakoa baita Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektua.

Azaldutakoagatik, ez dugu egokitzat jotzen administrazio-organo honek horri buruzko iritzia ematea, xedapen orokorrak egiteko agindu bat berrikusteko eskabideari dagokionez, ez baitu zerikusirik txostenaren xede den aurreproiektuarekin.

7. ondorioa. *Agerikoa da Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak ingurumeneko eskumen propioak (bai eta horiekin lotutako beste asko ere, baina ez dagokio horiek aztertzea, orain) esleitzen dizkiela euskal udalerriei, indarrean sartu zenetik. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17.1 8) artikuluan esleitzen zaizkie eskumen horiek euskal udalerriei, eta arlo materiala aitortzeaz gain, funtzio batzuk aitortzen zaizkie (edo arauzko aipamen horretan jasotzen diren ahalmenak gordetzen). Jakina, euskal udalerrien aldeko esleipen material eta funtzional horrek, betiere, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea indarrean jarri ondoren jardungo du eta, bereziki, zenbait legegintzako prozesutan, zeinak udalen eskumen propioen eta ahalmenen inguruan eta ordura arte gauzatutako jarduera, prestazio eta zerbitzuetan aurrez zegoen statu quoa aldatu nahi duten. Horrekin esan nahi da Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 149.1 8) artikulua parametro edo neurria dela, proposatuko den lege-erregulazio sektorial berriak araudiaren perimetroak berak adierazitako nukleo material eta funtzionala errespeta dezan. Perimetro materiala edo funtzionala ukituko balitz, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17.2 artikuluan jasotako aurreikuspena aktibatuko litzateke, perimetroa mugatuz gero. Zabalduko balitz, gero esango diren baldintzetan, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17.3 artikulua aktibatuko litzateke, 18.3 eta 112. artikuluekin lotuta.*

Hasteko, aipatu behar da Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak 121. artikulu dituela; horregatik, ezin izan da aztertu zertaz ari den Euskadiko Tokiko Gobernuen

Batzordea esaten duenean Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 149.1 8) (sic.) artikuluan dagoela jasota *parametro edo neurria (...), proposatuko den lege-erregulazio sektorial berriak araudiaren perimetroak berak adierazitako nukleo material eta funtzionala errespeta dezan.*

Alegazioan, ahotara ekartzen da 17.3 artikulua, udalerrien eskumen propioak zeintzuk diren lege bidez edo foru-arau bidez zehazteari buruzkoa, 18.3 artikuluarekin lotzeko, zeinak, nagusiki, hau esaten duen: udalei eskumen propioak esleitu eta propiotzat izendatu zaizkien eskumenetatik eratorritako zerbitzu, jarduera edo prestazioak zehaztu ondoren, behar den baliabide-zuzkidura egin behar da, udalen finantza-nahikotasuna bermatzeko.

Esan dugun moduan, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuan ez zaizkie eskumen propio berriak esleitzen EAEko udalerriei; nolanahi ere, adierazi behar da tokiko erakunde horiek ez dituztela nahitaez beren gain hartu behar zerbitzu, jarduera edo prestazio berriak, halakotzat hartu badaiteke neurri zuzentzaileak ezartzeari buruzko txostena egitea, sailkatutako jarduerarako baimenaren mendeko jardueretan, 10.000 biztanletik gorako udalerrietan.

EAEko 251 udalen % 16,7k soilik (42) ditu 10.000 biztanletik gora (Iturria: Eustat).

Are gehiago, adierazi behar da indarrean dagoen otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, 62. artikuluan, dagoeneko jasotzen duela Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak aurreikusitakoaren antzeko mekanismo bat, zeinetan aukera ematen zaien aipatutako txostena egiteko hala erabakitzen duten udalei, eskumenak eskuordetuta; hau dio, hitzez hitz: *Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzak eta lurralde historikoetako foru-organoek, beren eskumenen esparruan, zerbitzu egokiak dituzten udaletan delegatu ahal izango dute, udalok aurrez espresuki eskatuta, finkatzen diren jardueretarako* ***neurri zuzentzaileak ezartzeko txostenak egitea****. Nolanahi ere, onartu egingo da eskumen horiek erkidetutako, partzuergoz elkartutako edo beste era bateko udal-elkarteetan bildutako organoen bidez benetan erabiltzea.*

Legezko gaikuntza horren ondorioetarako, EAEko udal handienek, zeinak ingurumen teknikariak dituzten eta, beraz, horretarako zerbitzu egokia ere bai, dagoeneko eskatu dute eskumenak eskuordetzea, eta neurri zuzentzaileak ezartzeko txostena egiteko zeregina betetzen dute, baina ez dute eskatu finantzaketa handiagorik, beren borondatez eskumen horiek hartzeagatik, gure aldetiko akatsik egon ez bada.

8. ondorioa. *Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordea ez dago ados (ez baitator bat Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen interpretazio orokor batekin) 17.1 artikuluaren interpretazioarekin, zeinaren arabera artikulu horretako gaien zerrendak udal-finantzaketaren sistema «petrifikatzea» dakarren; izan ere, interpretazio horren oinarrian premisa faltsu bat dago, hots, indarreko finantzaketa-ereduak dagoeneko finantzatzen zituela euskal udalek ez zituzten eskumen batzuk. Beraz, baldin eta Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak, 3/2018 Legea aplikatuz, lehen euskal udalek ematen zituzten jarduerak edo zerbitzuak ugaritzen baditu, kudeaketa handiagoa eta finantza-baliabide gehiago behar dituzten jarduerak eta zerbitzuak Legearen eranskin ekonomiko batean jaso beharko dira, dagokion moduan zenbatu ondoren, euskal udalerrien finantza-nahikotasuna babesteko.*

Puntu honetan, lehenago aipatutakoa errepikatu behar dugu: Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak ez du agintzen ugaritu egin behar direnik lehen euskal udalek ematen zituzten jarduerak eta zerbitzuak, eta ez dituzte kudeaketa eta finantza-baliabide handiagoak beharko. Era berean, adierazi behar da legearen

aurreproiektuaren justifikazioko memoria ekonomikoak araudi berriak EAEko hiru maila administratiboetan dituen eragin ekonomikoak aztertu dituela, eta azterketa horretara jotzen dugu, esandakoa ez errepikatzeko.

9. ondorioa. *Nabarmendu behar da Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak euskal udaletan duen eraginari buruz Memoria Ekonomikoak emandako amaierako ondorioa erabat autokonplazentziazkoa dela ekimen hori abiarazi duen Administrazio Publikoarentzat; era berean, agerian jarri behar da ez duela hautematen finantza-egokitze osoa egin behar denik (hots, gobernu-maila guztietan), hiru gobernu-mailetan (autonomia-erkidegoa, lurralde historikoak eta udalerriak) eskumenak antolatzearen ondorioz, edo, hala badagokio, onartu behar denik Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak benetako eraginak dituela administrazio publikoen gastu publiko osoan.*

Legezko betekizunekin bat etorriz eta EAEko Administrazio Orokorrean dauden ereduen arabera, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektua proposatu duen zuzendaritzak ahalegin handia egin du, arauaren proiektuarekin batera doan memoria ekonomikoaren bidez, neurtzeko, besteak beste, zer kostu izan dezakeen hori aplikatzeak beste administrazio publiko batzuetan: aldundietan, tokikoetan, estatukoetan eta beste batzuetan. Konplexutasun tekniko handiko jarduera izan da.

Nolanahi ere, errepikatu nahi dugu arauaren proiektuak Euskadiko toki-administrazioan izango duela eragin ekonomikorik txikiena, beste administrazio publikoekin alderatuta. Behar baino gehiago ez errepikatzeko, aipatutako memorian azaldutakora joko dugu (46. orrialdea eta hurrengoak), proposatutako lege-aldaketak EAEko udaletan eta aztertutako gainerako administrazio publikoetan izan dezakeen eragin ekonomikoari buruz han zenbatetsitakoa defendatzeko.

10. ondorioa. *Txosten horren argumentu-ibilbidearen ideia nagusiak aztertu ondoren, orrialde horietan egindako proposamen zehatzei helduko diegu. Batzorde honen ustez, hauek dira garrantzitsuenak:*

- ***Zioen azalpena.*** *Azkenean, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17.1.8) artikuluan ezarritakoaren arabera euskal udalerriek dituzten funtzioak edo ahalmenak murriztu edo mugatu nahi badira, mugatze hori justifikatu egin beharko da, lege-aurreproiektuaren zioen azalpeneko subsidiariotasun- eta proportzionaltasun-printzipioen arabera, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17.2 «in fine» artikuluak ezarritakoari jarraikiz.*

Aurreko apartatuetan adierazi dugun moduan, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuan EAEko udalei esleitzen zaizkien funtzioei buruz jasotzen diren xedapenek ez dituzte mugatzen edo murrizten *funtzio edo ahalmenak*. Aldiz, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren xede da horiek modu orekatuagoan banatzea, zioen azalpenean adierazi den moduan, administrazio publiko guztien jarduera administratiboa eraginkorragoa izatea bermatzeko.

Nolanahi ere, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17.2 *in fine* artikuluan «...behar bezala azaldu beharko da...» esateak ez du esan nahi arrazoiketa hori, nahitaez, arauaren zioen azalpenean joan behar denik. Hala badagokio, lege-aurreproiektuarekin batera doazen memoria eta txostenetan arrazoitu beharko dira gai horiek. Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren kasuan, gai horiek eta beste batzuk egokiro eta behar beste aztertu eta arrazoitu dira, gure ustez.

Are gehiago, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak emandako iritzia guztiz azalpenezkoa dela, ez baitu arrazoirik ematen eskumenei ustez egiten zaien murrizketari edo mugaketari buruz; areago, kontraesanetan erortzen dira, txostenean eskumenak handitzen direla esan baitute lehenago, esaterako: *«baldin eta Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak, 3/2018 Legea aplikatuz, lehen euskal udalek ematen zituzten jarduerak edo zerbitzuak ugaritzen baditu»*; hala, ez du argi zehaztu zer jarrera duen horri buruz, eta argudio kontraesankorrak eman ditu, bere alegazioko apartatuen arabera.

- ***7.2 d) artikulua.*** *Agindu horretan jasotako eskumena, txostenaren gorputzean zehazten den moduan, ez dator bat ez tokiko autonomiaren printzipioarekin, ez eta orain indarrean dagoen araudiarekin ere, hala Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeari nola Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeari dagokienez, Konstituzio Auzitegiaren 1/2016 Epaiak interpretatu duenaren arabera. Beraz, kentzea edo, osagarri moduan, esaldian hau jasotzea proposatzen da: «...dagozkion udal interesdunek aurretiaz hala eskatuta eta batzarrean osoko bilkuran onartuta».*

Hasteko, esan behar da alegazioa 7.2 b) artikuluari buruzkoa izango dela, eta ez 7.2 d) artikuluari buruzkoa; izan ere, d) apartatuan ez dira aipatzen tokiko eskumenak.

Hala, b) apartatuan, aurreikusten da Lurralde Historikoetako foru-organoek laguntza emango dietela hala eskatzen duten udalei, lege-aurreproiektuan araututako sailkatutako jarduerarako baimenaren eta aurretiko komunikazioaren prozedurei buruz. Alegazioa apartatu horri buruz ari bada, aipatutako Konstituzio Auzitegiaren 111/2016 Epaia, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea irakurrita, ez da ondorioztatzen xedapena ez datorrenik bat toki-autonomiaren printzipioarekin, ez eta udalek aurretiaz eskabidea egitea nahitaezkoa denik ere.

Ildo horretan, gogoratu behar da Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 19.4 artikuluan hau soilik aipatzen dela: *«Dena dela, toki-araubidearen oinarrizko legeriak eta foru-arauek ezarritakoarekin bat etorrita, foru-organo eskudunek laguntza teknikoa emango diete bakoitzak bere lurralde historikoko udalerriei, legeek edo, kasuan kasu, foru-arauek udalerriei esleitutako eskumenak benetan gauzatzen direla bermatzeko»*.

Edonola ere, azken xedapenetatik lehenengoak, azaroaren 25eko 27/1983 Legeari buruz, hau jasotzen du, hitzez hitz: *«neurri zuzentzaileak ezartzea jarduera-baimena behar duten jarduera sailkatuaren araubidearen mendeko jardueretan, 10.000 biztanletik beherako udalerrietan, eta 10.000 biztanletik gorakoetan, dagokion udalak* ***hala eskatzen badu*** *(...)»*; beraz, dagoeneko nahiko argi jasotzen du tokiko erakundeek egin beharreko eskabidea, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen alegazioak sartzeko eskatzen duena, hain zuzen.

- ***22. artikulua.*** *Agerian jarri nahi da udalerriek arlo horretan zituzten eskumenak kualitatiboki aldatu direla; izan ere, kudeaketako edo betearazteko (baimenak) eta antolamenduko (ordenantzak) funtzioak izatetik, EAEko ingurumen-organoak erregulatzen, kudeatzen eta ebazten duen baimentze-prozedura batean «parte hartzeko» ahalmenetara igarotzen da. Hala bada, zalantzarik gabe, lehen adierazi denagatik, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak legearen aldaketa hori (kudeaketako eskumenak murriztea, kasu honetan, subsidiariotasun- eta proportzionaltasun-printzipioen izenean) arrazoitu beharko luke zioen azalpenean, eta amaierako xedapen batean jaso beharko lituzke jarduera*

sailkatu horiei dagokienez aurreikusten diren funtzio- edo ahalmen-mugaketa horiek, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17.2 «in fine» artikuluak ezarritakoari jarraikiz.

Lege-aurreproiektuaren 22. artikuluak ingurumeneko esku hartzeen gaineko erregimenen aldiberekotasun-egoerak arautzen ditu, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren bidez. Xedapen horretan ez da ikusten Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen txostenean aipatzen den udalen funtzioen aldaketa kualitatiborik. Hain zuzen ere, araudia gaur egun indarrean dagoenaren oso antzekoa da, zeina otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren (Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesten duena) ondorio den. Horren bidez arautzen dira ingurumen-ebaluazioa eta industriako igorpenak. Beraz, ez dugu arrazoitu behar gure ustez existitzen ez den «eskumenen aldaketa kualitatiborik».

Gainera, aipatu behar da ingurumen-baimen integratu eta bakarrak prozedura baimentzaile substantiboaren barruan adierazten dela udalek nahitaez parte hartu behar dutela, bi aipamen hartzen baititu barne: batetik, hirigintzako alderdiei buruz (32. artikulua) eta, bestetik, haien eskumenei buruzko alderdiei buruz (36. artikulua). Hala, izapidearen bi une desberdinetan parte har dezaten bermatzen da; izan ere, udalak udalerriko hirigintza-eskumenei buruz egindako lehenengo aipamenak ingurumen-izapidea amaitu dezake, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren 32. artikuluan jasotzen denez: *«(...) artikulu honetan araututako hirigintzako txostena negatiboa balitz (...), baimen hori emateko eskumena duen ingurumen-organoak arrazoietan oinarritutako ebazpena egingo du eta, hala, prozedura amaitu eta jarduketak artxibatuko ditu»*.

Kontuan hartuta, gainera, gaur egun EAEko edo Lurralde Historikoetako ingurumen-organoei dagokiela neurri zuzentzaileak ezartzeko txostena egitea jarduteko lizentzia izapideetan, ezin da esan tokiko erakundeen eskumenak mugatu direnik, indarreko araudiaren baldintza berberetan errespetatzen baitira.

- ***47. artikulua.*** *Egokia litzateke udalerrietako ikuskapen funtzioak eskuordetzeko aukera egotea, ingurumen-baimen integratuaren eta ingurumen-baimen bateratuaren kudeaketan, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legean jasotako arauei jarraikiz. Hala eginez gero, EAEko administrazioaren ingurumen-kudeaketako organoak ahalmen hori izango luke, baina dagokion udalerriak onartu beharko luke; hala, euskal udalek alegazioetan egindako proposamen batzuk beteko lirateke.*

Lege-aurreproiektuaren 47. artikuluan, hasierako komunikazioa arautzen da. Artikulu horren 4. zenbakian dagoeneko adierazten da administrazio publiko guztiek ikuskapenak egin ditzaketela, nork bere eskumen-esparruan.

Nolanahi ere, alegazioa ez bada bereziki 47. artikuluari buruzkoa eta orokorragoa bada, aipatu behar da baimen edo lizentzia substantiboa ematen duen administrazioari dagokiola ikuskaritzaren ahalmena, memorian eta lege-aurreproiektuari egindako alegazioei erantzuten dien txostenean jasota dagoen moduan. Ingurumen-baimen integratua eta ingurumen-baimen bateratua emateko eskumena Eusko Jaurlaritzako dagokion sailari dagokio eta, ondorioz, horiek ikuskatzea ere organo horri dagokio. Ikuskatzeko ahalmena osagarria da eta baimena emateko ahalmenari lotuta ulertzen da, betiere. Ez luke zentzu handirik izango administrazio batek neurri zuzentzaile batzuen funtzionamendua eta bideragarritasuna ikuskatzeak, ez badaki zer egoerak bultzatu dituen kanpoko zerbitzu tekniko batzuk neurri horiek hartzera, eta ez baditu ezagutzen egoera horien izapidea eta proiektua.

- ***IV. tituluko IV. kapitulua (sailkatutako jarduerarako baimena);*** *egia da sailkatutako jarduerarako baimenaren mendeko jardueren perimetroa murriztu dela sailkapeneko jardueren aurretiko komunikazioko jardueren onurarako; baina egia da, halaber, kudeaketaren zamaren zati bat aurretiko kontrol-lanetatik egiaztatzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko funtzioetara igarotzen direla, baimena emateko teknikaren bidez. Horrek aldaketa kualitatiboa ekarriko du udal-zerbitzuen antolatzeko moduan eta langileek gauzatu beharreko zeregin eta funtzioetan; ondorioz, egokitzeko aldi bat beharko da eta, beraz, finantza-baliabide gehiago erabili beharko dira, gutxienez behin behineko aldi horretan. Eta nabarmendu behar da memoria ekonomikoak ez duela hori berariaz kontuan hartu (kuantifikazioaz ari gara), zeinak adierazten duen eragin neutroa izango duela, eredu berriaren gastuak «automatikoki» orekatuko baitira eredu hori tokian-tokian ezartzeak ekarriko dituen aurrezkien bidez.*

Sailkatutako jarduerarako baimenaren eta aurretiko komunikazioaren mendeko jarduerak Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren I.C eta I.D eranskinetan daude jasota. Aipatu behar da aurreproiektu horretan adierazitakoa bat datorrela bi titulu horien mendeko jardueren indarreko banaketarekin, zeina apirilaren 23ko 7/2012 Legea (barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2006ko abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Zuzentaraura egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa) indarrean jartzean sartu baitzen; beraz, alegazioko *«sailkatutako jarduerarako baimenaren mendeko jardueren perimetroa murriztu dela»* aipamena ez dago behar adina frogatuta, eta ez dugu uste oraingoa denik, banaketa hori 2012an egin baitzen, Europako araudiarekin bat etorriz.

- ***48.4. artikulua.*** *Ulertu behar da hor egiten den aipamenak ez dituela ezertan eragozten «Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen 17.1. 8) artikuluaren arabera udalerriek arlo horretan dituzten ordenantza-ahalmenak», eta arlo material jakin batean tokiko arau-xedapenak onartzeko berariazko eskumena direla.*

Lege-aurreproiektuaren 48.4 artikuluak hau adierazten du: *«Udalek, ordenantza bidez, prozedurak gauzatu ahalko dituzte, emandako jarduera sailkatuko lizentzietan aldaketa substantzialak edo ez substantzialak izapidetzeko»*. Gure ikuspegitik, hor adierazten dena bat dator Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen 17.1.8 artikuluan ingurumen-arloko antolamendu osagarriari buruz ezarritakoarekin; horrez gain, berariazko aipamena da, udalek eskumen hori eragozpenik gabe erabil dezaten. Jakina, arlo horretan eskumen hori erabil dezaketela esateak ez du mugatzen gaiari buruzko antolamendu osagarrirako duen gaitasuna; hain zuzen ere, osorik mantentzen da, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legeak eta sektoreko erreferentziazko arau esparruak ezarritako baldintzetan.

8) Ingurumenaren babesa eta garapen jasangarria modu osagarrian antolatzea, sustatzea, kudeatzea eta defendatzea, hiriguneetan kutsadura akustikoa, argiaren kutsadura eta airearen kutsaduraren aurkako babesa barne hartuta.

- ***50. artikulua.*** *Kasu honetan ez dago eskumenen arloko arazorik, hertsi-hertsian; aldiz, euskal udalerrien ingurumen-politikaren erdiguneko eskumen baten kudeaketarekin dago arazoa. Horregatik, sistema berriak udal-antolaketan eta prozeduran ezarritako epeak betetzean izan ditzakeen ondorioak ikusita, egokitzat jotzen dugu 20 eguneko epea ezartzea, Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 82.3. artikuluan ezarritako gutxienekoarekin bat etortzeko.*

Ulertzen dugu Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 83.2 artikuluaz ari dela, 82.3 artikuluaz beharrean, lehenengo horretan ezartzen baita 20 eguneko gutxieneko

epea espedientea aztertzeko eta alegazioak egiteko, administrazio-prozedura bateko jendaurreko informazioaren izapide baten barruan.

Lege-aurreproiektuaren 50. artikulua guztiz bat dator aipatutako Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 83.2 artikuluarekin, eta berme handiagoak edo epe luzeagoa ematen die interesdunei; izan ere, legezko gutxienekoa baino epe handiagoa ezartzen du, eta hilabete ematen du jendaurreko informazioaldirako eta alegazioak aurkezteko. Egia da arauaren xedeetako bat prozedurak arintzea dela, baina ez dugu egokitzat jotzen, oro har, izapidetzeko epeak laburtzea eta herritarrek ingurumen-gaietan parte hartzeko duten eskubidea osatzen edo ahalbidetzen dutenak murriztea.

- ***51. artikulua.*** *Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren 51. artikulua garrantzitsuenetakoa da, txosten honen xedeari dagokionez; izan ere, nabarmen aldatzen du gobernuko maila guztien artean eskumenak esleitzeko gaur egun arte zegoen sistema, arlo zehatz batean, hots, neurri zuzentzaileak ezartzeko txostenari dagokionez; gainera, biztanle-atalaseak ezartzen ditu (arrazoitu gabe, gainera) udalen kasuan eta udalen borondatezkotasunean oinarritutako sistema gehitzen du, zeinak izapide horretarako gaitzen dituen eta, azken finean, Lurralde Historikoen Legea berriz diseinatzen du, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren azken xedapenetatik lehenengoan.*
  Agindu horri buruz, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak puntu eta proposamen hauek azaldu nahi ditu:

  - *Neurri zuzentzaileak ezartzeko txostena erakunde bati edo beste bati esleitzeko eredua aldatzeak ondorio garrantzitsuak ditu udalen eskumenetan eta toki-ogasunen finantzaketan.*

Memoria honetan lehenago adierazi dugun moduan, gure ikuspegitik, bi baieztapen horiek ez dute oinarririk, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuan esandakoa hitzez hitz begiratzen bada. Gainera, ez da adierazten zein diren ondorio garrantzitsu horiek, eta ez da zenbatetsi ustezko finantzaketa-behar hori.

  - *Eskumen-aldaketa hori egiteko (hobeto esanda, erakunde jakin batzuen ahalmenen aldaketa) Lurralde Historikoen Legea aldatu da (azken xedapenetatik lehenengoa), baina ez da Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legea aldatu, nahiz eta 17.1.8) artikuluan udalei (salbuespen materialik gabe) aitortutako kudeaketa ahalmenak mugatzen diren, eta hori zioen azalpenean adierazi behar da (subsidiariotasun- eta proportzionaltasun-printzipioei egokitzea) berariaz (Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren azken xedapenetatik lehenengoan, edo ondorio hauen amaieran adierazten den moduan).*

Memoria honetan lehenago adierazi dugun moduan, gure ikuspegitik, baieztapen horiek ez dute oinarririk, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuan esandakoa hitzez hitz begiratzen bada.

  - *Araua egiteko prozeduraren espediente osoan ez dago justifikaziorik biztanleriaren atalasea 10.000 biztanle baino gehiago edo gutxiagotan ezartzea azaltzen duenik; atalase hori ezartzean, maila edo eragin desberdina ematen zaio udal-autonomiari, handiagoa zifra hori gainditzen duten udalerrientzat, txikiagoa heltzen ez direnentzat. Gutxienez, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa) 91. artikuluan ezarritakoarekin bat etor zitekeen; izan ere, artikulu horretan 7.000 biztanleko atalasea ezartzen da (...).*

Gure ustez, memoria honetan lehenago adierazi dugun moduan, EAEko udal handienek, *a priori*, behar adina baliabide dituzte, bai eta ingurumen-teknikariak ere, eta, beraz, zerbitzu egokia daukate; hala, funtzio horiek gauzatzeko hautagai egokiak dira, baldin eta, praktikan, eskumenak eskuordetzea eskatu badute, bere egin badute eta neurri zuzentzaileak ezartzeko txostenak egiteko lanak gauzatzen badituzte.
Alegazioak ez du azaltzen zergatik ez den egokia adierazi dugun atalasea. Halaber, ez du azaltzen zergatik den beste sektore-araudi batek eta beste xede batzuekin ezarritako 7.000 biztanleko atalasea EAEko ingurumen-organoak proposatutakoa baino egokiagoa, ez eta nola justifikatu zen erabaki hori hartzea ere. Beraz, ezin dugu alegazioa aintzat hartu.

- *Nolanahi ere, proposamen hori subsidiarioa litzateke, orain nabarmendu behar dugunarekiko. 3/1998 Legea eta 2/2006 Legea Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legea baino lehenagokoak dira. Azken hori indarrean sartu ondoren, araudi horrek zerbitzu-kudeaketari buruz duen gida-oinarria agerikoa da: udalerriek kudeatzea lehenesten du, edo, hala badagokio, mankomunitateek edo udalen beste elkarte batzuek; aldiz, udalez gaindiko erakundeen edo, azken buruan, foru-aldundien kudeaketa bigarren mailakoa da. Beraz, EAEko udal batzuek alegazioetan esan zuten moduan (adibidez, Bermeoko eta Pasaiako udalek), Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen espirituarekiko eta xedearekiko egokiagoa da neurri zuzentzaileak ezartzeko txostenak egiteko ahalmena udalei ematea salbuespenik gabe (ingurumen-kudeaketako eskumena baita), eta atea zabalik uztea foru-aldundien laguntza teknikoa eska dezaten, bestela.*

Memorian behar bezala azaldu dugu zergatik erabaki den horrela banatzea funtzioak administrazio publikoen artean.

Nolanahi ere, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren 7.2 b) artikuluan, orokorrean, atea zabalik uzten zaie udalei Lurralde Historikoetako foru-aldundien laguntza eskatzeko horrelako izapideetan; beraz, ez da berariazko aipamena egin beharrik artikulu horretan. Hitzez hitz, foru-aldundien eskumena litzateke: *udalei laguntza ematea, Lege honetan araututako sailkatutako jarduerarako baimenaren eta aurretiko komunikazioaren prozeduraren mendeko jarduerei eta instalazioei dagokienez.*

- *Alabaina, neurri hori egokitzat jotzen ez bada, azaldu dugun moduan, sektoreko legegileak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17.2 «in fine» artikuluaren arabera, agerian jarri beharko du berariazko muga hori dagoela 10.000 biztanletik beherako udalerrientzat, eta berariaz adierazi (edo arauen bidez berariaz gorpuztu) eta zehaztu beharko du zergatik murriztu diren horrelako udalerrien kudeaketa-ahalmenak, subsidiariotasun- eta proportzionaltasun-printzipioetan oinarrituta.*

Memoria honetan lehenago adierazi dugun moduan, gure ikuspegitik, baieztapen horiek ez dute oinarririk, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuan esandakoa hitzez hitz begiratzen bada. Ez dago aipatu den moduko kudeaketa-ahalmenen murrizketarik.

- *Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak ez ditu kontuan hartu gai horiek guztiak, eta behar bezala zuzendu behar dira hemen adierazitako baldintzetan.*

- ***IV. tituluko V. kapitulua*** *(sailkapeneko jardueren aurretiko komunikazioa). IV. kapitulu hau ere garrantzitsua da euskal udalerrientzat, besteak beste, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak diseinatutako ereduak sailkatutako jarduerarako baimenaren mendeko jardueren perimetroa aldatzen duelako, eta horietako batzuk sailkapeneko jardueren aurretiko komunikaziora eramaten dituelako, izapideak sinplifikatzeko eta zama administratiboak murrizteko hasieran aipatutako prozesu horretan. (…). Laburbilduz, udal-administrazioari dagokionez, kontuan hartu beharko da orain sailkatutako jarduerarako baimenaren mende ez dauden jardueretan kontroleko eta ikuskapeneko tekniken bidez esku hartzea eskatzen dutela eta, horregatik, baliabideak behar dituztela.*

Administrazio publiko guztiek barneko egiturak antolatzen jarraitu behar izan dute edo dute, baliabideak ongi banatzeko, paradigma aldaketa gertatu ondoren, aurretiko kontrola egitetik (baimenak) ondorengo kontrolak egitera (aurretiko komunikazioak edo erantzukizunpeko adierazpenak) igaro baita. Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen gogoetak ez du zehazten komunikazioaren mendeko jardueren areagotzea eta, beraz, kontrola ondorengoa litzateke. Lehenago esan dugun moduan, aipatutako aurreproiektua bat dator, bi tituluen mendeko jardueren banaketari dagokionez, bere garaian apirilaren 23ko 7/2012 Legearen (barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2006ko abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Zuzentaraura egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa) bitartez indarrean jarri zenarekin. Gure ikuspegitik, ez dugu uste gaur egungo proiektuari egotzi behar zaionik funtzioak areagotzea, 2012ko maiatzean banatu baitziren jarduerak eta horiei dagozkien funtzioak, Europako araudiarekin bat etorriz.

- ***VII. titulua (Erakunde kolaboratzaileak eta ingurumen-ikuskaritza).*** *Izapide horretan parte hartu zuten udalek alegazio asko egin dituzte titulu honi buruz, batez ere ingurumen-ikuskaritzari buruzko kapituluari dagokionez, zeinak ondorio garrantzitsuak dituen udalen antolakuntzan, eta giza eta finantza-baliabideetan.*

Alegazio guztiak aztertu eta behar bezala erantzun ditugu, dagozkien izapide-faseetan; horregatik, ez dugu uste bidezkoa denik Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak udal bakoitzaren izenean aurkeztutako alegazioak aipatzea, horiei garrantzi handiagoa emateko xedez edo, bestela, alegazio jakin batzuk testuan sartzea lortzeko, txostena bigarren itzuli moduan erabiliz.

Ez dugu uste Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak ingurumen-ikuskaritzari buruz araututakoak ondorio garrantzitsuak dituenik antolakuntzan eta giza eta finantza-baliabideetan. Adierazi dugun moduan, ez da asko aldatu gaur egungo egoera EAEko udalentzat; aldiz, egiaz, ikuskatu beharreko jardueren kopurua murriztu da, ingurumen-baimen bateratuaren erregimenera pasatzeagatik.

Are gehiago, adierazi behar da EAEko 251 udalerrietatik lauk soilik egin dituztela gai horri buruzko alegazioak; beraz, ez gaude ados zati horretan esaten denarekin, *alegazio asko* egin direla adierazi baitu.

- ***91. artikulua.*** *Artikulu honetan, modu orokorrean erabiltzen da «langile» hitza, jardueren titularrak haiekin elkarlanean aritzera behartzen baititu. Eta hor 89. artikuluan jasotakora itzultzen da; horretan, erakunde laguntzaileak arautzen dira, eta haien esku hartzeko zirkulua zabaltzen, berariaz esaten baitu langile horiek ikuskaritza-lanak egingo dituztela. Askoz ere egokiagoa litzateke bestelako hitz batzuk erabiltzea, esaterako, egiaztatzeko jarduerak, kontroleko jarduerak eta abar, eta ikuskaritzaren nozioa alde batera uztea, ahalmen publikoak erabiltzeaz ari baita azken hori. Ikus,*

halaber, txostenaren gorputzean 92. eta 93. artikuluei buruz egiten diren antzeko gogoetak (txostenaren 82. eta 83. apartatuak).

Arau-testuaren idazketaren alderdi teknikoei buruzko alegazioa da eta, argi eta garbi, ez dagokio halakorik egiterik Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeari honelako txostenetan.

Edonola ere, lege-aurreproiektuari egindako alegazioei erantzuten dieten memoria eta txostenetan aipatu den moduan, 89. artikuluan «ingurumen-ikuskaritzako langileak» arautzen dira, behar bati erantzuteko: erakunde pribatuei aukera ematea zenbait jarduketatan laguntzeko, baldin eta ez badira nahitaez funtzionario publikoek egitekoak, ahalmen publikoak gauzatzea dakartelako berekin, betiere administrazio publikoek hala eskatuta eta haien tutoretzapean, eta dagokion nahitaezko kontratazio-prozedura egin ondoren. Kapitulu horri egindako alegazioei emandako erantzunetara jotzen dugu, behar baino gehiago ez errepikatzeko.

- ***Xedapen gehigarria (bakarra).*** *Badirudi Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak nolabaiteko «autofinantzaketa» ezartzen duela, Administrazio Publikoek etorkizuneko legea aplikatzean izango dituzten betebeharrak eta erantzukizunak gauzatzeko; hala izanez gero, horrek ez ditu inola ere betetzen Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea aplikatzearen ondoriozko finantzaketa-eskakizunak, aurreikusten diren eskumen eta ahalmen berriei dagokienez, testu berria onartu arte indarrean zegoen legeria betez orain arte euskal udalerriek gauzatutakoen aldean. Beraz, komenigarria litzateke paragrafo bat sartzea aipatutako xedapen gehigarrian, gai horri dagokionez Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea aplikatu behar dela berariaz bermatzeko. Paragrafo hori honela egon liteke idatzita: «Aurreko paragrafoan ezarritakoak ez du inola ere eragozten apirilaren 2ko 2/2016 Legean (Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa) tokiko erakundeen finantza-nahikotasunari buruz idatzitakoa, bereziki 17., 18. eta 112. artikuluetan eta lehenengo xedapen iragankorrean jasotakoa».*

Memoria honetan, behin eta berriz azaldu da ez direla eskumen eta ahalmen berriak aurreikusten euskal udalerriek orain arte gauzatutakoen aldean, testu berria onartzeko unean indarrean zegoen legeriarekin bat etorriz. Beraz, ez du zentzurik aipamen hori egiteak.

Nolanahi ere, ez da beharrezkoa eta legegintza-teknika on guztien aurka doa aipamen gurutzatuak egitea arau batean, indarrean egonik modu osagarrian aplika daitezkeen beste arau batzuekiko. Lege-aurreproiektuaren artikuluetan, haietan arautzen diren gaietan aplika daitezkeen lege-lerruna duten xedapen guztiak aipatuko balira, horietako asko duten eduki eta irismenagatik oso garrantzitsuak diren arren, ondoriozko legea arau-katalogo bat izango litzateke eta ez luke berme juridiko handirik emango; izan ere, arauak onartzen dutenetik eta indarrean jartzen denetik ditu ondorioak, eta ez beste xedapen batek berariaz aipatzen duelako.

- ***Azken xedapenetatik lehena.*** *Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren 51. artikulua aztertzean, Batzorde honek ordezko konponbideak proposatu ditu araudi hori eta ustezko foru-eskumen hori Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean ezarritakora egokitzeko, hala materialki nola formalki (...).*

Memorian lehenago esandakora jotzen dugu, planteatutako gai guztiei erantzun baitiegu.

- *Nolanahi ere, eskumen hori Foru Aldundiei eman nahi bazaie, irismen horrekin edo beste batekin, ezinbestean justifikatu beharko da Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17.1.8) artikuluaren aldaketa, Lege beraren 17.2 «in fine» artikuluari jarraikiz, subsidiariotasun- eta proportzionaltasun-printzipioetan oinarrituta; gainera, artikulu horren berariazko aldaketa txertatu beharko da azken xedapen batean, eta adieraziko da neurri babesleak eta zuzentzaileak ezartzeko ingurumen-kudeaketako eskumenei dagokienez Lurralde Historikoen Legearen 7. C) 6 artikuluan eta Lege honen 51. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaiola. Alabaina, Batzorde honen ustez, euskal udalen eskuetan egon beharko litzateke neurri zuzentzaileak txosten bidez ezartzeko eskumen hori, dagoeneko aipatu ditugun zehaztasunekin, euskal udalerrien eskumen propioa delako.*

Memorian lehenago esandakora jotzen dugu, planteatutako gai guztiei erantzun baitiegu.

- ***Eranskin ekonomikoa, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legea onartu ondoren EAEko udalerrien finantza-nahikotasuna bermatuko duena**. Azkenik, Tokiko Gobernuen Batzordearen ustez, arau-ekimena proposatu duen sailak egindako memoria ekonomikoa ez dator bat Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 18.3 eta 112. artikuluekin (ez eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 25.4 artikuluarekin ere), ez bada egin gutxieneko zehaztasuna duen azterketarik edo zenbatespenik, eredu berri hori ezartzeak izan ditzakeen ondorioei buruz...*

Memorian lehenago esandakora jotzen dugu, planteatutako gai guztiei erantzun baitiegu. Gogorarazi nahi dugu Tokiko Gobernuen Batzordeak berriro ekartzen duela ahotara, okerki, 17.3 artikulua, udalerrien eskumen propioak zeintzuk diren lege bidez edo foru-arau bidez zehazteari buruzkoa, gero, interesak tarteko, 18.3 artikuluarekin lotzeko, zeinak, nagusiki, hau esaten duen: udalei eskumen propioak esleitu eta propiotzat izendatu zaizkien eskumenetatik eratorritako zerbitzu, jarduera edo prestazioen zehaztu ondoren, behar den baliabide-zuzkidura egin behar da, udalen finantza-nahikotasuna bermatzeko.

Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren memoria ekonomikoan neurriak udaletan izango duen eragin ekonomiko neutroaz esandakora jotzen dugu, bai eta, hala badagokio, ondorengo organoek erabakiko dutenera ere, lege-aurreproiektuan ezarritakoari jarraikiz informatu beharko baitute.

Bilera tokiko gobernuen batzordeko kideekin, 2019ko apirilaren 24an.

Tramitazioari buruzko memoria honetan jaso beharreko modukoa da 2019ko apirilaren 24an eginiko bilera. Bertan, Euskadiko ingurumen-administrazioaren lege-aurreproiektuari (EIALA) eta Euskadiko Tokiko Gobernuek Batzordeak (ETGB) 2019ko urtarrilaren 29an emandako txostenari buruzko alderdiak landu ziren.

Bilera ETGBk eskatuta egin zen, gai-zerrenda jasotzen duen deialdi formalik gabe, eta bertan izan ziren Ingurumeneko sailburuordea, Ingurumen Administrazioaren zuzendaria eta Eusko Jaurlaritzan espedientearen tramitazioaz arduratzen ari den letradua, bai eta Eusko Jaurlaritzako beste letradu bat ere, idazkari gisa. ETGBren aldetik bi kide bertaratu ziren, EUDELeko langile bat eta aholkulari pribatu bat.

Aipatutako bileraren xedea izan zen 2019ko urtarrilaren 29an adierazitakoa berrestea. Parte-hartzaileek esan dute ETGBk ez duela izan araua proposatzen duen Zuzendaritzak beren txostenari emandako erantzunaren berri, eta planteatu da bilerak

Euskadiko Tokiko Erakundeen Legearen (ETEL) 90. artikuluan deskribatutako aldebiko batzordetzat har daitekeen. Berriz ere adierazi dute aurreproiektuan ETELeko xedapenen urraketak daudela, toki-autonomiari dagokionez, eta beharrezkoa dela ETELeko testua espresuki aldatzea eta Euskadiko udalerrien finantzaketari buruzko memoria ekonomiko espezifiko bat txertatzea, eskumenen arloan izandako aldaketak direla eta.

Aurretiazko alderdi gida, aldebiko batzordearen deialdia egiteko beharrari dagokionez, alderdi honek jakinarazi nahi du administrazio sustatzaileak ETGBren txostenari 2019ko martxoaren 7an eman zion erantzunean adierazitakoa berresten duela. Gure iritziz, arau-proiektu hau ez da ETGBk alerta goiztiarreko organo gisa esku hartu behar duenetakoa eta, ondorioz, ez litzateke deitu behar ETELaren 90.3 artikuluan aurreikusitako aldebiko batzordea, txostenean proposatutako aldaketen inguruko desadostasunik balego. Horren kalterik gabe, erakundeen arteko elkarlanaren printzipioen arabera, bilerak egin daitezke arauaren testua hobetzeko asmoz, eta horixe bera egin da aipatutako bileran. Era berean, aipatu behar da ETELen gutxieneko baldintza objektibo batzuk aurreikusten direla, bilera bakoitzera ETGBko hiru kide joateari buruzkoak.

Aurreproiektuari eginiko oharren eduki materialari helduz, ETGBk ez ditu aztertu Ingurumen Sailburuordetzak azaldutako gaiei eman zizkien erantzun zehaztuak, nahiz eta erantzuteko dokumentu hori (tramitazio-memoria) Eusko Jaurlaritzan gardentasun-atarian argitaratuta eta herritarren esku egon den 2019ko martxoaren 7tik. Horren ondorioz, bileran Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak aipatutako memorian horren 6. eta 20. orrialdeen artean aztertutako gaiak eztabaidatu ziren berriro ere, eta bi alderdiak ez ziren ados jarri konturik funtsezkoenetan. Zehazki, alderdi hau ez dago ados honako hauekin:

- ETELen urraketak egin direla udal-eskumenen aldaketak daudelako aurreproiektuan, eta aldaketa horien ondorioz beharrezkoa dela ETEL aldatzea, funtsean, EIALAren 51. xedatutakoa dela eta.

- Beharrezkoa dela eranskin ekonomiko espezifiko bat egitea aurreproiektuaren onarpenaren ondorioz Euskadiko udalen nahikotasun finantzarioa bermatzeko.

Zentzu horretan, ETGBren txostenak berak dioen bezala (28. or.) organo sustatzaile honek ez du uste beharrezkoa denik udalen nahikotasun finantzarioa bermatuko duen eranskin espezifiko bat txertatzea. Izan ere, ez dago toki-erakundeei baliabide gehiago emateko benetako eta premiazko beharrik, EIALAn txertatutako neurri berriek ez dietelako beste funtziorik gaineratzen; aitzitik, orain egiten dituzten lanak kentzen dizkiete. Memoria honetan azaldu denez, ez dago jarduerak edo zerbitzuak ugaritzeko legezko inposiziorik; aldiz, legeak ahalmena ematen die udalei, jarduera horiek onartu nahi dituzten erabakitzeko. Are gehiago, esan behar da badirela jarduera oso esanguratsu batzuk, guztiak ere potentzial kutsatzaile handikoak eta, beraz, ingurumen-baimen bateratua (IBB) eskatzen dutenak (I B eranskina). Guztiak Ingurumen Sailburuordetzaren eskumenekoak izatera pasatuko dira. Horrela, toki-erakundeen gastu korronteetatik kendu behar dira baimena (jarduteko lizentzia sailkatua) izapidetzearen, kontrolatzearen eta, dagokionean, zehaztearen lanak eta kostuak. Era berean, ingurumen-baimen integratua (IBI) behar duten jarduerei udal-lizentzia izateko betebehar orokorra kendu egin da, eta horrek ere aurrezpena ekarriko du udalen finantzetara.

Egin beharko ez diren lan horiek eta horren ondoriozko aurrezpena aipatzen dira EIALAren memoria ekonomikoan (Ogasunaren arloko Sail eskudunak bere txostenean

ontzat emandakoa), eta horrela argitutzat ematen ditugu gai horren harira ETGBk bere txostenaren 29. orrialdean aurkeztutako zalantzak.

- Puntu honetatik ETGBk egindako beste erreferentzia batzuetara pasatuko gara: Euskadiko udalerriek ETELen 17 1.8) artikuluaren arabera berezko eskumen gisa dituzten funtzio edo gaitasun batzuk murriztu edo mugatu nahi izango balira, mugaketa hori Legearen subsidiariotasun- eta proportzionaltasun-printzipioen arabera justifikatu beharko litzateke, ETELen 17.2 *in fine* artikuluan xedatzen duen bezala.

Gure ustez, EIALAren aurreproiektuan EAEko udalei esleitzen zaizkien funtzioei buruz jasotzen diren xedapenek ez dituzte mugatzen edo murrizten 17.1.8 artikuluan aurreikusitako funtzio edo ahalmenak, zeinak bere horretan mantentzen baitira (antolamendu osagarria, sustapena, kudeaketa (...) hiriguneetan). Aitzitik, **sektoreko erreferentziako arau-esparrua** finkatzen dute, udalek hiriko ingurumenaren babesarekin lotutako eskumen horiek gauzatu ahal izan ditzaten, ETELen 17.1 artikuluaren lehen paragrafoak aurreikusten duen moduan. Egia da esparru hori aurreproiektuaren bidez finkatuta, badirela jarduera batzuk (IBI eta IBB behar dutenak) Euskadiko udalen jarduera-esparrutik kanpo geratuko direnak, ondoren ez delako jarduteko lizentzia sailkatu bat beharko eta Ingurumen Sailburuordetza izango delako organo baimen-emaile bakarra. Udal-eskumenak bere horretan geratuko dira jarduera sailkatuaren lizentzia (JSL) eta jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioa (JSAK) behar duten jardueretarako. I.C eranskinean dago araututa lehen kasua, eta I.D eranskinean bigarrena.

Jarduera sailkatuetan esku hartzeko araubidetik kanpo geratzen direlako udalaren esku-hartzerik beharko ez duten jardueren kopurua gutxitu egingo da, baina, gure iritzian, ezin esan daiteke udal-eskumenen mugaketa abstraktua gertatuko denik. Edonola ere, justifikatua dago Zerbitzuen Zuzentarauan, Estatuko Omnibus eta Aterki Legeetan eta Euskadiko Omnibus Legean ezarritakoaren arabera. Horren xedea da administrazioaren bikoiztasunak saihestea, aurretiazko baimenen erabilera mugatzea eta, laburbilduz, Administrazio publiko guztien administrazio-jardueraren eraginkortasun hobea bermatzea.

ETELek berak, udal-eskumenen klausula unibertsalari buruzko 16. artikuluan, honako hau xedatzen du: «Zerbitzuen antolamendu edo prestazioan bikoiztasunak ekidite aldera, udalerriek ezin izango dituzte zenbait eskumen beren gain hartu edo baliatu; hain zuzen ere, ordenamendu juridikoak, eskumenen esleipen-sistemaren arabera, berariaz beste gobernu-maila batentzat gordetzen dituen jarduera, zerbitzu edo prestazioen gainekoak». Ildo beretik jotzen du Toki-araubidearen oinarrien Legeak 84 bis artikuluan: «Izaera orokorrez, jarduerak gauzatzeko ez da lizentziarik edo bestelako prebentzio-baliabiderik behar izango. (…) 3. Toki-entitate baten eta beste administrazio baten artean lizentzia edo baimen konkurrenteak daudenean, toki-entitateak berariaz arrazoitu beharko du, baimenaren edo lizentziaren premia jasotzen den justifikazioan, babestu nahi den interes orokor zehatza, eta arrazoitu beharko du, halaber, interes hori ez duela beste baimen batek betetzen».

Adierazitako guztiagatik, jarduera eta instalazio batzuetan administrazioaren esku-hartze bikoitza (Ingurumen Sailburuordetza/IBI edo IBB + Udala/JSL) kentzea, EIALAk sustatzen duen moduan, nahikoa justifikatua dago proportzionaltasuna, efikaziari eta efizientziari dagokienez, toki-erakundeek beren eskumenak jarduera-kopuru murritzago bati aplikatu behar izatearen kalterik gabe.

2.5. Euskadiko Kontseilu Ekonomiko eta Sozialaren irizpena.

2019ko otsailaren 22an, Euskadiko Kontseilu Ekonomiko eta Sozialak 4/19 Irizpena eman zuen, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuari buruzkoa.

Irizpenaren oharpide orokorretan, Euskadiko Kontseilu Ekonomiko eta Sozialak oso egokitzat jotzen du ingurumen-arloko arau berria egiteko ekimena, orain indarrean dagoen Ingurumena babesteko Lege Orokorra ordezkatzeko, eta ongi eraikitako aurreproiektua dela eta horri buruzko iritzi ona duela dio, nahiz eta zenbait oharpen egin gai jakin batzuei buruz.

Honako hauek dira aipatutako oharpenak:

1. Aurreproiektuaren justifikazioko memoria ekonomikoari dagokionez

Irizpena egin zaion aurreproiektuaren justifikazioko memoria ekonomikoan, ahalegin handia egin da legea ezartzeak administrazio publiko eta pribatuentzat izango dituen gastuak eta kostuak zenbatesteko, baina diru-sarrerei, finantzaketari eta aurrekontuetan izango duen islari buruz zerga-kontzeptuak eta neurri fiskal orokorrak soilik aipatzen ditu.

Horregatik, uste dugu komeni dela memoria ekonomikoa osatzeko gastuen simulazioak eta zenbatespenak egitea, aurreproiektuan ezartzen baita sortuko diren tasek, zergek eta tresna fiskalek helburu jakin bat izango dutela eta aurrekontu-partida jakin bat osatuko dutela, ingurumen-administrazioko legea betetzeko xedez.

Aurreproiektuarekin batera doan memoria ekonomikoaren apartatuetan azaldu den moduan, aurreproiektuan aukera ematen da neurri fiskalak eta finantzarioak hartzeko administrazioaren eta ingurumen-babesaren arloan, baina ez dira zehazten egon daitezkeen diru-sarrera horien irizpideak eta zenbatekoak, arau-esparrua ezartzera mugatzen baita, gero lege bidez zehazteko.

Aurreproiektuan ez direnez zehazten egon daitezkeen diru-sarrerak, ezin da egin horien garrantziaren zenbatespenik edo simulaziorik, eta Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuan zehazten den arau-esparru orokor berria erabakiko duten arauzko garapenen esku uzten da zeregin hori.

Halaber, adierazi behar da eskumen fiskalak hiru Lurralde Historikoen artean banatuta daudela EAEn, haiek baitute zergapeko egitateak zehazteko gaitasun osoa, bai eta, hala badagokio, aplikatu beharreko zerga-hobariak eta salbuespenak ezartzekoa ere; horrek asko zailtzen du diru-sarrerak zenbatestea, beste administrazio batzuetan hartutako erabakien mende geratzen baita, kasu honetan, aldundietan erabakitakoaren mende.

2. Zioen azalpenari buruz

1.- *11. orrialdeko laugarren paragrafoan adierazten denez, ingurumen-arloan esku hartzeko prozedurak arinago izapidetze aldera, jarduera bat egitean tokiko hurbileko auzotarrei horren berri emateko izapidea ezabatu da eta, horren ordez, dagokion Aldizkarian eta egoitza elektronikoan eta legezko abisuetan argitaratuko da. Arreta erakarri nahi dugu izapide hori ezabatzeari buruz, ez badirudi modurik egokiena denik gardentasunaren printzipioak eta herritarren parte-hartzea sustatzeko, aurreproiektuaren zioen azalpenean printzipio horiek aldarrikatzen diren arren.*

Gure ustez, beharrezkoa izan da jakinarazteko ereduak aldatzea, XXI. mendean eta antzeko beste neurri batzuekin bat etorriz, lehengo ereduak arau zaharretatik baitatoz, 1961eko Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko Arauditik, adibidez. Udalek berek adierazi diote Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailburuordetzari horrelako jakinarazpen pertsonaleko ereduek oso eragin txikia dutela, kontuan hartzen badira zenbat alegazio aurkezten dituzten auzotarrek, ingurumen-tituluak izapidetzeko espedienteetan jasotzen diren alegazio guztiekin alderatuta. Halaber, esan behar da Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuan ez zirela aurreikusi udaleko legezko abisuak, eta gero gehitu zirela, aurreproiektuan jasotako publizitateko neurrien osagarri modura, udal batzuek aurkeztu zituzten alegazioak zirela eta.

2.- 12. orrialdearen hirugarren paragrafoan adierazten da (....); horren ondorioetarako, uste dugu egokia dela paragrafo horri klausula hau gehitzea: ***«interesdunen erregistroa sortzean, ez da ezabatuko legitimoki interesdun den edonork informazioa atzitzeko eta jasotzeko duen eskubidea, aplikatu beharreko araudiaren arabera, nahiz eta ez egon erregistro honetan».***

Horrelako erregistroak sistematikoki kokatuta daude eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioan interesa duten pertsonentzako dira; uste dugu nahiko argi dagoela eta ez dela azaldu beharrik prozeduretan interesa dutenek ez dituztela informazioa atzitzeko eskubideak mugatuta izango, 39/2015 Legearen 4. artikuluan jasotako «interesdun» kontzeptuarekin bat etorriz.

3. Artikuluei dagokienez

1. artikulua.- Xedea

Proposatzen dugu ingurumena kontserbatzea ere ezarri nahi den araudiaren helburuen parte dela; horregatik, xedea azaltzen duen xedapenean hori txertatzea iradokitzen dugu.

Ekarpena onartzen da, eta honela geratuko da idatzita:

1. artikulua: Lege honen helburua da EAEn ingurumena babesteko, **kontserbatzeko** eta hobetzeko arau-esparru eguneratu bat ezartzea, eta pertsona fisiko zein juridikoen eskubideak eta betebeharrak zehaztea, besteak beste, honako helburu hauek lortzeko:

Halaber, proposatzen dugu adieraztea enpresan eta lan-esparruan ere ingurumen-hezkuntza beharrezkoa dela eta, beraz, sustatu egin behar dela:

Ezin daitezke banan-banan zehaztu artikulua aplikagarri zaien gizarte-eragile guztiak. Ulertzen da artikuluan hitzez hitz aipatutako gizarte-eragileen barruan daudela enpresak eta lan-esparruak.

2. artikulua.- Definizioak

Proposatzen dugu a) apartatuko Ingurumen Akordioaren definizioan sindikatuak gehitzea, ingurumen-akordioaren subjektu izan daitekeen aldetik:

2.a) artikulua: Ingurumen-akordioa: ingurumen-administrazio eskudunaren eta enpresa baten edo sektore, ***sindikatu-erakunde,*** *kolektibo edo erakunde zehatz bateko ordezkarien artean izenpetutako akordioa, eta, akordio horren arabera, borondatezko eran lotesten dira ingurumena babesteko helburu batzuk betetzera.*

Arauak taldeei eta erakundeei buruz egiten duen aipamenak guztiak hartzen ditu barnean eta, beraz, ez dugu beharrezkotzat jotzen sindikatu-erakundeei berariazko aipamena egitea. Hain zuzen ere, 79. artikuluak, ingurumen-akordioak arautzen dituenak, *gizarteko instantzia guztien* parte hartzea lortu nahi duela dio, eta barne hartzen ditu sindikatu-erakundeak ere.

Proposatzen da «instalazioa» hitzaren definizioan unitate tekniko iraunkorrak eta aldi baterakoak ere sartzea:

Ez dugu beharrezkotzat jotzen instalazioaren iraupenean (iraunkorra edo aldi baterakoa) oinarritutako definizioa egitea.

Halaber, «ingurumen-aztarna» esamoldea definitzea proposatzen dugu, testua hobetu uler dadin, bereziki 82. artikuluaren edukiari dagokionez, zeina kontzeptu horri buruzkoa den.

82. artikuluan dagoeneko azaltzen da produktuen edo erakundeen ingurumen-aztarnarekin haien bizi-zikloan izandako portaera neurtu nahi dela, eta administrazio publikoek Europar Batasunak onetsitako metodologiak sustatu behar dituztela. Uste dugu egokiago dela gaiari buruzko arau sektorialek edo espezifikoek egindako definizioak hartzea, arau orokor honetan definizio bat ematea baino.

5. artikulua. Pertsonen eskubideak

Lege-aurreproiektuaren arabera pertsona guztiek izango dituzten eskubideen zerrendan, a) apartatua ezabatzea proposatzen dugu.

Zehazki, uste dugu egokia dela a) apartatuan azpimarratuta dagoen aipamena, zeinak dioen «hala emakumeak nola gizonak». Xedapenak adierazten du pertsona guztiek izango dutela eskubidea eta, beraz, horrek pertsona guztiak hartzen ditu barne, gizonak, emakumeak eta bestelakoak.

Emakundek lege-aurreproiektuaren nahitaezko txosten loteslean berariaz hala eskatuta gehitu genuen zati hori. Beraz, ez dagokio Euskadiko Kontseilu Ekonomiko eta Sozialak egindako proposamena onartzea.

10. artikulua. Ingurumenerako Aholku Kontseilua

Ingurumenerako Aholku Kontseiluari dagokionez, uste dugu arauan jasota geratu beharko litzatekeela aholku-kontseilu hori goi-mailakoa dela ingurumenaren eta lankidetzaren arloan.

*10. artikulua: Ingurumenerako Aholku Kontseiluak, EAEko ingurumenaren eta lankidetzaren arloko **goi-mailako kontsulta-organo** den aldetik, xede du harremana sustatzea...*

Ez dugu uste hori gehitzea beharrezkoa denik.

11. artikulua.- Osaera

Aplikatu beharreko araudiarekin bat etorriz, «ordezkaritza handieneko» hitzak gehitzea proposatzen dugu, Ingurumenerako Aholku Batzordea osatzen duten enpresa- eta sindikatu-erakundeei dagokienez.

11. artikulua: g) ***Ordezkaritza handieneko*** *enpresa-erakundeak.*

h) ***Ordezkaritza handieneko*** *sindikatu-erakundeak.*

Ez otsailaren 27ko 3/1998 Legeak (Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesten duena) ez otsailaren 15eko 7/2008 Dekretuak (Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politikako Aholku Batzordeari buruzkoa) eta horren ondorengo aldaketek ez zuten bereizketarik egin enpresa- eta sindikatu-erakundeen artean, ordezkaritza handiagoa izateagatik.

Aholku Kontseiluaren helburua da gizarte-interesak ordezkatzen dituzten taldeei ahotsa ematea, eta sindikatuak eta enpresa-erakundeak hala izan daitezke, ordezkaritza handiagoa izan ala ez, laneko arauen ondorioetarako.

18. artikulua.- Ingurumen-arloan esku hartzeko araubideak

Hau gehitzea proposatzen dugu, eragina zehatz-mehatz jasota gera dadin.

18.2. artikulua: Jarduerak eta instalazioak lege honek araututako ingurumen-arloan esku hartzeko dauden araubideen mende jartzeko, ***jarduera horiek ingurumenean duten eragina*** *hartu da oinarrian, alderdi hauek kontuan hartuta:*

Egindako alegazioa eskertzen da eta testu hau gehituko dugu: «(...) jarduera horiek ingurumenean eta jendearen osasunean».

35. artikulua.- Jendaurreko informazioa

Jendaurreko informazioaldia gehiago luzatzea bermatzeko, proposatzen dugu instalazio edo jardueren proiektuak, ingurumen-baimen integratua edo ingurumen-baimen bakarra behar dutenak jendaurreko informazioaldian jartzeko EHAAn egiten den iragarkia jarduera edo instalazioa egingo den tokiko udaleko iragarki-oholean ere jar dadila, hori zehazten duen bigarren paragrafo bat gehituta:

35.1. artikulua: Eskabidea aurkeztu eta emandako dokumentazioa osorik dagoela egiaztatu ondoren, instalazioa edo jarduera egiteko proiektua hilabeteko jendaurreko informazioaldian jarriko da, EHAAn eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan iragarri ondoren, alegazioak egiteko aukera egon dadin. ***Era berean, iragarki horren kopia bat jarriko da jarduera edo instalazioa kokatuko den herriko udaleko iragarki-oholean.***

Alegazioa egokitzat jotzen da. Honela geratuko da idatzita amaierako testua:

«Hedapen handiagoa izan dezan, jarduera edo instalazioa kokatuko den herriko udalari jakinaraziko zaio iragarkia, toki-erakundeak bere iragarki-oholean jar dezan».

38. artikulua.- Beste txosten batzuk

Xedapen honetan, ez da zehazten zein agintari edo erakunderi eskatu beharko zaion aipatzen den osasun-arloko nahitaezko txostena. Horregatik, uste dugu gehiago zehaztea komeni dela, esaterako, txostena publikoa izan behar dela edo, bestela, arauz garatuko dela.

Gure ikuspegitik, eta kontuan hartuta udalek gutxienez otsailaren 27ko 3/98 Legea indarrean sartu zenetik eskatzen dituztela osasun-arloko horrelako txostenak, uste dugu ez dela beharrezkoa osasun-arloko txostena administrazio publikoari eskatzeari buruz oharrik egitea.

Halaber, testuko «beren eskumenak direla-eta iritzia eman behar duten organo guztiei» aipamena ikusita, ulertzen da nahitaez publikoak izan behar direla.

Aurkeztutako alegazioa aztertu eta artikuluak hitzez hitz diona berriz irakurri ondoren, erabaki dugu hobekuntza tekniko txiki bat egin behar zaiola aginduari, eta informazioa eman behar duten organoen eskumenei buruzko aipamen errepikakor bat ezabatu.

40. artikulua.- Ebazpena

Xedapen honek ezartzen du zer eduki eta epe bete behar dituzten ingurumen-baimen integratuko eta ingurumen-baimen bakarreko prozedurak amaitzeko ebazpenek; hala, 9 hilabeteko epea du lehenengoak, eta 6 hilabetekoa bigarrenak. Adierazi behar dugu epe horiek luzeegiak direla, eta arinago abiarazi behar direla proiektu eta jarduera ekonomikoak, aipatutako baimenak eskatzera bultzatzen dutenak. Horregatik, epe horiek nabarmen laburtzeko eskatzen dugu.

Gure ikuspegitik, egokiena litzatekeen arren, ezinezkoa da epe horiek murriztea; izan ere, gaur egun, administrazio publikoek arazoak dituzte ingurumen-baimen integratuaren bederatzi hilabeteko epea betetzeko, adibidez.

Nolanahi ere, epe horiek gehieneko epeak dira, eta materialki murriztu daitezke prozedura izapidetzean, hori abiaraztean egon daitezkeen egoeren arabera.

43. artikulua.- Baimenen indarraldia eta berrikuspena

Gure ustez, xedapen batek ez ditu adierazpen kualitatibo eta orokorrak izan behar, 43.4 artikuluko b) letran gertatzen den moduan; horretan, ingurumen-baimen integratua eta ingurumen-baimen bakarra ofizioz berrikusteko kasuak jasotzen dira, eta agintari eskudunen esku uzten du ofiziozko berrikuspena egitea, honi buruz duen iritziaren arabera: «igorpenak nabarmen murriztu ahal diren», «aldaketa handiak egitearen ondoriozko» «gehiegizko kosturik gabe».
Horregatik, adierazpen horiek zehaztu daitezela proposatzen dugu, arauan aipamen bat txertatuz edo erregelamendu bidez garatuz.

Ezin dugu onetsi alegazio hori. Klausula irekiak dira eta horrela aipatuta datoz ingurumen-araudi alderatuan, administrazioaren esku-hartzearen oinarrizko printzipio bati (aurrerapenaren klausula) eutsi nahi diotelako; horren arabera, administrazio publikoek tresnak izan behar dituzte data jakin batean igorririk segidako traktua duten baimenak eguneratzeko.

Ez da inola ere agintari eskudunaren jarduera arbitrarioa, diskrezionalitate teknikoan oinarritutako jarduera baizik, interes orokorra lortzeko. Ezin da pentsatu data jakin batean emandako baimena ez denik berrikusi behar aurrerapen teknikoaren arabera; eta aurrerapen tekniko hori ezin denez aurretik ezagutu, eta ezin zaienez enpresei edozein aldaketara egokitzeko eskatu, murrizpen nabarmenen bidez eutsi eta justifikatu behar da hori, gehiegizko kostuak ezarri beharrean.

Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuan hitzez hitz jasotakoa bat dator ingurumenaren arloko beste araudi batzuetan ezarritakoarekin eta,

gainera, abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren (Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuarena) 26.4.b) artikuluan oinarrian ezarritakoa errepikatzen du, hitzez hitz.

Nolanahi ere, aurrerapen teknikoak ez du legearen babesik behar kasuz kasu aplika daitekeela erabakitzeko, ingurumena babeste aldera.

59. artikulua.- Ingurumen-ebaluazioa

43. artikuluari buruz adierazi dugun moduan, ez zaigu egokia iruditzen xedapen batean adierazpen kualitatiboak eta orokorrak egitea eta agintari eskudunen iritziaren esku uztea.

59.1. artikulua: Ingurumen-ebaluazioko dagokion prozedura egin beharko dute, nahitaez, ingurumenean eragin nabarmena izan dezaketen plan, programa eta proiektuek, ***aplikatzekoa den araudiaren eta lege honetan ezarritako erregelamendu bidezko garapenaren arabera****, ingurumen-arloko babes-maila handia bermatzeko eta garapen jasangarria sustatzeko, honako hauen bidez:*

Ezin dugu alegazioa onetsi; izan ere, «eragin nabarmena izan dezaketen» eta antzeko esaldiak daude ingurumen-ebaluazioari buruzko araudian, jatorrizko arauetatik eratorriak.

Hala oinarrizko legediak nola aurreproiektuak zehazten dute eragin nabarmenak direla:

> 2.h) artikulua, Ingurumenean eragin nabarmena: ingurumenaren kalitatearen edozein alderdik kalterako aldaketa edo aldaketa handia jasatea, bereziki iraunkorra edo epe luzekoa bada. Natura 2000 Sareko guneei dagokienez, eragin bat nabarmena dela esango da toki horretan kontserbatzen diren habitaten edo espezieen kontserbazio-egoera edo, hala badagokio, berroneratzeko aukerak zehazten dituzten parametroek txarrera egitea eragin badezake.

Esandakoa ez errepikatzeko, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren entzunaldian V. titulua (ingurumen-ebaluazioa) baino lehenagoko oharpenetan erantzundakora jotzen dugu; nolanahi ere, nabarmendu behar da ingurumen-eragin esanguratsuak izan ditzaketen plan, programa eta proiektuei aplikatzen zaiela ingurumen-ebaluazioa, bai ondorio horiek gertatu behar diren ziurtasuna dagoenean (probabilitate altua), bai zalantza dagoenean (zehaztu gabeko probabilitatea). Aldiz, ez da aplikatu behar ondorio horiek gertatuko ez diren ageriko ziurtasuna dagoenean. Kontzeptuon zehaztapena II. eranskineko proiektuen zerrenda bikoitzean dago jasota (zuzenean edo zeharka).

62. artikulua.- Ebaluatu gabeko planen, programen eta proiektuen deuseztasuna

Uste dugu testuan zehaztu beharko litzatekeela ingurumen-inpaktuaren nahitaezko ebaluazioa egin gabe erabat edo partzialki gauzatutako proiektuei ebaluazio hori egingo zaiela, ezertan eragotzi gabe ebaluazioa ez egiteagatik izan ditzaketen zehapenak. Eta, horregatik, jokabide hori ezin da besterik gabe konpondu, egin gabeko izapidea ondoriorik gabe gauzatuz; izan ere, arau-hauste oso larritzat jo da Bederatzigarren Tituluan, ingurumen-arloko diziplinari buruzkoan, 104.2.b) artikuluan.

62.2. artikulua: Ingurumen-inpaktuaren nahitaezko ebaluazioa egin gabe erabat edo partzialki gauzatutako proiektuei dagokienez, organo sustatzaileak dagokion ebaluazio-prozedura egingo die proiektu horiei, gabezia agerian jarri den unean, eta, hala

badagokio, ondorengo ebaluazioaren berezko berezitasun teknikoak aplikatuko dira, ***ezertan eragotzi gabe Lege honen 104.2.b) artikuluaren arabera izan ditzakeen zehapenak****.*

Alegazioa onesten da eta, horrenbestez, testua aldatuko da.

65.- Ingurumen-ebaluaziotik salbuetsitako plan, programa eta proiektuak
Uste dugu ***plan eta programa fiskalak*** *ingurumen-ebaluaziotik salbuetsitako plan, programa eta proiektuen zerrendan sartu behar direla.*

Ingurumen-ebaluaziotik salbuetsita daude finantza- eta aurrekontu-izaerako plan eta programak, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen (ingurumen-ebaluazioari buruzkoa) 8.1 b) artikuluan hitzez hitz eta oinarrian ezarritakoaren arabera. Uste dugu ez dagokiola beste plan mota jakin batzuk berariaz salbuesterik, esaterako, fiskalak; izan ere, hala eginez gero, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak Estatuko oinarrizko legeriak orokorrean ezartzen duen ingurumen-babesaren araubidea murriztuko luke Euskadin.

Bestalde, bigarren paragrafoan jasotako kasuari dagokionez, zeinaren arabera ingurumen-organoak ezarri beharko duen zein egoeratan ez diren izango nabarmenak plan edo programek ingurumenean izandako eraginak, uste dugu irizpide horiek ezartzea ez dela ahalmena izan behar, betebeharra baizik; horregatik, testuan horren ondorioetarako behar diren aldaketak ezartzea proposatzen dugu.

Plan, programa edo proiektu zehatz bat ingurumen-ebaluazioaren aplikazio-eremutik kanpo geratzeko irizpide nagusia honako hau da: ingurumenaren gaineko ondorio esanguratsuak izateko aukerarik ez izatea agerikoa, hau da, zalantzarik gabea, izatea.

Are gehiago, plan, programa edo proiektu batek ingurumenaren gaineko ondorio esanguratsuak izan ditzakeen edo ez zalantzan badago, ingurumen-arloko oinarrizko legeriak ezarrita du dagoeneko ingurumen-ebaluazio sinplifikatuaren prozedura jarraitu behar dela, lege-aurreproiektuan bertan aurreikusi bezala. Eta hori guztia, gainera, azterketa sakonetan sartzeko asmorik gabe, kontuan izanik ingurumen-organoak Euskal Autonomia Erkidegoko lurretan izandako esperientziatik ateratakoak bezalako suposizio jakin batzuk eman daitezkeela, non ingurumenaren gaineko ondorio esanguratsuak izateko aukera ezaguna eta oso txikia den.

68. artikulua.- Publikotasuna

Ingurumen-ebaluazioko prozeduren ebazpenak ezagutzera emateko, uste dugu garrantzitsua dela bermatzea interesdunek ebazpenaren kopia jaso ahal dutela, eskatzen badute.
68. artikulua: Ingurumen-ebaluazioko prozedurei amaiera emateko ebazpenak dagokien Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, bai eta ingurumen-organoaren egoitza elektronikoan ere. ***Kopia bat emango zaie eskatzen duten erakunde edo pertsona interesdunei.***

Ez dugu uste hori zehaztea beharrezkoa denik. Aldizkari ofizialean edo egoitza elektronikoan argitaratutako ebazpenen kopia eskatzen duten erakunde edo pertsona interesdunak tratatzeko, oinarri hartuko dira Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren III. Tituluan (Ingurumen-arloko informazioa, parte-hartze publikoa eta justizia) eta ingurumen-arloko informazioko, parte-hartze publikoko eta justiziako eskabide horiei buruzko oinarrizko araudian ezarritako baldintzak.

83. artikulua.- Erosketa publiko berdea

Uste dugu erosketa publiko berdea mekanismo egokia izan daitekeela lege-aurreproiektuak 83. artikuluan jasotzen dituen ingurumen-arloko helburuak lortzeko.

Testuinguru horretan, 80. artikulua (Ingurumen-kudeaketa eta -ikuskaritzarako Europar Batasuneko sisteman [EMAS] parte hartzea sustatzeari buruzkoa) betetzeko, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuak proposatzen du sistema hori erabiltzea kontratazio publikoko prozeduretan; hori ikusita, uste dugu garrantzitsua dela hau esatea: EMAS sistemak onarpen handia du, eskakizun-maila berezia duelako, baina badira beste ziurtatze-sistema batzuk ere, nazioarteko bermea dutenak, esaterako, ISO sistema, zeina euskal enpresetan zabalduta dagoen, gainera.

Bi errealitateak uztartzeko, 83.3 artikuluan klausula bat txertatzea proposatzen dugu, zeinetan jasoko den kontratazio publikoko prozeduretan ziurtatzeko eta ingurumen-kudeaketako sistema horiek sartu behar direla, EMAS sistema, adibidez, eta sistema horiek duten eskakizun-mailaren arabera ebaluatu behar direla prozeduran.

EMAS sistema eta kontratazio publikoarekin duen lotura Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuaren 80.2 e) artikuluan dago jasota.

Hitzez hitz adierazten da administrazio publikoek neurriak hartu behar dituztela, xede honekin: kontratazio publikoko prozeduretan sistemara (EMAS) atxikitzeko irizpidea txertatzea, sektore publikoko kontratuen arloko araudiak ezarritakoaren arabera.

Halaber, gogorarazi nahi dugu Europako EMAS araudiak horrelako estandarrak lehentasunez sustatzera behartzen dituela administrazio publikoak, arau pribatuetan jasotako ingurumen-kudeaketako sistemak sustatu beharrean, zeinak, orain arte, ez diren EMAS sistemaren baliokideak.

Era berean, artikuluaren xede den erosketa publiko berdea ez da zehazki erakunde barruan ingurumen-kudeaketako sistema egotea, baizik eta birziklatzetik, balioztatzetik eta berrerabiltzeko prestatzetik datozen hondakinak merkatuan sartzea, eta EMAS araudiko prozedurek ez dute hori ebaluatu behar; horregatik, egindako eskabidea ez da egokia artikulu honetarako.

Bestalde, xedapen berean jasotzen da erabiliko diren azpiproduktuen, bigarren mailako lehengaien eta abarren ehunekoak adierazi behar direla kontratazio publikoko administrazio-klausulen eta klausula teknikoen orrietan, eta % 40 ezartzen da erabileraren gutxieneko ehunekotzat, bidezko arrazoi teknikoak egon ezean. Batzorde honek ez daki zergatik ezarri den % 40 izan behar dela kontratazio publikoko oinarrietan materialen erabilerari buruz adierazi beharreko ehunekoa, kontuan hartuta errealitatea askotarikoa dela, legean ehuneko finko bat ezartzea ez dela oso errealista eta erregelamenduz gara daitekeela dauden kasuetara eta aurrerapen teknologikoetara hobeto egokitzeko.

Arautzeko teknika dela-eta, uste dugu erosketa publiko berdearen garapen zehatza ondorengo araudi bidez erregulatu behar dela. Hain zuzen ere, agindu edo erregelamendu horietan ehuneko hori egokitu ahalko da dauden kasuetara; alabaina, pentsatu dugu beharrezkoa dela legez % 40ko gutxienekoa ezartzea, zeina, askotariko kasuak egon daitezkeela onartuta, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik murriztu ahalko den.

87. artikulua.- Ingurumeneko boluntariotza

Zehaztapen hau proposatzen dugu: administrazioak ingurumenaren arloan ingurumena babesteko eta hobetzeko sustatuko dituen interes orokorreko jarduerak figura horren araudi espezifikoan zehaztutakoak soilik izango dira.

87.1. artikulua: EAEko administrazio publikoek, beren eskumenen esparruan, herritarrek borondatezko ekintzetan parte hartzea sustatuko du, ingurumena babesteko eta hobetzeko interes orokorreko jardueretan, ekainaren 25eko 17/1998 Legean (Boluntariotzari buruzkoa) eta aplikatzekoa den gainerako araudian ezarritakoaren arabera, ***baldin eta ekintza horiek benetan borondatezkoak badira, horiei buruzko berariazko araudian ezarritako baldintzetan****. Horretarako, kontserbazio-jarduerak gauzatzeko programak diseinatuko dituzte, Lege honen arabera.*

Ezin dugu onetsi alegazioa, argi baitago benetan sustatzen dena borondatezko ekintzak direla, are gehiago, berariaz aipatzen baita ekintza horiek ekainaren 25eko 17/1998 Legean (Boluntariotzari buruzkoa) eta aplikatzekoa den gainerako araudian ezarritakoaren arabera arautzen direla.

89. artikulua.- Ingurumen-arloko lankidetza-erakundeak eta 92. artikulua.- Ingurumen-ikuskaritzako jarduera gauzatzea

Uste dugu beharrezkoa dela:

- *Zioen azalpenean eta Zazpigarren Tituluan (Ingurumen Ikuskaritza) egiaztapen, baliozkotze, kontrol eta ikuskaritzako jarduketak gauzatzeari buruz erabilitako teknologiaren heterogeneotasuna konpontzea; horretarako, argi eta garbi ezartzea, batetik, Ingurumen-arloko Lankidetzako Erakundeen esku hartzeko eremua eta, bestetik, administrazio publikoetako funtzionarioena.*

Zioen azalpena aldatu dugu eta, Euskadiko Kontseilu Ekonomiko eta Sozialak eskatu duen moduan, argitu dugu ingurumeneko zaintza eta ikuskaritza administrazio publikoaren zerbitzupeko langileek egin dezaketela zuzenean, bai eta, horiek eskatuta eta horien izenean, ingurumen-arloko lankidetza-erakundeek ere.

- *Argi eta garbi mugatzea zer zeregin dakartzan berekin ingurumen-arloan ahalmen publikoak gauzatzeak edo, 92.1 artikuluaren arabera, «beste egoera batzuengatik» ez dakartzan berekin, eta ingurumen-arloko elkarlaneko erakundeek horiek egitetik salbuetsita dauden eta administrazio publikoen zerbitzupeko langileek zuzenean egin behar dituzten.*

89. artikuluaren 2. zenbakiak dagoeneko zehazten du zer funtzio bete ditzaketen ingurumen-arloko elkarlaneko erakundeek. Barne hartzen dira dokumentuak baliozkotzea, ingurumen-arloko baimen eta arauetan ezarritako betekizunak betetzen direla *in situ* egiaztatzea eta laginak hartzea. Jarduera horiek guztiak argi eta garbi mugatuta daude eta ingurumen-arloko lankidetza-erakundeek egin ditzakete.

Jasotako alegazioei emandako erantzunetan adierazi dugun moduan, beharrezkoa da mekanismo hori izatea, erakunde pribatuen elkarlana ahalbidetzeko, nahitaez funtzionario publikoek egitekoak ez direnean, ahalmen publikoak gauzatzea dakartelako berekin, betiere administrazio publikoen babespean eta nahitaezko kontratazio-prozedura egin ondoren. Adibidez, erakunde egiaztatuek ezingo lituzkete otsailaren 20ko 2/1998 Legearen (Euskal Autonomia Erkidegoko herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzkoa) 32. artikuluan jasotako kautelazko neurriak hartu.

- *Ingurumen-arloko lankidetza-erakundeen eta administrazio publikoko langileen jarduketak ez daitezela gainjarri bermatzea.*

Administrazio Publikoek eskatzen dituztenez ingurumen-arloko lankidetza-erakundeen jarduketak, beren kabuz jardun ezin dituztelako, oso zaila da bien jarduerak gainjartzea.

93. artikulua. Ingurumen-ikuskaritzako akta eta txostena

Jardueraren titularrari ikuskatze-bisitaren txostenaren berri emateko ezarrita dagoen bi hilabeteko epea gehienekoa da, eta hala adierazi behar da arauan.

93.4. artikulua: Ikuskatze-bisitaren txostenaren berri emango zaio jardueraren titularrari, bisita hori egin den egunetik kontatzen hasita bi hilabeteko epean, ***gehienez ere****.*

Gure ustez, araua oso argia da zentzu horretan, eta argi geratzen da gehieneko epeaz ari dela, txostenaren berri emateko bi hilabeteko epea dagoela esaten duenean.

103. artikulua.- Arau-hausteak eta zehapenak

Arau-hausteei eta zehapenei buruzko xedapen orokorrean, ez da aipatzen nor den arau-hauste horien egilea. Segurtasun juridikoko arrazoiak direla medio, uste dugu beharrezkoa del arauan arau-hausteen erantzulea nor den zehaztea; horregatik, aurreproiektuaren puntu horretan oinarrizko arauak horri buruz ezartzen duena jarri beharko litzateke.
Gaiari buruzko estatuko oinarrizko araudiaz gain, EAEn Zehatzeko Ahalmenari buruzko Lege Orokorra dago, hots, otsailaren 20ko 2/1998 Legea, zeina EAEko lurraldean zehatzeko ahalmena duten erakunde guztiek aplikatu behar duten. Arau horretako 8. eta 10. artikuluetan, legez kontrako administrazio-egintzen erantzuleak, egiletasuna eta erantzuleak nor diren erabakitzeko prozedura arautzen dira; horregatik, uste dugu ez dela egokia ingurumeneko lege sektorial batean sartzea zehapenei buruzko lege zehatz batek dagoeneko arautu dituen alderdi horiek.

104. artikulua.- Arau-hausteen tipifikazioa

Ikusi dugunez, nahitaezko ingurumen-baimena lortu gabe proiektu bat gauzatzen hastea arau-hauste oso astuntzat jotzen da aurreproiektuan. Alabaina, jarduera horren ondorioz ingurumenari kalte egin eta pertsonen segurtasuna, osasuna edo ondasunak arriskuan jarri direnean jarduera horrek duen astuntasun-plusa ez da berariaz idatzita geratu aurreproiektuan, ez eta dagokion erantzun juridikoa ere.

Jendaurreko informazioaren fasean aurkeztutako zenbait alegaziori erantzunez, berriz idatzi da 102. artikulua (orain 104. artikulua). Artikulu horretan, arau-hausteak tipifikatu dira, izaera objektiboagoa emateko xedez, hiru kategoriatan (oso astunak, astunak eta arinak), eta zehapenak mailakatzeko esparrura (107. artikulua) bideratu dira Euskadiko Kontseilu Ekonomiko eta Sozialak aipatutako alderdiak, esaterako, eragindako kalteak edo arriskuak.

Esan behar da Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuan bi arau-hauste soilik jotzen direla oso astuntzat, eta abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 55.2 artikuluan honela definitzen dela: «Arau-hauste oso astuna da ingurumen-inpaktuaren ohiko ebaluazioa behar duen proiektu bat egikaritzen hastea, dagokion ingurumen-inpaktuaren adierazpena aldez aurretik lortu gabe»; horregatik, kategoria

horretan sartu behar da. Beste arau-hauste oso astuna oinarrizko betebeharrak ageriki ez betetzea da (esaterako, IPPC instalazio bat eraikitzea edo ustiatzea, dagokion ingurumen-baimen integratua izan gabe), kutsatzeko ahalmen handia duten instalazioekin lotuta, IPPC instalazioekin, adibidez.

2.6. Ogasun eta Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren (KEB) txostena

2019ko martxoaren 7an Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren (KEB) kontu-hartzailearen kontrol ekonomiko-arauemailea eskatu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen Legegintzako Dekretuaren (urriaren 19ko 2/2017) 25.1 artikuluarekin bat.

2019ko maiatzaren 14an KEBen txosten hori jaso zen, tramitatutako espedientean txertatzeko.

Araua sustatu duen Zuzendaritzak bere garaian Zerga Administrazioko Zuzendaritzaren txostena eskatu eta jaso arren, KEBek bigarren txosten bat eskatu dio zergen alorreko instantzia horri, zeinak 2019ko maiatzaren 6an eman baitzuen. Bulego hark igorritako espedientean txertatu da.

Era berean, KEBek Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren txostena ere eskatu du, bere garaian proposamenaren aldeko iritzia agertu zuen arren. Organo horrek prozedurak igorri ditu geroago, eta horiek izapidetu egin dira, iritzi berri bat emateko.

Bestalde, Aurrekontu Zuzendaritzaren txostena eskatu da, urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 22. artikuluan eta urriaren 19ko 2/2017 LDaren 27.4 artikuluan xedatutakoaren arabera. Dekretu hori eman du aipatutako Zuzendaritzak 2019ko apirilaren 2an (txosten hori proiektuaren Tramitaguneko espedienteari gehitu zaio).

Jarraian dokumentu horretan azpimarratutako gaiei erantzungo diegu, testu horren eskema berbera erabilita.

II.2.1. ANTOLAMENDU-ERAGINA

Antolamendu-eraginari lotuta, KEBen ohar hau aipatu behar dugu:

Aurreproiektuan hainbat erregistro aurreikusten dira (ingurumen-lankidetzako erakundeen erregistroa, ingurumen-ebaluazioko prozeduretan interesatutako pertsonen erregistroa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arauen urratzaileen erregistroa). Erregistro horiek arautu egin beharko dira aurrerago (eta orduan zehaztu beharko da zer bitarteko material eta pertsonal erabiliko diren horiek ezartzeko), eta esan behar da proiektuaren memorian ez dela inolako aurreikuspenik egiten, gutxi gorabeherakoa bada ere, ezarpen horrek Sail kudeatzaileari ekar liezaiokeen kostuaren inguruan, dela hasierako baliabideei nola ondorengo funtzionamendu eta mantentze-lanei dagokienez.

Gai zehatz horri dagokionez, KEBek berak dioenari jarraikiz, proiektuaren hasierako memoriak ez du zehatz-mehatz kalkulatu zer kostu izango duen ezartzeko ondorengo erregelamendurik beharko duten erregistroen ezarpenak, funtzionamenduak eta urteko mantentze-lanek. Etorkizuneko araugintzako espediente horretan egingo da,

zehazkiago memoria ekonomikoan eta justifikaziokoan, erregistroak funtzionamenduan jartzeak eragindako kostuen analisi zehatz eta beharrezkoa.

II.2.2. GASTUEN AURREKONTU-EGOERETAKO ERAGINA

Gastuen aurrekontu-egoeretako eraginari dagokionez, honako hau esaten da:

Igorritako espedientea aztertuta, Administrazio honetako gastu-egoeretako aurrekontuetan izan daitekeen eragina hauteman da, proposatutako legearen zenbait neurriren ondoriozkoa.

(…)

Igorritako memoria ekonomikoaren edukiei buruzko ohar orokor gisa, esan behar dugu, Bulego honen iritziz, igorritako memoria ekonomikoak, gastu handiena eragin dezaketen alderdiei (batik bat, langileen gastuari) buruzko azalpenak eman arren (batzuetan behin baino gehiagotan), ez ditu azaltzen –aurrerago aipatuko ditugun salbuespenak salbuespen– behar besteko zehaztasunarekin esperotako gastu gehigarri guztiak, aurrekontu-kredituen egungo mailaren aldakuntza eragin dezaketenak. Aurrekontu-kreditu horiek, bestalde, ez dira behar bezala identifikatzen kasu guztietan.

Memoriak badu atal bat [a.2.2.4], non egungo proiektuaren eragin ekonomikoko alderdiak aztertzen baitira. Halere, ez da kontrasterik egiten, termino kuantitatiboetan, proposatutako legean araututako neurri eta jarduketen ondoriozko gastuen eta orain arteko indarreko araudia betez administrazioak dagoeneko egiten dituen bestelako gastuen artean. Horrela, zaila da ebaztea benetan zer irismen izango duen gastuen aurrekontuan arau berriaren eragin ekonomikoak.

Memoria ekonomikoaren a.2.2.4 apartatuan (eragin ekonomikoa izango duten aldaketei buruzkoa) honako hau esaten da hasieran: «Aurreproiektuak inplikatutako eragileei eragingo dieten eskubide eta betebehar berri batzuk dakartza». Hau da, ez da mugatzen administrazio publikoarentzako eragin ekonomikoa izan lezaketen aldaketak deskribatzera; aitzitik, lege-aurreproiektuaren aplikazio-eremuan gera litezkeen eragileentzako eragina ere deskribatzen baitu, horien tramitazioen epeak murriztu balitezke, horrek interesdun posible bakoitzaren egoera eta inguruabar zehatzetan dakarren onura ekonomikoarekin (aurreztutako langileen orduak, dena delako hitzarmen arautzailearen arabera; finantzaketaren arloko desberdintasunak eta horren inplikazioa aurreproiektuan jasotako administrazio-prozeduraren faseetan; zenbait sektore erakargarriagoak izatea inbertitzaileentzat, etab.). Hortaz, ondorioak ezin aurreikus daitezke, eta esan daitekeen gauza bakarra da aurreproiektuak onura ekonomikoa ekarriko diela.

Administrazioaren mendeko aldaketei dagokienez, memoria ekonomikoaren a.2.2.4 apartatua aldatuko da (gehigarri baten bidez), INGURUNET tramitazio elektrikonikorako sistema berriari erreferentzia esplizitua eginik. Horretarako aurreikusi dira, KEBen txostenean eskatutakoaren arabera, ez bakarrik zerbitzuak behar bezala funtziona dezan izango diren langileen aldeko beharrak, baita egindako inbertsioen xehetasunak ere. Gainera, sistemaren etengabeko hobekuntza bermatzeko beharko den zuzkidura ekonomikoa ere aurreikusten da, eta IKS-eeM sistema kentzeak izango duen eraginari buruz organo horrek eginiko aurreikuspenekin lotzen da, bai eta aurrekontuetan izango duen eragin orokorrarekin ere.

Memoriari jarraikiz, alderdi hauek nabarmenduko ditugu, administrazio proposatzailearen gastuen aurrekontuan izan dezaketen eraginagatik:

1. Langileen arloko beharrei dagokienez,

Ez dira identifikatzen, edozein kasutan ere, memorian beharrezkotzat jotzen diren langileen kostuak finantzatzeko aurrekontu-sail zehatzak, kostuaren aldiaren araberako banaketa (batik bat, 2019ko ekitaldiko eragina), eta 11. zerbitzuko 4421. programaren I. kapituluko aurrekontuaren guztizko zenbatekoa baino ez da ematen (Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza). EAEko 2018ko ekitaldiko aurrekontu orokorretan, 4.271.343 euroko hasierako kreditua zuen.

Ildo horretan, adierazi behar da ezen, 11. zerbitzuko 4421. programaren I. kapituluaren guztizko zenbatekoa bakarrik jaso arren, langileen beharren kalkulua egin dela, horietako bakoitzerako banakapenarekin. Aurreko paragrafoan esaten den moduan, eta kontuan hartuta horiek gauzatzeko beharrezkoa dela Funtzio Publikoko Zuzendaritza eta Aurrekontu Zuzendaritza alde agertzea, ezinezkoa da periodifikazioa zehaztea, gaur-gaurkoz ezin jakin daitekeelako aipatutako organoek zer jarrera izango duten ez eta horien oinarri izango diren unean uneko inguruabar espezifikoak ere.

Beharrezkotzat jotako lanpostu berriei dagokienez, honako hau dio txostenak:

Edonola ere, geure egiten ditugu Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren txostenean esandakoak: lanpostu berriak sortzeko gobernu-kontseiluaren baimena behar da, bai eta beharrezkoak diren aurrekontuen kontsignazioa eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza honen aldez aurreko aldeko txostena ere. Txosten honetan Legeak sortutako behar berriak eta horiei erantzuteko aukerak aztertuko dira, printzipioz, Administrazio honetan jada lanean ari diren langileen bidez // Lanpostu berriak sortzeko beharra egiaztatzen denean, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legeak (uztailaren 6ko 6/89) zehazten du lanpostu-zerrendak direla administrazio publikoek beren barne-egiturak arrazionalizatu eta antolatzeko eta beren langile-beharrak zehazteko tresnak».

Hain zuzen ere, araua sustatu duen Zuzendaritzak bitan aipatzen du Funtzio Publikoko Zuzendaritzak adierazitakoa. Prozesuko une egokian ebatziko da nola erantzun behar zaien Legea indarrean jartzearen ondoriozko langileen beharrei.

2. Ohiko funtzionamenduko gastuei dagokienez,

Memoriaren 2.3.1.8 apartatutan honako hau aipatzen da: «Inguruneten mantentze-lanekin lotutako gastu berria; edonola ere, IKSeem sistema mantentzeko erabiltzen zen aurrekontu-saila INGURUNET mantentzera bideratuko da». Hortaz, ondoriozta liteke ez litzatekeela ohiko gasturik sortuko (II. kapitulua) plataforma berri hori mantentzeko. Izatez, memoriaren arabera, espero da (2.4.2 ap.) Ingurumen Administrazioko Zuzendaritzako 05.4421.11.23880.001 partida modu mailakatuan murrizten joatea, IKS-eem sistema INGURUNET sistemarekin ordeztu ahala. Aldi

berean, Natura Ondare eta Klima Aldaketako Zuzendaritzaren informazio-prozesurako ekipamendu eta sistemak mantentzeko aurrekontu-sailean sail berri bat sortu beharko da (05.4421.12.22500) INGURUNET (kanpoko) zerbitzurako, baina hor ere ez da aldaketa horrek ekarriko lukeen aurrezpenaren zenbatespen kuantitatiborik egiten.

Memoria ekonomikoaren 2.3.1.8 apartatua osatu da INGURUNET sistema diseinatu eta abian jartzeko dagoeneko egin diren inbertsioekin, eta sistema horren aurreikusteko moduko funtzionamendu-gastuen aurreikuspena egin da. Gainera, IKS-eem sistemaren desagerpen mailakatuarekin eta sistema horri esleitutako zenbateko ekonomikoarekin lotzen da guztia.

3. Badirudi, halaber, langile-behar berriei lotutako inbertsioen gastuak ageri direla altzarien eta informatikako ekipamenduen alorrean *eta horiek, memoriaren arabera [2.3.2 ap.] «ez dira esanguratsuak izango», baina ez da adierazten zein den iritzi horren oinarria. Izan ere, alderdi hori memoria ekonomikoan landu beharko litzateke edozein kasutan, bai eta kuantifikatu ere [zenbatekoaren garrantziaren gaineko iritziak gorabehera], eta finantzaketarako aurrekontu-iturriak adierazi beharko lirateke, nahiz eta kostu hori berehalakoa ez izatea espero izan. Badirudi horixe ondoriozta daitekeela memoria beraren 2.4.2 apartatutik, bertan zehaztapen hau egiten baita: «Zuzkidurak zehazten direnean eta aktibo berriak behar direla justifikatzen bada, horien zenbatekoa inbertsioetarako gaitutako aurrekontu-sailean sartu beharko da».*

Zentzu horretan, berretsi behar dugu langile gehiagoren beharrei lotutako gastu guztiak (altzariak eta ekipamendu informatikoak) Funtzio Publikoko Zuzendaritza eskatutako plantilla-handitze horren alde agertzen denean zehaztu beharko direla.

INGURUNET programa garatzeko gastua aurreikusten da [2.4.1 ap.] inbertsio errealen sailetan (VI. kapitulua), aplikazio informatikoen apartatuan, 538.899 euroko zenbatekoarekin. Hori finantzatzeko, aurreikusitako aurrekontu-saila hau da: 2019rako luzatutako EAEko 2018ko ekitaldiko aurrekontu orokorren 05.4421.11.632.01.001 aurrekontu-saila, «Teletramitazio-proiektua. Ingurumen Administrazioa. 2019ko konpromiso-kreditua: 0,20 M». Gogoan izan behar da, edonola ere, beharrezkoa dela gastua benetan gauzatuko den unean beharrezkoa den kreditu nahikoa izatea, gastu horren nolakotasunerako prozedura egokia jarraitu ondoren.

Lehen esan bezala, memoria ekonomikoa osatu da INGURUNET sistema diseinatu eta abian jartzeko dagoeneko egin diren inbertsioei dagokienez, eta horren aurreikusteko moduko funtzionamendu-gastuak aurreikusi dira.

4. *Proposatutako arauak ingurumenaren alorrean eragin ditzakeen* ***sustapenen*** *aurreikuspenak ere aztertuko ditugu. Horrela, administrazio publikoek Europar Batasuneko Ingurumeneko Kudeaketa eta Auditoretza Sistemako (EMAS) parte-hartzea sustatzeko neurrien artean, honako hauek jasotzen dira: erakunde txiki eta ertainei laguntza ematea [80.2.b) artikulua] eta ingurumen-kudeaketako beste sistema batzuk erabiltzea, EMAS sistemarekiko atxikidura ahalbidetzeko tresna gisa [80.4 artikulua]. Neurri horiek sustatuko dituzten organismoei buruzko zehaztapenik gabe*

(administrazio publikoak aipatzen dira), ondo legoke proiektuaren memorian aipatzea administrazio honek zer aukera dituen mahai gainean, bai eta neurri horiek ezartzeko epeen eta eragingo lituzketen gastuak zenbatestea ere.

Lege-testuan jasotako «Laguntza eta babesa eman» esapidearekin esanahirik zabalena ematen zaio terminoari. Sustapeneko edozein neurri klasiko izan liteke (honorifikoa, zerga-kenkaria, etab). Horregatik ez dira berariaz aipatu memorian, ulertzen delako neurri horiek ez daudela itxita eta, ondorioz, ezartzeko epeak eta gastuak aurreikusezinak direla.

Aipatzekoa da, halaber, ***herritarrek boluntariotzako jardueretan duten partaidetzaren sustapenerako*** *mandatua, 87.1 artikuluan agertzen dena. Izan ere, administrazio honek egun indarrean dituen sustapen-programetako ekintzen ez bezalakoak edo gehigarriak aurreikus litezke. Edonola ere, 87.2 artikuluko xedapenen birtualtasuna plantea genezake, administrazio publikoei eskatzen baitie Boluntariotzari buruzko Legean (ekainaren 25eko 17/1998) aurreikusitako sustapeneko jarduerak garatzeko (baten batzuk aipatuz), ulertzen baita azken Lege horren babespean egongo direla aurreikuspen horiek betetzeko tresnak.*

Ohar batez ari gara, testua aldatu edo hobetzeko proposamen zehatz batez baino. Gure iritziz, birtualtasuna du Euskadiko oinarrizko ingurumen-araudia izango den horretan aipatzea ingurumeneko boluntariotza sustatu eta bultzatzeko neurri zehatz eta bereziki esanguratsuak. Hori, edonola ere, ez da zerrenda itxi bat.

Bestalde, ez da inolako informaziorik ematen ***dirulaguntza-lerro berriak sortzeko edo gaur egungoak birplanteatzeko balizko aurreikuspenei*** *buruz. Ingurumena babesteko 4421. programaren IV. eta VI. kapituluetako aurrekontu-kredituei dagokienez (transferentzien eta dirulaguntzen gastuaren aurrekontu-sailak biltzen dira bertan, gastu arrunterako eta kapital-gasturako, hurrenez hurren), memorian identifikatu egin dira kapitulu horietan jasota dauden eta diruz lagundu daitezkeen sail zehatzak. Edonola ere, ez da horien loturarik edo aldakuntzen aurreikuspenik egin, proposatutako legeko neurrien ondoriozkoak, indarreko aurrekontua aldatuko dutela ulertzen denean ere.*

Uneotan, ez dago aurreikusita dirulaguntza-lerro berriak sortzea edo badaudenak birplanteatzea. Edonola ere eta etorkizunera begira, kontuan hartuko dira aurretiazko plangintza estrategikoaren beharrari buruz eta etorkizuneko balizko dirulaguntza-lerro berriei buruzko plangintza estrategikoaren inguruan KEBek esaten dituenak, guztia Dirulaguntzei buruzko Legearen (azaroaren 17ko 38/2003) 8. artikuluan xedatutakoaren arabera.

5. *Memoria ekonomikoan 4421. programaren* ***helburu, ekintza eta adierazle*** *jakin batzuk identifikatzen dira, aurreproiektuarekin zuzeneko edo zeharkako lotura dutenak eta aldatu behar direnak. Horretarako, helburu horiek neurtzeko adierazleetan aldaketak txertatzea gomendatzen da, horiei magnitude zehatzik esleitu gabe, halere.*

Proposatutako adierazleei dagokienez, ikusi da horietako askotan ingurumen-administrazioak jarduketa kopuru jakin bat neurtzea eskatzen dutela (kudeatutako espediente kopurua, tramitatutako espedienteak, Ingurumen Batzordearen eta Hiri Hondakinak Koordinatzeko Organoaren bilerak, erregistroan izena emandako erakundeak...), eta ez gaian aurreikusten diren neurriak aplikatzearen ondorioak, horien eragina neurtuko dutenak –hots, benetan lortu nahi diren helburuekin bat datozenak–, eta ez administrazioaren egiteko, tramite edo jarduketak bakarrik. Zentzu horretan, Bulego honek egindako txostenetan adierazten da beharrezkoa dela kontsignatzen diren parametroak, jarduketa kopuru jakin bat zenbatzera mugatu beharrean, haratago joatea beren xedea den sektorean eta lortu nahi diren helburuen erdiespen-mailaren efizientzia- eta efikazia-graduaren ebaluazio egokia egitea.

Oharra geure egiten dugu eta kontuan izango dugu dagokion prozedurako unean aipatutako adierazleak hobetzeko.

Proiektuak administrazio honek gastuen aurrekontuan izango duen eraginari buruzko apartatuarekin amaitzeko, Aurrekontu Zuzendaritzaren 2019ko apirilaren 2ko txostena aipatu behar dugu (espedientean sartu da txosten honen eranskin bezala, eta geure egiten ditugu bertako irizpenak). Honako hau dio gastuen behar berriei dagokienez: «Lanpostu gehiagoren eta horren ondoriozko kostu ekonomikoaren balorazioan lege-aurreproiektuan sartutako funtzio berriek eragindako beharrak baino ez lirateke kontuan hartu behar» eta «Beharrezkoak diren baliabide gehigarriei dagokienez, aurrekontuan txertatuta egon beharko dira, horien beharra dagoen ekitalditik aurrera berresleipen egokiak eginez».

Proposamena egin duen Zuzendaritzak bete egingo du lanpostu berrien beharren balorazioari dagokionez Funtzio Publikoko Zuzendaritzak unean-unean xedatzen duena.

II.2.3. ERAGINA DIRU-SARREREN AURREKONTU-EGOERETAN

Igorritako memoria ekonomikoak eragiketa arruntengatiko diru-sarrerei buruzko 2.3.3 apartatuan identifikatzen ditu legearen hainbat aurreikuspen, tasak, tributuak eta bestelako tresna fiskalak sortzeari buruzkoak eta kenkariak, hobariak edo salbuespenak ezartzeari buruzkoak, legearen xedeak betetzeko helburua duten jarduerei dagokienez. Edonola ere, hau da jaso den ondorioa: «Lege-aurreproiektuak ez ditu zehazten balizko diru-sarrera horien irizpideak edo kuantifikazioa; aitzitik, horiek legez xedatzeko arau-esparrua definitzen du». Halaber, ez da kuantifikatzen proposatutako arauan jasotako zehapen-araubideko aldaketen ondorioz diru-sarreren egoeretan zer eragin egon daitekeen, nahiz eta memoriaren 2.2.3 apartatuan egiten den arauaren alderdi berrien analisian «Oso astuntzat jotako arau-hausteen igoera» azpimarratzen den.

Ez da egin, beraz, arau berri honetako neurriak ezartzearen ondorioz etorkizuneko aurrekontuetan espero diren aurreikuspen kuantitatiboa egin, ez eta zenbatespena ere, kontuan harturik aurreikuspen horiek negatiboak izan daitezkeela, salbuespenak eta

hobariak eta antzeko beste neurri fiskal batzuk ezartzeagatik. Kalkulu horiek gaur egun biltzen diren diru-sarreren gainekoak izan behar dira, arauaren esparruko gaietan (ingurumeneko tasen, zehapenen eta hertsapen-isunen ondoriozko diru-sarrerak). Horrela, bada, ez da identifikatzen diru-sarrera horiek gaur egun zer aurrekontu-sailen konturakoak diren, ez eta zer aldakuntza aurreikusten diren etorkizuneko aurrekontuetarako.

Memoria gai horiekin osatzea gomendatzen da.

KEBen oharrei men eginda, gai horri dagokionez memoria ekonomikoaren 2.3.3 apartatua bete da, ingurumen-organoak bere eskumenak gauzatzearekin lotuta izan ditzakeen diru-sarreren aurreikuspena txertatuz.

II.2.3. OGASUNAREKIN LOTUTAKO BESTE ALDERDI BATZUK

1. *Lehenik eta behin,* ***aurrekontu-araubideari*** *dagokionez, ingurumeneko zerga-arloari buruz 85. artikuluan xedatzen dena aipatu behar dugu (...)*

Bestalde, proiektuaren 118. artikuluak, 85.2 artikuluaren ildo beretik joz, honako hau xedatzen du: «Jartzen diren zehapenen ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoak lortzen dituen diru-sarrerek izaera finalista izango dute, eta Lege honetan aurreikusitako xedeetarako baino ez dira erabiliko. Horretarako, Lege honetan definitutako aurrekontu-sailean sartuko dira». Aurreikuspen hori ez da berria, edonola ere, horixe bera xedatzen baitu indarrean dagoen Euskal Herriko ingurumena babesteko Lege Orokorraren (otsailaren 27ko 3/1998) 102.6 artikuluak.

Ikusi dugu, lehenik eta behin, diru-sarreren izaera finalistari buruz nabarmendu diren erreferentziak EAEko Administrazioari buruzkoak direla, eta ez gainerako euskal administrazio publikoen finka ditzaketenei buruzkoak.

Zentzu horretan, adierazi behar dugu organo sustatzaileak kontuan hartu zituela Zerga Administrazioko Zuzendaritzaren hasierako txostenean planteatutako oharrak. Horrela, ingurumen-tributuen ondoriozko diru-sarreren izaera finalistari buruzko baieztapen orokorra zehaztu zen, EAEko administrazio orokorraren esparrura mugatuz.

Administrazio honi dagokionez, ***adierazi behar 85. artikuluan (2. eta 3. paragrafoak) eta 118. artikuluan agindutakoa diru-sarreren eta gastuen arteko loturik ezaren printzipioaren salbuespena dela (aurrekontu-araubidearen printzipio orokor baten urraketa da, lortutako diru-sarrera guztiek aurreikusitako gastu guztiak finantzatzen dituztela dioenarena, hain zuzen). Printzipio hori Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauen Legearen 41. artikuluan dago jasota*** *(haren testu bategina azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsi zen).* ***Ondorioz, dena delako diru-sarrera bakoitzaren araubidea arautzen duen araudian aurreikusi beharko dira, dagokionean, aipatutako printzipioaren salbuespenak.***

41. artikulu horrek jasotzen du printzipio orokor hori Euskadiko Ogasun Nagusiarentzat, beste ogasun publiko batzuen antzeko terminoetan, eta ***ezartzen du diru-sarrerak erakunde titularraren betebeharren guztizkoa finantzatzera bideratuko direla.*** *Horrela, 41. artikuluan bertan printzipio horren salbuespenak ezartzeko aukera ematen bada ere, termino hauetan egiten da: «Diru-sarrera bakoitzaren araudian bestela ezartzen ez bada» eta «Helburu zehatzetarako liberalitateetatik datozen diru-sarrerak direnean, ez da beharrezkoa izango berariazko xede-zehaztapena egitea, baldin eta unean-unean indarrean dagoen araudiari jarraikiz onartu badira liberalitateak» (1/1997 Legegintzako Dekretuaren 41.2 artikulua).*

Gogoan izan behar da, edonola ere, ***tasak, tributuak edo bestelako tresna fiskalak ezartzea Lege bidez egin beharreko gaia*** *dela eta, Zerga Administrazioko Zuzendaritzaren txostenaren arabera, tributu jakin baten izaera finalista ezartzeko beharrezkoa dela Ogasunaren arloko Sail eskuduna ados egotea.*

Horrela bada, tributuen bidezko diru-sarrera horien lotura finalistari buruzko xedapenei dagokienez, esan behar dugu, Zerga Administrazioko Zuzendaritzaren irizpenetatik haratago (zeinak bete beharrekoak diren, gaiari heltzeko legezko arauaren mailari dagokionez), ez dagoela nahikoa oinarririk baliabide horietarako ezarri nahi den mekanismo finalista hori abiarazteko, horrela Ogasun Publikoaren finantzaketa globalaren printzipio orokorra saihesten baita. Ondorioz, Kontrol Ekonomikoko Bulego honek kontrako iritzia eman behar du, jarduera publikoaren eremu zehatz bat baliabide publikoekin finantzatzeko trataera berezi hori emateari dagokionez.

Ohar horiei dagokienez, KEBi eskatutako txosten horren abiapuntua adierazi behar dugu, 1/1997 Legegintzako Dekretuaren edukia hitzez hitz aipatzen duena, 41. artikuluan xedatutakoa nabarmenduz:

> «41. artikulua.– Zertarakoa.
>
> 1.– **Diru-sarrera bakoitzaren araudian bestela ezartzen ez bada**, diru-sarreraren helburua izango da horren titularra den erakundearen betebeharren multzoa finantzatzea.
>
> 2.– Helburu zehatzetarako liberalitateetatik datozen diru-sarrerak direnean, ez da beharrezkoa izango berariazko xede-zehaztapena egitea, baldin eta unean-unean indarrean dagoen araudiari jarraikiz onartu badira liberalitateak».

Beraz, nahiz eta Ingurumen Administrazioko Aurreproiektuak inolako tributurik ezartzeko asmorik ez izan, egia da ezaugarri jakin batzuk ezartzen dituela, ingurumen-organoaren iritziz «fiskalitate ekologikoa» delakoak bete beharko lituzkeenak. Fiskalitate hori ez da, bide batez, EAEn ezarri, eta pentsatu da oraingo momentua dela hori egiteko une egokiena, eta aurreproiektua proposatutako definiziorako bitarteko aproposena.

Ondorioz, eta txostenean jasotakoa ikusita, ondorioztatzen dugu 85. artikuluan proposatutakoa ez dela, inola ere, indarreko ordenamendu juridikoaren ezein xedapenen kontrakoa. Are gehiago, ordenamenduak espresuki jasotzen du horretarako aukera, espresuki adierazten baita testuan bertan salbuespenak posible direla (**Diru-sarrera bakoitzaren araudian bestela ezartzen ez bada**), betiere xedapen egokien bidez eta sail eskudunen adostasunarekin egituratzen badira.

KEBek gai honen inguruan duen iritzia hiru alderdiri buruzkoa da:

- Beharrezkoa da, etorkizunean, «fiskalitate ekologikoaren» baitako tributu bakoitza lege-mailako xedapenen bidez arautzea. Baldintza hori bete egingo da eta arazorik gabe bat egiten du aurreproiektuaren 85. artikuluaren edukiarekin.

- Beharrezkoa da tributuak ezartzeko Ogasun Sailak duen eskumena errespetatzea. Nola ez, Sail horren lankidetza ezinbestekoa izango da tributuaren ezaugarri zehatzak definitzean eta EAEko zerga eta tributuei buruzko araudian txertatzean.

- Azkenik, txostenak zalantzan jartzen du ingurumeneko edukia duten zerga-egitateak kargatuko lituzketen tributuen izaera finalista, hori, 85. artikuluaren hitzez hitzeko edukiaren arabera, «sarrerak obligazioen guztizkoa finantzatzera bideratuko direla» dioen printzipio orokorraren salbuespena baita. Horri dagokionez, honako hau esan behar dugu:

Ingurumen-zuzenbidearen oinarria legez definitutako eta gizarteak onartutako printzipio batzuek osatzen dute. Horien artean dago ingurumen-zuzenbidea kontzeptua bera ulertzeko funtsezkoa den printzipio bat, «kutsatzen duenak ordaintzen duela» dioena, hain zuzen. Horrela, bada, eztabaidaezina da, ildo horretan, «fiskalitate ekologikoaren» araberako tributuak ezartzea dela printzipio hori gauzatzeko biderik onena, horien xedea ez baita dirua biltzea (batik bat, kargatu beharreko zerga-egitatea ingurumen-inpaktu argia duten jarduketak direnean).

Kutsadura kargatzen duten tributu posible horiek «kutsatzen duenak ordaintzen duela» dioen printzipioaren isla argia lirateke, eta prebentzioa sustatzen dute gehienbat. Izan ere, zerga-egitatearekin lotura diren eragileek badakite, ingurumen-inpaktu handiagoak dituen kudeaketa-sistema baten alde eginez gero, gehiago ordaindu beharko dutela, ingurumen-kostu txikiagoko aukerak baliatzen dituztenekin alderatuta. Hortaz, ikuspegi horretatik, aurreproiektuaren 85. artikuluaren edukiaren asmoa ez da diru-sarrera publikoen iturri berri bat sortzea, helburu fiskal orokorrekin, baizik eta tributu finalistak eratzea, ingurumenaren kontrako arriskuen sortzaileen erantzunkidetasuna sustatzeko eta ingurumenean eragin txikiagoa duten jarduerak bultzatzeko.

Zerga-sistemak eta, dagokionean, EAEko ingurumena babesteko xede nagusiarekin administrazioak gauzatzen dituen jarduketen ondoriozko gainerako diru-sarrerek, zeharo betetzen dute Espainiako Konstituzioaren 45. artikuluak botere publikoei ezartzen dien mandatua. Hori, ordea, ulertzeko zailagoa litzateke tributu horien izaera finalista baztertuko balitz. Hots, diru-sarrera posible horien azken xedea izan beharko

litzateke ingurumenean eragin handiagoa duten egitate jakin batzuk egitean eragindako kostua ordaintzea eta gizarte osoa konpentsatzea; aldi berean, ingurumen egoki batez gozatzeko eskubidea bermatu behar duten botere publikoen administrazio-jarduketetan lortutako diru-sarreren onuradun izan behar da gizartea. Gainera, ingurune naturalaren narriadura murriztu behar da, horretarako ingurumeneko neurriak eta programak finantzatuz diru-sarrerekin, aurreproiektuan bertan ezarritako helburuekin.

Nabarmendu behar da ezen, izaera orokorrarekin, ingurumen-zergak ezartzea ingurumena babesteko funtsezko jarduera dela. Izan ere, ingurumenean eragiteko edo aldaketak edo arriskua sortzeko gaitasun handia duten jardueren alderdi jakin batzuk kargatzeak diru-sarrera gehigarriak eragingo lituzke (azken helburua hori izan gabe ere) eta, aldi berean, etorkizunean administrazioarentzat edo herritarrentzat kostu handiagoa ekar lezaketen jardueren kontrako pizgarri dira. Kostu horiek ingurumen-inpaktu handiko jardueren ondorioz guztiz antropizatutako eremuak garbitu edo kutsadura kentzeko egin beharreko lanekin lotzen dira. Diru-sarrera gehigarri horiek, aldi berean, gastuetako murrizketen ordezkoak izan daitezke. Izatez, zaila da zerga-sisteman aurkitzea jarduera kutsagarrietan eragina izateko edo ingurumenaren aldetik egokiagoak diren aukerak sustatzeko lehentasunezko helburua duten adibide argiak.

Fiskalitate ekologikoaren sistema bat ezartzearen azken helburua da jarduera arrisku-eragileen titularrek beren ardura beren gain har dezaten sustatzea. Horretarako, tributu finalista bat ordainaraziko zaie, ingurumenean eragin negatiboa duten jarduerak gelditzeko xedea duena, bai eta ingurumena manten eta hobetu dadin sustatzea ere, forma guztietan, inpaktua duten jarduera horien eragina jasan bailezake.

Adierazitakoa kontuan harturik, argi dago logikoa eta komenigarria dela ingurumenarekin lotutako administrazioaren jarduketa guztien ondorioz administrazioak dituen diru-sarrera guztiak ingurumen-politika horiek gauzatzera bideratzea eta izaera finalista izatea. Horretarako, aurreproiektuan bertan adierazitako xedeak lortzen saiatuko gara, helburu hauek erdiesteko, besteak beste: prebentzioa, berrerabilera, kalitate handiko birziklatzea eta balorizazioa, sentsibilizazioa, hezkuntza eta prestakuntza, EAEko ekoizpen-sistemen hobekuntza edo ingurumena mantentzea eta hobetzea, forma guztietan.

Laburbilduz, ingurumen-politikako tresna ekonomikoak (ingurumen-zergak, tasak ezartzea, zehatzeko ahala erabiltzea...) eragile ekonomikoak zigortu edo saritzeko erabili behar dira, ingurumenarekiko jokabidearen arabera. Adibiderik argiena ingurumen-fiskalitatea edo fiskalitate ekologikoa da, honela defini daitekeena: zerga-sistema erabiltzea jokabideetan ingurumenaren aldetik positiboak direla jotzen den aldaketak eragiteko. Ikuspegi horren arabera, ingurumen-zergen helburu nagusia ez da dirua biltzea, baizik eta jokaerak aldatzea, bildutako dirua eta horren erabilera bigarren mailako gaiak izanik. Edonola ere, zerga edo administrazioaren dena delako jarduketa eragin duten ingurumen-arazoetarako erabiltzea lehenetsi behar da. Premisa horiei heldurik, 85. artikuluan xedatutakoaren helburu finalista KEBek adierazitako printzipio

orokorraren salbuespena izan behar da (baina ez ordenamendu juridikoaren urraketa), eta behar bezala argudiatu da.

Duela gutxi onetsi zenez, merezi du hemen aipatzea, argudioa biribiltzeko, Nafarroako Foru Erkidegoko 14/2018 Foru Legea, ekainaren 18koa, Hondakinei eta haien Fiskalitateari buruzkoa (NAO,120. zk., 2018ko ekainaren 22a; BOE, 157. zk., 2018ko ekainaren 29a). Arau horretan argi eta garbi adierazten da hondakinak erraustearen eta hondakindegietan ezabatzearen gaineko zerga (30. artikulua) «zeharkako tributu bat dela, erreala eta estrafiskala, karga bat ezartzen diona hondakinak hondakindegietan ezabatzeari eta Nafarroako Foru Komunitatearen lurralde eremuan kokatutako instalazioetan errausteari (...) Zergaren helburua hondakinen prebentzioa, berrerabilerarako prestakuntza eta birziklapena sustatzea da, eta, orobat, hondakindegietako ezabaketak eta errausketak egiteko pizgarriak kentzea».

Diru-sarreren loturari dagokionez (31. artikulua), honako hau esaten da: «Zergaren ondoriozko diru-sarrerek lotura berariazkoa duen aurrekontu-partida bat osatuko dute hurrengo urteko Nafarroako Aurrekontu Orokorretan, “Hondakinen Funtsa” izenekoa. Zergaren ondorioz biltzen den dirua foru-lege honetan aurreikusitako helburuetarako baizik ez da erabiliko».

Era berean, hondakinen arloko zehapenen loturari buruzko 73. artikuluan honako hau esaten da hitzez hitz: «Tramitatzen den zehapen-prozedura zein den ere, hondakinen arloko arau-hausteengatik Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak ezartzen dituen isun gisako zehapenak Nafarroako Aurrekontu Orokorren “Hondakinen Funtsa” izeneko partidan sartuko dira».

Funts horri dagokionez, interes handikoak dira 42. eta 43. artikuluak. Bertan, argi eta garbi esaten da funts hori diru-sarrera publikoekin osatzen dela, eta hondakinak sortzeak eta kudeatzeak giza osasunari eta ingurumenari eragiten dizkien eragin kaltegarriak arintzeko neurriak finantzatzeko erabili behar dela; eta «Hondakinen Funtsa» izeneko aurrekontu-partida banatzeko modua ingurumenaren arloko eskumenak dituen departamentuak erabakiko duela urtero, Nafarroako Hondakinen Erakunde Publikoari kontsulta egin ondoren, hondakinen hierarkiako goiko mailadiak lehenetsiz eta helburuak betetzea eta ingurumen premiak kontuan hartuta (...).

Ikus daitekeenez, EIALAko xedapenek bat egiten dute gure inguruko lurralde aurreratuenetako arauen joerekin. Hori dela eta, legezkotasunaren parametro horiek guztiak bete direnez, proposamena egin duen Zuzendaritzak testua bere horretan uztearen alde egiten du, interes orokorra babesteko eta aplikatu beharreko araudi orokorra betetzeko erabilgarria dela sinetsita.

Ondorio bera adierazi du Aurrekontu Zuzendaritzak**. Haiei ere igorri zitzaien aurreproiektua, haren ondoriozko eraginei buruz zer iritzi zuten jakiteko, eta honako hau esan dute 2019ko apirilaren 2ko txostenean: «**Aurrekontu Zuzendaritza honen iritziz, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren legearen aurreproiektuko

***testutik kendu behar dira aurrekontuko diru-sarreren eta gastuen arteko lotura guztiak, 85. eta 118. artikuluetakoak**».*

*Ildo beretik, **85. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakoa kentzea proposatzen da. Izan ere, ez dirudi proposatutako legearen xedea denik aipatutako neurriak EAEko aurrekontuan nola gauzatu behar diren zehaztea**, aurrekontuak egiteko mekanismoa bere lege propioen arabera arautzen den diziplina bat da, unean-unean indarrean den aurrekontu-araubidearen esparruan.*

Egindako proposamena, gure iritziz, ez da inola ere oztopo bat, eta ez du EAEko aurrekontuak gauzatzeko moduaren inguruko arau orokorrik egin nahi. Izan ere, ez da inola ere aldatzen horiek banatzeko sistema, eta zorroztasun osoz errespetatzen dira aurrekontuak egiteko mekanismoak eta unean-unean bete beharreko arauak. Horrela, 85. artikuluko aurrekontu-saila guztiz bateragarria da aipatutako sistemarekin, kontuan izanik ingurumena babesteko helburu finalista duela. Hori administrazio publikoek bete beharreko mandatua da eta, oro har, gizarte guztiaren onurarako da, herritarrek ingurumen egoki batez gozatzeko eskubidea izango dutela bermatzera bideratuko baitira lortutako diru-sarrerak.

Puntu horri dagokionez, adierazi behar dugu ez dela egokia KEBek egindako oharren arabera jokatzea. Lortutako diru-sarrerek izaera guztiz finalista izatea da lege-aurreproiektuaren helburu bat, apustu argi, espezifiko eta zehatz bat, bai eta horiek testua aurreikusitako ingurumeneko helburuak gauzatzera bideratzea ere. Ingurumen Sailburuordetzaren apustuari eutsi behar zaio, salbu eta adierazten eta justifikatzen bada ordenamendu juridikoaren guztiz kontrakoa dela.

Puntu horretan, gogora ekarri behar da Euskal Herriko ingurumena babesteko Lege Orokorraren (otsailaren 27ko 3/1998) 102.6 artikuluan xedatu egiten dela ezarritako zehapenengatik lortutako funts ekonomikoak ingurumena hobetzeko neurrietarako erabili behar direla oso-osorik, eta orain arte ez da xedatu, akatsik edo omisiorik egin ez badugu, arau hori ez dela ordenamendu juridikoaren araberakoa.

***2.** Aurrekontu-arauak **zerga-araubidean** izan ditzakeen eraginei dagokienez, aurreko puntuan adierazitakoaz gain, Zerga Administrazioko Zuzendaritzak 2018ko irailaren 5ean proiektu honi buruz egin zuen txostenean adierazitakoa geure egiten dugu, bai eta Zuzendaritza horrek berak 2019ko maiatzaren 6an egin zuen bigarren txostenean esandakoa ere. Azken horretan, lehen txosteneko irizpenak kontuan hartuta proiektuaren azken bertsioan aztertutako aldaketak aztertu ziren (txosten honi gehitu zaio, eranskin bezala).*

Memoria honen aurreko ataletan argi utzi da zer pentsatzen duen araua sustatu duen Zuzendaritzak. Aztertu dugu 2019ko maiatzaren 6ko txostena, hasierako txostenaren ondoren aldatu ziren eta aldatu gabe geratu ziren alderdiei buruzko oharrak dituena.

***3.** Indarreko **dirulaguntza-araubideari** dagokionez, 84.2 artikuluan xedatzen denez, ingurumenaren arloko eskumena duen sailak zerrenda bat argitaratuko du, eta aldian behin eguneratuko. Bertan, hainbat teknologia zerrendatuko dira, eta ingurumen-hobekuntzarako inbertsioak egiten dituzten enpresei ematen zaizkien dirulaguntzak lehenesteko irizpide gisa erabili ahal izango dira. Alderdi horretan, gogora ekarri behar*

dugu dirulaguntzak emateko prozedura Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorrean (azaroaren 17ko 38/2003) dagoela arautua, eta oinarrizko araudi hori kasu guztietan errespetatu beharko dela.

Ikuspegi horretatik, ohartarazi behar dugu aipatutako katalogoa dirulaguntzak emateko prozedura batean lehenesteko tresna bezala erabiltzeko aukera ez dela oztopo bat eta ez duela baztertzen, proposatutako legearen planteamenduan, beste edozein irizpide erabiltzeko aukera oinarri arautzaileetan txertatzeko, aipatutako dirulaguntzei buruzko elgearen esparruan, betiere dirulaguntza-programarekin lortu nahi den helburuarekiko egokia bada. Manua, beraz, indarreko dirulaguntza-araubidearen ikuspegitik, tresna horren existentziari buruzko informazioa emateko dela ulertu behar da (tresna egin, onartu eta mantentzea, bestalde, nahitaezkoa da aupatutako sailarentzat), aukera gisa, dirulaguntza-programa jakin baten helburuak erdiesteko erabilgarria den heinean.

Gogorarazteko edo informazioa emateko xedea du artikuluak. Alderdi hori guztiz argi gera dadin, edukia aldatu zaio, sektoreko (dirulaguntzen alorreko) araudiari erreferentzia eginez, hori izango baita, betiere, aplikatu beharrekoa.

***Zehapena jaso duten enpresei dirulaguntzak lortzeko debekua ezartzeari dagokionez [114. artikulua] (...)**, gogora ekarri behar dugu muga hori dagoeneko jasoa dagoela 38/2003 Legearen 13. artikuluko 2.h) apartatuan, han esaten denez ezin baitaitezke onuradun izan inguruabar honetan dauden pertsonak edo erakundeak: «Ebazpen irmo bidez dirulaguntzak jasotzeko aukera kentzen duen zehapena jaso izana, lege honen edo horrela xedatzen duten beste batzuen arabera».*

Xedapen hori berria izan ez arren (3/1998 Legearen 117. artikuluan era jasota dago), ikusi dugu debeku hori «zehapena jaso duen enpresei» bakarrik ezartzen zaiela, eta ez pertsonei edo bestelako erakundeei, nahiz eta horiek ere zehapen horien eraginpean egon litezkeen. Edonola ere, ez da horri buruzko ezer aipatzen espedientean dagoen dokumentazioan.

Egindako oharra dela eta, artikuluaren edukia aldatu da, haren irismenaren barruan sartzeko pertsona fisiko eta juridiko publiko edo pribatu guztiak.

*Bestalde, 89.2 artikuluak xedatzen du **ingurumen-lankidetzako erakundeek, administrazio publikoek eskatuta edo araudiak hala ezartzen duenean, dirulaguntzak tramitatzeko lanak gauzatuko dituztela, beste funtzio batzuen artean**. Gogora ekarri behar da hemen ere lankidetzako erakundeek dirulaguntza-programen kudeaketan duten parte-hartzea 38/2003 Legean arautua dagoela oinarrian, eta, beraz, araudi hori bete beharko dela programa horien oinarriak arautzean.*

Oharra geure egiten dugu eta arauaren testua aldatu dugu, dirulaguntzen alorrean aplikatu beharreko oinarrizko araudiaren erreferentzia egiteko, adibidez.

*Egokia da, halaber, **memoria ekonomikoaren 2.7 «Laguntzak eta dirulaguntzak» puntuan** adierazitakoari buruzko irizpenen bat ematea. Bertan, murrizketak, hobariak*

edo salbuespenak ezartzeko aukera aipatzen da [85.4 art.] eta honako hau esaten da: «Neurri horiek Sailaren dirulaguntzen plan estrategikoan jaso behar dira», manua neurri fiskalei buruzkoa baita egiaz, eta horiek beren araudi propioaren arabera antolatzen dira (horrela, tributu bakoitza arautzen duten arauek zehazten dituzte, dagokionean, salbuespen edo hobari horiek; horiek ez diote gastua handitzen administrazioari, diru-sarrerak txikitzen dizkiote), eta beharrezkoa da horiek eta dirulaguntza-programak bereiztea. Azken horiek, esan bezala, Dirulaguntzen Lege Orokorrean jasotako oinarrizko araudiaren arabera antolatzen dira (eta, edozein kasutan, gastu bat eragiten diote administrazioari).

Dirulaguntzei buruzko oinarrizko araudi horrek uzten ditu, hain zuzen, dirulaguntzaren kontzeptutik kanpo onura fiskalak [38/2003 Legearen 2.4.g) artikulua]. Ondorioz, 38/2003 Legearen xedapenak ez zaizkie aplikatzen neurri fiskal horiei, eta ez dira dirulaguntzen plan estrategikoan jaso behar, igorritako memoria ekonomikoan eskatzen den bezala. Beraz, puntu hori zuzendu behar da.

Onartzen dugu posible dela akats terminologiko bat egotea memoria ekonomikoan, KEBek adierazitako terminoetan. Hori jasota utzi dugu tramitazio-memoria honetan, eta ez da egokia, gure iritziz, memoria ekonomikoa aldatzea, aurreko data batean amaitu eta sinatu baitzen. Edonola ere, oharra jaso da dokumentu honetan.

***4.** Honako hau dio aurreproiektuaren 42.3 artikuluak: «Lege honetan ezarritako ingurumen-baimenak emateko Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen organoak, modu arrazoituan, eska dezake **fidantza, abal edo aseguru bat jartzea, ezarritako baldintzak betetzea bermatzeko edo baimendutako jarduerak edo instalazioak sor ditzakeen kalteak konpontzea edo gutxitzea bermatzeko**. (…)»*

***Fidantzak edo bestelako bermeak** eskatzeko aukera ez da berria, indarreko ingurumen-araudian jasota baitago (otsailaren 27ko 3/1998 legearen 90. artikulua). Administrazioaren aldeko berme-araubide hori Euskal Autonomia Erkidegoko Finantzen Legearen (azaroaren 8ko 8/1996) I. tituluaren III. kapituluan dago jasota (13. artikulua eta hurrengoak) (...).*

Azalpen-ohar bat baino ez da eta, azken finean, indartu egiten du Zuzendaritza proposamen-egilearen tesia, hau da, fidantzak arrazoituta ezartzea, jardueraren potentzialtasun kutsatzaileak hala eskatzen duenean: ingurumen baimen integratua (IBI) edo ingurumen-baimen bakarra (IBB) duten jarduerak, hain zuzen.

***6.** Aurreproiektuak honako hau xedatzen du 4. artikuluan: «Lege honen xedeak lortzera bideratutako jarduerak onura publikokoa edo interes sozialekoak direla deklaratu ahal izango da (...)». Manua ez da argia Legearen xedeak lortzera bideratutako aipatutako jarduerak zeintzuk diren zehazteari dagokionez. Proiektuaren memoriak ez du inolako neurketarik egiten eremu horretan instantzia proposatzaileak egin dituen aurreikuspenei dagokienez, eta hori desiragarria litzateke, kontuan izanik desjabetzearen aukerak izan dezakeen garrantzia eta adierazgarritasuna.*

Hain zuzen, artikulu ireki bat da. Izan ere, ez da posible aldez aurretik mugatzea zeintzuk izango diren, ingurumen-arauaren helburuak lortzen lagun dezaketen jardueren artean, onura publikokoak edo interes sozialekoak direla dioen deklarazioa jasotzeko modukoak. Jarduera batzuk interes orokorrekotzat deklaratzeko aukerari buruzko artikulu ireki baten aurrekaria dago otsailaren 27ko 3/1998 Legean bertan, Euskal Autonomia Erkidegoaren interes orokorrei zuzenean eragiten diete ingurumen-kudeaketako azpiegiturei dagokienez.

*Edonola ere, horrelako prozeduretan **indarreko desjabetze-araubidean ezarritakoa bete beharko da** eta **kontuan izan beharko da**, Administrazio honi dagokionez, **Euskadiko Ondarearen Legearen testu bateginean** xedatutakoa (azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako dekretuaren bidez onetsi zen), batik bat desjabetzeak erabiliz egindako eskuraketei buruzko 48. artikuluan xedatutakoa.*

Xedapen hori 4. artikuluan bertan dago aurreikusita (*in fine*), bertan xedatzen baita onura publikoko deklarazioa eta desjabetzearen ondoreak, besteak beste gaiari buruzko araudi espezifikoan txertatzen direla:

4. artikulua. Onura publikoa eta interes soziala.

Lege honen helburuak betetzera bideratutako jarduerak onura publikokotzat edo interes sozialekotzat jo ahal izango dira, ondorio guztietarako; eta, bereziki, Legearen eraginpean dauden ondasunen edo eskubideen desjabetzeari buruzkoak, legediak gai horri buruz xedatutako guztiarekin bat etorrita.

II.2.4.- ERAGIN EKONOMIKOA BESTE ADMINISTRAZIO BATZUETAN, PARTIKULARRENGAN ETA ORO HAR EKONOMIAN.

Proposatutako legearen aplikazioak beste administrazio batzuetan, partikularrengan eta oro har ekonomian izan dezakeen eragin ekonomikoa eta enpleguaren, errentaren eta ekoizpenaren gaineko inpaktu ekonomikoa aztertuta, ondorioak memoria ekonomikoaren 2.8, 2.9 eta 2.10 apartatuetan jaso dira.

Apartatu horri dagokionez, aipatu behar dugu gaiaren inguruko eskumenak dituen Administrazio Orokorraren Zuzendaritzak ez duela inolako eragozpenik adierazi memoria ekonomikoko xedapenei dagokienez nahiz eta, txostena egiteko datan, bazeuden gai horri buruzko hainbat ohar jasota, beste organismo batzuek egindakoak.

II.3. PROIEKTUAREN TESTUARI BURUZKO BESTE IRIZPEN BATZUK

*Proiektatutako arauaren testuko xedapen batzuetan, Bulego honen iritziz, badira **zehaztasunik gabe** definitutako zenbait puntu eta, edozein arauri eska dakiokeen segurtasun juridikoa dela eta, komenigarria litzateke horiek zehaztu edo argitzea, hein batean edo bestean. Esate baterako, IBI eta IBBen ofiziozko berrikuspena egingo dela esaten da «posible denean igorpenak nabarmen murriztea gehiegizko kosturik eragin gabe, teknika erabilgarri onenetan izandako aldaketa garrantzitsuen ondorioz» [43.4.b9 art.] edo honako hau esaten denean: «...ingurumenean ondorio esanguratsuak izan*

baditzakete probabilitate handiarekin». [60.1 art.]. Ikusi dugu aurreproiektuaren testuan sarritan aipatzen direla ingurumenaren gaineko efektu esanguratsuak, aldez aurretik [2.h art.] honela definitu direnak: «Ingurumenaren kalitatearen alderdien aldaketa kaltegarria, magnitude hautemangarria duena, batik bat iraunkorra edo iraupen luzekoa bada. Natura 2000 Sareko espazioen kasuan, efektu bat esanguratsua dela joko da habitaten kontserbazio-egoera edo bertan kontserbatzen diren espezieen egoera edo, dagokionean, berrezartzeko aukerak definitzen dituzten parametroek okerrera egitea badakar». Definizio horren elementu batzuk, gure iritziz, arauan bertan zehaztu beharko lirateke (edo zehazten dituen arauaren aipamena egin beharko litzateke).

Gai honen harira, esan behar dugu ingurumen-araudian badirela zehaztugabetasun handiko kontzeptu juridikoak, konplexuak eta antzemanezinak baitira ingurumen-arauen bidez arautu behar diren alderdi, zertarako eta harreman asko, eta horien beharra onartu egiten dela. KEBen txostenean aipatzen diren terminoak, esaterako, ia hitzez hitz ageri dira, zehaztugabetasun berarekin edo handiagoarekin, zehaztapena egiteko aipatzea proposatzen den oinarrizko araudian (ikus abenduaren 16ko 1/2016 LEDen 26.4 artikulua, ingurumen-baimen integratua berrikusteari buruzkoa, edo ingurumen-ebaluazioko abenduaren 9ko 21/2013 Legeak emandako «ondorio esanguratsuaren» definizioa). Atal honetan zehaztu nahi dugu, batik bat ingurumen-ebaluazioko araudian zehaztu gabe dauden alderdiei dagokienez, lege-aurreproiektuan ahalegina egin dela oinarrizko ingurumeneko araudian interpretaziorako tarte zabala uzten duten alderdiak zehazteko. Ikus, bestela, arau-proiektuari eginiko alegazioei erantzuteko txostenaren 107. orrialdea, non berariaz lantzen baita EIALAko zenbait kontzeptu juridikoren zehaztugabetasunari buruzko gai hori.

Gomendatzen dugu, halaber, proposatutako arauan bertan zehaztea ebaluazio-prozedura aplikatzetik ***salbuetsi ahal izango diren kasuak****, 66.1 artikuluan aipatutakoak eta, dagokionean, beste ebaluazio bat aplikatuko zaienak, manu horretan ez delako horren inguruko ezer zehazten ere.*

Gai horri dagokionez, beharrik gabeko errepikapenetan ez erortzeko, ikus lege-aurreproiektuaren jendaurreko informazioaren fasean artikulu horiei egindako alegazioei emandako erantzuna (alegazioei erantzuteko txostenaren 103. eta 107. zein 129. eta 138. orrialdeen artekoak eta tramitazio-memoriaren eranskinaren 36. eta 39. orrialdeen artekoak).

2.7. Testua Euskadiko Aholku Batzorde Juridikora bidali aurretik egindako doikuntza teknikoak.

Nahitaezko txostenak eta alegazio-idatziak jasotzerakoan arau-proiektua berriz irakurrita, EIALA proposatu duen Zuzendaritzak erabaki du doikuntza batzuk egitea tramitatzen ari den testuaren zirriborroan. Zehazki, honako hauek:

- **Titularraren definizioa** txertatu da (jarduera edo instalazioa, guztiz edo zati batean, ustiatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa), argi uzteko ingurumen-organoari jarduera edo instalazioaren benetako kontrola duena identifikatuta izatea interesatzen zaiola. Hori, gainera, dena delako ingurumeneko esku-hartzeko tituluaren titularra izango da,

eta haren ardura izango da behar bezala betetzen dela bermatzea ingurumen-agintaritza eskudunaren aurrean.

Ingurumen-ondoreetarako, ez du garrantzirik nor den arau-proiektuan deskribatzen diren esku hartzeko tituluak behar dituzten jarduerak egiten diren instalazioen jabea (ondorio zibil edo sozietateen ondorioetarako). Horrela, instalazioaren titularra (ustiatzailea) nor den jakin nahi da. Horretarako, 24. artikulua aldatu da, jardueren sustatzaileen obligazioei buruzkoa, instalazio edo jardueren titularrak aipatzeko.

Testuko manu batzuk egokitu dira, emandako ingurumeneko titulu edo gaikuntzen aipatutako titularrak eta jardueraren sustatzailea bereizteko, azken kategoria horretan egongo litzatekeelarik aipatutako tituluak lortu arte.

Koherentzia gordetzeko, aldatu egin da jarduerak gauzatzeko **esku hartzeko tituluak** (eta ez instalazioak edo jarduerak berak) **eskualdatzeari** buruzko 27.1 artikulua. Honela geratuko da idatzita:

.

1. Baimena, lizentzia edo komunikazioa behar duten jarduera edo instalazioak gauzatzeko ingurumeneko esku hartzeko tituluak eskualdatzean, dagokion titulua ematen duen edo aurretiko komunikazioa jasotzen duen eta eskumena duen administrazioari jakinarazi beharko zaio.

- **Epe** batzuk espresuki txertatu dira ingurumen-ebaluazioari buruzko V. Tituluan. Hasiera batean epe horiek garapeneko araudian definitzea planteatzen zen. Estatuko araudian oinarrizkoa ez den izaeraz jasotakoen antzekoak dira epe horiek.

- **Bigarren xedapen gehigarri** bat txertatu da, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko Lege berriaren 7.4 artikuluan (otsailaren 21eko 4/2019) aldaketa partzial bat egiteko.

Aldaketa horren xedea da argi uztea arau horren arabera sortutako energia-jasangarritasunaren ikerketa berria ez dela txertatu behar lurralde-antolamendu eta hirigintzako antolamenduko tresnen ingurumen-ebaluazioaren prozeduran.

Lehenik eta behin, adierazitako tresna guztiek ez dutelako ingurumen-ebaluazioa beharko eta, bigarrenik, ez delako ingurumen-eskumenak dituen organoaren egitekoa aipatutako azterlana zuzena dela fiskalizatzea formaren edo edukiaren ikuspegitik, ez eta planari edo programari zuzenketa-neurriak ezartzea ere, energia-jasangarritasunari dagokionez.

2.8. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpena

2019ko uztailaren 12an, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren Osoko Bilkurak aho batez eman zuen 126/2019 irizpena, erreferentziazko araudi-proiektuari buruzkoa. Erreferentziazko Legearen aurreproiektua Gobernu Kontseilura bidali daitekeela ondorioztatu zuen irizpenean, bertan adierazitako oharrak kontsideratu ostean.

Hasteko, irizpenean, oro har, xedapen arautzailea itxuratzeko prozeduraren izapidetzearen inguruko zein xedapenean bildutako funtsezko artikuluen edukiaren inguruko balorazio positiboa egiten dela esan daiteke. Jarraian, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpen horretan bildutako oharren

azterketa egingo da. Legegintzako ekimena sustatu duen organoak kontsideratu ez dituen aspektuak nabarmenduko dira azterketa horretan, aspektu horiek gutxienekoak izanik.

1.- Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen txostenaren inguruko eztabaidari dagokionez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak arauaren aurreproiektua ETELren 90.1 artikuluaren aplikazio-esparruaren baitan egongo litzatekeela interpretatu duen arren, organo sustatzaileak alerta goiztiarreko sisteman bildutako jarraibideak benetan bete dituela eta arau horretan aipatutako gertakizunerako azaldutakoa (94. eta 95. atalak) bete dela dioela azpimarratu beharra dago.

2.- Era berean, udal eskumenekiko eraginari eta tokiko autonomiaren printzipioari dagokienez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak zera dio, hitzez hitz: a) tokiko autonomia aitortzeak ez du esan nahi instituzio komunek ingurumen arloan dituzten eskumenak (kasu honetan legeak egiteko eskumenak lirateke) baliatu ezin dituztenik (128. atala); b) egungo udal jardunean dituen ondoreak, sailkatutako jarduerei dagokienez, zentzuzkoak dira eta ezin dira saihestu (130.atala); c) irizpena behar duen testuak tokiko eskumenak errespetatzen ditu eta zehazki, udalerrienak diren eskumenak, ETELn agertzen direnak (132. atala).

3.- Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak 152tik 154ra bitarteko ataletan egindako oharrari heltzen dio eta indargabetu beharreko arauan (3/1998 Legea) bildutako ingurumen-esparru sektorial guztiak ez arautzea aukeratu izanaren arrazoien azalpena aldatuko da. Hala ere, legegintzako arrazoi teknikoak direla-eta, ez da beharrezkotzat jotzen aipatutako araua indarrean egon bitartean garatu diren erregelamendu desberdinak legez babesten jarraitzeko azken xedapen bat edo xedapen indargabetzaile bat gehitzea.

4.- Gaur egun Naturzaintza-Natura Kontserbatzeko Aholku Batzordearen funtzioak Ingurumeneko Aholku Batzordean batzeko azmoaren inguruan, era paraleloan izapidetzen ari den natura babesteko aurreproiektuko behin betiko memorian esandakoari jo behar da.

5.- Aurreproiektuaren 22. artikulua aldatu da, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak 190etik 194ra bitarteko ataletan egindako oharrak eta iradokizunak sartzeko. 22.d) artikuluak Estatuko oinarrizko araudiaren aplikagarritasunaren inguruko erreferentzia orokorra barne hartuko du, Estatuko Administrazio Orokorrari dagokionean ingurumen eraginaren adierazpena edo ingurumen eraginaren txostena egitea. Erreferentzia horretan Estatuak arlo horretan adierazitakoa eta desadostasunen ebazpena erabakigarritzat jotzeko beharra agertuko litzateke, eta baita kasu konkretu horietarako kontuan izan behar diren beste aspektu batzuk ere, adierazpen edo txosten horiek egiteko epeak, adibidez.

6.- Aurretiaz jakinarazi beharreko sailkatutako jardueren udal erregistroari dagokionez (200. atala), Batzordeak egindako oharrari heltzen zaio eta 9. paragrafoa gehitu zaion arauaren 53. artikuluari, honela dioena:

"Udalek aurretiaz jakinarazi beharreko sailkatutako jardueren pean dauden jarduera eta instalazioen erregistroa egingo dute, horiek udal mugartean egingo direnean".

7.- Ingurumen ebaluazioari buruzko V. kapituluari dagokionez, esan beharra dago Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren ustez (203tik 209ra bitarteko atalak) ostean prozedurazko eta xehetasunezko gai asko arauz garatzeko hautua zentzuzkoa dela eta testua argiago eta hobeto ulertzen laguntzen duela. Era berean, 65. artikuluaren kasuan, ingurumen ebaluazioaren aplikazio-eremutik kanpo uzteari buruzkoan, Batzordearen iritziz organo sustatzaileak egindako interpretazioa, Europako zein barneko araudiaren testuinguruan oinarritutakoa, koherentea da eta ondo oinarrituta dago.

8. Dena den, 65. artikuluko 2. atalaren kasuan, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak uste du (218tik 228ra bitarteko atalak) plan edo programa batek adierazgarriak ez diren ondoreak izan ditzakeela irizteko orduan, hori zein egoeratan egin daitekeen zehazteko irizpideak arauzko xedapen baten bidez ezarri behar direla.

Zentzu horretan, ezin da proposamena onartu eta lehen bezala mantendu beharko da testua; izan ere, lehengo idazketa malguagoa da eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen organoak proposatutako irizpide horien irismenaren arabera, arauzko xedapen baten bidez edo besterik gabe agindu tekniko edo gidaliburu interpretatibo baten bidez ezartzeko bide modura aukeratu ahal izatea ahalbidetzen du. Hau da, erregulazioak planen eta programen ebaluazioari buruzko funtsezko aspektuen inguruko zerbait badio, zalantzarik gabe, araudia-izaera duen tresna batera jo beharra dago eta zentzu horretan, ingurumen organoak hori sustatu baino ez luke egingo, ez baitzaio arauak egiteko funtziorik esleitu. Dena den, ingurumen organoak aplikazio-eremukoak diren eta funtsezkoak ez diren aspektu batzuk argitu baino egin nahi ez badu, aspektu horiek ingurumen ebaluazioaren prozeduretan interesa izan dezaketenei gauzak errazago ulertzen laguntzen dietelako, arauzkoa ez den agindu bat eman liteke, ingurumen organoak bere eskumenekoak diren esparruetan egin izan duen moduan.

9.- Epeak zenbatzeari dagokionez (229tik 231ra bitarteko atalak), eskabide osoa jaso ondoren egin beharreko izapide batzuetarako, adierazi beharra dago aginduak ingurumen eraginaren ebaluazioari buruzko Estatuko oinarrizko arauditik aurreproiektura eraman direla. 17.4, 25.1, 31.1, 33.4, 40.1 y 47.1 artikuluetan dio ingurumen organoak *espediente osoa jasotzen duenetik edo hasierako eskabidea eta horrekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak jasotzen dituenetik* jarrera hartu behar duela.

Aurrekoaz gain, 8. Azken Xedapenean adierazitakoa betez, esan beharra dago 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 eta 47 artikuluetan eta hamargarren xedapen gehigarrian ezarritako epeak ez direla oinarrizkoak izango eta beraz, Estatuko Administrazio Orokorrari eta bere erakunde publikoei bakarrik aplikatu ahalko

zaizkiela. Aitzitik, artikulu horietako gainerako xedapenak, epeei beren-beregi erreferentziarik egiten ez dietenak, oinarrizko legeria modura hartuko dira eta EIALren aurreproiektuan bildu beharko dira.

10.- Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak (238. atala eta hurrengoak) erosketa publiko berdearen inguruan egindako oharrei dagokienez, zioen azalpena aldatu da, Batzordearen jarraibideak txertatzeko. Obra eta zerbitzuen kontratu batzuetan kontratuaren xedea ingurumenaren inguruko irizpideak eskatzeko beharrari lotuta egoten dela adierazi beharra dago.

11- Irizpenaren 258. atalean ingurumen arloko fiskalitateari buruzko 85.1 artikuluan bildutako aurretiazko kontsultei buruzko hausnarketa egin da eta zalantzan jarri da zenbait aspektu nabarmendu beharko liratekeen ala ez, modu sintetikoan bada ere, aurreproiektuan bertan, esate baterako, zentzua, esparrua, derrigortasuna edo artikulazio praktikoa. Horren inguruan, EAEko Administrazio Orokorrari aldez aurretik fiskalitate ekologikoaren eta politika ekonomikorako (esparrua) beste tresna batzuen erabilera sustatzearen inguruan egindako kontsulta bat baino ez dela adierazi beharra dago, organo horrek aipatutako jarduketen berri izan zezan eta horrela, haren eskumenak hobeto gauza zitzan. Derrigortasuna aurreproiektuan jasota dago beren-beregi eta ez da zehaztu ingurumen organoak ostean har dezakeen jarrerak sustatzaileentzat ondorio loteslerik izango ez duenik. Azaldutakoa dela bide, ez da beharrezkotzat jo Legearen aurreproiektuan xehetasun gehiago ematea.
Dena dela, eta, kontuan izanik Ogasun eta Ekonomia Sailak 85. artikuluari buruzko alderdi batzuen gaineko irizpideari dagokionez COJUAEk egindako txostenean (249. eta 250. atalak) aipatzen dena, proposamenak onartzen dira eta 85. artikulua aldatu egiten da, horren 2. eta 3. atalak aldatuta eta 85.1 artikuluari idazketa berri bat emanda.

12.- Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak erakunde kolaboratzaileen eta ikuskaritza-funtzioaren inguruan egindako aipamenei jaramon egin zaie eta aurreproiektuaren 91. eta 92. artikuluak aldatu dira.
13.- Ingurumeneko kalteengatiko erantzukizunari buruzko ataletan, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak iradoki du aurreproiektuaren 100. artikuluan aldaketak egitea eta kontuan izan da iradokizun hori.

Hala ere, esan beharra dago ingurumenari edo pertsonen osasunari berehalako kalte larriak eragiteko arriskua, 100. artikuluko 1. paragrafoan bildutakoa, eta ingurumeneko kalte nabarmenak eta haren gaineko berehalako mehatxua, ingurumen erantzukizunari buruzko II. kapituluan bildutakoak eta 26/2007 Legean beren-beregi definitutakoak, urriaren 23koan, ingurumen erantzukizunari buruzkoan, ez direla gauza bera.

14.- Kutsaduraren kontrol eta prebentzio integratuari buruzko legerian bildutako arau-hauste oso larriak gehitu dira, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak bere irizpeneko 295. atalean eta hurrengoetan adierazitakoak. Izan ere, egia da Estatuko oinarrizko araudian arau-hauste horiek “oinarrizkoak izatetik pasatzen

ez direla” eta legegile autonomikoak beti arau-hauste modura hartu behar dituela.

15.- Aurrekoaz gain, ingurumeneko kalteengatiko erantzukizunari buruzko 104.3h) artikuluan arau-hauste larriei egindako erreferentzia kendu da; izan ere, gai zehatz honen inguruan, EIALk ingurumen erantzukizunari buruzko Estatuko oinarrizko legerian xedatutakoari erreferentzia egiten dio blokean.

16.- 104.3) artikuluko o) atala ere osorik ezabatu da, Batzordearen esanak betez.

17.- Konfiskazioaren kasuan, behin-behineko neurri berri modura txertatu da 11. artikuluan. Honela geratuko litzateke.

“e) Konfiskazioa 108. artikuluan bildutako kasuetan”.

18.- 313. atalean eta hurrengoetan zor likidoak ez ordaintzeagatiko hertsapen-isunak ezartzearen inguruan egindako oharrak zuzenbidearen araberakoak direla iritzi da eta onartu egin dira, aurreproiektuko 113. artikuluko aldaketekin.

19.- Kontratatzeko obligazioaren kasuan (328tik 330era bitarteko atalak), Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak adierazitakoa bete da eta horri buruzko artikulua aldatu da, EAEko lurraldean sektore publiko osoari aplikatzeko aukera argiago gera dadin.

Horrez gain, 114. artikulu horretako 2. paragrafoa aldatu da, diru-laguntzak lortzeko araubidea aplikatzeko salbuespenak gehitzeko, beti ere organo eskudunak ordainketa zatikatua onartzeko oinarri modura hartutako ebazpenean zehaztutako ordaintzeko betebeharrak aldian-aldian betetzen badira.

20.- Arau-hausleen publizitatearen kasuan, horren aplikazio-eremua behar bezala mugatuta dagoela ulertu da, memorian alegazioan fase desberdinetan azaldutakoa kontuan hartuta.

21.- Arau-hausleen erregistroari dagokionez, arrazoien zioa aldatuko da, erregistro hori herri administrazioei ezin gezurtatuzko informazioa emateko xedez sortu zela argitzeko, informazio horrekin herri administrazioek zehatutako pertsona fisiko eta juridikoen inguruan haien eskumenak gauza zitzaten eta edozein kasutan ere, informazio sentikorra daukaten beste erregistroetan bezalaxe, ez dela herritar orok publikoki kontsulta dezakeen erregistro bat.

22.- Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren 126/2019 Irizpenaren amaierako bi sekzio daude (VIII-Aldian-aldiko beste gai batzuk, eta IX-Legegintzako teknikako beste ohar batzuk), ia osorik onartu direnak. Puntu honetan, organo sustatzaile honek onartzeko beharrizanik ez dagoela uste izan duen zenbait aspektu edo ohar bakarrik aipatuko dira.

22.1. 375. atala Ez da beharrezkotzat jo sustatzaileei EAEko ingurumen organoak jada baduen informazioa aurkezteko eskatzea; izan ere, Euskadiko EMAS Sisteman bildutako enpresen erregistroaren kudeatzailea da. 39/2015 Legeak berak, urriaren 1ekoak, partikularrei informazioa eskatzeko betoa jarri die herri administrazioei, jada informazio hori badutenean.

22.2. 377. atala Teknologia Erabilgarri Onenei lotutako Gehieneko Isurketa Balioak (GIB) agertu dira eta instalazio kutsagarrienetarako pentsatuta daude, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuaren araudiaren pean daudenetarako (IPPC). Hori dela eta, beste instalazio mota batzuetarako erabili nahi badira, ingurumen baimen bakarraren pean dauden instalazioetarako esaterako, kontuan hartzeko elementu modura bakarrik erabili ahalko dira, eta ez administrazioak ezinbestean bete beharreko legezko erregulazio moduan.

22.3 383. atala Xedapen Gehigarri Bakarra Hura mantendu beharra dagoela uste da, EIALren aurreproiektuaren izapidetze-prozesuan jasotako alegazioei emandako erantzunetan adierazitako arrazoiengatik eta honako arrazoi honengatik ere bai: testuaren sustatzaileentzat oso garrantzitsua da zentzu horretan Eusko Legebiltzarraren berrespena izatea, ingurumen arloan eskumenak dituzten herri administrazioetako administrazio-unitateek ingurumen arlorako giza baliabideen eta baliabide materialen eskaera ezesten edo mugatzen zaiela ikus ez dezaten, barneko arrazoiengatik.

22.4. 391. atala Ez da kontzeptu hau definitu behar. Izan ere, oinarrizko araudian zerrendatuta dauden definizioen artean egoteaz gain, ingurumen arloko dokumentu honetan edukia da garrantzitsuena eta gainera, eduki hori desberdina da oinarrizko araudian eta EIALren aurreproiektuan bildutako ingurumen ebaluaziorako prozedura bakoitzerako.

22.5. 393. atala Partzialki onartu da oharra. 13. artikulua aldatu da.

22.6. 401. atala Mantentzea beharrezkoa dela uste da, 26/2007 Legean, urriaren 23koan, ingurumen erantzukizunari buruzkoan (7. art.), bildutako egoeretako bat delako. Herri administrazio desberdinei eragin diezaiekeenez, EAEn jarduteko printzipio orokorrak ezartzea xede duen Lege batean txertatzea merezi du.

ONESPEN FASEA

Araudi-proiektua izapidetzeko azken mugarri modura, honako hauek egitea falta dela esan beharra dago:

1.- Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenean bildutako iradokizunen eta proposamenen ondorioz arauzko xedapenaren proiektuan egin behar izan diren aldaketen berri ematea Kontrol Ekonomikoko Bulegoari, onetsi baino lehen, 2/2017 Legegintzako Dekretuaren 27. artikuluan (urriaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onesten duena) xedatutakoa betez. Horretarako

memoria hau bidaliko da, eta baita testua ere, amaieran Gobernu Kontseiluari bidaliko zaiona, onetsi dezan.

2.- Legearen aurreproiektua Gobernu Kontseiluari bidaltzea, onetsi dezan.

3.- Araudi-proiektua eta egoki den gainerako dokumentazioa Eusko Legebiltzarrera bidaltzea, 7/1981 Legearen 56. artikuluan (ekainaren 30ekoa, Jaurlaritzari buruzkoa) xedatutakoa betez.

4.- Azkenean onetsi den xedapenaren berri ematea Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari, 9/2004 Legearen 30.2 artikuluan (azaroaren 24koa, Aholku Batzorde Juridikoari buruzkoa) eta Batzordearen antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko Erregelamenduko 34. artikuluan xedatutakoa betez (irailaren 12ko 167/2006 Dekretuaren bidez onetsi zen Erregelamendu hori). Horretan adierazitakoaren arabera, kontsulta egin nahi duen organoak edo agintaritzak prozeduraren amaieraren berri eman beharko dio Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren idazkariari, onetsi den xedapenaren berri emanda edo emandako aginduaren berri emanda. 15 eguneko epean egingo da hori, Eusko Legebiltzarrera bidaltzen den egunetik zenbatzen hasita.

Gasteizen, sinatutako datan

Ingurumen Administrazioaren zuzendaria
Director de Administración Ambiental

IVAN PEDREIRA LANCHAS
Elektronikoki sinatuta

I. ERANSKINA. NAHITAEZKO TXOSTENETAN JASOTAKO OHARREI ETA IRADOKIZUNEI EMANDAKO ERANTZUNA.

LEHENENGO TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK				
ARTIKULUA	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
1. artikulua. Xedea	EMAKUNDE	Eskatzen du Garapen Jasangarrirako 2030 Agendaren Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH) lortzea txertatzeko xede gisa.	Iradokizuna hartzen da eta 1.k) atal bezala gehitzen da. k) Ingurumenarekiko jasangarria den garapena bermatzea, Nazio Batuek onetsitako Garapen Jasangarrirako 2030 Agendaren helburuak lortzen lagunduz.	Onesten da
2. artikulua. Definizioak	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Definizioak aurreikustekotan, Estatuko oinarrizko legerian erabilitako termino berberetan jaso behar dira, nahiz eta babes-neurri gehigarriak ezartzen diren. Baliteke horiek Estatukoak baino zorrotzagoak izatea eta, gainera, ez dute eskumenak banatzeko konstituzio-sistema urratzen.	Alegazioan ez da zehazten zeintzuk diren oinarrizko legeriarekin bat ez datozen hasierako testuko definizioak. Nolanahi ere, alegatzaileak adierazten duen bezala, definizioak oinarrizko legerian aurreikusitako definizioaren hitzez hitzeko zentzutik bereiz daitezke baldin eta horien irismena argitzen badute eta ingurumen-babeseko neurri zorrotzagoak ezartzen badituzte. Hori da lege-aurreproiektuaren asmoa definizioak oinarrizko legeria sektorial desberdinetan jasotako definizioengandik bereizten diren kasuetarako. Halaber, adierazi beharra dago zenbait definizio eranskin espezifiko berri batera helarazi direla (II.G Eranskina), hain zuzen ere, Ingurumen-ebaluazioaren V tituluaren ondorioetarako.	Ez da onesten

	LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA	Aurreproiektuak bere funtsezko printzipioen artean jasotzen du herritarren parte-hartzea politika publikoen diseinuan eta egikaritzapenean. "Publiko interesdunaren "kontzeptua zehazterakoan, 2 q) artikulua Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeari lotzen zaio eta hori hedatzen du honako betekizunak betetzen dituzten pertsona juridikoetara: - Irabazteko asmorik gabeko pertsona juridikoa - Gutxienez bi urteko antzinatasunarekin eratutakoak - Estatutuetan ingurumena oro har edo horren elementuren bat zehazki babesteko helburuak - Helburuak jarduketako lurralde-eremuan hartutako erabakien menpekoak izateko aukera Hala eta guztiz ere, kontuan hartu behar da aurreproiektuak funtsezko izaera esleitzen diola herritarrek ingurumenarekin lotutako politika publikoen diseinuan eta egikaritzapenean parte hartzeari; horrenbestez, proposamena egiten duen sailak aztertu eta balioztatu beharko du pertsona juridikoei interesduntzat hartuak izateko ezarritako betekizunak proportziokoak diren eta pertsona juridikoen arteko diskriminaziorik eragiten ez duten	Pertsona juridiko interesdunaren kontzeptua Ingurumen gaietan informazioa eskuratu, publikoki parte hartu eta auzitegietara joateko eskubideak arautzen eta garatzen dituen oinarrizko legeria sektorialean dago oinarrituta, hau da, uztailaren 18ko 27/2006 Legean. Arau horrek 2. artikuluan definitzen ditu kontzeptu hauek: 1. Publikoa: edozein pertsona fisiko edo juridiko, baita aplikagarria zaien araudiarekin bat etorriz eratutako antolakuntzak, erakundeak eta taldeak ere. 2. Pertsona interesdunak: a) Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 31. artikuluan aurreikusitako edozein inguruabarrean dagoen pertsona fisiko edo juridiko oro. b) Lege honen 23. artikuluan ezarritako betekizunak betetzen dituzten irabazteko asmorik gabeko pertsona juridiko guztiak. Hain zuzen ere, aurreproiektuak hitzez hitz jasotzen ditu arau horren 23. artikuluko betekizunak; hortaz, ez da bidezkoa alegazioa hartzea. Izan ere, diskriminazioa ez eragiteaz gain, erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzeko ingurumen-interesak dituen hirugarren sektore osoari irekitzen zaio.	Ez da onesten
3. artikulua.	LEHIAREN EUSKAL	Aurreproiektuak garrantzia handia ematen die jarduera ekonomikoan prozedurak sinplifikatzeari eta oztopoak kentzeari; beraz,	Aurreproiektuaren zioen azalpenean adierazten den bezala, hori idazteko, oinarritzat hartu da Europar Batasunak sustatutako	Ez da

Printzipioak	AGINTARITZA	gomendatzen da legea oinarritzen duten printzipioen artean ezartzeko (3.1 artikulua) arauketa ekonomiko eraginkorraren, beharraren, proportzionaltasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak bete behar direla. Horrela, printzipio horiek, 3.1 artikuluan jasotako gainerako printzipioek bezalaxe, administrazio publikoen jarduketa-jarraibideak eraikiko lituzkete, baita ingurumena babesteko araudia interpretatzeko irizpideak ere. Adibidez, ingurumen-ebaluazioaren menpeko planak eta proiektuak administrazio publikoetatik datozenean eta jarduera ekonomikoak mugatzen dituztenean, ez lukete soilik ebaluazio hori gainditu beharko, arauketa ekonomiko eraginkorraren printzipioetara ere egokitu beharko liratekeelako.	araudi adimendunaren kontzeptua. Ildo horretatik, araua eratzerakoan, arauketa onaren printzipioak jarraitu dira (urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikulua). Horiek xedatzen dute, legegintza-ekimena eta arautzeko ahalmena gauzatzerakoan, administrazio publikoek behar, eraginkortasun, proportzionaltasun, segurtasun juridiko, gardentasun eta eraginkortasuneko printzipioekin bat etorriz jardungo dutela. Lege-aurreproiektuen edo arauketa-proiektuen, hurrenez hurren, kasuaren arabera dagokionari erreparatuta, zioen azalpenean edo sarreran, behar beste justifikatu egingo da printzipio horiekiko egokitzapena. Edonola ere, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legeak (3. artikulua. Printzipio orokorrak), ezartzen du administrazio publikoek objektibotasunez erantzuten dietela interes orokorrei eta eraginkortasun, hierarkia, deszentralizazio, deskontzentrazio eta koordinazioko printzipioei jarraiki jarduten dutela, osorik betez Konstituzioa, Legea eta Zuzenbidea. Halaber, artikulu horrek xedatzen du, bere jarduketan eta harremanetan, printzipio hauek errespetatu beharko dituztela: a) Herritarrei zerbitzu eraginkorra eskaintzea. b) Sinpletasuna, argitasuna eta herritarrekiko hurbiltasuna. c) Administrazio-jarduketan parte-hartzea, eta administrazio-jarduketa hori objektiboa eta gardena izatea. d) Administrazio-prozeduren eta kudeaketako jarduera materialen	onesten

			arrazionalizazioa eta bizkortasuna. e) Fede ona, konfiantza legitimoa eta leialtasun instituzionala. h) Finkatutako helburuak efikaziaz betetzea. i) Ekonomia, nahikotasuna, eta baliabideak helburu instituzionaletara zorrotz egokitzea. j) Baliabide publikoak esleitzeko eta erabiltzeko efizientzia. k) Administrazio publikoen arteko lankidetza, elkarlana eta koordinazioa. Azaldutakoagatik, ez da beharrezkotzat jotzen 3. artikuluan berenberegi gehitzea administrazio publiko guztiek nahitaez bete behar dituzten printzipio hauek, alegatzaileak proposatzen duen bezala	
5. artikulua. Pertsonen eskubideak	EMAKUNDE	Eskatzen du aipamen hau gehitzeko: ingurumen egoki batez gozatzeko eskubideak, adierazpen-edukiaz harago, neurriak eskatzen ditu, hain zuzen ere, baldintza-berdintasunean gozatu ahal izateko ingurumenaz, bai gizonezkoek, bai emakumezkoek.	Nahiz eta pertsonen kontzeptua guztiz ulerkorra den, Emakunderen proposamena onartzen da eta testua honela idatzita geratzen da: “ Ingurumen egokiaz gozatzeko baldintza-berdintasunean, gizonezkoak edo emakumezkoak diren gorabehera”.	Onesten da

BIGARREN TITULUA. INGURUMEN-POLITIKAREN ESKUMENAK ETA KOORDINAZIOA				
ARTIKULUA	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
8. artikulua. Administrazio publikoek eskumena gauzatzea	EMAKUNDE	Gomendatzen da honako hau jasotzeko: administrazio publiko desberdinek, berezkoak dituzten eskumenak gauzatuz, beharrezko bitartekoak arbitratuko dituzte ingurumen, etxebizitza, hirigintza eta garraiobideko politikek eta programek genero-ikuspegia txertatzen dutela bermatzeko. Besteak beste, kontuan hartuko dituzte pertsonen segurtasunarekin, etxeko lana egitea erraztearekin eta pertsonak zaintzearekin eta norberaren, familiaren eta laneko bizitza bateratzearekin lotutako gaiak, baita politika eta programa horien diseinuan eta egikaritzapenean emakumezkoen parte-hartze handiagoa sustatzera bideratutakoak ere.	Ez da beharrezkotzat jotzen ingurumeneko lege sektorial batean hori jasotzea; izan ere, bertan arautzen dena administrazio-prozedurak eta esku hartzeko teknikak dira, hain zuzen ere, ingurumenean eragina duten jardueren gainekoak.	Ez da onesten
9. artikulua. Ingurumeneko Esparru-programa	EMAKUNDE	Sailean berdintasun-politikak sustatzeaz eta koordinatzeaz arduratzen den administrazio-unitatearen aholkularitza aditua edukitzeko gomendatzen da.	Ekarpena positiboki balioztatzen da eta mekanismoak arbitratuko dira plangintzako dokumentuen idazketarako adierazitako administrazio-unitatearen aholkularitza edukitzeko.	Azalpenekoa
	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN	Adierazi du, horren egungo arauketarekin ez bezala, Ingurumeneko Batzordeak horren inguruko informazioa eman beharko dion arren, azken horren lankidetza baztertzen dela dokumentua egiteko prozesutik.	Edonola ere, ez da Ingurumeneko Batzordearen lankidetza baztertzen Ingurumen-planaren eraketatik; izan ere, hori lege-aurreproiektuaren 10.2 c) artikuluan jasotako txosten espezifikoaren bidez gauzatzen da.	Ez da onesten
		Adierazi du, artikuluaren egungo idazketaren arabera, ematen duela	Ez da argi geratzen oharraren zentzua.	Ez da

	ZUZENDARITZA	ingurumen-planaren xede bakarra dela ingurumenaren hobekuntza, baina, egia esan, hori tresna bat da helburuak eta lehentasunak ezartzeko; horregatik, idazketa hori berrikusteko iradokitzen da.		onesten
10. artikulua. Ingurumeneko Kontseilua	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Sailaren asmoa da kide anitzeko organo bakar batean biltzea orain arte eremu hauetan eskumenak dituzten kide anitzeko 3 organoei agindutako eginkizunak –Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Batzordea, Ingurumen Aholku Batzordea eta Naturzaintza-; beraz, abian dauden araudi-aurreproiektuen idazketak koordinatu beharko dira (Ingurumen-administrazioaren Legea eta LPNE legea), zehazki, onespen-hurrenkeraren araberako aurreikuspenekin bat etorriz. Lehenengo onesten den aurreproiektua arduratu beharko da organoa sortzeaz eta horren funtsezko arauketa ezartzeaz. Horrez gain, geroko aurreproiektuak sortutako organoari erreferentzia egiten dion idazketa jaso beharko du eta, hala badagokio, eskumen zehatzak esleitu beharko dizkio bere eremu material zehatzaren barruan. Gainera, onesten den bi testu horietako lehenengoak horren inguruko berariazko xedapen iragankor bat jaso beharko du.	Aurreproiektuak otsailaren 27ko 3/1998 Legeak sortutako Ingurumeneko Aholku Batzordearen osaera eta eginkizunak aldatu nahi ditu, kontsultarako eta administrazio publikoen eta interes sozialak eta ekonomikoak ordezten dituzten sektoreen arteko lankidetzarako organo gisa eratuz, hain zuzen ere, ingurumen-politiken eraketan, kontsultan eta segimenduan. Hain zuzen ere, legeak Euskal Herriko Ingurumen Batzordea baztertzen du, horren eginkizunak kontseiluaren berezko eginkizunetan integratuz. Argitasun gehiago emate aldera, zioen azalpena eta 10.1 artikuluaren hasiera aldatzen dira. Ez da bidezkoa lege-aurreproiektu honetan xedapen gehigarria egitea oharrean azaldutako terminoetan. Hala eta guztiz ere, aurreproiektuaren d) atala ezabatzen da legeria sektorial espezifikoan aratu beharreko espazio babestuekin lotutako proiektuak direlako.	Ez da onesten
		Gomendatzen da kontseiluaren eginkizunen artean gehitzeko honako hau: “batzordean ordeztutako erakundeek ingurumenaren eremuan garatutako jarduketa guztien gaineko segimendu-ataza egokiak burutzea”.	Artikuluaren testuak ez du aukera hori debekatzen beren-beregi aurreikusten ez duen arren, kontuan hartuta lankidetzako organo bat dela. Hala ere, ezerk ez du eragozten eskatutako gomendioa gehitzea kontseiluaren eginkizunetan. 10.2 e) atal bezala gehitzen da.	Onesten da

		Ingurumeneko Kontseilua lankidetza-organo bezala eratzen da; beraz, ez da ulertzen zergatik baztertzen den beste administrazio publiko batzuek horri ingurumenarekin lotutako txostenak eta proposamenak igortzeko eskatu ahal izateko aukera, hain zuzen ere, otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 13.b) artikuluan jasotzen den bezala, non egungo Ingurumeneko Aholku Batzordearen eginkizunak zerrendatzen diren.	Jotzen da ez dela inola ere baztertu aukera hori. Hala, 10.2 artikuluan jasotako "horren azterketaren menpekoa da" adierazpena oso idazketa irekia da, edozein administrazio publiko gaitzen duelako.	Ez da onesten
		Justifikazio-memorian ez denez organoaren sorrera garatzen ezta justifikatzen ere, ez da argi geratzen horren egokitasuna kontsulta-organo bezala. Hortaz, kalifikatzaile hori ezabatzeko edo araudi-aurreproiektuari erantsitako dokumentazioan behar bezala justifikatzeko iradokitzen da. (...) Bestalde, horren kide anitzeko organoaren izaera ondorioztatzen da horren eraketatik eta osaeratik. Kontu horri Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen Aurretiazko Tituluaren II Kapituluaren hirugarren atalean ezarritako araubide espezifikoa aplikatu beharko litzaioke. (...)	Hain zuzen ere, 10. artikuluaren hitzez hitzeko edukiak, Ingurumeneko Kontseilua sortzen dela adieraztean, akats bat eragin dezake organo horri dagokionez. Organoa ez da *ex novo* sortutako organotzat hartzen; are gehiago, proposamena egin duen sailaren asmoa da egun existitzen den Ingurumeneko Aholku Batzordea finkatzea (otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 12. artikulua) eta bertan biltzea baztertu nahi diren eta beste organo batek gauzatzen zituen eginkizunak: Euskal Herriko Ingurumen Batzordea. Hortaz, testua hobetu da, adierazteko egungo Ingurumeneko Aholku Batzordeaz ari dela eta eginkizunei egindako zenbait erreferentzia ezabatzeko, hau da, gaia dela-eta, beste kontsulta-organo batzuek burutu ditzaketen eginkizunei egindakoak.	Partzialki onesten da.

			Era berean, aipatu behar da kontseiluak ez diola kontsulta-organoa izateari uzten, horrela definitzen ez den arren. Izan ere, bere eginkizunen zerrendan ikusten den bezala, nagusiki, kontsultakoak eta txostenak eta proposamenak igortzekoak dira. Argi dago ez dela ebazteko eskumenak dituen organo bat.	
	HERRI ADMINISTRAZIOETAN HIZKUNTZA NORMALIZATZEKO ZUZENDARITZA	Aurreproiektuaren 10. eta 11. artikuluetan Ingurumen Kontseilua eta bere osaera arautzen dira. Kontseilukideek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan egon daitekeen dokumentazioa kudeatu beharko dutenez, zein Kontseiluko gainontzeko kideen hizkuntza eskubideak modu eraginkorrean bermatzeko eta administrazioak jarraitu beharreko efikazia eta efizientzia irizpideei jarraituz, komenigarria ikusten dugu jarraian proposatzen dugun testua edo antzekoa txertatzea Legean bertan edo alor honi buruzko bere garapenean: Kontseiluko kideak izendatzerakoan kontuan hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan nahikoa gaitasun edukitzea eta gizonen eta emakumeen arteko oreka bilatuko da. Kontseiluko kideek euren jardunean hizkuntza ofizialetako edozein erabili ahal izango dute. Euskararen normalizazioa helburu Kontseiluak horrela erabakitzen badu bilera deialdiak, gai zerrendak, aktak, ziurtagiriak eta testu idatziak oro har, euskaraz bideratu ahalko dira. Bestelakoa erabakitzen bada Euskal Autonomia Erkidegoko bi	Nahiz eta alegazioaren azken helburuekin ados egon, Lege mailak duen arau-testu batean txertatzea ez da komenigarritzat jotzen. Ildo horretatik, izapidetzen ari den Lege-aurreproiektua indarrean jarri ondoren erregelamendu bidez garatzeko eman beharreko arauak aztertu eta, hala izanez gero, arau horietan txertatu beharko dira aspektu horiek.	Ez da onartzen

		hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da.		
11. artikulua. Ingurumeneko Batzordearen osaera.	EMAKUNDE	Emakume eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 23. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, gogorarazten da, Ingurumen Kontseiluaren osaeran, gaikuntza, eskumen eta trebakuntza egokiak dituzten emakumezkoen eta gizonezkoen ordezkaritza orekatua bermatu beharra dagoela.	Onesten da eta aurreproiektuaren 11. artikuluaren 2. atala aldatzen da alegazioaren zentzuan: Araudiaren arabera zehaztuko da Ingurumeneko Aholku Batzordearen osaera, kideak izendatzeko prozedura, emakume eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatuz, eta horren oinarrizko antolakuntza- eta funtzionamendu-arauak.	Onesten da
	FUNTZIO PUBLIKOKO ZUZENDARITZA	Aurreproiektuaren 11.2 artikuluak ezartzen du araudiaren arabera xehatuko direla Ingurumeneko Batzordearen osaera, kideak izendatzeko prozedura eta horren oinarrizko antolakuntza- eta funtzionamendu-arauak. Araudi-garapena egin arte itxaron beharko da aurreko alderdien berri emateko, baita, hala badagokio, batzordearen kideentzako konpentsazio ekonomikoen berri emateko ere. Zehazki, konpentsazioak Zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan aurreikusitakoak izango dira.	Azalpenekoa.	Azalpenekoa.
12. artikulua. Ingurumen-informazioa	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Definizio hau definizioen inguruko artikuluan hobeto kokatuta egongo litzateke sistematikoki.	Jotzen da, tituluaren eta horren arauketaren argitasun gehiago emate aldera, ingurumen-informazioa eskuratzeko eskubidearen edukia aipatutako 12. artikuluan zehaztu behar dela.	Ez da onesten
		Bigarren paragrafoak oinarrizko uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 8. artikuluan aurreikusitako ingurumenaren egoeraren inguruko txostenak gehitzen ditu.	Hori horrela izan arren, ezerk ez du eragozten hori erkidego-mailako lege batean aurreikustea.	Ez da onesten

13. artikulua. Ingurumen-informazioaren hedapena	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Faltan botatzen da aurreproiektuaren 12.2 artikuluan aurreikusitako ingurumenaren egoeraren inguruko txostenak gehitzea, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 7. artikuluak aurreikusten dituena.	Aurreproiektuaren 13.1.a) artikuluaren idazketak horrelako txostenak hartzen ditu barne. Era berean, 12.2 artikuluak beren-beregi ezartzen du txosten hori argitaratzeko betebeharra. Horrenbestez, argitaratzen bada, hedatutzat ematen da.	Ez da onesten
14. artikulua. Ingurumen-informazioaren eskaera	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Lege-aurreproiektuak ez du definitzen zer hartu behar den agintaritza publikotzat; horregatik, interpretazio-arazoak sor daitezke, artikulu horren bigarren paragrafoan, "informazioa duen Euskal Herriko edozein administrazioko organo edo agintaritza eskuduna "aipatzen delako. Antza, termino horrek ez ditu barne hartzen zuzenbide publikoko korporazioak eta gainerako pertsona fisikoak edo juridikoak, indarreko legeriaren arabera, eginkizun publikoak betetzen dituztenean, besteak beste: notarioak eta jabetzako, merkataritzako eta ondasun higikorren erregistratzaileak. Hala ere, uztailaren 18ko 27/2006 Legeak beren-beregi definitzen du kontzeptu hori (2.4.1.d artikulua).	Hain zuzen ere, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 2.4.1 artikuluak xedatzen du nortzuk izango duten agintaritza publikoaren izaera arau horren ondorioetarako. Modu zabalean, xedatzen du honakoek izango dutela izaera hori: gobernuak; administrazio publikoak eta horien menpeko edo horiei lotutako zuzenbide publikoko erakundeak; kontsultako organo publikoak; zuzenbide publikoko korporazioak eta gainerako pertsona fisikoak edo juridikoak eginkizun publikoak egikaritzen dituztenean, notarioak eta jabetzako eta merkataritzako erregistratzaileak barne, eta, ondorio eta irismen mugatuekin, pertsona fisikoak edo juridikoak erantzukizun publikoak hartzen dituztenean bere gain, eginkizun publikoak gauzatzen dituztenean edo ingurumenarekin lotutako zerbitzu publikoak ematen dituztenean aurretik aipatutako edozein erakunde, organo edo antolakuntzaren agintaritzapean. Artikulua zentzu horretan aldatzen da.	Onesten da

			Aurreproiektuaren 14.1 artikuluak berak hauxe xedatzen du: “Ingurumen informazioaren eskaerak ingurumen gaietako informaziorako sarbide eskubideei buruzko Zuzentarauan eta Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeko bere transposizio arauan xedatutako bermeekin eta horiekin bat etorria izapidetuko dira”. Horrela, blokean jotzen da bertan xedatutakora; beraz, interpretazio-arazoak saiheste aldera, egingo diren erreferentziak agintaritza eskudunari egingo zaizkio, *estricto sensu* administrazio publiko bat izan daitekeena edo ez.	
		14. artikuluaren hirugarren paragrafoak hilabeteko epea ezartzen du eskaera jasotzen denetik edo bi hilabeteko epea baldin eta eskatutako informazioa bolumen edo konplexutasun handikoa bada, hain zuzen ere, agintaritza publiko eskudunak eskatutako informazioa eman dezan edo hori uka dezan dagokion arrazoiak emanez. Horrela, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 legearen 18.4 artikuluan xedatutakoaz bereizten da, bi hilabeteko gehieneko epe bakarra ezartzen zuena.	Gogorarazi behar da oinarrizko 27/2006 Legeak hilabeteko epea ezartzen duela. Gainera, ezerk ez du eragozten autonomia-erkidego mailako lege berri batek egokiagotzat jotzeko autonomia-erkidegoko aurreko beste lege batean ezarritakoaren epe desberdin bat, batez ere kontuan hartuta azkenengoa onetsi zenetik igarotako denbora.	Ez da onesten

		14. artikuluaren laugarren paragrafoak berriz ere jotzen du ingurumen gaietako informaziorako sarbide eskubideei buruzko Zuzentaraura eta Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeko bere transposizio araudira, zehazki, informazioa ukatzeko arrazoiak zehazte aldera. Hain zuzen ere, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 13.3 artikuluak xedatzen du artikulu horren 1. eta 2. paragrafoetan aurreikusitako ingurumen-informazioa emateko betebeharraren salbuespenak aplikatu ahalko direla lege horren II Tituluaren II kapituluan aurreikusitako hedatzeko betebeharrei dagokienez. Komeni litzateke aurreproiektuaren 14. artikuluan antzeko aurreikuspen bat gehitzea, hau da, kasu horietan hedatzeko betebeharra baztertzen duena.	Administrazioak, aipatutako arrazoi horietako batengatik, informazioren bat ez hedatzea erabakitzen badu, hala badagokio, bidezkoa izango da interesa duen pertsonak hori eskatzea eta, orduan, eskaera hori ukatzean, beren-beregi aurreikusitako ukatzeko arrazoi horietakoren bat eman liteke. Jotzen da informazioa hornitzeko aurreikusitako salbuespenak aplikatu ahalko direla titulu honen II kapituluan aurreikusitako hedapen-betebeharrei dagokienez. Horretarako, zuzendaritzak gomendatutako erreferentzia gehitzen da 13.2 artikuluan.	Partzialki onesten da.

15. artikulua. Ingurumen parte-hartzea	EMAKUNDE	Prozesu parte-hartzailea emakumeen eta gizonen parte-hartze orekatua bermatuz burutu behar da, baita genero-ikuspegia eta kolektiboen eta egoeren aniztasuna kontuan hartuz ere. Zenbakizko orekaz harago, garrantzitsua da ingurumenean eragin dezaketen gaien inguruko erabakiak hartzeko eremu desberdinetan emakumeek eta gizonek dituzten parte hartzeko gaitasunarekin eta aukerarekin lotutako balizko desberdintasunak kontuan hartzen dituzten estrategiak garatzea ere bai. Halaber, gerora ebaluazioa eta segimendua egiteko asmoarekin, gomendatzen da zehazteko beharrezkoa dela parte-hartzearen inguruko datuak sexuaren arabera bereizita biltzea, baita egindako proposamen-tipologiaren arabera ere.	Egokitzat jotzen da alegazioa partzialki hartzea eta hauxe gehitzea 15.2 artikuluan: “Prozesu parte-hartzailea genero-ikuspegia aintzat hartuz burutu behar da”.	Partzialki onesten da.

LAUGARREN TITULUA. INGURUMENEAN ERAGITEN DUTEN JARDUEREN ANTOLAMENDUA **I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK**				
ARTIKULUA	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
19. artikulua. Baimendutako jarduerak hasteko epeak	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	19. artikuluan ezarritako baimen-araubideen menpeko jarduerak hasteko aurreikusitako luzapenei dagokienez, adierazi behar da epeen luzapena Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 32. artikuluan araututa dagoela. Horren arabera, ezin dira inola ere luzatu iraungitako epeak eta luzapen horrek ezingo du inoiz gainditu horien erdia (hori adierazten du 19.4 artikuluak).	Berez, ez da alegazioan aipatutakoak bezalako prozeduren legezko epeen luzapena. Izan ere, epe horiek *ex lege* ezarri dira baimendutako jarduerak abian jartzeko edo horien funtzionamendua hasteko; horrela, baimenaren klausulak edo txostenaren edukia indarrean mantentzen dira epe horretan zehar. Epea igarotakoan, baimena edo adierazpena iraungiko da. Arrazoizko epeak ezarri dira, nahiz eta eztabaidagarriak izan daitezkeen. Hala ere, aurreikuspen hori komuna da esku hartzeko teknika hauek arautzen dituen ingurumeneko legeria sektorialean.	Ez da onesten
22. artikulua. Ingurumen esku-hartzeko	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO	Ohiko ingurumen-eraginaren ebaluazioak baimen-araubide desberdinekin integratzeari dagokionez, neurri hori goraipatzekoa da herritarrek burutu beharreko izapideak sinplifikatzen dituelako. Hala ere, ez du behar bezala garatzen integrazio hori.	Testuaren artikuluetan bertan azaltzen da kasu bakoitzean nola egin behar den integrazioa. Ez dugu uste integrazio hori ez denik behar bezala garatu. Edonola ere, ohar horrek ez ditu justifikatzen baieztapen horiek eta, horregatik, iritzi subjektibotzat hartu behar da.	Ez da onesten

araubideen eta ingurumen-eraginaren ebaluazioaren konkurrentzia	ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Adierazten da "ingurumen-eraginaren adierazpena loteslea izango dela tokiko agintaritzarentzat"; hala ere, arauaren 2.e artikuluak ingurumen-eraginaren adierazpena definitzen du txosten lotesle bezala. Iradokitzen da aipatutako esaldia ezabatzeko errepikakorra delako.	Jotzen da argigarriagoa izango dela aurreproiektuaren 22. artikuluan ere jasotzea ingurumen-eraginaren adierazpenaren izaera loteslea.	Ez da onesten
23. artikulua. Administrazio Publikoen betebeharrak	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Proiektuaren justifikazio-memorian ez denez beren-beregi aipatzen, ez da ulertzen 23. artikuluan islatutako beharra, hau da, administrazio publikoei gogorarazteko titulu honetan araututako ingurumen eskuhartzeko prozeduretan jardun dezaten, araudi-testuaren beste atal batzuetan edota beste lege batzuetan eta araudi aplikagarrietan islatutako kontuekin lotutako betebeharrak.	Ezerk ez du eragozten, beste ingurumen-arau askok egiten duten bezala, sustatzaileei eta administrazio publikoei dagozkien betebeharrak gogorarazteak. 45 CE artikulutik eratorritako agindu bat da.	Ez da onesten
24. artikulua. Sustatzailearen betebeharrak	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Idazketak soilik aurreikusten du sustatzaileek betebeharra dutela I Eranskinaren A eta B ataletako jardueren eta instalazioen transmisioaren berri emateko baina ez C eta D ataletakoen transmisioaren berri emateko.	Onesten da zehaztea, udalei dagokienez, A, B, C eta D ataletako jardueren transmisioaren berri emateko betebeharra.	Partzialki onesten da.
		Transmisio horien berri emateko eginkizuna betebehar bat da transmisioa egiten duenarentzat baina hautazkoa da titular berriarentzat. Hortik iradoki daiteke 102.2.d) artikuluan aurreikusitako arau-hausle mota soilik dagokiola transmisioa egiten duenari. Hala ere, administrazio-zuzenbide zehatzailearen eremuan mugitzen	Alegazio hau eta zehapen-araubideari buruzko beste batzuk kontuan hartuz, idazketa berria eman zaio aurreko 102 d) artikuluari; hain zuzen ere, gehitu da udalari transmisioa ez jakinaraztea zeha daitekeela, aurreproiektuan aurreikusitako komunikatzeko, jakinarazteko eta informatzeko betebeharrei legez	Partzialki onesten da.

		garelarik, argitasuna eta segurtasun juridikoa sustatze aldera, iradokitzen dugu modu zehatzean ezartzeko hori aurreproiektuaren 102. artikuluaren 2. paragrafoaren d) letran. Azkenengo aurreikuspen horren edukia lotu behar da aurreproiektuaren 27.2 artikuluan xedatutakoarekin; izan ere, horren arabera, titular berriak ez badio dagokion titulua eman dion edo aurretiazko jakinarazpena jaso duen administrazio eskudunari jakinarazten baimena, lizentzia edo komunikazioa behar duten jardueren edo instalazioen transmisioa, solidarioki erantzungo du transmisioa egin duenarekin dagozkion betebeharren eta erantzukizunen gainean, hain zuzen ere, jakinarazpena egin arte. Horrela, bere ondorio juridikoei dagokienez, 24.e) artikuluan jasotako titular berriak komunikazioa egitearen ahalmenezko izaera erlatibizatu egiten da. Bestalde, artikulu horren 1. paragrafoan, begi bistakoa den bezala, 24 e) artikuluan xedatutakoa aurkatzen da eta aipatutako transmisioa jakinaraztea nahitaezkoa dela adierazten da, dirudienez, I Eranskinaren C eta D ataletako jarduerak gehituz eta jakinarazpenaren hartzailea aldatuz. Kasu honetan, ez dira izango EAEko ingurumen-organoa eta udala, baizik eta gaikuntza-titulua ematen duen edo aurretiazko jakinarazpena jasotzen duen administrazioa. Desadostasun horiek zuzendu behar dira.	kontrako orokor berri bat artikulatzen zaielako. Bestalde, jotzen da 27. artikulua argia dela transmisioa jakinarazteko betebeharrari dagokionez. Hala ere, 24.e) artikuluan atal hau gehitu da: (…) Betebehar hori transmisioa egiten duenari dagokio, titular berriak transmisioa komunikatzen duen edo ez gorabehera.	
25. artikulua. Gaitasun teknikoa eta	LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA	Gomendatzen da 25. eta 63. artikuluetan erreferentzia sinplea egitea ingurumen-ebaluazioaren dokumentazioa egiteko “teknikari eskudunari”; hala, alde batera utziko dira aurretiaz instalatutako operadoreek zerbitzu horien prestaziorako sarbidea mugatzeko erabili	Beste interesdun batzuek egindako alegazioei emandako erantzunen ildo beretik, alegazioa partzialki hartzen da eta aurreproiektuaren testua aldatzen da, trebakuntza profesionalen inguruko arauekin bat etorriz, gaitasun tekniko nahikoa duten	Partzialki onesten da.

erantzukizuna		ahalko lituzketen araututako tituluei edo lanbideei egindako erreferentziak. Horrez gain, hori bat etorriko zen aurreproiektuak berak 47. eta 53. artikuluen idazketan erabilitako araudi-teknikarekin; zehazki, horiek soilik egiten diote erreferentzia teknikari eskudunari jardueraren hasierako komunikazioaren kasuetan. Era berean, bat etorriko litzateke ingurumen-ikuskapeneko langileei buruzko 89. artikuluak eskaintzen duen idazketarekin; horrek gaitasun teknikoa duten pertsonei edo erakundeei aitortzen dizkie, ahalmen publikoak gauzatu behar izanagatik edo bestelako egoerengatik, funtzionario publikoei soilik gordetzen ez zaizkien ikuskapeneko jarduketa materialetarako ahalmenak. Bestalde, ebaluazioaren dokumentazio teknikoaren egilea identifikatzeko beharra positiboki balioztatu behar da, beharrezkoa dena horien independentzia zehazteko, baita horiei legozkiekeen erantzukizunak zehazteko ere.	pertsonei soilik egiteko erreferentzia. Goi-mailako hezkuntzaren erreferentzia kentzen da.	
28. artikulua. Jarduera uztea eta instalazioa ixtea	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA.	28. artikuluaren 1. paragrafoan administrazio eskuduna aipatzen da eta 2. paragrafoan, aldiz, baimena ematen duen administrazioa. Beraz, ez da argitzen bi kasuetan administrazio bera ote den.	Arauaren asmoa da administrazio bera aipatzea, bi kasuetan baita baimena ematen duen administrazioa. Proposatutako hobekuntza onesten da eta, horrenbestez, testua aldatzen da.	Onesten da

LAUGARREN TITULUA. INGURUMENEAN ERAGITEN DUTEN JARDUEREN ANTOLAMENDUA II. KAPITULUA INGURUMEN-BAIMENAK III. KAPITULUA INGURUMEN-BAIMEN INTEGRATUAREN ETA BAKARRAREN XEDAPEN KOMUNAK				
ARTIKULUA	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
34. artikulua. Zuzenketa	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Artikuluaren azken paragrafoak ez du aintzat hartzen Espainiako Konstituzioaren 149.1.18.ª artikuluaren arabera egindako Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21.3.b) artikuluan 22.1.a) artikuluari dagokionez xedatutakoa. Zehazki, horrek Estatuari esleitzen dio, beste alderdi batzuen artean, administrazio prozedura erkidea arautzeko eskumena. Horrela, bi prozedurak ebazteko eta ebazpena jakinarazteko legezko gehieneko epea, hau da, sei hilabeteko epea eten ahalko da edozein interesduni errekerimendua egin behar zaionean akatsak zuzentzeko edo dokumentuak eta bestelako beharrezko judizio-elementuak aurkezteko. Hain zuzen ere, eten ahalko da errekerimenduaren jakinarazpena egiten denetik eta hartzaileak hori benetan bete arte edo, bestela, emandako epean zehar eten ahalko da. Hala ere, horrek ez du esan nahi eskaeraren aurkezpenaren datatzat har daitekeenik zuzenketa egiten den data. Horregatik, kontuan hartu beharko da eskaera administrazioaren edo izapidetzeko eskumena duen organismoaren erregistro elektronikoan sartu den data.	Aurkeztutako alegazioa onartzen da eta artikuluaren azkenengo esaldia kentzen da. Artikulua termino horietan idatzi zen Ingurumen-ebaluazioaren abenduaren 9ko 21/2013 Legean aurreikusitako eskemari jarraiki. Zehazki, horrek ahalbidetzen du ingurumen-organoak erantzuteko epeak edukitzea espediente osoa jasotzen denetik, hau da, zuzenketaren ostean, hala balegokio. Aukera hori estrapolatzearekin, osatu gabeko eskaeren aurkezpena saihestu nahi zen, horien azterketa denboran luza daitekeelako. Era berean, saihestu nahi zen pentsatzea sustatzaileak duela epe horien errua.	Onesten da

36. artikulua. Udal-txostena Ingurumen-baimen Integratuaren eta Bakarraren menpeko jardueretan	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Adierazi du zalantzak dituela honen inguruan: ordezkapen horrek bere izapide guztietan barne hartzen ote duen salbuespen hori udalak sailkatutako jardueraren lizentzia emateari dagokionez. Argi dago egokiagoa izango zatekeela oinarrizko legeak sailkatutako jardueren lizentzia behin betiko baztertu izana ingurumen-baimen integratuaren menpekoak ere diren jardueren kasuetan, betiere udalaren parte-hartzea bermatuko balitz hori emateko prozeduran. Izan ere, hori guztiz estaltzen da Kutsaduraren prebentzio eta kontrol bateraturako Legearen testu bateginaren 15. artikuluan aurreikusitako hirigintza-txostenarekin eta 18. artikuluan aurreikusitako txosten honekin: "aztertutako instalazioa bere eskumenekoak diren alderdi horietara guztietara egokitzeari buruzko txostena". Ematen du hori dela lege-aurreproiektuaren asmoa sailkatutako jarduera-lizentziaren prozeduraren izapide guztiak aipatzerakoan, nahiz eta ez duen hori modu eztabaidaezinean egiten. Horregatik, zalantza berriak argitze aldera eta etorkizunean sor daitezkeen bestelako zalantzak azaltze aldera, uste dugu hau aukera ona dela behin betiko argitzeko kontu hori. Zentzu horretan, iradokitzen dugu 36. artikuluaren 1. paragrafoan gehitzeko erreferentzia bat udalak lizentzia ematearen izapideari, hori baztertzeko. Zehazki, honela jasoko da: "*1. Ingurumen baimen integratuaren edo ingurumen baimen bakarraren prozedurak ordezkatu egingo du jarduera sailkatuaren lizentziaren prozedura izapide guztietan, hala badagokio, udal-*	Oharraren parte handi bat azalpenekoa besterik ez da. Hain zuzen ere, ingurumen-baimen integratuaren edo bakarraren menpeko jardueretan, aurreproiektuak jo du ez dela beharrezkoa sailkatutako jardueraren udal-lizentzia. Hala ere, udalak esku hartu dezake baimen horiek emateko prozeduran, zehazki, bertan aurreikusten diren nahitaezko txostenen bitartez. Erabaki da instalazio horiei sailkatutako jarduera-lizentziarik ez eskatzea, ingurumen-alderdiei dagokienez, nahikoa delako ingurumen-baimen integratuarekin edo bakarrarekin. Mantendu izan balitz, udalen "egintza mekaniko "bat bikoiztuko zatekeen, beharrezko egintza batera. Aukera hori bat dator Tokiko Araubidearen Oinarrien Legearen azkenengo aldaketekin (84 bis 3 artikulua ikusi); horrek, beharrezkoak ez diren izapideak saiheste aldera, hauxe adierazten du: tokiko erakunde baten eta beste administrazio baten artean elkarturiko lizentziak edo baimenak egotekotan, tokiko erakundeak beren-beregi arrazoitu beharko du baimenaren edo lizentziaren beharraren justifikazioan babestu nahi den interes orokor zehatza eta, horrekin batera, arrazoitu behar du dagoeneko existitzen den beste baimen batek ez duela hori babesten. Aurreproiektuak erabaki du lizentzia hori ez ematea; hala ere, horrek ez du inola ere esan nahi udalak baimena emateko prozeduratik baztertuta geratzen direnik. Izan ere, baimena eman aurretik, espedientera bi udal-txosten gehitu beharra dago.	Ez da onesten

		agintaritzaren behin betiko ebazpena barne." Nolanahi ere, uste dugu, udalei ingurumen-baimen integratuaren edo bakarraren menpeko jardueren kasuan sailkatutako jardueren lizentzia behin betiko ebazteko eskumena kentzeak ez lukeela tokiko autonomia urratuko. Lehenik eta behin, ez luke hori urratuko udalak lizentzia ukatzea ebazteko aukera izaten jarraituko duelako, baldin eta bere irizpena ingurumenekoak ez diren eta bere eskumenekoak diren bestelako arrazoietan oinarritzen bada, adibidez, hirigintza-arrazoietan. Bigarrenik, hori uste dugu, eremu honetan tokiko boterearen murrizketa soilik gertatuko litzatekeelako I.A eta I.B eranskinetan aurreikusitako jarduera eta instalazio desberdinetarako; hain zuzen ere, jarduera eta instalazio horiek ez dute nukleorik garrantzitsuena osatzen, ezta ugariena ere, zeinen gainean udalak bere iritzia adierazi beharko duen.	Lehenik eta behin, informazio publikoko izapidearen aurretik, hirigintza-bateragarritasuneko txostena igortzen da, eskatzaileak erantsi behar duena baimen-eskaerarekin batera eta, bigarrenik, udalak berak aurkeztu beharko du hori informazio publikoko entzunaldian. Gure aburuz, artikuluaren hitzez hitzeko zentzua argia da eta ez dago zalantza zentzudunik jarduera-lizentziaren prozeduraren izapide guztiak, ingurumen-organoaren behin betiko ebazpena igortzea barne, exijitzeko modukoak izateari utziko diotela lege-aurreproiektua indarrean sartzean.	

LAUGARREN TITULUA. INGURUMENEAN ERAGITEN DUTEN JARDUEREN ANTOLAMENDUA. IV. KAPITULUA. SAILKATUTAKO JARDUERARAKO LIZENTZIA				
ARTIKULUA	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
51. artikulua. Neurri zuzentzaileen ezarpenaren txostena.	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Lege-aurreproiektu honen Lehenengo Azken Xedapenak ezartzen duen Lurralde Historikoen legearen berariazko aldaketaren ondorioz, neurri zuzentzaileak ezartzeko txostena tokiko administrazioen eskumena izatera pasatzen da kasu guztietan eta araudi-proiektuaren 51.1 artikuluarekin bat etorriz: "*10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriek neurri zuzentzaileak ezartzeko txostena eskatu beharko diote dagokion Foru Aldundiko ingurumen eskumenak dituen organoari. Txosten hori nahitaezkoa eta loteslea izango da; oztopatzailea bada, jarduera inguruneakin bateragarria izateko eska daitezkeen ingurumeneko neurri zuzentzaileak jasoko ditu.*" Artikuluaren idazketari dagokionez, berrikusteko iradokitzen da, bere idazketa ez delako argi geratzen. Izan ere, ez da alderdi hori justifikatzen proiektuaren justifikazio-memorian. Kontuan hartuta indarreko 3/98 Legeak ezartzen duela neurri zuzentzaileen txostena "*loteslea izango dela bai udal-agintaritzarentzat jarduera-lizentzia ematearen kontrakoa denean eta bai neurri zuzentzaileak ezartzeko premia dagoela erabakitzen duenean*", ez da argi geratzen 51.1 artikuluak txostenaren izaera loteslea ezartzen duen, oztopo bat izatekotan edo kasu guztietan. Bestalde, Espainiako Errege	Txostena kasu guztietan izan behar da loteslea, bai eragozpenak jartzen baditu, bai aldekoa bada eta neurri zuzentzaileak ezartzen baditu. Nahiz eta "obstativo "terminoa Espainiako Errege Akademian jasota dagoen ("obstar "aditzetik dator; horri gehitzen zaio "-ivo, -iva "atzizkia, "gaitasuna edo zerbaitetarako balio duela " adierazten duena. Formula hori adjektiboak eta substantiboak osatzeko erabiltzen da, aditzak sortzeko deribazio bidez). Hortaz, hori ezabatzea komeni da, okerrak eragin ahalko lituzkeelako.	Partzialki onesten da.

		Akademiaren hiztegia kontsultatu da eta, bertan, ez da "obstativo" terminoa agertzen.		
52. artikulua. Jarduera-lizentziaren emakida.	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Lege-aurreproiektuaren 52. artikuluak ezartzen du udalak lizentzia ematea edo ukatzea ebatzi beharko duela eta hori jakinaraziko duela 4 hilabeteko gehieneko epean, zehazki, eskaera dokumentazio osoarekin aurkezten denetik. Aztertu behar da (...) urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoa. Hortaz, kontuan hartuta prozeduraren eremuan gaudela (Estatuko legegilearen eskumen esklusiboa), *dies a quo* deritzona dokumentazioa igortzea aurreikusten denean hastea ezartzea ez dator bat zuzenbidearekin.	Bidezkoa da onestea, *dies a quo* dokumentazioa osorik dagoenean ez egiteko eskakizunari dagokionez. Erreferentzia hori ezabatzen da 52.1 ataletik.	Onesten da
53. artikulua. Sailkatutako jardueraren hasieraren edo irekieraren komunikazioa	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Jarduera-lizentzia emateari buruzko 52.3 artikuluan, administrazio-isiltasunaren izaera negatiboa ezartzen da sailkatutako jarduera-lizentzien eskaeraren kasurako, hain zuzen ere, oro har indarreko 3/1998 Legean xedatutakoaren aurka: *("Autonomia Erkidegoko ingurugiro-organoak edo eskudun foru-organoak kontrako txostena jakinarazi eta delako udalak gauzatu gabe dagoen kasuan izan ezik").* Aldaketa hori zuzenbidera egokituta dago, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Horrek eskatzen du isiltasunaren izaera negatiboa ezartzeko lege-	Hain zuzen ere, isiltasun negatiboa ezartzen da sailkatutako jarduerako udal-lizentziaren menpeko jardueretarako, ingurumenean eta herritarren osasunean izan dezaketen eraginagatik. Are gehiago, kontuan hartzen bada, zerbitzuen zuzentarauaren transposizioaren ostean, ia-ia kaltegarriak ez diren edo eragin txikiagoko jarduera asko aurretiazko komunikazioaren menpekoak izatera pasatu zirela. Beraz, lizentzia behar dute eragin handiagoa dutenek. Horrek baztertzen du isiltasun positiboaren bitartez emateko aukera. Azalpen hau ez da alegazio bat. Dekretua, indarrean sartu zenetik igarotako urteak gorabehera,	Ez da onesten

		mailako arau batean. Azkenik, sailkatutako jardueren aplikazio-eremuari dagokionez, iradokitzen da aztertzeko bidezkoa ote den beren-beregi indargabetzea Bizilekutarako hiri lurrean ezartzekoak diren jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei aplikatzeko arau tekniko orokorrak onartzen dituen 171/1985 Dekretua.	gaur egun erabiltzen jarraitzen da babes-tresna bezala neurri zuzentzaileen ezarpenean.	

BOSGARREN TITULUA. INGURUMEN-EBALUAZIOA				
I KAPITULUA. INGURUMEN-EBALUAZIO ESTRATEGIKOAREN ETA INGURUMEN-ERAGINAREN EBALUAZIOAREN XEDAPEN KOMUNAK				
ARTIKULUA	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
59. artikulua. Ingurumen-ebaluazioa	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	59. artikuluan ingurumen-ebaluazioaren helburuak jasotzen dira; bertan, 3. paragrafo bat gehitzen da, hauxe xedatzen duena: "Aldaketei aplikatu beharreko erregimena gorabehera, ez dira ingurumen ebaluazioren menpe jarriko indarrean dagoen administrazio gaikuntzaren bat duten proiektuak". Kontu hori araubide iragankor baten berezko kontua dela ematen du; beraz, nahiz eta ez den zalantzan jartzen, bere edukiak, koherentziaz, iradokitzen du beste artikulu edo xedapen bat jasotzeko.	Zehazki, 59. artikuluaren 3. atalean jasotako manua beharrezkoa da atzera eraginezko ondorioak ekiditeko ingurumen-ebaluazioa nahitaezkoa ez zenean baimena edo lizentzia jaso zuten instalazioei ingurumen-ebaluazioa eskatzerakoan. Era berean, ematen du ez dela beharrezkoa ingurumen-ebaluazioa egin zitzaion instalazio bati berriz ere egitea ebaluazioa soilik baimen berri bat izapidetu behar izateagatik; adibidez, hori da ingurumen-baimen integratua lortu behar duten instalazioen kasua, arauaren aplikazio-eremua zabaldu delako, nahiz eta aldaketarik egin ez den. Ez da kontu iragankor bat; izan ere, edozein unetan gerta daiteke, baldin eta beste lege-testu baten aldaketagatik baimen-prozedura baten aplikazio-eremua zabaltzen bada.	Ez da onesten
60. artikulua. Ingurumen-ebaluazioko prozedurak	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN	Plan, programa eta proiektu horiek ingurumenean ondorio nabarmenak izateko probabilitate-mailaren egokitzapena argi ikusten da a) eta b) letretan, baina ez da c) eta d) letretan garatzen.	Oharra hartuta, lege-proiektuaren testu berrian, erabaki da antzeko idazketa ematea planek, programek eta proiektuek ingurumenean ondorio nabarmenak izateko probabilitate-mailari dagokionez.	Onesten da
		Ohiko prozeduraren menpeko plan, programa eta proiektuen ebaluazioaren irismena ezartzeari buruzko e) eta f) letrei dagokienez, proiektuaren justifikazio-memoriak eta arauak berak ez dute argi uzten	Irismena prozedura autonomotzat ezartzeari dagokionez, adierazi behar da artikulua berriz idatzi egin dela eta aukera hori	Onesten da

	ZUZENDARITZA	bereizitako prozedurak diren, ingurumen-ebaluazio estrategikoko eta ingurumen-eraginaren ebaluazioko prozeduren aurretiazko izapideak edo jarduketak izan beharrean, hain zuzen ere, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 17.1.b) eta 34. artikuluetan jasotzen den bezala, hurrenez hurren. Bestalde, deigarria da prozedura independente bezala zerrendatutako bi prozedura horiek gero artikulu bakarrean garatzea, zehazki, 67. artikuluan.	deuseztatu dela.	
62. artikulua. Planen deuseztasuna eta ebaluatu gabeko proiektuak	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Hala eta guztiz ere, artikuluaren tituluari eta edukiari dagokienez, 62. artikuluaren edukiaren arabera aplikagarria izango bada, plan eta proiektuentzat eta programentzat ere bai, iradokitzen da titulua aldatzeko izendapenaren eta artikuluaren edukiaren arteko koherentzia mantentze aldera.	Onesten da eta manuaren titulua aldatzen da,bere edukiarekin bat etorriz, “programak ”terminoa gehitzeko.	Onesten da
63. artikulua. Gaitasun teknikoa eta erantzukizuna	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN	63. artikuluak Estatuko Ingurumen-ebaluazioaren Legearen 16. artikuluaren (oinarrizkoa) edukia erreproduzituz ingurumen-ebaluazioa egiteko dokumentu tekniko egokien egileen gaitasun teknikoari eta erantzukizunari egiten die erreferentzia eta ez du aipatzen beharrezkoa dela dokumentu horietan agertzea amaiera-data eta egilearen sinadura.	Oharra hartzen da eta artikulua adierazitako zentzuan aldatzen da.	Onesten da

	ZUZENDARITZA			
	LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA	Gomendatzen da 25. eta 63. artikuluetan erreferentzia sinplea egitea ingurumen-ebaluazioaren dokumentazioa egiteko "teknikari eskudunari"; hala, alde batera utziko dira aurretiaz instalatutako operadoreek zerbitzu horien prestaziorako sarbidea mugatzeko erabili ahalko lituzketen araututako tituluei edo lanbideei egindako erreferentziak. Horrez gain, hori bat etorriko zen aurreproiektuak berak 47. eta 53. artikuluen idazketan erabilitako araudi-teknikarekin; zehazki, horiek soilik egiten diote erreferentzia teknikari eskudunari jardueraren hasierako komunikazioaren kasuetan. Era berean, bat etorriko litzateke horren 89. artikuluaren idazketarekin. Artikulu hori ingurumen-ikuskapeneko langileei buruzkoa da eta gaitasun teknikoa duten pertsonei edo erakundeei aitortzen dizkie ahalmen publikoak gauzatzeko eskatzeagatik edo bestelako egoerengatik funtzionario publikoei soilik gordetzen ez zaizkien ikuskapeneko jarduketa materialetarako ahalmenak. Bestalde, ebaluazioaren dokumentazio teknikoaren egilea identifikatzeko beharra positiboki balioztatu behar da, beharrezkoa dena horien independentzia zehazteko, baita horiei legozkiekeen erantzukizunak zehazteko ere.	Beste interesdun batzuek egindako alegazioei emandako erantzunen ildo beretik, alegazioa partzialki hartzen da eta aurreproiektuaren testua aldatzen da, trebakuntza profesionalen inguruko arauekin bat etorriz, gaitasun tekniko nahikoa duten pertsonei soilik egiteko erreferentzia. Goi-mailako hezkuntzaren erreferentzia kentzen da.	Partzialki onesten da.

64. artikulua. Konfidentzialtasuna	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Ingurumen-ebaluazioaren abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 15. artikuluaren edukia erreproduzitzen da. Bestalde, lege-aurreproiektuaren 26. artikuluan ezarritakoa errepikatzen du, ingurumen esku-hartzeko prozedura guztientzat. Ingurumen-ebaluazioa ingurumen esku-hartzeko prozedura bat denez, artikulu horiek berrikusteko iradokitzen da, araudi-testuan beharrezkoak ez diren errepikapenak saihesteko.	Lege-proiektuaren artikuluek laugarren tituluan jasotzen dute ingurumenean eragiten duten jardueren antolamendua eta, zehazki, 18. artikuluan jasotzen dituzte ingurumen esku-hartzeko araubideak, zeinen artean ez dagoen ingurumen-ebaluazioa. Ingurumen-ebaluazioa ingurumena babesteko tresna bat da, aurretik aipatutako ingurumen esku-hartzeko araubideetatik bereizten dena; zehazki, lege-proiektuaren bosgarren tituluan dago araututa. Hori guztia hala da nahiz eta beharrezkotzat jo den sustatzaileek emandako informazioen konfidentzialtasunari buruzko arauketa garatzea, antzeko moduan bi kasuetan.	Ez da onesten
65. artikulua. Ingurumen-ebaluaziotik baztertutako planak eta programak.	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Nabarmentzekoa da automatikoki baztertzen dituela legearen aplikaziotik xede bakar bezala babes zibila duten proiektuak eta hori ez da beren-beregi islatzen Estatuko oinarrizko legerian. Gauza bera gertatzen da 65. artikulutik plan eta programa hauek baztertzen direnean: "*Plan, programa eta proiektu edo horien aldaketetatik erator daitezkeen ekintzen tamaina eskasa dela eta, ingurumenean sor ditzaketen efektuak ez direnean nabarmenak argi eta garbi*". (…) Bi artikuluek, antzekoak izan arren, ez dute gauza bera esan nahi. Lehenik eta behin, lege-aurreproiektuan kontraesan bat dago, zehazki, artikuluaren tituluan eta edukian. Tituluan soilik aipatzen dira	Zuzendutako akats terminologikoak alde batera utziz, ohar honek jasotako beste alegazio batzuen eduki berbera dauka eta horiei termino hauetan erantzun zaie. Atal honen hasieran azaldutako aurretiazko gogoetetan argudiatu den bezala, ingurumen-ebaluazioa ingurumenean ondorio nabarmenak izan ditzaketen planei, programei eta proiektuei aplikatzen zaie, bai ziurra denean ondorio horiek eragingo direla (probabilitate-maila altua), bai ziurgabetasuna dagoenean (probabilitate-maila zehaztugabea). Aitzitik, ez da aplikatu beharko ziurra denean ondorio horiek ez direla eragingo (modu argian).	Ez da onesten

		ingurumen-ebaluaziotik baztertutako planak eta programak eta artikuluan, aldiz, proiektuez hitz egiten da. Horrez gain, artikuluak adierazten du ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin behar dela eta hori soilik da bidezkoa planen eta programen kasuan, hau da, ez zaie bestelako ingurumen-ebaluazioko prozedurak egin behar dituzten proiektuei egiten. Batetik, "*prozedura aplikatzeak defentsa nazionaleko edo babes zibileko helburuen gainean ondorio negatiboak eragin ahal izatearen* " baldintza ezartzen du, hain zuzen ere, ingurumen-ebaluazio estrategikoaren aplikazio-eremutik baztertzeko planak, programak eta proiektuak, horien helburu bakarra denean defentsa nazionala edo babes zibila larrialdi-kasuetan. Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen-organoa gaitzen du hauxe egiteko: *irizpideak ezarri ahal izango ditu zehazteko plan edo programa batek edo plan edo programa baten aldaketa batek izan ditzakeen efektuak zer egoeratan har daitezkeen ez direla izango nabarmenak ingurumenean.* Estatuko legegileak, aldiz, soilik xedatzen du proiektuen gaineko bazterketa hori bakarrik egin ahalko dela salbuespenezko kasuetan eta arrazoitutako akordioaren bidez, zehazki, lege-aurreproiektuaren 66. artikuluan jasotzen den bezala. Aurretik esan dugun bezala, ingurumena babesteko oinarrizko legeria estatuaren eskumen esklusiboa denez, konstituzio-doktrinak soilik onartzen du autonomia-ahalmena "babeseko neurri gehigarriak ezartzeko". Babeseko neurri gehigarri hauei dagokienez, Konstituzio Auzitegiak berriz ere nabarmendu du autonomia-erkidegoek soilik handitu	Kontzeptu horien zehaztapena jasota dago horiek II. Eranskineko proiektuen zerrenda bikoitzarekin lotzean (zuzenean edo zeharka). Plan, programa edo proiektu zehatz bat ingurumen-ebaluazioaren aplikazio-eremuaren barne ez dagoela jotzeko funtsezko irizpidea hauxe da: modu ziurrean, hau da, zalantzarik gabe, ez dagoela inolako aukerarik ingurumenean ondorio nabarmenak eragiteko. Irizpide horren izaera dela-eta, ez da koherentea prozedura bat ezartzea kontu hori zehazteko; izan ere, prozedura substantiboa izapidetu behar duenaren organo desberdinen esku-hartzea dakarren beste izapideren bat beharrezkoa izango balitz, afektazio nabarmenik ezaren ustea ez litzateke ziurra izango. Aitzitik, zalantzaren bat badago planak, programak edo proiektuak ingurumenean ondorio nabarmenak izateko aukeraren inguruan, gai horren inguruko oinarrizko legeriak ezarri du ebaluazio sinplifikatuko prozedura jarraitu behar dela, lege-proiektuan jasotzen den bezala. Hori guztia gorabehera, sakontzeko asmorik gabe, gerta daiteke kasu zehatzen batean, hau da, ingurumen-organoak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan izandako esperientzian zehar, ingurumenean ondorio nabarmenak izateko probabilitatea ondo ezaguna izatea eta oso murritza ere bai. Bestalde, lege-proiektuak erabaki du gutxiengora murriztea prozedura-xehetasunak, are gehiago ingurumen-ebaluazioa hirigintza-tresnen eremura soilik mugatuta ez dagoelako.	

		dezaketela oinarrizko arauaren babes-maila; hau da, ezin dute inola ere maila hori murriztu (Konstituzio Auzitegiaren 156/95 Epaia, zehapenetan, Konstituzio Auzitegiaren 89/00 Epaia Ingurumen-eraginaren Ebaluazioaren formuletan, Konstituzio Auzitegiaren 109/2017 Epaia Ingurumen-ebaluazio Estrategikoaren salbuespenengatik edo Konstituzio Auzitegiaren 196/1996 16/1997 Epaiak). Horrez gain, ezingo dute maila hori ezeztatu (Konstituzio Auzitegiaren 15/98 Epaia) edo oinarrizkoak debekatzen duen komertzializazio bat baimenduz (zehazki, Konstituzio Auzitegiaren 166/2002 Epaia). Aurretik azaldutako guztiagatik, eskatzen da 65. artikulua berrikusteko eta, hala badagokio, hori aldatzeko.	Bestalde, eta gai honetako oinarrizko legerian ezarritakoaren arabera, zenbait proiektu salbuesteko aukera jaso da; hain zuzen ere, ingurumen-ebaluazioaren aplikazio-eremuan egon arren, hautazko prozedura egin ahal zaien proiektuak salbuesteko aukera jaso da (bestelako ebaluazio-formak). Horrenbestez, lege-proiektuan jasotzen den araudi-testuak argi bereizten ditu legeak berak “aplikazio-eremutik baztertutakotzat ”jotzen dituen kasuak beste kasu batzuengandik, hau da, aplikazio-eremu horren barruan egon arren, ebaluazio-prozeduratik “bazter daitezkeen ” kasuengandik. Azken bazterketa hori kasu bakoitzean adostu behar da eta proiektuen salbuespenezko kasuetarako soilik erreserbatzen da, hain zuzen ere, hasiera batean legearen aplikazio-eremuaren barne sartutakoak eta beste ebaluazio-formaren bat egin ahal zaizkienak. Laburbilduz, jotzen da lege-aurreproiektuak ez duela 21/2013 Legearen aplikazio-eremua mugatzen, baizik eta hori zehazten eta argitzen. Azkenik, “planak eta programak”, “proiektuak ”eta “ingurumen-ebaluazio estrategikoa ”terminoen erabileran antzemandako akatsak zuzendu egin dira.	
66. artikulua. Ingurumen-ebaluaziotik salbuetsi	LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA	Hala eta guztiz ere, aurreproiektuaren 66.1 artikuluak hauxe ezartzen du: Salbuespenezko kasuetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu Kontseiluak salbuetsi egin ahal izango du, akordio arrazoitu bidez, lege honetan araututako ingurumen inpaktua ebaluatzeko	Informazio publikoko fasean artikulu honi buruz jasotako zenbait alegazioren eduki bera dauka; beraz, zentzu berean erantzun behar zaio: ezetsi behar da. Nolanahi ere, egoera batzuetan, administrazio publikoek balizko	Ez da onesten

daitezkeen proiektuak		prozedura aplikatzeko II. eranskinean jasotako proiekturen bat. Horrek esan nahi du administrazio publikoak hautazko erabakia hartu beharko duela eta, horrekin, gerta liteke operadore ekonomikoak desberdin tratatzea. Ondorio hori saiheste edo arintze aldera, gomendatzen da ebaluazioa egiteko betebeharretik salbuetsi daitezkeen proiektuen kategoriak (ez guztiak) zehazteko. Horrez gain, edonola ere, motibazioa interes orokorreko arrazoietan oinarritu behar da eta ezin da ingurumenaren babesa inoiz zalantzan jarri.	konponbide desberdinen artean aukera dezakete (hautaketak egiteko aukera) eta egitate hori legez onargarria da. Hala, jarduketa publikoan nahitaez saihestu behar dena arbitraltasuna da. Zentzu honetan,alegatutako operadore ekonomikoen arteko ustezko tratu-desberdintasun horretan, ez litzateke arbitraltasunik egongo. Izan ere, hori kasu zehatz bakoitzaren analisi espezifikoan oinarrituta egongo litzateke eta erabaki desberdinak hartzea eragingo luke, baina guztiak zuzenbidearen araberakoak.	
69. artikulua. Desadostasunen ebazpena	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Desadostasunak ebazteari buruzko 69. artikuluari dagokionez, lege-aurreproiektuaren 2. artikuluak ezartzen du, bai ingurumen-adierazpen estrategikoa, bai ingurumen-eraginaren adierazpena, nahitaezko txosten lotesleak direla. Beraz, deigarria da ingurumen-organoaren eta organo substantiboaren arteko desadostasun-kasuan, hain zuzen ere, ingurumen-eraginaren adierazpenaren edo txostenaren edukiaren inguruan, Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak edo, hala badagokio, Foru Aldundiak ematea ebazpena. Iradokitzen da aztertzeko bidezkoa den manua mantentzea, kontuan hartuta adierazpenak eta txostenak lotesleak direla.	Oharra hartzen da eta, horrenbestez, lege-aurreproiektuak bateraezintzat hartuko du ingurumen-erabakiaren izaera loteslea desadostasunen izapidetzearekin. Manua kentzea erabakitzen da.	Onesten da
71. artikulua. Ingurumen-ebaluazioko prozeduran interesa duten	EMAKUNDE	Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 16. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, beharrezkoa izango da bertan sexuaren aldagaia gehitzea; horrela, gerora, sexuaren arabera bereizitako datuak bildu eta ustiatu ahalko dira, hain zuzen ere, emakumeek eta gizonezkoek prozedura horietan parte	Beharrezkotzat jo da lege-proiektuak zehaztea interesdun guztiak ez direla erregistratu beharko, baizik eta soilik Ingurumen gaietan informazioa eskuratu, publikoki parte hartu eta auzitegietara joateko eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 23.1 artikuluan adierazitako betekizunak betetzen	Ez da onesten

pertsonen erregistroa		hartzeari buruzkoak.	dituzten irabazteko asmorik gabeko pertsona juridikoak. Pertsona fisikoak ez direnez, alegazioa ezin da aintzat hartu.	
Artikulu espezifikorik gabe	LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA	Administrazio publikoa ingurumen-ebaluazioaren menpeko plan, programa eta proiektu desberdinen sustatzailea izan daiteke. Ebaluatu beharreko dokumentazioaren artean dago ingurumen-azterlana (estrategikoa edo ohikoa); bertan, plan edo proiektu bat aplikatzearen ondorioz sortzen diren edo sor daitezkeen balizko ondorio nabarmenak aztertu behar dira. Administrazio publiko eskudunak azterlan horren idazketa kontratatzen badu ukitutako merkatuko operadore ekonomikoekin, lehiakortasun askea sustatu beharko da, Sektore Publikoko Kontratuen Legearekin bat etorriz eta, ahal izatekotan, prozedura irekia baliatuz. Gogoeta berdin-berdina egin behar da ingurumen-administrazio eskudunak merkatuko operadore ekonomikoekin kontratatzen duenean ingurumen-eraginaren txostenaren idazketa.	Esposizio-alegazioa. Zalantzarik gabe, administrazio publikoek bere jarduketa antolatu beharko dute Sektore Publikoko Kontratuen Legean xedatutakoaren arabera, zehazki, horren arabera eska daitezkeen kontratazio-prozedurak erabiliz.	Esposizio-alegazioa.

BOSGARREN TITULUA. INGURUMEN-EBALUAZIOA II. KAPITULUA PLANEN ETA PROGRAMEN INGURUMEN-EBALUAZIO ESTRATEGIKOA				
ARTIKULUA	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
72. artikulua. Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren eremua	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	72. artikuluak ingurumen-ebaluazio estrategikoaren aplikazio-eremua zehazten du eta ezartzen du, edonola ere, plan edo programa bat idazteko eskaera lege-xedapen edo araudi-xedapen batek egin behar duela edo, bestela, Gobernu Kontseiluaren akordioaren bidez eska daitekeela. Zentzu horretan, gogorarazi behar da hirigintza-planeamendua lege- edo araudi-xedapenek babesten dutela, eskatu beharrean, eta inola ere Gobernu Kontseiluaren bidez. Hortaz, bidezkoa da artikulu horren idazketa berrikustea. Paragrafo honetan, Ingurumen-ebaluazioaren abenduaren 9ko 21/2013 Oinarrizko Legearen 10. artikulua aipatu beharra dago. Horrek hauxe ezartzen du: “Ingurumen-adierazpen estrategikoa, ingurumen-txosten estrategikoa, ingurumen-inpaktuaren adierazpena edo ingurumen-inpaktuaren txostena legez ezarritako epeetan ez egitea ez da inolaz ere joko aldeko ingurumen-ebaluazioaren baliokidetzat”.	21/2013 Legeak termino berberak jasotzen ditu ingurumen-ebaluazio estrategikoaren aplikazio-eremua ezartzeko. Lege-aurreproiektua idazteko, erabaki da interpretatzea “eskatuta ” terminoak ez duela esan nahi lege- edo araudi-xedapen batek berez behartzen duenik plan edo programa bat egitera. Izan ere, horrek esan nahi du, plan edo programa bat egiteko erabakia hartutakoan, eskakizun bat egongo dela plana edo programa benetan burutzeko eta onesteko lege- edo araudi-xedapen bati jarraiki. Ez da ulertzen, testuinguru honetan, zuzendaritzak 21/2013 Legearen 10. artikuluari egindako erreferentzia.	Ez da onesten

73. artikulua. Ingurumen-adierazpen Estrategikoaren izaera eta edukia	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Artikulu honen hirugarren paragrafoa ingurumen-adierazpen estrategikoaren indarraldiari buruzkoa da eta indarraldia luzatzeko eskatzeko aukera aurreikusten du: “araudiak ezartzen dituen terminoetan”. Araudi-garapenera igortzearen kontua 74.3 artikuluan ere aurreikusten da, zehazki, ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuko prozeduretako ingurumen-txosten estrategikoaren indarraldia luzatzeko eskaerari dagokionez. Halaber, hori aurreikusten da 75. eta 76. artikuluetan, ingurumen-eraginaren adierazpenen eta txostenen indarraldia luzatzeko eskaerei dagokienez. Zentzu horretan, gogorarazi behar da epeen luzapena oinarrizko izaerarekin araututa dagoela Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 32. artikuluan: “1. Administrazioak, ofizioz edo interesdunek eskaturik, luza dezake ezarritako epea, manuren batek kontrakoa ez badio, komenigarritzat jotzen bada eta hirugarren batzuen eskubideei kalterik egiten ez bazaie. Epearen erdia izan daiteke luzapena, gehienez ere. Epea luzatzeko erabakia interesdunei jakinarazi behar zaie. (...) 3. Epea igaro baino lehen egin behar du interesdunak epea luzatzeko eskaera, eta epearen barruan hartu behar da hari buruzko erabakia ere. Inoiz ez da luzatuko amaituta dagoen epe bat. Epeak luzatzeari edo hori ukatzeari buruzko erabakien kontra ezin daiteke errekurtsorik jarri, hargatik eragotzi gabe prozedura amaitzen duen ebazpenaren kontra dagokiona jartzeko aukera.”	Manu honetan arautzen dira jadanik emandako ebazpenen iraungitzeko epeak eta ez prozedurak izapidetzeko epeak; beraz, ezin da Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 74. artikulura jo. Bestalde, 21/2013 Legearen eskumen-tituluarekin bat etorriz, 27. artikuluan ezarritako epeak ez dira oinarrizkoak. Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 32. artikuluan xedatutakoari dagokionez, adierazi behar da hori aplikagarria dela prozedura bat ebazteko ezarritako epeen luzapenarentzat. Kontuan hartuta ingurumen-adierazpen estrategikoa prozedurari amaiera ematen dion ebazpen bat dela, ezin da inola ere berdindu horren indarraldia izapidetzeko epeekin. Edonola ere, hausnarketa garrantzitsua egin da honen inguruan: oinarrizko legerian jasotako testuen edukietako zein erreproduzitu behar da nahitaez lege honen testuan. Aurretik adierazi den bezala, zentzu horretan, funtsezko hiru irizpide erabili dira: - Ingurumena babesteko arau gehigarriak txertatzea. - Interpretazio okerrak eragin ditzaketen 21/2013 Legearen zenbait alderdi argitzea. - Autonomia-erkidegoko araua egunean ez egotea saihestea, baldin eta etorkizunean 21/2013 legea aldatzen bada. Hausnarketa horren ondorioz, zenbait artikulu gehitu dira:	Ez da onesten

		Era berean, Ingurumen-ebaluazioaren abenduaren 9ko 21/2013 Legearen Zortzigarren Azken Xedapenaren arabera, oinarrizko izaera dute, bertan ezarritako epeei dagokienez izan ezik, lege beraren 27., 31., 43. eta 47. artikuluek, zehazki, ingurumen-adierazpen estrategikoari, ingurumen-txosten estrategikoari eta ingurumen-eraginaren adierazpen eta txostenei dagokienez. Aurreko guztiagatik, gomendatzen da V Titulua zehatz-mehatz berrikusteko, besteak beste, Ingurumen-ebaluazioaren abenduaren 9ko 21/2013 Legean oinarrizko izaerarekin ezarritako erreproduzitu behar den kasuak xehatzeko eta ezartzeko ingurumen-ebaluazioarekin lotutako zein gai garatu behar den benetan araudian.	72. artikulu berria. Informazio publikoa eta kontsultak. Proiektuen ingurumen-ebaluazioari buruzko 75. eta 76. artikulu berriak.	

SEIGARREN TITULUA. INGURUMEN-HOBEKUNTZA SUSTATZEKO TRESNAK				
ARTIKULUA	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
77. artikulua. Ingurumen-akordioak	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Eskatzen da akordioen definizioa gehitzeko 2. artikuluan eta definizio hori idazteko proposamen bat aurkezten du.	Proposatutako definizioa onesten da eta administrazio publikoak gehitzen dira akordio baten bi aldeetan.	Onesten da
78. artikulua. Parte-hartzea sustatzea ingurumen-auditoretzen eta kudeaketako erkidego-sisteman (EMAS).	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA.	Aurreproiektuak ez du aurreikusten sistema honek (EMAS) sortutako kontrol-betebeharren betetzea justifikazio bat izan daitekeenik IV Tituluaren III Kapituluan aurreikusitako ingurumen-baimenen berezko kontrol-betebeharrak betetzearekiko. Hala ere, beste autonomia-erkidego batzuetako araudiek hori aurreikusten dute, adibidez, Aragoiko Ingurumen-babes eta Prebentzioko abenduaren 4ko 11/2014 Legeak. Gainera, ingurumen-baimen integratuaren eskaeraren edukian ez da aurreikusten, ezta ingurumen-baimen bakarraren eskaeraren edukian ere. Hala, aurreikuspen-gabezia hori ez dator bat aurreproiektuaren 3.2 artikuluan aurreikusitako administrazio kargen arintasun, prozedura sinplifikazio eta murrizketa printzipioekin.	Ez da beharrezkotzat jotzen lotura zorrotzagoa ezartzea baimenen kontrolaren eta EMAS sistemaren artean. Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sisteman ezarritako autokontrolak administrazioaren ikuskapena ordezteko eskatzea gehiegi da, baita lege-betebeharren edo gaikuntza-tituluetan jasotako betebeharren betetzearen justifikazio osoa izan dadin eskatzea ere. EMAS sistemak administrazio-izapideak sinplifikatzeko balio du, baina hori onura bezala erabiltzea haztatu behar da eta ez orokorrean erabili. Edonola ere, alegatzen den aukera jasotzen da lege-aurreproiektuaren artikuluetan [aurreproiektuaren 78.2.d) artikulua ikusi].	Ez da onesten

			Manu hori ez da guztiz zehatza eta zehaztugabetasun hori gauzatu egin da neurri zehatz desberdinetan, besteak beste, aurreproiektuaren 42.3 artikuluan aurreikusitakoan.	
	OGASUN ETA EKONOMIA SAILA. KONTRATAZIO PUBLIKOAREN AHOLKU-BATZORDEA	Kontuz ibili beharko da aipatutako Ingurumen-administrazioaren Legearen aurreproiektuaren 78. artikuluan adierazitako derrigortasunarekin; izan ere, Sektore Publikoko Kontratuen Legetik ondorioztatzen den bezala, EMAS aipatzea hautazkoa da eta kaudimen teknikoko betekizunak eskatu ahalko dira, hain zuzen, ingurumen-kudeaketako beste arau batzuekin bat etorriz. Halaber, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen baldintzen pean, ziurtagiriak eta baliokide diren bestelako neurketa-frogak aitortu ahalko dira. Ingurumen-kudeaketako bestelako sistema batzuetara zabaltzen da eta hori lehiakortasun askeko printzipioan oinarritzen da. Hau da, kontratazio-prozeduretan parte hartzeko aukera ezin dute mugatu lege honen edo beste baten arabera guztiz nahitaezkoak eta esklusiboak ez diren eskakizunek. Printzipio hau Europar Batasuneko Zuzenbidearen kontratazioaren eremuko printzipiorik oinarrizkoenetarikoa denez, batzorde honek uste du ezin dela hori urritu kaudimena egiaztatzeko sistema bakar bat eskatzearen alde. Hortaz, iradokitzen du aurreproiektuaren 78. artikuluaren 1. atalaren e) letraren testua modulatzeko, honako proposamena jasoz, hitzez hitz: “e) Kontratazio publikoko araudiak kaudimen teknikoa edo profesionala Europar Batasuneko kudeaketako erkidego-sistemei eta ingurumen-auditoretzako sistemei edo bestelako froga-	Ulertzen dugu, jatorrizko idazketak (78.2.e artikulua) alegazioaren zentzua edo xedea jasotzen duela; izan ere, sektore publikoko kontratuen araudian ezarritakora jotzen du zuzenean.	Ez da onesten

		bitarteko baliokideei erreferentzia egiten dieten ziurtagirien aurkezpenarekin egiaztatzea ahalbidetzeko aukera kontuan hartzea.		
79. artikulua. EBko etiketa ekologikoaren erabilera sustatzea.	OGASUN ETA EKONOMIA SAILA. KONTRATAZIO PUBLIKOAREN AHOLKU-BATZORDEA	Alegatzaileak etiketei buruzko Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 127. artikulua aipatzen du. Gero, hauxe adierazten du: "Sektore Publikoko Kontratuen Legeak aukera ematen du (berriz ere, aukera da eta ez betebeharra) etiketak eskatzeko -besteak beste, berariaz nekazaritza edo abeltzaintza ekologikoarekin lotutakoak- kontratazio-prozeduretan, hori guztia Sektore Publikoko Kontratuen Legeak berak ezartzen dituen betekizun espezifikoei jarraiki. Hau da, etiketa ekologikoak ezin dira horren arabera eskatu, baina kontratazio-organoaren aukera izango da hori egin nahi duen edo ez esatea. Hortaz, aurreproiektuaren 79. artikuluaren 2. atalaren c) letraren idazketa proposatzen da, honela: "c) Kontratazio publikoko prozeduretan etiketa ekologikoaren erabilera txertatzeko, betiere sektore publikoaren kontratuei buruzko araudiak gai honen inguruan finkatzen duenari jarraiki."	Gure ikuspegitik, aurreproiektuan aurreikusitako hasierako idazketa guztiz bateragarria da sektore publikoko kontratuen inguruko araudian adierazitakoarekin. Izan ere, hitzez hitz, aipatzen duena da kontratuen inguruko araudi horrek ezarritakoaren arabera sustatu beharko dela etiketa ekologikoaren erabilera.	Ez da onesten
	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Aurreproiektuaren 79. artikulua Europar Batasunaren etiketa ekologikoaren erabilera sustatzeari buruzkoa da. Horrela, 2. paragrafoan zenbait neurri ezartzen dira, ingurumena errespetatzen duten produktuak eta zerbitzuak sustatzeko tresna boluntario honen erabilera bultzatze aldera. Horien artean, ez dira aipatzen zerga-pizgarriak, adibidez, hau: EBko etiketa ekologikoa emateko, luzatzeko eta berritzeko eskaera izapidetzeagatiko tasaren kuota murriztea,	Erabaki da, artikulu honetan, ekoetiketa sustatzeko neurrien idazketa zabala egitea, baina hori ez da inola ere *numerus clausulus* bat. Horrez gain, aurreproiektuan manu espezifiko bat jaso da ingurumen-fiskalitatearen inguruan (egungo 83. artikulua). Artikulu horrek (4. c atalean) zerga-eremuko hobarien, murrizketen eta salbuespenen aurreikuspena jasotzen du eta jo daiteke horiek ekoetiketei aplikatu ahal zaizkiela. Edonola ere, proposatutako	Ez da onesten

		irailaren 11ko 172007 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsitako EAEko Administrazioaren Tasen eta Prezio Publikoen Legearen testu bateginaren 188. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitakoa. Zehazki, hori ezarri zen enpresa txiki eta ertainentzat, baita mikro enpresentzat ere, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/CE Gomendioaren arabera definitutakoak. Eta aurreko hori bat dator aurreproiektuaren 83.4.c) artikuluan xedatutakoarekin.	neurri horiek ezar litezke lege-aurreproiektuaren dagozkion araudi-garapenen bidez edo ingurumeneko zerga-politikarekin bat etorriz.	
81. artikulua. Erosketa publiko berdea	EMAKUNDE	Adierazi behar da interesgarria izango litzatekeela bertan berdintasun-klausulak ere txertatzeko aukera aztertzea.	Lege-aurreproiektuaren xedea ingurumen-izaerakoa da eta artikulu zehatza erosketa publiko berdeari buruzkoa da. Ulertzen dugu kontratuen legeria orokorrak aurreikusi beharko dituela horrelako neurriak, sektore publikoko kontratu guztietara hedatuko direnak.	Ez da onesten
	OGASUN ETA EKONOMIA SAILA. KONTRATAZIO PUBLIKOAREN AHOLKU-BATZORDEA	Artikulu horri dagokionez, gogorarazi behar da, ingurumen-klausulak, Sektore Publikoko Kontratuen Legean modu zabalean jasotakoak eta berriki Batzorde honen 2/2018 Gomendioan aztertu direnak, baimendu egin direla eta, horrez gain, sustatu egin direla azkenaldiko araudian eta gomendio horretan. Hala ere, legeak horiek gehitzeko aukera aitortzen du, gizarte- eta berdintasun-klausulekin egiten duen bezala eta, zentzu horretan, gure pleguak harago doaz eta hizkuntza-klausulak ere jasotzen dituzte. Eta beti zenbait oinarriren pean; horien artean, beti ezartzen da kontratuaren xedearekiko lotura, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 145. artikuluaren zentzuan, besteak beste. Horregatik, hori eskatzean, kautelaz jardun behar da, ulertzen baita espazioa eta aukera partekatu behar dituztela aipatutako	Artikulu honen helburua ez da mimetikoki erreproduzitzea kontratu publikoen legeriak jadanik aurreikusten duena; izan ere, harago joan nahi du, aurreproiektua osorik eta bereziki atal hauek ingurumen-lege oso handizalea osatzen dutelako. Nolanahi ere, manuak neurriaren derrigortasuna ezartzen du baina oso termino zabaletan; horri esker, kasu bakoitzean erabaki ahalko da arrazoi teknikoengatik hori eskatzea bidezkoa den. Kontrolaren eraginkortasunik ezaren balizko *ex post* arazoak egon daitezkeenaren aurreikuspena ezin da argudiotzat erabili lege honetan aurreikusitako ingurumen-helburuak lortzeko aukera hasiera-hasieratik mugatzeko.	Ez da onesten

		gainerako alderdiekin. Gainera, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 202. artikuluak, lehenengo atalean, adierazten du administrazio-klausula zehatzen pleguek gutxienez egikaritzeko baldintza berezi bat jaso beharko dutela, soziala, etikoa, ingurumenekoa edo bestelakoa. Gainera, plegu horietan sar litezkeen guztien adibideak ematen ditu eta, esan bezala, nahitaezkoa izango da gutxienez bat jasotzea. Hala ere, arazo bat egon daiteke; hain zuzen ere, ezinezkoa izan daiteke kontrataziotik aipatutako politika horiei guztiei erantzutea -ez dago inolako zalantzarik estrategikoki garrantzitsuak direla eta beharrezkoa dela horiek sustatzea-; izan ere, batzuetan, praktikan, zaila da lizitatzaile askorentzat horiek betetzea eta, horregatik, horien kontratazioa eragozten du edo lizitazio-prozesuetara aurkeztea oztopatzen du. Orduan, aurretik aipatutako lehiakortasun askearen printzipioa arriskuan jartzen da. Baina, hortik harago, pleguetan klausula horietakoren bat ezartzen denean, aurretiaz argi eta ondo egituratuta eduki behar da kontrol-sistema. Izan ere, sistema horrek ahalbidetuko du egiaztatzea eskatutakoa eta eskainitakoa benetan osorik betetzen den edo ez eta, edonola ere, hori ez betetzeak edo gaizki betetzeak edukiko lukeen eragin zehatza egiaztatzea ahalbidetuko du, kontuan hartuta horiek kontratuaren betebeharrak direla. Gauzak horrela, 81. artikuluaren 2. atalean jasotako eskakizuna moderatu behar da aurreko ataletan proposatu dugun bezala. Gogorarazi behar da aukera bat dela, eskakizuna izan beharrean.		

		Halaber, 3. atalean ezarritako aginduari erreparatuz, obren eta horniduren pleguetarako, behin betiko kendu behar da “adieraziko dira ”adierazpena “adierazi ahalko dira ”adierazpenarekin ordeztuz. Gainera, aurreproiektuan bertan beti eskaini beharko dira metodo eta arduradun zehatzak, hau da, ehuneko horiek eskatzen dituzten kontratu guztien egikaritzapenean benetan egiaztatzen direla ziurtatuko dutenak. Bestela, paperean soilik geratuko liratekeen eskakizunak bihurtuko lirateke, hau da, ezingo litzateke betetzen diren edo ez kontrolatu eta, gainera, ezingo litzateke horien ez-betetzea egikaritzapenean erakutsi. Horrela, lehia oso modu zorrotzean mugatuko zatekeen eta kontratistak ez-betetzeak egin ahalko lituzke inolako ondoriorik gabe eta kontratuaren erantzulearentzako kontrol-tresnen gabeziako arazo serio batekin. Hori ez da edonola ere baimendu behar.		
	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	81.3 artikulua. Ekimen honek araudi-garapen egokia izan behar du. Ondorio horietarako, aipatutako materialek ziurtapen edo homologazio bat izatearen alde egin behar da. Horrek ahalbidetuko du proiektuen idazleek eta horien zuzendariek bere gain hartzen dituzten erantzukizunetan berme bat izatea.	Alegazioan aipatutako araudi-garapen horiek jadanik egin dira EAEn (Eraikuntza- eta Eraispen-hondakinen Dekretua eta Aridoen agindu teknikoa), zehazki, artikuluan aurreikusitako materia horietako batzuentzat. Geroko araudi-garapenak egingo dira, beharrezkoa izatekotan, aipatutako gainerako materialentzat.	Esposizio-alegazioa
	LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA	Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 1.3 artikuluak ezartzen du kontratazio publiko guztietan txertatuko direla zeharka eta nahitaez gizarte- eta ingurumen-irizpideak, betiere kontratuaren xedearekiko	Esposizio-alegazioa. Adierazi beharra dago, aurretik esan bezala, artikulu honen helburua ez dela mimetikoki erreproduzitzea kontratu publikoen	Esposizio-alegazioa

		lotura badute. Hala, uste da horiek gehitzeak kalitate-prezio harreman hobea sustatzen duela kontratua ematerakoan, baita eraginkortasun handiagoa eta hobea ere funts publikoen erabileran. LEA/AVC honek positibotzat jotzen du kontratazio publikoan ingurumenarentzat onuragarriak diren alderdiak kontuan hartu ahal izatea; hori gorabehera, adierazi behar da, kontratuaren xedea bera ez den bestelako elementuak aintzat hartzen dituzten neurriak hartzean, horiek eskaintzaileen arteko eraginkortasun, lehiakortasun eta diskriminaziorik ezako printzipioekin bateratuz hartu beharko liratekeela.	legeriak jadanik aurreikusten duena; izan ere, harago joan nahi du, aurreproiektua osorik eta bereziki atal hauek ingurumen-lege oso handizalea osatzen dutelako. Nolanahi ere, idazketa berria eman zaio aipatutako artikuluari, lege-aurreproiektuaren informazio publikoko fasean jasotako alegazioei erreparatuz.	
83. artikulua. Ingurumen-fiskalitatea	ZERGA-ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZA	1. Eskatzen da 83.1 artikuluan Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoaren aipamena ezabatzeko. Hala ere, horrek ez du eragotziko zerga-tresnen sustapenari erreferentzia egitea, ezta administrazio publiko eskudunen bestelako ingurumen-politikak aipatzea ere. Gainera, adieraziko da beharrezkoa dela ingurumenaren alorrean eskumena duen EAEko Administrazio Orokorreko Sailak parte hartzea. 2. Eskatzen da ingurumen-zergek lortutako bilketaren izaera finalistari buruzko 83. artikuluaren 2. eta 3. atalen idazketa zuzentzeko, dagokion muga gainditzen duelako eta lurralde historikoetako foru erakundeen berezko zerga-eskumenak inbaditzen dituelako. 3. Bigarren Azken Xedapena osatzea, uraren kanonaren arauketa berri oso bat sustatuz (eta ez bakarrik horren zerga-egitatearena).	1. Oharra aintzat hartzen da eta Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoaren aipamena kentzen da. Testua honela idatzita geratuko litzateke, hitzez hitz: “85.1. Zergen esparruan eskudunak diren euskal administrazio publikoek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ingurumen-eskumenak dituen sailari aurretiaz kontsultatu ostean, fiskalitate ekologikoaren eta ingurumen-politika ekonomikoaren beste tresna batzuen erabilera sustatuko dute, zehazki, lege honen helburuak lortzen laguntze aldera.” 2. EAEko administrazio publiko guztientzako lortutako bilketen izaera finalista kontuan hartzeko eskaera hartzen da. Izaera finalista hori zabaldu ahalko da arau honen arabera eta	Partzialki onesten da

		Horretarako, Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen VIII Kapituluan jasotako araubide ekonomiko-finantzarioaren idazketa berria egingo da. 4. 83.4 artikuluan EAEko administrazio publikoak animatzen ditu ("ahalko dute") tasak eta zergak sortzera, baita horietan salbuespenak eta hobariak ezartzera ere, zehazki, bere eskumenen eremuan eta ingurumen-ikuspegitik. Kontu hori egokia dela jotzen da, baita erakunde bakoitzaren zerga-eskumenak errespetatzen dituela ere. 5. Adierazten da tasak ordaintzearen menpekoak izan daitezkeen zerbitzuen eta jardueren errepasoa egin ahalko dela eta, hala badagokio, hori aurreproiektuan txertatu.	soilik EAEko administrazio orokorrarentzat; hau da, foru aldundiek erabaki bera har dezakete zergen eremuan dituzten eskumenen arabera. Testua honela idatzita geratuko litzateke: "83.2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak lortutako bilketek izaera finalista izango dute eta esklusiboki bideratuko dira lege honetan aurreikusitako helburuak lortzera. Foru aldundiek, zergen eremuan dituzten eskumenak gauzatuz, zentzu berean ezarri ahalko dute lortutako bilketen izaera finalista, baita horiek ingurumena babestearekin lotutako helburuetara zuzentzea ere." 83.3. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak bildutako diru-sarreren barruan sartuko da aurrekontu-partida bat, zehazki, datorren urteko aurrekontu orokorretan, ingurumen-eremuan eskumena duen organoak ezarritako helburuekin bereziki lotutakoak. Foru aldundiek zentzu berean ezarri ahalko dute lortutako bilketek urteko aurrekontuetan partida bat osatzea, bereziki zuzendutakoa ingurumena babestearekin lotutako jarduketak kudeatzera." 3. Gomendioaren funtsa positiboki hartzen da, hau da, uraren kanonaren arauketa oso berri bat egiteko beharra dagoela. Hala ere, hori etorkizunean egin beharko da, VIII Kapituluaren aldaketa sakonago batekin batera. Aurreproiektuaren testuak hauxe	

			adieraziko du hitzez hitz: “45. artikulua. Zerga-egitatea 1. Euskal Autonomia Erkidego osoan zergapean egongo da uraren erabilera, lege honetan zehazturik dagoen bezala, uraren erabilerak eragina izan dezakeelako bere ingurunean.» 4 eta 5. Esposizio-aipamenak eta proposamenak dira eta horiek aztertuko dira EAEko ingurumen-organoaren geroko araudi-garapenetan eta jarduketetan islatze aldera.	
85. artikulua. Ingurumen-boluntariotza	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	85. artikuluan ezartzen da herritarren parte-hartzearen sustapena boluntariotza-ekintzetan interes orokorreko jarduerak egiteko, hori guztia ingurumena babesteko eta hobetzeko eta Boluntariotzaren uztailaren 25eko 1771998 Legean xedatutakoaren arabera. Bestalde, 2. paragrafoak 17/1998 Legearen 12. artikuluan aurreikusitako jarduketa horietako asko zerrendatzen ditu eta, aurreproiektuaren ondorioetarako, bereziki interesgarria da horiek bultzatzea. Hala ere, b) letran aurreikusitako jarduketa hau da: “Boluntarioen erakundeak iraunarazteko eta horien prestakuntza eta ekimenak bultzatzeko laguntzak emango dituzte eta hitzarmenak sinatuko dituzte”. Horri dagokionez, adierazi behar da, laguntza-lerroen deialdiarekin bultzatzen dela boluntariotza-jarduketen sustapena eta ez horiek ematearekin. Hortaz, 17/1998 Legean jasotako idazketa lehenesten dugu ekimenaren sustatzaileak	Ez da partekatzen proposatutako oharra; izan ere, soilik deialdiarekin bultzatzen da boluntariotza-jarduketen sustapena. Gure aburuz, zuzendaritzak nahasten ditu laguntzak emateko administrazio-prozeduraren fase desberdinak eta horien azken xedea, hau da, boluntariotza sustatzea.	Ez da onesten

		egindakoaren aurrean.		
	ZERGA-ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZA	Ingurumen-boluntariotzari buruzko 85.2.f) artikuluan, beste neurri batzuen artean, administrazio publiko eskudunek zerga-eremuan ezarri ahalko lituzketenak proposatzen dira, horiek sustatzeko eta burutuak izan daitezen errazteko. Hala eta guztiz ere, ezin da ulertu zein den azken helburua, ezta zerga-tratamendu horien xede diren kolektiboak edo eragileak ere.	Hala, 85. artikulu horren 2. atala administrazio publikoek ingurumen-boluntariotzako ekintza sustatzera eta erraztera dago zuzenduta, zehazki, Boluntariotzaren ekainaren 25eko 17/1998 Legea xedatutakoarekin bat etorriz. Artikuluek aurreikusten dute prestakuntzaren eta informazio-bilketaren arloan boluntarioak dituzten antolakuntza desberdinen artean baliabideak eta bitartekoak komunean jartzea. Gainera, hauxe aurreikusten dute: boluntarioen antolakuntzen mantentzerako, prestakuntzarako eta ekintzarako laguntzak ematea eta hitzarmenak sinatzea; ingurumen-boluntariotzaren gaineko informazio-kanpainak antolatzea; antolakuntzei aholkularitza, informazio eta babes teknikoko zerbitzuak ematea, etab. Zentzu horretan, lege- eta zerga-araudiaren esparruan neurriak ezartzearen helburua gainerako neurri guztien helburu bera da, hau da, EAEn ingurumen-izaerako boluntariotza sustatzea.	Ez da onesten

ZAZPIGARREN TITULUA. INGURUMEN-IKUSKAPENA ETA KONTROLA I. KAPITULUA. INGURUMEN-LANKIDETZAKO ERAKUNDEAK				
ARTIKULUA	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
87. artikulua. Ingurumen-lankidetzako erakundeak	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Aipatu behar da Ingurumen-lankidetzako erakundeak arautzen dituen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa sortzen duen urriaren 16ko 212/2012 Dekretua. Dekretu honek, bere garaian, aurreikusi zuen EAEko ingurumen lankidetzako erakundeen administrazio-erregistro bat sortzea; bertan, publizitate-ondorioetarako, entitatearen datuak, maila eta jarduketaren irismena jasoko ziren. Kontuan hartuta memoria ekonomikoak ez diola manu honi erreferentzia egiten; ez dakigu zergatik sailak berriro arautzen duen kontu hau, Ingurumen-lankidetzako Erakundeen erregistroaren lege-maila emateaz gain. Era berean, gogorarazi behar da aipatutako Ingurumen-lankidetzako Erakundeen dekretua partzialki etenik dagoela, hain zuzen ere, Ingurumen-lankidetzako erakundeak arautzen dituen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa sortzen duen urriaren 16ko 212/2012 Dekretua aldi baterako eteten duen irailaren 10eko 407/2013 Dekretuarekin bat etorriz. Hori guztia pertsona pribatuek ingurumen-lankidetzako erakundeak erabiltzearen derrigortasunari dagokionean.	Azaldutako egitate horiek ondo ezagutzen dituzte, bai testua sustatu duen zuzendaritzak, bai alegazioa egin duen zuzendaritzak. Egitate-egoera horretatik abiatuta, hain zuzen ere, lortu nahi dena da lege-esparrua hobetzea, erakunde horien geroko nahitaezko araudi-garapena optimizatze aldera.	Azalpenekoa

	LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA	Ingurumen-lankidetzako jarduera horiek garatzeko, beharrezko gaitasun teknikoa behar da eta aztertutako manuak ez du hori berariaz jasotzen. Hortaz, gomendatzen da bertan gehitzea beharrezkoa dela Ingurumen-lankidetzako erakundeek gaitasun tekniko egokia izatea administrazio publikoarekin ingurumen-lankidetzako atazak burutzeko. Gainera, gomendatzen da ezartzeko, Ingurumen-lankidetzako Erakundeek ingurumen-arloko administrazio publikoarekin lankidetza-jarduerak burutzerakoan (dokumentuen balioztapena, ziurtapena eta laginketa), Euskal Autonomia Erkidegoaren ingurumen-arloko eskumenak esleituta dituen sailari aurretiazko jakinarazpena egiteko araubidea bete beharko dela. Horrela, aurretiazko komunikazioa aurkezteari esker, jarduera hori burutu ahalko da ingurumen-lankidetzako erakunde gisa. Ingurumen-lankidetzako erakundeek administrazio-erregistro batean izena eman behar dute, nahiz eta aurreproiektuak ez duen horren izaera ezartzen. Hortaz, betebehar horren esku-hartze maila ahalik eta txikiena izan dadin, gomendatzen da manuan aurreikusteko izen-emate hori, publizitate-ondorioetarako soilik.	Alegazioa hartzen da, hau da, ingurumen-lankidetzako erakundeei beharrezko gaitasun teknikoaren irizpidea eskatuko zaiela berariaz jasotzea 87.3 artikuluan. Hori honela idatzita geratuko da: ‘‘Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen organoak eskaera egiten duten entitateak erregistratuko ditu, arauz finkatzen diren ezinbesteko baldintzen eta prozeduraren arabera, *horien gaitasun teknikoa bermatze aldera,* eta beren independentzia eta inpartzialtasuna bermatzen dituzten neurrien arabera. (…)’’.’’. Ingurumen-lankidetzako Erakundeek EAEko erregistroan izena eman beharko dute eta erregistrorako sarbidea araudiak ezartzen du aurretiazko komunikazio-prozedura baten bidez. Hala, behin izena emanda, gaituta daude ingurumen-lankidetzako erakunde bezala jarduteko legez eta arauz aurreikusitako jarduketa-eremuetan eta irismenarekin. Aldi berean, adierazi behar da Ingurumen-lankidetzako erakundeak arautzen dituen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa sortzen duen urriaren 16ko 212/2012 Dekretuak 15. artikuluan arautzen duela izen-ematea publizitate-ondorioetarako besterik ez dela egiten. Hortaz, ez da beharrezkotzat jotzen hori aurreproiektuaren testuan gehitzea.	Partzialki onesten da.

			15. artikulua. —Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroan izen ematea. Jakinarazpena agiriekin jaso eta beharrezko egiaztapenak eginda, ingurumen-eskumenak dituen sailak EAEko ILEen Erregistroan inskribatuko du erakunde eskatzailea, argitara ematea beste helbururik gabe.	

ZAZPIGARREN TITULUA. INGURUMEN-IKUSKAPENA ETA KONTROLA II. KAPITULUA. INGURUMEN-IKUSKAPENA				
ARTIKULUA	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
89. artikulua. Ingurumen-ikuskapeneko langileak	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	89.1 artikuluaren idazketan, 87. artikuluarekin lotuz, zalantza bat sortzen da, zehazki, pertsona fisikoak edo juridikoak ingurumen-lankidetzako erakundeak izan daitezkeen. Beraz, egungo idazketak ez du argi uzten, ingurumen-lankidetzako erakundeez gain, beste pertsona batzuek ahalmen publikoak gauzatzeko eskatzeagatik edo beste egoera batzuengatik funtzionario publikoei soilik gordetzen ez zaizkien ikuskapeneko jarduketa materialak burutu ahal dituzten. Horregatik iradokitzen da artikulu honen idazketa berrikusteko eta "edo pertsonak "konjuntzioa ezabatzek, baldin eta 89.1 artikuluaren helburua da bakarrik ingurumen-lankidetzako erakundeak gaitzea ataza zehatz batzuk burutzeko. Horrez gain, artikuluak ingurumen-ikuskapeneko jarduera burutzeko ofizialki izendatutako administrazio publikoetako funtzionarioak aipatzen ditu eta horiei agintaritza-agente izaera ematen die, berezkoak zaizkien eginkizunak burutzeko. Baieztapen horrez gain, 89. artikuluaren hirugarren paragrafoan, hauxe adierazten da: "*Ikuskatzaileek ahalmena dute Lege honen mendeko subjektuen esku dagoen ingurumenaren alorreko edozein dokumentazio biltzeko, baita Lege honen aplikazio esparruaren baitan*	Oharra partzialki hartzen da eta, artikulu horri egindako alegazioen emaitza gisa, idazketa berria eman zaio. Gaur egun, Euskadin, badago Ingurumen-lankidetzako Erakundeen inguruko indarreko xehetasun-arauketa, hau da, ingurumen-lankidetzako erakundeak arautzen dituen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa sortzen duen urriaren 16ko 212/2012 Dekretua, aztertu behar dena. Hortaz, ez da ulertzen zer esan nahi duen alegatzaileak adierazten duenean beharrezkoa dela horren araudi-artikulazio azkarra egitea. Lege-testuak ez du jotzen ingurumen-lankidetzako erakundeetako langileei agintaritza-agenteko izaera eman behar zaienik. Horregatik, 89.2 artikuluan egindako erreferentzia administrazio publikoen zerbitzura dauden langileetara mugatzen da. 89.3 artikuluan, ikuskapen-langileei egindako erreferentzia aldatuko da eta ikuskapen-jarduketak burutzen dituzten langile guztiak hartuko dira barne, administrazio publikoekin lotura duten edo ingurumen-lankidetza erakunde batekoak diren gorabehera. Izan ere, lortu nahi dena da horiek guztiek edukitzea atal honetan	Partzialki onesten da.

		garatzen diren jarduerei leku egiten dieten instalazioetan eta beste lekuetan aldez aurretik identifikatu eta jakinarazi gabe sartzeko eta egoteko ere". Hala, kasu honetan ez da argi geratzen ikuskatzaileak soilik funtzionarioak diren edo Ingurumen-lankidetzako Erakundeak barne hartzen diren. Beraz, asmoa funtzionarioak eta Ingurumen-lankidetzako Erakundeak ahalduntzea bada, ikuskatzaileen terminoa aldatzeko iradokitzen da eta ingurumen-ikuskapeneko langileak terminoarekin ordezteko, artikuluaren tituluarekin eta 91. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz: "*Lege honen aplikazio esparruko jardueren titularrek nahitaez lagunduko diete 89. artikuluan adierazitako ingurumen ikuskatzaileei behar duten guztietan, ikuskatzaile horiek beren eginkizuna egiteko beharrezkoak dituzten azterketak, kontrolak, lagin hartzeak eta informazio bilketak behar bezala egin ahal izan ditzaten*"	deskribatutako jarduketa-ahalmenak. Aurreko alegazioaren zentzu berean, argitu behar da aldatutako testuak egiaztatutako erakundeei soilik egingo diela erreferentzia. Egokitzat hartzen da artikuluaren titulua eta 3. atala aldatzea.	

91. artikulua. Ikuskapen jarduerari men egiteko betebeharra .	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Deigarria da, aipatutako txostenak bi hilabeteko epean igortzeko betebeharra ezarrita egonda, horiek 4 hilabete igaro arte ezin argitaratzea. Gai hori ez da justifikazio- eta ekonomia-memorian jasotzen. Txostenei dagokienez, aipatu behar da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 80.1 artikuluarekin bat etorriz, “aurkako berariazko xedapena egon ezean, txostenak hautazkoak izango direla eta ez lotesleak”.	Zentzua dauka, kronologikoki, ikuskatutako jardueraren titularra izatea ikuskapen-bisitaren txostena lehendabizi jasotzen duena eta, horren ostean, administrazioak jarduketa horiei publizitate aktiboa ematea. Horrela, jardueraren titularrak epe zehatz bat dauka alegatzeko, bere eskubidearen arabera, ikuskapen-txosten horretan azaldutakoa. Beraz, publizitate aktiboa emandako informazioaren gaineko aurretiazko egiaztapen bat egingo du ukitutako pertsona nagusiak. Alegazioaren bigarren parteari erreparatuz, adierazi behar da txosten-mota horiek ez direla nahitaezko txostenak alegatzaileak aipatutako administrazio-prozedura batean. Txosten horiek ingurumen-organoaren jarduerari gardentasuna eta publizitate aktiboa ematera daude zuzenduta.	Ez da onesten

92. artikulua. Ingurumen-ikuskapenaren plangintza.	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	92. artikuluak lege-aginduaren maila esleitzen die ikuskapenaren arloko plangintzari eta programazioari, ez betetzekotan sor litezkeen ondorioekin. Gainera, programak egiterakoan kontuan hartu beharreko ingurumen-arriskuen ebaluazio sistematikoaren inguruko gutxiengo irizpide batzuk ezartzen dira, baina ez da zehazten nola balioztatu behar diren horiek. Hortaz, artikuluaren idazketa berrikusteko gomendatzen da.	Ez da ulertzen zergatik zuzendaritzak zalantzak dituen ikuskapenaren plangintza lege-agindu baten bidez artikulatzearen inguruan. Izan ere, Europako araudien eta transposizio-legeriaren joera aurkakoa da eta berariaz gehitzen du ikuskapenaren plangintza araudi-xedapen orokorretan (hondakinen araudia ikusi, IPPC....). Arlo honetan, arauaren asmoa da ikuskapen-jarduera antolatzea eta horren funtsezko aurretiazko urratsa da plangintza egokia egitea. Bestalde, adierazi behar da, gure ikuspuntutik, arriskutsua dela suposatzea, oharrean egiten den bezala, lege-agindu hori ez dela beteko. Lege-maila duen arau batek ezin du sakondu arriskuen balioztapen sistematikoaren xehetasun teknikoan; hala, 92. artikuluak berak geroko araudi-garapen baterako uzten du alderdi horien eta beste batzuen xehetasuna.	Ez da onesten

ZORTZIGARREN TITULUA. INGURUMEN-LEGEZKOTASUNA LEHENGORATZEA ETA INGURUMEN-KALTEENGATIKO ERANTZUKIZUNA I. KAPITULUA. INGURUMEN-LEGEZKOTASUNA LEHENGORATZEA				
ARTIKULUA	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
94. artikulua. Jarduerak aurretiazko komunikazio rik, baimenik edo lizentziarik gabe legeztatzea	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Titulu honek, 94. artikuluan, funtzionamenduan dauden jarduerak legeztatzeko hartu beharreko neurriak jasotzen ditu, horiek baimenik edo lizentziarik ez dutenean edo aurretiazko komunikazioko prozeduraren izapideak oinarritu ez direnean edo, horiek izan arren, urritasunak antzematen direnean funtzionamenduan. Halaber, berariaz aurreikusten du behin betiko itxiera jarduera legeztatu ezin den kasuetarako. Lege-aurreproiektuak antzemandako funtzionamendu-urritasunak zuzentzeko neurri zuzentzaileak eskatzeko aukera aurreikusten du, zehazki, ingurumen-baimeneko araubide desberdinen eta legezkotasuna lehengoratzeko prozeduraren esparruan. Justifikazio-memorian ez da azaltzen zergatik gehitu diren neurri horiek; horregatik, zalantza bat sortzen da: nahita soilik gaitzen ote dituen horiek funtzionamendu-urritasun kasuetarako edo, aitzitik, horiek eskatu ahalko liratekeen instalazioen egoerari dagokionez. Bestalde, araudi-proiektuak neurri horientzako denbora-muga bat ezartzen du, baina denbora-muga hori gainditzearen ondorioak zehaztu gabe. Horrez gain, justifikazio-memorian ez da azaltzen nola funtzionatzen duen ingurumen-legezkotasuna lehengoratzeko	Lehenik eta behin, adierazi beharra dago iradokizuna nahiko nahasia dela eta ez dela argi geratzen zein manuri edo manuei egiten dien erreferentzia. Aurreko ataletan bezalaxe, zuzendaritzak etengabe aipatzen du proiektuaren justifikazio-memorian ustezko informazio-gabezia dagoela. Baina, gure ikuspegitik, dokumentu hori ez dago eratuta gida bezala, non izaera orokorreko araudi-xedapeneko proiektu baten testuaren artikulu eta atal guztiak aztertzen diren geroko txostenak errazte aldera. Oharrari erantzuteko asmoz, batetik, adierazi behar da lege-aurreproiektuaren 94. artikuluak jardueraren legeztatze formalari egiten diola erreferentzia. Manu berak (bigarren atala) asaldatutako egoeraren gainean neurri zuzentzaileak hartzeko edo lehengoratzeko aukera ezartzen du. Neurri horiek ezartzeko emandako epeak gainditzearen ondorioa hau da: administrazio publikoek duten berezko egintzen benetako autotutoretza gauzatzeko aukera. Ezarri beharreko neurri zuzentzaileak ezartzen dituen ebazpena administrazio-egintza bat izango da eta, hori ez betetzekotan, ebazpenak betetzen ez diren	Ez da onesten

		prozedura ebazteko hiru hilabeteko epeak. Hortaz, kontu hori berrikusteko iradokitzen da.	gainerako kasuetan bezalaxe, nahitaez betearazi ahalko da, zehazki, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 97. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako bitartekoak baliatuz. Era berean, neurri horiek ez betetzea administrazio-izaerako egintza bidegabe autonomo bat izango da, aurreproiektuaren arau-hausteen multzoaren barruan. Bestalde, adierazi behar da legezkotasuna lehengoratzeko prozedura ebazteko hiru hilabeteko epea gainditzearen ondorioa aurreikusten dela, hau da, iraungipena (97.3 artikulua). Begi bistakoak direnez, alderdi horiek ez dira justifikazio-memorian azaldu behar, alegatzaileak eskatzen duen bezala.	
97. artikulua. Ingurumen-legezkotasuna lehengoratzeko prozedura	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	97. artikuluaren laugarren paragrafoak hauxe ezartzen du: "*Larrialdi kasuetan, prozedura administratiboa izapidetu behar izan gabe esku hartu ahal izango du agintaritza eskumendunak kalteak prebenitzeko eta saihesteko neurriak finkatzeko edo neurri horiek aplikatu daitezela exijitzeko.*" Larrialdietan adierazpena ez da guztiz zehatza eta, horregatik, berrikusteko gomendatzen da. Gai horri dagokionez, kontuan hartu behar da Babes Zibileko Sistema Nazionalaren uztailaren 9ko 17/2015 Legeak Babes Zibileko Larrialdiaren definizio bat aurreikusten duela (...). Artikulu beraren 6. paragrafoak adierazten du honako hau: "*Hartu litezkeen behin-behineko neurriak dira, jarduerak eteteaz eta aurreko artikuluek adierazitako neurri zuzentzaileez gain, lege honetan*	Egindako proposamena onesten da eta "premia "terminoa erabiliko da behin-behineko izaera nabarmena duten neurrientzat, hain zuzen ere, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 56. artikuluarekin bat etorriz. Gainerako iradokizunak ez dira onesten. Premia nahitaez izan behar da zehaztu gabeko kontzeptu juridiko bat, kasu bakoitzean administrazioak berak antzeman beharko duena. Gainerako gogoetak ez dira argi eta garbi alegazio bat; izan ere, administrazio publikoen zigortzeko ahalmenari buruzko euskal legerian aurreikusitako araudi-erreferentziak helarazten dira azalpen-forman. Gogorarazi beharra dago titulu honetan legezkotasuna lehengoratzeko araubidea eta prozedura arautzen direla eta behin-behineko neurriak hartzea egingarria dela edozein	Partzialki onesten da.

		ezarritako zigortzeko prozedurarako aurreikusitakoak". Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legeak kautelazko neurriak arautzen ditu 31. artikuluan: "*egokitu daitekeen ebazpenaren eraginkortasuna ziurtatzeko edo jardunbideari eragozpenak ipintzea ekiditeko, edota baita juzgatutako gertakariak edo antzeko esangura dutenak jarraitzea edo berriro gertatzea ekiditeko edo gertakariek sortarazitako kalteak jarraitzea edo kalteak arindu nahi izatea ekiditeko ere. Kautelazko neurriak hartu aurretik entzunaldia eskainiko zaie interesatuei bost eguneko epean*". Halaber, 32. artikuluan funtzionario ikuskatzaileek salbuespen moduan kautelazko neurriak hartzeko aukera aurreikusten du eta hauxe adierazten du: "*Ikuskaritza-lanak betetzen ari diren funtzionarioek ez-zilegiak izan daitezkeen gertakariak egiaztatzen badituzte, ezarri ahal izango dituzte kautelazko neurriak salbuespenez, interesatuei aurreko entzunaldirik egin gabe, honako baldintza hau izanez gero: 31.1 atalean adierazten diren helburuak lortu ahal izateko, lehenengo eta bigarren azaldutakoak izan ezik, kautelazko neurriak berehala hartu beharra derrigorrezkoa izatea.*" Adierazi behar da, salbuespenezko kasu hauetan, Zigortzeko Ahalmenaren legeak hauxe aurreikusten duela: "*Atal honek arautzen dituen kautelazko neurriak ezarri diren kasuetan, dagokion zigor-jardunbidea irekiko da ahalik eta lasterren, eta irekitze-egintzan zigortzeko eskumena duen organo titularrak zehaztuko du, arrazoituta, neurri horiek amaitu, jarraitu edo aldatu egin behar diren. Horren*	prozedura-motan, ez baitira zigortzeko prozeduraren esklusiboak. Lege-aurreproiektuan nobedade gisa aurreikusitako ingurumen-legezkotasuna lehengoratzeko prozedura proposatutako terminoetan oinarrituko da. Hala ere, aldi berean edo gerora, bidezkoa bada, dagokion zigortzeko prozedura bideratuko da, aurreproiektuaren beste manu batzuetan arautzen dena. Sektore elektrikoaren legeari buruzko alegazioa ezesten da; izan ere, ulertzen da, aurreko alegazioan azaldu den bezala, hornidura elektrikoa mozteko horrelako neurriak egingarriak direla. Zehazki, lato sensu, jotzen da EAEko lurralde-eremuan ingurumena babesteko neurri gehigarriak direla.	

		ondoren, 31.2 atalean aurreikusten diren kautelazko neurrien ondorengo alegazioen tramiteari ekingo zaio. "Era berean, ezartzen du kautelazko neurri horiek iraungiko direla ezartzen direnetik lau egun igarotakoan, betiere dagokion zigortzeko prozedura abiarazi ez bada. Harrigarria da 97.7 artikuluan jasotako manua, hauxe xedatzen duena: "*Era berean, ur edo argindar hornidura eten ahal izango da behin-behineko neurri gisa ixteko edo jarduera bertan behera uzteko agindua jaso duten jardueretan, instalazioetan eta obretan. Horretarako, ur edo argindar enpresa hornitzaileei dagokion erabaki administratiboaren berri emango zaie, eta gehienez ere bost eguneko epean beteko dute agindu hori. Jardueraren debekua kentzen denean eta Administrazio jarduleak enpresa hornitzaileei horren berri ematen dienean baizik ez dira hornidura horiek berriz ere eskainiko.* " Horrelako garrantzia duen kontu batek legegilearen zilegitasuna aztertzeko eskatzen du, hain zuzen ere, printzipioz aplikazio-eremutik kanpo egongo liratekeen hirugarrenak derrigortzeko. Oraingoan ere, gai hori ez da proiektuaren justifikazio-memorian garatzen. Aurrekoaren inguruan, adierazi behar da, Sektore Elektrikoaren abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 52. artikuluan ezarritakoari jarraiki, ezingo zaiela inola ere eten energia elektrikoaren hornidura funtsezkotzat aitortu diren zerbitzuak ematen dituzten instalazioei dagozkien ordainketak ez egiteagatik. Kontuan hartuta neurri hau indarreko oinarrizko araudi elektrikoan ezarritakoaren aurka joan litekeela, iradokitzen da hori berrikusteko.		

98. artikulua. Ingurumen-legezkotasuna lehengoratzeko neurrien nahitaezko egikaritzapena	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Aurreproiektuaren 98. artikuluan, deigarria da isun hertsatzaileen ezarpenak ez eskatzea, zehapen-prozeduraren esparruan aurreproiektuaren 111.2 artikuluak aurreikusten duen bezala, betetzeko errekerimenduan adierazteko jardueraren edo instalazioaren sustatzaileak edo titularrak duen epea neurrien betetze boluntariorako (nahikoa izan behar da 111.2 artikuluaren kasuan), ezta ezar daitekeen isunaren zenbatekoa ere, zehapen-prozeduran baino berme gutxiago eskainiz.	Iradokizuna hartzen da eta egokitzat jotzen da artikulua osatzea, zehazki, lege-aurreproiektuaren 111.2 artikuluaren idazketaren antzeko idazketa batekin.	Onesten da

BEDERATZIGARREN TITULUA. INGURUMEN-DIZIPLINA				
ARTIKULUA	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
101. artikulua. Arau-hausteak eta zigorrak	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	101.2 artikuluak hauxe ezartzen du: "*Lege honetan finkatutako arau hauste administratiboek ez diete kalterik eragingo egileen erantzukizun zibilei, penalei edo izan ditzaketen beste maila bateko erantzukizunei*". Bigarren paragrafoaren idazketa aztertu da eta "gorabehera " adierazpena honela interpreta daiteke: hasiera batean administrazio-izaerako arau-hauste gisa ezartzen den jokabide bat bidegabe penala izatera pasa daiteke. Horrez gain, ondoriozta daiteke administrazio-bidean zeha daitekeela, egitate horren jazarpen kriminala urritu gabe. Zentzu horretan eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 31.1 artikuluan debekatutako *bis in idem* bat eragingo luketen epaitze paraleloen edozein tentazio saiheste aldera, komeni litzateke hauxe gehitzea: arau-hausteek delitua eragin dezaketen kasuetan, administrazioak hori jakinaraziko dio Ministerio Fiskalari eta zehapen-prozedura burutzeaz abstenitu egingo da agintaritza judizialak epai edo largespen-auto irmoa eman arte. Hala, soilik deliturik ez dagoela jotzen den kasuan, administrazioak zehapen-espedienteari emango dio jarraipena, oinarritzat hartuz auzitegiek egiaztatutakotzat jo dituzten egitateak, hori guztia *Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Zigortzeko Ahalmenaren otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 25.*	Ezin da aurkeztutako iradokizuna hartu, ezagutza orokorrekoa baita non bis in ídem printzipioaren konstituzio-maila eta bere arauketa urriaren 1eko 40/2015 Legean. Horregatik, ez da beharrezkoa hori aurreproiektuan erreproduzitzea. Are gehiago, adierazi behar da, alegazioak berak esaten duen bezala, EAEko administrazio publikoen Zigortzeko Ahalmenaren otsailaren 20ko 2/1998 Legeak baduela artikulu espezifiko bat non bis in ídem printzipioari buruz (18. artikulua) eta beste bat auzibitarte penalari buruzkoa (25. artikulua). Beraz, ez da beharrezkotzat jotzen alderdi horien xehetasunean sartzea ingurumen-lege orokor batean, zuzendaritzak nahi duen bezala. Izan ere, bere arauketa-eremu naturala 2/1998 Legean dago, gaia dela-eta (zigortzeko ahalmena) EAEn berezia dena.	Ez da onesten

		artikuluan xedatutakoaren arabera.		
102. artikulua. Arau-hausteen sailkapena	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	1.- Aurreproiektuaren 102. artikuluan jasotako arau-hausteen sailkapenari dagokionez eta 101.1 artikuluan preskribatutakoa kontuan hartuz *("...Euskal Autonomia Erkidegoan gai horiek arloka arautzen duten, aplikagarri diren eta Lege maila duten arauetan tipifikatutako arau hausteei kalterik eragin gabe"),* begi bistakoa ematen du 2. paragrafoaren a) eta b) letretan aurreikusitako arau-hausle motek, ingurumen-baimen bakarra ez lortzeari edo horren baldintzak ez betetzeari dagokienez, ezingo luketela xurgatu edo ulertu obrak, proiektuak eta jarduketak ingurumen-baimen bakarra lortu gabe burutzearen arduradunak edo bertan ezarritako baldintzak ez betetzearen arduradunak egin zitzakeen balizko arau-hausteen balio-galera osoa, hain zuzen ere, hori egin zezaketelako baimen horretan jasotako gai bakoitzarekin lotutako araudi sektorialari dagokionez. Hala eta guztiz ere, aurreproiektuaren 31.2 artikuluan aurreikusitako ingurumen-baimen bakarraren bidez integratu behar dira honako baimen hauek: produkzio eta hondakinen kudeaketakoak; kolektorerako isurketakoak, jabari publiko hidraulikorakoak eta itsas-lurreko jabari publikorakoak eta atmosferarako igorpenenak. Horiek guztiak egintza bakarrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak igorritako aurretiazko administrazio-prozedura bakar batean integratuko dira. Hori kontuan hartuta, galdetu beharra dago aurreproiektuaren 102.2 artikuluaren a) eta b) letretan aurreikusitako arau-hausteen arduradunari arau-hauste desberdinei dagozkien zehapen guztiak ezarri ote behar zaizkion, zehazki,	1.- Aurreko oharraren ildotik, adierazi behar da aipatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legea dagoela eta hori aplikatu behar dutela Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan zigortzeko ahalmena gauzatzen duten erakunde guztiek. Bertan, zigortzeko ahalmena gauzatzeko funtsezko arau orokorrak arautzen dira (II Kapitulua), besteak beste, hauek: non bis in ídem, arauen lehiaketa, arau-hausteen lehiaketa, etab. Beraz, ez da bidezkoa ingurumeneko lege sektorial batean gehitzea oro har zigortzeko gai hori arautzen dun lege espezifiko batek araututako alderdi guztiak. Ez da antzematen aipatutako ziurgabetasun juridikoa eta ez du ematen beharrezkoa denik abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren 34. artikulua bezalako artikulu bat errepikatzea. Izan ere, aurreikuspen hori (zehapenen konkurrentzia) beren-beregi araututa dago otsailaren 20ko 2/1998 Legean (17-18 artikuluak), baita Zehapen-printzipioen urriaren 1eko 39/2015 Legean ere. 2. Partzialki onesten dira egindako iradokizunak. Alegazio hau eta informazio publikoko fasean aurkeztutako beste batzuk hartuz, idazketa berria eman zaio 102. artikuluari eta arau-hauste gisa sailkatu beharreko zenbait jokabide gehitu dira. Hala, kaltearen eta	Partzialki onesten da.

		otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 17.1 artikuluak agintzen duen bezala, edo, aitzitik, 17.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, arau-hauste desberdinak egitate bakar batetik datozenez edo egoera berbera baliatuz —ez xedatzearena edo ingurumen-baimen bakarrean ezarritako baldintzak ez betetzearena-, arduradunari arau-hauste bakoitzarentzat ezarritako zehapenik arinenak ezarri behar zaizkion. Azkenik, otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 18.3 artikuluan xedatutakoa aplikatzeko aukera azter liteke, kasu hau aurreikusten duena: babestutako ondasun juridikoen edo aztertutako arriskuen artean komuneko punturik balego, aurretiaz ezarritako zehapenak partzialki balioko du zehatuko den arau-hauslearen babesteko xederako eta kontuan hartua izan dadin geroko zehapena mailakatzeko, hori bai zentzu aringarrian. Kasu horretan eta proportzionaltasun-printzipioak hori eskatzekotan, larritasun txikiagoko arau-hausteei edo arau-hausteen kategoriei dagozkien zehapenak ezarriko lirateke eta, salbuespen gisa, aurreko zehapena bereziki larria izandako kasuetan, geroko zehapena konpentsa liteke, arau-haustea egin dela adierazten den gorabehera. Eta ziurgabetasun hori eta, hortaz, ziurgabetasun juridikoa sortzen da abenduaren 16ko Legegintzako 1/2016 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bateginaren 34. artikuluak aurreikusten duenaren antzeko aurreikuspenik jasotzen ez delako aurreproiektuan. Horren arabera, egitate eta oinarri juridiko berberengatik, arau-hauslea zehatu ahal bada lege horri eta aplikagarriak zaizkion beste batzuen arabera,	arriskuaren kontsiderazioa aldatu da motako elementu horietako bat bezala, zehazki, gerora ezarri beharreko zehapenaren irismena mailakatzeko elementu gisa barne hartuak izan ahal izateko. Horrek guztiak eragin du araudi-testuaren zuzendaritza sustatzailea hausnarketako eta artikulu hau sakonki aldatzeko prozesu batean murgiltzea; horren emaitza gisa idatzi da proposatutako testu berria. 104. artikulua. Arau-hausteen sailkapena. 1. Lege honetan araututako administrazio-izaerako arau-hausteak honela sailkatzen dira: oso larriak, larriak eta arinak. 2. Honako egitate hauek dira arau-hauste oso larriak: a. Jarduerak eta instalazioak eraikitzea, muntatzea, ustiatzea edo lekuz aldatzea nahitaezko ingurumen-baimen integraturik gabe. b. Ohiko ingurumen-eraginaren ebaluazioaren menpeko proiektu bat egikaritzen hastea aurretiaz dagokion ingurumen-eraginaren adierazpena eskuratu gabe. 3. Honako egitate hauek dira arau-hauste larriak: a) Jarduerak eta instalazioak eraikitzea, muntatzea, ustiatzea edo lekuz aldatzea nahitaezko ingurumen-baimen integraturik edo sailkatutako jarduera-lizentziarik gabe edo sailkatutako jardueraren aurretiazko komunikazio egokia egin gabe. b) Jarduera edo instalazio baten gainean funtsezko aldaketa bat	

		dauden balizko zehapenen artean, larritasun handienekoa ezarriko zaio. Horrenbestez, komeni litzateke zehapen-araubidearen hain alderdi garrantzitsua argitzea antzeko aurreikuspen batekin. 2.- Bestalde, nabarmendu behar da aurreproiektuak ez duela arau-haustetzat hartzen, I.B eranskinean (ingurumen-baimen bakarraren menpekoak) aurreikusitako jardueren edo instalazioen eremuan, Kutsaduraren prebentziorako eta kontrol bateraturako legearen testu bateginak arau-hauste larritzat eta oso larritzat hartzen duena, hain zuzen ere, 1. Eranskinean jasotako jarduera industrial horietakoren bat garatzen den instalazioei dagokienez (ingurumen-baimen integratuaren menpekoak). Alegatzaileak adierazi du atipikoak izango liratekeela, nahiz eta aurreproiektuaren 24., 28. eta 29. artikuluetan jardueren eta instalazioen sustatzaileen betebehar bezala aurreikusten diren, honako jokabide hauek: autonomia-erkidegoko organo eskudunari ez jakinaraztea jardueretan eta instalazioetan egindako aldaketak, betiere funtsezkoak ez badira, aurreproiektuaren I.B Eranskinean aurreikusitako jarduerei eta instalazioei dagokienez; autonomia-erkidegoko organo eskudunari berehala ez jakinaraztea ingurumen-baimen bakarraren baldintzen edozein ez-betetze, ezta ingurumenean nabarmen eragiten duten gorabeherak edo istripuak; I.B Eranskinean aurreikusitako instalazio baten behin betiko itxiera egitea (edo jarduera bat behin betiko uztea), ingurumen-baimen bakarrean lurzoruaren eta lurpeko uren kutsaduraren inguruan ezarritako baldintzak urratuz, eta, horrez gain, jarduera edo instalazio baten funtsezko aldaketa bat	egitea, administrazio eskudunak baimen-titulua aldatu gabe. c) Ingurumen-eraginaren ebaluazio sinplifikatuaren menpeko proiektu bat egikaritzen hastea aurretiaz dagokion ingurumen-eraginaren txostena eskuratu gabe. d) Ingurumen-legezkotasuna lehengoratzeko ezarritako edo zehapen-prozedura baten hasieraren arabera agindutako behin-behineko eta kautelazko neurriak ez betetzea. e) Ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoaren menpeko planak edo programak onestea horiei dagokien ingurumen-adierazpen estrategikoa lortu gabe. f) Ingurumen-baimen integratuan, ingurumen-baimen bakarrean edo jarduera-lizentzian ezarritako ingurumen-baldintzak edo sailkatutako jardueraren aurretiazko jakinarazpenean jasotako baldintzak ez betetzea. g) Ingurumen-adierazpen estrategikoan, ingurumen-eraginaren adierazpenean eta ingurumen-eraginaren txostenean ezarritako ingurumen-baldintzak ez betetzea. h) Ingurumen-legezkotasuna lehengoratzeko prozeduretan eta ingurumen-kalteengatiko erantzukizuneko prozeduretan ezarritako neurriak ez betetzea. i) Sailkatutako jardueraren aurretiazko komunikazioarekin, funtzionamendu-hasieraren edo irekieraren komunikazioarekin, ingurumen-baimen integratu edo bakarraren eskaerekin edo	

		burutzea nahitaezko ingurumen-baimen bakarra lortu gabe. Hala ere, jo daiteke jokabide hori aurreproiektuaren 102.2 artikuluaren a) letran aurreikusitako motan sartzen dela. Estatuko arauan, jokabide horiek, instalazioekin lotuta guztiak -baimenaren baldintzen edozein ez-betetzeren berehalako jakinarazpena ez egitearekin lotutakoari dagokionez izan ezik, jarduerei ere aplikatu ahal zaiolako- ingurumen-baimen integratuaren araubidearen menpekoak dira eta guztiak dira arau-hauste larriak (lehenengo hirurak) eta oso larriak (horietako azkena).	sailkatutako jarduera-lizentziaren eskaerarekin aurkezten den dokumentazioan jasotako funtsezko datuen zehaztugabetasuna, faltsutasuna edo omisioa. j) Ingurumen-ebaluazioko prozeduren esparruan, nahitaezko dokumentazioan eskatutako funtsezko datuen zehaztugabetasuna, faltsutasuna edo omisioa. k) Lege honetan, administrazio publikoek emandako gaikuntza-tituluetan eta ingurumen-ebaluazioko prozeduren esparruko adierazpenetan ezarritako komunikatzeko, jakinarazteko eta informatzeko betebeharrak ez betetzea. l) Administrazio eskudunaren ikuskapen-lana oztopatzea, aktiboki edo pasiboki, edo jardueren edo instalazioen titularrei eskatutako datuak ematea ukatzea. Lankidetza-erakundeei eskatutako baldintzak ez betetzea edo horiek aplikagarria zaien araudian xedatutakoaren aurkako jarduerak burutzea. m) Ingurumenean isurtzea, uretan, atmosferan edo lurzoruan, produktu edo substantzia batzuk, egoera solidoan, likidoan edo gasean, edo energia-formetan, baita soinu-forman ere, baldin eta horiek ingurumen-baldintzak narriatzen badituzte edo oro har oreka ekologikoari eragiten badiote eta antolamendu juridikoa urratuz isurtzen badira. n) Aurreko atalean oso larri bezala sailkatutakoak, baldin eta ingurumenean edo pertsonengan izandako eraginagatik ez direnean ematen horrela sailkatzeko kasuak.	

			4. Arau-hauste arinak dira aurreko atalean larri bezala sailkatutakoak, baldin eta ingurumenean edo pertsonengan izandako eragin txikiagatik ez direnean ematen horrela sailkatzeko kasuak.	
103. artikulua. Arau-hausteen preskripzioa	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA.	Aurreproiektuaren 103. artikulua arau-hausteen preskripzioari buruzkoa da eta, 3. paragrafoan, argitzen da, jarraitutako arau-hausteen kasuan, preskripzio-epea jarduera bukatzen denetik edo arau-haustea benetako bihurtzen den azkenengo egintza bukatzen denetik zenbatuko dela. Etengabeko arau-hausteen kasuan, aldiz, epe hori jokabide arau-hauslea bukatzen denetik zenbatuko da. Alegatzaileak adierazi du dies a quo ezartzea egokiagoa iruditzen zaiola Kode Penalak ezartzen duen preskripzio-epea zenbatzeko. Izan ere, horren 132.1 artikuluak nabarmentzen du, jarraitutako delitu baten kasuan, preskripzio-epea azkenengo arau-haustea egiten denetik zenbatzen dela eta, etengabeko preskripzioaren kasuan, aldiz, egoera bidegabea deuseztatzen den egunetik zenbatzen dela.	Zuzendaritzak egindako hobetzeko proposamena osorik hartzen da. Proposatutako testua gehitzea: “egoera bidegabea deuseztatzen den egunetik”.	Onesten da
104. artikulua. Zehapenak	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA.	1. Aurreproiektuaren 104. artikuluan, kontuan hartuta arau-haustea egiteagatik lortutako onura irizpide bat dela zehapena mailakatzeko (aurreproiektuaren 105.e artikulua), eraginkorragoa izan daiteke beste aurreikuspen bat jasotzea, zehazki, kasu hau aurreikusten duena: isunaren zenbatekoa arau-haustea egiteagatik lortutako onura baino txikiagoa denean. Helburua da, kasu horretan, zehapena, gehienez ere, arau-hausleak lortutako zenbatekoaren bikoitzera edo hirukoitzera arte igotzea, otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 11.1 artikuluan	Iradokizuna partzialki hartzen da, idazketa berria ematen da eta zehapenen inguruko egungo artikuluari 2. atala gehitzen zaio: Isunaren zenbatekoa arau-haustea egiteagatik lortutako onura baino txikiagoa denean, zehapena areagotuko da, gehienez ere, arau-hausleak lortutako onuraren zenbatekoaren bikoitzera arte. Instalazioentzako itxiera terminoa eta jarduerentzako etetea terminoa erabiltzearen inguruko alegazioa onesten da.	Partzialki onesten da.

		xedatutakoari jarraiki eta Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integraturako Legearen testu bateginaren 32.2 artikuluak aurreikusten duen bezala. 2. Bestalde, ez da ulertzen uztea eta ixtea adierazpenen arteko bereizketa; izan ere, bi adierazpenek egiten diete erreferentzia jarduerei eta instalazioei. Horrez gain, ez da ulertzen arau-hauste oso larrientzako zehapena, hau da, jardueraren behin betiko etetea, bi urte eta bost urte bitarteko epe batean aldi baterako etetearekin parekatzea. Beste zehapen batzuek hauxe eragiten dute: baimena indargabetzea edo etetea; jarduera egikaritzeko desgaitzea; aldi baterako galtzea lankidetza-erakundearen izaera, baita jarduerak edo instalazioak aldi baterako ixtea eta etetea ere. Zehazki, horien iraupenaren arabera, arau-hauste larriak edo oso larriak ezarriko dira eta, uste dugu, horiek zigortzeko maila batean edo bestean kokatzeko modurik egokiena dela aldi baterako itxierarako erabilitakoa, hau da, indargabetzea edo etetea eta desgaitzea, hau da, aldi baterako itxieraren kasua oso arau-hauste larrientzat "bi urte eta bost urte bitarteko epean "eta oso larrientzat "gehienez ere, bi urtez". 3. Azkenik, artikulu honen 2. paragrafoak xedatzen du isunak bateragarriak izango direla ohartarazpeneko eta aldi baterako eteteko eta itxierako zehapenekin, horiek guztizkoak edo partzialak izan. Hori desberdina da Estatuko oinarrizko legeriarekin alderatuta; izan ere, horrek aurreikusten du arau-hauste oso larriek eragingo dutela zehapenen katalogoan aurreikusitako guztiak edo batzuk ezartzea,	Zehapen-maila horiek aukeratu dira deskribatutako arau-hausteekiko proportziokoak direlako jo delako. Alegazioa hartzen da eta aurreikuspen hau gehitzen da: "Larriek zehapenen katalogoan aurreikusitako guztiak edo horietako batzuek ezartzea eragin dezakete". Hori gehituko da 104. artikuluaren 1. paragrafoan eta 2. atala ezabatuko da.	

		behin betiko itxiera barne. Horrek xedatzen du nabarmen murriztuko dela Estatuko oinarrizko legeriak ezarritako zehapenen larritasuna. Horrela, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bateginaren 31.2.c) artikuluak, lege honen 35. artikuluan aurreikusitako behin-behineko neurrietatik eratorritako betebeharrak betetzen ez direnerako eta ondorioz pertsonen osasuna edo ingurumena arrisku larrian jartzen denerako, aurreikusten du, isunaz gain, instalazioen behin betiko itxiera ezarri ahal izatea, baita jarduera egikaritzeko desgaikuntza ere, urtebete eta bi urte bitarteko epean. Aitzitik, aurreproiektuaren 104.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, neurri horiek urratzen dituenari (102.2.h artikulua), isunaz gain, aldi baterako etetea edo itxiera soilik ezarri ahalko zaio, gehienez ere, bost urtez.		

105. artikulua. Zehapenen mailaketa	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	105. artikuluak ezarri beharreko zehapenen mailaketa arautzen du. Kontuan hartuta zehapena arau-haustea sortzen duen egitatearen larritasunera egokitu behar dela, zenbait irizpide ezartzen dira zehapena mailakatzeko. Besteak beste, hauxe ezartzen da: "*Epai irmoak hala finkatu duenean, arau hauste bat baino gehiago egiteagatik errepikatu izana*". Puntu honetan, adierazi behar dugu, errepikapena egotea, urte batean izaera bereko arau-hauste bat baino gehiago egiteagatiko berrerortzearekin batera, ebazpen irmoak hori adierazi duenean, indargabetutako azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 131. artikuluan aurreikusitako irizpideetako bi izan direla. Izan ere, horiek zalantza asko eragin zituzten horien aplikazio praktikoaren inguruan, figura bataren eta bestearen arteko begi bistako analogiak kontuan hartuta. Horrela, berrerortzeak zehapenaren egokitzapenaren gainean eragiten du eta, kasu batzuetan, arau-haustearen larritasuna areagotzen du, izaera bereko arau-hausteen errepikapenean oinarrituta, hau da, ebazpen irmoan antzemandako manu beraren edo antzeko baten arau-hausleak. Bestalde, errepikatzea izaera desberdineko arau-hausteak errepikatzearen ideian oinarritzen da, ezarriko den zehapena mailakatzeko haztatu beharreko irizpide gisa, nahiz eta hori, printzipioz, kasu bakoitzeko arau-hauste zehatzerako adierazitako mugen barruan egiten den. Horrez gain, eztabaidatu egin da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 131. artikuluan aipatutako irmotasunak administrazio-irmotasunari edo	Ohar horri eta beste batzuei jarraiki, hasierako zirriborroaren 105. artikuluari idazketa berria eman zaio; orain 107. artikulua da hori. 107. artikulua. Zehapenen mailaketa. Zehapenen ezarpenean behar besteko egokitzapena mantendu beharko da arau-haustearen larritasunaren eta aplikatutako zehapenaren artean, bereziki aintzat hartuz irizpide hauek zehapena mailakatzerakoan: a) Nahita egin ote den. b) Epai irmoak hala finkatu duenean, arau hauste bat baino gehiago egiteagatik errepikatu izana. c) Epai irmoak hala finkatu duenean, Lege honetan sailkatutako izaera bereko arau hauste bat baino gehiago egiteagatik errepikatu izana epai irmoa jakinarazi den egunetik kontatzen hasita hurrengo lau urteetan. d) Ingurumenean edo pertsonen osasunean eragindako kalteak edo arriskuak. e) Arau-hauste hori egiteagatik lortutako onura. f) Arau-hauslearen gaitasun ekonomikoa. g) Aringarri gisa, zehapen espedientea abian jarri baino lehen, arau hauste gisa sailkatutako jarduera jakin batek ingurumenari eragindako ondorio kaltegarriak konpontzen edo gutxienera eramaten dituzten neurri zuzentzaileak aplikatu ote diren.	Partzialki onesten da.

106. artikulua. Konfiskazioa	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA.	106.2 artikuluak salbuespen hau ezartzen du: Ezin konfiskatu ahal izango da objektuak edo tresnak asmo oneko hirugarren batenak direnean, arau haustearen erantzulea ez denean eta legez eskuratu dituenean, ez badago ingurumenari edo pertsonen osasunari kalte egiteko berehalako arriskurik. Aurreikuspen hori legezkotasun zalantzagarrikoa da, hain zuzen ere, idatzita dagoen terminoetan.	Zuzendaritzak ez du argitu bere ustez zer den manuan zalantzako legezkotasunekoa dena; hortaz, ezin izan da behar bezala aztertu analisi zuzena bideratzeko eta, hala badagokio, kontuan hartua izan dadin. Hala eta guztiz ere, alde honek mantentzen du, gure ikuspuntutik, artikuluaren idazketa guztiz bateragarria dela indarreko legeriarekin.	Ez da onesten

109. artikulua. Behin-behineko neurriak	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	109. artikuluak arautzen du zehapen-prozeduraren esparruan behin-behineko neurriak hartzea (97. artikuluan aurreikusten dira ingurumen-legezkotasuna lehengoratzeko prozeduraren esparruan hartu beharreko behin-behineko neurriak). (...) Horrenbestez, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 56. artikuluaren xedapenak besterik gabe aplikatu ahal zaizkio zigortzeko administrazio-prozeduretan behin-behineko neurriak hartzeari. Horrela, prozedura horietan horrelako neurriak ezartzeko aukera ez dago mugatuta jadanik arauetan hori aurreikusitako kasuetara, ezta dagozkien arau espezifikoetan zehatzago aurreikusitako neurrietara ere (Zigortzeko ahalmena gauzatzeko Prozeduraren Arautegiaren 15.2 artikulua). Izan ere, oro har, beharrezkotzat hartzen den edozein neurri ezarri ahalko da, eman litekeen ebazpenaren eraginkortasuna bermatze aldera. Gauzak horrela, kasu honetan zehapen-prozeduraren esparruan aurreikusi denez, aplikagarria izango zaio Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 63. artikuluan xedatutakoa. Horren arabera, zigortzeko prozedurak beti hasi behar dira ofizioz eta organo eskudunak hori erabakita. Bestalde, artikulu honen 1. paragrafoan, hasteko, "prozedura abiarazita "adierazpena erabiltzen da eta hori ez dator bat aurrerago adierazitako "edozein unetan "denbora-lokuzioarekin. Baliteke hori ekarri izana indargabetutako (Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak indargabetuta) Zigortzeko Ahalmena Gauzatzeko prozeduraren Arautegiaren 15. artikuluaren idazketatik. Izan ere,	Oharraren lehenengo partea azalpenekoa besterik ez da. Aipatzen da Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 63. artikuluan xedatutakoa izango zaiola aplikagarri eta ez da erreferentzia hori ulertzen. Izan ere, horren arabera, zehapen-izaerako prozedurak beti hasi behar dira ofizioz eta organo eskudunak erabakita. Lehenik eta behin, adierazi behar da behin-behineko neurriak hartzeko prozedura bat hastea ez dela berez zehapen-prozedura bat edo zigortzeko prozedura gehigarri bat, arriskuan dauden eskubideak edo interesak kautelaz babesteko beharrari erantzuten baitio. Bigarrenik, adierazi behar da, Euskadin, berezitasuna dagoela zehapen-arloan, hain zuzen ere, otsailaren 20ko 2/1998 Legea existitzen delako. Horregatik, onargarria da aldeak eskatuta zehapen-espedienteak hastea (ikusi 2/1998 Legearen 35. artikulua); horrek legez posiblea den desadostasun bat eragiten du alegatzaileak aipatutako Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 63. artikuluan xedatutakoari dagokionez. Egindako proposamena aztertuta, jotzen da idazketa argia dela eta ez duela zalantzarik sortzen, nahiz eta ez duen hitzez hitz jarraitzen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoa. Ez da uste kontraesankorra denik aurreproiektuan ohartaraztea (109.1 artikulua) edozein unetan (behin prozedura hasita) hartu ahalko direla behin-behineko neurriak. Lehenengo atal honetan arautzen dira hasitako zehapen-prozeduraren barruan har daitezkeen kautelazko neurriak; hala, jakina den bezala, horrek	Partzialki onesten da.

110. artikulua. Ordezkatzeko eta kalteak ordaintzeko betebeharra	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA.	2. paragrafoari dagokionez, iruzkin hau egin behar dugu (...); ezin da ulertu konponketako bi kasu desberdin aurreikustea –batean 26/2007 Legean aurreikusitako konponketa-metodologia aplikatu ahalko da eta, bestean, nahitaez aplikatu beharko da–, kontuan hartuta aipatutako legeak soilik aurreikusten duela baliabide naturalengan ondorio kaltegarri nabarmenak eragiten dituzten ingurumen-kalteak konpontzea –hori bateragarria da asaldatutako egoera lehengoratzearekin eta administrazioari kalteak ordaintzearekin–. Hala, gainerako kalteetarako, horien konponketa lege sektorialetan aurreikusten da. Hortaz, 2. paragrafoaren lehenengo bi tituluetan aurreikusitako nabarmenak ez diren ingurumen-kalteen kasuan, hori 1. paragrafoaren aurreikuspenean babestuta egongo litzateke. Izan ere, ezin da bestelako konponketarik ondorioztatu kalte horietatik, asaldatutako egoera lehengoratzearena eta administrazioari eragindako kalteak ordaintzearena izan ezik.	Berez, ez da iradokizun bat, baizik eta iruzkin baten azalpena, alegatzaileak berak esandakoaren arabera. Aurreproiektuak ingurumen-kalte nabarmenengatik erantzukizunak eskatzeko aukera aurreikusten du eta hori bereizten du 99. eta 100. artikuluen zehapen-prozedura bat artikulatzeko premiarengandik. Hori guztia Estatuko oinarrizko legerian xedatutakoaren arabera (26/2007 Legea). Aztertzen ari den artikuluan aurreikusten den kasua hauxe da: ingurumen-kalteak existitzea eta horien konponketa eskatzea zehapen-espediente baten barruan. Ondorio horietarako, aurreikusten da, nabarmenak ez diren ingurumen-kalteen aurrean bagaude, 26/2007 Legean hautazko bezala ezarritako metodologia erabiltzea. Izan ere, alegatzaileak adierazitakoaren aurka, araudi sektorialak ez du inolako metodologia zehatzik ezartzen narriatutako egoera nola konpondu behar den xedatze aldera. Kalte horiek nabarmenak izan daitezkeenerako, ingurumen-erantzukizuneko araudian aurreikusitako metodologia erabiliko da, hau da, 26/2007 Legean aurreikusitakoa.	Esposizio-alegazioa
111. artikulua. Isun hertsatzaileak eta betearazte	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN	111. artikuluan arautzen da isun hertsatzaileak ezartzeko aukera, baita betearazte subsidiarioa ezartzeko aukera ere arau-hauslearen kostura, betiere horrek ez baditu kalteak lehengoratzen eta konpontzen edo ez badu eragindako kalte eta galerengatik ezarritako kalte-ordaina asetzen. Neurri horiek hautazko izaerarekin ezartzen dira eta ez dute inolako baldintzarik edo inguruabarrik bete behar. Zehazki, hori egiten	Iradokizuna partzialki hartzen da eta idazketa berria ematen zaio 111. artikuluari (egungo 113. artikulua). 113. artikulua. Isun hertsatzaileak eta egikaritzapen subsidiarioa. 1. Arau hausleek eragindako kalteak lehengoratzen eta konpontzen ez badituzte, edo eragindako kalteak eta galerak	Partzialki onesten da.

subsidiarioa	ZUZENDARITZA	du aurreproiektuaren 98. artikuluak neurri zuzentzaileen kasurako, hau da, isun hertsatzaileen ezarpena baztertzen du kasu zehatz hauetara: kalteen berehalako mehatxurik ez dagoenean edo neurrien ezarpenean gerta daitekeen azterpenak arriskuan jartzen ez duenean ingurumena edo pertsonen osasuna. Xedapen horri jarraiki, narriatutako egoera zigor-hertsaduraren bidez edo zuzenean betearazte subsidiarioaren bidez lehengoratzeari dagokionez, agian egokia izango litzateke hemen antzeko aurreikuspen bat ezartzea, lehentasuna ematen diona bigarren neurri honi ingurumenarentzako edo pertsonen osasunerako berehalako mehatxua dagoenean, hain zuzen ere, lehengoratzeko betebeharra ez betetzeak eragindakoa. Gainera, horrek segurtasun juridiko handiagoa emango luke. Isunen zenbatekoari dagokionez, artikulu honen 1. paragrafoak ezartzen du horiek ez dutela gaindituko egindako arau-hausteagatik ezarritako isunaren % 10a; aurreproiektuaren 98.2 artikuluak, aldiz, ehuneko hori aplikatzen dio egikaritzen diren neurri guztien zenbatetsitako kostuari. Gauzak horrela, isun hertsatzaile horiek ez dute zehapen-izaerarik zentzu zorrotzean —hain zuzen ere, horregatik dira bateragarriak egitate horiengatik ezarritako zehapenekin (Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 103.2 artikulua)—; horregatik, uste dugu egokiagoa dela, aurreproiektuaren 98.2 artikuluak egiten duen bezala, horiek egikarituko diren neurri guztien zenbatetsitako kostuaren menpekoak izatea. Horrela, neurri zuzentzaileak ezartzeko esparruan eta zehapenen esparruan ezar daitezkeen isun hertsatzaileek proportzio bera izango dute.	ordaintzen ez badituzte aurreko artikuluan finkatutakoaren arabera, aldizkako isun hertsatzaileak jarri ahal izango dira dagokion aginduan finkatutako epea igarotakoan, edo arau hauslearen kontura eta berak ordainduta agindu ahal izango da egikaritze subsidiarioa 2. Isun hertsatzaileak jartzen badira, agindua betetzeko orrian nahitaez zehaztuko dira ezarri daitezkeen isunen zenbatekoak eta isun horiek ordaintzeko epeak. Nolanahi ere, obligazioa bete ahal izateko bezain luzeak izango dira epe horiek. Behin isun hertsatzailea ezarri ondoren isun hori eragin duen errekerimendua betetzen ez bada, aldizkako isun hertsatzaile gehiago jarri ahal izango dira agindutakoa betetzeko moduko epeetan. Isun hertsatzaileak independenteak dira eta bateragarriak zehapen gisa ezar daitezkeen isunekin. 3. Isun hertsatzaile bakoitzaren zenbatekoak ez du egindako arau haustearen ondorioz finkatutako isunaren ehuneko hamarra gaindituko. Isun hori egikaritu beharreko berreskuratze-neurri guztien zenbatetsitako kostua baino apur bat txikiagoa izatekotan, isun hertsatzailea kalkulatzeko aplikatu beharreko ehuneko hamarra berreskuratze-kostu horrekin lotuta egongo da. 4. Ingurumenaren alorreko erantzukizunari buruzko araudian finkatutakoaren arabera bideratuko da ingurumenaren alorreko kalte adierazgarriak prebenitzeko, saihesteko eta konpontzeko neurriak aplikatzera behartzen duten ebazpenen derrigorrezko egikaritzea	

112. artikulua. Kontratatzeko debekua	OGASUN ETA EKONOMIA SAILA. KONTRATAZIO PUBLIKOAREN AHOLKU-BATZORDEA	Artikulu horiek guztiak dira oinarrizkoak eta, horregatik, ezin ditu beste autonomia-erkidegoko araudi batek ordeztu. Beraz, jotzen da zorroztasunez errespetatu behar direla kontratatzeko debekuaren kausa izan daitezkeen ez-betetzeak edo arau-hausteak, baita Sektore Publikoko Kontratuen Legeak horiei esleitzen dizkien ondorioak eta salbuespenak ere. Horrela, aurreproiektuaren 112. artikuluaren idazketa berria proposatzen da: “Ez-betetze batengatik edo kontratu baten funtsezko klausulak ez betetzeagatik epai edo zehapen irmo bat ezarri zaien enpresek, hori guztia ingurumenaren alorrean eta kontratu publikoen araudian ezarritako betekizunei jarraiki, ezingo dute araudi horretan zehaztutako Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan kontratatu, bertan xedatzen diren salbuespenetan izan ezik. Antzeko terminoetan, diru-laguntza publikoen araudia bete beharko da.”	Kasu honetan, adierazi behar da lege-aurreproiektuaren xedea ez dela kontratuen legeria erreproduzitzea, baizik eta kontratatzeko debeku berri bat gehitzea. Hori EAEko lurralde-eremuan ingurumena babesteko neurri gehigarri gisa ulertu behar da. Iradokizuna hartzen da, hau da, zehapena irmoa izan behar dela administrazio-bidean eta egungo 114. artikuluaren testu berrira gehitzen da. Era berean, erreferentzia bat gehitzen da diruzko zehapena zatikatuta ordaintzen ari den kasuen inguruan.	Partzialki onesten da.
	LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA	Harik eta zehatutako enpresak dagozkion neurri zuzentzaileak egikaritzen ez dituen arte eta zehapena ordaindu arte, aurreproiektuaren 112. artikuluak neurri ez zehatzaile bezala aurreikusten du kontratatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko diru-laguntzak eskuratzeko debekua, hain zuzen ere, arau-hauste larri eta oso larriengatik zehatutako enpresentzat. Debekua mantenduko litzateke zehapena irmoa ez izan arren.	Kasu honetan, adierazi behar da, aurretik egin den bezala, lege-aurreproiektuaren xedea ez dela kontratuen legeria erreproduzitzea, baizik eta kontratatzeko debeku berri bat gehitzea. Hori EAEko lurralde-eremuan ingurumena babesteko neurri gehigarri gisa ulertu behar da. Aurreproiektuaren testua aldatuko da adierazteko zehapena irmoa izan beharko dela administrazio-bidean. Era berean, erreferentzia bat gehitzen	Onesten da

		Hala eta guztiz ere, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 71.2 artikuluan ezartzen du, funtsean, ezingo dituztela 3. artikuluan aurreikusitako erakundeekin kontratuak egin ingurumenaren arloan egindako arau-hauste oso larri batengatik irmoki zehatutako pertsonek. Hori guztia indarreko araudian ezarritakoa betez. Kontuan hartu behar da Sektore Publikoko Kontratuen Legeak oinarrizko izaerarekin ezarri duela kontratatzeko debekua soilik xedatzen dela arau-haustea dagoenean.	da diruzko zehapena zatikatuta ordaintzen ari den kasuen inguruan.	
	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	112. artikuluak, arau-hauste larriengatik edo oso larriengatik zehatutako enpresentzako zehapen osagarri gisa, kontratatzeko debekua aurreikusten du. Horrez gain, ezingo dituzte EAEko sektore publikoko diru-laguntzak jaso dagozkien neurri zuzentzaileak egikaritu eta zehapena ase arte. Kontu horren inguruan mintzatu da Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa, zehazki, zentzu honetan: 268. Aipatutako desgaikuntza zehapen autonomo, desberdin eta bereziki kasu bat da balizko beste zehapen batekiko: "legean aurreikusitako jarduerak egikaritzeko desgaikuntza hurrengo bost urteetan zehar eta, hala badagokio, administrazio-baimena indargabetuko eta, hala badagokio, homologazioa ere bai "[89.4a) artikulua]. 269. Teknikoki, "kontratatzeko debeku "baten aurrean gaude, eduki hori duen administrazio-zehapen baten arabera ezarritakoa. Hau da, ez gaude ex lege eta oro har kontratatzea eragozten duen egoera baten aurrean —Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 49.1	Berez ez da iradokizun bat, baizik eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak erabilitako argudioen helarazpena, azkenik, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen desberdina den araudi sektorial batek ezarritako kontratatzeko debekuaren antzeko kasu baten legezkotasuna onesteko. Adierazi behar da alegatzaileak partekatutako zalantza horiek aukerakoak soilik direla eta ez izaera juridikokoak. Gure ikuspuntutik, zehapen osagarri hau pizgarri argia izango da zehapena eta neurri zuzentzaileak egikaritzeko. Era berean, ingurumen-babeseko elementu gehigarritzat hartu behar da, indarreko ingurumen-legerian aurreikusitako tresnen multzoari gehituko zaiona.	Ez da onesten

		c) artikuluak aurreikusitakoa bezalakoa—, baizik eta lege sektorial batek ezarritako kontratatzeko debeku espezifiko baten aurrean, administrazio-zehapen forman, hain zuzen —Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 49.2 c) artikuluak hartzen duena bezalakoa, besteak beste—. 270. Lehenik eta behin, adierazi behar da manu hori —Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 49.2 c) artikulua —ez dela oinarrizkoa; beraz, ez zaie oro har aplikatu behar administrazio publiko guztiei. Batzordeak uste du horrekin legegile sektorialaren eskumena inplizituki aitortzen dela; legegile hori autonomia-erkidegokoa izan daiteke eta eskumena aitortzen zaio horrelako zehapen bat gehitzeko zehapenen balizko multzoan, betiere kontratatzeko debeku hori bere eskumen-arloan sartzen denean. 271. Hala eta guztiz ere, nahiz eta onartzen den nahikoa eskumen-oinarriarekin aurkez daitekeela, horrek ez du esan nahi hori txertatzea segurua denik. Arau-hauslearen ondare juridikoan eragin nabarmena duen zehapen-neurri bat da eta ezartzen den sektoretik harago doa —ez baita gizarte-zerbitzuen eremura mugatzen—; gainera, izaera berritzailearekin ezartzen da —ez da Gizarte-zerbitzuen Legean agertzen—. Beraz, orain arte ez da sektorearen berezitasun eta xedeekin lotuta egon eta, horrez gain, ez dauka baliokiderik ondasun juridiko bera eta arauak hausteko antzeko arriskua parteka ditzaketen bestelako legeetan —Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legea—. 272. Halaber, zalantza horiek diseinatuta dagoen modura		

		hedatzen dira —proportzionaltasun-printzipioaren errespetuan—; izan ere, gizarte-zerbitzuen eremuan jarduerak egikaritzeko desgaikuntza-zehapena baino denbora-epe luzeago batean heda daiteke —eremu horretan eragin du jokabide arau-hausleak eta zehapenak bertan beteko du bere prebentzio- eta konponketa-xedea—. Hala, zalantza horiek hedatzen ditugu xedapen honetara ere bai.		
114. artikulua. Publizitatea	EMAKUNDE	Sexuaren aldagaia gehitzea; horrela, zehatutako gizonezkoen eta emakumezkoen kopurua ezagutu ahalko dugu, baita egindako arau-haustea ere.	Arau-hauste gehienak pertsona juridikoek egiten dituzte; hala ere, egindako proposamena nahitaezko araudi-garapenean gehitzeko aukera aztertuko da generoaren arabera bereizitako datuak izateko.	Ez da onesten

	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	114. artikuluari erreparatuz, ohartarazi behar dugu gerta daitekeela zehapen larrien eta oso larrien publizitatearen arteko eskubide-aurkaketa, hauxe barne hartuta: arduradunen identitatea; artikulu honen laugarren paragrafoan aurreikusitako arau-hausleen erregistroa eta Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa. Aipatutako ekimenera joz, lehenik eta behin, adierazi behar da zioen azalpenean ez dela lerro bat ere erabiltzen neurri horien xedeak oinarritzeko ─besteak beste, horiek aipatzen ditu neurri osagarri gisa, "arau-hausleak egitea sustatzen ez dutenak─". Hala ere, horregatik ondorioztatzen da prebentzio- edo disuasio-xedeei erantzuten dietela, baina ez batere makala bere osagarri errepresiogilea edo ordainsari-izaerakoa berez, publizitate horrek eragiten duen ukitutakoen ohorerako eskubidearen urritasuna dela-eta. Azkenik, neurri horien zigortzeko izaera, ingurumen-diziplinara zuzendutako tituluan duen kokapena gorabehera, egitate honetatik eratortzen da: arau-hausleen identitatearen argitalpenak, baita hori publikoarentzako eskuragarri dagoen erregistro batean inskribatzeak ere, funtsezko eskubide bat gauzatzea mugatzen du, hau da, pertsona fisikoen datu pertsonalak babesteko eskubidea. 114. artikuluaren hirugarren paragrafoak xedatzen du publizitate horrek barne hartuko dituela datu hauek: arau-hauste larrien edo oso larrien arduradunaren identitatea ─izen-abizenak pertsona fisikoen kasuan eta gizarte-izendapena edo izen soziala pertsona juridikoen kasuan eta, hala badagokio, bien IFZ- egindako arau-haustea;	Justifikazio luze eta arrazoitu horrek ez gaitu eramaten manua ezabatu behar denaren ziurtasunera; izan ere, horrek prebentzio-izaera argia dauka. Zehapen-araubidea indartzen duen neurri osagarri bat da eta larritasun handieneko kasuetara mugatuta dago. Hala balegokio, arauzko araudiak aipatutako zuhurtzia batzuk gehituko lituzke, baina ulertzen dugu manua mantendu behar dela. Nabarmendu behar da, zuzendaritzak berak azaldu duen bezala, berriki beste eremu batzuetan egondako araudi-garapenetan, besteak beste, zerga-eremuan edo, adibidez, Hondakinei eta kutsatutako lurzoruei buruzko uztailaren 22ko 22/2011 Legea bezalako oinarrizko ingurumen-arauetan, arau-hausleen publizitate-neurriak ere txertatzen direla, hau da, lege-aurreproiektuan ezarri nahi dena bezalakoa. Arau horiek analisi guztiak eta beharrezko zuhurtzia juridikoak gainditu dituzte onetsiak izateko eta aplikatu ahal izateko; hala, kasu honetan ere gainditzea espero dugu, zehazki, xedapen orokorrak aplikatzeko jarraibideak izapidetzen diren bitartean.	Ez da onesten

		ezarritako zigorra eta eskatutako lehengoratzeko eta kalteak ordaintzeko betebeharren laburpena, hala badagokio. Arau-hausleen erregistroari dagokionez, nabarmendu behar da laugarren paragrafoan aurreikusitako erregistroa publikoarentzako eskuragarri egongo denaren erreferentzia bakarra errealitatean zioen azalpenean dagoela. Izan ere, bertan, epai irmoa jaso duten arau-hausle publikoak eta pribatuak inskribatzeko arau-hausleen erregistro bat sortzeko aurreikuspenaren ondoren, hauxe adierazten da*: "Ildo beretik, arau-hauste horiek egiteagatik ezarritako zehapenei publizitatea ematea aurreikusten da, baita horien erantzuleen identitateari ere".* Laburbilduz, datu pertsonalek, identifika daitezkeen eta ezin daitezkeen pertsonei buruzkoak, 18 CE artikuluaren eskubideen babesetik eratorritako mugak dituzte eta, gainera, Datuak Babesteko Lege Organikoaren preskripzioen menpe daude. Horrez gain, zigor- edo diziplina-prozedura batean daudenak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 13.d) artikuluaren menpekoak dira, hori guztia Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 15. artikuluari dagokionez. Zehazki, horrek horrelako informazioa eskuratzeko eskubidea mugatzen du, behintzat hasiera batean, legeak hori egitea babesten duenean izan ezik. Hori gorabehera, publiko egin nahi den informazioaren izaera bereziak xedatzen du, legegileak, lortu nahi den xedea ikusita, kasu honetan ez dagoena oso definituta, jokoan dauden interesak haztatu beharko		

		dituela, horretarako proportzionaltasun-printzipioa betetzen den aztertuz. Ildo beretik, kontuan hartuta aurreproiektuan ez direla neurriak hartzen datuen babeserako eskubidearekiko eragina arintzeko edo ahazte digitalerako eskubidea bermatzeko, adibidez, hauek: aldizkari ofizial batean argitaratzea saihestea —hori publikoarentzako iturri eskuragarri bat da Datuak Babesteko Lege Organikoaren arabera—; informazio hori bilatzaileen arabera jarraitu ahal izatea saihesten duen formatu batean argitaratzea (desindexazioa); zerrenda eskuragarri dagoen epea mugatzea, etab. Horrez gain, kontuan hartu behar da argitalpenak jurisdikzio-bidean irmoak ez diren zehapenei eragin diezaiekeela eta, hortaz, geroko ebazpen judizial batek aldatu ahal dituela. Hala, ez du ematen neurri honek aipatutako proportzionaltasun-judizioa gainditzen duenik. Beraz, arau-hauste larri edo oso larri baten erantzulea den pertsona fisikoaren identitatea argitaratzea ez da egokia eta, horregatik, jotzen da hori kendu beharra dagoela. Nolanahi ere, artikulu honen laugarren paragrafoan aurreikusitako erregistroaren sorreraren aurreikuspena mantentzekotan, pertsona fisiko arau-hausleen datu pertsonalak alde batera utziz, erantzukizuna eta zehapenen preskripzioa aldatzeko kausak antzemateko ondorioetarako, gomendagarria izango litzateke inskripzio horiek deuseztatzeko epe bat aurreikustea.		

115. artikulua. Ordezko ingurumen-prestazioa	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	115. artikuluak arautzen du ordezko ingurumen-prestazioa. Prestazio hori aukera bat da norbanako arau-hauslearentzat eta aukera hori honela gauzatzen da: diruzko isuna lehengoratzeko, kontserbatzeko edo ingurumenarentzako onurak eragiten dituen hobetzeko prestazio batekin ordezteko aukera eman ahal dion prozedura bat hasteko eskatzen da. Aurrekoa gorabehera, legezkotasun-printzipioa betetze aldera, gehiago zehaztu beharko litzateke prestazioaren eduki materiala, baita hori ezartzeko prozedura ezarri ere, nahiz eta arauzko bidearen bitartez den, eta, horrela, ekimenak zehapen-organoari bi zentzuetan esleitzen dion gehiegizko hautatzeko aukera mugatu. Zentzu horretan, hori arautzen duen arautegiak balizko prestazioen zerrenda-gida bat jaso lezake eta zehapena irmo bihurtzen denetik eskaera egiteko dagoen epea zehaztu lezake; horrez gain, ebaluazio-mekanismoen baliokidetasunak, egikaritzapena eta arauketa ezartzeko metodoa ezar lezake, baita ez betetzekotan egon daitezkeen ondorio juridikoak ere.	Manuaren idazketa mantendu behar da; hala ere, gerta daiteke etorkizuneko araudi-garapenean ordezko ingurumen-prestazioaren alderdiren bat xehatu behar izatea. Nolanahi ere, zuzendaritzak proposatzen duen prestazioaren eduki materiala xehatzea zaila da, kontuan hartuta gerta daitezkeen kasuak anitzak direla.	Ez da onesten

XEDAPEN GEHIGARRIA				
XG	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Dirudienez, aurreikusitako xedapen gehigarriaren edukia bertan xedapen bat gehitzeko helburuarekin dago lotuta, non testuan jasotako eginkizun eta tresna berrien finantziazioa aurreikusi eta bermatu egiten den, EAEko administrazio publikoei baliabide material, ekonomiko eta pertsonal nahikoak hornitze aldera horiek egikaritzeko, arauak egindako eskumen-banaketaren ondorioz. Hala eta guztiz ere, ez dira zehatz-mehatz xedatzen finantza-nahikotasuna berma dezaketen mekanismoak, hain zuzen ere, zerbitzu berri horiek kudeatzeko. Zentzu horretan, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa mintzatu egin da horren inguruan (192/2011 Irizpena) eta hauxe adierazi du: "*Ohartarazteko modukoa da 27.5 artikuluak sartutako aurreikuspenak ez duela berez bermatzen finantza-nahikotasuna ondorio horietarako, hauxe baitio "Toki- eta foru-administrazioek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra lege honetan jasota dauden partaidetza-prozesuak errazteko beharrezkoak diren baliabidez hornituko dira"; eta 9. artikulua ere ildo berekoa da, horren arabera toki-erakundeei "laguntza teknikoa emango die Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, eta dagokien finantza-nahikotasuna izango dute". Legeak, egin-eginean ere, ez baitu zerbitzu berrien finantziazioa bermatzeko mekanismorik ezarri.*"	Aurreproiektuari erantsitako justifikazio- eta ekonomia-memorian, xehetasunez aztertu egin dira giza bitartekoen beharrak eta horiek eragingo lituzketen kostuak ere bai. Hala ere, hori soilik egin da EAEko administrazio orokorrarentzat; beraz, gainerako administrazio publikoek, eginkizun eta eskumen berriak bere gain hartzerakoan, bitarteko gehiago behar dituzten heinean, antzeko ariketa bat egin beharko dute. Ezin da lege honen xedea izan zehaztasunez ezartzea "finantza-nahikotasuna berma dezaketen mekanismoak", uste baitugu administrazio publiko bakoitzaren barnean artikulatuko direla dagozkien mekanismoak.	Ez da onesten

	FUNTZIO PUBLIKOKO ZUZENDARITZA	Zuzendaritza honek adierazten du, behin Euskadiko Ingurumen-administrazioaren Legea onetsita, Gobernu Kontseiluak lanpostuen zuzkidura berrien sorrera baimendu beharko duela, betiere beharrezko aurrekontu-kontsignatzea badago eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza honek aldeko txostena igorri ostean. Txosten honetan, legeak sortutako premia berriak aztertuko dira eta horiek, hasiera batean, administrazio honen zerbitzura lan egiten duten langileekin asetzeko aukera ere bai, ahal den neurrian, alegia. Horretarako, lanpostuak berriz atxikitzeko figurak erabiliko dira; giza baliabideak arrazionalizatzeko programak; mugikortasuna lanpostuen atxikipen-aldaketagatik edo zerbitzu-eginkizunetan estaltzeagatik eta langileak berriz esleitzeagatik. Hori guztia egingo da Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legearen 18.2, 22., 54. eta 54 bis artikuluak eta Euskal herri administrazioetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudia onartzeko den urriaren 13ko 190/2004 Dekretuaren VII eta VIII kapituluak aplikatuz.	Berez, ez da alegazio bat *estricto sensu*, baizik eta xedapen gehigarriak ezarritakoa betetzeko egin beharreko geroko izapideen azalpen bat.	Onesten da

LEHENENGO ETA BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRAK				
XI	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
1.XI	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Lehenengoan, aurreproiektu hau indarrean sartzean hasita eta bukatu gabe dauden prozedurei egiten zaie erreferentzia; bigarrenean, aldiz, finkatutako egoerei egiten zaie erreferentzia. Hortaz, ez du ematen tituluak xedapenaren bi paragrafoekin lotuta dagoenik maila berean. Aurretik azaldutako guztiagatik, gomendatzen da lehenengo xedapen iragankorra berrikusteko. Gainera, lehenengo xedapen iragankorrak hauxe dio bigarren atalean: "*Ingurumen baimen integratuen eta sailkatutako jardueretarako udal lizentzien titularren jarduerek edo instalazioek dagozkien titulu administratiboen edukiaren eta Legeak berak finkatzen duenaren araberako eskubideak erabiltzen jarraituko dute...*". Adierazi behar da, manu horren hitzez hitzeko zentzuari erreparatuz, jarduerek eta instalazioek ez dutela inolako nortasun juridikorik; hortaz, ez dute inolako eskubiderik eta, horregatik, idazketa aldatzeko iradokitzen da.	Bi alegazioak hartzen dira eta dagozkien aldaketak txertatzen dira lege-testuaren zirriborro berrian.	Onesten da

XEDAPEN INDARGABETZAILEA				
XI	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
XI	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Lege-aurreproiektuaren xedapen indargabetzaile bakarrak indargabetutako xedapenak edo enuntziatuak jasotzen ditu eta beren-beregi aipatu egiten du Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 371998 Lege Orokorra. Kontu horri dagokionez, adierazi behar da Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko indarreko Lege Orokorrak ez duela soilik aipatzen ingurumen-ebaluazioa, askoz zabalagoa baita. Besteak beste, ondare naturalaren babesarekin lotutako zenbait alderdi arautzen ditu. Hortaz, ingurumen-administrazioarenaren desberdinak diren ingurumen-gaiak arautzen ez direnez, bidezkoa da artikulua berrikustea arauketarik gabeko egoerarik ez sortzeko.	Gure aburuz, otsailaren 27ko 3/1998 Legea indargabetzeak ez du eragingo, alegatzaileak aipatzen duen bezala, ondare naturala babestearekin lotutako alderdien arauketarik eza. Horren inguruko legeria sektorial espezifikoa existitzen da, luzeagoa eta modernoagoa, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorra indargabetzearekin sor litezkeen identifikatu gabeko arauketa-gabeziak zuzenduko lituzkeena.	Ez da onesten

BIGARREN AZKEN XEDAPENA **Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen aldaketa**				
AX	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
2.AX	OGASUN ETA EKONOMIA SAILA. KONTRATAZIO PUBLIKOAREN AHOLKU-BATZORDEA	Aurreproiektuaren testuak Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legea aldatzen duen Bigarren Azken Xedapena jasotzen du. Eta aldaketa horren alderdien artean, hamabigarrenak Uraren Legearen 34 bis berria idaztea ezartzen du, testu hau proposatuz: “34 bis artikulua. Hiri-erabilerako uraren ziklo integralaren tokiko ordenantza arautzaileak Hiri-erabilerako uraren ziklo integralaren zerbitzuaren araubide juridikoa dagokion tokiko ordenantzaren bidez arautuko da. Ordenantzek, Eusko Jaurlaritzak Uraren Euskal Agentziak proposatuta ondorio horietarako ezartzen duen zerbitzuaren araudi-esparru arautzailearekin bat etorriz, kontu hauek arautu beharko dituzte: […] “d) Kontratazio-araubidearen ezaugarriak. […]” Batzorde honek ulertu nahi du ura hornitzeko zerbitzuaren kontratazio-araubidea dela, baina komeni litzateke hori argitzea; izan ere, “kontratazio-araubidea ”esaten denean, ulertu ohi da kontratazio publikokoa dela eta tokiko ordenantza batek ezingo luke hori inoiz	Alegazio horiek eta beste batzuk aztertu ostean eta legegintza-teknikako arrazoiengatik, legegintza-aldaketa proposatu duen organoak erabaki du bigarren azken xedapena ezabatzea.	Onesten da

		ezarri. Uraren sektoreko kontratazio publikoko araubidea balitz, uraren, energiaren, garraiobideen eta posta-zerbitzuen sektoreetan kontratazio-prozeduren inguruko legeria ezartzen duena da.		
2.AX	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	**Bigarren azken xedapenaren** bidez, Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legea aldatzen da. Hala eta guztiz ere, adierazpena apur bat heterodoxoa da legegintza-teknikako ikuspegitik. Lehenik eta behin, adierazi behar da aldaketaren edo gehikuntzaren arrazoiak azalpen-atalean jaso behar direla eta ez xedapenen atalean. Bigarrenik, adierazpen hau iradokitzen dugu: "BIGARREN AZKEN XEDAPENA. Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen aldaketa. Honako aldaketa hauek egiten dira Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legean: Bat. Hala, 7. artikuluko k) eta l) atalak aldatzen dira eta s) atala gehitzen da, hain zuzen ere, honela geratzen direnak: *«k) Izaera loteslearekin jakinaraztea plan orokorrak, arau subsidiarioak, plan partzialak eta plan bereziak hasiera bateko onespenaren ostean. Txosten hau udal-plangintzaren eta jabari publiko hidraulikoaren, horren babesguneen eta itsas-lurreko jabari publikoaren babeseko zortasun-gunearen babesaren eta erabileraren arteko harremanari buruzkoa izango da esklusiboki. Hori horrela izango da beste lege aplikagarri batzuek arrazoi sektorialengatik edo ingurumen-arrazoiengatik xedatzen dutena gorabehera. Aurkakotzat joko da ez bada bi hilabeteko epean*	Alegazio horiek eta beste batzuk aztertu ostean eta legegintza-teknikako arrazoiengatik, legegintza-aldaketa proposatu duen organoak erabaki du bigarren azken xedapena ezabatzea.	Onesten da

		igortzen eta jakinarazten. *l) Izaera loteslearekin jakinaraztea plan orokorrak, arau subsidiarioak, plan partzialak eta plan bereziak hasiera bateko onespenaren aurretik. Txosten hau Euskal Autonomia Erkidegoko interes orokorreko obren eta udal-plangintzaren arteko harremanari buruzkoa izango da esklusiboki, baita plangintza horren eta jabari publiko hidraulikoaren, horren babesguneen eta itsas-lurreko jabari publikoaren babeseko zortasun-gunearen babesaren eta erabileraren arteko harremanari buruzkoa ere. Hori horrela izango da beste lege aplikagarri batzuek arrazoi sektorialengatik edo ingurumen-arrazoiengatik xedatzen dutena gorabehera. Aurkakotzat joko da ez bada bi hilabeteko epean igortzen eta jakinarazten. »* *«s) Lege honetan aurreikusitako Hiriko hondakin-urak hornitzeko eta arazteko Gida-plana egitea eta Eusko Jaurlaritzari bidaltzea.»* Bi. Ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 12. artikuluan a) eta e) atalak aldatzen dira eta honela idatzita geratzen dira: *«a) Jaurlaritzari proposatzea, ingurumen-arloan eskuduna den sailaren bidez, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroen eremuan eta horren aldaketak, horien guztien onespenerako edo izapidetzerako, betiere eskumenekin bat etorriz .»* *«e) Ekialdeko Kantauriko Demarkazio Hidrografikoaren erabiltzaileen erkidegoen eta ureztatzaileen ordenantzak eta estatutuak onestea*		

		Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroen eremuan.» Hiru. Ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 13. artikuluan a) atala aldatzen da eta j) atala gehitzen da, honela geratzen dena: *«a) Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren proposamena egitea Euskal Autonomia Erkidegoaren Barne Arroen eremuan, baita horren aldaketak ere.»* *«j) Hasiera batean onestea eta Eusko Jaurlaritzari igortzea lege honetan aurreikusitako Hiriko hondakin-urak garbitzeko eta arazteko Gida-plana.»* Lau. 15. artikuluan n) atala gehitzen da eta honela idatzita geratzen da: *«n) Administrazio-kontseiluari proposatzea Hiriko hondakin-urak garbitzeko eta arazteko Gida-plana.»* Bost. 22. artikulua aldatzen da eta honela idatzita geratzen da: "*22. artikulua. Euskadiko plangintza hidrologikoa* *1. Euskadiko plangintza hidrologikoa plan hidrologikoen, Uholde-arriskua Kudeatzeko Planen eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeko, Ekialdeko eta Mendebaldeko Kantauriko eta Ebroren Arroko demarkazio hidrografikoen Lehortze-planen bidez egiten da, baita horiei dagozkien neurrien programen eta xehetasun-plan eta programa desberdinen bidez ere.* *2. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena da eta Uraren Euskal*		

		Agentziak gauzatzen du eskumen hori. Halaber, Uraren Euskal Agentziak parte hartzen du Estatuaren Administrazioari dagokion plangintzan, zehazki, Mendebaldeko Kantauriko eta Ebroko demarkazio hidrografikoei eta Kantauriko Ekialdeko Demarkazioaren erkidego arteko arroei dagokienez, zehazki, indarreko antolamendu juridikoaren arabera.»" Aurrekoa nahiko adierazgarria da aldaketa-teknika nola aplikatu behar den jakiteko, hau da, aurreko arau bati edo horren parte desberdinei idazketa berria emateko edo xedapen berriak gehitzeko. Hortaz, ez dugu horretan sakonduko, baina aipatu nahi dugu bigarren azken xedapenean jasotako aldaketa-arauek aurrekoen akats berberak dituztela. Azkenik, adierazi behar dugu, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 12.1 artikuluan xedatutakoari eta Gobernu Kontseiluak 1993ko martxoaren 23ko saioan onetsitako lege-proiektuak, dekretuak, aginduak eta ebazpenak egiteko jarraibideei jarraiki, eranskin gisa agertuko dela, bidezkoa denean, indargabetutako edo aldatutako xedapenen zerrenda.		

BOSGARREN AZKEN XEDAPENA				
AX	**ALEGATZAILEA**	**OHARRAREN EDO IRADOKIZUNAREN LABURPENA**	**INGURUMEN SAILBURUORDETZAREN ANALISIA**	**AUKERA**
5.AX.	INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILEKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	Lehenik eta behin, gaitu beharreko organoa ez da EAEko administrazio orokorra, baizik eta Gobernu Kontseilua. Izan ere, ohiko arautzeko ahalmena, lege-mailako arauan bertan aurkakoa berenberegi aurreikusi ezean, kide anitzeko Gobernu Kontseilua den organoari esleitzen zaio, hain zuzen ere, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 29. artikuluaren eta Gobernuaren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 16. artikuluaren arabera. Bigarrenik, aurreikuspen hori, hau da, legezko araudi-testu batean gehitzea gaikuntza bat exekutiboarentzat aurreikusten dena bezalako eguneraketak egiteko, ohiko praktika bat da eta ez du legezkotasun-arazorik sortzen, baina bai jarraitutako araudi-teknikak berak eragindakoak. Izan ere, horrek xedatzen du beharrezkoa dela horiek konpontzeko deslegalizazio-klausula bat ezartzea. Teknika horren inguruan mintzatu da Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa lurzoruaren kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko lege-aurreproiektuaren inguruan igorritako 58/2014 irizpena ematean.	Alegazioa onesten da eta, horrenbestez, testua aldatzen da.	Onesten da

III

DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI / EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOAREN IRIZPENA

INGURUMEN ADMINISTRAZIOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE EUSKADI

SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

El Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, en la sesión del día 10 de julio de 2019, con la asistencia de los miembros que al margen se expresan, ha examinado su **consulta**, registrada con el nº 91/2019, relativa al **anteproyecto de Ley de Administración ambiental de Euskadi** (**Ref.: DNCG_LEY_479/18_05**).

Tras su deliberación, ha emitido por unanimidad el siguiente dictamen. Expresa el parecer de la Comisión, el vocal Sr. Zubizarreta Arteche.

PRESIDENTE:
D. Sabino Torre Díez.

VICEPRESIDENTE:
D. Xabier Unanue Ortega.

VOCALES:
Dª Mª Teresa Astigarraga Goenaga.
D. Luis Mª Eskubi Juaristi.
D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo.
Dª Fátima Saiz Ruiz de Loizaga.
D. Imanol Zubizarreta Arteche.
D.ª Miren Izaskun Iriarte Irureta.

SECRETARIO:
D. Jesús Mª Alonso Quilchano.

DICTAMEN Nº 126/2019

ANTECEDENTES 3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN 12
EL PROCESO DE ELABORACIÓN 12
I La memoria justificativa y económica del anteproyecto 13
II Trámites de audiencia, información pública, participación y consulta a otras Administraciones 16
III Informes preceptivos 20
IV El informe de la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi (CGLE) 22
ASPECTOS COMPETENCIALES 24
I En relación con el Estado 25
II En relación con los territorios históricos 32

III En relación con las entidades locales 33
IV Conclusión 35
MARCO NORMATIVO 35
I En materia de derecho a la información y participación pública 35
II En cuanto a la ordenación de actividades con afección en el medio ambiente 36
III En cuanto a la evaluación ambiental 36
IV En materia de responsabilidad medioambiental 37
V Otras materias 37
EXAMEN DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO 38
I La unificación del Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Comisión Ambiental del País Vasco 39
II Intervención ambiental 40
A) La concurrencia de los regímenes de intervención ambiental con la evaluación de impacto ambiental 40
B) Actividades clasificadas 46
III Evaluación Ambiental 47
A) Planes, programas y proyectos excluidos de evaluación ambiental 48
B) Cómputo del plazo para resolver en determinados trámites 62
IV Instrumentos de impulso de la mejora ambiental 62
A) Acuerdos medioambientales 63
B) Contratación pública verde 63
C) Fiscalidad ambiental 66
V Entidades colaboradoras y función inspectora 68
VI Restauración de la legalidad ambiental y responsabilidad por daños medioambientales 69
VII Disciplina ambiental 72
A) Calificación de infracciones y sanciones 74
B) El decomiso de los efectos provenientes de la infracción 76
C) Multas coercitivas y ejecución subsidiaria 77
D) La prohibición para contratar 78
E) Publicidad de las personas infractoras y de las sanciones 79
VIII Otras cuestiones de carácter puntual 85
IX Otras observaciones de técnica legislativa 89
CONCLUSIÓN 90

ANTECEDENTES

1. Por Orden de 20 de mayo de 2019 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (con fecha de entrada del mismo día) se somete al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi el anteproyecto de ley señalado.

2. A dicha orden se acompaña el expediente en el que, junto con el texto definitivo del proyecto, figuran los siguientes documentos relevantes:

   a) Orden de inicio de 13 de febrero de 2018

   b) Orden de consulta previa.

   c) Documentación aportada en el proceso de consulta pública previa por: don Álvaro Cerezo Ibarrondo, la Asociación Clúster Industrias Medio Ambiente de Euskadi (ACLIMA) y la Asociación Basquegur.

   d) Informe de impacto de género del anteproyecto

   e) Memoria justificativa y económica del anteproyecto.

   f) Versión del anteproyecto de 21 de mayo de 2018.

   g) Orden de aprobación previa de 25 de mayo de 2018.

   h) Anuncio del trámite de información pública (BOPV de 28 de mayo de 2018).

   i) Alegaciones efectuadas por EUSKAL NEKAZARIEN BATASUNA (ENBA).

   j) Alegaciones presentadas por Registradores de la Propiedad y Mercantiles del País Vasco.

   k) Informe de alegaciones del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

   l) Alegaciones presentadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa (dos escritos).

   m) Alegaciones presentadas por MERCADONA S.A.

   n) Alegaciones presentadas por la Asociación BASKEGUR.

o) Alegaciones presentadas por ACLIMA, Basque Enviroment Clúster.

p) Alegaciones realizadas por la Diputación Foral de Bizkaia, Dirección General de Medio Ambiente.

q) Alegaciones presentadas por EUSKAL ARIDOS.

r) Alegaciones presentadas por IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.

s) Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Bilbao.

t) Alegaciones presentadas por don José Mariano Travel Cotrina.

u) Alegaciones presentadas por la Diputación Foral de Álava (Dirección de Agricultura).

v) Alegaciones presentadas por don José Alberto Arrate Sauto.

w) Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Astigarraga.

x) Alegaciones presentadas por la Asociación Medioambiental Jaizkibel Geonature.

y) Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Pasaia.

z) Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Hernani.

aa) Informe de alegaciones del Departamento de Salud.

bb) Alegaciones de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE S.A.

cc) Informe de impacto de género de Emakunde.

dd) Informe de alegaciones del Departamento de Hacienda y Economía.

ee) Alegaciones de la Diputación Foral de Álava (Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo).

ff) Alegaciones del Consejo de Ingenieros Industriales del País Vasco.

gg) Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Bermeo.

hh) Alegaciones presentadas por EHNE - Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna.

ii) Alegaciones presentadas por la Diputación Foral de Bizkaia (Dirección General de Medio Ambiente).

jj) Informe de alegaciones complementarias del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

kk) Alegaciones presentadas por Ayuntamiento de San Sebastián.

ll) Informe de la Junta Asesora de Contratación Pública.

mm) Alegaciones presentadas por la Confederación Empresarial Vasca (Confebask).

nn) Informe jurídico de la Dirección de Servicios.

oo) Informe de la Dirección de Administración Tributaria.

pp) Alegaciones presentadas por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.

qq) Informe de normalización lingüística.

rr) Informe de la Autoridad Vasca de la Competencia.

ss) Informe de la Dirección de Función Pública.

tt) Alegaciones del Ministerio para la Transición Ecológica.

uu) Certificación de la Comisión Ambiental del País Vasco (COMA).

vv) Certificado del Consejo Asesor Medio Ambiente (CAMA).

ww) Informes de respuesta y memoria sobre las alegaciones y sugerencias.

xx) Memoria sucinta sobre la tramitación, de 7 de enero de 2019.

yy) Informe de la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi.

zz) Informe del Consejo Económico y Social Vasco.

aaa) Memoria sucinta del procedimiento, incorporando la respuesta a los informes recibidos, de 7 de marzo de 2019.

bbb) Texto del anteproyecto de ley, de 7 de marzo de 2019.

ccc) Certificación del Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza

ddd) Segundo informe de la Dirección de Administración Tributaria.

eee) Informe de la Dirección de Presupuestos.

fff) Informe de la Oficina de Control Económico (OCE).

ggg) Texto del anteproyecto de 16 de mayo de 2019.

hhh) Memoria sucinta del procedimiento de 16 de mayo de 2019.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. El anteproyecto de Ley de Administración ambiental consta de una parte expositiva, ciento dieciocho artículos, recogidos en nueve títulos, subdivididos a su vez en capítulos. La parte final consta de una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. Contiene asimismo un total de doce anexos.

4. La exposición de motivos avanza los objetivos de la norma proyectada afirmando que "establece un marco jurídico garante de un alto nivel de protección del medio ambiente adaptado a la realidad económica y social vasca actual. Es por ello que la norma incorpora los últimos desarrollos normativos y aporta nuevas técnicas de intervención administrativa en aras a la simplificación y agilización del procedimiento administrativo y con el objetivo de lograr una efectiva protección del medio ambiente compatibilizando las distintas actividades económicas con el entorno en el que se desarrollan."

5. Señala también que "determina los derechos y los deberes de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, subrayando el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, toda vez que promueve una economía sostenible mediante la gestión eficiente de los recursos naturales, en aras al fomento de una sociedad hipocarbónica que limite la influencia del cambio climático. Alcanzar estos objetivos requiere de acciones decididas que cuenten con una base normativa firme que les confiera seguridad jurídica y máxima eficacia." (…) "persigue impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente, ya que la búsqueda de soluciones a los retos medioambientales a los que se enfrenta la sociedad vasca requiere, de forma ineludible, la ejecución de actuaciones conjuntas entre las administraciones públicas, el sector económico y la ciudadanía en general, habida cuenta de los objetivos comunes perseguidos, como una oportunidad para lograr la mejora de la calidad de vida y el bienestar general, pretendiendo un decidido cambio de modelo de producción y consumo que sitúe a la Comunidad Autónoma del País Vasco como referente a nivel europeo."

6. También afirma que "la Ley se articula bajo la premisa del concepto de normativa inteligente enunciado por la Comisión Europea, que promueve una aprobación de normas por parte de los Estados miembros que refuercen el papel de la ciudadanía, analicen los impactos de la normativa en la vida socioeconómica en general y tiendan a una simplificación administrativa unificando procedimientos y suprimiendo trámites innecesarios" y que, por ello, "son fundamentales las medidas diseñadas por esta Ley para agilizar y simplificar el funcionamiento de la Administración Ambiental con el objeto de reducir y simplificar la intervención administrativa".

7. Se alude asimismo al principal título competencial que fundamenta la norma y describe su estructura y contenido.

8. En cuanto a la parte dispositiva, su título primero contiene las disposiciones generales. En él se regulan: el objeto de la norma (artículo 1); las definiciones necesarias para la comprensión del resto de la norma (artículo 2); principios (artículo 3); la posibilidad de que las actividades encaminadas a la consecución de los fines de la norma puedan ser declaradas de utilidad pública o interés social (artículo 4); y los derechos y deberes de las personas en el marco de la ley (artículos 5 y 6).

9. El título segundo, intitulado "Competencias y coordinación de la política ambiental", establece la distribución interna de las competencias en materia de medio ambiente (artículo 7) y el ejercicio de competencias por las administraciones públicas (artículo 8). El artículo 9 se refiere al Programa Marco Ambiental y los artículos 10 y 11 regulan el Consejo Asesor de Medio Ambiente y su composición.

10. El título tercero contiene las disposiciones referidas a "Información, participación pública y acceso a la Justicia en materia ambiental". Contiene los artículos 12 a 17 referidos a la información ambiental, la difusión de la información ambiental, la solicitud de información ambiental; la participación ambiental; la acción pública y, finalmente, un artículo dedicado a la Administración electrónica.

11. El título cuarto, intitulado "Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente", consta, a su vez, de cinco capítulos.

12. El capítulo I contiene las disposiciones generales de este título en sus artículos 18 a 29. El artículo 18 establece los regímenes de intervención ambiental. El artículo 19 los plazos para el inicio de las actividades autorizadas. El artículo 20 las finalidades del régimen de intervención. El artículo 21, las consultas previas. El artículo 22 contempla la concurrencia de los regímenes de intervención ambiental con la evaluación de impacto ambiental. El artículo 23, las obligaciones de las administraciones públicas en los procedimientos de intervención ambiental. El artículo 24, las obligaciones de los titulares de las actividades e instalaciones. El artículo 25, la capacidad técnica y responsabilidad de las personas que

realicen los proyectos y documentación técnica, que formen parte de las solicitudes de inicio de los procedimientos previstos en este título. El artículo 26, el régimen de confidencialidad de la información presentada por el promotor. El artículo 27, la transmisión de los títulos de intervención para el desarrollo de las actividades. El artículo 28, el cese de la actividad y cierre de la instalación. El artículo 29, por último, la modificación de las actividades e instalaciones.

13. El capítulo II de este cuarto título se titula "Autorizaciones ambientales". Define en los artículos 30 y 31 la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única.

14. El capítulo III, intitulado "Disposiciones comunes a la autorización ambiental integrada y a la autorización ambiental única", contiene los artículos 32 a 47. El artículo 32 se refiere al informe de compatibilidad urbanística del ayuntamiento. El artículo 33, al contenido de la solicitud. El artículo 34, a la subsanación de la solicitud. El artículo 35, al trámite de información pública. El artículo 36, al informe municipal en las actividades sujetas a autorización ambiental integrada y autorización ambiental única. El artículo 37, al informe de los organismos competentes en materia de vertidos y el artículo 38, a otros posibles informes. El artículo 39 se refiere a la propuesta de resolución y audiencia del interesado. El artículo 40, a la resolución. El artículo 41, a los valores límite de emisión de las autorizaciones ambientales. El artículo 42, al contenido de la autorización ambiental integrada y de la autorización ambiental única. El artículo 43, a la vigencia y revisión de las autorizaciones. El artículo 44, al procedimiento de modificación sustancial de las autorizaciones ambientales integradas. El artículo 45, al procedimiento de modificación sustancial de las autorizaciones ambientales únicas y el artículo 46, al procedimiento de modificación no sustancial. El artículo 47, por último, a la comunicación de inicio de funcionamiento o apertura.

15. El capítulo IV regula la licencia de actividad clasificada en los artículos 48 a 54. Comienza por determinar el alcance de la licencia de actividad clasificada (artículo 48). A continuación, regula la solicitud de la licencia (artículo 49); la información pública y la emisión de informes (artículo 50); el informe de imposición de medidas protectoras y correctoras (artículo 51); la concesión de la licencia de actividad (artículo 52); la comunicación de inicio de actividad clasificada o apertura (artículo 53); y la revisión de la licencia de actividad clasificada (artículo 54).

16. El capítulo V regula la comunicación previa de actividad clasificada. El artículo 55 se refiere específicamente a la comunicación previa de actividad clasificada. El artículo 56, a la presentación de la comunicación previa de actividad clasificada. El artículo 57, al contenido y efectos de la comunicación previa de actividad clasificada, y el artículo 58, a la modificación de la actividad.

17. El título quinto, intitulado "Evaluación ambiental", se divide, a su vez, en tres capítulos.

18. El capítulo I comprende los artículos 59 a 70 y contiene las disposiciones comunes a la evaluación ambiental estratégica y a la evaluación de impacto ambiental. El artículo 59, referido a la evaluación ambiental, establece que se someterán preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental los planes, programas y proyectos, y sus modificaciones y revisiones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. El artículo 60 se refiere a los procedimientos de evaluación ambiental. El artículo 61 a las competencias que corresponden al órgano ambiental frente a los órganos sustantivos. El artículo 62 regula la nulidad de planes, programas y proyectos no evaluados. El artículo 63, a la capacidad técnica y responsabilidad. El artículo 64, a la confidencialidad. El artículo 65, a los planes, programas y proyectos excluidos de evaluación ambiental. El artículo 66, a los proyectos que pueden ser excluidos de evaluación ambiental caso por caso. El artículo 67, a la determinación del alcance de las evaluaciones ambientales ordinarias. El artículo 68, a la publicidad. El artículo 69, a las relaciones intercomunitarias y transfronterizas y el artículo 70, al registro de personas jurídicas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental.

19. El capítulo II regula la evaluación ambiental estratégica de planes y programas en los artículos 71 a 74. El artículo 71 se refiere al ámbito de la evaluación ambiental estratégica. El artículo 72, a la información pública y consultas. El artículo 73, a la naturaleza y contenido de la declaración ambiental estratégica y el artículo 74, a la naturaleza y contenido del informe ambiental estratégico.

20. El capítulo III, intitulado "De la evaluación de impacto ambiental de proyectos", comprende los artículos 75 a 78. El artículo 75 se refiere al ámbito de la evaluación de impacto ambiental. El artículo 76, a la información pública y consultas. El artículo 77, a la naturaleza y contenido de la declaración de impacto ambiental y el artículo 78, a la naturaleza y contenido del informe de impacto ambiental.

21. El título sexto contempla diversos instrumentos de impulso de la mejora ambiental y comprende los artículos 79 a 88. El artículo 79 se refiere a los acuerdos medioambientales. El artículo 80, al fomento de la participación en el Sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales (EMAS). El artículo 81, al fomento de la utilización de la etiqueta ecológica de la Unión Europea. El artículo 82, a la huella ambiental. El artículo 83, a la compra pública verde. El artículo 84, a la ecoinnovación. El artículo 85, a la fiscalidad ambiental. El artículo 86, a la investigación, educación y formación. El artículo 87, al voluntariado ambiental y el artículo 88, a las medidas de reconocimiento público.

22. El título séptimo, intitulado "Inspección y control ambiental", se divide, a su vez, en dos capítulos.

23. El capítulo I regula las entidades de colaboración ambiental en el artículo 89.

24. El capítulo II regula la inspección ambiental en los artículos 90 a 95. El artículo 90 se refiere a la finalidad de la inspección ambiental y competencias inspectoras. El artículo 91, al deber de sometimiento a la actuación inspectora. El artículo 92, al ejercicio de la actividad de inspección ambiental. El artículo 93, al acta e informe de inspección ambiental. El artículo 94, a la planificación de la inspección ambiental y el artículo 95, a la publicidad de las actuaciones de inspección ambiental.

25. El título octavo, intitulado "Restauración de la legalidad ambiental y responsabilidad por daños medioambientales", se divide, igualmente, en dos capítulos.

26. El primero de los capítulos regula la restauración de la legalidad ambiental en los artículos 96 a 100. El artículo 96 se refiere a las actividades sin autorización, licencia o comunicación previa. El artículo 97, a la corrección de incumplimientos o deficiencias. El artículo 98, a la suspensión de actividades. El artículo 99, al procedimiento de restauración de la legalidad ambiental y el artículo 100, a la ejecución forzosa de las medidas de restauración de la legalidad ambiental.

27. El capítulo II de este título regula la responsabilidad por daños medioambientales significativos en los artículos 101 y 102, que se refieren a la responsabilidad por daños medioambientales significativos y de su amenaza inminente, el primero, y al régimen competencial, el segundo.

28. El título noveno, intitulado "Disciplina ambiental", comprende los artículos 103 a 118. En este título se regulan las infracciones (artículo 103), su tipificación (artículo 104) y prescripción (artículo 105). Las sanciones (artículo 106), su graduación (artículo 107). El decomiso (artículo 108). La prescripción de las sanciones (artículo 109). Las competencias en el ejercicio de la potestad sancionadora (artículo 110). Las medidas de carácter provisional (artículo 111). La obligación de reponer e indemnización (artículo 112). Las multas coercitivas y ejecución subsidiaria (artículo 113). La prohibición de contratar (artículo 114). El procedimiento sancionador (artículo 115). La publicidad de las resoluciones sancionadoras (artículo 116), la prestación ambiental sustitutoria (artículo 117) y el destino de las sanciones económicas (artículo 118).

29. La disposición adicional única obliga a las administraciones vascas a dotarse de los recursos humanos y materiales suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley.

30. La disposición transitoria primera se refiere a los procedimientos en curso.

31. La disposición transitoria segunda, a las instalaciones existentes.

32. La disposición derogatoria deroga la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco (LGPMA), y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la ley.

33. La disposición final primera modifica el artículo 7.c).6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus territorios históricos (LTH).

34. La disposición final segunda modifica el artículo 7.4 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca.

35. La disposición final tercera se refiere a la adecuación al régimen establecido en el Texto refundido de la Ley de aguas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

36. La disposición final cuarta, a la adecuación al régimen establecido en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas.

37. La disposición final quinta contiene una habilitación normativa para adecuar los anexos.

38. La disposición final sexta se refiere a la entrada en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

39. En cuanto a los anexos, el anexo I.A detalla las instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada. El anexo I.B detalla las actividades e instalaciones sometidas a autorización ambiental única. El anexo I.C detalla las actividades e instalaciones sometidas a licencia de actividad clasificada. El anexo I.D detalla las actividades e instalaciones sometidas a comunicación previa de actividad clasificada, y el anexo I.E contiene los criterios para la consideración de una modificación de una actividad o instalación como sustancial.

40. El anexo II.A detalla los planes y programas que deben someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. El anexo II.B detalla los planes y programas que deben someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. El anexo II.C contiene los criterios para determinar cuándo un plan o programa sometido a evaluación ambiental estratégica simplificada debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria. El anexo II.D detalla los proyectos que deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. El

anexo II.E detalla los proyectos que deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. El anexo II.F contiene los criterios para determinar cuándo un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, y el anexo II.G incluye las definiciones a efectos de la evaluación ambiental.

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

41. Este dictamen se emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004 de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que incluye como ámbito de la función consultiva de la Comisión los anteproyectos de ley, cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos, siempre que no se encuentren incursos en las excepciones que contempla, lo que no es el caso.

EL PROCESO DE ELABORACIÓN

42. Siempre que esta Comisión analiza el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales, se advierte que la exigencia procedimental responde fundamentalmente a un requisito material; de ahí que el examen del procedimiento consista en comprobar su cumplimiento sustantivo y no el meramente formal o rituario.

43. Esta afirmación debe intensificarse en el caso de los anteproyectos de ley, dada la radical diferencia entre la potestad legislativa y la reglamentaria, que condiciona sustancialmente dicho análisis ["el legislador no ejecuta la Constitución, sino que crea derecho en libertad dentro del marco que ésta ofrece, en tanto que en el ejercicio de la potestad reglamentaria se opera 'de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97 CE)' (entre otras, STC 209/1987, de 22 de diciembre), salvo los casos en que la CE, el EAPV o, en ocasiones, las leyes orgánicas, prevean algún trámite específico —supuestos ciertamente excepcionales en nuestro ordenamiento—"].

44. El Parlamento es el lugar donde se desarrolla con plenitud el procedimiento legislativo y, salvo supuestos específicos en los que la Constitución (CE) o el Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV) o, en algunos casos, las leyes orgánicas impongan condiciones a su adopción, la única exigencia que han de cumplir es que se acompañen de los antecedentes necesarios para que aquel pueda pronunciarse: al menos, memoria general, anejo de financiación e informe de control económico —si comportan un gravamen al presupuesto—; el dictamen de este órgano consultivo y de los demás informes que, con arreglo a la legislación aplicable, sean preceptivos (artículo 57 de la Ley de Gobierno y artículo 133.2 del Reglamento de la Cámara).

45. Cuando el producto elaborado va a ser una ley, el camino seguido por el ejecutivo en su elaboración se estudia, no para evitar defectos que puedan afectar a su validez, sino para comprobar que se traslada al Parlamento una regulación racional —fruto de una decisión meditada— y razonable —en sintonía con las pautas axiológicas de nuestro ordenamiento—.

46. Con los señalados parámetros se analiza a continuación el procedimiento que ha desembocado en el texto del anteproyecto, atendiendo a lo previsto en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general (LEPDG).

47. Mediante Orden de 13 de febrero de 2018 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se acordó el inicio del procedimiento para la elaboración del anteproyecto de Ley de Administración ambiental de Euskadi (en adelante, el anteproyecto).

48. En la misma fecha, y con carácter previo a la elaboración del borrador del texto normativo, se planteó una consulta previa a la ciudadanía con la información relativa a: a) los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; b) la necesidad y oportunidad de su aprobación; c) los objetivos de la norma; y d) las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. La consulta se inició el 13 de febrero de 2018 y se publicitó mediante anuncio en el tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

49. Con fecha 25 de mayo de 2018, se dictó la Orden del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda por la que se acordó la aprobación previa del texto del anteproyecto.

I LA MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ECONÓMICA DEL ANTEPROYECTO

50. El anteproyecto viene acompañado de una memoria justificativa y económica, si bien está fundamentalmente dirigida a analizar sus repercusiones económicas.

51. En lo que atañe a lo que debería responder la memoria explicativa, esto es, las características de la realidad sobre la que va a proyectarse la norma, los objetivos que persigue para el concreto sector cuya regulación se aborda, las distintas opciones que se presentan para su consecución o las razones que avalan las soluciones acogidas finalmente, presenta lagunas justificativas que, con posterioridad, al analizar las cuestiones planteadas en las diferentes alegaciones e informes, el departamento promotor sí ha analizado y motivado.

52. No obstante, en esa memoria sí se avanza las novedades del anteproyecto aludiendo a las siguientes cuestiones:

a) La creación del "Consejo de Medio Ambiente" con lo que se pretende integrar, en un único el actual "Consejo Asesor de Medio Ambiente" y la actual "Comisión Ambiental del País Vasco".

b) La mejora del conocimiento y la información sobre el medio ambiente. Se crea, por ejemplo, "INGURUNET", Sistema de información ambiental del País Vasco.

c) Se prevé un nuevo sistema de intervención administrativa para las actividades con incidencia en el medio ambiente.

d) Se crea un nuevo régimen jurídico de intervención ambiental: la Autorización ambiental única (AAU), que, junto con la Autorización ambiental integrada (AAI), la Licencia de actividad clasificada (LAC) y la Comunicación previa de actividad clasificada (CPAC), constituyen el marco de alternativas de intervención ambiental que puede requerir una actividad para ponerse en marcha, en función de su grado de incidencia potencial y real en el medio ambiente.

e) Se elimina la obligación legal de obtención de la Licencia de actividad clasificada (LAC) como requisito previo a la puesta en marcha de actividades que ya han obtenido la Autorización ambiental integrada (AAI) o Autorización ambiental única (AAU).

f) Se extienden a la LAC y a la CPAC los criterios de modificación "sustancial" y "no sustancial" de autorizaciones ambientales, de forma análoga al tratamiento que se da a la AAI y a la AAU.

g) En materia de evaluación ambiental, se pretende promover la participación del público interesado y del público en general en los procedimientos de evaluación ambiental. A efectos de garantizar esta participación se prevé crear el "Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental".

h) Las declaraciones e informes estratégicos y de impacto ambiental, emitidas por el órgano ambiental, pasan a ser vinculantes en Euskadi, en lugar de ser determinantes, tal y como establece la normativa básica estatal.

i) Entre las acciones de promoción planteadas en el anteproyecto cabe destacar:

- El fomento de la participación en el "Sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales" (EMAS).

- La "compra y contratación pública verde", estableciéndose las obligaciones a seguir por los órganos de contratación de las administraciones públicas y de los demás entes del sector público en sus contratos de obras, servicios y suministros, y concretando un porcentaje mínimo de utilización de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización.

- Fiscalidad ambiental: el anteproyecto establece la "obligación" de que los ingresos recaudados por las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), a través de la aplicación de medidas de "fiscalidad ambiental", integren una partida presupuestaria en sus respectivos presupuestos generales del año siguiente con afectación específica a los objetivos fijados por el órgano que ostente la competencia en materia ambiental en cada una de ellas.

j) En cuanto al régimen disciplinario, se plantean medidas como:

- El aumento de las infracciones tipificadas como "muy graves".

- El carácter finalista de los ingresos por sanciones.

- La creación de un "Registro de personas infractoras de normas ambientales en la Comunidad Autónoma del País Vasco".

53. El análisis económico, sin embargo, es más ambicioso y permite conocer la realidad sobre la que se proyecta la norma, ofreciendo datos sobre las actuaciones en materia de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC), en materia de evaluación de impacto ambiental e, incluso, en materia de residuos y vertidos.

54. Asimismo, se aprecia un importante esfuerzo en tratar de determinar los efectos que tendrá la norma sobre sus destinatarios —administraciones implicadas y particulares— analizando las cargas que se contemplan o eliminan, traduciendo esa información en términos económicos, siempre estimativos. Desde luego, con esa información sí se ha dado correcto cumplimiento, como expresa la propia memoria, a la exigencia de una evaluación del impacto de la norma en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas prevista en la Ley 16/2012, de 28 de junio, de apoyo a las personas emprendedoras y a la pequeña empresa del País Vasco.

55. Junto a ese reconocimiento debemos constatar, por un lado, la insatisfacción mostrada en su informe por la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi (CGLE); órgano que no comparte la valoración de la memoria en lo que respecta al ámbito local. No obstante,

sobre esta cuestión volveremos cuando analicemos este informe, en el que se plantean algunas discrepancias de considerable calado en cuanto al tratamiento que se da a las entidades locales en el marco de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones locales de Euskadi (LILE).

56. Por otro lado, es de destacar la clara necesidad que muestra el departamento promotor de ampliar sus medios, fundamentalmente personales, para poder hacer frente a las nuevas funciones que deberá desempeñar el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma.

57. Tras la aprobación previa del anteproyecto, su texto se ha enriquecido con las aportaciones realizadas tanto por las alegaciones recibidas como por los informes recibidos e incorporados al procedimiento.

II TRÁMITES DE AUDIENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA A OTRAS ADMINISTRACIONES

58. El anteproyecto ha sido sometido a los trámites preceptivos de audiencia, información pública y participación y consulta a otras administraciones.

59. El trámite de información pública para la ciudadanía en general fue anunciado a través del BOPV, el día 4 de junio de 2018.

60. Al mismo tiempo, se abrió un trámite de audiencia individualizado llegando a un amplio número de organizaciones representativas de intereses colectivos afectados por la norma, cuyo detalle, por su extensión, no vamos a reproducir. Basta con decir que entre ellas se encontraban asociaciones ecologistas, sindicatos, patronales, colegios profesionales, cámaras de comercio, clústeres, consorcios municipales, etc.

61. Se ha ofrecido participar, asimismo, a distintas administraciones que podrían verse afectadas directamente por la regulación prevista: Administración del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, y las confederaciones hidrográficas, las tres diputaciones forales y los ayuntamientos de Euskadi, a través de EUDEL.

62. Teniendo en cuenta la incidencia que la regulación tiene en sus respectivos ámbitos competenciales, la iniciativa normativa se puso a disposición de varios departamentos de la Administración General de la CAPV mediante la herramienta de tramitación telemática de disposiciones de carácter general (*Tramitagune*) para que la analizaran y, si fuera el caso, realizaran aportaciones.

63. Todas estas actuaciones y trámites se han ido incorporando tanto en la sede electrónica del Gobierno, como en *Irekia* y la página web departamental http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/. Todo ello, se dice, "en cumplimiento de los principios informadores de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente" (en adelante, LAPMA).

64. Asimismo, la memoria informa que el departamento promotor, a fin de favorecer y facilitar el cumplimiento del derecho de la ciudadanía a participar en la elaboración de normas relacionadas con el medioambiente consagrado en el artículo 16 de la citada LAPMA, ha llevado a cabo un proceso de participación presencial dirigido a dar a conocer en mayor medida el proyecto normativo, dinamizar a los agentes más directamente afectados y a recabar de manera directa su punto de vista y sus propuestas de mejora:

> Durante este proceso se han llevado a cabo cinco sesiones participativas en los tres Territorios Históricos dirigidas a empresas, clústeres, asociaciones empresariales y sindicatos agrarios; colegios profesionales, centros tecnológicos y universidades (Foro empresas); otros Departamentos del Gobierno Vasco, entidades públicas y Diputaciones Forales (Foro DDFF) y, finalmente, con Ayuntamientos (Foro ayuntamientos). De todo ello se dio cuenta en el documento "Proceso de participación del anteproyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi. Informe Final de Síntesis. Julio 2018", en el que se documenta sistematizada y sintéticamente el devenir del proceso participativo.

65. Todo este proceso, dada la sensibilización de todos los elementos y sectores de la sociedad en esta materia, merece la valoración positiva de esta Comisión.

66. Como resultado de estos trámites de participación abiertos a la ciudadanía, los diferentes agentes y las instituciones afectadas, se han recibido escritos de alegaciones, observaciones y propuestas de mejora por parte de las siguientes personas e instituciones interesadas:

- ACLIMA/Basque Environment Cluster.
- Ayuntamiento de Astigarraga.
- Ayuntamiento de Bermeo.
- Ayuntamiento de Bilbao.

- Ayuntamiento de San Sebastián.
- Ayuntamiento de Hernani.
- Ayuntamiento de Pasaia.
- BASQUEGUR.
- Colegio de la Abogacía de Bizkaia/ICAB.
- Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles.
- Colegio Oficial Geólogos.
- Colegio Oficial Ingenieros Industriales del País Vasco.
- CONFEBASK.
- Don José Alberto Arrate Sauto.
- Don M.S.
- Don José Mariano Travel Cotrina.
- Ministerio para la Transición Ecológica.
- Diputación Foral de Álava-Departamento de Agricultura.
- Diputación Foral de Álava-Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo
- Diputación Foral de Bizkaia-Dirección de Infraestructuras.
- Diputación Foral de Bizkaia-Dirección de Medioambiente.
- Diputación Foral de Gipuzkoa.
- ENBA/Euskal Nekazarien Batasuna.
- EHNE-Euskal Herriko Nekazarien Elkartea.
- EUSKAL ARIDO.
- MERCADONA, S.A.
- MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A.

- IBERDROLA DISTRIB. ELEC, S.A.U.
- IHOBE.
- JAIZKIBEL GEONATURE.
- HAZI.
- AZTI.
- HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, S.L.U.
- Participantes del Foro Empresas.
- Participantes del Foro Ayuntamientos.
- Participantes del Foro Diputaciones Forales.

67. En al ámbito interno de la Administración General de la Comunidad Autónoma han realizado aportaciones los departamentos de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de Hacienda y Economía y de Salud.

68. Se da cuenta, asimismo, de que con fecha 28 de diciembre de 2018, esto es, transcurridos más de seis meses desde la apertura del plazo de alegaciones, la Diputación Foral de Álava remitió en papel un documento de alegaciones complementarias a las ya realizadas con fechas 4 y 12 de julio de 2018, que, por su carácter extemporáneo, no fueron analizadas ni incorporadas al informe de respuesta a las alegaciones.

69. El 5 de abril de 2019, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro remitió un escrito de valoración del anteproyecto en el que, con matizaciones, mostraba su opinión favorable, indicando que el grado de afección directa de las disposiciones del anteproyecto en el ejercicio profesional del arquitecto es alto. Esta Comisión entiende, no obstante, que estas afirmaciones no tuvieron efecto alguno en el texto sometido a dictamen.

70. Las abundantes alegaciones y aportaciones realizadas en tiempo y forma fueron analizadas, elaborándose el informe de respuesta a las alegaciones y propuestas de mejora recibidas durante la fase de instrucción del anteproyecto de fecha 7 de enero de 2019. En este amplio informe se analizan todas las alegaciones recibidas, tanto las que han sido total o parcialmente estimadas e incorporadas al anteproyecto como las que han sido rechazadas. En todo caso, de forma motivada.

71. El referido informe de respuesta a las alegaciones fue puesto en conocimiento de los propios interesados que las presentaron. Asimismo, se puso a disposición del público en general en el portal de la normativa vasca (*Legegunea*) del área de transparencia y participación ciudadana del Gobierno Vasco, junto con el texto del anteproyecto modificado.

III **INFORMES PRECEPTIVOS**

72. El anteproyecto ha sido objeto de diferentes informes preceptivos elaborados desde diferentes perspectivas, lo cual, dada la complejidad y transversalidad de la materia en cuestión, constituye sin duda una mayor garantía de acierto en las opciones incorporadas a la norma.

73. En el ámbito específico del medio ambiente, con fecha 6 de noviembre de 2018, el anteproyecto fue informado favorablemente tanto por la Comisión Ambiental del País Vasco como por el Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, con fecha 28 de enero de 2019, el Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza mostró también su opinión favorable a la iniciativa.

74. Desde las diferentes perspectivas que corresponde a cada uno de ellos, en esta fase de instrucción han sido solicitados y emitidos los informes preceptivos de la Dirección de Servicios del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (informe jurídico), Emakunde, la Junta Asesora de Contratación Pública, la Dirección de Administración Tributaria del Departamento de Hacienda y Economía, la Autoridad Vasca de la Competencia, la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas del Departamento de Cultura y Política Lingüística y la Dirección de Función Pública del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.

75. Se ha solicitado también el informe del Consejo del Agua del País Vasco, si bien se hace constar que su informe no fue recibido en la fecha en la que se analizaron el resto de informes y se elaboró la memoria con el resultado de ese análisis.

76. Se ha solicitado y emitido el informe de la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi (CGLE), que analizaremos en un apartado específico, dada la específica problemática surgida en torno al mismo. En este apartado consideramos suficiente señalar que, tras la recepción del informe, se celebró una reunión a solicitud de la CGLE. De esa reunión, a la que en representación de la CGLE acudieron dos de sus miembros, un trabajador de EUDEL y un consultor privado, se levantó acta en la que cada una de las partes mantuvieron sus posturas discrepantes. Posteriormente, el departamento promotor ha

analizado en detalle las conclusiones y discrepancias con el anteproyecto mostradas en el informe de la CGLE en la memoria sobre el procedimiento.

77. El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido su Dictamen 4/19 relativo al anteproyecto sobre el que realiza una valoración favorable en su globalidad, sin perjuicio de cuestiones específicas sobre las que realiza algunas consideraciones.

78. El 14 de mayo de 2019 se incorpora también el informe de la Oficina de Control Económico para su incorporación al expediente tramitado. Para su elaboración ha vuelto a requerir un segundo informe a la Administración Tributaria, que también se ha incorporado al expediente.

79. Asimismo, la citada oficina ha recabado, por un lado, un nuevo informe de la Dirección de Función Pública, órgano que se ha remitido a posteriores procedimientos que, en su caso, se tramiten, para emitir un nuevo posicionamiento. Por otro, ha solicitado un informe de la Dirección de Presupuestos, al amparo de lo dispuesto en las normas que rigen la actividad de control interno, el cual se ha emitido por dicha dirección con fecha 2 de abril de 2019 y se ha incorporado al expediente del proyecto.

80. En todo este proceso se echa en falta únicamente la perspectiva que podía ofrecer la Agencia Vasca de Protección de Datos en un asunto concreto, como es la publicidad de las sanciones impuestas por la comisión de infracciones y la identidad de sus responsables. En este caso, el departamento promotor ha justificado la medida, en respuesta a las dudas planteadas desde el informe jurídico, aludiendo al carácter preventivo de la medida y a la existencia de supuestos similares consolidados, por ejemplo, en materia tributaria o de residuos.

81. Las observaciones, sugerencias y propuestas de mejora de todos estos informes han sido debidamente analizadas, motivando en cada caso su aceptación e incorporación al texto o su rechazo.

82. Como dato relevante, el propio departamento promotor señala que, fruto del proceso participativo, de los análisis de las alegaciones y observaciones recibidas y con el fin de obtener el mayor grado de consenso de los sectores afectados, ha sido modificado, con un mayor o menor alcance, en torno al 60 % del articulado, así como la totalidad de los anexos inicialmente redactados.

83. De entre las modificaciones más destacables, aludiendo a razones de técnica legislativa, se ha decidido por parte del órgano proponente proceder a la supresión de una disposición final que planteaba una modificación de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas.

IV EL INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNOS LOCALES DE EUSKADI (CGLE)

84. Tal y como hemos adelantado, el informe emitido por la CGLE, su finalidad y consecuencias, merecen un análisis específico.

85. El propio informe comienza manifestando que se expide tras solicitud realizada por el departamento de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la LILE, el cual establece que serán objeto de informe previo preceptivo por la CGLE los anteproyectos o proyectos de disposiciones de carácter general que afecten específicamente a competencias propias de los municipios.

86. El informe advierte, no obstante, que, al tratarse de un anteproyecto de ley, se debe tener especialmente en cuenta el artículo 90 LILE "en cuanto que prevé el 'funcionamiento de la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi cuando actúa como órgano de alerta temprana', cuya regulación es especialmente importante teniendo en cuenta que la propuesta normativa objeto de análisis por esta Comisión es, en esta ocasión, un anteproyecto de Ley, que se despliega sobre una materia especialmente sensible al ámbito de la autonomía municipal y de las competencias propias de tales entidades locales".

87. Incluye un primer epígrafe centrado en el papel y función de la CGLE en relación con los anteproyectos de ley, y resalta la importancia de este caso por ser el primer anteproyecto de ley que se somete a su consideración.

88. La intervención como órgano de alerta temprana, contemplada en los artículos 88.1.a) y 90 de la LILE, se caracteriza tanto por el rango de las iniciativas que deben ser sometidas a esa intervención como por el objeto de esa intervención, dirigido a "concluir si, a su juicio, se produce o no una merma o vulneración de la autonomía local".

89. Añade, asimismo, que "en el supuesto de que el anteproyecto de ley atribuya competencias propias a los municipios, el informe deberá determinar, además si han sido asignadas adecuadamente las facultades o potestades que corresponden a cada ámbito material, conforme a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 de la presente ley".

90. Pues bien, esta Comisión Jurídica estima, atendiendo a la coherencia interna de la LILE, así como a la finalidad explicitada en su artículo 1, que la expresión "exclusivamente a competencias propias municipales" no excluye del mecanismo de alerta temprana la normativa sectorial que ordena un sector y establece —como es el caso— la ordenación de las competencias entre los diferentes niveles administrativos de la Comunidad Autónoma.

91. El anteproyecto que nos ocupa, por tanto, se encuentra en el ámbito de aplicación del artículo 90.1 de la LILE dado que incide de modo significativo sobre una de las competencias propias de los municipios previstas en el artículo 17.1 de la LILE. Concretamente, la prevista en su apartado 8: ordenación complementaria, promoción, gestión, defensa y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, incluida la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

92. En este contexto, la actuación a seguir por el órgano promotor debería haber sido la prevista en los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 90:

> 3. En el supuesto de que no fueran acogidas todas o parte de las propuestas elevadas por la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi, deberá convocarse una comisión bilateral entre la administración promotora de la propuesta normativa y una delegación de tres miembros de la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi.
>
> 4. De no alcanzar acuerdo ambas delegaciones, y transcurrido en todo caso el plazo de un mes desde la fecha de la solicitud de emisión del informe previsto en el apartado primero, el órgano promotor proseguirá con la tramitación, debiendo elaborar un informe motivado de las razones del rechazo de las propuestas de modificación planteadas por la omisión de Gobiernos Locales de Euskadi, valorando en este caso expresamente su no afectación a la autonomía local o el grado de afectación a la autonomía local.
>
> 5. En el caso de los anteproyectos de ley o de decreto legislativo, tras su aprobación como tales proyectos, el texto que se remita al Parlamento deberá ir acompañado del informe en el que se justifiquen las razones del rechazo y de las actas de la sesión o sesiones celebradas por la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi.

93. El órgano promotor ha insistido en todo momento en ubicar la intervención de la CGLE en el marco de lo dispuesto en los artículos 88.1.b) y 91 de la LILE y, por tanto, no ha considerado seguir formalmente los pasos previstos para la resolución de conflictos en el sistema de alerta temprana.

94. No obstante, se ha seguido materialmente las principales pautas previstas en ese sistema ya que: I) se ha celebrado una reunión, aunque sin convocatoria ni orden del día, en la que han participado, por un lado, la Viceconsejera de Medio Ambiente, el Director de Administración Ambiental y el letrado instructor del procedimiento de elaboración y, por parte de la CGLE, dos de sus miembros, un empleado de EUDEL y un consultor

privado. En esa reunión no se ha llegado a acuerdos ni ha dado lugar a ninguna modificación del anteproyecto; y II) se ha incorporado en la memoria sobre la tramitación un apartado específico donde se motivan las razones del rechazo de las propuestas planteadas por la CGLE, valorando expresamente su no afectación a la autonomía local.

95. Por último y sin perjuicio de las anteriores consideraciones, hemos de recordar, por un lado, la perspectiva fundamentalmente material desde la que esta Comisión Jurídica concibe el procedimiento de elaboración —que consiste en comprobar su cumplimiento sustantivo y no el meramente formal o rituario—.

96. Por otro lado, igualmente hemos de insistir en la diferente connotación que ostentan los diferentes trámites e informes en el marco del procedimiento de elaboración de los anteproyectos de normas que han de ser remitidas para su aprobación al Parlamento, tal y como hemos apuntado en nuestra aproximación inicial al análisis del procedimiento.

97. Dicho esto, no nos detenemos en este punto en el fondo de las cuestiones planteadas en el informe de la CGLE ya que ese análisis encuentra mejor ubicación en el análisis competencial.

ASPECTOS COMPETENCIALES

98. A la hora de realizar el correspondiente deslinde competencial, resulta necesario partir del principio rector de la política económica y social contenido en el artículo 45 de la Constitución (CE), que obliga a los poderes públicos a defender y restaurar el medio ambiente.

99. La protección del medio ambiente constituye asimismo un principio de actuación asumido por la Unión Europea, recogido en el artículo 37 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y desarrollado en los artículos 11 y 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

100. El Tribunal Constitucional, en la Sentencia (STC) 102/1995, de 26 de junio, ya expresó que la Constitución no define el medio ambiente, pero que en su artículo 45 señala como elementos del medio ambiente los recursos naturales, aun cuando tampoco los define ni enumera.

101. Así, el medio ambiente como objeto de conocimiento desde una perspectiva jurídica estaría compuesto por los recursos naturales, con el soporte físico donde nacen, se desarrollan y mueren, añadiendo que:

> La flora y la fauna, los animales y los vegetales o plantas, los minerales, los tres «reinos» clásicos de la Naturaleza con mayúsculas, en el escenario que suponen el suelo y el agua, el espacio natural. Sin embargo, ya desde su aparición en nuestro ordenamiento jurídico el año 1916, sin saberlo, se incorporan otros elementos que no son naturaleza sino Historia, los monumentos, así como el paisaje, que no es sólo una realidad objetiva sino un modo de mirar, distinto en cada época y cada cultura
>
> (…) Un paso más en el camino de la síntesis, extrayendo de lo anterior su componente dinámico, donde subyace la idea de «sistema» o de «conjunto», pondrá de manifiesto que el medio ambiente no puede reducirse a la mera suma o yuxtaposición de los recursos naturales y su base física, sino que es el entramado complejo de las relaciones de todos esos elementos que, por sí mismos, tienen existencia propia y anterior, pero cuya interconexión les dota de un significado transcendente, más allá del individual de cada uno. Se trata de un concepto estructural cuya idea rectora es el equilibrio de sus factores, tanto estático como dinámico, en el espacio y en el tiempo.

102. En el marco de esa concepción amplia del medio ambiente, el principal título competencial que habilita el dictado de la norma informada es el mismo que fundamentó el de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco: el relativo al desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en "medio ambiente y ecología", recogido en el artículo 11.1.a) del EAPV; competencia que ha de ser debidamente encuadrada, por un lado, en relación con el Estado y, por otro lado, en relación con los territorios históricos y los ayuntamientos.

I **EN RELACIÓN CON EL ESTADO**

103. El alcance de las competencias en materia de medio ambiente ha sido perfilado y delimitado por diversas sentencias del Tribunal Constitucional (entre otras, 102/1995 y 306/2000), y ha sido también analizado por esta Comisión en varios dictámenes, de entre los que podemos citar, los dictámenes 257/2008, 123/2009, 114/2003, 122/2008, 14 y 270/2011 o 226/2012.

104. De lo allí expuesto sobre el alcance del reparto competencial en materia de medio ambiente entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, es destacable que la materia medioambiental adquiere un carácter complejo y polifacético, por afectar a los más variados sectores del ordenamiento jurídico [STC 156/1995 (F.J.4)]; y que, como ha puesto de manifiesto la STC 102/1995, F.J.3, incluso hacen difícil en la práctica la pacífica y funcional distribución de competencias.

105. Asimismo, se viene recordando, enlazando con la doctrina de las SSTC 170/1989 y la citada 102/1995, "que lo básico «cumple más bien una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que las Comunidades Autónomas con competencia en la materia establezcan niveles de protección más altos (...). Lo básico tiene aquí simultáneamente carácter mínimo, como patrón indispensable para la protección del medio ambiente, fuera de cuyo núcleo entran en juego las normas que lo complementan y lo desarrollan, con la ejecución, sin fisura alguna de ese entero grupo normativo. Se trata pues, de una estratificación de la materia por niveles, donde el estatal ha de ser suficiente y homogéneo, pero mejorable por así decirlo para adaptarlo a las circunstancias de cada Comunidad Autónoma" (doctrina posteriormente reiterada, entre otras, en las SSTC 13/1998, 90/2000, 306/2000).

106. En ese marco general corresponde al legislador estatal en su ámbito interno (artículo 149.1.23 CE) proceder a un encuadramiento de una política global de protección ambiental mediante una ordenación de mínimos, que permite, no obstante, a las comunidades autónomas el establecimiento de criterios más rigurosos de carácter medioambiental como requisitos previos al ejercicio de una determinada actividad.

107. Más recientemente, la Sentencia 118/2017, de 19 octubre, vuelve a recapitular el contenido y alcance del título competencial estatal, recordando que:

> a) En cuanto a los criterios de orden material que este Tribunal ha destacado como característicos de la legislación básica de medio ambiente, sus elementos esenciales fueron sistematizados en la STC 101/2005, de 20 de abril (RTC 2005, 101), FJ 5 –a la que se alude en la STC 53/2017, de 11 de mayo (RTC 2017, 53), FJ 4–, en los siguientes términos:
>
> «El primero de estos criterios se concreta en que "en materia de medio ambiente el deber estatal de dejar un margen al desarrollo de la legislación básica por la normativa autonómica, aun siendo menor que en otros ámbitos, no puede llegar, frente a lo afirmado en la STC 149/1991 (RTC 1991, 149) [FJ 1 D) in fine] de la cual hemos de apartarnos en este punto, a tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medio ambiente, vaciándolas así de contenido" (STC 102/1995 (RTC 1995, 102) , FJ 8).
>
> El segundo criterio consiste en "que lo básico, como propio de la competencia estatal en esta materia, cumple más bien una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que las Comunidades Autónomas con competencias en la materia establezcan niveles de protección más altos, como ya se dijo en la STC 170/1989 (RTC 1989, 170)." ...

> El tercer criterio a tener en cuenta … es el relativo al alcance de la "afectación transversal" que las directrices básicas medioambientales pueden tener, no ya sobre las normas de desarrollo legislativo y la ejecución en la propia materia de medio ambiente, sino sobre las competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas con las que se entrecruzan y que están directamente implicadas.»
>
> b) Por otra parte, «hemos subrayado que el contenido normativo de lo básico en esta materia no significa la exclusión de otro tipo de actuaciones que exijan la intervención estatal. Entre ellas pueden incluirse funciones ejecutivas, ésta es una solución excepcional a la cual sólo podrá llegarse cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supraordenado con capacidad de [armonizar] intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad» (STC 141/2016, de 21 de julio (RTC 2016, 141) , FJ 6).

108. Con respecto a las actividades clasificadas, en nuestro Dictamen 123/2009 recordamos la doctrina constitucional dictada sobre el reparto de competencias entre CAPV-Estado en dicha submateria medioambiental:

> El reparto competencial en esta materia —art, 11.1 a) EAPV y art. 149.1.23 CE— sólo resulta determinante respecto a aquellas intervenciones administrativas cuya razón de ser consiste en la protección del medio ambiente: es decir, cuando el acto administrativo tiene como finalidad y efecto la preservación y la restauración del ambiente afectado por la actividad intervenida, como es el caso de la autorización de actividades calificadas… (STC 13/1998, FJ 8, recordado en STC 101/2006, FJ 4).

109. Por otra parte, en nuestro Dictamen 172/2012, en relación con el reparto competencial Estado-Comunidad Autónoma en materia de evaluación de impacto ambiental, abordamos lo establecido en la STC 13/1998, de 22 de enero, que explicaba el objeto del contencioso de la siguiente forma:

En el conflicto constitucional se impugnan los artículos del Real Decreto 1131/1988 que permiten que la Administración general del Estado evalúe el impacto ambiental de sus propias obras, instalaciones o actividades, o de los proyectos promovidos por empresas o sujetos particulares que se encuentran sometidos a intervención administrativa estatal. La representación del Gobierno Vasco sostiene que los proyectos localizados en su territorio deben ser evaluados ambientalmente por la Administración autonómica, por lo que a ella corresponde formular la declaración de impacto ambiental de todos los proyectos, aunque la Administración competente para aprobarlos o autorizarlos sea la estatal; y que el órgano ambiental llamado a adoptar dicha declaración de impacto debe ser el que designe la Comunidad Autónoma de entre sus autoridades administrativas, mediante sus propias disposiciones, y no un órgano de la Administración general del Estado. Todo ello, en virtud de las competencias legislativas y ejecutivas sobre el medio ambiente que han sido asumidas en su Estatuto de Autonomía [art. 11.1, a) EAPV].

110. Destacábamos del fallo, por sorprendente, la afirmación de que:

> La evaluación de impacto ambiental no puede caracterizarse como ejecución o gestión en materia de medio ambiente… el reparto competencial en esta materia [art. 11.1, a) EAPV y art. 149.1.23.ª CE] sólo resulta determinante respecto a aquellas intervenciones administrativas cuya razón de ser consiste en la protección del medio ambiente: es decir, cuando el acto administrativo tiene como finalidad y efecto la preservación y la restauración del ambiente afectado por la actividad intervenida, como es el caso de la autorización de actividades calificadas. Pero cuando la Administración general del Estado ejerce sus competencias exclusivas en distintos ámbitos materiales, como son administración de justicia, aeropuertos y puertos, ferrocarriles, aguas continentales, instalaciones eléctricas, obras públicas de interés general, minas y energía, patrimonio cultural y seguridad pública, hay que atenerse a la distribución de competencias que efectúan los Estatutos de Autonomía en el marco del art. 149 CE (y, singularmente, de los números 4, 20, 21, 22, 24, 25, 28 y 29 del apartado 1 de ese art. 149).
>
> Por consiguiente, es conforme con el orden constitucional de competencias que la normativa impugnada confíe la evaluación del impacto ambiental a la propia Administración que realiza o autoriza el proyecto de una obra, instalación o actividad que se encuentra sujeta a su competencia, a tenor del bloque de la constitucionalidad. La Administración está ejerciendo sus competencias sectoriales propias cuando

asegura que el organismo o la empresa que promueve la obra u otra actividad proyectada realiza el estudio de impacto ambiental; cuando somete el proyecto, y el estudio de impacto, a información pública; cuando realiza consultas con otras autoridades, y les pide informes; y cuando finalmente, a la vista del resultado del estudio, de las alegaciones de los particulares y de los puntos de vista de los restantes Departamentos y Administraciones públicas, formula la declaración de impacto ambiental, la cual viene a formar parte de la autorización final del proyecto.

111. La STC 101/2006, de 30 de marzo, repite los mismos razonamientos, insistiendo en que:

> la evaluación de impacto ambiental no puede caracterizarse, por consiguiente, como ejecución o gestión en materia de medio ambiente. La finalidad, contenido y efecto de la norma básica estatal conduce a que todas las Administraciones públicas valoren el medio ambiente cuando ejercen sus competencias sobre cualquiera de las obras, instalaciones u otras actividades de su competencia. Muchas de esas obras, instalaciones y actividades forman parte de materias sometidas por la Constitución y los Estatutos de Autonomía a reglas específicas de reparto de competencias, que son títulos que por su naturaleza y finalidad atraen a la de medio ambiente, cuyo "carácter complejo y multidisciplinar afecta a los más variados sectores del ordenamiento (STC 64/1982, F. 3)» (STC 13/1998, F. 7).

112. Sentencias más recientes (como la 53/2017, de 11 de mayo, o la 107/2017, de 21 de septiembre) insisten en el mismo encuadramiento competencial en lo que se refiere a la evaluación de impacto ambiental. Concretamente, interesa reproducir parciamente parte de la fundamentación jurídica de la Sentencia 53/2017, que aglutina la doctrina de este tribunal en la materia:

> Refiriéndose ya, tanto a la legislación estatal sobre evaluación de impacto ambiental anteriormente en vigor (texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008), como a la vigente en la actualidad (Ley 21/2013 de evaluación ambiental), este Tribunal ha precisado que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental «supone un preceptivo trámite de información pública, consultas a las Administraciones públicas afectadas y a personas interesadas sobre el proyecto y el estudio de impacto ambiental presentado (que ha de comprender las medidas adecuadas para que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los posibles efectos adversos de la actividad sobre el medio ambiente, así como un programa de vigilancia ambiental para garantizar el

cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, en todas las fases del proyecto)» (STC 106/2014, de 24 de junio , FJ. 8; reiterada en la STC 134/2014, de 22 de julio, FJ 2, y STC 73/2016, de 14 de abril, FJ 8, entre otras).

Finalmente, hay que tener en cuenta que, al hacer tales pronunciamientos, este Tribunal «ha sido muy consciente… del encuadramiento de la evaluación de impacto ambiental en el seno de un procedimiento administrativo y de su consideración como un trámite esencial en un procedimiento complejo de aprobación de obras y proyectos» (STC 57/2015, de 18 de marzo, FJ 4).

Pues bien, no hay duda de que esta doctrina –que, como hemos advertido, se pronuncia en relación con la figura de la evaluación de impacto ambiental– es aplicable mutatis mutandi a lo que ahora la Ley 21/2013 define como «evaluación ambiental» y que, conforme a su artículo 5, incluye tanto la evaluación ambiental de planes y programas («evaluación ambiental estratégica») como la de proyectos («evaluación de impacto ambiental»).

d) En definitiva, estamos ante un instrumento de tutela ambiental preventiva fundamental y con un importante cariz procedimental. Esta característica es consustancial, de hecho, a su propia concepción y finalidad, ya que la evaluación ambiental se articula como un trámite complejo y esencial para cohonestar el desarrollo económico con el deber de protección del medio ambiente que tienen todos los poderes públicos, conforme al artículo 45 CE, en aras de un desarrollo sostenible. Su fin es garantizar la adecuada integración de los aspectos ambientales en el marco de los distintos procedimientos administrativos que rigen la elaboración y adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que estén sometidos a dicha evaluación, para que las autoridades competentes conozcan y valoren las repercusiones que éstos pueden tener en el medio ambiente, consideren las alternativas ambientalmente viables, y establezcan las necesarias medidas de prevención, corrección y, en su caso, compensación de los efectos adversos para el medio ambiente. Ello con independencia de que dichos planes, programas o proyectos sean –en función del ámbito material en los que se adopten– competencia estatal, autonómica o local. Es desde esta perspectiva desde la que hay que entender la definición de la evaluación ambiental dispuesta en el artículo 5.1 de la Ley 21/2013, según el cual estamos ante un «procedimiento administrativo instrumental respecto del de aprobación o de adopción de planes y programas, así como respecto del de

autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa, a través del cual se analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos».

e) Consecuentemente, atendiendo a su finalidad y contenido, las disposiciones articuladoras de la evaluación ambiental se encuadran en la materia de medio ambiente, en la que el Estado tiene competencia para regular con carácter básico este instrumento, conforme al artículo 149.1.23 CE, y la Generalitat de Cataluña para establecer normas de desarrollo y adicionales de protección, conforme al artículo 144 y los artículos 111 y 113 EAC. Es obvio, asimismo, que no cabe encuadrarlo, como señala la representación procesal de la Generalitat, en el artículo 149.1.18 CE, que otorga al Estado la competencia exclusiva para regular el «procedimiento administrativo común», ya que no regula la estructura general del iter procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración, ni establecen con carácter general y abstracto, para toda suerte de procedimientos, las garantías generales del particular o el régimen de elaboración, validez, ejecución y revisión de los actos administrativos (STC 227/1988, de 29 de noviembre , FJ 32).

113. Además del título correspondiente a medio ambiente, y aunque su papel en el anteproyecto es en este caso accesorio a aquel, también tiene incidencia en el anteproyecto, dado el peso que en el mismo adquiere el ámbito procedimental, la competencia prevista en el artículo 10.6 del EAPV correspondiente a "normas procesales y de procedimientos administrativo y económico-administrativo que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco".

114. Con carácter puntual, el anteproyecto introduce también aspectos relacionados con la contratación pública; materia en la que la Comunidad Autónoma ostenta competencia de desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado [artículo 11.1.b) EAPV].

115. Finalmente, en atención a lo dispuesto sobre fiscalidad ambiental, la posible creación de impuestos propios de la Comunidad Autónoma se encuentra expresamente prevista en el artículo 42.b) EAPV, como posible ingreso de la hacienda general del País Vasco, fuente de recursos que se configura al margen del sistema tradicional de concierto económico que regula las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco, artículo 41 EAPV, y del que se nutren las aportaciones que percibirá de las diputaciones forales, *ex* artículo 42 a) EAPV.

116. El artículo 17.1.A).b) LTH incluye entre los ingresos ordinarios de la hacienda general del País Vasco, para el adecuado ejercicio y financiación de todas las competencias que correspondan a las instituciones comunes, a "los rendimientos de los impuestos propios de la Comunidad Autónoma, que establezca el Parlamento Vasco, así como los recargos que este pudiera implantar". De forma esclarecedora, a su vez, el artículo 34.1.a) de la Ley de principios ordenadores de la hacienda general del País Vasco —cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre—, menciona como tributos propios de la Comunidad Autónoma los impuestos propios que "no estando comprendidos o previstos en el Concierto Económico y no recayendo sobre hechos imponibles gravados por el Estado pueda establecer, en su caso, aquella de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 42 del Estatuto de Autonomía".

117. Esta posible creación de impuestos propios por parte del Parlamento Vasco se encuentra constreñida en el precepto estatuario, pues ha de serlo "de acuerdo con lo establecido en el artículo 157 de la Constitución y en la Ley Orgánica sobre financiación de las Comunidades Autónomas".

II **EN RELACIÓN CON LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS**

118. La Ley 27/83, de 25 de noviembre, de relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus territorios históricos (LTH) atribuye a estos últimos algunas competencias relacionadas con el medio ambiente.

119. Con carácter exclusivo, el número 9 del artículo 7.a) les atribuye la competencia en materia de montes, aprovechamientos, servicios forestales, vías pecuarias y pastos, en los términos del artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía; guardería forestal y conservación y mejora de los suelos agrícolas y forestales.

120. Sobre esta competencia, en nuestro Dictamen 226/2012 ya hicimos referencia a la Decisión 2/2011, de 8 de noviembre, de la Comisión Arbitral, emitida en relación con el Proyecto de Ley de cambio climático. Aunque en ese caso su incidencia se producía en un soporte físico concreto, como son los montes, consideramos que su argumentación resultaba trasladable a otros soportes físicos contemplados en el artículo 7.a).9 de la LTH. No reproducimos aquí sus argumentos para no extendernos en una cuestión que no está afectada por el anteproyecto

121. Sin embargo, el anteproyecto sí plantea expresamente una modificación del artículo 7.c).6 de la LTH. Actualmente, este artículo atribuye a los órganos forales las facultades de calificación, señalización de medidas correctoras, inspección y sanción en relación con actividades molestas insalubres, nocivas y peligrosas, que puedan establecerse, en

suelo urbano residencial, siempre que no afecte a más de un Territorio histórico o ente público extracomunitario, y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a los entes municipales.

122. Lo que propone el anteproyecto en su disposición final primera es redefinir la competencia foral en esta materia atribuyendo a los órganos forales la imposición de medidas protectoras y correctoras en actividades sujetas a LAC en los municipios de menos de 10.000 habitantes y en los que, con población superior a ese número, así lo solicite el ayuntamiento correspondiente, manteniendo sin cambios el inciso final del precepto.

123. En este caso, por tanto, sí se produce una alteración competencial interna, pero tampoco constituye un obstáculo para la viabilidad de la norma puesto que esa modificación se materializaría mediante ley y de acuerdo con los requisitos exigidos por la Comisión Arbitral en su Decisión 05/2003: "una norma con rango de ley dictada por el Parlamento Vasco, que articule de forma directa, expresa y fundada dicha modificación, ya que de lo contrario, la propia LTH se veía desprovista de su propia función de encaje competencial básico en la Comunidad Autónoma del País Vasco".

124. Tampoco se aprecia que exista conflicto competencial en la apertura que el anteproyecto plantea a la fiscalidad ambiental, ya que esta se contempla en términos generales, y cuando se propone la inclusión de medidas concretas, como, por ejemplo, la afectación de los ingresos obtenidos por medio de la fiscalidad ecológica, los mandatos se limitan al ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma, respetando el ámbito de actuación de los territorios históricos en materia fiscal.

III **EN RELACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES**

125. El anteproyecto tiene incidencia en un área de orden tradicionalmente local, como es el de las actividades clasificadas.

126. Por un lado, se contempla que aquellas actividades o instalaciones sujetas a la obtención de una Autorización ambiental integrada o a una Autorización ambiental única no precisarán obtener, como actualmente ocurre, la Licencia de actividad clasificada.

127. Por otro lado, tal y como hemos avanzado en el apartado anterior, el anteproyecto propone en su disposición final primera redefinir la competencia foral en esta materia atribuyendo a los órganos forales la imposición de medidas protectoras y correctoras en actividades sujetas a LAC en los municipios de menos de 10.000 habitantes y en los que, con población superior a ese número, así lo solicite el ayuntamiento correspondiente.

128. La atribución a los municipios de la competencia en materia de medio ambiente —ordenación complementaria, promoción, gestión, defensa y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, incluida la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas (artículo 17.1.8 LILE)— se realiza "en el marco de lo dispuesto en la presente ley y en la legislación que sea de aplicación", por lo que el reconocimiento de la autonomía local no impide que las instituciones comunes puedan ejercer su propias competencias —en este caso legislativas— en materia de medio ambiente.

129. Cabe recordar que también la vigente Ley 3/1998 (LGPMA) atribuye a las instituciones comunes la elaboración y aprobación de la normativa en materia de medio ambiente en el marco de lo establecido en la presente ley, así como el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y ecología, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

130. Profundizando en el detalle de las novedades del anteproyecto que afectan al ámbito local, esta Comisión considera que los efectos sobre la actual actividad municipal en el área de las actividades clasificadas resultan razonables e, incluso, ineludibles, ya que son consecuencia de la unificación de las autorizaciones que convergen en la Autorización ambiental integrada y en la Autorización ambiental única. Vienen condicionadas, por un lado, por lo dispuesto en la legislación básica y, por otro lado, por el objetivo de eliminar cargas en los particulares, facilitando y simplificando en lo posible los trámites a realizar ante las administraciones públicas. Todo ello, además, sin desplazar a los ayuntamientos, que siguen participando en el procedimiento para otorgar esas autorizaciones mediante un informe preceptivo.

131. En cuanto a la competencia atribuida a las diputaciones forales en el artículo 7.2.b) del anteproyecto, por la cual deben asistir a los ayuntamientos en relación con las actividades e instalaciones sometidas al procedimiento de licencia o comunicación previa de actividad clasificada, supone, de acuerdo con la modificación planteada en la LTH por la disposición final segunda del anteproyecto, que la función de emitir el informe de medidas correctoras se impone con carácter general a las diputaciones forales, cuando actualmente esta función se reparte entre estas y la Administración de la Comunidad Autónoma teniendo en cuenta el suelo en el que se ubica la actividad. Únicamente los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes que así lo deseen podrán asumirlo. En este caso, por tanto, no se plantea como una imposición y tampoco se aprecia, por tanto, colisión alguna con el principio de autonomía local.

132. En suma, al margen de lo analizado en el procedimiento de elaboración, el texto sometido a dictamen resulta respetuoso con las competencias locales y, en concreto, con las competencias propias de los municipios que contempla la LILE.

IV **CONCLUSIÓN**

133. La Comisión considera, en definitiva, que la regulación que afronta el anteproyecto se extiende a la materia de la intervención administrativa respecto de las actividades con incidencia en el medio ambiente, por lo que dispone del amparo competencial preciso en el título invocado.

MARCO NORMATIVO

134. La exposición de motivos del anteproyecto señala que una de las señas de identidad de la normativa ambiental en los últimos años ha sido la profusión de normas promulgadas desde distintos ámbitos y niveles, adaptándose, de esta forma, a las necesidades emergentes que la propia sociedad demanda.

135. Por otro lado, el anteproyecto es ambicioso en cuanto a su contenido que, por su propia naturaleza, ya resulta complejo y se encuentra condicionado en muchos aspectos por la normativa comunitaria que ha sido traspuesta al ordenamiento interno mediante normativa básica del Estado.

136. De entre las diferentes perspectivas desde las que se puede enfocar la materia de medio ambiente, el anteproyecto lo aborda fundamentalmente desde la perspectiva procedimental, aunque dirigida a materializar fundamentalmente: i) el derecho a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental; ii) la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente; iii) la evaluación ambiental; iv) la inspección y control ambiental; v) la restauración de la legalidad ambiental y la responsabilidad por daños medioambientales y; vi) la disciplina ambiental.

I **EN MATERIA DE DERECHO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA**

137. En el ámbito internacional, constituye una referencia obligada en la materia el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998 (Ratificado por España el 15 de diciembre de 2004).

138. Por su parte, la Ley estatal 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (LAPMA), incorpora, a su vez, la Directiva 2003/4/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, y la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo Declaración de la Comisión.

II **EN CUANTO A LA ORDENACIÓN DE ACTIVIDADES CON AFECCIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE**

139. Mediante la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) se refundieron la denominada Directiva IPPC y seis directivas sectoriales en una única y nueva directiva sobre emisiones industriales, que refuerza la aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD) en la Unión.

140. Su trasposición y regulación en el ordenamiento interno se ha actualizado a través del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (LPCIC), cuyo contenido tiene también carácter básico.

141. También constituye normativa básica el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

III **EN CUANTO A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL**

142. En este ámbito deben tenerse en cuenta las siguientes directivas:

a) Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

b) Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

c) Directiva 2014/52/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, por la que se modificó la Directiva sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos.

143. Las citadas directivas se encuentran incorporadas al derecho interno a través de la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre de 2013, de evaluación ambiental (LEA), recientemente modificada, para adaptarse a la última de ellas, por la Ley 9/2018, de 9 de diciembre, por la que se modifica esta ley junto con la Ley 21/2015, de 20 de julio de 2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de 2003, de montes, y la Ley 1/2005, de 9 de marzo de 2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

144. Numerosos aspectos de la LEA fueron analizados por el Tribunal Constitucional en la ya citada Sentencia 53/2017, de 11 de mayo, en la cual consideró inconstitucional la declaración como legislación básica de diferentes cuestiones puntuales al considerar que se trata de: (I) meras remisiones o reiteraciones de las reglas de procedimiento administrativo común o de las bases dictadas por el Estado en el ámbito del artículo 149.1.18 CE, que no tengan una específica vocación tuitiva de protección del medio ambiente; o (II) normas complementarias o accesorias de aquellas que regulan los trámites y requisitos esenciales de la evaluación ambiental, las cuales pueden ser adoptadas por las comunidades autónomas. No obstante, mantuvo el carácter básico de la mayor parte de la ley y, en general, los elementos esenciales de la misma.

IV **EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

145. En esta materia, la Ley estatal 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad ambiental (modificada puntualmente en varias ocasiones pero especialmente mediante la Ley 11/2014, de 3 de julio), también constituye, en su casi totalidad, legislación básica y transpone también la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (con sus modificaciones de los años 2006, 2009 y 2013).

V **OTRAS MATERIAS**

146. Dada la importancia que en el anteproyecto tienen las cuestiones de procedimiento, se ha de observar lo dispuesto con carácter básico por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común (LPAC)

147. Por otro lado, el anteproyecto se refiere puntualmente a diversas cuestiones que también se desenvuelven en un marco preestablecido por la normativa comunitaria y estatal de carácter básico. Sin ánimo exhaustivo, nos referiremos a las que pueden tener mayor interés:

a) Es el caso de la herramienta de gestión que permite evaluar, mejorar y dar a conocer el comportamiento ambiental de las empresas y otras organizaciones, regulada por el Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. En esta materia, también con carácter básico, el Estado ha aprobado el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, que establece las normas para su aplicación.

b) En el caso de la etiqueta ecológica cabe citar el Reglamento (CE) Nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE, y el Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para su aplicación, con la misma consideración de legislación básica.

c) En cuanto a la contratación pública verde, se ha de tener igualmente en cuenta el contenido básico de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

EXAMEN DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

148. El anteproyecto sometido a dictamen aglutina en un único texto las fórmulas de intervención administrativa en las diferentes actuaciones que tienen o pueden tener incidencia sobre el medio ambiente.

149. El texto pretende asimismo integrar en la medida de lo posible estos procedimientos en aras de su simplificación y agilización. Con ello se pretende lograr un equilibrio entre la conservación y defensa del medio ambiente y el mantenimiento de las distintas actividades económicas, con el debido respeto de los derechos que los particulares ostentan frente a la Administración.

150. Como destaca la memoria, el texto tiene también en cuenta lo dispuesto en la Ley estatal 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

151. Dicha norma transpone la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre

el medio ambiente y modifica sustancialmente varios aspectos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

152. A diferencia de lo que ocurre con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, se constata que el anteproyecto no incluye ámbitos sectoriales como los relativos a la calidad del aire, los ruidos, los residuos, los suelos contaminados, la protección de las aguas y del litoral o la biodiversidad y la protección del suelo.

153. Algunos de estos ámbitos han sido o serán legislados en nuestro ordenamiento jurídico por sus propias leyes específicas, como ocurre con la Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas, con la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, o con el anteproyecto de ley de conservación del patrimonio natural de Euskadi, mientras que otros sectores han sido ocupados por la normativa básica o han sido objeto únicamente de desarrollo reglamentario.

154. Habida cuenta que el anteproyecto prevé la derogación íntegra de la Ley 3/1998, sería recomendable que, por razones de trazabilidad y seguridad jurídica, el departamento promotor hiciera alguna referencia, por ejemplo en la exposición de motivos, sobre el criterio general adoptado por el anteproyecto con relación a los ámbitos sectoriales que se incluían en la Ley 3/1998, y que dejan de ser objeto de un tratamiento específico en el presente anteproyecto de Ley de Administración ambiental.

155. Aunque la regulación sustantiva de estas materias no encuentra su debido acomodo sistemático en este anteproyecto, puede valorarse incluir alguna disposición en su parte final que mantenga el apoyo legal de los diferentes reglamentos de desarrollo o, en su caso, tener esta circunstancia en cuenta en la disposición derogatoria del anteproyecto.

156. Seguidamente y a efectos expositivos, el presente dictamen incorpora en primer lugar el análisis de las cuestiones más generales, siguiendo la estructura del propio anteproyecto. Posteriormente, volveremos a analizar en ese mismo orden las cuestiones puntuales de menor calado.

I LA UNIFICACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE Y LA COMISIÓN AMBIENTAL DEL PAÍS VASCO

157. En la actualidad, existen tres órganos consultivos de la Administración General en materia de medio ambiente y patrimonio natural: la Comisión Ambiental y el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Euskadi, creados en la Ley 3/1998 (artículos 9 a 15); y el Consejo Asesor de la Naturaleza-Naturzaintza.

158. El departamento promotor propone crear un único órgano consultivo, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que absorberá los tres órganos consultivos mencionados, y que actuará, a su vez, bajo un doble amparo legal, una vez aprobados los anteproyectos de Ley de Administración ambiental y de conservación del patrimonio natural.

159. La propuesta de fusionar dichos órganos consultivos responde a un criterio de racionalización de los órganos consultivos y de cooperación de la Administración General.

160. En el caso de la unificación de la Comisión Ambiental y del Consejo Asesor de Medio Ambiente, se estima razonable el planteamiento propuesto por una serie de motivos: (I) ambos órganos fueron creados en la Ley 3/1998; (II) ambos actúan bajo el mismo marco legal, que no es otro que el establecido por la Ley 3/1998, y, por lo tanto, conocen prácticamente los mismos asuntos; (III) su composición se repite parcialmente, ya que las y los miembros de la Comisión Ambiental, también lo son del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

161. Por lo tanto, parece razonable la unificación de ambos órganos en aras a evitar duplicidades innecesarias y a agilizar así su gestión.

162. En relación con la incorporación a este órgano único de las funciones que actualmente desempeña el Consejo Asesor de la Naturaleza–Naturzaintza, nos remitimos a lo señalado por esta Comisión en su Dictamen 123/2019, emitido en relación con el anteproyecto de Ley de conservación del patrimonio natural de Euskadi.

II INTERVENCIÓN AMBIENTAL

A) La concurrencia de los regímenes de intervención ambiental con la evaluación de impacto ambiental

163. El artículo 22 del anteproyecto regula la forma de integración de los regímenes de intervención ambiental con la evaluación ambiental.

164. El artículo 14 de la LEA, por su parte, establece que "las comunidades autónomas dispondrán lo necesario para incluir las actuaciones en materia de evaluación de impacto ambiental, cuando así sea exigible, en el procedimiento de otorgamiento y modificación de la autorización ambiental integrada".

165. Esa misma ley, en sus artículos 25 y 41, atribuye a la declaración ambiental estratégica y la declaración de impacto ambiental la naturaleza de informes preceptivos determinantes.

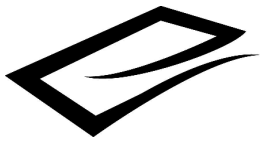
166. En su exposición de motivos la LEA ofrece una explicación sobre ese carácter determinante, señalando que se manifiesta en una doble vertiente, formal y material.

167. Desde el punto de vista formal o procedimental, el carácter determinante de los pronunciamientos ambientales implica que no es posible continuar con la tramitación del procedimiento sustantivo en tanto este no se evacue.

168. Desde el punto de vista material, añade, el carácter determinante de un informe supone que el informe resulta necesario para que el órgano competente para resolver pueda formarse criterio sobre las cuestiones a las que el propio informe se refiere.

169. La jurisprudencia ha analizado también el carácter determinante de algunos informes. La Sentencia del Tribunal Supremo (STS), Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 5, de 14 de junio de 2013, realiza el siguiente análisis sobre este tipo de informes, afirmando lo siguiente:

> 1º) que partiendo de la base de que determinar es "fijar los términos de algo", si el legislador atribuye a un informe el carácter de determinante, es porque le quiere atribuir un valor reforzado. En palabras de la sentencia de esta Sala y Sección de 8 de marzo de 2010 (recurso de casación nº 771/2006), se trata de informes "necesarios para que el órgano que ha de resolver se forme criterio acerca de las cuestiones a dilucidar. Precisamente por tratarse de informes que revisten una singular relevancia en cuanto a la configuración del contenido de la decisión, es exigible que el órgano competente para resolver esmere la motivación en caso de que su decisión se aparte de lo indicado en aquellos informes". Desde esta perspectiva, por mucho que estos informes no puedan caracterizarse como vinculantes desde un plano formal, sí que se aproximan a ese carácter desde el plano material o sustantivo;
>
> y 2º) más aún, la posibilidad de apartarse motivadamente de esos informes no es absoluta ni incondicionada, sino que ha de moverse dentro de los límites marcados por el ámbito de competencia de la Autoridad que resuelve el expediente en cuyo seno ese informe estatal se ha evacuado. Esto es, un hipotético apartamiento del informe sobre suficiencia de recursos hídricos sólo puede sustentarse en consideraciones propias del legítimo ámbito de actuación y competencia del órgano decisor (autonómico en este caso) y no puede basarse en consideraciones que excedan de ese ámbito e invadan lo que sólo a la Administración del Estado y los órganos que en ella se insertan corresponde valorar, pues no está en manos de las Comunidades Autónomas disponer de la competencia exclusiva estatal. Por eso, el



> informe estatal sobre suficiencia de recursos hídricos, en cuanto se basa en valoraciones que se mueven en el ámbito de la competencia exclusiva estatal, es, sin ambages, vinculante.

170. Los informes determinantes, por tanto, resultan formalmente diferentes a los vinculantes, aunque materialmente sus efectos son muy similares al no poder el órgano resolutorio apartarse de los mismos más que dentro de los límites marcados por su propia competencia.

171. El anteproyecto prevé un sistema para integrar las declaración e informes de impacto ambiental en los regímenes de intervención ambiental que difiere de lo previsto en la LEA.

172. La LEA, en sus artículos 25 y 41, atribuye a la declaración ambiental estratégica y la declaración de impacto ambiental la naturaleza de informes preceptivos determinantes.

173. Partiendo de esa calificación, la ley prevé un mecanismo de resolución de discrepancias (artículo 12), de manera que el órgano sustantivo está determinado por el condicionado de los pronunciamientos ambientales, pudiendo apartarse motivadamente sólo en el ámbito de sus competencias, y planteando la correspondiente discrepancia ante el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, o en su caso, el que dicha comunidad haya determinado.

174. En coherencia con lo anterior, establece que los pronunciamientos ambientales en sí mismos no serán recurribles, si bien sí lo serán los pronunciamientos del órgano sustantivo en virtud de los cuales se aprueben o adopten los planes o programas o se autoricen los proyectos, en los que se incorporan los pronunciamientos ambientales.

175. Por su parte, el sistema del anteproyecto parte de atribuir a los pronunciamientos medioambientales —tanto en su artículo 22, como los artículos 73, 74 77 y 78— la naturaleza de informes preceptivos y vinculantes.

176. El apartado a) del artículo 22 establece que cuando la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la actividad se encuentre sometida al régimen de autorización ambiental integrada o al de autorización ambiental única, los procedimientos administrativos correspondientes a ambos regímenes y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria se integrarán.

177. Añade, además, que el contenido de la declaración de impacto ambiental formará parte de la autorización ambiental integrada o de la autorización ambiental única, pudiendo emitirse ambos pronunciamientos en el mismo acto administrativo.

178. Por tanto, en estos casos la integración de la declaración de impacto ambiental en la autorizaciones ambientales puede resultar plena, de manera que, no sólo se puede integrar esa declaración en el marco del procedimiento autorizatorio, sino que ambas cuestiones pueden llegar a resolverse en un único acto, en cuyo caso, la naturaleza —vinculante o determinante— de la declaración de impacto pasa a segundo plano, porque esa declaración de impacto formará parte de la motivación del acto por el cual se resuelva sobre la autorización ambiental integrada o única.

179. Los apartados b) y c) del artículo 22 contemplan respectivamente los supuestos de actividades sujetas a licencia y comunicación previa de actividad clasificada. En el primer caso, esto es, el de las actividades sujetas a autorización previa, la declaración de impacto ambiental será vinculante para la entidad local y lo mismo ocurre en el segundo supuesto, si bien en ese caso el carácter vinculante se atribuye tanto a la declaración como al informe de impacto.

180. En este caso, así como en el resto de supuestos en los que el órgano sustantivo sea diferente al órgano medioambiental, el carácter vinculante de la declaración o del informe de impacto convierte en innecesario el procedimiento de resolución de discrepancias previsto en el artículo 12 de la LEA, dado que se impone el criterio de estos informes.

181. Parece conveniente, por ello, recordar lo que el Tribunal Constitucional ha señalado sobre los artículos 25.4 y 47.6 de la LEA; artículos que establecen con carácter básico la improcedencia de recurso alguno contra la declaración ambiental estratégica o contra el informe de impacto ambiental.

182. La Generalitat catalana consideraba la decisión sobre la posibilidad de que la declaración de impacto ambiental fuera objeto de recurso administrativo y en qué modo y condiciones como una opción que correspondía adoptar, en su caso, a cada una de las administraciones competentes sobre el respectivo procedimiento, "sin menoscabo de lo que establece la normativa en materia de procedimiento administrativo común respecto de los actos de trámite".

183. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 53/2017, de 11 mayo, señala al respecto a lo siguiente:

(…) Como tales actos de trámite se han concebido como no recurribles de forma autónoma, recogiendo así en el apartado cuarto del artículo 25 y en el apartado seis del artículo 47 de la Ley de evaluación ambiental lo dispuesto con carácter general para esta clase de actos, tanto en el marco del procedimiento administrativo común (art. 112 de la Ley 39/2015, antes artículo 107 de la Ley 30/1992 LPC), como de la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 25 de la Ley 29/1998 LJCA). De este modo, lo que podrá ser objeto de recurso por vulneración de lo dispuesto en la Ley de evaluación ambiental –ya sea en vía administrativa y/o judicial, según el caso– serán las disposiciones o resoluciones por las que se adopten finalmente los planes o programas, o se autoricen los proyectos (o, en el caso de las actividades cuyo acceso o ejercicio esté sometido a declaración responsable o comunicación previa en vez de autorización, podrán recurrirse las resoluciones del órgano sustantivo a las que hace referencia el artículo 9.2 de la Ley de evaluación ambiental).

En el marco de la Ley de evaluación ambiental, estas disposiciones aportan la imprescindible coherencia por lo que se refiere a la naturaleza y a la configuración de este instrumento como vía de integración de los factores ambientales en la adopción de los planes, programas o proyectos sometidos a la misma, con independencia de su ubicación y de cuál sea la Administración competente para adoptarlos. En consecuencia, forman parte esencial de la configuración de la evaluación ambiental en sus líneas maestras, y como tales pueden ser tenidas sin dificultad por básicas y son, por tanto, respetuosas con el orden constitucional de competencias.

Este carácter determinante se materializa en el mecanismo previsto en esta ley para la resolución de discrepancias, de manera que el órgano sustantivo está determinado por el condicionado de los pronunciamientos ambientales, pudiendo apartarse motivadamente solo en el ámbito de sus competencias y planteando la correspondiente discrepancia ante el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, el que dicha comunidad haya determinado.

184. Tal y como lo interpreta el propio tribunal, el sistema de la LEA, apoyado en la naturaleza determinante estos informes, lo que pretende finalmente es condicionar al órgano sustantivo de manera que este pueda únicamente apartarse motivadamente, en el ámbito de sus competencias y tras obtener la decisión favorable del Consejo de Gobierno o, en su caso, otro que fuera determinado por la normativa autonómica.

185. El sistema que plantea el anteproyecto mantiene esa garantía y la incrementa atribuyendo al informe ambiental naturaleza vinculante.

186. Conforme al reparto competencial ya analizado entre el Estado y la Comunidad Autónoma, esta última podría incluso incorporar un nuevo trámite, de carácter vinculante, sobre las medidas de protección previstas por la legislación básica. Con mayor motivo, por tanto, puede considerarse como una medida de protección adicional la consideración de un informe como vinculante cuando la legislación básica lo considera únicamente determinante.

187. Esta circunstancia afecta, como es lógico, al sistema de solución de discrepancias que también ha sido validado como legislación básica, pero que en el sistema del anteproyecto desaparece por innecesario.

188. Aunque el anteproyecto nada diga al respecto, lo que sí debe respetarse, por su carácter básico, es lo establecido en los artículos 25.4 y 47.6 de la LEA con respecto al carácter no recurrible, de modo autónomo, de la declaración ambiental estratégica y del informe de impacto ambiental.

189. Con respecto al artículo 22 del anteproyecto, la Comisión estima conveniente, en cualquier caso, la aclaración de algunas cuestiones que quedan por resolver en la actual redacción.

190. La primera es que de la lectura del artículo 22 parece deducirse que el informe de impacto ambiental únicamente está previsto para supuestos de actividad clasificada sometidos a comunicación, o que no es objeto de integración con las autorizaciones ambientales ya que no se menciona en los apartados a) y b) y su carácter igualmente vinculante se confirma en el artículo 78.1 del anteproyecto. De ser este el resultado pretendido, debería expresarse con mayor claridad la forma de integrar ese informe con las autorizaciones ambientales o, en otro caso —como parece desprenderse, por ejemplo, de lo dispuesto en el artículo 45.1.e)—, revisar la redacción de los apartados a) y b) para incluir los informes de impacto junto con las declaraciones de impacto.

191. La segunda está centrada en la redacción del apartado d) de este artículo 22. Este apartado establece que cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental, no podrá otorgarse autorización, licencia de actividad clasificada o presentar comunicación previa de actividad clasificada sin que previamente se haya emitido dicha declaración o informe.

192. Esta situación es posible de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación de la (PCIC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, en el que se plantea la necesaria coordinación de la Autorización ambiental integrada con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

193. En coherencia con el reparto competencial en la materia, el anteproyecto no ha calificado la declaración de impacto elaborada por la Administración del Estado como vinculante, por lo que entendemos que debería ser considerado como determinante y, en ese caso, podría recobrar sentido el sistema de resolución de discrepancias de la LEA, al cual convendría remitirse aunque fuera únicamente a esos efectos.

194. En tercer lugar, entendemos que la redacción del apartado a) se debe modificar para sustituir la expresión "pudiendo emitirse". Tal y como se encuentra prevista esa integración, lo coherente, también con lo dispuesto en el artículo 42.4 sobre el contenido de las autorizaciones, es que exista en todo caso un único acto que resuelva sobre la declaración de impacto y la autorización. Por ello, recomendamos separar ese mensaje en un último inciso que establezca que ambos pronunciamientos se emitirán en un único acto.

B) Actividades clasificadas

195. En cuanto a las actividades clasificadas, el anteproyecto introduce novedades ya anunciadas.

196. En primer lugar, los supuestos sujetos a autorización ambiental integrada o única no requieren de licencia municipal de actividad clasificada. No obstante, la participación del municipio afectado se garantiza mediante la emisión del informe previsto en el artículo 36 del anteproyecto.

197. En cuanto al informe de imposición de medidas correctoras, también hemos aludido a la modificación que el anteproyecto introduce en la atribución competencial de esta cuestión, que se traslada a las diputaciones forales, salvo en el caso de los municipios de más de 10.000 habitantes que pueden optar por establecer esas medidas con sus propios medios. En cualquier caso, también pueden solicitar el informe a la diputación foral correspondiente.

198. Otra de las novedades es la reducción del plazo para otorgar la licencia que se reduce de los seis meses actualmente previstos en la Ley 3/1998 hasta los cuatro meses que prevé el artículo 52 del anteproyecto.

199. La memoria reconoce que esta reducción supondrá una carga de trabajo adicional para los ayuntamientos, si bien, como ya se ha comentado anteriormente, considera que las nuevas cargas se verán compensadas por la reducción de expedientes que deberán tramitar como consecuencia del menor número de supuestos sometidos a licencia municipal.

200. El artículo 52.5 establece la obligación de los ayuntamientos de mantener un registro de las actividades e instalaciones sujetas a licencia de actividad clasificada que se desarrollen en su término municipal. En este caso, la diferencia con respecto al régimen vigente es que ese registro no incluiría las actividades sujetas a comunicación previa, ya que en el capítulo en el que se regula la comunicación previa no se contempla una obligación similar. La Comisión estima, sin embargo, que la comunicación previa pierde sentido si el ayuntamiento no mantiene un registro de las actividades a los efectos, por ejemplo, de su inspección.

201. También puede llamar la atención inicialmente la incorporación en el artículo 53.4 del anteproyecto de lo dispuesto en relación con los establecimientos públicos sujetos a la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, ya que se contempla una excepción que permite el inicio de la actividad "aun cuando no se acredite el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en la licencia del establecimiento". Sin embargo, en este caso no se hace sino reproducir lo previsto en el artículo 61.3 de la Ley 3/1998, que, a su vez, fue modificado por la disposición final primera de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas.

III EVALUACIÓN AMBIENTAL

202. El título V del anteproyecto está dedicado a regular la evaluación ambiental. El título se divide en tres capítulos. El primero contiene las disposiciones comunes a la evaluación de impacto estratégica y a la evaluación de impacto ambiental, el segundo se refiere a la evaluación ambiental estratégica de planes y programas y el tercero, a la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Todo ello se concentra en veinte artículos.

203. En esos veinte artículos se contemplan hasta diez remisiones reglamentarias específicas, lo que permite extraer como primera conclusión la contención del anteproyecto en cuanto a su contenido; opción que esta Comisión considera razonable, puesto que favorece la claridad y comprensión del texto normativo.

204. La evaluación ambiental se desarrolla mediante procedimientos complejos, con trámites y valoraciones técnicas para cuyo desarrollo en detalle la norma reglamentaria puede resultar más versátil que la ley.

205. Las remisiones al reglamento en esta materia se refieren concretamente a la determinación del alcance de las evaluaciones ambientales ordinarias (párrafos 1 y 9 del artículo 67), a la publicidad (artículo 68), al registro de personas jurídicas interesadas (artículo 70.2), a la información pública y consultas (artículo 72), a la prórroga del plazo de vigencia de las declaraciones ambientales y de los informes de impacto ambiental (artículos 73.5, 74.5, 77.4 y 78.5) y a la información pública y consultas (artículo 76). A estos supuestos debe sumarse la habilitación al órgano medioambiental para establecer criterios para establecer cuándo un plan o programa no tiene efectos sobre el medio ambiente.

A) Planes, programas y proyectos excluidos de evaluación ambiental

206. Al margen de la selección de contenidos de la norma, la cuestión central de este título es la planteada en el artículo 65 en relación con los planes, programas y proyectos excluidos de evaluación ambiental.

207. La definición de ese ámbito ha sido una de las cuestiones que han provocado diversas observaciones por parte de varios de los agentes que han participado en el proceso de elaboración de la norma.

208. Precisamente por ese interés suscitado, el departamento promotor ha incluido en la respuesta a las alegaciones un apartado específico para expresar los motivos que han llevado a plasmar la opción normativa que se propone en el anteproyecto. Su razonamiento concluye afirmando que:

> (…) Para la redacción del proyecto de Ley de Administración Ambiental, se ha interpretado que el ámbito de aplicación de la Ley 21/2013 queda restringido a los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y se ha optado por definir el ámbito de aplicación de la Ley autonómica, en materia de evaluación ambiental, tanto por inclusión (art. 59, 60, 72 y 74 bis, puestos en relación con los distintos apartados del anexo II), como por exclusión (art. 65). Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en la legislación básica en la materia, se ha recogido la posibilidad de exceptuar determinados proyectos que, aun encontrándose en el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental, pueden ser objeto de un procedimiento alternativo (otras formas de evaluación) (art. 66). En consecuencia, el texto normativo que se recoge en el anteproyecto de Ley distingue con claridad los casos que la propia Ley considera "excluidos de su ámbito de aplicación", de otros casos que, aun encontrándose incluidos en dicho ámbito de aplicación, "pueden ser excluidos" del procedimiento de evaluación. Esta última exclusión debe acordarse en

cada caso y se reserva únicamente para casos excepcionales de proyectos, inicialmente incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley, que pueden ser objeto de otra forma de evaluación.

209. Esta conclusión se funda en la interpretación que se realiza del contexto normativo, tanto europeo como interno, en el que se insertará la norma; interpretación que consideramos coherente y bien fundada. De ahí que consideremos de interés reproducir sus argumentos a efectos aclaratorios, sin perjuicio de añadir posteriormente las advertencias precisas en relación con la opción escogida.

210. El órgano promotor justifica su opción en los siguientes términos:

(…) La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 señala que todos los planes y programas preparados para una serie de sectores y que establecen un marco para la futura autorización de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; Directiva modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5), y todos los planes y programas que deban someterse a evaluación según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7; Directiva modificada por última vez por la Directiva 97/62/CE (DO L 305 de 8.11.1997, p. 42) parecen tener efectos significativos sobre el medio ambiente y, como norma, deben quedar sujetos a una sistemática evaluación medioambiental. Cuando establezcan el uso de pequeñas zonas a escala local o constituyan modificaciones menores de dichos planes o programas sólo se evaluarán cuando los Estados miembros determinen que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente, y que otros planes y programas que establezcan el marco de futura autorización de proyectos pueden no tener efectos significativos sobre el medio ambiente en todos los casos y deben evaluarse sólo cuando los Estados miembros determinen que puedan tener esos efectos.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva,

1.- Se llevará a cabo una evaluación medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 a 9 de la presente Directiva, en relación con los planes y programas a que

se refieren los apartados 2 y 4 que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.

2.- Salvo lo dispuesto en el apartado 3, serán objeto de evaluación medioambiental todos los planes y programas:

a) que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE, o,

b) que, atendiendo al efecto probable en algunas zonas, se haya establecido que requieren una evaluación conforme a lo dispuesto en los artículos 6 o 7 de la Directiva 92/43/CEE.

3.- Los planes y programas mencionados en el apartado 2 que establezcan el uso de zonas pequeñas a nivel local y la introducción de modificaciones menores en planes y programas mencionados en el apartado 2 únicamente requerirán una evaluación medioambiental si los Estados miembros deciden que es probable que tengan efectos significativos en el medio ambiente.

4.- En relación con los planes y programas distintos a los mencionados en el apartado 2, que establezcan un marco para la autorización en el futuro de proyectos, los Estados miembros determinarán si el plan o programa en cuestión puede tener efectos medioambientales significativos.

5.- Los Estados miembros determinarán si algún plan o programa contemplado en los apartados 3 y 4 puede tener efectos significativos en el medio ambiente, ya sea estudiándolos caso por caso o especificando tipos de planes y programas, o combinando ambos métodos. A tal efecto, los Estados miembros tendrán en cuenta en cualquier caso los criterios pertinentes establecidos en el anexo II, a fin de garantizar que los planes y programas con efectos previsiblemente significativos en el medio ambiente queden cubiertos por la presente Directiva.

Por su parte, la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, se aplica a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos públicos y privados que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente (art. 1), y en su artículo 2 establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos en el medio ambiente. Estos proyectos se definen en el artículo 4.

La redacción de estos textos es muy clara en cuanto a que únicamente los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente deben someterse a evaluación ambiental. Los planes, programas y proyectos pueden tener o no efectos sobre el medio ambiente, pero procede aplicar la evaluación ambiental cuando los efectos que puedan tener sean significativos. Sensu contrario, no procede aplicar la evaluación ambiental cuando los planes, programas y proyectos no puedan tener efectos significativos.

(…)

En este sentido, la Guía sobre aplicación de la Directiva 2001/42/CE**,** publicada por la Comisión Europea en 2003 recoge lo siguiente:

Introducción. Apartado 1.6: El primer paso para comprender ésta (la Directiva) es decidir a qué planes y programas es aplicable. El documento, por lo tanto, empieza comentando su ámbito de aplicación, centrando la atención en el concepto de «planes y programas», así como en la cuestión de si es probable que tengan efectos significativos en el medio ambiente. A continuación, se examinan, por orden, el contenido del informe medioambiental, los requisitos en cuanto a garantías de calidad, las disposiciones en materia de consulta, las características del requisito de supervisión y, por último, las relaciones entre la Directiva y otros actos legislativos comunitarios.

Ámbito de aplicación de la Directiva. Apartado 3.1: Las disposiciones que determinan el ámbito de aplicación de la Directiva están recogidas principalmente en dos artículos relacionados entre sí: el artículo 2 define determinadas características que deben poseer los planes y programas para que les sea aplicable la Directiva. A continuación, el artículo 3 define unas normas para determinar cuáles de esos planes y programas es probable que tengan efectos significativos en el medio ambiente y, por lo tanto, deberán ser sometidos a una evaluación medioambiental. En el apartado 3 del artículo 13 se define el ámbito de aplicación temporal (véanse los párrafos 3.64 a 3.66 del presente documento).

Ámbito de aplicación de la Directiva. Apartado 3.44: En algunos casos quizá fuera posible una combinación de ambos métodos (estudio caso por caso y especificación de tipos de planes o programas). El método general consistiría en definir una clase de planes o programas que, en circunstancias especificadas, probablemente no tendrían efectos significativos en el medio ambiente y estipular que, en otras circunstancias, la determinación se hiciera caso por caso.

Ámbito de aplicación de la Directiva. Apartado 3.50: A lo largo de todo el texto de la Directiva, la evaluación medioambiental se supedita a la probabilidad de que se produzcan efectos significativos en el medio ambiente. Predecir los efectos medioambientales probables es complejo, especialmente en los planes o programas de alcance relativamente amplio, o de alto nivel, en los que puede ser difícil anticipar los resultados de la aplicación en el momento de aprobarlos. El uso de «puede» o «probable» da a entender que los efectos medioambientales que hay que tener en cuenta son los que cabe esperar con un grado razonable de probabilidad.

Ámbito de aplicación de la Directiva. Apartado 3.57: Existe mucha incertidumbre, y la falta de datos o conocimientos suficientes puede hacer difícil el decidir si pueden producirse efectos significativos. No obstante, es de suponer que siempre será posible una estimación aproximada de los efectos.

De forma similar a lo recogido en la Directiva 2001/42/CE (evaluación ambiental de planes y programas), la Directiva 2011/92/UE (evaluación ambiental de proyectos) diferencia tres clases de proyectos:

- Los proyectos que pertenecen a determinadas clases tienen repercusiones notables sobre el medio ambiente y deben, en principio, someterse a una evaluación sistemática.

- Los proyectos que pertenecen a otras clases no tienen necesariamente repercusiones importantes sobre el medio ambiente en todos los casos y esos proyectos deben someterse a una evaluación cuando los Estados miembros consideren que podrían tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente.

- Los Estados miembros pueden establecer umbrales o criterios a fin de determinar, basándose en la importancia de sus repercusiones medioambientales, cuáles de dichos proyectos procede evaluar. Los Estados miembros no tienen la obligación de estudiar caso por caso los proyectos por debajo de esos umbrales o ajenos a esos criterios.

Hay que llamar la atención sobre la diferente técnica que utilizan ambas directivas a la hora de delimitar su respectivo ámbito de aplicación. La Directiva 2001/42/CE utiliza los conceptos de posibilidad y probabilidad de que un plan o programa pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, en relación con el tipo de proyectos de los que el plan o programa constituirá un marco para su autorización en el futuro; específicamente, la Directiva repara en si dichos proyectos se encuentran o no sometidos a evaluación de impacto ambiental. En cambio**,** la Directiva 2011/92/UE establece listas cerradas de tipos de proyectos y umbrales, mediante las que se determina el sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o bien la necesidad de que los Estados miembros determinen tal sometimiento mediante lo que la Directiva 2011/92/UE denomina "una comprobación previa". En ningún caso se establece la obligación de que los Estados miembros lleven a cabo tal comprobación previa, ni evidentemente una evaluación de impacto ambiental, para los tipos de proyectos que no se incluyen en el Anexo I o en el Anexo II.

Por último, la Directiva 2011/92/UE incluye entre los criterios para determinar el sometimiento de un determinado proyecto a evaluación ambiental "la probabilidad del impacto".

Así las cosas, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece en su artículo 1 (Objeto y finalidad de la Ley) que la Ley establece las bases que deben

regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente..., por lo que cabe interpretar sensu contrario que la Ley no se aplica a los planes, programas y proyectos que no puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Esta interpretación se puede hacer a la vista de todo lo expuesto sobre la Directiva 2001/42/CE y su guía de aplicación y sobre la Directiva 2011/92/UE.

La Ley 21/2013 abunda en la utilización del concepto de la posibilidad de que un plan, programa o proyecto tenga efectos significativos sobre el medio ambiente. Así, por ejemplo:

- Artículo 5. Definiciones.

a. Evaluación ambiental: ...se analizan los efectos significativos que tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos...sobre el medio ambiente...

- Artículo 31. Informe ambiental estratégico.

2.a. El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente...

En lo que se refiere a la técnica utilizada para delimitar el ámbito de aplicación de los procedimientos de evaluación estratégica de planes y programas y el de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos, la Ley sigue fielmente a las directivas: utiliza los conceptos de posibilidad y probabilidad de que un plan o programa pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, en relación con los proyectos enmarcados en dicho plan o programa, mientras que utiliza listas cerradas en el caso de los proyectos.

En varias de las alegaciones recogidas, se señala que las directivas europeas no basan el sometimiento de los planes, programas y proyectos a evaluación ambiental a que el grado de probabilidad de sus efectos significativos sobre el medio ambiente sea "alto". Sin embargo, ya hemos visto que la Directiva 2001/42/CE distingue determinados planes y programas que "parecen" tener efectos significativos sobre el medio ambiente, de otros planes y programas, que pueden no tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Y también, que la Guía de Aplicación de la Directiva, de la Comisión Europea, señala que el uso de "puede" o "probable" en la

Directiva da a entender que los efectos medioambientales que hay que tener en cuenta son los que cabe esperar con un grado razonable de probabilidad. Igualmente, hemos analizado los tres tipos de conjuntos de proyectos: los que tienen repercusiones notables sobre el medio ambiente, los que no tienen necesariamente dichas repercusiones en todos los casos y, por último, los que se encuentren por debajo de un umbral y para los que los Estados miembros no tienen la obligación de llevar a cabo una comprobación previa.

También hemos visto que la Ley 21/2013 regula los procedimientos de evaluación ambiental que hay que aplicar a los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, pero no contiene ninguna obligación en el sentido de que otros planes, programas y proyectos distintos de aquéllos deban someterse igualmente a evaluación ambiental.

La Ley 21/2013 incluye entre los procedimientos de evaluación ambiental, tanto la evaluación ambiental estratégica (de planes y programas), como la evaluación de impacto ambiental (de proyectos), en sus dos modalidades, ordinaria y simplificada. Los procedimientos ordinarios vienen a constituir la transposición al ordenamiento jurídico español del procedimiento de evaluación medioambiental descrito en los artículos 4 y ss. de la Directiva 2001/42/CE y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental descrito en los artículos 5 y ss. de la Directiva 2011/92/UE. Por su parte, los procedimientos simplificados vienen a dar respuesta a lo recogido en el artículo 3.5 de la Directiva 2001/42/CE, que obliga a los Estados miembros a determinar si algún plan o programa puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque no cumpla los requisitos mínimos señalados en el artículo 3.2 (o bien, aunque cumpliéndolos, si puede considerarse que establece el uso de una zona pequeña a nivel local, o bien, que se trata de una modificación menor), así como, en relación a los proyectos, a la comprobación previa recogida en el artículo 4.2 de la Directiva 2011/92/UE.

Del contenido de la norma se desprende con toda claridad cuál es el ámbito de aplicación de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica ordinaria, evaluación de impacto ambiental ordinaria y evaluación de impacto ambiental simplificada. No ocurre lo mismo con el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica simplificada, de forma que, en los cuatro años de aplicación de la Ley, se ha podido detectar una gran inseguridad en lo que se refiere a las decisiones

que deben adoptar los órganos responsables de la tramitación de los planes y programas que no se encuentran en el ámbito de la evaluación ambiental ordinaria.

El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada es de gran trascendencia, tanto desde el punto de vista de la protección del medio ambiente como desde el punto de vista de la carga administrativa que implica para la tramitación de los planes y programas. Ambos extremos, la protección del medio ambiente y la carga administrativa, al igual que en cualquier otro aspecto del quehacer administrativo, deben guardar una proporción y, como hemos visto, la carga administrativa que supone la evaluación ambiental estratégica debe asumirse únicamente cuando se prevea que los planes y programas pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En ninguna de las alegaciones recogidas se ha argumentado la necesidad o conveniencia de aplicar los procedimientos de evaluación ambiental a planes, programas y proyectos que no puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, ni tampoco se ha aportado ningún análisis coste/beneficio en relación con los aspectos desarrollados en este párrafo.

Ahora bien, aunque no lo explica con total claridad, la Ley parece distinguir, dentro del conjunto de los planes y programas que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente, entre unos planes y programas determinados, que deben someterse al procedimiento ordinario, y otros planes y programas que deben someterse al procedimiento simplificado. Para comprender el alcance del texto legal, es imprescindible recurrir a su exposición de motivos en la que cabe destacar las siguientes expresiones:

- La obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente...

- Para determinados tipos de planes, programas o proyectos las directivas establecen la presunción iuris et de iure de que, en todo caso, tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, deben ser evaluados...de acuerdo al procedimiento ordinario. Para los restantes planes, programas y proyectos, cada Estado miembro deberá realizar un análisis, bien caso por caso, bien mediante umbrales o bien combinando ambas técnicas, para determinar si tienen efectos significativos sobre el medio ambiente. Este análisis es lo que se ha denominado

procedimiento de evaluación simplificado y si concluyese que el plan, programa o proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, deberá realizarse una evaluación ordinaria.

Sin embargo, la exposición de motivos de la Ley resulta algo confusa en cuanto a que se equipara la expresión "tiene" a "puede tener", que, a todas luces no es lo mismo.

Por otra parte, también hay que señalar una confusión en el caso del procedimiento simplificado, ya que el mismo se aplica a planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente (art. 1, puesto en relación con el art. 5. 1.a.1º). Si, como resultado del procedimiento, el órgano ambiental determina que el plan o programa puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente (art. 31.2.a), entonces, el plan o programa debe someterse al procedimiento ordinario. Sin embargo, la condición para que el plan o programa se someta al procedimiento ordinario se cumple desde el mismo momento en que el plan o programa se encuentra sometido al procedimiento simplificado: puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Esta aparente confusión se explica únicamente mediante la premisa de que la posibilidad de que un plan o programa tenga efectos significativos sobre el medio ambiente no es igualmente probable en todos los casos, y ello a la vista de lo recogido en la Directiva 2001/42/CE y en su Guía de Aplicación.

Así, cuando la Directiva se pronuncia en el sentido de que determinados planes y programas parecen tener efectos significativos sobre el medio ambiente, ello se interpreta en términos de certeza y se articula en el proyecto de Ley de Administración Ambiental como de una posibilidad con alto grado de probabilidad. Y cuando la Directiva señala que otros planes y programas pueden no tener efectos significativos sobre el medio ambiente, se interpreta en términos de incertidumbre, o lo que es lo mismo, desconocimiento previo del grado de probabilidad con la que pueden darse efectos significativos.

Coherentemente con esta interpretación, surge un tercer conjunto de planes y programas para los que, por su escasa incidencia sobre el medio ambiente, se tiene a priori la certeza de que no van a poder tener efectos significativos sobre el medio ambiente y, en consecuencia, no se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley 21/2013.

211. Este razonamiento permite entender, como decimos, la forma en la que el anteproyecto aborda el ámbito de la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos.

212. En cuanto a los proyectos, ese ámbito de aplicación viene determinado a través de un sistema de listas cerradas, tanto en la normativa europea como en la legislación básica, lo que permite establecer con suficiente seguridad los proyectos que deben ser objeto de evaluación ambiental, sea ordinaria o simplificada, atendiendo al principio de prudencia que rige en la materia, por el cual, en caso de resultar dudosa su incidencia en el medio ambiente, debe someterse a esa evaluación.

213. En cuanto a la evaluación ambiental de planes y programas, sin embargo, la cuestión resulta más compleja, al permitir la normativa europea el establecimiento de un sistema mixto de determinación de ese ámbito.

214. El anteproyecto, por un lado, determina ese ámbito de forma positiva en el artículo 75 mediante una remisión a los anexos II.A y II.B. Por otro lado, el párrafo 1 del artículo 65 excluye la evaluación ambiental de los planes o programas que:

a) Tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia.

b) Sean únicamente de tipo financiero o presupuestario.

c) Cuando, debido a la escasa envergadura de las acciones que puedan derivarse de los planes, programas y proyectos, o de sus modificaciones y revisiones, los efectos que puedan producir en el medio ambiente no sean significativos de forma manifiesta.

215. Los apartados a) y b) coinciden con los supuestos previstos en el artículo 8.1 de la LEA, pero el apartado c) no está previsto —al menos de forma expresa— en esa ley, sino que es consecuencia de la interpretación que el departamento promotor, como hemos visto, realiza de la normativa europea y de lo dispuesto por la legislación básica estatal.

216. El párrafo 2 del artículo 65 del anteproyecto, por su parte, añade que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá establecer criterios para determinar en qué situaciones puede considerarse que los posibles efectos de un plan o programa, o de una modificación de un plan o programa, sobre el medio ambiente no van a ser significativos.

217. En cuanto a la exclusión general del apartado c) del artículo 65.1, en la medida en que su propio enunciado alude a la ausencia manifiesta de efectos sobre el medio ambiente, puede entenderse que forma parte de la propia definición del ámbito de la evaluación, puesto que el propio artículo 1 de la LEA parte de su aplicación a la evaluación de planes,

programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Por tanto, ese ámbito tampoco alcanzaría a los casos en los que, de forma manifiesta, carezcan de esos efectos.

218. Mayor precaución se ha de tener con el sentido que pueda atribuirse a la apertura del párrafo 2 del artículo 65, para que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma pueda establecer criterios para determinar en qué situaciones puede considerarse que los posibles efectos sobre el medio ambiente de un plan o programa, o de una modificación de un plan o programa, no van a ser significativos.

219. La Sentencia 109/2017 del Tribunal Constitucional, de 21 de septiembre, declaró nulo el artículo 9.4 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, en la que se consideraba que no tenían efectos significativos en el medio ambiente y, por lo tanto, no estaban sujetos a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica diversos planes o modificaciones de planes. En algunos casos, como las modificaciones de planes territoriales o urbanísticos, establecía ciertos criterios para definir cuándo su modificación carecía de efectos significativos sobre el medio ambiente. En otros, se refería a la aprobación o la modificación de los catálogos de protección del patrimonio cultural en ciertas condiciones; a los planes de ordenación de los recursos naturales, los planes reguladores de uso y gestión; a los planes de gestión de espacios red Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos, en la medida que representaran un mayor grado de protección del medio ambiente; a las modificaciones de carácter financiero o de escasa entidad de los Programas de Desarrollo Rural y, finalmente, a los estudios de detalle.

220. La sentencia en cuestión argumenta lo siguiente:

> (…) el artículo 8.1 de la Ley 21/2013 solo permite excluir de evaluación ambiental estratégica los planes y programas que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia; y los de tipo financiero o presupuestario. De este modo, los preceptos estatales fijan una regla general: el sometimiento a evaluación ambiental estratégica, sea ordinaria o simplificada, de todo plan o programa y sus modificaciones relativos a sectores materiales con incidencia medioambiental, admitiendo solamente excepciones tasadas en función del objeto del plan o programa.
>
> Ambos preceptos son formalmente básicos de conformidad con la disposición final octava de la Ley 21/2013, y también deben ser así considerados desde la perspectiva material por cuanto fijan una norma mínima de protección ambiental. (…)

> Siendo básicos los preceptos estatales, puede concluirse que el artículo 9.4 incurre en la vulneración competencial que se denuncia. La norma autonómica excluye de evaluación ambiental determinadas categorías de planes y sus modificaciones que sí están sometidos a la misma de conformidad con la legislación básica. La exclusión de esos planes de la evaluación ambiental estratégica prescrita por las normas estatales supone, por sí misma, la reducción de los niveles mínimos de protección establecidos por la legislación básica, con la consiguiente vulneración de la competencia estatal en materia de medio ambiente.

221. Se ha de interpretar, por tanto, que lo previsto en el párrafo 2 del artículo 65 del anteproyecto no da pie a la exclusión de categorías de planes y modificaciones de los mismos que no se encuentran excluidos por la legislación básica.

222. En esta sentencia resulta igualmente relevante a estos efectos la argumentación en torno al obligado respeto del reparto competencial interno, frente a una posible interpretación directamente enlazada con lo dispuesto en las directivas europeas que rigen la materia. La sentencia argumenta lo siguiente:

> En primer lugar, la STC 53/2017 , FJ 3 b), ya destacó que «aunque la Ley 21/2013 es la norma a través de la cual se adecua actualmente la legislación básica de medio ambiente a las directivas de la Unión Europea en materia de evaluación ambiental, no se adoptó en su momento –tal y como puso de manifiesto el Consejo de Estado en su dictamen 760, de 24 de julio de 2013, sobre el anteproyecto de esta Ley– con la finalidad primordial de dar cumplimento a nuevas obligaciones derivadas del Derecho de la Unión».
>
> Por tanto, el que la norma autonómica pretenda ampararse en el artículo 3.5 de la Directiva 2001/42/CE, no es relevante desde la perspectiva en la que el recurso se plantea, centrado en la delimitación interna de competencias en relación con la técnica de la evaluación de impacto ambiental. La adecuación o no a la Directiva en cuestión por la norma autonómica no es lo que se ventila aquí, y tampoco esa pretensión de fundar la norma autonómica en lo previsto en la Directiva permite hacer abstracción de las competencias que la Constitución y los Estatutos de Autonomía atribuyen al Estado o a las Comunidades Autónomas. Esto es, el contenido de la Directiva, si bien obliga a trasponerla en el orden interno, no impide al Estado fijar normas medioambientales que establezcan un estándar de protección, en principio, más elevado, ya que el orden de distribución de competencias obedece

exclusivamente a las pautas del Derecho interno. Estándar que, conceptuado como materialmente básico conforme a la delimitación de competencias que ya se ha expuesto, debe ser respetado por las Comunidades Autónomas cuando ejercen su competencia para fijar normas adicionales de protección medioambiental.

223. Para, finalmente, acabar afirmando que "no es posible determinar a priori que todos los planes o sus modificaciones a las que se refiere el precepto impugnado puedan considerarse «beneficiosos o respetuosos con el medio ambiente», y esa es, precisamente, la perspectiva que adopta la norma estatal, al exigir, como regla general, que este tipo de planes se sometan a evaluación ambiental estratégica".

224. El anteproyecto, como decimos, establece en el apartado c) de artículo 65.1 una exclusión que forma parte de la propia definición del ámbito de la evaluación, por lo que no excluye de evaluación ambiental ningún plan, programa o proyecto que sí esté en el ámbito de la evaluación definido en la LEA. No obstante, a la hora de establecer los criterios a los que se refiere el apartado 2 de su artículo 65, el órgano ambiental deberá actuar con prudencia para no excluir categorías generales de planes o programas, no sólo por el riesgo de una posible inconstitucionalidad mediata en que podría incurrir ese desarrollo de la ley, sino también por la radical consecuencia jurídica que deriva del incumplimiento de la obligación establecida en la LEA para los planes y programas: "Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos, o en su caso, cuando proceda la declaración responsable o la comunicación previa relativa a un proyecto que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder".

225. Desde otra perspectiva, también hemos de detenernos en que la aprobación, en su caso, de los citados criterios es atribuida al órgano medioambiental de la Comunidad Autónoma, que el propio anteproyecto identifica en la viceconsejería competente en materia de medio ambiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

226. En este caso, la importancia de la regulación, en tanto completa aspectos esenciales de la misma —como es el ámbito de los planes y programas sujetos a evaluación ambiental —, nos lleva a concluir que nos encontramos ante un instrumento de carácter normativo.

227. Creemos interesante recordar por ello que, aunque referido a la competencia de los consejeros y consejeras, esta Comisión viene advirtiendo que la habilitación *per saltum* para dictar un reglamento ejecutivo de ley es posible siempre que la ley les habilite parar dictar ciertas disposiciones reglamentarias concretas, pero eso no significa que el legislador tenga total libertad para apartar al Gobierno y cercenar el ámbito de

competencias que tiene reconocidas como titular de la potestad reglamentaria genérica, conforme al esquema previsto entre el artículo 29 EAPV y el artículo 16 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

228. Cuestión diferente sería que se estuviera refiriendo a una instrucción de naturaleza no normativa, aunque, como decimos, en la medida en que se aborda la concreción de un aspecto esencial, como es el ámbito de la evaluación de planes y programas, todo induce a pensar que se trata de una disposición reglamentaria.

B) Cómputo del plazo para resolver en determinados trámites

229. También constituye una problemática específica de este título el cómputo de los plazos previstos para ciertos trámites desde la recepción de la solicitud completa; aspecto que ha sido corregido en el resto del anteproyecto.

230. Los artículos 67 (párrafos 5 y 6), 73.2, 74.2, 77.2 y 78.2 coinciden en mantener la recepción de la solicitud completa como referencia para el cómputo de los plazos. El problema se plantea fundamentalmente en los artículos 73.2 y 77.2, ya que ambos se refieren al plazo que dispone el órgano ambiental para la formulación de la declaración ambiental estratégica y la declaración de impacto ambiental, respectivamente, y en ambos se toma como *dies a quo* el de la recepción de la solicitud completa.

231. Se debe tener en cuenta, no obstante, que el artículo 21.3.b) de la LPAC establece que, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo máximo para resolver el procedimiento se computa desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 22.1.a) establece, por su parte, que el plazo máximo para responder se podrá suspender cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido.

IV INSTRUMENTOS DE IMPULSO DE LA MEJORA AMBIENTAL

232. El título VI aglutina diversas medidas que, como su propio título indica, tratan de impulsar la mejora ambiental desde diferentes ámbitos y a través de diferentes instrumentos. Dentro de esas medidas se contemplan los acuerdos ambientales, el fomento de la participación en el Sistema EMAS, la utilización de la etiqueta ecológica, la huella ambiental, la contratación pública verde, la ecoinnovación, la fiscalidad

ambiental, la investigación, educación y formación en el área medioambiental, el voluntariado ambiental y las medidas de reconocimiento público.

233. La mayor parte de la regulación es de carácter principial o de apertura a medidas de fomento y participación que, o remiten a la normativa específica de las distintas materias afectadas, o realizan una apertura de la materia para su posterior concreción por parte de las instituciones y órganos competentes. Por ello, sólo comentaremos los aspectos sobre los que podamos aportar mayor claridad o alguna mejora.

A) Acuerdos medioambientales

234. El primero de ellos es el de los acuerdos medioambientales (artículo 79); acuerdos que, siempre que están suscritos por la Administración, deberán atenerse al marco de lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (LRJSP). Esto no excluye, sin embargo, el posible impulso de acuerdos medioambientales entre sujetos que no forme parte del sector público.

235. En el ámbito europeo la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 17 de julio de 2002, Acuerdos medioambientales a nivel comunitario en el marco del Plan de acción "Simplificar y mejorar el marco regulador", contempla los acuerdos ambientales como fórmulas de autorregulación o corregulación. En el caso de la autorregulación, se incluyen numerosas prácticas (normas comunes, códigos de conducta y, en particular, acuerdos voluntarios) establecidas de forma voluntaria por agentes económicos y sociales, ONG o agrupaciones para regular y organizar sus actividades.

236. En la corregulación, sin embargo, esos acuerdos se celebran sobre la base de un acto legislativo, es decir, de una manera más vinculante y formal en el contexto de la regulación, lo cual permite a las partes implicadas aplicar una norma determinada.

237. La participación en el sistema EMAS, la utilización de la etiqueta ecológica y la huella ambiental se afrontan fundamentalmente desde la perspectiva de fomento. No obstante, en los dos primeros temas (artículos 80 y 81) se contempla su posible incorporación en la contratación pública, lo que podemos conectar con lo dispuesto en el artículo 83 sobre la contratación pública verde.

B) Contratación pública verde

238. En materia de contratación pública, la Comunidad Autónoma ostenta competencia de desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado [artículo 11.1.b) EAPV]. La cada vez más importante incidencia que la normativa

europea tiene en esta materia, unida al escaso margen de desarrollo que permite la legislación básica del Estado, han ido vaciando la competencia autonómica hasta dejarla en la mínima expresión, aunque el anteproyecto la explora y ejerce en relación con la mejora medioambiental.

239. La LCSP incluye varias referencias a la contratación pública verde que empiezan desde su artículo 1, en el que ya se anuncia que "en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato". La posibilidad o, incluso, obligación de tener en cuenta la perspectiva medioambiental se contempla, entre otros, en los artículos 28.2, 94, 122.2, 145, 184, 202 o 334, este último referido a la estrategia nacional sobre contratación pública.

240. El más relevante a nuestros efectos es el artículo 202 LCSP, referido a las condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden. Este artículo establece que los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos.

241. El apartado 2 añade que, en particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo medioambiental que persigan: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible; el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato; una gestión más sostenible del agua; el fomento del uso de las energías renovables; la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; o el impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica.

242. La relevancia que la contratación "social y ambientalmente responsable" adquiere en la LCSP es, por tanto, clara, y recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la que se establece que los estados miembros deben adoptar las medidas apropiadas para garantizar que, en la ejecución de los contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones medioambientales exigibles en normas de rango europeo, estatal e internacional (SS. de 10/7/2014, asunto C-213/13; 7/4/2016, asunto C-324).

243. Volviendo al anteproyecto, la incorporación de aspectos como el sistema EMAS o la etiqueta ecológica en los procedimientos de contratación pública se contempla en el anteproyecto "de acuerdo con lo que en esa materia establece la normativa sobre contratos del

sector público" que, a su vez, incorpora estas dos cuestiones en los artículos 94 (EMAS) y 127 (etiquetas) de la LCSP. Las previsiones del anteproyecto, por tanto, resultan legítimas y acordes con la legislación de contratos.

244. En cuanto a la compra pública verde prevista en el artículo 83, también se alinea con carácter general con las disposiciones de la LCSP sobre la contratación social y ambientalmente responsable y el mensaje del párrafo 5 refuerza su correcta integración en la normativa básica, pero se echa en falta una referencia expresa a que los requerimientos en la materia estén vinculadas al objeto del contrato; mensaje que en el que la LCSP insiste a lo largo de su articulado.

245. Lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 83 requiere, en cualquier caso, un análisis específico. En este párrafo se impone a todos los poderes adjudicadores de la Comunidad Autónoma la obligación de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares para la ejecución de contratos de obras y suministros la indicación de los porcentajes de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización que se tengan que utilizar para cada uno de ellos, estableciendo además un porcentaje mínimo de utilización de dichos materiales del 40 %, salvo que por motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser reducido.

246. En este caso, aunque el inciso final del párrafo abra la posibilidad de establecer un porcentaje menor, el anteproyecto establece un requisito para todos los contratos de obras y suministros cuya integración en el marco de la LCSP puede resultar algo más complicada.

247. Tal y como hemos advertido, la LCSP insiste en la necesidad de conectar en cada licitación las exigencias o criterios medioambientales con el objeto del contrato. En este caso, podría considerarse que, en los contratos de obras y suministros, esa conexión existe con carácter general en todos los supuestos por su directa relación con la posible utilización de subproductos, materias primas secundarias o materiales reciclados, lo que permitiría, en el marco de la citada competencia de la Comunidad Autónoma, introducir una exigencia como la aquí planteada. Para los supuestos en los que esa conexión no sea posible por motivos técnicos, el requisito puede minorarse o incluso eliminarse justificadamente. En cualquier caso, convendría aludir a la relación entre estos contratos (obras y suministros) y el medio ambiente, si no en el articulado, en la exposición de motivos.

C) Fiscalidad ambiental

248. El artículo 85 del anteproyecto se refiere a la fiscalidad ambiental. Su contenido es fundamentalmente de carácter principial, una apertura a la utilización de la fiscalidad como medida de impulso en la protección del medio ambiente, aunque también contiene algunos mensajes en los que se introducen trámites y obligaciones concretas.

249. Se refiere en todo caso a tributos que tienen una finalidad extrafiscal y ambiental.

250. El ámbito y las condiciones en los que pueden utilizarse este tipo de tributos ha sido delimitado por el Tribunal Constitucional en diferentes pronunciamientos, que, de forma resumida, se expresa de la siguiente forma:

a) La denominación del tributo tampoco basta para determinar que nos encontramos ante un tributo ecológico o ambiental (entre otras, STC 85/2013, FJ 3; y 60/2013, FJ 3). El tribunal afirma que sería un simple nominalismo entender que la denominación legal sea un elemento determinante ya que «las categorías tributarias, más allá de las denominaciones legales, tienen cada una de ellas la naturaleza propia y específica que les corresponde de acuerdo con la configuración y estructura que reciban en el régimen jurídico a que vengan sometidas» (STC 296/1994, de 10 de noviembre, FJ 4, reiterado en la STC 73/2011, de 19 de mayo).

b) La Sentencia 168/2004, de 6 de octubre, añadió que el carácter ambiental no puede ser una finalidad aparente, sino que ha de ser un objetivo que impregne de forma relevante todo el tributo, por lo que resulta preciso que "dicha finalidad encuentre reflejo en los elementos centrales de la estructura del [tributo]» (STC 85/2013, de 11 de abril".

c) La Sentencia 122/2012, de 5 de junio, señaló que, con carácter general, todo el régimen jurídico del impuesto ha de contener una relación con el entorno, basada en el artículo 45 CE, que es la referencia constitucional básica del derecho al medio ambiente y, por lo tanto, la finalidad ambiental debe estar conectada con el articulado que contiene el régimen jurídico del tributo de manera que el carácter extrafiscal quede reflejado en la estructura del impuesto.

d) Han de analizarse, por tanto, los elementos esenciales del tributo para constatar que nos encontramos realmente con su carácter ambiental o ecológico: el hecho imponible, la base imponible, la cuantificación del tributo y los sujetos obligados a contribuir.

e) Finalmente, también pueden tenerse en cuenta cuestiones como los supuestos de no sujeción o las deducciones.

251. El Tribunal Constitucional también ha prestado atención a la afectación del tributo como posible elemento definidor del tributo, afirmando en alguna ocasión que la afectación del gravamen a la finalidad que se dice perseguida no es más que uno de los varios indicios —y no precisamente el más importante— a tener en cuenta a la hora de calificar la verdadera naturaleza del tributo, esto es, de determinar si en el tributo autonómico prima el carácter contributivo o una finalidad extrafiscal (STC 179/2006, de 13 de junio).

252. No obstante, en la Sentencia 168/2004, de 6 de octubre, mantuvo que de "la regulación legal del gravamen se infiere su inmediata vinculación a la realización de una política pública sectorial, aquí la prevención de grandes riesgos, así como su afección a la financiación de un fin concreto, puesto que el producto íntegro del gravamen se destina a la constitución de un fondo de seguridad [...]. Consecuentemente, cabe afirmar que el legislador autonómico no ha creado una nueva fuente de ingresos públicos con fines genéricamente fiscales, sino un tributo finalista encaminado a corresponsabilizar a los creadores de riesgos para la protección civil en la prevención y lucha contra los mismos."

253. Para concluir esta introducción podemos afirmar que la finalidad extrafiscal de un tributo, en relación con el medio ambiente, implica que su fin no sea exclusivamente recaudatorio, sino que pretenda también incentivar políticas que favorezcan su protección, tanto estableciendo directamente medidas concretas protectoras como teniendo en cuenta el riesgo o la prevención ambiental.

254. Pues bien, volviendo a lo establecido en el artículo 85 del anteproyecto, deben diferenciarse aquellos aspectos que están dirigidos a todas las administraciones públicas vascas, de aquellos otros que están específicamente dirigidos a la Administración General de la Comunidad Autónoma.

255. De los segundos, destaca el carácter finalista que se pretende imponer a la recaudación proveniente de esta fuente de ingresos. Sobre esta cuestión, se ha objetado desde el área de hacienda que altera la regla general de desafectación que rige en el ámbito presupuestario. No obstante, se ha mantenido en el texto ya que el rango de la norma permitiría excepcionar el citado principio, recogido en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de principios ordenadores de la hacienda general del País Vasco.

256. Cabe advertir, en cualquier caso, que serán las propias normas que creen y regulen las condiciones esenciales de las medidas de orden fiscal las que, dado que igualmente exigirán rango de ley, podrán determinar finalmente el destino de la recaudación, independientemente de lo que finalmente se plasme con carácter general en este anteproyecto.

257. En cuanto a los mensajes dirigidos a todas las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma, estos constituyen principalmente, como ya hemos advertido, aperturas a posibles actuaciones que no alteran las competencias en materia fiscal de cada una de esas administraciones.

258. Únicamente señalar que el párrafo 1 introduce un trámite de consulta previa al departamento con competencias ambientales de la Administración General, trámite sobre el cual queremos advertir que, en la medida en que afecte también a otras administraciones, plantea algunos interrogantes respecto de su ámbito, sentido, preceptividad o articulación práctica. Estas cuestiones, por tanto, deberían perfilarse, aunque fuera de forma sintética, en el propio anteproyecto.

V ENTIDADES COLABORADORAS Y FUNCIÓN INSPECTORA

259. Dentro del título séptimo, dedicado a la inspección y control ambiental, el artículo 89 contempla la figura de las entidades colaboradoras.

260. Algunas de las alegaciones presentadas durante el procedimiento han planteado interrogantes sobre el papel de estas entidades en el marco de la función inspectora.

261. En respuesta a las alegaciones, se ha aclarado que las funciones de las entidades colaboradoras en la inspección se limitan a las actuaciones materiales de apoyo, que se concretan fundamentalmente en los apartados b) y c) del artículo 89.2. No obstante, las funciones de las entidades colaboradoras, en relación con la Administración ambiental, no se limitan al ámbito de la función de inspección, sino que puede consistir, por ejemplo, en la validación documental de requisitos y datos necesarios para la solicitud de autorizaciones o licencias [apartado a) del artículo 89.2]. De ahí que, sistemáticamente, su regulación se ubique en un capítulo independiente (capítulo I), dentro del título dedicado a la Inspección y control, pero previo al que, a su vez, se refiere específicamente a la inspección ambiental (capítulo II).

262. El artículo 92 es el que aclara que las funciones de las entidades colaboradoras en el marco de la inspección se limitan a actuaciones materiales que no estén reservadas a funcionarios públicos por entrañar el ejercicio de potestades públicas o por otras circunstancias.

263. Pese a la claridad con la que se pronuncia este artículo en ese inciso, cabe realizar dos advertencias o sugerencias al respecto.

264. La primera es que el deber de colaboración que contempla el artículo 91 (dentro del capítulo II), se refiere exclusivamente al personal al que se refiere el artículo 89

(entidades colaboradoras) y no contempla al personal de la Administración que desarrolla las funciones de inspección. Consideramos que puede tratarse de un error en la remisión al artículo 89 cuando, en realidad, debería ser al artículo 90 —finalidad de la inspección ambiental y competencias inspectoras—. De no ser así, el deber de colaboración en el marco de un procedimiento de inspección debe alcanzar a toda la actuación inspectora y, por tanto, en primer término al personal de la Administración previsto en el artículo 92.

265. La segunda, en relación con la redacción del artículo 92.1, en la que se refiere a la realización de las labores de control, vigilancia e inspección ambiental. Consideramos que en esa redacción es preferible evitar la fórmula alternativa ("podrá realizarse directamente… o bien por entidades de colaboración…"), puesto que puede plantear cierta confusión. Como posible alternativa, proponemos atribuir el ejercicio de la actividad de inspección (conforme al título del artículo) al personal al servicio de las administraciones públicas que sea designado a tal efecto, añadiendo a continuación, que el ejercicio de las labores de control, vigilancia e inspección que no entrañen el ejercicio de potestades públicas reservadas a funcionarios públicos podrán encomendarse a entidades colaboradoras, atendiendo, en su caso, a la legislación de contratos del sector público.

VI RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS MEDIOAMBIENTALES

266. El anteproyecto incorpora los principios de la política medioambiental introducidos por las directivas europeas, de entre los que cabe destacar los principios de cautela o precaución, corrección de la contaminación en su fuente y "quien contamina paga".

267. El principio de precaución supone que, en caso de incertidumbre científica sobre una sospecha de riesgo para la salud humana o el medio ambiente que se derive de una acción o política determinada, deben adoptarse las medidas oportunas para evitar que esa sospecha de riesgo se materialice. En el caso, por ejemplo, sobre los efectos potencialmente peligrosos de un producto, si las dudas persisten tras una evaluación científica objetiva, pueden darse instrucciones de detener la distribución de tal producto o, incluso, retirarlo del mercado.

268. Estas medidas han de ser no discriminatorias y proporcionadas y deben revisarse una vez se disponga de más información científica.

269. El principio de «quien contamina paga» tiene como objetivo prevenir o poner remedio a los daños medioambientales causados a especies protegidas y a hábitats naturales, al agua y al suelo. De acuerdo con este principio, los operadores deben tomar medidas preventivas en caso de amenaza inminente para el medio ambiente y, de haberse

producido ya el daño, están obligados a tomar las medidas adecuadas para remediarlo y a pagar los costes.

270. El principio de corrección en la fuente supone que, cuando la contaminación se ha producido, se deben aplicar medidas de corrección lo antes posible y en el lugar más próximo al de la fuente de contaminación. También en el momento más inmediato al que se produjo la misma.

271. La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, desarrolla estos principios y ha sido transpuesta al derecho interno mediante la Ley estatal 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad ambiental (LRA). Esta responsabilidad se aplica con independencia de las sanciones administrativas o penales que puedan atribuirse a las actuaciones que dañan el medio ambiente.

272. Frente a la responsabilidad general por daños, la responsabilidad medioambiental tiene una serie de características específicas y reconocibles. De inicio, es de carácter administrativo y puede, por tanto, ser directamente exigida por la Administración ambiental, sin perjuicio de los recursos pertinentes. Es también una responsabilidad ilimitada en cuanto que la obligación de reparación persigue devolver los recursos naturales, en su caso, dañados a su estado original. Finalmente, es una responsabilidad objetiva, al margen, por tanto, de la existencia de dolo, culpa o negligencia.

273. Como hemos adelantado, el régimen de responsabilidad medioambiental es independiente del régimen sancionador que, además de la imposición de la sanción, tiene también una finalidad disuasoria y, por tanto, preventiva.

274. El anteproyecto contempla dentro de su sistemática esa distinción entre el régimen de disciplina ambiental y la responsabilidad ambiental, incorporando en este segundo ámbito dos cuestiones a destacar: por un lado, el régimen de restauración de la legalidad ambiental y, por otro, la responsabilidad por daños ambientales no significativos.

275. El régimen de restauración de la legalidad ambiental parte de una situación en la que una actividad que puede provocar afecciones al medio ambiente no se adecúa al marco de intervención ambiental previsto en el anteproyecto. En esos casos, distingue los supuestos en los que la actividad puede legalizarse de aquellos en los que esa legalización no resulta posible y, por tanto, debe ser clausurada con carácter definitivo (artículo 96.1).

276. El párrafo 2 del artículo 96 prevé que, además de la legalización o de la clausura, se pueda ordenar la adopción de medidas correctoras o la reposición de la situación alterada cuando no se hubieran producido daños significativos al medio ambiente.

277. Por tanto, además del régimen sancionador y del régimen de responsabilidad medioambiental derivado de la Ley 26/2007 para daños medioambientales significativos, el anteproyecto introduce en sus artículos 96 y 99, como medida de mayor protección, las medidas frente a daños medioambientales no significativos, en el marco del procedimiento de restauración de la legalidad ambiental.

278. Se ha insistir en que las medidas previstas en el artículo 99 están previstas frente a daños no significativos porque el propio párrafo 3 del artículo 96 remite al capítulo siguiente en el caso de que se hayan producido daños ambientales significativos o de que exista una amenaza inminente de dichos daños.

279. Sin embargo, el artículo 100 contempla la posible ejecución subsidiaria de las medidas correctoras impuestas, "especialmente cuando exista una amenaza inminente de daños graves al medio ambiente o a la salud de las personas". Pero este supuesto parece igualmente propio del régimen de responsabilidad ambiental del capítulo II, cuyo artículo 101 incluye, además de la reparación de los daños medioambientales significativos, su evitación y la prevención frente a la amenaza inminente de materialización de esos daños, ocasionados por actividades económicas o profesionales.

280. En definitiva, aunque se declaran compartibles, la Comisión recomienda delimitar con más precisión las posibles actuaciones que la Administración puede desarrollar para restaurar la legalidad ambiental y las que puede o debe adoptar en los supuestos incluidos en el capítulo II.

281. En relación con este mismo artículo 100, la Comisión considera también conveniente proponer dos cuestiones de forma.

282. La primera se refiere al inciso final del párrafo 1, según el cual los gastos de la ejecución subsidiaria serán exigidos al promotor o al titular de la actividad por la vía de apremio. En cuanto que la vía de apremio siempre resulta subsidiaria con respecto al pago efectuado en periodo voluntario, se recomienda utilizar la expresión "podrán ser exigidos" o remitirse a lo dispuesto en el Decreto 212/1998, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de recaudación de la hacienda general del País Vasco.

283. La segunda, igualmente referida a la redacción, aunque en este caso se recomienda únicamente, en aras de la claridad, alterar el orden de los mensajes de la primera parte del párrafo 2. Podría decir: "Cuando el promotor o titular de la actividad o instalación se niegue a la adopción de las medidas correctoras y no exista amenaza inminente de tales daños o el retraso en

la adopción de las medidas no pongan en peligro el medio ambiente o la salud de las personas, la Administración pública competente podrá imponer sucesivamente multas coercitivas".

284. El segundo capítulo de este título octavo no suscita comentario alguno dado que propone una remisión "en bloque" a la normativa europea sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales y su normativa de transposición de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco" (artículo 101.1).

VII DISCIPLINA AMBIENTAL

285. Antes de entrar a analizar la regulación del anteproyecto en materia de disciplina ambiental, consideramos conveniente, a título introductorio, recordar resumidamente la doctrina constitucional en torno a la competencia en materia sancionadora y, asimismo, recordar la doctrina más específica en relación con el régimen sancionador en materia de medio ambiente.

286. La distribución competencial relativa al régimen sancionador parte de su carácter instrumental respecto del ejercicio de las competencias sustantivas (SSTC 48/1988, de 22 de marzo, RTC 1988, 48; 227/1988, de 29 de noviembre, RTC 1988, 227 o; 96/1996, de 30 de mayo, RTC 1996, 96). De ahí que las comunidades autónomas puedan adoptar normas administrativas sancionadoras cuando tengan competencia sobre la materia sustantiva de que se trate, debiendo acomodarse las disposiciones que dicten a las garantías constitucionales dispuestas en este ámbito del derecho administrativo sancionador (artículo 25.1 CE) y no introducir divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio (art. 149.1.1 CE; SSTC 87/1985, de 16 de julio, RTC 1985, 87; 196/1996, de 28 de noviembre, RTC 1996, 196).

287. La regulación de las infracciones y sanciones que las comunidades autónomas lleven a cabo estará pues limitada por los principios básicos del ordenamiento estatal (STS 227/1988, de 29 de noviembre, RTC 1988, 227) y, en todo caso, habrá de atenerse a lo dispuesto en el art. 149.1.1 CE.

288. De igual modo, el procedimiento sancionador habrá de ajustarse al "administrativo común", cuya configuración es de exclusiva competencia estatal (art. 149.1.18 CE), sin que ello implique que toda regulación del derecho administrativo sancionador, por el hecho de afectar al ámbito de los derechos fundamentales, sea competencia exclusiva del Estado (STC 87/1985, de 16 de julio, RTC 1985, 87; STC 157/2004, de 23 de septiembre, RTC 2004, 157; STC 81/2005, de 6 de abril, RTC 2005, 81 y; STC 100/2005, de 20 de abril, RTC 2005, 100).

289. En cuanto al régimen sancionador en materia de medio ambiente, se sigue el esquema general expuesto en el apartado correspondiente al análisis competencial. Por eso, como señala la STC 196/1996, de 28 de noviembre, "en el ámbito del artículo 149.1.23ª CE la legislación básica posee la característica técnica de normas mínimas de protección que permiten normas adicionales o un plus de protección, de forma que la legislación básica del Estado no cumple en este caso una función de uniformidad relativa, sino más bien de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que cada una de las Comunidades Autónomas, con competencias en la materia, establezca niveles de protección más altos, que no entrarían por sólo eso en contradicción con la normativa básica del Estado de protección del medio ambiente, siendo el sentido del texto constitucional el de que las bases estatales son de carácter mínimo y, por tanto, los niveles de protección que establecen pueden ser ampliados o mejorados por la normativa autonómica. En definitiva, la protección concedida por la Ley estatal puede ser ampliada y mejorada por la Ley autonómica; lo que resulta constitucionalmente improcedente es que resulte restringida o disminuida". Doctrina que más recientemente se reitera en la STC 7/2012, de 18 enero.

290. En suma, pues, y por lo que atañe a las normas sancionadoras en este ámbito del medio ambiente:

a) Las normas básicas estatales son "normas mínimas de protección" que permiten el dictado por las comunidades autónomas de "normas adicionales o un plus de protección".

b) La función que cumplen no es la de "una función de uniformidad relativa" sino la de "ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso".

c) Esta función de ordenación mediante mínimos permite que las comunidades autónomas establezcan "niveles de protección más altos", que por esta sola razón "no entrarían en contradicción con la normativa básica del Estado sobre protección del medio ambiente".

d) Los niveles de protección que establecen las normas básicas pueden ser "ampliados o mejorados por la normativa autonómica".

e) La ley básica estatal tampoco puede en materia sancionadora resultar "restringida o disminuida" por la ley autonómica.

291. En este contexto, el anteproyecto afronta el régimen de disciplina ambiental con la dificultad de tener que dar respuesta a una multitud de situaciones, que se afrontan desde las diferentes perspectivas de protección medioambiental que aborda la norma, lo que constituye una labor complicada que requiere especial esfuerzo para mantener la coherencia interna y externa.

292. Decimos esto porque la norma incorpora a su contenido el régimen de intervención ambiental, el de evaluación ambiental y el de restauración de la legalidad ambiental, pero también, aunque sea mediante una remisión, se incorpora al mismo el régimen de responsabilidad por daños significativos al medio ambiente. El régimen sancionador puede afrontarse desde cada una de esas perspectivas y prueba de ello es que tanto la LPCIC como la LEA e, incluso, la LRA incluyen disposiciones sancionadoras que deben tenerse en cuenta en los términos expresados en nuestra introducción a este título.

293. El *ius puniendi* de la Administración puede desplegarse, así, desde todos estos ámbitos de protección ambiental y ello requiere un importante esfuerzo de integración a la hora de tipificar las infracciones para lograr la coherencia necesaria, sin caer además en la redundancia.

294. Con ese objetivo, se plantean a continuación las siguientes observaciones.

A) Calificación de infracciones y sanciones

295. Desde la perspectiva de la intervención ambiental se califica únicamente como muy grave la construcción, el montaje, la explotación o el traslado de actividades e instalaciones sin la preceptiva autorización ambiental integrada. No se tiene en cuenta en esa calificación, como sí lo hace la LPCIC, el riesgo o daño generados, aunque, como luego veremos, sí se tiene en cuenta en las infracciones graves. De todas formas, en este caso la infracción comprende la tipificada por el Estado y puede ir incluso más allá, por lo que puede ser considerado como un elemento de mayor protección.

296. No ocurre lo mismo, sin embargo, con el resto de supuestos calificados como infracciones muy graves por la LPCIC (artículo 31).

297. Así, la modificación sustancial, cuya ejecución sin haber obtenido la correspondiente autorización sólo alcanza en el anteproyecto la categoría de grave [artículo 104.3.b)], está calificada como infracción muy grave en la LPCIC, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en riesgo grave la salud o seguridad de las personas.

298. Incumplir las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, o las medidas de carácter provisional en el marco de un procedimiento sancionador, tienen igualmente en la LPCIC la calificación de muy graves, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en riesgo grave la salud o seguridad de las personas, mientras que el anteproyecto sólo las contempla en todo caso como infracciones graves [apartados f) y g) del artículo].

299. Debemos recordar que la calificación establecida en la ley básica, que supone que determinadas conductas deban ser siempre consideradas por el legislador autonómico como infracciones muy graves, no rebasa el ámbito de lo básico (por todas, STC 7/2012, de 18 de enero).

300. Desde la perspectiva de la evaluación ambiental, el anteproyecto incorpora el único supuesto igualmente así calificado en la LEA.

301. No se incorpora dentro de las infracciones muy graves ninguna infracción relacionada con el régimen de responsabilidad de medioambiental. Puede pensarse en inicio que con la remisión "en bloque" del artículo 101 del anteproyecto también se incluyen las disposiciones sobre infracciones y sanciones previstas en la LRA (capítulo V). Sin embargo, esa primera impresión decae a la vista de la infracción prevista en el apartado h) del artículo 104.3: el incumplimiento de las medidas impuestas en los procedimientos para la restauración de la legalidad ambiental y de responsabilidad por daños ambientales.

302. La Comisión desconoce si la intención del órgano promotor es calificar todas las infracciones relacionadas con la responsabilidad por daños ambientales como infracciones graves, o si sólo se refiere —aunque no introduce ninguna distinción— a las medidas relacionadas con daños no significativos, a los que se refiere el artículo 96.2. De ser la primera opción, debería tenerse en cuenta el carácter de mínimos del ya citado capítulo V de la LRA. Para los casos de incumplimientos en los que se materializa el daño ambiental que se pretende evitar o contener, esta ley prevé multas superiores a las que prevé el anteproyecto e, incluso, la posible extinción de la autorización; consecuencia que el texto dictaminado no contempla para las infracciones graves.

303. En cuanto a las infracciones graves, además de lo ya adelantado sobre la infracción prevista en la letra h) del artículo 104.3, cabe también realizar una observación en relación con el apartado o) en el que se contemplan como infracciones graves "las señaladas en el apartado anterior como muy graves, cuando por su incidencia sobre el medio ambiente o las personas no se den los supuestos para dicha calificación".

304. En este caso parece querer introducir una distinción en la línea prevista en la LPCIC, de manera que cuando no se materializa el daño o deterioro grave o no se genere un peligro grave para la seguridad o salud de las personas, constituya una infracción grave en lugar de muy grave. No obstante, la redacción resulta excesivamente indeterminada teniendo en cuenta que nos encontramos en el ámbito sancionador.

305. El principio de legalidad en el ámbito sancionador implica, no solo que se reconozca la potestad sancionadora (*lex previa*) con una norma con rango de ley, sino también que

ha de ser precisamente esa norma con tal rango la que describa la concreta conducta (*lex certa*).

306. Si el objetivo, tal y como hemos adelantado, es diferenciar la calificación de la infracción en función de la materialización o no del daño o la situación de peligro, recomendamos establecerlo con mayor claridad, no sólo en este apartado, sino también en la descripción de las infracciones calificadas como muy graves.

B) El decomiso de los efectos provenientes de la infracción

307. El artículo 108 prevé la posibilidad de que los órganos que ejerzan la potestad sancionadora acuerden el decomiso de los efectos provenientes de la infracción, de los instrumentos con los que se haya ejecutado, de los objetos que constituyan su soporte material y de las ganancias derivadas de la misma, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.

308. El párrafo 2, por su parte, establece que el decomiso no podrá acordarse cuando los efectos o instrumentos pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable de la infracción que los haya adquirido legalmente, salvo que exista un riesgo inminente de daño ambiental o de riesgo para la salud de las personas.

309. En este caso, la Comisión debe advertir de la diferente función que la figura del decomiso cumple según sea acordada como sanción accesoria o como medida cautelar.

310. El párrafo 1 se refiere aparentemente al decomiso como sanción accesoria ya que alcanza también a las ganancias obtenidas con la infracción. Con ello no se pretende impedir la infracción, que ya ha sido cometida, sino evitar el aprovechamiento ilícito de la misma por parte del infractor.

311. El párrafo 2 ampara al tercero de buena fe en caso de decomiso de efectos o instrumentos pero, en su último inciso, incorpora de nuevo el decomiso, aunque todo parece indicar que se plantea como medida cautelar ya que, refiriéndose a terceros de buena fe que no son responsables de la infracción, no pueden ser sancionados.

312. Se recomienda, por tanto, diferenciar estas dos situaciones trasladando el segundo supuesto al artículo 111, en caso de considerar que no es suficiente con las medidas de carácter provisional ya contempladas (precintado, clausura temporal de la instalación o la suspensión o cese temporal de la actividad).

C) Multas coercitivas y ejecución subsidiaria

313. El artículo 113 del anteproyecto contempla la posibilidad de imponer multas coercitivas a las personas infractoras si estas no procedieran a la reposición de la situación alterada y reparación de los daños o no satisficieran la indemnización de los daños y perjuicios causados, (…) una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento correspondiente. Se ha de reconocer que esta formulación, en términos idénticos o con ligeras diferencias, viene estableciéndose en diferentes normas en la que se impone al infractor la obligación de reponer la situación, reparar los daños o indemnizar por estos últimos. No obstante, consideramos conveniente realizar una aclaración al respecto.

314. Las multas coercitivas constituyen uno de los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos previstos en el artículo 100 de la LPAC, junto con el apremio sobre las personas, la ejecución subsidiaria y la compulsión sobre las personas.

315. El artículo 103 de la LPAC, por su parte, se refiere ya de forma específica a este medio de ejecución forzosa, estableciendo los supuestos en los que puede ser utilizado por la Administración. Concretamente se refiere a los siguientes: a) actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado; b) actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente; y c) actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.

316. Para el caso en que ha de satisfacerse una cantidad líquida, el artículo 101 LPAC contempla como vía de ejecución forzosa la vía de apremio sobre el patrimonio.

317. Partiendo de esa distinción, la Comisión estima que la imposición de multas coercitivas ligada a la insatisfacción de una deuda líquida, como será la indemnización de los daños y perjuicios causados, carece de sentido y, en cualquier caso, no tiene el debido encaje en el marco del procedimiento de ejecución forzosa previsto en la LPAC.

318. Carece de sentido porque con las multas coercitivas únicamente se acrecentaría la deuda, cuando la vía de apremio ya dispone de mecanismos disuasorios (como los recargos e intereses de demora) para penalizar a aquellas personas que, teniendo una deuda líquida con la Administración, no la satisfacen en periodo voluntario.

319. Donde sí tiene sentido las multas coercitivas es en aquéllos casos en los que se pretende imponer al interesado una obligación de hacer o de no hacer. En esos casos, como ocurre con la obligación de reponer la situación alterada y reparación de los daños, tiene pleno sentido acudir a este medio de ejecución forzosa, pero no así, como decimos, para obtener la satisfacción de una indemnización económica ya determinada en su cuantía.

D) La prohibición para contratar

320. El artículo 114, bajo el título "prohibición para contratar", contiene tanto una prohibición para contratar como de obtener subvenciones del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sobre este artículo debemos realizar varias observaciones.

321. En primer lugar, no pueden analizarse desde un mismo plano la prohibición para contratar y la de obtener subvenciones. En el caso de las subvenciones, el artículo 13.2.h) de la Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, contempla la prohibición para ser beneficiario como consecuencia de "haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan".

322. El rango de la norma que nos ocupa permite, por tanto, introducir en el ordenamiento esa prohibición.

323. En cuanto a la prohibición para contratar, la cuestión resulta algo más compleja, aunque igualmente viable.

324. En este caso la prohibición se superpondría a la ya prevista con carácter básico en el artículo 71.1.b) de la LCSP: haber sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. Como decimos, la nueva prohibición para contratar afectaría también a las infracciones graves, y la duración estaría ligada al cumplimiento de las medidas correctoras o a la satisfacción de la sanción económica.

325. La Comisión, en su Dictamen 97/2008, en el marco de la entonces vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, interpretó que, al excluir esta ley el carácter básico del artículo 49.2.c) LCSP —similar al 71.1.f) de la vigente LCSP, salvo en lo que respecta a la necesidad del carácter firme en vía administrativa de la sanción—, podía suponer un reconocimiento implícito de la competencia del legislador sectorial, que podrá ser el autonómico, para incluir una sanción de esa clase en el posible elenco de sanciones, siempre y cuando la prohibición de contratar se circunscriba al ámbito de su competencia.

326. Como ejemplo reciente de ello, aunque referido al propio Estado, el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, modificó el artículo 34.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, para incluir una sanción que supone una prohibición de contratar *ex* artículo 71.1.b) de la LCSP ("La autoridad sancionadora competente podrá acordar, además, en las infracciones graves y muy graves, la pérdida de la

posibilidad de obtener subvenciones y la prohibición para celebrar contratos con las Administraciones Públicas, durante un plazo de hasta dos años en las infracciones graves y hasta cinco años en las muy graves").

327. La consideración de la contratación del sector público como elemento estratégico en la consecución de políticas públicas supone precisamente utilizar su peso e influencia en la actividad económica para lograr objetivos que van más allá de la ejecución del contrato, tanto en sentido positivo, valorando en la adjudicación elementos sociales, ambientales, etc., como en sentido negativo, vetando el acceso a los contratos públicos a empresas que incumplen la legalidad y son sancionadas en ámbitos determinados.

328. Por otro lado, la Comisión no encuentra justificación al hecho de que, al establecer las prohibiciones —especialmente la de contratar—, el anteproyecto restrinja su aplicación al sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

329. En el ámbito de las subvenciones, donde los órganos forales disponen de capacidad normativa plena, condicionada únicamente por la legislación básica estatal, esa limitación podría ser solventada por la propia normativa foral o, incluso, en la propia convocatoria de subvenciones, pero no ocurre lo mismo en materia de contratación.

330. La prohibición para contratar requiere que sea la ley sectorial, en este caso, medioambiental, la que establezca esa prohibición y, al limitar el ámbito de la prohibición al sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se excluye tanto al ámbito local como foral, sin justificación alguna, de poder utilizar esta sanción accesoria, cuando también pueden imponer, de acuerdo con las competencias que les atribuye el anteproyecto, sanciones por infracciones graves, y en el caso de los órganos forales, incluso por infracciones muy graves.

E) Publicidad de las personas infractoras y de las sanciones

331. El artículo 116 del anteproyecto contempla la publicación de las infracciones y sanciones en las condiciones siguientes.

332. El párrafo 1 prevé la publicación de las resoluciones sancionadoras por infracciones muy graves previstas tanto en esta norma como en aquellas contempladas en otra legislación sectorial ambiental. La publicación, en forma sumaria, debe realizarse obligatoriamente en el boletín oficial correspondiente y en su sede electrónica. Potestativamente, las autoridades competentes para imponer las sanciones pueden publicarlas también a través de los medios de comunicación social. En todo caso, sólo se publicarán una vez sean firmes en vía administrativa.

333. El párrafo 2 contempla la posibilidad de que los órganos que ejerzan la potestad sancionadora publiquen, condicionada a la existencia de razones de interés público, las sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves una vez sean firmes en vía administrativa. En ese caso, la publicación puede realizarse también en el diario oficial correspondiente, en su sede electrónica y, potestativamente, a través de los medios de comunicación social que considere oportunos.

334. En ambos casos, la publicación incluirá la identidad de la persona responsable, la infracción cometida, la sanción impuesta, así como un resumen de las obligaciones de reposición e indemnización exigidas, en su caso.

335. El párrafo 4 de este artículo contempla un mandato al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco para crear un Registro de personas infractoras de normas ambientales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el cual se inscribirán las personas físicas o jurídicas sancionadas, en virtud de resolución firme, por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca. Para su organización y funcionamiento, remite a un futuro reglamento.

336. La primera cuestión que suscita este artículo es la del ámbito de su aplicación, ya que el párrafo 1 se refiere a las infracciones muy graves previstas tanto en esta norma como en aquellas contempladas en otra legislación sectorial ambiental. La pretensión, por tanto, al igual que con algunas de las aperturas realizadas en otras materias (p.ej., contratación verde o fiscalidad ambiental), parece ser la de ejercer la función de "norma cabecera" de la materia.

337. Sin embargo, precisamente por el carácter transversal de la materia medio ambiente y su, a veces, difusa confluencia con otras materias, el ámbito de aplicación, así planteado, resulta excesivamente abierto.

338. Debemos recordar "el carácter complejo y polifacético que tienen las cuestiones relativas al medio ambiente", así como el carácter transversal de esta materia, que provoca su potencial incidencia en otras materias que gozan de especificidad propia "en cuanto tales materias tienen como objeto los elementos integrantes del medio (las aguas, la atmósfera, la fauna y la flora, los minerales) o ciertas actividades humanas sobre ellos (agricultura, industria, minería, urbanismo, transportes).

339. Como insiste en recordar la STC 102/1995, de 26 junio, "el carácter complejo y polifacético propio de las cuestiones relativas al medio ambiente hace que estas afecten a los más variados sectores del ordenamiento jurídico (STC 64/1982). Ello explica que la competencia estatal sobre esta materia converja o concurra poliédricamente con otras muchas autonómicas sobre ordenación del territorio y urbanismo, agricultura y ganadería, montes y aguas y caza y pesca".

340. Cuando los párrafos 1 y 2 se refieren tanto a las infracciones "previstas en esta Ley o en aquellas contempladas en otra legislación sectorial ambiental", surgen dudas sobre si se pretende llegar a todos o sólo a alguno o algunos de esos sectores citados, o si solo se refiere a materias "centradas exclusivamente en la protección del medio ambiente", como pueden ser la de residuos, ruido, o las incluidas en el anteproyecto de Ley de conservación del patrimonio natural —sometido también al dictamen de esta Comisión — o en el anteproyecto de Ley de cambio climático, esta última también en proceso de elaboración aunque en fase menos avanzada.

341. La interpretación más amplia resulta a nuestro juicio excesiva, ya que la necesaria ponderación entre los derechos e intereses concurrentes, en todos estos ámbitos o sectores, puede ser muy diferente en función de los afectados por la publicidad (empresas de diferentes dimensiones y sectores, personas físicas o jurídicas, particulares…).

342. La interpretación más estricta parece la más razonable, pero, incluso limitando su ámbito de aplicación a las materias centradas exclusivamente en la protección del medio ambiente, el anteproyecto sigue siendo excesivamente indefinido y no parece tener en cuenta la tramitación paralela de los dos anteproyectos ya citados sobre conservación del patrimonio natural y cambio climático.

343. El primero ya contempla su propio régimen específico de publicidad de las sanciones y, en lo que corresponde al cambio climático, el anteproyecto contempla la aplicación supletoria de "lo establecido en la Ley de Administración ambiental" sobre disciplina ambiental.

344. En materia de residuos, la Ley estatal 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, también prevé, en su artículo 56, la posibilidad de que los órganos que ejerzan la potestad sancionadora acuerden, cuando estimen que existen razones de interés público, la publicación en el diario oficial correspondiente y a través de los medios de comunicación social que considere oportunos de las sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves y muy graves que sean firmes, así como los nombres y apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables. En este sector, por tanto, tampoco resulta precisa la apertura del anteproyecto para establecer la publicación de los datos de identificación de las personas infractoras y las sanciones impuestas, siendo suficiente para su aplicación con una norma de rango reglamentario.

345. La Comisión estima, por tanto, que debe reconsiderarse el ámbito de aplicación de las reglas de publicidad del artículo 116 del anteproyecto, delimitándolo con mayor precisión y en concordancia tanto con las normas ya vigentes —como la citada la Ley estatal 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados— como con la que se

encuentra en fase de elaboración en la Comunidad Autónoma en relación con la conservación del patrimonio natural y con el cambio climático.

346. En cuanto al contenido sustantivo de este artículo, durante el proceso de elaboración se ha planteado alguna objeción sobre su proporcionalidad, al entender que la publicación de esos datos puede entrar en conflicto con el derecho a la protección de datos personales recogido en el artículo 18.4 de la Constitución (CE).

347. Como justificación, la memoria sobre alegaciones y propuestas recibidas afirma que se trata de una medida accesoria que refuerza el régimen sancionador y que está acotada a los supuestos de mayor gravedad. Contempla también la posibilidad de incorporar alguna de las cautelas planteadas en las observaciones recibidas y recuerda recientes desarrollos en otros ámbitos como el fiscal o el ya señalado de los residuos, que han superado los análisis y cautelas jurídicas necesarias para su aprobación.

348. En nuestro Dictamen 9/2016 analizamos las dos cuestiones fundamentales que contiene este artículo 116: la publicidad de las sanciones y la creación de un registro de personas infractoras.

349. Como argumentamos entonces, con referencia a la ya derogada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, no todos los datos relacionados con la imposición de las sanciones están sometidos a lo dispuesto en legislación sobre protección de datos. Ello se funda en el hecho de que, al igual que la citada ley ya derogada, también la actual la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), delimita su ámbito de aplicación al derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución.

350. Con respecto a las personas físicas que actúan como empresarios individuales, la LOPD también contiene un régimen específico, a los efectos que aquí nos ocupan. Con la anterior regulación, tanto la Agencia Española de Protección de Datos (informe 42/2008) como la Agencia Vasca de Protección de Datos (CN14-014) han venido interpretando que los ficheros que contengan datos de empresarios individuales en su condición de tales, vinculados a su actividad mercantil o industrial y claramente separados de su esfera personal no están sometidos a la normativa de protección de datos si sus datos se utilizan en el ámbito de esa actividad. Cuando no sea posible diferenciar la actividad profesional de su actividad privada, los datos del empresario individual deben estar sometidos a la legislación sobre protección de datos.

351. Esta cuestión resulta relevante porque el régimen de disciplina ambiental del anteproyecto afecta esencialmente a personas jurídicas y, en el caso de personas físicas, se tratará esencialmente de empresarios individuales.

352. Dicho lo anterior, la Comisión también quiere en este caso recordar que el hecho de que una norma tenga el rango de ley no siempre es garantía suficiente para que todo su contenido sea acorde con el respeto al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Como ya señalamos en el aludido dictamen, para poder limitar el derecho fundamental de las personas a la protección de sus datos personales es precisa una habilitación en norma con rango de ley, que cumpla además ese requisito de "calidad de ley", en la línea seguida por la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD) en sus dictámenes CN11-007 o CN14-021.

353. Se exige así que la recogida y tratamiento de datos de carácter personal se realice desde su subordinación a los principios de calidad de los datos y de proporcionalidad: "adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»)" (artículo 5.1.c del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016).

354. Asimismo, requiere que los datos sean "mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales (...) (limitación del plazo de conservación)" (artículo 5.1.e del citado Reglamento).

355. Por ello, la ley que establezca los límites "deberá concretar las restricciones, alejándose de criterios de delimitación imprecisos o extensivos, pues vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal el establecimiento de límites de forma tal que hagan impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz la garantía que la Constitución le otorga" (STC 70/2009). Según el Tribunal Constitucional, la injerencia en ese derecho exige —al igual que en el derecho fundamental a la intimidad—, "de un modo inexcusable", una previsión legal que "ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención (...)"; o lo que es lo mismo, ha de poseer cierta "calidad de ley".

356. Es decir, no basta con que sean fijados en ley los límites al derecho fundamental ahora concernido, sino que es también necesario que "obedezcan a una justificación objetiva y razonada y someterse a la estricta observancia del principio de proporcionalidad en su triple perspectiva de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto".

357. Pues bien, retomando lo dispuesto en el anteproyecto, nos encontramos, por un lado, con la publicación obligatoria de las resoluciones sancionadoras por infracciones muy graves y, por otro, con la posibilidad de publicación de las infracciones graves cuando se aprecien razones de interés público. El contenido de esa información en ambos casos

incluye: la identidad de la persona responsable, la infracción cometida, la sanción impuesta, así como un resumen de las obligaciones de reposición e indemnización exigidas.

358. A título ilustrativo, la Agencia Española de Protección de Datos (en materia de dopaje) consideró en el marco de la normativa anterior —mantenida en sustancia en lo que aquí nos afecta— que la publicación de las sanciones no resulta contraria a la legislación sobre protección de datos, siempre que se cumplan ciertas limitaciones: I) la publicación no debe entenderse como una sanción añadida —la legislación no contempla como sanción específica la amonestación pública—, sino que debe entenderse como una consecuencia necesaria del procedimiento sancionador; II) es preciso garantizar el principio de proporcionalidad, que afecta al alcance de lo publicado, en relación con los datos que pueden publicarse y con el momento en que sea posible esa publicación; y III) la publicación debe garantizar el principio de finalidad, lo que se traduce en que, transcurrida la sanción, el dato sea objeto de cancelación.

359. En este caso, la conexión entre las actuaciones que constituyen faltas muy graves con un posible daño o peligro grave sobre el medio ambiente o a la salud o seguridad de las personas puede justificar el dar a conocer públicamente la infracción y la sanción, por lo que la opción adoptada en el anteproyecto supera, en opinión de la Comisión, el aludido juicio de proporcionalidad de la medida.

360. En esa ponderación debe tenerse en cuenta, por un lado, que la imposición de sanciones administrativas en materia de medio ambiente tiene un reconocimiento explícito en el artículo 45.3 CE, precisamente por el enorme valor del bien jurídico que se pretende proteger. Por otro lado, se trata de un sector en el que el acceso a la información, la transparencia y la participación de la ciudadanía se encuentran fuertemente arraigados y asentados, por lo que el anteproyecto no hace sino incorporar una medida que ya se ha venido reconociendo, como expone el órgano promotor, en otras normas medioambientales.

361. En cuanto a las infracciones graves, aunque la relación de la infracción con un daño o peligro grave no siempre se pueda establecer de manera directa, esa publicación queda condicionada a una ponderación específica en cada caso, debiendo el órgano competente justificar las razones de interés público que avalan la conveniencia de la publicación, por lo que la Comisión considera que nos encontramos igualmente ante una opción normativa proporcionada.

362. Ahora bien, surgen mayores dudas en relación con el registro de personas infractoras, sobre el cual, de inicio, ni siquiera se aclara si tendrá carácter público o alguna normación

mínima sobre el acceso al mismo y, al no establecer ninguna limitación en cuanto a su contenido, parece amparar la inscripción en el mismo de todas las personas infractoras, incluidas las que hubieran cometido faltas leves.

363. Un registro de personas infractoras que tenga como objetivo exclusivo mantener la información y el control por parte de la Administración de las sanciones impuestas, a los efectos, por ejemplo, de una posible reincidencia o de un seguimiento de sanciones accesorias como la prohibición para contratar no plantea objeción alguna, siempre y cuando se tenga en cuenta en su mantenimiento lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

364. Si, por el contrario, la opción fuera la de establecer un registro con acceso público y generalizado, debemos reiterar lo advertido en el Dictamen 9/2016 respecto al registro de sanciones que contemplaba el anteproyecto de Ley de turismo.

365. La Comisión aprecia, por tanto, que la regulación que se prevé para ese registro carece de falta de detalle en cuanto al contenido de los datos que debe recoger, a las obligaciones o limitaciones que pretende establecer y a cómo se produce el acceso al mismo (o sea, no cumpliría con la exigencia de "calidad de ley" a que se refiere el Tribunal Constitucional). La norma tan solo prevé la existencia de "un registro de personas infractoras de normas ambientales de la Comunidad Autónoma, en el que se inscribirán las personas físicas o jurídicas sancionadas en virtud de resolución firme".

366. No se dispone, por ello, de la información suficiente para realizar una valoración sobre la limitación de acceso a los datos que consten en dichos registros. En cualquier caso, es incuestionable que el acceso a los datos de carácter personal que figuren en ese registro habrá de atenerse a la normativa reguladora de la protección de esos datos, teniendo presente, además, que, por referirse a infracciones administrativas, se trata de datos especialmente sensibles (a título de ejemplo, en el artículo 66 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre de espectáculos públicos y actividades recreativas del País Vasco, y en el artículo 102 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de turismo, se advierte de la exigencia de respeto a la normativa de protección de datos).

VIII OTRAS CUESTIONES DE CARÁCTER PUNTUAL

367. En el título I, el **artículo 2** incluye una serie de definiciones.

368. Este artículo establece, a efectos aclaratorios, la definición de una serie de conceptos que posteriormente son utilizados en el texto del anteproyecto. Sin embargo, las definiciones de ciertos conceptos a efectos de la evaluación ambiental no se incluyen en este artículo, sino que se establecen en el anexo II.G. La incorporación de este último

anexo con definiciones es consecuencia de algunas de las observaciones recibidas durante el proceso de elaboración, en relación con algunos conceptos que no venían recogidos en el artículo 2.

369. En principio, la Comisión considera positiva la incorporación a la norma de las definiciones de los conceptos utilizados en la misma pues con ello se persigue obtener una norma más clara, precisa y accesible. Si las definiciones se dividen, como es el caso, entre el articulado y un anexo específico para una de las materias reguladas en la norma, se corre el riesgo de que ello repercuta en su claridad y accesibilidad

370. La Comisión aconseja su unificación, pero, en el caso de que se considere que esa separación resulta conveniente o necesaria, se recomienda que el artículo 2 del anteproyecto establezca con claridad que las definiciones relacionadas con la evaluación ambiental se incluyen en el citado anexo.

371. También se recomienda revisar las definiciones de los apartado n) y o) del artículo 2 (modificación sustancial y no sustancial). En el primer caso, para incluir una referencia a la seguridad y para matizar que se refiere a la salud de las personas. En el segundo caso, únicamente para incluir la referencia a la seguridad, junto con el medio ambiente y la salud de las personas.

372. Entre las funciones atribuidas al Consejo Asesor de Medio Ambiente en el **artículo 10** se incorpora, como apartado g), la de adoptar las normas de funcionamiento interno y crear, en su caso, secciones. Esta capacidad no constituye una función del consejo, sino una capacidad en el ámbito organizativo que debería contemplarse en un párrafo específico.

373. Advertimos, asimismo, aunque solamente a los efectos, en su caso, de su confirmación, que, entre esas funciones, se contempla la de informar el Programa Marco Ambiental, pero no se contempla, sin embargo, informar los planes específicos de desarrollo.

374. En cuanto al **artículo 21**, referido a las consultas previas, todo parece indicar que su valor es únicamente informativo, pero convendría establecerlo de forma explícita.

375. En el **artículo 33** se establece el contenido de la solicitud de autorización ambiental integrada y de la autorización ambiental única. En esa relación nada se indica en relación con lo establecido en el artículo 12.1.12 de la LPCIC sobre el caso de que la instalación tenga implantado un sistema de gestión comunitario de gestión y auditoría medioambientales. Se aconseja su revisión y, en su caso, inclusión en el proyecto en los términos previstos en la LPCIC.

376. En los **artículos 35 y 36**, el plazo de información pública previsto es de un mes, apartándose ligeramente de lo dispuesto en la normativa básica, que contempla, por su parte, un plazo mínimo de 30 días para la Autorización ambiental integrada. Advertimos de que, al tratarse de días hábiles (artículo 30.2 LPAC), resultaría incumplido el plazo establecido con carácter de mínimo por la normativa básica (artículo 16.1 LPCIC).

377. En el **artículo 41**, referido a los valores límite de emisión de las autorizaciones ambientales, se establece un criterio diferente para la autorización ambiental integrada y para la autorización ambiental única. En el primer caso (párrafo 1), se concretan una serie de criterios que deben ser tenidos en cuenta con base en las mejores técnicas disponibles. En el segundo, sin embargo, se establece que para la determinación de los valores límite de emisión "se podrán tomar en consideración las mejores técnicas disponibles, de conformidad a lo expuesto en el apartado anterior". Con esta expresión parece que se trata de una decisión discrecional.

378. Consideramos, sin embargo, que el sentido pretendido se refleja mejor utilizando la expresión "en su caso".

379. En el **artículo 42**, referido al contenido de la autorización ambiental integrada y de la autorización ambiental única, no se incluye el previsto con carácter mínimo para la autorización ambiental integrada en el artículo 22.1.j) de la LPCIC: los requisitos adecuados para el mantenimiento y supervisión periódicos de las medidas adoptadas para evitar las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas con arreglo a la letra b) y, en su caso, los requisitos adecuados para el control periódico del suelo y las aguas subterráneas por lo que respecta a sustancias peligrosas que previsiblemente puedan localizarse, teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y las aguas subterráneas en el emplazamiento de la instalación.

380. Se aconseja igualmente su revisión y, en su caso, inclusión en el proyecto en los términos previstos en la LPCIC.

381. Pese a que se ha puesto de manifiesto durante el procedimiento de elaboración, no se aprecia un conflicto insalvable entre los dispuesto en el **artículo 99.7** del anteproyecto, en relación con la posibilidad de suspender el suministro de agua o de energía, y lo dispuesto en la parte final del artículo 52.4 de la Ley estatal 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, relativo a la prohibición de suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellas instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales de conformidad con esa ley. De darse el caso, habrán de ponderarse las circunstancias concurrentes respetando, en su caso, la legislación básica.

382. No obstante, ello no impide establecer la medida en los términos del anteproyecto.

383. En cuanto al mandato a las administraciones para dotarse de medios incluida en la **disposición adicional única**, la Comisión considera innecesario este mensaje por cuanto la Administración actúa con sometimiento a la ley (artículo 103 CE) y debe, por tanto, cumplirla y hacerla cumplir con los medios de que disponga y teniendo en cuenta, además, lo que cada año prevean sus presupuestos, en cuya elaboración y aprobación, una disposición como la señalada tampoco puede imponer obligación alguna.

384. En cuanto a los **anexos**, la Comisión, dado su carácter técnico, no puede entrar a valorarlos más que en aspectos formales. No obstante, dado que resultan esenciales en la identificación de los diferentes supuestos objeto de regulación, recomienda extremar el celo en su correcta definición.

385. No obstante, advertimos que en el **punto 5 del anexo I.A**, no se ha incorporado el supuesto de "Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total superior a 50 toneladas" previsto en el punto 5 del anejo I de la LPCIC. Recomendamos su revisión para, en su caso, incorporarlo al anexo.

386. En el **anexo I.C**, se establece la relación de actividades e instalaciones sometidas a licencia de actividad clasificada "siempre que se trate de actividades no incluidas en los apartados A, B, y D" del anexo I. Por su parte, el anexo I.D establece en relación con las actividades e instalaciones sometidas a comunicación previa un mensaje similar, referido en este caso a los anexos A, B y C. Se trata, así, de una referencia circular que únicamente aporta confusión.

387. La opción más razonable sería eliminar del anexo I.C la referencia al apartado D, de manera que en caso de que en un supuesto exista duda entre la necesidad de licencia o comunicación previa, se imponga el régimen de mayor protección: la licencia de actividad clasificada.

388. En el **punto 1 del anexo II.D** establece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria (…) 1. Los proyectos que se encuentren en alguno de los supuestos recogidos en los Grupos que forman parte de este Anexo II.C.

389. Consideramos que se trata de una errata ya que el anexo II.C se refiere a los criterios para determinar cuándo un plan o programa sometido a evaluación ambiental estratégica simplificada debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

390. Recomendamos su revisión y, en su caso, corrección.

391. Entre las definiciones a efectos de la evaluación ambiental (ubicadas en el **anexo II.G**), recomendamos incluir la de "documento ambiental" que aparece en los artículos 33, 45, 49 y disposición final segunda.

IX OTRAS OBSERVACIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA

392. En el artículo 9.2 se recomienda no utilizar frases subordinadas que oscurecen el mensaje normativo (El Programa Marco Ambiental, que podrán desarrollarse mediante planes específicos…). Se recomienda separar ambos mensajes en dos oraciones diferenciadas.

393. En el artículo 13, la referencia a las "zonas de especial protección" debería realizarse, en coherencia con el anteproyecto de Ley de conservación del patrimonio natural de Euskadi, a los "espacios naturales protegidos". La misma cuestión se detecta en el punto 7 del anexo II A cuando se refiere a los "espacios protegidos".

394. En el artículo 30.2, en la redacción antes de "emisiones a la atmósfera" falta la conjunción copulativa "y".

395. Se recomienda sustituir en el artículo 41 la expresión "de conformidad a" por la de "de conformidad con".

396. También se deben sustituir las referencias a los apartados cuando se hace referencia a lo que nuestras directrices de técnica normativa denominan como párrafos.

397. El artículo 67.2 comienza con la expresión "sin perjuicio de lo señalado en el apartado 7 de este artículo", que constituye una referencia inocua al citado apartado que únicamente provoca confusión.

398. El título del artículo 114 sólo se refiere a la prohibición para contratar, pero el contenido incluye la prohibición de recibir subvenciones

399. En el artículo 91 se debe corregir la expresión "al personal… a que" por "el personal… al que".

400. En el artículo 96, donde dice "se podrán" debería decir "se podrá" .

401. Recomendamos la eliminación del último inciso del párrafo 1 del artículo 102, dado el genérico contenido del párrafo 2 al que se remite. Podría incluso revisarse a estos efectos el mensaje de ese párrafo 2 ya que, salvo la atribución competencial del párrafo 1, el artículo en su conjunto resulta oscuro.

402. En el artículo 110.1 debe incluirse la conjunción "o" entre clausura definitiva "o" temporal.

403. En cuanto a la referencia en el artículo 118 a la partida presupuestaria definida en la presente ley, suponemos —puesto que no hay otra referencia en la norma— que se

refiere a la prevista en el artículo 85.3, pero esta se enmarca en el ámbito de la fiscalidad ambiental. De ser así, para una mayor claridad debería establecerse expresamente identificando el precepto.

CONCLUSIÓN

La Comisión dictamina que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del presente dictamen, puede elevarse al Consejo de Gobierno para su aprobación el anteproyecto de ley de referencia

Lo que certificamos en Vitoria-Gasteiz, a 12 de julio de 2019 para su conocimiento y consideración, recordándole la obligación prevista en el artículo 30.2 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de comunicar a esta Comisión la disposición o resolución que finalmente se adopte, en la forma y plazo que se establecen en el artículo 34 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (aprobado por Decreto 167/2006, de 12 de septiembre).

V° B°:

Jesús María Alonso Quilchano,	Sabino Torre Díez,
Secretario	**Presidente**

FIRMADO DIGITALMENTE POR:
Firmante: **EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO**
Fecha de la firma: **12/07/2019 14:14:04**
Validación de la firma: **Correcta**

AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
EUSKADI

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZAKO SAILBURU JAUNA

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren Osoko Bilkurak, 2019ko uztailaren 10ean egindako bileran, ertzean adierazitako kideak bertaratu direla, zure **kontsulta** aztertu du (erreg. zk.: 91/2019), hain zuzen ere, **Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen Aurreproiektuaren gainekoa (Erref.: DNCG_LEY_479/18_05**).

Eztabaidatu eta gero, irizpen hau eman du, aho batez. Zubizarreta Arteche batzordekide jaunak adierazi du Batzordearen iritzia.

BATZORDEKO LEHENDAKARIA:
Sabino Torre Díez jauna

BATZORDEKO LEHENDAKARIORDEA:
Xabier Unanue Ortega jauna.

BATZORDEKIDEAK:
Mª Teresa Astigarraga Goenaga andrea.
Luis Mª Eskubi Juaristi jauna.
Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo jauna.
Fatima Saiz Ruiz de Loizaga andrea.
Imanol Zubizarreta Arteche jauna.
Ion Gurutz Echave Aranzabal jauna.
Miren Izaskun Iriarte Irureta andrea.

IDAZKARIA:
Jesus Mª Alonso Quilchano jauna.

126/2019 IRIZPENA

ANTECEDENTES 3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN 12
EL PROCESO DE ELABORACIÓN 12
I La memoria justificativa y económica del anteproyecto 13
II Trámites de audiencia, información pública, participación y consulta a otras Administraciones 16
III Informes preceptivos 19
IV El informe de la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi (CGLE) 21
ASPECTOS COMPETENCIALES 23
I En relación con el Estado 24

II En relación con los territorios históricos 31
III En relación con las entidades locales 33
IV Conclusión 34
MARCO NORMATIVO 34
I En materia de derecho a la información y participación pública 35
II En cuanto a la ordenación de actividades con afección en el medio ambiente 35
III En cuanto a la evaluación ambiental 35
IV En materia de responsabilidad medioambiental 36
V Otras materias 37
EXAMEN DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO 37
I La unificación del Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Comisión Ambiental del País Vasco 39
II Intervención ambiental 40
A) La concurrencia de los regímenes de intervención ambiental con la evaluación de impacto ambiental 40
B) Actividades clasificadas 45
III Evaluación Ambiental 46
A) Planes, programas y proyectos excluidos de evaluación ambiental 47
B) Cómputo del plazo para resolver en determinados trámites 60
IV Instrumentos de impulso de la mejora ambiental 61
A) Acuerdos medioambientales 61
B) Contratación pública verde 62
C) Fiscalidad ambiental 64
V Entidades colaboradoras y función inspectora 66
VI Restauración de la legalidad ambiental y responsabilidad por daños medioambientales 67
VII Disciplina ambiental 70
A) Calificación de infracciones y sanciones 72
B) El decomiso de los efectos provenientes de la infracción 74
C) Multas coercitivas y ejecución subsidiaria 75
D) La prohibición para contratar 76
E) Publicidad de las personas infractoras y de las sanciones 77
VIII Otras cuestiones de carácter puntual 83
IX Otras observaciones de técnica legislativa 87
CONCLUSIÓN 88

AURREKARIAK

1. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2019ko maiatzaren 20ko Aginduaren bidez (sarrera-data: egun hori bera), aipatutako legearen aurreproiektua Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenaren mende jarri da.

2. Aipatutako aginduarekin batera, espedientea aurkeztu da. Espedientean, proiektuaren behin betiko testuarekin batera, honako dokumentu garrantzitsuak daude:

   a) Hasteko agindua, 2018ko otsailaren 13koa.

   b) Aurretiazko kontsultaren agindua.

   c) Aurretiazko kontsulta-prozesu publikoan honako hauek emandako dokumentazioa: Álvaro Cerezo Ibarrondo jaunak, Euskadiko Ingurumen Industrien Kluster Elkarteak (ACLIMA) eta Basquegur Erakundeak.

   d) Aurreproiektuaren genero-eraginari buruzko txostena.

   e) Aurreproiektuaren justifikazioko memoria ekonomikoa.

   f) Aurreproiektuaren bertsioa, 2018ko maiatzaren 21ekoa.

   g) Aldez aurreko onarpenaren Agindua, 2018ko maiatzaren 25ekoa.

   h) Jendaurreko informazioaren izapidearen iragarkia (EHAA, 2018ko maiatzaren 28koa).

   i) EUSKAL NEKAZARIEN BATASUNAk (ENBA) egindako alegazioak.

   j) EAEko Jabetza eta Merkataritza Erregistratzaileek aurkeztutako alegazioak.

   k) Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren alegazio-txostena.

   l) Gipuzkoako Foru Aldundiak aurkeztutako alegazioak (bi idazki).

   m) MERCADONA SA enpresak aurkeztutako alegazioak.

   n) BASKEGUR erakundeak aurkeztutako alegazioak.

   o) ACLIMAk (Basque Enviroment Clúster) aurkeztutako alegazioak.

p) Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Orokorrak egindako alegazioak.

q) EUSKAL ARIDOSek aurkeztutako alegazioak.

r) IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SAU enpresak aurkeztutako alegazioak.

s) Bilboko Udalak aurkeztutako alegazioak.

t) José Mariano Travel Cotrina jaunak aurkeztutako alegazioak.

u) Arabako Foru Aldundiak (Nekazaritza Zuzendaritzak) aurkeztutako alegazioak.

v) José Alberto Arrate Sauto jaunak aurkeztutako alegazioak.

w) Astigarragako Udalak aurkeztutako alegazioak.

x) Jaizkibel Geonature Ingurumen Erakundeak aurkeztutako alegazioak.

y) Pasaiako Udalak aurkeztutako alegazioak.

z) Hernaniko Udalak aurkeztutako alegazioak.

aa) Osasun Sailaren alegazio-txostena.

bb) IHOBE SA Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoaren alegazioak.

cc) Genero-eraginari buruzko Emakunderen txostena.

dd) Ogasun eta Ekonomia Sailaren alegazio-txostena.

ee) Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen eta Hirigintza Zuzendaritzaren alegazioak.

ff) EAEko Ingeniari Industrialen Kontseiluaren alegazioak.

gg) Bermeoko Udalak aurkeztutako alegazioak.

hh) EHNEk (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) aurkeztutako alegazioak.

ii) Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Orokorrak aurkeztutako alegazioak.

jj) Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren alegazio osagarrien txostena.

kk) Donostiako Udalak aurkeztutako alegazioak.

ll) Kontratazio Publikoko Aholku Batzordearen txostena.

mm) Euskal Enpresarien Konfederakuntzak (Confebask) aurkeztutako alegazioak.

nn) Zerbitzu Zuzendaritzaren txosten juridikoa.

oo) Zerga Administrazioko Zuzendaritzaren txostena.

pp) Bizkaiko Abokatu Elkargoak aurkeztutako alegazioak.

qq) Hizkuntza-normalizazioari buruzko txostena.

rr) Lehiaren Euskal Agintaritzaren txostena.

ss) Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren txostena.

tt) Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren alegazioak.

uu) Euskal Herriko Ingurumen Batzordearen (COMA) egiaztagiria.

vv) Ingurumenerako Aholku Kontseiluaren (CAMA) egiaztagiria.

ww) Alegazio eta iradokizunei buruzko erantzun-txostenak eta memoria.

xx) Izapideari buruzko memoria laburra, 2019ko urtarrilaren 7koa.

yy) Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen txostena.

zz) Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen txostena.

aaa) Izapideari buruzko memoria laburra, 2019ko martxoaren 7koa, jasotako txostenei emandako erantzunak barne hartzen dituena.

bbb) Lege-aurreproiektuaren testua, 2019ko martxoaren 7koa.

ccc) Naturzaintza/Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenerako Aholku Batzordearen egiaztagiria.

ddd) Zerga Administrazioko Zuzendaritzaren bigarren txostena.

eee) Aurrekontu Zuzendaritzaren txostena.

fff) Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena.

ggg) Aurreproiektuaren testua, 2019ko maiatzaren 16koa.

hhh) 2019ko maiatzaren 16ko prozeduraren memoria laburra.

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

3. Ingurumen Administrazioaren Lege Aurreproiektuak azalpen-zati bat eta ehun eta zortzi artikulu ditu, bederatzi titulutan antolatu, eta kapitulutan banatuta. Azken zatiak xedapen gehigarri bat, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta sei azken xedapen ditu. Era berean, hamabi eranskin ditu.

4. Zioen azalpenak proiektatutako arauaren helburua aurreratzen du: «Esparru juridiko bat xedatzea, ingurumen-babes handia bermatuko duena, gaur egungo EAEko egoera sozioekonomikora egokituta. Horregatik, arauak azken araudi-garapenak jasotzen ditu, eta administrazioan esku hartzeko teknika berriak dakartza, administrazio-prozedura sinplifikatze eta arintze aldera, eta ingurumenaren babes eraginkorra lortzeko asmoz, jarduera ekonomikoak eta gauzatzen diren ingurunea bateragarri eginez».

5. Horrez gain, honako hau adierazten du: «Lege honek pertsona fisiko zein juridiko, publiko zein pribatuen eskubideak eta betebeharrak xedatzen ditu, herritarrek euren garapenerako ingurumen egokiaz gozatzeko duten eskubidea nabarmenduz. Era berean, ekonomia jasangarria sustatzen du, baliabide naturalen kudeaketa eraginkorraren bitartez, klima-aldaketaren eragina mugatuko duen gizarte hipokarboniko bat sustatzearren. Helburu horiek erdiesteko, ezinbestekoa da hainbat ekintza gauzatzea, segurtasun juridikoa eta ahalik eta eraginkortasun handiena emango dien oinarri arautzaile irmoarekin». (…) «Legeak alderdi publikoaren eta pribatuaren arteko erantzukidetasuna bultzatu nahi du ingurumenaren babesari dagokionez. Izan ere, euskal gizarteak dituen ingurumen-erronketarako irtenbideak bilatzeak berarekin dakar, halabeharrez, administrazio publikoen, sektore ekonomikoaren eta herritarren artean baterako jardunak egikaritzea, lortu nahi diren helburu komunak kontuan hartuta; esaterako, bizi-kalitatea eta ongizate orokorra hobetzeko aukera bat. Hala, ekoizpen- eta kontsumo-eredua nabarmen aldatu beharko da, EAE Europan erreferente bihur dadin».

6. Gainera, zera baieztatzen du: «Lege honen edukia, hain zuzen, Europako Batzordeak adierazitako "araudi adimendun" kontzeptuaren premisapean egituratzen da. Helburua da Estatu kideek arau batzuk onar ditzaten sustatzea, honako hauek lortzeko: herritarren rola indartzea, araudiak bizimodu sozioekonomiko orokorrean dituen eraginak aztertzea, eta administrazio-lanak sinplifikatzeko joera sustatzea, prozedurak bateratuz eta beharrezkoak ez diren izapideak erauziz». Horregatik guztiagatik, «funtsezkoak dira Ingurumen Administrazioaren Funtzionamendua Arintzeko eta Sinplifikatzeko Legeak diseinatutako neurriak, administrazioaren esku-hartzea murriztea eta sinplifikatzea baita helburua».

7. Era berean, arauak oinarritzat hartzen duen eskumen-titulu nagusia aipatzen da, eta haren egitura eta edukia deskribatzen.

8. Xedapen-atalari dagokienez, lehen tituluak xedapen orokorrak jasotzen ditu. Bertan, hauek arautzen dira: arauaren xedea (1. artikulua); araua ulertzeko beharrezkoak diren definizioak (2. artikulua); printzipioak (3. artikulua); lege honen helburuak betetzera bideratutako jarduerak onura publikokotzat edo interes sozialekotzat jo ahal izateko aukera (4. artikulua); eta pertsonen betebeharrak eta eskubideak lege-esparruaren barnean (5. eta 6. artikuluak).

9. Bigarren tituluak, «Ingurumen-politikaren eskumenak eta koordinazioa» izenekoak, eskumenen barne-antolamendua zehazten du ingurumenaren arloan (7. artikulua), baita administrazio publikoek eskumenak nola egikaritu behar dituzten ere (8. artikulua). 9. artikuluak Ingurumen Esparru Programa jorratzen du, eta 10. eta 11. artikuluek Ingurumenerako Aholku Batzordea eta haren osaera arautzen dituzte.

10. Hirugarren tituluak ingurumen-gaiei buruzko informazioari, jendearen parte-hartzeari eta justiziarako sarbideari buruzko xedapenak ditu. 12. artikulutik 17. artikulura arlo hauek lantzen dira: ingurumen-informazioa, ingurumen-informazioaren hedapena, ingurumen-informazioa eskatzea; ingurumenaren arloko parte-hartzea; akzio publikoa eta, azkenik, administrazio elektronikoari buruzko artikulu bat.

11. Laugarren tituluak, «Ingurumenean eragina duten jardueren antolamendua» izenekoak, era berean, bost kapitulu ditu.

12. I. kapituluak titulu honen xedapen orokorrak jasotzen ditu, 18. artikulutik 29. artikulura. 18. artikuluak ingurumenean esku hartzeko araubideak zehazten ditu. 19. artikuluak, baimendutako jarduerak hasteko epeak. 20. artikuluak, ingurumenean esku hartzeko araubideen helburuak. 21. artikuluak, aldez aurretiko kontsultak. 22. artikuluak Ingurumenean esku hartzeko araubideen eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren aldiberekotasuna jorratzen du. 23. artikuluak, administrazio publikoen betebeharrak, ingurumenean esku hartzeko prozeduretan. 24. artikuluak, ekintzen eta instalazioen sustatzaileen betebeharrak. 25. artikuluak, titulu honetan aurreikusitako prozeduren hasierako eskaeretako proiektuak eta dokumentazio teknikoa egingo duten pertsonen gaitasun teknikoa eta erantzukizuna. 26. artikuluak, sustatzaileak emandako informazioaren isilpekotasuna. 27. artikuluak, esku hartzeko tituluen transmisioa, jarduerak garatzeko. 28. artikuluak, jarduera etetea eta instalazioa ixtea. 29. artikuluak, azkenik, jardueren edo instalazioen aldaketa.

13. Laugarren titulu honen II. kapituluak «Ingurumen-baimenak» izena du. 30. eta 31. artikuluetan, ingurumen-baimen integratua eta ingurumen-baimen bakarra definitzen ditu.

14. III. kapituluak «Ingurumen-baimen integratuaren eta ingurumen-baimen bakarraren xedapen orokorrak» izenekoak, 32. artikulutik 47.era artekoak jasotzen ditu. 32. artikulua udalaren hirigintza-bateragarritasunaren txostenari buruzkoa da. 33. artikulua, eskaeraren edukiari buruzkoa. 34. artikulua, eskaera zuzentzeari buruzkoa. 35. artikulua, jendaurreko informazioaren izapideari buruzkoa. 36. artikulua, ingurumen-baimen integratuaren eta ingurumen-baimen bakarraren menpeko jardueren udal txostenari buruzkoa. 37. artikulua, isurien arloko erakunde eskudunen txostenari buruzkoa, eta 38. artikulua, beste txosten batzuei buruzkoa. 39. artikuluak ebazpen-proposamena eta interesdunaren entzunaldia jorratzen ditu. 40. artikuluak, ebazpena. 41. artikuluak, ingurumen-baimenen emisioen muga-balioak. 42. artikuluak, ingurumen-baimen integratuaren eta ingurumen-baimen bakarraren edukia. 43. artikuluak, baimenen indarraldia eta berrikuspena. 44. artikuluak, ingurumen-baimen integratuak funtsean aldatzeko prozedura. 45. artikuluak, ingurumen-baimen bakarrak funtsean aldatzeko prozedura, eta 46. artikuluak, ingurumen-baimen bakarrak funtsean ez aldatzeko prozedurak 47. artikuluak, azkenik, funtzionatzen hasteari edo irekitzeari buruzko jakinarazpena.

15. IV. kapituluak jarduera sailkatuaren lizentzia erregulatzen du, 48. artikulutik 54. artikulura bitartean. Hasteko, jarduera sailkatuaren lizentziaren irismena zehazten du (48. artikulua). Jarraian, honako hauek arautzen dira: lizentzia eskatzea (49. artikulua); jendaurrean jartzea eta txostenak egitea (50. artikulua); neurri babesleak eta zuzentzaileak ezartzeko txostena (51. artikulua); jarduera-lizentzia ematea (52. artikulua); jarduera sailkatuaren hasierari edo irekierari buruzko jakinarazpena (53. artikulua); eta jarduera sailkatuaren lizentzia berrikustea (54. artikulua).

16. V. kapituluak jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena erregulatzen du. 55. artikuluak jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena lantzen du, hain zuzen. 56. artikuluak, jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena aurkeztea. 57. artikuluak, jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenaren edukia eta ondorioak, eta 58. artikuluak, jarduera aldatzea.

17. Bosgarren tituluak, «Ingurumen-ebaluazioa» izenekoak, hiru kapitulu barne hartzen ditu.

18. I. kapituluak 59. artikulutik 70.era artekoak hartzen ditu, hau da, ingurumen-ebaluazio estrategikoaren eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren xedapen orokorrak. 59. artikuluak, ingurumen-ebaluaziori buruzkoak, ingurumenean eragin nabarmenak izan ditzaketen planak, programak eta proiektuak, baita horien aldaketak eta berrikuspenak ere, ingurumen-ebaluazioko prozeduraren mende nahitaez jarriko direla zehazten du. 60. artikuluak ingurumen-ebaluazioko prozedurak jorratzen ditu. 61. artikuluak, ingurumen-organoaren eskumenak, organo substantiboek dituztenen aldean. 62. artikuluak ebaluatu gabeko planen, programen eta proiektuen deuseztasuna

erregulatzen du. 63. artikuluak, gaitasun teknikoa eta erantzukizuna. 64. artikuluak, isilpekotasuna. 65. artikuluak, ingurumen-ebaluaziotik salbuetsitako planak, programak eta proiektuak. 66. artikuluak, ingurumen-ebaluaziotik salbuetsi daitezkeen proiektuak, banan-banan. 67. artikuluak, ingurumen-ebaluazio arrunten irismenaren zehaztapena. 68. artikuluak, publizitatea. 69. artikuluak, erkidegoarteko eta mugaz gaindiko harremanak, eta 70. artikuluak, ingurumen-ebaluazioko prozeduretan interesa duten pertsona juridikoen erregistroa.

19. III. kapituluak planen eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoa erregulatzen du, 71. artikulutik 74. artikulura bitartean. 71. artikuluak ingurumen-ebaluazio estrategikoaren esparrua jorratzen du. 72. artikuluak, jendaurreko informazioa eta kontsultak. 73. artikuluak, ingurumen-adierazpen estrategikoaren izaera eta edukia, eta 74. artikuluak, ingurumen-txosten estrategikoaren izaera eta edukia.

20. III. kapituluak, «Proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa» izenekoak, 75. artikulutik 78.era artekoak jasotzen ditu. 75. artikuluak ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren esparrua jorratzen du. 76. artikuluak, jendaurreko informazioa eta kontsultak. 77. artikuluak, ingurumen-inpaktuaren adierazpenaren izaera eta edukia, eta 78. artikuluak, ingurumen-inpaktuaren txostenaren izaera eta edukia.

21. Seigarren tituluak ingurumenaren hobekuntza bultzatzeko tresnak aztertzen ditu, 79. artikulutik 88. artikulura. 79. artikulua ingurumen-akordioei buruzkoa da. 80. artikulua, ingurumen-kudeaketako eta -ikuskaritzako Europar Batasuneko sisteman (EMAS) parte-hartzea sustatzeari buruzkoa. 81. artikulua, Europar Batasunaren etiketa ekologikoaren erabilera sustatzeari buruzkoa. 82. artikulua, ingurumen-aztarnari buruzkoa. 83. artikulua, erosketa publiko berdeari buruzkoa. 84. artikulua, ekoberrikuntzari buruzkoa. 85. artikulua, ingurumen-fiskalitateari buruzkoa. 86. artikulua, ikerketari, hezkuntzari eta prestakuntzari buruzkoa. 87. artikulua, ingurumen-boluntarioei buruzkoa, eta 88. artikulua, aitortza publikoko neurriei buruzkoa.

22. Zazpigarren tituluak, « Ingurumen-ikuskaritza eta -kontrola» izenekoak, bi kapitulu barne hartzen ditu.

23. I. kapituluak ingurumenaren alorreko lankidetza-entitateak erregulatzen ditu 89. artikuluan.

24. II. kapituluak ingurumenaren alorreko ikuskaritza erregulatzen du, 90. artikulutik 95. artikulura bitartean. 90. artikuluak ingurumenaren alorreko ikuskaritzaren xedea eta ikuskatzeko eskumenak jorratzen ditu. 91. artikuluak, ikuskapen-jarduerari men egiteko betebeharra. 92. artikuluak, ingurumenaren alorreko ikuskaritzaren jarduketa. 93. artikuluak, ingurumenaren alorreko ikuskaritzaren akta eta txostena. 94. artikuluak,

ingurumenaren alorreko ikuskaritzaren plangintza, eta 95. artikuluak, ingurumenaren alorreko ikuskaritza-lanen argitalpena.

25. Zortzigarren titulua, «Ingurumenaren alorreko legezkotasunaren berrezarpena eta ingurumen-kalteengatiko erantzukizuna», bi kapitulutan banatzen da.

26. Lehen kapituluak ingurumenaren alorreko legezkotasunaren berrezarpena erregulatzen du, 96. artikulutik 100. artikulura. 96. artikuluak baimenik, lizentziarik edo aurretiazko komunikaziorik gabeko jarduerak jorratzen ditu. 97. artikuluak, ez-betetzeen edo akatsen zuzenketa. 98. artikuluak, jarduerak bertan behera uztea. 99. artikuluak, ingurumenaren alorreko legezkotasuna berrezartzeko prozedura, eta 100. artikuluak, ingurumenaren alorreko legezkotasuna berrezartzeko neurrien derrigorrezko aplikazioa.

27. Titulu honetako II. kapituluak ingurumen-kalte adierazgarrien erantzukizuna erregulatzen du 101. eta 102. artikuluetan. Ingurumen-kalte adierazgarrien eta berehalako mehatxuaren erantzukizuna jorratzen du lehenak, eta eskumenen erregimena, bigarrenak.

28. Bederatzigarren tituluak «Ingurumenaren alorreko diziplina» izenekoak, 103. artikulutik 118.era artekoak hartzen ditu. Titulu horretan arau-hausteak (103. artikulua), arau-hauste motak (104. artikulua) eta preskripzioa (105. artikulua) arautzen dira. Zehapenak (106. artikulua), zehapenen mailaketa (107. artikulua). Konfiskazioa (108. artikulua). Zehapenen preskripzioa (109. artikulua). Zehatzeko ahalmenaren eskumenak (110. artikulua). Behin-behineko neurriak (111. artikulua). Lehengoratzeko obligazioa eta kalte-ordaina (112. artikulua). Isun hertsatzaileak eta egikaritze subsidiarioa (113. artikulua). Kontratatzeko debekua (114. artikulua). Zehapen-prozedura (115. artikulua). Ebazpen zehatzaileen argitalpena (116. artikulua), ingurumenaren alorreko ordezko prestazioa (117. artikulua) eta diruzko zehapenen norakoa (118. artikulua).

29. Xedapen gehigarri bakarrak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek behar beste baliabide material eta giza baliabide edukiko dutela zehazten du, lege honetan finkatutako helburuak beteko direla bermatzeko.

30. Lehenengo xedapen iragankorrak abian diren prozedurak jorratzen ditu.

31. Bigarren xedapen iragankorrak, dauden instalazioak.

32. Xedapen indargabetzailearen bidez, indargabetuta geratzen da 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra, baita legean xedatutakoaren aurka egiten duten, kontrajarriak diren edo bateraezinak diren maila bereko edo maila txikiagoko xedapen guztiak ere.

33. Azken xedapenetatik lehenengoak Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde komunen eta Foru-organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 15eko 27/1983 Legearen (LHL) 7.c).6 artikulua aldatzen du.

34. Azken xedapenetatik bigarrenak Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen 7.4 artikulua aldatzen du.

35. Azken xedapenetatik hirugarrenak Uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren bitartez onartutako Uren Legearen testu bateginean finkatutako araubidera egokitzea lantzen du.

36. Azken xedapenetatik laugarrenak, aldiz, ekainaren 23ko Uraren 1/2006 Legean finkatutako araubidera egokitzea.

37. Azken xedapenetatik bosgarrenak arauak emateko gaikuntza bat jasotzen du, eranskinak aldatzeko.

38. Azken xedapenetatik seigarrena araua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean indarrean jartzeari buruzkoa da.

39. Eranskinei dagokienez, I.A eranskinak ingurumen-baimen integratua behar duten instalazioak jorratzen ditu. I.B eranskinak ingurumen-baimen bateratua behar duten instalazioak eta jarduerak zehazten ditu. 1.C eranskinean, sailkatutako jarduerarako lizentzia behar duten jarduerak eta instalazioak zehazten dira. I.D eranskinak jardueraren aurretiazko komunikazioa behar duten jarduera eta instalazio sailkatuak zehazten ditu, eta I.E eranskinak, jardueren edo instalazioen aldaketa jakin bat funtsezkotzat hartzeko irizpideak jasotzen ditu.

40. II.A eranskinak ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta behar duten planak eta programak zehazten ditu. II.B eranskinak ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua behar duten planak eta programak zehazten ditu. II.C eranskinak ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua igaro duten planek eta programek ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta behar dutela zehazteko irizpideak jasotzen ditu. II.D eranskinak ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta behar duten proiektuak zehazten ditu. II.E eranskinak ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua behar duten proiektuak zehazten ditu. II. F eranskinak ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua igaro duten proiektuek ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta behar dutela zehazteko irizpideak jasotzen ditu, eta II.G eranskinak, ingurumen-ebaluazioaren ondoriozko definizioak.

BATZORDEAREN ESKU-HARTZEA

41. Irizpen hau Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1. a) artikuluarekin bat eman da; artikulu horrek Batzordearen kontsulta-funtzioaren eremutzat jotzen ditu legearen aurreproiektuak, edozein dela ere haien arloa eta xedea, betiere ez badaude biltzen dituen salbuespenen barruan sartuta, eta honako hau ez da horietako bat.

LANKETA-PROZESUA

42. Batzorde honek xedapen orokorrak prestatzeko prozedura aztertu duen guztietan, prozedurari dagokionez, funtsean, irizpide material bati jarraitzen zaiola ikusi da; ondorioz, prozeduraren azterketa egiteko, funtsa betetzen den egiaztatuko da, ez forma eta erritua soilik betetzen diren.

43. Lege-aurreproiektuen kasuan, baieztapen hori are garrantzitsuagoa da, hauxe delako legeak emateko eta arauak emateko ahalmenen arteko funtsezko aldea (azterketaren funtsa baldintzatzen duena): [«legegileak ez du Konstituzioa betearazten; aitzitik, Zuzenbidea sortzen du, askatasunez sortu ere, Konstituzioak eskainitako esparruaren barruan. Arauak emateko ahala baliatzean, ordea, "Konstituzioaren eta legeen arabera" (EK, 97. artikulua) jarduten du (Konstituzio Auzitegiaren 209/1987 Epaia, abenduaren 22koa, besteak beste). non eta Espainiako Konstituzioak, Euskal Herriko Autonomia Estatutuak, nahiz, zenbaitetan, lege organikoek ez duten xedatzen berariazko izapideren bat —egiaz, aparteko kasuak dira halakoak gure ordenamenduan—»].

44. Legebiltzarrean garatzen da bere osotasunean legegintzako prozedura, salbu eta suposizio espezifiko batzuetan; hain zuzen, Espainiako Konstituzioan (EK), Euskal Herriko Autonomia Estatutuan (EHAE) nahiz, zenbaitetan, lege organikoetan, horretarako baldintzak ezartzen direnean. Betebehar bakarra hau da: Legebiltzarrak bere iritzia emateko behar dituen aurrekariak eranstea: gutxienez, memoria orokorra, finantzaketa-eranskina eta kontrol ekonomikoko txostena —aurrekontuari karga ekartzen badiote—; aholkularitza-organo honen irizpena eta aplikagarri den legediak agindutako gainerako txostenak (Gobernuaren Legearen 57. artikulua eta Ganberaren Araudiaren 133.2 artikulua).

45. Eratuko den produktua lege bat denean, gobernuak hura prestatzean jarraitzen duen bidea aztertu egiten da, ez bere balioan eragina izan dezaketen akatsak saihesteko; baizik eta Legebiltzarrera argudiaturiko –gogoeta baten ondorioz hartutako erabakiaren ondotik– eta zentzuzko –gure ordenamenduko jarraibide axiologikoekin bat etorriz– araudi bat helarazten dela konprobatzeko.

46. Adierazitako parametroekin aztertzen da, jarraian, aurreproiektuaren testua egiteko prozedura, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legean xedatzen denaren arabera.

47. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko otsailaren 13ko Aginduaren bidez, Euskadiko Ingurumen Administrazio Legearen aurreproiektua egiteko prozedura hastea onartu zen (aurrerantzean, aurreproiektua).

48. Data berean eta araudi-testuaren zirriborroa idatzi aurretik, herritarrei kontsulta bat egitea planteatu zen, honen inguruko informazioarekin: a) ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak; b) onesteko beharra eta egokitasuna; c) arauaren xedeak eta d) balizko beste arauketa-aukera batzuk eta arauzkoak ez diren bestelako aukerak. Kontsulta hori 2018ko otsailaren 13an hasi zen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoaren Iragarki-oholean iragarki bat jarriz eman zen jakitera.

49. 2018ko maiatzaren 25ean, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailburuaren Agindua eman zen, zeinaren bidez aurreproiektuaren testua aurretiaz onestea erabaki zen.

I **AURREPROIEKTUAREN JUSTIFIKAZIO- ETA EKONOMIA-MEMORIA**

50. Aurreproiektuaz gain, justifikazio- eta ekonomia-memoria bat ere badago; hala ere, aurreproiektuaren ondorio ekonomikoak aztertzeko egina dago, funtsean.

51. Azalpen-memoriak aintzat hartu beharko lituzke honako hauek: araua aplikatuko den errealitatearen ezaugarriak, arautzen den sektore zehatzarentzako helburuak, horiek betetzeko aukerak edo aukeratutako konponbideen zergatiak. Hala ere, hainbat hutsune aurkezten ditu justifikazioak, eta, aurrerago, alegazioetan eta txostenetan planteatzen diren gaiak aztertzean, sail sustatzaileak aztertu eta arrazoitu ditu.

52. Dena den, memoria horretan, aurreproiektuaren berritasunak aurreratzen dira, eta honako kontu hauek aipatzen:

a) «Ingurumenerako Batzordea» sortzea, eta, horren bidez, egungo «Ingurumenerako Aholku Kontseilua» eta egungo «Euskal Herriko Ingurugiro Batzordea» batzorde bakar batean bateratzea.

b) Ingurumenaren gaineko informazioa eta ezagutza hobetzea. Adibidez, «INGURUNET» sortu da, EAEko Ingurumen Informaziorako Sistema.

c) Administrazioak ingurumenean eragina duten jardueretan esku hartzeko sistema berri bat aurreikusten da.

d) Araubide juridiko berria sortu da ingurumenean esku hartzeko: ingurumen-baimen bakarrak –ingurumen-baimen integratuaren, jarduera sailkatuaren lizentziaren eta jarduera sailkatuaren aurretiko jakinarazpenarekin batera– ingurumenean esku hartzeko alternatiben esparrua osatzen du, eta beharrezkoa da hainbat jarduera abian jartzeko, horiek ingurumenean duten eragin potentzial eta errealaren arabera.

e) Deuseztatu egiten da legeak jarduera sailkatuaren lizentzia lortzeko ezartzen duen betebeharra, ingurumen-baimen integratua edo ingurumen-baimen bakarra dagoeneko lortu duten jarduerak abiaraziko diren kasuetan.

f) Jarduera sailkatuaren lizentziara eta jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenera zabaltzen dira ingurumen-baimenak «funtsean aldatzeko» eta «funtsean ez aldatzeko» irizpideak, ingurumen-baimen integratua eta ingurumen-baimen bakarra tratatzen diren antzera.

g) Ingurumen-ebaluazioari dagokionez, interesa duen publikoaren eta publiko orokorraren partaidetza sustatu nahi da ingurumen-ebaluazioko prozeduretan. Partaidetza hori bermatze aldera, «ingurumen-ebaluazioko prozeduretan interesa duten pertsonen erregistroa» sortzea aurreikusi da.

h) Ingurumen-organoaren adierazpenak, txosten estrategikoak eta ingurumen-inpaktuari buruzko txostenak lotesleak dira Euskadin, erabakitzaileak izan beharrean, Estatuko oinarrizko araudiak zehazten duen bezala.

i) Aurreproiektuan planteatzen diren sustapen-jardueren artean, hauek nabarmentzen dira:

- Parte-hartzearen sustapena «ingurumen-kudeaketako eta -ikuskaritzako Europar Batasuneko sisteman » (EMAS).

- «Erosketa eta kontratazio publiko berdea»; administrazio publikoetako eta sektore publikoko gainerako erakundeetako kontratazio-organoek obra-, zerbitzu- eta hornidura-kontratuetan jarraitu beharreko betebeharrak adierazten dira, eta erabili beharreko azpiproduktuen, bigarren mailako lehengaien, material birziklatuen edo berrerabiltzeko xedean prestatzeko prozesuetatik eratorrien gutxieneko portzentajeak zehazten dira.

- Ingurumen-fiskalitatea: aurreproiektuak zehazten du Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek «betebeharra» dutela bildutako diru

sarrerekin, «ingurumen-fiskalitateko» neurriak aplikatuz, aurrekontu-sail bat osatzeko, nork bere hurrengo urteko Aurrekontu Orokorretan, ingurumenaren alorrean eskumenak dituen organoak zehaztutako helburuak lortzera bideratua.

j) Diziplina-araubideari dagokionez, neurri hauek planteatzen dira:

- Arau-hauste «oso astunak» ugaritzea.
- Zehapen bidezko diru-sarreren izaera finalista.
- «Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumenaren alorreko arauak urratzen dituzten pertsonen Erregistroa» sortzea.

53. Analisi ekonomikoak, hala ere, asmo handiagoak ditu, eta araua zer errealitatera aplikatzen den ezagutzeko aukera ematen du. Horretarako, hainbat datu ematen ditu kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuen arloan, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren arloan eta hondakinen eta isurien arloan egin diren jarduketen inguruan.

54. Era berean, ahalegin garrantzitsua ikus daiteke arauak hartzaileengan –administrazioak eta partikularrak– izango dituen ondorioak zehazten saiatzeko; izan ere, aintzat hartzen edo deuseztatzen diren kargak aztertzen dira, eta informazio hori termino ekonomiko betiere zenbatetsietan azaltzen da. Zalantzarik gabe, informazio horren bidez, arauak izango duen eragina ebaluatzeko betebeharra bete da, memoriak berak adierazten duen bezala; izan ere, arauak enpresak sortzearen, abian jartzearen eta haien funtzionamenduaren gainean izango duen eragina aztertzen da (ekainaren 28ko 16/2012 Legeak, Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntzekoak, aurreikusten duen bezala).

55. Errekonozimendu horrekin batera, alde batetik, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak txostenean adierazitako nahigabea aipatu behar dugu; izan ere, organo hori ez dator bat memoriak tokiko eremuan egiten duen balorazioarekin. Hala ere, txosten hori aztertzean, berriz itzuliko gara kontu horretara; izan ere, desadostasun nahiko garrantzitsuak planteatzen ditu txostenak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen esparruan toki-erakundeei ematen zaien trataerari dagokionez.

56. Bestalde, nabarmentzekoa da sail sustatzaileak behar argia duela bere bitartekoak areagotzeko, batez ere giza baliabideak, autonomia-erkidegoko ingurumen-organoak bete beharko dituen funtzio berriei aurre egin ahal izateko.

57. Aurreproiektua aurretik onetsi ondoren, testua aberastu egin da jasotako alegazioek eta jasotako txostenek (eta prozedurara gehitutakoek) egindako ekarpenekin.

II ENTZUNALDI-IZAPIDEA, ETA JENDAURREKO INFORMAZIOARENA, BESTELAKO ADMINISTRAZIOEN PARTE-HARTZEARENA ETA KONTSULTARENA

58. Aurreproiektua nahitaezko entzunaldi-izapideen, jendaurreko informazioaren eta bestelako administrazioen parte-hartzearen eta kontsulta-izapideen mende jarri da.

59. Herritarrei oro har zuzendutako jendaurreko informazioaren izapidea EHAAren bidez iragarri zen 2018ko ekainaren 4an.

60. Aldi berean, banakako entzunaldi-izapide bat ireki zen, eta arauaren eraginpean dauden interes kolektiboak babesten dituzten erakunde askorengana heldu zen (ez dugu xehetasunik emango, gehiegi luzatuko ginateke-eta). Nahikoa da hauek aipatzearekin: elkarte ekologistak, sindikatuak, patronalak, elkargo profesionalak, merkataritza-ganberak, klusterrak, udal-partzuergoak, etab.

61. Era berean, aurreikusitako araudiaren eragin zuzenaren pean gera daitezkeen beste administrazio batzuei ere eman zaie parte hartzeko aukera: Estatuko Administrazio Orokorra, Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren eta Konfederazio Hidrografikoen bitartez, hiru foru-aldundiak eta Euskadiko udalak, EUDELen bitartez.

62. Kontuan hartuta arauketak dagozkien eskumen-eremuetan duen eragina, arauketa-ekimena EAEko administrazio orokorreko sail batzuen esku jarri zen xedapen orokorren izapidetze elektronikorako tresnaren (Tramitagune) bidez, zegokien azterketa egin zezaten eta, hala balegokio, ekarpenak egiteko.

63. Jarduketa eta izapide horien guztien berri eman da, bai gobernuaren egoitza elektronikoan eta Irekian, bai sailaren webgunean: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ingurumena/. Hori guztia, esaten den bezala, «ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, parte-hartze publikorako eta justiziarako sarbideko eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legearen informazio-printzipioak betez».

64. Era berean, memoriak jakinarazi egiten du sail sustatzaileak, herritarrek uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 16. artikuluan ezarritako ingurumenarekin lotutako arauak egiteko prozesuan parte hartzeko duten eskubidea betetzen dela sustatzeko eta errazteko, zuzeneko prozesu parte-hartzaile bat burutu duela, hain zuzen ere, neurri handiagoan ezagutzera emateko araudi-proiektua, gehien ukitutako eragileak dinamizatzeko eta horien iritzia eta hobekuntza-proposamenak modu zuzenagoan eskuratzeko:

Prozesu horretan, bost partaidetza-saio egin dira hiru lurralde historikoetan, honako hauei bideratuta: enpresei, klusterrei, enpresa-elkarteei eta nekazaritza-sindikatuei; elkargo profesionalei, teknologia-zentroei eta unibertsitateei (enpresen foroa); Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuei, erakunde publikoei eta foru-aldundiei (foru-aldundien foroa); eta, azkenik, udalei (udalen foroa). Hala, horren guztiaren berri eman zen dokumentu honetan: «Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Lege-aurreproiektuaren parte-hartze prozesua. Azken Laburpen Txostena. 2018ko uztaila». Bertan, parte-hartze prozesuaren inguruabarrak dokumentatu egiten dira modu sistematizatu eta labur batean.

65. Prozesu horrek guztiak, gizarteko elementu eta sektore guztiek arlo honetan duten sentsibilizazioa dela-eta, batzorde honen balorazio positiboa merezi du.

66. Herritarrei, eragile desberdinei eta ukitutako erakundeei irekitako parte-hartze izapide horien ondorioz, honako pertsona eta erakunde interesdun hauek bidalitako hobekuntza-proposamen, ohar eta alegazioak jaso dira:

- ACLIMA/Basque Environment Cluster.
- Astigarragako Udala.
- Bermeoko Udala.
- Bilboko Udala.
- Donostiako Udala.
- Hernaniko Udala.
- Pasaiako Udala.
- BASQUEGUR.
- Bizkaiko Abokatutzaren Elkargoa/ICAB.
- Jabetzaren Erregistratzaileen eta Merkataritza Erregistratzaileen Elkargoa.
- Geologoen Elkargo Ofiziala.
- Euskadiko Industria Ingeniarien Elkargo Ofiziala.
- CONFEBASK.

- José Alberto Arrate Sauto jauna.
- M. S. jauna.
- José Mariano Travel Cotrina jauna.
- Trantsizio Ekologikorako Ministerioa.
- Arabako Foru Aldundia-Nekazaritza Saila.
- Arabako Foru Aldundia-Ingurumen eta Hirigintza Saila.
- Bizkaiko Foru Aldundia-Azpiegituren Zuzendaritza.
- Bizkaiko Foru Aldundia-Ingurumen Zuzendaritza.
- Gipuzkoako Foru Aldundia.
- ENBA - Euskal Nekazarien Batasuna.
- EHNE - Euskal Herriko Nekazarien Elkartea.
- EUSKAL ARIDO.
- MERCADONA SA
- MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL SA
- IBERDROLA DISTRIB. ELEC SAU
- IHOBE.
- JAIZKIBEL GEONATURE.
- HAZI.
- AZTI.
- HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU.
- Enpresen Foroko partaideak.
- Udalen Foroko partaideak.
- Foru Aldundien Foroko partaideak.

67. Autonomia-erkidegoko Administrazio Orokorraren barne-eremuan, hainbat ekarpen egin dituzte Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, Ogasun Sailak eta Ekonomia eta Osasun Sailak.

68. Era berean, 2018ko abenduaren 28an, hau da, alegazioen epea hasi eta sei hilabete baino gehiago igaro ondoren, Arabako Foru Aldundiak paper-formatuan igorri zuen 2018ko uztailaren 4an eta 12an egindako alegazioen alegazio osagarriei buruzko dokumentu bat. Hala ere, epez kanpo igorri zenez, ez zen ez aztertu, ez alegazioen erantzun-txostenera gehitu.

69. 2019ko apirilaren 5ean, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak aurreproiektuaren balorazio-txostena igorri zuen. Bertan, hainbat zehaztasunekin, aldeko iritzia ematen zuen, eta aurreproiektuaren xedapenek arkitektoaren lan-jardunean eragin zuzen altua dutela adierazten zen. Batzorde honek, hala ere, baieztapen hauek irizpenaren mende jarri zen testuan eraginik izan ez zutela ulertzen du.

70. Garaiz egindako alegazio eta ekarpen ugariak aztertu ziren, eta 2019ko urtarrilaren 7ko lege-aurreproiektuaren instrukzio-fasean zehar jasotako alegazioei eta hobekuntza-proposamenei erantzuteko txostena idatzi zen. Txosten luze horretan, jasotako alegazio guztiak aztertzen dira, erabat edo zati batean kontuan hartu diren eta aurreproiektuan txertatu direnak nahiz baztertuak izan direnak. Kasu guztietan, modu arrazoituan.

71. Aipatutako alegazioen erantzun-txostenaren berri eman zitzaien alegazioak aurkeztu zituzten interesdunei. Gainera, publiko orokorraren eskura jarri zen Eusko Jaurlaritzaren Gardentasun eta Herritarren Parte-hartzerako arloaren euskal araudiaren atarian (Legegunea), aldatutako lege-aurreproiektuaren testuarekin batera.

III NAHITAEZKO TXOSTENAK

72. Aurreproiektua xedetzat izan dute hainbat ikuspegitik egindako nahitaezko hainbat txostenek; horrek, beraz, gaiaren konplexutasuna eta zeharkako izaera direla-eta, are gehiago bermatzen du arauan txertatzen diren aukerak egokiak izango direla.

73. Ingurumenaren eremu espezifikoan, 2018ko abenduaren 6an, Euskal Herriko Ingurugiro Batzordeak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenerako Aholku Kontseiluak aurreproiektuaren aldeko irizpena eman zuten. Era berean, 2019ko urtarrilaren 28an, ekimenaren aldeko iritzia eman zuen Naturzaintza/Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenerako Aholku Batzordeak.

74. Instrukzio-fase honetan, nahitaezko txostenak eskatu zaizkie honako hauei (bakoitzaren ikuspegitik): Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Zerbitzuen Zuzendaritzari (txosten juridikoa); Emakunderi; Kontratazio Publikoko Aholku Batzordeari; Ogasun eta Ekonomia Saileko Zerga-administrazioko Zuzendaritzari; Lehiaren Euskal Agintaritzari; Kultura eta Hizkuntza-politikako Saileko Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzari eta Gobernantza Publiko eta Autogobernuko Saileko Funtzio Publikoko Zuzendaritzari. Ondoren, txostenak igorri egin dira.

75. Horrez gain, EAEko Uraren Kontseiluaren txostena eskatu da; hala ere, txosten hori ez zen jaso gainerako txostenak aztertzeko eta azterketaren emaitzak jasotzen zituen memoria egiteko epearen barnean.

76. Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen txostena eskatu eta igorri da, eta atal espezifiko batean aztertuko dugu, horren inguruan arazo espezifikoak sortu ziren-eta. Atal honetan, txostena jaso ondoren, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak eskatuta, bilera bat egin zela baino ez dugu aipatuko. Bilera horretara honako hauek agertu ziren: Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeko bi ordezkari, EUDELeko langile bat eta aholkulari pribatu bat. Idatzitako aktan, alderdien jarrerak bat etorri ez zirela jasotzen da. Ondoren, sail sustatzaileak xehetasunez aztertu ditu ondorioak eta aurreproiektuarekiko dauden desadostasunak; Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen txostenean azaltzen dira horiek, prozedurari buruzko memorian.

77. Euskal Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak 4/19 irizpena igorri du, aurreproiektuari buruzkoa. Bertan, oro har, aldeko balorazioa egiten da, aipatzen dituen kontu espezifikoen kalterik gabe.

78. 2019ko maiatzaren 14an, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena gehitzen da, izapidetutako espedientean txertatzeko. Hori egiteko, bigarren txosten bat eskatu zaio Zerga Administrazioari, eta hori ere espedientean txertatu da.

79. Era berean, aipatutako bulegoak, alde batetik, Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren txosten berri bat eskuratu du; azken organo horrek, ondoren, hainbat prozedura egin ditu, kasuan kasu izapidetu direnak, iritzi berri bat igortzeko. Bestalde, Aurrekontu Zuzendaritzaren txosten bat eskatu du, barne-kontrolerako jarduketa zuzentzen duten arauetan xedatzen denaren babesarekin. Zuzendaritzak 2019ko apirilaren 2an igorri du, eta proiektuaren espedientean txertatu da.

80. Prozesu horretan guztian, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak eskaini zezakeen ikuspegia baino ez da falta, hots, arau-hausteen batzordeak inposatutako zehapenen eta horien erantzuleen identitatearen publikotasunari buruzko ikuspegia. Kasu honetan,

sail sustatzaileak neurria arrazoitu du, txosten juridikotik planteatzen diren zalantzei erantzute aldera. Hala, neurria prebentiboa dela aipatu du, baita antzeko kasuak daudela ere, adibidez, zergen edo hondakinen arloan.

81. Txosten horien guztien oharrak, iradokizunak eta hobekuntza-proposamenak behar bezala aztertu dira, eta horiek onetsi eta testuan txertatu izana edo horiek baztertu izana arrazoitu da kasu bakoitzean.

82. Datu nabarmen bezala, honako hau aipatzen du sail sustatzaileak berak: prozesu parte-hartzailearen eta jasotako alegazioen eta oharren azterketaren ondorioz eta ukitutako sektoreen adostasun-maila ahalik eta handiena lortze aldera, aldatu egin da, irismen handiagoarekin edo txikiagoarekin, artikuluen %60 inguru, baita hasiera batean idatzitako eranskin guztiak ere.

83. Aldaketa nabarmenen artean, legegintza-teknikako arrazoiengatik, proposamena egin duen organoak erabaki du Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen aldaketa planteatzen zuen azken xedapena ezabatzea.

IV EUSKADIKO TOKIKO GOBERNUEN BATZORDEAREN TXOSTENA

84. Aurreratu dugun bezala, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak igorritako txostenak, haren xedeak eta ondorioek azterketa espezifikoa merezi dute.

85. Txostena, hasieran adierazten denez, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 91. artikuluan xedatzen denaren arabera sailak egiten duen eskaeraren ondorio da; izan ere, artikulu horrek dioenez, udalerrien eskumen propioei berariaz eragiten dieten xedapen orokorren aurreproiektu edo proiektuek Euskadiko Tokiko Gobernu Batzordearen aurretiazko eta nahitaezko txostena beharko dute.

86. Txostenak, hala ere, lege-aurreproiektu batez ari garenez, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 90. artikulua bereziki kontuan hartu behar dela ohartarazten du; «izan ere, Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen funtzionamendua aurreikusten du horrek, alerta goiztiarreko organo gisa jarduten duenean, eta haren erregulazioa bereziki garrantzitsua da, Batzorde honek aztertu beharreko araudia, kasu honetan, lege-aurreproiektu bat delako, eta, gainera, horretan jorratzen den gaiak udal-autonomiaren eremuari eta toki-erakunde horien berezko eskumenei bereziki eragiten dielako».

87. Lehen epigrafeak Tokiko Gobernuen Batzordearen rolean eta funtzioan jartzen du arreta, lege-aurreproiektuekin loturik, eta kasu honen garrantzia nabarmentzen du, bere iritziaren mende jartzen den lehen aurreproiektua delako.

88. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 88.1.a) eta 90. artikuluek aztertzen dute alerta goiztiarreko organo gisa jarduteko aukera. Jarduera hori honako hauek ezaugarritzen dute: esku-hartze horren mende jarri behar diren ekimenen maila eta esku-hartzearen helburua. Helburua, halaber, «toki-autonomiari lerma edo urraketarik eragiten dion» ondorioztatzera bideratzen da.

89. Zera gehitzen du: «Gainera, legearen aurreproiektuak eskumen propioak esleitzen badizkie udalerriei, txostenak argi adierazi beharko du esparru material bakoitzari dagozkion ahalmenak edo ahalak egoki esleitu diren, lege honen 17. artikuluko lehen apartatuan xedatutakoari jarraituz».

90. Bada, Batzorde Juridiko honen iritzian, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen barne-koherentziaren arabera, baita legearen 1. artikuluan zehazten den helburuaren arabera ere, «udal-eskumen propioei soilik » adierazpenak ez du alerta goiztiarraren mekanismotik baztertzen sektore bat arautzen duen eta –kasu honetan bezala– autonomia-erkidegoko administrazio-mailen eskumenak arautzen dituen araudi sektoriala.

91. Eskuartean dugun aurreproiektua, beraz, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 90.1 artikuluaren aplikazio-eremuan kokatzen da; izan ere, modu esanguratsuan eragiten dio legearen 17.1 artikuluan aurreikusten diren udalerrien berezko eskumenetako bati. Hain zuzen, 8. apartatuan xedatzen denari: ingurumenaren babesa eta garapen jasangarria modu osagarrian antolatzea, sustatzea, kudeatzea eta babestea, hiriguneetan kutsadura akustikoa, argi-kutsadura eta airearen kutsaduraren aurkako babesa barne hartuta.

92. Testuinguru horretan, organo sustatzaileak 90. artikuluko 3., 4. eta 5. lerrokadetan xedatzen den jarduketa jarraitu behar zukeen:

> 3. Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak aurkeztutako proposamen guztiak edo batzuk onartzen ez badira, aldebiko batzorde bat elkartzeko deia egingo da. Batzorde hori arau-proposamena egin duen administrazio sustatzaileak eta Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeko hiru kidek osatuko dute.
>
> 4. Bi ordezkaritzak ados jartzen ez badira eta lehenengo lerrokadan xedatutako txostena egiteko eskatu zenetik hilabete igaro bada, organo sustatzaileak prozedura tramitatzen jarraituko du, eta txosten arrazoitu bat egin beharko du Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak planteatutako aldaketa-proposamenak zergatik ezetsi diren azaltzeko. Txostenean berariaz adierazi beharko du ez diola toki-autonomiari eragiten, edo, eraginez gero, zenbateraino eragiten dion.

> 5. Legeen edo legegintzako dekretuen aurreproiektuen kasuan, proiektu gisa onartutakoan, Legebiltzarrera bidaltzen den testuarekin batera aldaketen ezespena justifikatzeko txostena eta Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordeak egindako bilerako edo bileretako aktak bidali beharko dira.

93. Organo sustatzaileak une oro adierazi du Tokiko Gobernuen Batzordearen esku-hartzea Toki Erakundeei buruzko Legearen 88.1.b) eta 91. artikuluen esparruan kokatzen dela, eta, beraz, ez ditu formalki jarraitu alerta goiztiarraren sisteman arazoak ebazteko urratsak.

94. Hala ere, sistema horren jarraibide nagusiei jarraitu zaie materialki; izan ere: I) bilera bat egin zen (deialdirik eta gai-zerrendarik gabe); bertan, alde batetik, Ingurumen sailburuordeak, Ingurumen Administrazioaren zuzendariak eta lanketa-prozeduraren letradu instruktoreak parte hartu zuten eta, Tokiko Gobernuen Batzordearen aldetik, bi kidek, EUDELeko enplegatu batek eta aholkulari pribatu batek. Bilera horretan ez zen inolako akordiorik lortu eta ez zen aurreproiektuaren inolako aldaketarik egin; eta II) izapidetzeari buruzko memorian atal espezifiko bat txertatu da Tokiko Gobernuen Batzordeak planteatutako proposamenak zergatik baztertu diren arrazoitzeko (gainera, toki-autonomiari ez eragitea berariaz onestea da).

95. Azkenik, eta aurreko gogoeten kalterik gabe, gogoratu beharra dugu, alde batetik, Batzorde Juridiko honek lanketa-prozeduraren inguruan duen ikuspegi batez ere materiala –hau da, funtsa betetzen duela egiaztatzea, eta ez bakarrik forma eta erritua– .

96. Bestalde, Legebiltzarrak onar ditzan igorri behar diren arau-aurreproiektuen lanketa-prozeduretan izapideek eta txostenek konnotazio desberdina dutela ere nabarmendu behar dugu, prozeduraren analisiaren laburpenean aipatu dugun bezala.

97. Hori esanda, ez gara sartuko Tokiko Gobernuen Batzordearen txostenean planteatzen diren kontuen mamian; izan ere, analisi hori eskumenen analisian kokatu beharko litzateke.

ESKUMEN-ALDERDIAK

98. Eskumenak mugatzeko orduan, beharrezkoa da Konstituzioaren (EK) 45. artikuluan jasotzen den politika ekonomiko eta sozialaren printzipio gidaritik abiatzea. Horren arabera, botere publikoak behartuta daude ingurumena babestu eta lehengoratzera.

99. Ingurumenaren babesa, halaber, Europar Batasunak bere gain hartzen duen jarduketa-printzipio bat da; Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 37. artikuluan

jasotzen da, eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 11., 191. eta 193. artikuluetan garatzen.

100. Konstituzio Auzitegiak 102/1995 epaian (KAE), ekainaren 26koan, adierazi zuen Konstituzioak ez duela definitzen ingurumena, baina 45. artikuluan ingurumenaren elementutzat hartzen dituela baliabide naturalak, horiek definitzen edo zerrendatzen ez dituen arren.

101. Horrela, «ingurumena» kontzeptuak, ikuspegi juridiko batetik, barnean hartuko luke baliabide naturalak eta horiek sortu, garatu eta hiltzen diren euskarri fisikoa. Eta zera gehitzen du:

> Flora eta fauna, animaliak eta begetalak edo landareak, mineralak, Naturak letra larriekin dituen hiru «erresuma» klasikoak, lurzoruak eta urak, alegia, naturaguneak eskaintzen dituen eremuak jasoko lirateke. Hala ere, gure ordenamendu juridikoan 1916an agertu zenetik, beste elementu batzuk jaso ziren, natura ez direnak, baizik eta Historia, monumentuak direnak; baita paisaia ere, zeina ez baita errealitate objektibo bat, baizik eta ikusteko modu bat, garai eta kultura bakoitzean ezberdina izaten dena.
>
> (…) Alegia, horren osagai dinamikoa kontuan hartuta, «sistema» edo «multzo» ideia, agerikoa da ingurumena ezin dela mugatu baliabide naturalen eta haien oinarri fisikoaren multzora edo gainjarpenera. Aitzitik, elementu horien guztien arteko harremanen sare konplexua da, eta beren kabuz eta aurrez existitzen diren arren, haien arteko harremanak esanahi transzendentea ematen die, bakoitzaren esanahitik harago. Egiturazko kontzeptu bat da, eta faktoreen oreka da, estatikoa nahiz dinamikoa, haren ideia nagusia, hala espazioan nola denboran.

102. Ingurumenaren ikusmolde zabal horren esparruan, txostena egin zaion araua agintzeko gaitasuna ematen duen eskumen-titulu nagusi bat dago, hots, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra funtsatu zen berbera: Estatuaren oinarrizko legeria lege bidez garatu eta bere lurraldean betearazteko eskumena «ingurumen eta ekologian», EHAEren 11.1.a) artikuluan jasotzen den bezala. Eskumen hori behar bezala antolatu behar da estatukoekin eta lurralde historikoetakoekin eta udaletakoekin.

I **ESTATUAREN ESKUMENAK**

103. Ingurumenaren arloko eskumenen irismena Konstituzio Auzitegiaren hainbat epaiek zehaztu eta mugatu dute (besteak beste, 102/1995 eta 306/2000). Era berean, batzorde

honek aztertu du hainbat irizpenetan, adibidez hauetan: 257/2008, 123/2009, 114/2003, 122/2008, 14 eta 270/2011 edo 226/2012.

104. Bertan ingurumen-arloko eskumen-banaketaren irismenari buruz adierazi zenari dagokionez (Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko banaketa), nabarmentzekoa da ingurumenaren gaia konplexua eta aldeaniztuna dela, ordenamendu juridikoaren askotariko sektoreei eragiten baitie [KAE156/1995 (4. ZO)]; eta, Konstituzio Auzitegiaren 102/1995 Epaiak (3. ZO) agerian utzi duen bezala, gainera, zaildu egiten dute, praktikan, eskumenak modu baketsu eta funtzionalean banatzea.

105. Era berean, Konstituzio Auzitegiaren 170/1989 eta aipatutako 102/1995 epaiei loturik, honako hau gogoratzen da: «Ordenamendu-funtzioa betetzen du, nahitaez errespetatu behar diren gutxienekoak ezarriz, baina aukera eman ahal die arloan eskumena duten autonomia-erkidegoei babes-maila altuagoak ezartzeko (...). Oinarrizko babesa minimoa da hemen, ingurumena babesteko ezinbesteko eredua, baina muin horretatik kanpo hura osatzen eta garatzen duten arauak sartzen dira, eta arau multzo hori inolako arrakalarik utzi gabe bete beharko da. Gaia mailaka geruzatzeaz ari gara, beraz, eta Estatuari dagokion mailak nahikoa eta homogeneoa behar du, baina, era berean, hobetzeko modukoa, autonomia-erkidego bakoitzaren inguruabarretara egokitu ahal izateko» (doktrina hori berrestera etorri dira gero, besteak beste, Konstituzio Auzitegiaren 13/1998, 90/2000 eta 306/2000 epaiak).

106. Esparru orokor horretan, Estatuko legegileari dagokio ingurumena babesteko politika global bat taxutzea barne-eremuan (EKren 149.1.23 artikulua), minimoen ordenazio baten bidez, baina autonomia-erkidegoei ingurumen-irizpide zorrotzagoak ezartzeko aukera emanez, jarduera jakin batean aritu ahal izateko aurre-baldintza gisa.

107. Berriagoa da 118/2017 epaia, urriaren 19koa, eta, bertan, Estatuko eskumenei buruzko tituluaren edukia eta irismena laburbiltzen dira berriz:

> a) Auzitegi honek ordena materialeko hainbat irizpide hartu ditu ingurumenaren arloko oinarrizko legeriaren bereizgarritzat. Horien funtsezko elementuak Konstituzio Auzitegiaren 101/2005 epaian sistematizatu ziren, apirilaren 20koan (KAErr 2005, 101), 5. oinarri juridikoan –azken epai hori Konstituzio Auzitegiaren maiatzaren 11ko 53/2017 epaian aipatzen da (KAErr 2017, 53), 4. OJ–, era honetan:
>
> «Hona hemen lehen irizpidea: "Ingurumenaren arloan, Estatuak oinarrizko legeria garatzeko erkidegoei nahitaez utzi behar dien tartea, beste esparruetan baino tarte txikiagoa bada ere, ezin da izan hain zehatza, Konstituzio Auzitegiaren 149/1991 Epaian (KAErr 1991, 149) [1 D OJ) *in fine*] esandakoaren aurka (...), ezen ingurumenaren arloan

eskumenak dituzten autonomia-erkidegoek ez baitute aukerarik izango lege-garapenik egiteko, eskumenok ezereztuta" (KAE 102/1995 (KAErr 1995, 102) , 8. OJ).

Bigarren irizpideak honela dio: "Oinarrizko alderdiak, Estatuak ingurumenaren arloan duen eskumenaren barnean daudenez, une oro errespetatu behar diren gutxienekoak dira; hala ere, tartea utzi behar zaie ingurumenaren arloan eskumenak dituzten autonomia-erkidegoei babes-maila handiagoak ezar ditzaten, Konstituzio Auzitegiaren 170/1989 epaian esan bezala (KAErr 1989, 170)." …

Kontuan hartu behar den hirugarren irizpideak... oinarrizko ingurumen-zuzentarauek izan dezaketen "zeharkako eraginaren" irismenarekin du zerikusia, ez lege-garapenaren arauei eta ingurumenaren arloan bertan arauak betearazteari dagokionez, baizik eta autonomia-erkidegoen sektore-eskumenei dagokienez, eskumen horiek gainjartzen direnean eta autonomia-erkidegoak zuzenean inplikatuta daudenean».

b) Bestalde, «azpimarratu dugunez, oinarrizkoa den horrek arlo honetan duen arauzko edukiak ez du esan nahi Estatuak ezin duenik beste era batera esku hartu. Esku-hartze horien artean, adibidez, eginkizun betearazleak daude, baina konponbide hori salbuespenekoa da, gutxitan erabiltzekoa: erkidegoaren eskumenak gauzatzeko adostasunik ez dagoenean, eskumenen gaineko auzia eragin duena erkidegoz gaindiko gaia denean, horren gaineko jarduketa publikoa banatu ezin denean eta, banatuta ere, lankidetza- edo koordinazio-mekanismoen bidez gauzatu ezin denean, eta, ondorioz, behar den homogeneotasuna titular bakar bat (ezinbestean, Estatua) egotearen bidez bakarrik lortu daitekeenean eta aldeen interes kontrajarriak harmonizatzeko gaitasuna duen erakunde supraordenatu batera jotzea ezinbestekoa denean, konpondu ezineko kalteen arrisku hurbila ahaztu gabe, premia-egoeran kokatzen baikaitu» (KAE 141/2016, uztailaren 21ekoa (KAErr 2016, 141), 6. OJ).

108. Jarduera sailkatuei dagokienez, 123/2009 Irizpenean gogora ekartzen dugu aipatutako ingurumen-azpigaiari dagozkion eskumenak EAEren eta Estatuaren artean banatzeari buruz emandako konstituzio-doktrina:

Ingurumen-arloko eskumen-banaketa –EHAAren 11.1 a) art. eta EKren 149.1.23 art.– honetarako bakarrik da erabakigarria: administrazioek ingurumena babesteko gauzatzen dituzten esku-hartzeetarako. Hau da, administrazioen egintzen xedea eta ondorioa ingurumena babestea edo ingurumenari eragindako kaltea lehengoratzea

denerako, esaterako, jarduera kalifikatuetarako baimena... (KAE 13/1998, 8. OJ, Konstituzio Auzitegiaren 101/2006 epaian gogorarazten dena, 4. OJ).

109. Bestalde, 172/2012 epaian, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren arloko eskumenak Estatuaren eta autonomia-erkidegoaren artean banatzeari dagokionez, urtarrilaren 22ko Konstituzio Auzitegiaren 13/1998 epaian ezarritakoa jorratzen dugu. Bertan, auziaren xedea honela azaltzen zen:

> Konstituzio-gatazkan aurkaratu egiten dira 1131/1988 Errege Dekretuaren artikuluak; horien arabera, Estatuko Administrazio Orokorrak ebaluatu dezake bere obren, instalazioen edo jardueren ingurumen-inpaktua, edota Estatuko administrazioaren esku-hartzearen mende dauden enpresek edo subjektu partikularrek sustatutako proiektuenak. Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzak adierazten duenez, bere lurraldean kokatzen diren proiektuak autonomia-erkidegoko administrazioak ebaluatu behar ditu, ingurumenari dagokionez. Beraz, hari dagokio proiektu guztien ingurumen-inpaktuaren adierazpena formulatzea, proiektuak onesteko edo baimentzeko eskumena Estatuko administrazioak duen arren. Era berean, autonomia-erkidegoak izendatuko du, bere xedapenen bidez, administrazio-agintaritzen artean zer ingurumen-organok bereganatuko duen inpaktuaren adierazpen hori, eta ez Estatuko Administrazio Orokorrak. Hori guztia, ingurumenari buruzko legegintzako eskumenen eta eskumen betearazleen bidez, hots, Autonomia Estatutuan jaso direnen bidez [EHAE 11.1, a) art.].

110. Epaitzatik baieztapen hau nabarmentzen dugu, harrigarria izateagatik:

> Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa ezin da ingurumenaren arloko betearazpentzat edo kudeaketatzat hartu... Ingurumen-arloko eskumen-banaketa –EHAAren 11.1 a) art. eta EKren 149.1.23 art.– honetarako bakarrik da erabakigarria: administrazioek ingurumena babesteko gauzatzen dituzten esku-hartzeetarako, hau da, administrazioen egintzen xedea eta ondorioa ingurumena babestea denean edo ingurumenari eragindako kaltea lehengoratzea denean, kalifikatutako jardueretarako baimenaren kasuan bezala. Baina, aldiz, Estatuko Administrazio Orokorrak bere eskumen esklusiboko eremu ezberdinetan jardun behar duenean, hala nola justizia, aireportuak eta portuak, trenbideak, ur kontinentalak, instalazio elektrikoak, interes orokorreko herri-lanak, meatzeak eta energia, kultura-ondarea eta segurtasun publikoa, autonomia-estatutuek EKren 149. artikuluaren esparruan ezartzen duten

eskumen-banaketari jarraitu behar zaio (batez ere, 149. artikulu horren 1. zenbakiko 4., 20., 21., 22., 24., 25., 28. eta 29., zenbakiei).

Eta, hortaz, ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa dena delako obra, instalazio edo jarduera gauzatzen duen administrazioaren edo horiek gauzatzeko baimena ematen duenaren esku uztea, aurkatutako araudiak egiten duen bezala, bat dator konstituzioak ezarritako eskumen-antolamenduarekin, beti ere obra, instalazio edo jarduera hori administrazio horren eskumenekoa bada konstituzionaltasun-blokearen arabera. Administrazioak era bateko eta besteko arloetan dituen eskumenak erabiltzen ditu dena delako obra edo jarduera proiektatua sustatzen duen enpresak ingurumenaren gaineko eraginaren azterlana egin dezala ziurtatzen duenean; orobat proiektua eta ingurumenaren gaineko eraginaren azterlana jendaurrera ateratzen dituenean herritarrek azter ditzaten eta egoki irizten dieten erreklamazio eta alegazioak egin ditzaten; halaber, beste agintari batzuei aholkua eta txostenak eskatzen dizkienean; eta berdin, azkenean, azterlanaren emaitza, banakoen alegazioak eta gainerako sail eta herri-administrazioen iritziak ikusita, ingurumenaren gaineko eraginaren adierazpena egiten duenean, proiektuari ematen zaion behin betiko baimenaren osagai izango den adierazpena, hain zuzen.

111. Konstituzio Auzitegiaren martxoaren 30eko 101/2006 epaiak arrazoi berdinak ematen ditu, eta honako hau nabarmentzen du:

> Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa ezin da, hortaz, ingurumenaren arloko betearazpen- edo kudeaketa-eginkizuntzat hartu. Estatuaren oinarrizko araudi horren xedeak, edukiak eta eraginek honako hau ekarriko dute: administrazio publiko guztiek baloratuko dutela ingurumena beren eskumenekoak diren obra, instalazio edo jarduerei dagozkien aginpideak erabili behar dituztenean. Obra, instalazio eta jarduera horietako asko Konstituzioak eta autonomia-estatutuek eskumenen banaketarako ezarritako berariazko arauen pean daude, eta arau horiek eskumen-tituluak eratzen dituzte, beren izaeragatik eta xedeagatik ingurumenaren gaineko eskumena erakarri egiten duten tituluak, hain zuzen; izan ere, ingurumenaren gaia «zaila eta diziplina anitzekoa da, eta zuzenbide-ordenamenduaren sektore anitz eta askotarikoei eragiten die (KAE 64/1982, 3. OJ)» (KAE 13/1998, 7. OJ).

112. Epai berriagoek (hala nola maiatzaren 11ko 53/2017 edo irailaren 21eko 107/2017) eskumen berberak esleitzen dituzte Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren arloan. Hain

zuzen, interesgarria da 53/2017 epaiaren oinarri juridikoaren zati bat ekartzea; izan ere, arlo horri dagokionez, auzitegiaren doktrina biltzen du:

> Lehenago indarrean zegoen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko Estatuko legeriari dagokionez (1/2008 Legegintzako Errege Dekretuak onartzen duen Proiektuen Ingurumen-inpaktuaren Ebaluazioari buruzko Legearen testu bategina) eta gaur egun indarrean dagoenari dagokionez (Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legea), Auzitegi honek honako hau zehaztu du ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren prozeduraren inguruan: «Ingurumen-ebaluazioa egiteko, nahitaez gauzatu behar da jendaurreko informazioaren izapidea, eta kontsultak egin behar zaizkie ukitutako administrazio publikoei eta proiektuaren eta aurkeztutako ingurumen-inpaktuaren azterketaren inguruko interesa duten pertsonei (azterketak, bide batez, neurri egokiak jaso behar ditu ingurumenari eragiten dion jardueraren balizko eraginak prebenitzeko, zuzentzeko eta, beharrezkoa bada, konpentsatzeko, baita ingurumena zaintzeko programa bat ere, prebentzio-neurriak, neurri zuzentzaileak eta konpentsatzaileak proiektuko fase guztietan betetzen direla bermatzeko)» (KAE 106/2014, ekainaren 24koa, 8. OJ., uztailaren 22ko Konstituzio Auzitegiaren 134/2014 Epaian errepikatzen dena, eta KAE 73/2016, apirilaren 14koa, 8. OJ, besteak beste).
>
> Azkenik, kontuan hartu behar da, halako adierazpenak egitean, Auzitegi hau «oso kontzientea izan dela alderdi hauei dagokienez: ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa administrazio-prozedura baten barnean kokatzen da, eta ebaluazio hori funtsezko izapidetzat jotzen da obrak eta proiektuak onesteko prozedura konplexuaren barnean» (KAE 57/2015, martxoaren 18koa, 4. OJ).
>
> Bada, zalantzarik gabe, doktrina hau –esan dugun bezala, bide batez, ingurumen-inpaktuaren ebaluaziori loturik egin zen– *mutatis mutandi* aplika daiteke 21/2013 Legeak gaur egun «ingurumen-ebaluazio» gisa definitzen duen horretan, eta, 5.artikuluari jarraituz, planen eta programen ingurumen-ebaluazioa («ingurumen-ebaluazio estrategikoa») nahiz proiektuena («ingurumen-inpaktuaren ebaluazio») jasotzen ditu.
>
> d) Finean, ingurumen-babeserako funtsezko tresna prebentibo baten aurrean gaude, eta prozeduran jartzen du ardatza. Ezaugarri hori, gainera, bat dator tresnaren sorrera eta helburuarekin; izan ere, ingurumen-ebaluazioa izapide konplexu eta funtsezkoa da

garapen ekonomikoa eta botere publiko guztiek ingurumena babesteko duten betebeharra bateratzeko, EKren 45. artikuluaren arabera, garapen jasangarria bermatze aldera. Ebaluazioa igaro behar duten planak, programak eta proiektuak egiteko, hartzeko, onesteko edo baimentzeko beharrezkoak diren administrazio-prozeduren esparruan ingurumen-alderdiak behar bezala txertatzen direla bermatzea da helburua. Hartara, agintari eskudunek horiek ingurumenean zer eragin izan dezaketen ezagutu eta balioetsiko dute, ingurumenaren aldetik bideragarriak diren alternatiben inguruan hausnartuko dute, eta prebentzio-neurriak, neurri zuzentzaileak eta, beharrezkoa bada, ingurumenerako kaltegarriak diren eraginak konpentsatzeko neurriak ezarriko dituzte. Horretarako, ez kontuan hartuko plan, programa edo proiektu horiek –horien eremu materialaren arabera– Estatuaren, autonomia-erkidegoaren edo udalen eskumena diren. Ikuspegi horretatik ulertu behar da ingurumen-ebaluazioaren definizioa (21/2013 Legearen 5.1 artikulua), eta horren arabera, hauxe da Ingurumen-ebaluazioa: «Administrazio-prozedura instrumentala, planak eta programak onetsi edo abian jartzeko prozedurarekiko, bai eta proiektuak baimentzeko prozedurarekiko, edota, hala badagokio, erantzukizunpeko adierazpena edo aldez aurreko jakinarazpena egin beharreko proiektuak kontrolatzeko administrazio-jarduerarekiko, ingurumenean planek, programek eta proiektuek eragin ditzaketen ondorio adierazgarriak aztertzen dituena».

e) Ondorioz, xedea eta edukia kontuan hartuz, ingurumen-ebaluazioaren xedapenak ingurumenaren arloan kokatzen dira, eta, bertan, Estatuak du eskumena tresna horren gaineko oinarrizko araudia ezartzeko, EKren 149.1.23 artikuluaren arabera, eta Kataluniako Generalitateak du eskumena garapen-arauak eta babes-arau gehigarriak ezartzeko, Kataluniako Autonomia Estatutuko 144., 111. eta 113. artikuluen arabera. Agerikoa da, era beran, ezin dela kokatu, Generalitatearen ordezkaritza prozesalak adierazten duen bezala, EKren 149.1.18 artikuluaren barnean, hots, Estatuari «administrazio-prozedura arrunta» erregulatzeko eskumen esklusiboa ematen dion artikuluaren barnean; izan ere, ez du erregulatzen administrazioaren ekintza juridikoa gauzatzeko jarraitu behar den prozeduraren egitura orokorra, eta ez ditu zehazten (ez orokorrean, ez modu abstraktuan), edozein prozedura motaren kasuan, partikularraren berme orokorrak edo administrazio-egintzen prestakuntzaren, baliozkotasunaren, gauzatzearen eta berrikusketaren erregimena (KAE 227/1988, azaroaren 29koa, 32. OJ).

113. Ingurumenaren tituluaz gain, eta aurreproiektuan duen rola, kasu honetan, osagarria den arren, aurreproiektuan beste eskumen batek du eragina, prozeduraren eremuak aurreproiektuan hartzen duen pisuaren ondorioz. Eskumen hori, hain zuzen, EHAEko 10.6 artikuluan zehazten da: «EAEk emandako zuzenbidearen berezitasunen eta bere antolaketa bereziaren haritik datozen prozesu-arauak eta administrazio-jardunbideari zein ekonomia-administraziokoari dagozkion arauak».

114. Punturen batean, aurreproiektuak hainbat alderdi aipatzen ditu kontratazio publikoari loturik; arlo horretan Euskal Autonomia Erkidegoak du eskumena Estatuaren oinarrizko legeria lege bidez garatu eta bere lurraldean betearazteko [EHAE 11.1.b) artikulua].

115. Azkenik, ingurumen-fiskalitatearen inguruan xedatutakoari dagokionez, EAEk zerga propioak sortzeko aukera berariaz aurreikusten da EHAEren 42.b) artikuluan, EAEko ogasun orokorrak diru sarrerak lortzeko. Baliabide-iturri hori Estatuaren eta EAEren arteko zerga-alorreko harremanak arautzen dituen ekonomia-itunaren sistema tradizionaletik kanpo antolatzen da, EHAEren 41. artikulua, eta ogasunak foru-aldundietatik lortzen dituen ekarpenen iturri den ekonomia-itunetik kanpo, EHAE 42.a) artikulua.

116. LHL Legearen 17.1.A).b) artikuluak, era berean, eta Erakunde Erkideei dagozkien eskumen guztiak behar bezala gauzatzeko eta finantzatzeko xedez, honako hauek jasotzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren ohiko diru-sarrera gisa: «Eusko Legebiltzarrak jar ditzakeen autonomia-erkidegoaren berezko zergetatik lortutako etekinak, baita Eusko Legebiltzarrak ezar ditzakeen gainordainak ere». Modu argigarrian, era berean, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 34.1 a) artikuluak –haren testu bategina, bide batez, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartu zen– Euskal Autonomia Erkidegoaren berezko tribututzat jotzen ditu berezko zerga hauek: «Autonomia-erkidegoaren berezko zergak, erkidegoak berak ezar ditzakeenak, Ekonomia Itunean jasota edo aurreikusita ez daudenak eta Estatuak zergapetu ditzakeen zergagaiak ez direnak. Erkidegoak ezar ditzake Euskadiko Autonomia Estatutuko 42.b) artikuluan xedatutakoaren arabera».

117. Eusko Legebiltzarrak berezko zergak sortzeko aukera hau mugaturik jasotzen da estatutu-arauan, bat etorri behar baitu «Konstituzioaren 157. artikuluan eta autonomia-erkidegoen Finantzaketarako Lege Organikoan agindutakoarekin».

II **LURRALDE HISTORIKOEN ESKUMENAK**

118. 27/83 Legeak, azaroaren 25ekoak, autonomia-erkidego osorako erakundeen eta bertako lurralde historikoetako foru-erakundeen arteko harremanei buruzkoak (LHL), foru-erakundeei ematen dizkie ingurumenarekin lotutako eskumen batzuk.

119. Izaera esklusiboarekin, 7.a) artikuluko 9. zenbakiak eskumenak ematen dizkie hauen gainean: mendiak, baso-ustiaketa eta -zerbitzuak, abereentzako bideak eta larreak, Autonomia Estatutuaren 10.8 artikuluak dioenez, eta basozaintza eta nekazaritza eta baso-lurrei bere onean eustea eta hobetzea.

120. Eskumen horri dagokionez, 226/2012 Irizpenean, Arbitraje Batzordearen 2/2011 Erabakia aipatzen genuen, azaroaren 8koa, hots, klima-aldaketaren Lege Proiektuaren harira eman zena. Kasu horretan euskarri fisiko zehatz bati eragiten zion, mendiei hain zuzen, baina bertako arrazoiketa beste euskarri fisiko batzuetan aplika zitekeela pentsatu genuen, 27/83 Legearen 7.a).9 artikuluan aipatzen direnetan, alegia. Hemen ez ditugu arrazoi horiek jasoko, aurreproiektuaren eraginpean ez dagoen kontu batekin ez luzatzeko.

121. Hala ere, aurreproiektuak berariaz planteatzen du 27/83 Legearen 7.c) 6 artikulua aldatzeko. Gaur egun, artikulu honek foru-erakundeei esleitzen die bizitegi-lurzoru hiritarrean egon daitezkeen jarduera gogaikarri, osasun-galgarri, kaltegarri eta arriskutsuak kalifikatzeko, zuzenketa-neurriak agintzeko, ikuskatzeko eta zigortzeko gaitasuna, betiere, ez badio eragiten lurralde historiko bati baino gehiagori edo erkidegoz kanpoko erakunde publiko bati, eta Legeak udal Erakundeei emandako eskumenen kalterik gabe.

122. Aurreproiektuak azken xedapenetatik lehenengoan, arlo honetan foru-eskumena birdefinitzea proposatzen da. Horren arabera, foru-erakundeei dagokie babes-neurriak eta neurri zuzentzaileak ezartzea sailkatutako jarduerarako lizentzia duten jardueretan, 10.000 baino biztanle gutxiago dituzten udalerrietan, eta 10.000 baino biztanle gehiago dituzten udalerrietan, dagokion Udalak hala eskatuz gero, arauaren amaierako tartekian aldaketarik egin gabe.

123. Kasu honetan, beraz, eskumenen barne-aldaketa bat gertatzen da, baina ez dio inolako eragozpenik eragiten arauaren bideragarritasunari; izan ere, aldaketa hori lege bidez gauzatuko litzateke, eta Arbitraje Batzordearen 05/2003 Erabakian eskatzen diren irizpideen arabera: «Eusko Legebiltzarrak emandako maila bereko araua, zeinek zuzenean, berenberegi eta arrazoituta delako aldaketa artikulatuko baitu, bestela, LHL berari kenduko bailitzaioke Euskal Autonomia Erkidegoko oinarrizko eskumenak egokitzeko funtzioa».

124. Era berean, ez da ikusten eskumen-gatazkarik dagoenik aurreproiektuak ingurumen-fiskalitatera planteatzen duen irekierarekin; izan ere, zehaztapen orokorretan ulertzen da irekiera hori, eta neurri zehatzak txertatzea proposatzen denean –adibidez, fiskalitate ekologikoaren bidez lortzen diren diru-sarreren eragina–, autonomia-erkidegoko Administrazio Orokorraren eremura mugatzen dira mandatuak, eta lurralde historikoen jarduera-esparrua errespetatzen da alor fiskalean.

III TOKI-ERAKUNDEEN ESKUMENAK

125. Aurreproiektuak tradizionalki tokikoa den ordena-eremu bati eragiten dio, jarduera sailkatuen eremuari, hain zuzen.

126. Alde batetik, ingurumen-baimen integratua edo ingurumen-baimen bakarra behar duten jarduera edo instalazioek jarduera sailkatuko lizentziarik behar izango ez dutela aipatzen da, gaur egun hala gertatzen baita.

127. Bestalde, aurreko atalean aurreratu dugun bezala, aurreproiektuak, azken xedapenetatik lehenengoan, arlo honetan foru-eskumena birdefinitzea proposatzen du. Horren arabera, foru-erakundeei dagokie neurri zuzentzaileak ezartzea jarduera sailkatuko lizentzia duten jardueretan, 10.000 baino biztanle gutxiago dituzten udalerrietan eta 10.000 baino biztanle gehiago dituzten udalerrietan, dagokion udalak hala eskatuz gero.

128. Ingurumenaren arloko eskumenak ematen zaizkie udalerriei –ingurumenaren babesa eta garapen jasangarria modu osagarrian antolatzea, sustatzea, kudeatzea eta defendatzea, hiriguneetan kutsadura akustikoa, argi-kutsadura eta airearen kutsaduraren aurkako babesa barne hartuta (Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17.1.8 artikulua)– ,«lege honetan eta aplikatu beharreko legerian xedatzen den esparruan». Horrenbestez, toki-autonomiaren aitortzak ez du eragozten erakunde erkideek ingurumenaren arloan beren eskumenak gauzatzeko duten gaitasuna –kasu honetan, legegintzako eskumenak–.

129. Gogoratu beharra dago, era berean, indarrean dagoen 3/1998 Legeak erakunde erkideen esku uzten duela lege honetan ezarritako esparruaren barnean ingurugiro-arauak prestatu eta onartzea eta ingurugiroaz zein ekologiaz Estatuko oinarrizko legeria garatzea eta exekutatzea, Euskal Autonomia Estatutuan aurreikusitakoaren arabera.

130. Tokiko eremuari dagokionez aurreproiektuak dakartzan berritasunen xehetasunetan sakonduz gero, esan behar da batzorde honek zentzuzkotzat eta, gainera, saihestezintzat jotzen dituela jarduera sailkatuen eremuko egungo udal-jardueraren gaineko eraginak; izan ere, ingurumen-baimen integratuan eta ingurumen-baimen bakarrean bateratzen diren baimenen bat-egitearen ondorio dira. Alde batetik, oinarrizko legerian xedatzen denak eragiten die eta, bestetik, partikularretan kargak kentzearen helburuak, administrazio publikoetan egin beharreko izapideak ahal den neurrian errazteko eta sinplifikatzeko. Hori guztia, gainera, udalak bazter utzi gabe; izan ere, baimen horiek emateko prozeduran parte hartzen jarraitzen dute, nahitaezko txosten baten bidez.

131. Foru-aldundiei ematen zaien eskumenari dagokionez, aurreproiektuaren 7.2.b) artikuluaren arabera, foru-aldundiek udalei laguntza eman behar diete jarduera sailkatuaren lizentzia eta jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioa prozeduren eraginpean dauden jardueretan eta instalazioetan. Beraz, aurreproiektuaren azken xedapenetatik bigarrenak LHL Legean planteatzen duen aldaketaren arabera, neurri zuzentzaileen txostena igortzeko funtzioa, oro har, foru-aldundiena da. Gaur egun, aldiz, funtzio hori foru-aldundien eta autonomia-erkidegoko administrazioaren artean banatzen da, jarduera zer lurzorutan kokatzen den gorabehera. 10.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerriek soilik hartu ahal izango dute bere gain, hala nahi izatekotan. Kasu honetan, beraz, ez da planteatzen inposaketa baten moduan, eta, beraz, ez da ikusten toki-autonomiaren printzipioaren aurka egiten duenik.

132. Oro har, lanketa-prozeduran aztertutakoa kenduta, irizpenaren mende jarri den testuak tokiko eskumenak errespetatzen ditu eta, zehazki, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak kontuan hartzen dituen udalerrien berezko eskumenak.

IV **ONDORIOA**

133. Batzordeak uste du, finean, aurreproiektuaren bidez ezarri nahi den araudiak barnean hartzean duela administrazioaren esku-hartzea, ingurumenean eragina duten jardueretan. Horrenbestez, eskumen-babes egokia du aipatutako tituluan.

ARAU-ESPARRUA

134. Aurreproiektuaren zioen azalpenak hala dio: «Azken urteotan ingurumen-araudiaren nortasun-zeinuetako bat izan da, hain zuzen, hainbat arlo eta mailatatik aldarrikatutako arauak hedatzearena. Era horretan, azaleratzen ari diren eta gizarteak eskatzen dituen premietara egokitzen ari da».

135. Bestalde, proiektuak asmo handiak ditu edukiari dagokionez; izan ere, berez, konplexua da, eta alderdi askotan Europar Batasuneko araudiak baldintzatuta dago. Araudi horren transposizioa egin da barne-antolamendura, Estatuko oinarrizko araudi bidez.

136. Ingurumenaren arloa hainbat ikuspegitatik jorratu daiteke, baina aurreproiektuak, funtsean, prozeduraren ikuspegitik lantzen du. Hala ere, funtsean, honako alderdi hauek hezurmamitzera bideratzen da: i) ingurumen-informaziorako, parte-hartze publikorako eta justiziarako sarbidea izateko eskubidea; ii) ingurumenean eragina duten jardueren antolamendua; iii) ingurumen-ebaluazioa; iv) ingurumen-ikuskaritza eta -kontrola; v) ingurumenaren alorreko legezkotasunaren berrezarpena eta ingurumen-kalte adierazgarrien erantzukizuna; eta vi) ingurumen-diziplina.

I **INFORMAZIO ETA PARTE-HARTZE PUBLIKOAREN ESKUBIDEA**

137. Nazioarteko esparruan, nahitaezko erreferentzia da, esku artean dugun gaiari dagokionez, Ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeari, erabakiak hartzeko unean parte hartzeari eta justiziarako sarbidea izateari buruzko hitzarmena, 1998ko ekainaren 25ean Aarhusen (Danimarka) egin zena (2004ko abenduaren 15ean berretsi zuen Espainiak).

138. Bere aldetik, 27/2006 Estatu Legeak, uztailaren 18koak, ingurumen-gaietan informazioa eskuratu, publikoki parte hartu eta auzitegietara joateko eskubideak arautzen dituenak, era berean, zuzentarau hauek ekarri ditu: 2003/4/EE Zuzentaraua, 2003ko urtarrilaren 28koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, jendeak ingurumenari buruzko informaziorako duen eskubideari buruzkoa, eta Kontseiluaren 90/313/EEE Zuzentaraua indargabetzen duena; eta 2003/35/EE Zuzentaraua, 2003ko maiatzaren 26koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, ingurumenarekin lotutako hainbat plan eta programaren prestakuntzan partaidetza publikoa izateko neurriak ezartzen dituena, eta, publikoaren partaidetzari eta justiziarako aukerari dagokienez, 85/337/EEE eta 96/61/EE Zuzentarauak aldatzen dituena, Batzordearen Adierazpen Kontseiluarenak.

II **INGURUMENEAN ERAGINA DUTEN JARDUEREN ORDENAMENDUA**

139. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010eko azaroaren 24ko 2010/75/EB Zuzentarauaren bidez, hau da, industriaren emisioei buruzko zuzentarauaren bidez (kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuak), IPPC Zuzentaraua eta sei sektore-zuzentarau bateratu ziren industria-emisioei buruzko zuzentarau bakar eta berri batean, Europar Batasuneko teknika erabilgarri onenen aplikazioa sendotzeko.

140. Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez eguneratu da zuzentarauaren transposizioa eta erregulazioa barne-ordenamenduan. Legegintzako Dekretu horren edukia, gainera, oinarrizkoa da.

141. Oinarrizko araudiaren baitan dago, halaber, urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretua, industriako emisioen Erregelamendua onartu eta kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duena.

III **INGURUMEN-EBALUAZIOA**

142. Alor honi dagokionez, ondorengo zuzentarau hauek kontuan hartu behar dira:

a) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2001ko abenduaren 13ko 2001/42/EB Zuzentaraua, ingurumenari buruzko proiektu publiko eta pribatu jakinen ondorioen ebaluazioari buruzkoa.

b) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011ko abenduaren 13ko 2011/92/EB Zuzentaraua, ingurumenari buruzko proiektu publiko eta pribatu jakinen ondorioen ebaluazioari buruzkoa.

c) Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 2014/52/EB Zuzentaraua, apirilaren 16koa, proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko zuzentaraua aldatzen duena.

143. Aipatutako zuzentarauak barne-zuzenbidearen zati dira, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa den 2013ko abenduaren 9ko Estatuko 21/2013 Legearen bidez. Lege hori duela gutxi aldatu da azken zuzentaraura egokitzeko, eta abenduaren 9ko 9/2018 Legearen bidez egin da aldaketa hori. Horrez gain, lege hauek ere aldatzen ditu: 21/2015 Legea, 2015eko uztailaren 20koa, Mendien 43/2003 Legea, 2013ko azaroaren 21ekoa, aldatzen duena, eta 1/2005 Legea, 2005eko martxoaren 9koa, berotegi efektuko gasen emisio-eskubideen saleroste erregimena zehazten duena.

144. Ingurumen-ebaluazioari buruzko legearen hainbat alderdi aztertu zituen Konstituzio Auzitegiak dagoeneko aipatu den maiatzaren 11ko 53/2017 Epaian, eta, bertan, konstituzioaren aurkakotzat jo zuen hainbat kontu zehatz oinarrizko legeriatzat hartzea; izan ere, epaiaren arabera, honako hau ziren: (I) administrazio-prozedura arrunteko arauen edo Estatuak EKren 149.1.18 artikuluaren eremuan ematen dituen oinarrien aipamen edo errepikapen hutsak, ingurumena babesteko xede zehatzik gabeak; edo (II) ingurumen-ebaluazioaren funtsezko izapide eta baldintzak arautzen dituzten arauen arau osagarriak, autonomia-erkidegoek gauzatu ditzaketenak. Hala ere, legearen oinarrizko izaera mantendu zen eta, oro har, legearen funtsezko elementuak.

IV **INGURUMEN-ERANTZUKIZUNA**

145. Arlo honetan, oinarrizko legeriatzat jotzen da, baita ere, ia bere osoan, Ingurumen-erantzukizunari buruzko urriaren 23ko 26/2007 Estatu Legea (hainbat aldiz egin zaizkio aldaketa zehatz batzuk, baina, bereziki, uztailaren 3ko 11/2014 Legearen bidez). Horrek, era berean, egokitu egiten du Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko apirilaren 21eko 2004/35/EE Zuzentaraua, ingurumen-kalteak prebenitzeko eta konpontzeko ingurumen-erantzukizunari buruzkoa (2006, 2009 eta 2013ko aldaketekin).

V **BESTE GAI BATZUK**

146. Prozedura-kontuek aurreproiektuan duten garrantzia dela-eta, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen oinarrietan zer xedatzen den aztertu behar da.

147. Bestalde, kasu batzuetan, aurreproiektuak aipatzen dituen hainbat kontu Europar Batasuneko eta Estatuko araudiek aurrez zehaztutako oinarrizko eremuan kokatzen dira. Zehatzak izateko asmorik gabe, interesgarrienak izan daitezkeenak aipatuko ditugu:

a) Enpresen eta beste erakunde batzuen ingurumen-arloko jokabidea ebaluatzeko, hobetzeko eta ezagutarazteko kudeaketa-tresnaren kasuan, honako honek erregulatzen du: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1221/2009 Erregelamendua (EE), 2009ko azaroaren 25ekoa, erakundeek ingurumen-ikuskaritzako eta -kudeaketarako Europar Batasuneko sisteman (EMAS) borondatez parte-hartzeari buruzkoa, eta 761/2001 Erregelamendua (EE) eta Batzordearen 2001/681/EE eta 2006/193/EE Zuzentarauak indargabetzen dituena. Arlo horretan, oinarrizko izaerarekin ere, apirilaren 5eko 239/2013 Errege Dekretua onetsi du Estatuak, aplikazio-arauak ezartzen dituena.

b) Etiketa ekologikoaren kasuan, hauek aipatu behar dira: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 66/2010 (EE) Erregelamendua, 2009ko azaroaren 25ekoa, Europar Batasuneko etiketa ekologikoari buruzkoa, eta erregelamendu hori aplikatzeko arauak ezartzen dituen 234/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, biak ere oinarrizko legeriaren barnean.

c) Kontratazio publiko berdeari dagokionez, kontuan hartu behar da, halaber, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen oinarrizko edukia. Lege horrek, hain zuzen, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2012/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten du Espainiako ordenamendu juridikora.

AURREPROIEKTUAREN EDUKIAREN AZTERKETA

148. Irizpenaren mende jarritako aurreproiektuak testu bakar batean biltzen ditu esku-hartze administratiboen motak, ingurumenean eragina duten edo izan dezaketen jarduketei dagokienez.

149. Testua, era berean, prozedura horiek ahal den neurrian bateratzen saiatzen da, horiek sinplifikatze eta arintze aldera. Horren bidez, oreka bat lortu nahi da ingurumenaren

kontserbazioaren eta defentsaren, eta jarduera ekonomikoen mantentzearen artean, partikularrek administrazioaren aurrean dituzten eskubideak behar bezala errespetatuz.

150. Memoriak nabarmentzen duen bezala, testuak kontuan hartzen du, halaber, 9/2018 Estatu Legea, abenduaren 5ekoa, zeinaren bidez aldatzen diren 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa, 21/2015 Legea, uztailaren 20koa, zeinaren bidez aldatzen den 43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, mendiei buruzkoa, eta 1/2005 Legea, martxoaren 9koa, zeinaren bidez arautzen den berotegi-efektuko gasak aireratzeko eskubideen salerosketa-erregimena.

151. Aipaturiko arauak, Europako Parlamentuko eta Batzordeko 2014ko apirilaren 16ko 2014/52/EB Zuzentaraua, 2011/92/EB Zuzentaraua aldatzen duena, proiektu publiko eta pribatu batzuen ingurumenarekiko inpaktu ebaluazioari buruzkoa eta, ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko, 21/2013 Legean hainbat alderdi sakonean aldatzen ditu.

152. Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrarekin gertatzen den ez bezala, aurreproiektuak sektore-eremurik barne hartzen ez duela egiaztatu da; adibidez, honako hauek: airearen kalitatea, zaratak, hondakinak, lurzoru kutsatuak, uren eta itsasertzaren babesa edo bioaniztasuna eta lurzoruaren babesa.

153. Eremu horietako batzuen legeak gure ordenamendu juridikoan eman dira edo emango dira, lege espezifikoen bidez; hala gertatzen da Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearekin, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearekin, edo Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Ondarea Kontserbatzeari buruzko Legearen Aurreproiektuarekin. Beste sektore batzuk, aldiz, oinarrizko legeriaren mende egon dira, edo erregelamendu-garapenaren xede baino ez dira izan.

154. Kontuan izanda aurreproiektuak 3/1998 Legea oso-osorik indargabetzea xedatzen duela, gomendagarria litzateke, trazabilitate eta segurtasun juridikoaren arrazoiengatik, sail sustatzaileak aipamenen bat egitea, adibidez, zioen azalpenean, aurreproiektuaren irizpide orokorraren inguruan, 3/1998 Legean jasotzen ziren sektore-eremuei dagokienez, ingurumen-administrazioaren legearen aurreproiektu honetan tratamendu berezia izateari uzten baitiote.

155. Aurreproiektu honek arlo horien gaineko oinarrizko araudia behar bezala sistematizatzen ez badu ere, egoki gerta liteke azken xedapenen bat txertatzea, garapen-erregelamenduen legezko babesa mantentzeko edo, bestela, baldintza hori kontuan hartzea aurreproiektuaren xedapen indargabetzailean.

156. Jarraian, eta azalpenak emate aldera, irizpen honek, lehenik eta behin, gai orokorrenak aztertzen ditu, aurreproiektuaren beraren egiturari jarraituz. Ondoren, hurrenkera berberaren arabera, gai ez hain sakonak aztertuko ditugu.

I EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO INGURUMENERAKO AHOLKU KONTSEILUA ETA INGURUGIRO BATZORDEA BATERATZEA

157. Gaur egun, ingurumenaren eta natura-ondarearen arloan, hiru aholkularitza-organo daude administrazio orokorrean: Ingurugiro Batzordea eta Euskadiko Ingurumenerako Aholku Kontseilua (3/1998 Legearen bidez sortuak, 9. Artikulutik 15.era bitartean) eta Naturzaintza-Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Aholku Kontseilua.

158. Sail sustatzaileak aholkularitza-organo bakarra sortzea proposatzen du, Ingurumenerako Aholku Kontseilua. Aipatutako hiru aholkularitza-organoak barne hartuko ditu, eta, era berean, lege-babes bikoitzarekin jardungo du, Ingurumen Administrazioaren eta Natura-ondarearen Kontserbazioaren Legeen aurreproiektuak onetsi ondoren.

159. Aholkularitza-organo horiek bateratzeko proposamenak aholkularitza-organoak arrazionalizatzearen eta administrazio orokorra lankidetza aritzearen irizpideei erantzuten die.

160. Ingurugiro Batzordea eta Ingurumenerako Aholku Kontseilua bateratzearen kasuan, proposatutako planteamendua zentzuzkoa dela irizten da, hainbat arrazoi direla-eta: (I) bi organoak sortu ziren 3/1998 Legearen bidez; (II) bi organoek jarduten dute lege-esparru berberean, hots, 3/1998 Legeak ezartzen duen esparruan, eta, beraz, ia-ia gai berberez arduratzen dira; (III) organoen osaeraren zati bat errepikatzen da, Ingurugiro Batzordeko kideak Ingurumenerako Aholku Kontseiluko kide ere badirelako.

161. Beraz, zentzuzkoa dirudi bi organoak bateratzea, beharrezkoak ez diren bikoiztasunak saihesteko eta kudeaketa arintzeko.

162. Organo bakar horretan Naturzaintza-Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Aholku Kontseiluaren egungo funtzioak txertatzeari dagokionez, batzorde honek 123/2019 Irizpenean adierazten duenari heltzen diogu, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Ondarea Kontserbatzeari buruzko Legearen aurreproiektuarekin loturik eman zen irizpenari, alegia.

II INGURUMENEKO ESKU-HARTZEA

A) Ingurumenean esku hartzeko araubideen eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren aldiberekotasuna.

163. Aurreproiektuaren 22. artikuluak ingurumeneko esku-hartzeen gaineko araubideak ingurumen-ebaluazioarekin bateratzeko modua arautzen du.

164. Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen 14. artikuluak, bere aldetik, hau zehazten du: «Autonomia-erkidegoek ingurumen-baimen bateratua emateko eta aldatzeko prozeduran ingurumen-inpaktuaren ebaluazioren alorreko jarduketak sartzeko behar dena egingo dute, hala eskatzekoa izanez gero».

165. Lege horrek, 25. eta 41. artikuluetan, ingurumen-adierazpen estrategikoa eta ingurumen-inpaktuaren adierazpena nahitaezko txosten erabakigarriak izan behar direla zehazten du.

166. Ingurumen-ebaluazioari buruzko legeak, zioen azalpenean, izaera erabakigarri horren inguruko azalpena ematen du, eta bi alderdi dituela zehazten du; formala eta materiala.

167. Ikuspegi formala edo prozedura kontuan hartuta, ingurumen-erabakien izaera erabakigarriak dakar prozedura substantiboaren izapideetan aurrera egiteko ezintasuna, hura egiten ez den bitartean.

168. Ikuspegi materialari begira, txosten bat erabakigarria izateak dakar txosten hori ezinbestekoa izatea, erabakia hartzeko eskumena duen organoak bere irizpidea eratzeko aukera izan dezan, txostenak azaltzen dituen gaiei dagokienez.

169. Jurisprudentziak zenbait txostenen izaera erabakigarria ere aztertu du. Auzitegi Gorenaren Epaiak (Administrazioarekiko Auzien Sala, 5. Atala, 2013ko ekainaren 14) txosten mota horien inguruko analisia egiten du, eta honako hau baieztatzen du:

> 1) erabakitzea «zerbaiten baldintzak zehaztea» dela kontuan hartuz, legegileak txosten batek izaera erabakigarria duela adierazten badu, balio indartua eman nahi diolako egiten du. Sala honen eta Atal honen 2010eko martxoaren 8ko epaiaren hitzetan (771/2006 Kasazio-errekurtsoa), txosten horiek «beharrezkoak dira ebazpena eman behar duen organoak iritzia osatu dezan argitu beharreko gaien inguruan. Erabakiaren edukia zehazteko garrantzi berezia duten txostenak direnez, ebazpena emateko eskumena duen organoak arrazoiketa on bat eskaini beharko du haren erabakia txostenetan adierazten den horretatik apartatzen bada». Ikuspegi horren

arabera, txosten horiek, formaren aldetik, ez dute izaera loteslerik, baina materiaren edo funtsaren aldetik, izaera lotesle horretara gerturatzen dira;

eta 2) are gehiago, txosten horietatik modu arrazoituan baztertzeko aukera ez da ez erabatekoa ez baldintzarik gabea; aitzitik, estatu-txostena bideratu den espedienteari buruzko ebazpena ematen duen agintaritzaren eskumen-eremuaren mugen barnean egon beharko da. Hau da, baliabide hidrikoen nahikotasunari buruzko txostenetik baztertzeko, organo erabakitzailearen legezko jarduera- eta eskumen-esparruaren berezko iritziak soilik balia daitezke (organo erabakitzailea, kasu horretan, autonomia-erkidegokoa izango da). Hau da, iritziek ezin dute gainditu eremu hori, eta ezin dute sartu Estatuko administrazioari eta haren organoei balioestea dagokien eremuan, autonomia-erkidegoak ezin baitira sartu Estatuaren eskumen esklusiboetan. Horregatik, baliabide hidrikoen nahikotasunari buruzko Estatuaren txostena, Estatuaren eskumen esklusiboaren eremuko balorazioetan oinarritzen denez, loteslea da, zalantzarik gabe.

170. Txosten erabakitzaileek, beraz, formaren aldetik, ez dute zerikusirik txosten lotesleekin, nahiz eta, materiari dagokionez, oso eragin antzekoak izan; izan ere, ebazpen-organoa ezin da baztertu txosten horietatik, bere eskumenak ezartzen dituen mugen barruan ez bada.

171. Aurreproiektuak sistema bat aurreikusten du ingurumen-inpaktuaren adierazpenak eta txostenak Ingurumen Ebaluazioari buruzko Legeak aurreikusten duenarekin bat ez datorren ingurumeneko esku-hartzearen araubideekin bateratzeko.

172. Ingurumen Ebaluazioari buruzko Legeak, 25. eta 41. artikuluetan, ingurumen-adierazpen estrategikoa eta ingurumen-inpaktuaren adierazpena nahitaezko txosten erabakigarriak izan behar direla zehazten du.

173. Kalifikazio horretatik abiatuz, legeak mekanismo bat aurreikusten du desadostasunak ebazteko (12. artikulua). Horrenbestez, ingurumen-erabakien baldintzek mugatzen dute organo substantiboa, eta haietatik baztertu daiteke soilik, arrazoiak adierazita, bere eskumenen esparruan, eta dagokion desadostasuna planteatuta Ministroen Kontseiluan, edo dagokion autonomia-erkidegoaren gobernu-kontseiluan, edota autonomia-erkidego horrek erabakitako organoan, halakorik balego.

174. Aurrekoaren ildotik, ingurumen-erabakien aurka, berez, ezingo dela errekurtsorik jarri zehazten da. Hala ere, errekurtsoa jarri ahal izango da organo substantiboak, planak edo

programak onartzeari edo abian jartzeari zein proiektuak baimentzeari begira, ingurumen-erabakiak kontuan hartuta emandako erabakien aurka.

175. Bere aldetik, ingurumen-adierazpenek nahitaezko txosten lotesleak izan behar dutela zehazten du aurreproiektuaren sistemak (22., 73,. 74., 77. eta 78. artikuluak).

176. 22. artikuluko a) apartatuan hau adierazten da: «Ingurumen-inpaktuaren adierazpena egiteko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari dagokionean, eta jarduera ingurumen-baimen integratuaren erregimenaren edo ingurumen-baimen bakarraren eraginpean dagoenean, bi erregimenei dagozkien administrazio prozedurak eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arruntaren prozedura txertatuko dira».

177. Gainera, honako hau gehitzen du: «Ingurumen-inpaktuaren adierazpenaren edukia, era berean, ingurumen-baimen integratuaren edo ingurumen-baimen bakarraren parte izango da». Eta administrazio-egintza berean igorri ahal izango dira bi adierazpenak.

178. Beraz, kasu horietan, erabat integratu daiteke ingurumen-inpaktuaren adierazpena ingurumen-baimenetan. Hartara, adierazpen hori baimen-prozeduraren esparruan sar daiteke, baina, horrez gain, egintza bakarrean ebatzi ahal izango dira bi kontuak. Kasu horretan, inpaktuaren adierazpenaren izaera lotesle edo erabakigarria bigarren planora igarotzen da; izan ere, inpaktu-adierazpen hori ingurumen-baimen integratu edo bakarraren gaineko ebazpena emateko egintzaren arrazoiketaren parte izango da.

179. 22. artikuluko b) eta c) apartatuek, hurrenez hurren, jarduera sailkatuaren lizentzia eta aurretiazko komunikazioa behar duten jardueren kasuak jasotzen dituzte. Lehen kasuan, hau da, aurretiazko baimena behar duten jardueren kasuan, ingurumen-inpaktuaren adierazpena loteslea izango da toki-erakundearentzat. Berdina gertatzen da bigarren kasuan, baina, kasu horretan, inpaktuaren adierazpena nahiz txostena izango dira lotesleak.

180. Kasu horretan eta gainerakoetan (organo substantiboa eta ingurumen-organoa berberak ez direnean), inpaktuaren adierazpenaren edo txostenaren izaera loteslea dela-eta, ez da beharrezkoa Ingurumen Ebaluazioari buruzko Legearen 12. artikuluan xedatzen den desadostasunak ebazteko prozedura, txosten horien irizpidea nagusitzen delako.

181. Horregatik, Konstituzio Auzitegiak Ingurumen Ebaluazioari buruzko Legearen 25.4 eta 47.6 artikuluei buruz zer adierazi duen gogoratzea komeni da; artikulu horietan, oinarrizko izaerarekin, ingurumen-adierazpen estrategikoaren eta ingurumen-inpaktuaren txostenaren aurka ezin izango dela errekurtsorik jarri aipatzen da.

182. Kataluniako Generalitateak administrazio eskudun bakoitzak hartu beharreko erabakitzat jotzen zuen ingurumen-inpaktuaren adierazpenari administrazio-errekurtsoa jartzearen aukera, baita errekurtsoa nola eta zer neurritan jartzeko aukera ere, «administrazio-prozedura arruntaren arloan araudiak izapidetze-ekintzen inguruan ezartzen duenari kalterik egin gabe».

183. Konstituzio Auzitegiak, horren harira, maiatzaren 11ko 53/2017 Epaian, honako hau adierazten du:

> (...) Izapide-jarduketa horiei modu autonomoan errekurtsorik jarri ezin dakiekeela zehazten da; hala, Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen 25. artikuluko 4. apartatuan eta 47. artikuluko 6. apartatuan, jarduketa mota horietarako oro har xedatzen dena biltzen da, administrazio-prozedura arruntaren esparruan (39/2015 Legearen 112. artikulua; lehenago, 30/1992 Legearen 107. artikulua) nahiz administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren esparruan (29/1998 Legearen 25. artikulua). Modu horretan, planak eta programak onartzeko edota proiektuak baimentzeko xedapenei edo ebazpenei jarri ahal izango zaizkie errekurtsoak, Ingurumen Ebaluazioari buruzko Legean xedatutakoa urratzeagatik (administrazio-bidean eta/edo bide judizialean). Edo, jarduera bat hasteko edo gauzatzeko erantzukizunpeko adierazpen bat edo aldez aurreko jakinarazpen bat egin behar bada, baimena beharrean, organo substantiboaren ebazpenei errekurtsoa jarri ahal izango zaie, Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen 9.2 artikuluan aipatzen den bezala.
>
> Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen esparruan, xedapen horiek behar besteko koherentzia ematen dute tresna horren izaeran eta eraketan, ingurumen-faktoreak lege horren mende dauden planetan, programetan edo proiektuetan txertatzeko, non kokatzen diren eta zer administraziori dagozkion kontuan hartu gabe. Ondorioz, ingurumen-ebaluazioaren lerro nagusien funtsezko zatia dira, eta, horrela, zailtasunik gabe jo daitezke oinarrizkotzat eta, beraz, eskumen ordena konstituzionala errespetatzen dute.
>
> Lege honetan desadostasunak ebazteko aurreikusitako mekanismoan, izaera erabakigarri hori gauzatzen da. Horrenbestez, ingurumen-erabakien baldintzek mugatzen dute organo substantiboa, eta haietatik baztertu daiteke soilik, arrazoiak adierazita, bere eskumenen esparruan, eta dagokion desadostasuna planteatuta

Ministroen Kontseiluan, edo dagokion autonomia-erkidegoaren gobernu-kontseiluan, edota autonomia-erkidego horrek erabakitako organoan.

184. Auzitegiak berak interpretatzen duen moduan, Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen sistemak, txostenen izaera erabakigarri horretan oinarrituta, organo substantiboa baldintzatzea du xede. Hartara, organo hori modu arrazoituan baino ezin izango da baztertu, bere eskumenen eremuan eta gobernu-kontseiluak edo, hala badagokio, autonomia-erkidegoko araudiak zehazten duen beste organo batek aldeko erabakia eman ondoren.

185. Aurreproiektuak planteatzen duen sistemak berme hori mantentzen eta areagotzen du, ingurumen-txostena loteslea dela ezartzen du-eta.

186. Estatuaren eta autonomia-erkidegoaren arteko eskumen-banaketaren arabera (dagoeneko aztertu da), autonomia-erkidegoak izapide berri bat izan lezake, izaera loteslekoa, oinarrizko legeriak xedatzen dituen babes-neurriei dagokienez. Arrazoi handiagoa dago, beraz, txostena lotesletzat jotzea babes-neurri gehigarri bat dela ulertzeko, oinarrizko legeriak erabakigarria baino ez dela zehazten duen arren.

187. Baldintza horrek, zentzuzkoa denez, desadostasunak ebazteko sistemari eragiten dio, eta, oinarrizko legeriatzat jo den arren, aurreproiektuaren sisteman desagertu egiten da, beharrezkoa ez delako.

188. Aurreproiektuak horren inguruan ezer esaten ez duen arren, Ingurumen Ebaluazioari buruzko Legearen 25.4 eta 47.6 artikuluetan zehazten dena errespetatu behar da, oinarrizko izaera baitu. Artikulu horietan, ingurumen-adierazpen estrategikoari eta ingurumen-inpaktuaren txostenari modu autonomoan errekurtsorik jarri ezin dakiekeela zehazten da.

189. Aurreproiektuaren 22. artikuluari dagokionez, batzordeak komenigarritzat jotzen du, edozein kasutan, egungo idatzian ebazteke dauden zenbait kontu argitzea.

190. Lehen kontuari dagokionez, 22. artikulua irakurtzean, badirudi ingurumen-inpaktuaren txostena komunikazioa behar duten jarduera sailkatuaren kasuetarako soilik xedatzen dela, edo ezin dela bateratu ingurumen-baimenekin; izan ere, ez da aipatzen a) eta b) apartatuetan, eta haren izaera loteslea aurreproiektuaren 78.1 artikuluan baieztatzen da. Hori baldin bada bilatzen den emaitza, argiago adierazi beharko litzateke txosten hori ingurumen-baimenekin bateratzeko modua edo, bestela –45.1.e) artikulutik ondoriozta daitekeenez, besteak beste–, a) eta b) apartatuetan idatzitakoa berrikusi, inpaktuaren txostenak inpaktu-adierazpenekin batera sartzeko.

191. Bigarren kontuak 22. artikuluaren d) apartatuaren idazketarekin du zerikusia. Apartatu horrek zehazten duenez, ingurumen-inpaktuaren adierazpena edo ingurumen-inpaktuari buruzko txostena egitea Estatuko Administrazio Orokorrari dagokionean, ezingo da baimena eta jarduera sailkatuaren lizentzia eman edo jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioa aurkeztu, aldez aurretik adierazpen edo txosten hori egin gabe badago.

192. Egoera hori posiblea da kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 28. artikuluan zehazten denaren arabera (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsi zen). Bertan, ingurumen-baimen integratua ingurumen-inpaktua ebaluatzeko prozedurarekin koordinatu behar dela planteatzen da.

193. Arloan egiten den eskumen-banaketarekin bat eginez, aurreproiektuak ez du lotesletzat jo Estatuko administrazioak egindako inpaktuaren adierazpena. Beraz, erabakigarritzat jo beharko litzatekeela uste dugu eta, kasu horretan, zentzua izan lezake Ingurumen-ebaluazioaren Legearen desadostasunak ebazteko sistemak, komenigarria bailitzateke hori baliatzea, ondore horietarako baino ez bada ere.

194. Hirugarrenik, gaztelaniazko testuaren a) apartatuaren idazkera aldatu behar dela ulertzen dugu, esamolde hau aldatzeko: «pudiendo emitirse». Bateratze hori nola aurreikusi den jakinda, aukera koherentea da, baimenen edukiari buruzko 42.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, edozein kasutan egintza bakar bat egotea inpaktuaren adierazpenaren eta baimenaren ingurukoa ebazteko. Horregatik, mezu hori azken tarteki batean bereiztea gomendatzen dugu, bi adierazpenak egintza bakar batean igorriko direla zehazteko.

B) Jarduera sailkatuak

195. Jarduera sailkatuei dagokienez, aurreproiektuak hainbat berritasun dakartza, dagoeneko adierazi den bezala.

196. Lehenik, ingurumen-baimen integratua edo bakarra behar duten kasuek ez dute jarduera sailkatuaren udal-lizentziarik behar. Hala ere, aurreproiektuaren 36. artikuluan xedatzen den txostenaren igorpenaren bidez bermatzen da ukitutako udalerriaren partaidetza.

197. Neurri zuzentzaileak ezartzeko txostenari dagokionez, aurreproiektuak kontu horri lotutako eskumenen banaketan egiten duen aldaketa aipatu dugu; izan ere, foru-aldundien esku jartzen da, 10.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietan salbu,

neurri horiek beren bitartekoen bidez ezartzeko aukera baitute. Nolanahi ere, dagokion foru-aldundiari ere eska diezaiokete txostena.

198. Berritasunen artean, lizentzia emateko epea laburtzea ere badago; izan ere, gaur egin sei hilabete xedatzen dira 3/1998 Legean, baina aurreproiektuaren 52. artikuluan lau hilabete xedatzen ditu.

199. Memoriaren beraren arabera, laburtze horrek lan-karga gehigarria ekarriko die udalei, baina, lehenago aipatu den bezala, karga berriak konpentsatuko direla uste du; izan ere, espediente gutxiago izapidetu beharko dituzte, udal-lizentziaren eraginpeko kasuen kopurua murriztuko delako.

200. 52.5 artikuluak zehazten duenez, udalek beren udalerrian garatzen diren jarduera sailkatuen lizentziaren menpeko jardueren eta instalazioen erregistroa edukiko dute. Kasu horretan, alde hau legoke indarrean dagoen erregimenarekin: erregistro horrek ez lituzke jasoko aurretiazko komunikazioa behar duten jarduerak, aurretiazko komunikazioa erregulatzen duen kapituluan ez delako xedatzen antzeko betebeharrik. Batzordeak, hala ere, aurretiazko komunikazioa egiteak ez duela zentzurik uste du, udalak ez badu jardueren erregistrorik, esaterako, ikuskaritza-ondoreetarako.

201. Hasiera batean, arreta eman dezake, halaber, aurreproiektuaren 53.4 artikuluan Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Legearen mende dauden establezimendu publikoei buruz xedatzen dena txertatu izana; izan ere, bertan aurreikusten den salbuespenaren arabera, «establezimenduaren lizentzian aipatzen diren eskakizunetako bat ere ez dela betetzen egiaztatzen denean ere» jarduerari hasiera eman dakioke. Hala ere, kasu horretan, 3/1998 Legearen 61.3 artikuluan aurreikusten dena baino ez da aplikatzen (artikulu hori, bide batez, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen azken xedapenaren bidez aldatu zen).

III INGURUMEN-EBALUAZIOA

202. Aurreproiektuaren V. tituluak ingurumen-ebaluazioa arautzen du. Titulu horrek hiru kapitulu ditu. Lehen kapituluak ingurumen-ebaluazio estrategikoaren eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren xedapen orokorrak jasotzen ditu; bigarrenak planen eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoa jorratzen du; eta hirugarrenak, proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa. Hori guztia hogei artikulutan bildu da.

203. Hogei artikulu horietan, hamar igorpen zehatz egiten dira erregelamenduetara; hala, lehenik eta behin, aurreproiektuak edukiari eusten diola ondoriozta daiteke; aukera hori, batzorde honen arabera, zentzuzkoa da, testu arautzailearen argitasunari eta ulermenari laguntzen baitio.

204. Ingurumen-ebaluazioa prozedura konplexuen arabera garatzen da hainbat izapideren eta balorazioren bidez, eta, horiek zehaztasunez garatzeko, erregelamendu-mailako araua legea baino moldakorragoa izan daiteke.

205. Erregelamendura egiten diren igorpenek, arlo honetan, honako hauekin dute lotura, hain zuzen: ingurumen-ebaluazio arrunten irismenaren zehaztapena (67. artikuluko 1. eta 9. zenbakiak), publizitatea (68. artikulua), interesa duten pertsona juridikoen erregistroa (70.2 artikulua), jendaurreko informazioa eta kontsultak (72. artikulua), ingurumen-adierazpenen eta ingurumen-inpaktuaren txostenen indarraldiaren luzapena (73.5, 74.5, 77.4 eta 78.5 artikuluak) eta jendaurreko informazioa eta kontsultak (76. artikulua). Kasu horietara ingurumen-organoaren gaikuntza gehitu behar da, plan edo programa batek ingurumenaren gaineko eraginik noiz ez duen zehaztera bideratutako irizpideak ezartzeko.

A) Ingurumen-ebaluaziotik salbuetsitako planak, programak eta proiektuak

206. Arauaren edukien hautaketatik at, titulu honen gai nagusia 65. artikuluan planteatzen den berbera da, hots, ingurumen-ebaluaziotik salbuetsitako planak, programak eta proiektuak.

207. Eremu horren definizioaren harira, arauaren lanketa-prozesuan parte hartu duten eragile batzuek hainbat ohartarazpen egin dituzte.

208. Piztu duen interes horregatik, hain zuzen, sail sustatzaileak atal espezifiko bat gehitu du alegazioen erantzunean, aurreproiektuan proposatzen den araudia zergatik aukeratu den azaltzeko. Arrazoiketaren amaieran, honako hau baieztatzen da:

> (…) Ingurumen Administrazioaren Lege-proiektua idazteko, 21/2013 Legearen aplikazio-eremua ingurumenean ondorio adierazgarriak eragin ditzaketen plan, programa eta proiektuetara mugatzen dela interpretatu da, eta autonomia-mailako legearen aplikazio-eremua definitzearen alde egin da, ingurumenaren arloan, bai inklusio bidez (59., 60., 72. eta 74.bis artikuluak, II. eranskinaren atalei loturik), bai esklusio bidez (65. artikulua). Bestalde, eta, gaiari lotutako oinarrizko legerian ezarritakoarekin bat etorriz, ingurumen-ebaluazioaren aplikazio-eremuaren barruan egonda ere, prozedura alternatibo bat (beste ebaluazio modu batzuk) izan dezaketen proiektu jakin batzuk kanpo uzteko aukera jaso da (66. art.). Ondorioz, lege-aurreproiektuan jasotzen den testu arauemaileak argi eta garbi desberdintzen ditu legeak berak «aplikazio-eremutik kanpo utzi dituen» kasuak eta, aplikazio-eremu horren barruan egonda ere, ebaluazio-prozeduratik «kanpo utz daitezkeen» kasuak

ere. Baztertze hori kasu bakoitzean adostu behar da, eta soilik hasiera batean legearen aplikazio-eremuan sartuta zeuden eta beste ebaluazio mota bat izan dezaketen proiektuetako salbuespenezko kasuetarako gordetzen da.

209. Ondorio hori Europako araudiaren nahiz barne-araudiaren testuinguruari buruz egiten den interpretazioan oinarritzen da, araua testuinguru horretan txertatuko baita. Interpretazio hori koherentea dela eta ondo arrazoituta dagoela uste dugu. Horrexegatik uste dugu, aukeraketa argitze aldera, interesgarria dela argudioak gogoratzea. Hala ere, hautatutako aukerari dagokionez, geroago aipatuko ditugu beharrezkoak diren ohartarazpenak.

210. Organo sustatzaileak honela arrazoitzen du egindako hautua:

> (…) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2001eko ekainaren 27ko 2001/42/EE Zuzentarauak adierazten duenez, ingurumenean ondorio adierazgarriak dituzte honako hauek: proiektu publiko eta pribatu jakin batzuk ingurumenean duten eraginen ebaluazioari buruzko 1985eko ekainaren 27ko Kontseiluaren 85/337/EEE Zuzentarauaren I. eta II. eranskinetan zehazten diren plan eta programa guztiak, sektore jakin batzuetarako prestatuta daudenak eta proiektuak etorkizunean baimentzeko esparru bat zehazten dutenak (1985-7-5eko DO L 175, 40. or.; 97/11/EE Zuzentarauak aldatzen duen zuzentaraua (1997-3-14ko DO L 73, 5. or.), eta habitat naturalak eta basoko fauna eta flora zaintzeari buruzko 1992ko maiatzaren 21eko Kontseiluaren 92/43/EEE Zuzentarauaren arabera ebaluatu behar diren plan eta programa guztiak (1992-7-22ko DO L 206, 7. or.; 97/62/EE Zuzentarauak azkenekoz aldatutako zuzentaraua (1997-11-8ko DO L 305 , 42. or) . Eta, arau gisa, ingurumen-ebaluazio sistematikoari loturik egon behar dute. Tokiko zona txikien erabilera zehazten dutenean edo aipatutako programa edo planetan aldaketa txikiak eragiten dituztenean, Estatu kideek ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ditzaketela zehazten dutenean soilik ebaluatuko dira. Proiektuen etorkizuneko baimenaren esparrua zehazten duten beste plan eta programa batzuek ez dute kasu guztietan, halabeharrez, ondorio adierazgarririk izan behar ingurumenean, eta Estatu kideek ondorio adierazgarriak izan ditzaketela zehazten dutenean soilik ebaluatu beharko dira.
>
> Ondorioz, zuzentarauaren 3. artikuluan xedatzen denarekin bat dator,

1.- Ingurumen-ebaluazio bat gauzatuko da, zuzentarauaren 4.-9. artikuluetan xedatzen denaren arabera, 2. eta 4. apartatuek aipatzen dituzten eta ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ditzaketen planetan eta programetan.

2.- Hirugarren atalean xedatzen dena salbu, programa eta plan hauek guztiek egin beharko dute ingurumen-ebaluazioa:

a) nekazaritzaren, basogintzaren, arrantzaren, energiaren, industriaren, garraioaren, hondakin-kudeaketaren, baliabide hidrikoen, telekomunikazioen, turismoaren, hiriko eta landako lurralde-antolamenduaren edo lurzoruen erabileraren arloan egiten diren guztiak eta 85/337/EEE Zuzentarauaren I. eta II. eranskinetan zerrendatzen diren proiektuak etorkizunean baimentzeko esparrua zehazten dutenak, edo

b) zona batzuetan egon daitekeen eraginaren ondorioz, ebaluatu behar diren proiektuak, 92/43/EEE Zuzentarauaren 6. edo 7. artikuluetan xedatzen denaren arabera.

3.- Bigarren apartatuan aipatzen diren plan eta programei, hots, tokiko zona txikien erabilera zehazten dutenei eta bigarren apartatuan aipatutako programa edo planetan aldaketa txikiak eragiten dituztenei, ingurumen-ebaluazioa egin beharko zaie Estatu kideek ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ditzaketela erabakitzen dutenean soilik.

4.- Bigarren apartatutik kanpo geratzen diren plan eta programei dagokienez, proiektuak etorkizunean baimentzeko esparrua zehazten duten kasuetan, Estatu kideek zehaztuko dute kasuan kasuko planak edo programak ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ditzakeen.

5.- Estatu kideek zehaztuko dute 3. eta 4. apartatuetan aipatzen den plan edo programaren batek ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ditzakeen; horretarako, kasuz kasu aztertuko dituzte edo plan eta programa motak zehaztuko dituzte, edo, bestela, bi metodoak konbinatuko dituzte. Ondore horretarako, Estatu kideek kontuan izango dituzte, edozein kasutan, II. eranskinean zehazten diren irizpideak, zuzentarau honek estaldura eman diezaien ingurumenean ondorio adierazgarriak eragin ditzaketen planei eta programei.

Bere aldetik, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011ko abenduaren 13ko 2011/92/EB Zuzentaraua, zenbait proiektu publikok eta pribatuk ingurumenean izan dezaketen ondorioei buruzkoa, ingurumenean ondorio garrantzitsuak eragin ditzaketen proiektu publiko eta pribatuek ingurumenean zer eragin dituzten ebaluatzeko aplikatzen da (1. art.). Bigarren artikuluan, halaber, Estatu kideek beharrezkoak diren neurriak hartuko dituztela zehazten du, ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ditzaketen proiektuak (horien ezaugarriak, dimentsioak edo kokapena direla-eta) baimenaren irizpidearen mende jartzeko eta ingurumenean izan ditzaketen eraginak ebaluatzeko baimena eman aurretik. Proiektu horiek 4. artikuluan definitzen dira.

Testu horien idazketak oso argi adierazten du ingurumenean ondorio adierazgarriak eragin ditzaketen planek, programek eta proiektuek ingurumen-ebaluazioa egin behar dutela. Baliteke plan, programa eta proiektuek ingurumenean inolako eraginik ez izatea, baina ingurumen-ebaluazioa aplikatu behar zaie, ondorio adierazgarriak eragin ditzaketenean. Aurkako zentzuan, ez da ingurumen-ebaluazioa aplikatu behar planek, programek eta proiektuek ondorio adierazgarririk eragin ezin dutenean.

(…)

Zentzu horretan, Europako Batzordeak, 2003an, 2001/42/EE Zuzentaraua aplikatzeko gida argitaratu zuen, eta honako hau jasotzen du:

Atarikoa. 1.6. atala: Zuzentarau hau ulertzeko lehen urratsa zer planetan eta programetan aplika daitekeen erabakitzea da. Dokumentuak, beraz, hasieran, aplikazio-eremua zein den aipatzen du, eta «planak eta programak» kontzeptuan jartzen du arreta, baita horiek ingurumenean ondorio adierazgarriak eragiteko probabilitatean ere. Ondoren, hurrenkera honetan, alderdi hauek aztertzen dira: ingurumen-txostenaren edukia, kalitate-bermeei buruzko baldintzak, kontsulten arloko xedapenak, ikuskapen-eskakizunaren ezaugarriak eta, azkenik, zuzentarauaren eta Europar Batasunaren beste legegintza-egintza batzuen arteko loturak.

Zuzentarauaren aplikazio-eremua. 3.1. atala: Zuzentarauaren aplikazio-eremua zehazten duten xedapenak elkarren artean lotura duten bi artikulutan jasotzen dira, nagusiki: 2. artikuluak planek eta programak izan behar dituzten ezaugarri jakin batzuk definitzen ditu, zuzentaraua horiei aplikatu ahal izateko. Jarraian, 3. artikuluak hainbat

arau definitzen ditu ingurumenean ondorio adierazgarriak zer plan eta programek eragin ditzaketen zehazteko, eta, beraz, ingurumen-ebaluazioa zer plan eta programek egin behar duten. Hamahirugarren artikuluko 3. apartatuan aldi baterako aplikazio-eremua definitzen da (ikus dokumentu honen 3.64 eta 3.66 bitarteko apartatuak).

Zuzentarauaren aplikazio-eremua. 3.44. apartatua: Kasu batzuetan, beharbada, bi metodoak konbinatzeko aukera egongo litzateke (kasuz kasu aztertzea eta plan edo programa motak zehaztea). Metodo orokorraren arabera, baldintza espezifikoetan, ziur aski ingurumenean ondorio adierazgarririk eragingo ez lukeen programa edo plan mota bat definituko litzateke, eta, beste baldintza batzuetan, kasuz kasu egingo litzateke zehaztapena.

Zuzentarauaren aplikazio-eremua. 3.50. apartatua: Zuzentarauaren testu osoan zehar, ingurumen-ebaluazioa ingurumenari ondorio adierazgarriak eragiteko probabilitatearen mende dago. Konplexua da ingurumenean zer eragin gerta daitezkeen aurreikustea, bereziki irismen nahiko zabala duten plan edo programetan, edo maila altukoetan; izan ere, zaila izan daiteke, horiek onesteko unean, aplikazioak zer emaitza izan ditzakeen aurreratzea. «Gerta daitezkeen» eta antzeko esamoldeen erabilerak aditzera ematen du zentzuzko probabilitate-maila batekin aurreikusi daitezkeen ingurumen-eraginak hartu behar direla kontuan.

Zuzentarauaren aplikazio-eremua. 3.57. apartatua: Ziurgabetasuna handia da, eta, datu edo ezagutza nahikorik izan ezean, zaila izan daiteke ondorio adierazgarririk egon daitekeen erabakitzea. Hala ere, pentsatzekoa da beti egongo dela eraginen gutxi gorabeherako hurbilketa bat egiteko aukera.

2001/42/EE Zuzentarauan jasotzen denaren antzera (planen eta programen ingurumen-ebaluazioa), 2011/92/EB Zuzentarauak (proiektuen ingurumen-ebaluazioa) hiru proiektu mota bereizten ditu:

- Mota jakin bateko proiektuek ondorio nabarmenak dituzte ingurumenean eta, printzipioz, sistematikoki ebaluatu behar dira.

- Beste mota batzuetako proiektuek ez dute kasu guztietan, nahitaez, eragin garrantzitsurik izan behar ingurumenean, eta proiektu horiek ebaluatu beharko dira Estatu kideek ingurumenean ondorio adierazgarriak eragin ditzaketela uste dutenean.

- Estatu kideek atalaseak edo irizpideak ezarri ditzakete zer proiektu ebaluatu behar diren zehazteko, ingurumenean dituzten eraginen garrantziaren arabera. Estatu kideak ez daude behartuta atalase horien azpitik dauden edo irizpide horietatik kanpo dauden proiektuak kasuz kasu aztertzera.

Azpimarratzekoa da bi zuzentarauek teknika desberdina erabiltzen dutela aplikazio-eremua mugatzeko orduan. 2001/42/EE Zuzentarauak «aukera» eta «probabilitatea» kontzeptuak erabiltzen ditu programa edo plan batek ingurumenean ondorio adierazgarriak eragin ditzakeen adierazteko, programak edo planak etorkizunean baimentzeko esparrua zer proiektu motarentzat zehazten duen aintzat hartuz; zuzentarauak, zehazki, aipatutako proiektuek ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa igaro behar duten ala ez hartzen du kontuan. 2011/92/EB Zuzentarauak, aldiz, proiektu moten eta atalaseen zerrenda itxiak zehazten ditu. Horien bidez, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa beharrezkoa al den zehazten da, edo estatu kideek ebaluazio hori egiteko beharra zehaztu behar al duten, 2011/92/EB Zuzentarauak «aldez aurreko egiaztapena» deitzen duen horren bidez. Ez da inolaz ere ezartzen Estatu kideek aldez aurreko egiaztapen hori egin behar dutenik, ezta, jakina, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egin behar dutenik ere, I. eranskinean eta II. eranskinean jasotzen ez diren proiektu motentzat.

Azkenik, 2011/92/EB Zuzentarauak, «inpaktuaren probabilitatea» jotzen ditu proiektu jakin batek ingurumen-ebaluazioa behar duen zehazteko irizpidetzat.

Gauzak horrela, Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeak1. artikuluan hau zehazten du (Legearen xedea eta helburua): «Lege honek ingurumenean ondorio adierazgarriak eragin ditzaketen planen, programen eta proiektuen ingurumen-ebaluazioa arautu behar duten oinarriak ezartzen ditu...». Horrenbestez, aurkako zentzuan, legea ingurumenean ondorio adierazgarriak eragiten ez dituzten planetan, programetan eta proiektuetan aplikatzen ez dela interpretatzen da. Interpretazio hori egiteko, 2001/42/EE Zuzentarauari eta hori aplikatzeko gidari eta 2011/92/EB Zuzentarauari buruz adierazi den guztia hartzen da kontuan.

21/2013 Legeak askotan erabiltzen du plan, programa edo proiektu batek ingurumenean ondorio adierazgarriak eragiteko duen aukeraren kontzeptua. Esate baterako:

- 5. artikulua. Definizioak.

a. Ingurumen-ebaluazioa: ...ingurumenean plan, programa eta proiektuek eragin ditzaketen ondorio adierazgarriak aztertzen dituena.

- 31. artikulua. Ingurumen-txosten estrategikoa.

2.a. Plan edo programari ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin behar zaio, ingurumenean ondorio adierazgarriak eragin ditzakeelako.

Planen eta programen ebaluazio estrategikoa egiteko prozeduren eta proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egiteko prozeduren aplikazio-maila mugatzeko erabiltzen den teknikari dagokionez, legeak zorroztasunez jarraitzen die zuzentarauei: «aukera» eta «probabilitatea» kontzeptuak erabiltzen ditu programa edo plan batek ingurumenean eragin adierazgarriak izan ditzakeen adierazteko, plan edo programa horretan jasotzen diren proiektuei loturik, proiektuen kasuan zerrenda itxiak erabiltzen dituen bitartean.

Jaso diren hainbat alegazioetan adierazi da Europako zuzentarauek ez dutela zehazten planek, programek eta proiektuek ingurumen-ebaluazioa egiteko duten beharra ingurumenean ondorio adierazgarriak eragiteko probabilitate-maila altuaren arabera. Hala ere, dagoeneko ikusi dugu 2001/42/EE Zuzentarauak «ingurumenari eragin diezaioketen» zenbait plan eta programa bereizten dituela ingurumenean eragin adierazgarririk halabeharrez ez duten beste plan eta programa batzuetatik. Era berean, Zuzentaraua Aplikatzeko Gidak, Europako Batzordearenak, azaltzen duenez, «gerta daitezkeen» eta antzeko esamoldeak zuzentarauan erabiltzen direnean, aditzera ematen da zentzuzko probabilitate-maila batekin aurreikusi daitezkeen ingurumen-eraginak hartu behar direla kontuan. Gainera, hiru proiektu multzo aztertu ditugu: ingurumenean eragin nabarmenak dituztenak, ondorio horiek kasu guztietan ez dituztenak eta, azkenik, atalase batetik behera daudenak eta, beraz, Estatu kideek aldez aurretik egiaztatu behar ez dituztenak.

21/2013 Legeak ingurumen-ebaluaziorako prozedurak arautzen dituela ikusi dugu, hau da, ingurumenean ondorio adierazgarriak eragin ditzaketen plan, proiektu eta programetan aplikatu behar direnak, baina ez du zehazten bestelako plan, programa eta proiektuek ingurumen-ebaluazioa egin behar dutenik.

Ingurumen-ebaluazio estrategikoa (plan eta programena) nahiz ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta eta sinplifikatua (proiektuena) jasotzen ditu 21/2013 Legeak ingurumen-ebaluaziorako prozeduren artean. Prozedura arruntok Espainiako ordenamendu juridikoan prozedura hauen transposizioa egitearen ondorio dira: 2001/42/EE Zuzentarauaren 4. artikuluan eta ondorengoetan deskribatzen den ingurumen-ebaluazioaren prozedura eta 2011/92/EB Zuzentarauan deskribatzen den ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren prozedura. Bere aldetik, prozedura sinplifikatuek erantzuna eman nahi diote 2001/42/EE Zuzentarauaren 3.5 artikuluan adierazten denari. Horren arabera, Estatu kideak behartuta daude plan edo programek ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ahal ditzaketen zehaztera, 3.2 artikuluan adierazten diren gutxieneko baldintzak betetzen ez dituztenean ere (edota, horiek bete arren, tokiko zona txikien erabilera zehazten dutela edo aldaketa txikiak eragiten dituztela jo daitekeenean). Proiektuei dagokienez, aldiz, 2011/92/EB Zuzentarauaren 4.2 artikulua bete nahi dute prozedura sinplifikatuek, hots, aipatzen den aldez aurreko egiaztapena.

Arauaren edukitik oso argi ondoriozta daiteke zein den ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntaren prozeduren, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arruntaren eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatuaren aplikazio eremua. Ez da berdina gertatzen ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren aplikazio-eremuarekin; horrenbestez, legea aplikatu den lau urteetan, ziurtasun-gabezia handia ikusi ahal izan da ingurumen-ebaluazio arruntaren eremuaz kanpoko planen eta programen izapideaz arduratzen diren organoek hartu beharreko erabakietan.

Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura oso garrantzitsua da, ingurumenaren babesaren ikuspegitik nahiz planak eta programak izapidetzeko dakarren administrazio-kargaren ikuspegitik. Bi muturrak, ingurumenaren babesak eta administrazio-kargak, administrazio-zereginen beste edozein alderdik bezala, proportzio bat gorde behar dute, eta, ikusi dugun bezala, planek eta programek ingurumenean eragin adierazgarriak izan ditzaketela aurreikusten denean soilik abiarazi behar da ingurumen-ebaluazio estrategikoak dakarren administrazio-karga. Jasotako alegazio bakar batean ere ez da arrazoitu beharrezkoa edo komenigarria denik ingurumen-ebaluazioko prozedurak ingurumenean ondorio adierazgarriak eragiten ez dituzten planetan, programetan eta proiektuetan aplikatzea. Era berean,

ez da kostuaren/irabazien inolako analisirik egin zenbaki honetan garatutako alderdiei loturik.

Hori bai, argitasun osoz azaltzen ez duen arren, legeak bereizi egiten ditu, ingurumenean ondorio adierazgarriak eragin ditzaketen plan eta programa guztien artean, prozedura arrunta egin behar duten plan eta programa zehatz batzuk eta prozedura sinplifikatua egin behar duten beste plan eta programa batzuk. Lege-testuaren irismena ulertzeko, ezinbestekoa da zioen azalpenera jotzea, adierazpen hauek nabarmentzen baitira:

- Legeak ezartzen duen betebehar nagusia da ingurumenean ondorio adierazgarriak eragin ditzaken edozein plan, programa edo proiekturi buruzko ingurumen-ebaluazio egokia egitea...

- Plan, programa edo proiektuen mota jakin batzuetarako, zuzentarauek ezartzen dute *iuris et de iure* presuntzioa; alegia, ingurumenean eragin adierazgarriak izango dituela, nolanahi ere, eta, horrenbestez, ebaluatu behar direla...ohiko prozeduraren arabera. Gainerako plan, programa eta proiektuetarako, Estatu kide bakoitzak aztertu beharko ditu, bai kasuz kasu, bai atalaseen bidez, bai bi teknika horiek bateratuta, ingurumenean eragin adierazgarriak dituzten erabakitzeko. Azterketa horri ebaluazio-prozedura sinplifikatua esaten zaio, eta plan, programa edo proiektuak ingurumenean ondorio adierazgarriak dituela agertuz gero, ohiko ebaluazioa egin beharko da.

Hala ere, legearen zioen azalpena zertxobait nahasia da, «ditu» eta «izan ditzake» adierazpenak parekatzen dituelako, nahiz eta, jakina, esanahi desberdina duten.

Bestalde, prozedura sinplifikatuaren kasua nahasgarria dela aipatu behar da; izan ere, prozedura hori ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ditzaketen plan eta proiektuetan aplikatzen da (1. artikulua, 5. artikuluko 1.a.1 apartatuari loturik). Prozeduraren emaitza gisa, ingurumen-organoak zehazten badu planak edo programak ondorio adierazgarriak izan ditzakeela ingurumenean (31.2.a artikulua), orduan, prozedura arruntaren mende jarri behar da plana edo programa. Hala ere, plana edo programa prozedura arruntaren mende jartzeko baldintza hori bete egiten da plana edo programa prozedura sinplifikatuaren mende jartzen den unetik bertatik: ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ditzake. Nahasmen nabarmen hori premisa honen bitartez soilik azaltzen da: plan edo programa batek ingurumenean ondorio

adierazgarriak eragiteko duen aukerak ez du probabilitate bera kasu guztietan. Hori guztia 2001/42/EE Zuzentarauan jasotzen denaren eta hori aplikatzeko gidaren arabera.

Hala, zuzentarauak zenbait plan eta programek ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ditzaketela adierazten duenean, ziurtasunez interpretatzen da hori, eta probabilitate handia duen aukera bat balitz bezala artikulatzen da Ingurumen Administrazioaren Lege Proiektuan. Beste plan edo programa batzuek ingurumenean ondorio adierazgarririk agian izango ez dutela adierazten du zuzentarauak. Kasu horretan, interpretazioak zalantza adierazten du, edo, beste hitz batzuetan, ondorio adierazgarri horiek gertatzeko probabilitate-mailaren inguruko aldez aurreko ezjakintasuna.

Interpretazio horren arabera, planen edo programen hirugarren multzo bat sortzen da. Horien kasuan, ingurumenean eragin txikia dutenez, ingurumenean ondorio adierazgarririk eragin ezin dezaketela bermatzen da *a priori*, eta, beraz, ez dira sartzen 21/2013 Legearen aplikazio-eremuan.

211. Arrazoiketa horren bidez, esan dugun bezala, planen, programen eta proiektuen ingurumen-ebaluazioaren arloa aurreproiektuak nola lantzen duen uler dezakegu.

212. Proiektuei dagokienez, aplikazio-esparru hori zerrenda itxien sistema baten bidez zehazten da, bai Europako araudian, bai oinarrizko legerian. Beraz, segurtasun nahikoaz zehaztu daiteke zer proiektuk igaro behar duten ingurumen-ebaluazio arrunta edo sinplifikatua. Horretarako, gai honetan nagusitzen den zuhurtzia-printzipioaren arabera jokatuko da, ingurumenean ondorioak dituen ziur ez dakigunean, ebaluazioa gauzatzeko.

213. Planen eta programen ingurumen-ebaluazioari dagokionez, hala ere, kontua konplexuagoa da; izan ere, Europako araudiak sistema misto bat erabiltzea baimentzen du, arlo hori zehazteko.

214. Aurreproiektuak, alde batetik, modu positiboan zehazten du arlo hori 75. artikuluan; horretarako, II.A eta II.B artikuluetara igortzen gaitu. Bestalde, 65. artikuluko 1. zenbakiak ingurumen-ebaluaziotik salbuesten ditu plan eta programa hauek:

a) Estatuaren defentsa eta larrialdietan babes zibila ematea helburu bakartzat duten plan eta programak.

b) Finantzen edo aurrekontuen alorrekoak.

c) Plan, programa eta proiektu edo horien aldaketetatik eta berrikusketetatik erator daitezkeen ekintzen tamaina eskasa dela-eta, ingurumenean sor ditzaketen efektuak ez direnean nabarmenak argi eta garbi.

215. a) eta b) apartatuak bat datoz Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen 8.1 artikuluan aurreikusten diren kasuekin, baina c) apartatua ez da aurreikusten –modu zehatzean behintzat– lege horretan. Aitzitik, ikusi dugun bezala, sail sustatzaileak Europako araudiarekin eta Estatuko oinarrizko legeriak xedatzen duenarekin egiten duen interpretazioaren ondorio da.

216. Aurreproiektuaren 65. artikuluaren 2. zenbakiak, bere aldetik, hau gehitzen du: «Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak irizpideak ezarri ahal izango ditu zehazteko plan edo programa batek edo plan edo programa baten aldaketa batek izan ditzakeen ondoreak zer egoeratan ez diren izango adierazgarriak ingurumenean».

217. 65.1 artikuluko c) apartatuak egiten duen salbuespen orokorrari dagokionez, ondoreak, ingurumenean, ageriko eran adierazgarriak izango ez direla aipatzen du enuntziatuak. Hala, ebaluazio-eremua bera definitzen dela uler daiteke; izan ere, Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen 1. artikuluak horren aplikazioa hartzen du abiapuntutzat, ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ditzaketen plan, programa eta proiektuetan. Beraz, eremu horrek ez lituzke barne hartuko halako ondore agerikorik ez duten kasuak.

218. Arreta handiagoa eduki behar da 65. artikuluaren 2. zenbakiko hasierari eman dakiokeen zentzuarekin. Hala dio: «Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak irizpideak ezarri ahal izango ditu zehazteko plan edo programa batek edo plan edo programa baten aldaketa batek izan ditzakeen ondoreak zer egoeratan ez diren izango adierazgarriak ingurumenean».

219. Konstituzio Auzitegiaren 109/2017 Epaiak, irailaren 21ekoak, baliogabetzat jo zuen Balear Uharteetako ingurumen-ebaluazioari buruzko Balear Uharteetako Parlamentuaren abuztuaren 17ko 12/2016 Legearen 9.4 artikulua. Lege horren arabera, hainbat planek edo plan-aldaketek ingurumenean ondorio adierazgarririk ez zutela irizten zen eta, beraz, ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedurei loturik ez zeudela. Kasu batzuetan, hala nola lurralde- edo hirigintza-planen aldaketen kasuan, hainbat irizpide ezartzen zituen aldaketak ingurumenean ondorio adierazgarririk noiz ez zuen definitzeko. Beste kasu batzuetan, honako hauek aipatzen ziren: kultura-ondarearen babes-katalogoen aldaketa edo onespena baldintza jakin batzuetan; baliabide naturalak antolatzeko planak, erabilera eta kudeaketa arautzeko planak; Natura 2000 Sareko guneen edo beste naturagune babestu batzuen kudeaketa-planak, ingurumenaren

babes-maila handiagoa eskaintzen zuten neurrian; Landa Garapenerako Programen aldaketa finantzarioak edo garrantzi gutxiko aldaketak eta, azkenik, xehetasun-azterketak.

220. Epaiak, hain zuzen, honako hau argudiatzen du:

> (…) 21/2013 Legearen 8.1 artikuluak ingurumen-ebaluazio estrategikotik salbuesten ditu Estatuaren defentsa eta larrialdietan babes zibila ematea helburu bakartzat duten plan eta programak soilik, baita finantzen edo aurrekontuen alorrekoak ere. Hartara, Estatuko manuek arau orokor bat finkatzen dute: ingurumenean eragina duten sektore materialei buruzko plan edo programa guztiei eta haien aldaketei ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin beharko zaie, arrunta edo sinplifikatua, eta planaren edo programaren xedearen arabera balioztatutako salbuespenak baino ez dira onartuko.
>
> Bi manuak, forma aldetik, oinarrizkoak dira, 21/2013 Legearen azken xedapenetatik zortzigarrenak zehazten duenaren arabera, eta, gainera, halakotzat jo behar dira ikuspegi materialetik, ingurumen-babesaren arau minimo bat finkatzen dute-eta. (…)
>
> Estatuaren manuak oinarrizkoak direnez, 9.4 artikuluak, salatzen den bezala, eskumenak urratzen dituela ondoriozta daiteke. Autonomia-erkidegoko arauak ingurumen-ebaluaziotik salbuesten ditu hainbat plan-kategoria eta horien aldaketak, nahiz eta, oinarrizko legeriaren arabera, plan horiek ingurumen-ebaluazioa egin behar duten. Estatuko arauek agintzen duten ingurumen-ebaluazio estrategiko horretatik zenbait plan salbuesten direnean, berez, oinarrizko legeriak zehazten dituen gutxieneko babes-mailak murrizten dira, eta, beraz, Estatuaren eskumena urratzen da ingurumenaren arloan.

221. Horrenbestez, interpretazio hau egin behar da: aurreproiektuaren 65. artikuluaren 2. zenbakiko xedapenak ez du aukerarik ematen plan-kategoriak eta horien aldaketak salbuesteko, oinarrizko legeriak berak salbuesten ez dituenean.

222. Epai horretan, halaber, nabarmentzekoa da, ondore horietarako, eskumenen barne-banaketak errespetatzeko beharrari buruzko arrazoiketa, gai hori arautzeko Europako zuzentarauetan xedatzen denari zuzenean loturik interpretatu daitekeenaren aurrean. Epaiak honako hau argudiatzen du:

> Lehenik eta behin, Konstituzio Auzitegiaren 53/2017 Epaiak –3 b) OJ– honako hau nabarmendu zuen: «Gaur egun ingurumenaren oinarrizko legeria 21/2013 Legearen bidez egokitzen da Europar Batasunaren ingurumen-arloko zuzentarauetara; hala ere,

legea egin zenean, xede nagusia ez zen Europar Batasunaren Zuzenbidetik eratortzen diren betebehar berriak betetzea, Estatu Kontseiluak lege-aurreproiektu horren inguruko 2013ko uztailaren 24ko 760 irizpenean adierazi zuen bezala.

Beraz, ez da nabarmentzekoa autonomia-erkidegoko arauak 2001/42/EE Zuzentarauko 3.5 artikuluan babestu nahi izana; izan ere, eskumenen barne-mugaketan ardazten da baliabidearen planteamendua, ingurumen-inpaktua ebaluatzeko teknikari loturik. Hemen ez da zehazten autonomia-erkidegoko araua aipatutako zuzentaraura egokitzen den ala ez. Gainera, autonomia-erkidegoko araua zuzentarauak aurreikusten duenera egokitzeko xedeak ez du aukerarik ematen Konstituzioak eta Autonomia Estatutuek Estatuari edo autonomia-erkidegoei ematen dizkieten eskumenen abstrakzioa egiteko. Hau da, zuzentarauaren edukiak zuzentarauaren transposizioa barne-ordenan egitera behartzen du, baina ez dio Estatuari eragozten babes-estandar, printzipioz, altuagoa ezartzen duten ingurumen-arauak finkatzea; izan ere, eskumenak banatzeko ordena Barne Zuzenbidearen jarraibideek soilik zehazten dute. Estandar hori, materia aldetik, oinarrizkotzat jotzen da dagoeneko azaldu den eskumen-mugaketaren arabera, eta autonomia-erkidegoek hori errespetatu behar dute, ingurumen-babeserako arau gehigarriak ezartzeko eskumena erabiltzen dutenean.

223. Eta, azkenik, honako hau baieztatzen du «ezin da zehaztu, *a priori*, aurkarazten den manuak aipatzen dituen plan edo plan-aldaketa guztiak "ingurumenarentzat onuragarriak eta errespetuzkoak" direnik, eta hori da, hain zuzen, Estatuko arauak hartzen duen ikuspegia; izan ere, arau orokor bezala, plan mota horiek ingurumen-ebaluazio estrategikoaren mende jarri behar direla agintzen du».

224. Aurreproiektuak, esan dugun bezala, salbuespen bat jasotzen du 65.1 artikuluko c) apartatuan, eta, horren bidez, ebaluazio-eremua bera definitzen da. Beraz, ez du ingurumen-ebaluaziotik salbuesten Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legean definitzen den ebaluazio-eremuan sartzen den inolako plan, programa edo proiekturik. Hala ere, 65. artikuluko 2. apartatuak aipatzen dituen irizpideak zehazteko orduan, ingurumen-organoak zuhurtziaz jokatu beharko du planen edo programen kategoria nagusirik ez salbuesteko. Izan ere, legearen garapenak Konstituzioaren aurkakoa izateko arriskua luke, eta, gainera, Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legean zehazten den betebeharra ez betetzeak muturreko ondorio juridiko hau ekarriko lieke plan eta programei: «Lege honen aplikazio-eremuko edozein plan, programa edo proiektu abian jartzeko, onesteko edo baimentzeko egintzak, edota proiektu bati buruzko erantzukizunpeko adierazpena edo aldez aurreko

jakinarazpena baliorik gabeak izango dira, ingurumen-ebaluaziorik egin ez bada, dagozkien zehapenei kalterik egin gabe».

225. Beste ikuspegi batetik, aipatutako irizpideak onesteko eskumena autonomia-erkidegoko ingurumen-organoari dagokiola hartu behar dugu kontuan. Aurreproiektuak berak identifikatzen du nori dagokion, hots, autonomia-erkidegoko administrazio orokorraren ingurumen-arloko zuzendariordetza eskudunari.

226. Kasu honetan, erregulazioaren garrantzia dela-eta, erregulazioaren funtsezko alderdiak osatzen dituen aldetik –hala nola ingurumen-ebaluazioari loturiko planen eta programen eremua–, tresna arautzaile baten aurrean gaudela ondoriozta dezakegu.

227. Horrenbestez, interesgarria iruditzen zaigu Batzorde honek dagoeneko egin duen ohartarazpena gogoratzea, sailburuen eskumenari loturik dagoen arren: posible da legearen betearazpen-erregelamenduak emateko *per saltum* gaikuntza egitea, legeak zenbait erregelamendu-xedapen emateko gaitzen dituenean, baina horrek ez du esan nahi legegileak askatasun osoa duenik Gobernua baztertzeko eta erregelamendu-ahal orokorraren titular gisa aitortzen zaizkion eskumenen eremua murrizteko, EHAEren 29. artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen16. artikuluak aurreikusten duten eskemaren arabera.

228. Bestelako kontua izango litzateke instrukzio ez-arautzaileen kasuan, nahiz eta, esan dugun bezala, funtsezko alderdi baten zehaztapena lantzen den neurrian, hots, plan eta programen ebaluazio-eremua, erregelamendu-xedapen bat dela ondoriozta daitekeen.

B) Zenbait izapide ebazteko epearen neurketa

229. Titulu honen barnean, arazoak sortzen dituzte epeek izapide batzuetan, eskaera osoa jasotzen den data zein den. Alderdi hori aurreproiektu osoan zuzendu da.

230. 67. (5. eta 6. zenbakiak), 73.2, 74.2, 77.2 eta 78.2 artikuluek bat egiten dute epeak neurtzeko erreferentzia gisa eskaera osorik jaso den unea mantentzean. Arazoa 73.2 eta 77.2 artikuluetan planteatzen da batik bat; izan ere, biek aipatzen dute ingurumen-organoak ingurumen-adierazpen estrategikoa eta ingurumen-inpaktuaren adierazpena formulatzeko duen epea, hurrenez hurren, eta bietan hartzen da *dies a quo* gisa eskaera osoa jasotzen den eguna.

231. Kontuan hartu behar da, hala ere, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 21.3.b) artikuluak zehazten duenez, interesdunak eskaturik hasitako prozeduretan, izapidetzeko eskumena duen administrazio edo organismoaren erregistro elektronikoan eskaera sartu den egunetik aurrera neurtuko dela prozedura ebazteko

gehieneko epea. Aurrekoaren kalterik gabe, 22.1.a) artikuluak, bere aldetik, interesdunen bati akatsak zuzen ditzan edo beharrezko diren dokumentuak eta irizpen-elementuak bidal ditzan eskatu behar zaionean, erantzun arteko gehieneko epea eten ahal izango dela zehazten du, interesdunari errekerimendua jakinarazten zaionetik agindutakoa bete arteko denboran edo betetzeko emandako epean.

IV INGURUMEN-HOBEKUNTZA SUSTATZEKO TRESNAK

232. VI. tituluak hainbat neurri bateratzen ditu, eta, tituluak berak adierazten duen bezala, ingurumen-hobekuntza sustatzen saiatzen dira hainbat eremutik eta hainbat tresnaren bidez. Neurri horien artean, honako hauek aurreikusten dira: ingurumen-akordioak, EMAS Sisteman parte-hartzea sustatzea, etiketa ekologikoa erabiltzea, ingurumen-aztarna, kontratazio publiko berdea, ekoberrikuntza, ingurumen-fiskalitatea, ikerketa, hezkuntza eta prestakuntza ingurumenaren arloan, ingurumeneko boluntarioak eta errekonozimendu publikorako neurriak.

233. Erregulazioaren zatirik handiena printzipioetan edo sustapen- edo partaidetza-neurrien irekieran oinarritzen da. Horien bidez, lotura ezartzen da ukitutako arloen araudi espezifikoarekin edo, bestela, arloa ireki egiten dute, instituzioek eta organo eskudunek aurrerago zehaztu dezaten. Horrexegatik, argitu edo hobetu ditzakegun alderdiak baino ez ditugu iruzkinduko.

A) Ingurumen-akordioak

234. Lehen akordioa ingurumen-akordioena da (79. artikulua); administrazioak onesten dituen bakoitzean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 47. artikuluan eta hurrengoetan xedatzen denaren esparruari eutsi beharko diote. Horrek, ordea, ez du esan nahi sektore publikoaren zati ez diren subjektuen arteko ingurumen-akordioak bultzatu ezin daitezkeenik.

235. Europa mailan, Batzordeak Europako Parlamentuari, Kontseiluari, Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari eta Eskualdeetako Lantaldeari egindako Jakinarazpenak, 2002ko uztailaren 17koak, «Esparru arautzailea sinplifikatu eta hobetu» ekintza-planaren barnean egiten diren Europar Batasunaren mailako ingurumen-akordioei buruzkoak, autoerregulaziorako edo koerregulaziorako formulatzat jotzen ditu ingurumen-akordioak. Autoerregulazioaren kasuan, eragile ekonomiko eta sozialek, GKEek edo horien ekintzak erregulatzeko eta antolatzeko taldeek borondatez zehaztu dituzten praktika ugari jasotzen dira (arau komunak, jokabide-kodeak eta, bereziki, borondatezko akordioak).

236. Koerregulazioan, aldiz, akordio horiek legegintzako egintza baten oinarriaren gainean egiten dira, hau da, modu lotesle eta formalago batean, erregulazioaren testuinguruan. Hartara, alderdi inplikatuek arau zehatz bat aplikatzen dute.

237. EMAS sistemaren barneko parte-hartzea, etiketa ekologikoaren erabilera eta ingurumen-aztarna sustapenaren ikuspegitik lantzen dira funtsean. Hala ere, lehen bi gaiei dagokienez (80. eta 81. artikuluak), kontratazio publikoan sartzeko aukera aztertzen da, eta kontratazio publikoari buruzko 83. artikuluan kontratazio publiko berdearen inguruan xedatzen denarekin lotu dezakegu.

B) Kontratazio publiko berdea

238. Kontratazio publikoaren arloan, EAEk du eskumena Estatuaren oinarrizko legeria lege bidez garatu eta bere lurraldean betearazteko [EHAE, 11.1.b) artikulua]. Europako araudiak gai honetan geroz eta eragin handiagoa duenez, eta, gainera, Estatuko oinarrizko legeriak garapenerako tarte txikia baimentzen duenez, autonomia-erkidegoen eskumena hustuz joan da, ia ezereztu arte, nahiz eta aurreproiektuak eskumen hori esploratzen duen, eta ingurumen-hobekuntzari loturik gauzatu.

239. Sektore Publikoko Kontratuen Legeak hainbat aipamen egiten ditu kontratazio publiko berdearen inguruan, 1. artikulutik hasita. Horretan, honako hau iragartzen da: «Kontratazio publiko orotan, zeharkako eta aginduzko eran, irizpide sozial eta ingurumenekoak sartuko dira, kontratuaren objektuarekin zerikusia duten bitartean». Ingurumenaren ikuspegia kontuan hartzeko aukera edo, are betebeharra ere, besteak beste, 28.2, 94., 122.2, 145., 184., 202. edo 334. artikuluetan jasotzen da. Azken horrek kontratazio publikoaren estrategia nazionalarekin du lotura.

240. Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 202. artikulua da adierazgarriena gure ondoreetarako, hots, izaera sozial, etiko edo ingurumenekoa duten kontratuak edo bestelako izaera duten kontratuak egikaritzeko baldintza bereziei buruzkoa. Hala zehazten du horrek: «Kontratazio-organoek zilegi izango dute baldintza bereziak ezartzea kontratua egikaritzeko, baldin eta baldintza horiek lotuta badaude kontratuaren objektuarekin, ez badira zuzenean edo zeharka diskriminatzaileak, Europar Batasuneko zuzenbidearekin bateragarri badira eta hala lizitazio-iragarkian nola baldintza-agirietan adierazten badira».

241. Bigarren apartatuak gehitzen duenez, besteak beste, honako helburu hauek bilatzen dituzten ingurumen-kontsiderazioak ezarri ahalko dira: berotegi-efektuko gasen igorpenak murriztea, eta, hala, martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 88. artikuluak ezartzen duen helburua betetzea (ekonomia jasangarriari buruzkoa); kontratuaren ondorioz kaltetu daitezkeen ingurumen-balioak mantentzea edo hobetzea; ura era

jasangarriagoan kudeatzea; energia berriztagarrien erabilera sustatzea; produktuak birzikla daitezen eta ontzi berrerabilgarriak erabil daitezen bultzatzea, eta produktuak soltean entregatzea, eta ekoizpen ekologikoa bultzatzea.

242. Argi dago, beraz, «gizarte- eta ingurumen-arloan arduratsua» den kontratazioa nagusitzen dela Sektore Publikoko Kontratuen Legean. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren (EBJA) jurisprudentzia jasotzen du horrek, Estatu kideek neurri egokiak hartu behar dituztela zehazten duena, kontratu publikoak gauzatzean operadore ekonomikoek Europa, Estatu eta nazioarte mailako arauetan zehazten diren ingurumen-betebeharrak betetzen dituztela bermatzeko (10/7/2014 Epaia, C-213/13 auzia; 7/4/2016 Epaia, C-324 auzia).

243. Aurreproiektura itzuliz, EMAS sistema, etiketa ekologikoa eta beste alderdi batzuk kontratazio publikoko prozeduretan txertatzea aurreikusten da aurreproiektuan, «sektore publikoko kontratuei buruzko araudiak arlo horretan zehazten duenaren arabera». Bi kontu horiek, gainera, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 94. artikuluan (EMAS) eta 127. artikuluan (etiketak) jasotzen ditu. Aurreproiektuaren xedapenak, beraz, legezkoak dira, eta kontratuen arloko legeriarekin bat datoz.

244. 83. artikuluan aurreikusten den erosketa publiko berdeari dagokionez, bat dator, oro har, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak gizarte-arloan eta ingurumen-arloan arduratsua den kontratazioaren inguruan xedatzen duenarekin. Gainera, 5. zenbakiak oinarrizko legeriarekin behar bezala bateratu dadila laguntzen du. Hala ere, ez da aipamen zehatzik egiten ingurumenaren inguruko eskakizunak kontratuaren xedeari loturik egoteko beharraren inguruan; Sektore Publikoko Kontratuen Legearen artikuluetan, aldiz, ideia hori behin eta berriz errepikatzen da.

245. 83. artikuluko 3. zenbakian xedatzen denak, nolanahi ere, analisi espezifikoa eskatzen du. zenbaki horretan, autonomia-erkidegoko botere esleitzaile guztiei inposatzen zaie obra- eta hornidura-kontratuak egikaritzeko administrazio-klausulen eta preskripzio tekniko partikularren agirietan haietako bakoitzari begira erabili beharreko azpiprodukturen, bigarren mailako lehengaien, material birziklatuen edo berrerabiltzeko xedean prestatzeko prozesuetatik eratorrien ehunekoak adierazteko beharra. Gainera, material horiek gutxienez %40an erabiliko direla zehazten da, behar bezala justifikatutako arrazoi teknikoak direla-eta ehuneko hori murriztea beharrezkoa denean izan ezik.

246. Kasu horretan, ehunekoa murrizteko aukera ematen du zenbakiaren azken tartekiak, baina aurreproiektuak, ordea, baldintza bat zehazten du Sektore Publikoko Kontratuen Legearen esparruan sartzeko zailtasun gehiago dituzten obra- eta hornidura-kontratu guztientzat.

247. Ohartarazi dugun bezala, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak nabarmendu egiten du lizitazio bakoitzean ingurumen-arloko betebeharrak edo irizpideak kontratuaren xedearekin lotzeko eskakizuna. Kasu honetan, obra- eta hornidura-kontratuetan, lotura hori, izaera orokorrarekin, kasu guztietan dagoela pentsa daiteke; izan ere, lotura zuzena dute azpiprodukTuen, bigarren mailako lehengaien edo material birziklatuen balizko erabilerarekin. Hala, aipatu bezala, autonomia-erkidegoaren eskumenaren esparruan, hemen planteatzen den eskakizuna txertatzeko aukera egongo litzateke. Arrazoi teknikoak direla-eta lotura hori posible ez den kasuetan, eskakizun hori murriztu edo kendu egin daiteke, betiere hori arrazoituz. Nolanahi ere, komenigarria litzateke kontratu horien (obrak eta hornidurak) eta ingurumenaren arteko lotura aipatzea, artikuluetan ez ezik, zioen azalpenean ere.

C) Ingurumen-fiskalitatea

248. Aurreproiektuaren 85. artikuluak ingurumen-fiskalitatea jorratzen du. Haren edukia, funtsean, printzipioetan oinarritzen da, eta, hala, fiskalitatea ingurumenaren babesa sustatzeko neurri gisa erabiltzeari bide ematen zaio. Hala ere, izapide eta betebehar zehatzak jasotzen dituzten pasarteak ere baditu.

249. Nolanahi ere, fiskalitateaz kanpoko ingurumen-xedea duten tributuak ditu hizpide.

250. Konstituzio Auzitegiak hainbat adierazpenetan mugatu ditu tributu horiek erabili ahal izateko eremua eta baldintzak, eta, laburbilduz, honela adierazten dira:

a) «Tributu» izendapena ez da nahikoa ekologiaren edo ingurumenaren arloko tributuez ari garela zehazteko (besteak beste, KAE 85/2013, 3. OJ; eta 60/2013, 3. OJ). Auzitegiak baieztatzen duenez, nominalismo hutsa litzateke lege-izendapena elementu erabakigarri bat dela ulertzea; izan ere, «tributu-kategorietako bakoitzak, lege-izendapenetik harago, berezko izaera espezifikoa du, dagokion araubide juridikoak ematen dizkion konfigurazioaren eta egituraren arabera» (KAE 296/1994, azaroaren 10ekoa, 4. OJ, KAE 73/2011 Epaian, maiatzaren 19koan, errepikatzen dena).

b) Ingurumen-izaera ezin daitekeela izan ageriko helburu gehitu zuen urriaren 6ko 168/2004 epaiak, baizik eta tributu guztiari modu nabarmenean eragin behar dion xedea. Beraz, beharrezkoa da «helburu hori [tributuaren] egituraren elementu nagusietan islatzea» (KAE 85/2013, apirilaren 11koa.

c) Ekainaren 5eko 122/2012 Epaiak adierazi zuenez, zergaren araubide juridiko guztiak, oro har, lotura bat izan behar du ingurunearekin. Lotura hori EKren 45. artikuluan oinarritu behar da, Konstituzioak ingurumenaren arloko eskubideari egiten dion oinarrizko erreferentzia bat baita. Beraz, ingurumen-xedea loturik egon behar da

tributuaren araubide juridikoaren artikuluekin; hala, zergaren egituran islatu beharko da fiskalitate-izaerarik ez duela.

d) Horrenbestez, tributuaren funtsezko elementuak aztertu behar dira, egiatan ingurumen-izaera edo izaera ekologikoa duela egiaztatzeko: zerga-egitatea, zerga-oinarria, tributuaren kuantifikazioa eta zergak ordaintzera behartutako subjektuak.

e) Azkenik, zergak ordaintzera behartuta ez dauden kasuak, kenkariak eta beste kontu batzuk har daitezke kontuan.

251. Konstituzio Auzitegiak, gainera, tributua definitzeko balizko elementutzat jo du tributua aplikatzea; izan ere, kasuren batean, lortu asmo dagoen xedeari zerga aplikatzea tributuaren egiazko izaera kalifikatzeko zantzuetako bat da –ez, ordea, garrantzitsuena–, ;hau da, autonomia-erkidegoko tributua zerga-izaerakoa edo fiskalitateaz kanpoko izaerakoa den zehazteko orduan (KAE 179/2006, ekainaren 13koa).

252. Hala ere, urriaren 6ko 168/2004 Epaian, honako hau aipatzen da: «Kargaren arauketatik ondorioztatzen da lotura estua duela politika publiko sektoriala egitearekin, kasu honetan arrisku handien prebentzioarekin, eta xede jakin baten finantzaketari eragiten diola, kargaren produktu osoa bideratzen baita segurtasun-funts bat eratzera [...]. Ondorioz, esan daiteke autonomia-erkidegoko legegileak ez duela sortu diru-sarrera publikoen iturri berririk, oro har, xede fiskalekin. Aitzitik, tributu finalista bat sortu du, babes zibilarentzako arriskuaren sortzaileak arriskuen prebentzioan eta horien aurkako borrokan erantzunkide bilakatzeko bideratua.»

253. Sarrera honi amaiera emateko, esan dezakegu ingurumen-tributu baten helburua fiskala ez denean, zergak biltzeaz bestelako helburua duela, esaterako, babesa hobetzeko politikak sustatzea, hala babes-neurri zehatz batzuk zuzenean ezarriz, nola ingurumen-arriskua -prebentzioa kontuan hartuz.

254. Bada, aurreproiektuaren 85. artikuluan zehazten denera bueltatuz, euskal administrazio publiko guztietara bideratzen diren alderdiak bereizi behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrera bereziki bideratzen diren alderdietatik.

255. Bigarrenei dagokienez, diru-sarreren iturri horretatik datorren zerga-bilketari inposatu nahi zaion izaera finalista nabarmentzen da. Kontu horri dagokionez, aurrekontu-arloan nagusitzen den desafektazioaren arau orokorra aldatzen duela adierazi da ogasun-arlotik. Hala ere, testuan mantendu egin da; izan ere, arauaren maila dela-eta, aipatutako printzipioa salbuesteko aukera legoke, hots, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan jasotzen dena (Dekretu horren bidez onartu zen Euskal Herriko Herri Ogasuntzaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina).

256. Nolanahi ere, honako hau ohartarazi behar da: ordena fiskaleko neurrien funtsezko baldintzak sortzen eta erregulatzen dituzten arauek, lege-mailakoak izan beharko dutenez, zerga-bilketaren xedea zehaztu ahal izango dute. Horretarako, ez da kontuan hartuko aurreproiektu honetan, oro har, zer islatzen den.

257. Autonomia-erkidegoko administrazio publiko guztietara bideratutako mezuei dagokienez, hainbat jarduera egiteko aukera irekitzen dutela ikusi dugu dagoeneko, administrazio horietako bakoitzak fiskalitate-arloan dituen eskumenak aldatzen ez diren bitartean.

258. Lehen zenbakiak administrazio orokorrean ingurumenari loturiko eskumenak dituen sailari aldez aurreko kontsulta bat egiteko izapide bat gehitzen duela baino ez da aipatu behar. Izapide horren inguruan, beste administrazio batzuei ere eragiten dien neurrian, hainbat galdera planteatzen dituela ohartarazi nahi dugu, haren eremuari, zentzuari, derrigorrezkotasunari edo artikulazio praktikoari loturik. Kontu horiek, beraz, aurreproiektuan zehaztu beharko lirateke, modu laburrean bada ere.

V ERAKUNDE KOLABORATZAILEAK ETA IKUSKARITZA-FUNTZIOA

259. Ikuskaritzari eta ingurumen-kontrolari buruzko zazpigarren tituluaren barnean, erakunde kolaboratzaileak aztertzen ditu 89. artikuluak.

260. Prozesuan zehar aurkeztutako alegazio batzuek hainbat galdera planteatu dituzte erakunde hauek ikuskaritza-funtzioaren esparruan duten funtzioaren inguruan.

261. Alegazioen erantzunetan argitu denez, laguntzarako jarduketa materialetara mugatzen dira ikuskaritzan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileen funtzioak, eta 89.2 artikuluko b) eta c) apartatuetan zehazten dira, funtsean. Hala ere, erakunde kolaboratzaileen funtzioak, Ingurumen Administrazioari loturik, ez dira mugatzen ikuskaritza-funtzioaren eremura. Horrez gain, adibidez, baimenak edo lizentziak eskatzeko baldintzak eta behar diren datuak idatziz balioztatu beharko dituzte [89.2 artikuluko a) apartatua]. Hori dela-eta, erregulazio hori sistematikoki kokatzen da beti kapitulu independente batean (I. kapitulua), ikuskaritzari eta kontrolari buruzko tituluaren barnean, baina, era berean, ingurumen-ikuskaritza lantzen duen kapitulua baino lehen (II. kapitulua).

262. 92. artikuluak, bere aldetik, erakunde kolaboratzaileek ikuskaritzaren esparruan dituzten funtzioak hainbat jarduketa materialetara mugatzen direla argitzen du, jarduketa horiek funtzionario publikoentzat erreserbatuta ez daudenean, ahalmen publikoak erabiltzen dituztelako edo bestelako arrazoiak daudelako.

263. Artikuluak tarteki horretan adierazpen argia egiten duen arren, bi ohartarazpen edo iradokizun egin daitezke horren harira.

264. Lehena: 91. artikuluak xedatzen duen elkarlanerako beharra (II. kapituluan) 89. artikuluak (erakunde kolaboratzaileak) aipatzen dituen langileekin du soilik zerikusia eta ez ditu kontuan hartzen ikuskaritza-funtzioak betetzen dituzten administrazio-langileak. Akats bat dela pentsatu dugu; izan ere, bertan, 89. artikulura egiten da igorpena, nahiz eta, berez, 90. artikulura egin beharko litzatekeen –ingurumen-ikuskaritzaren xedea eta ikuskaritza-eskumenak–. Hala ez balitz, ikuskaritza-prozedura baten esparruan elkarlanean aritzeko beharrak ikuskaritza-jarduera guztiari eragin behar dio eta, beraz, lehenik, 92. artikuluan aurreikusten diren administrazio-langileei.

265. Bigarrena: 92.1 artikuluaren idazketarekin du zerikusia, hau da, ingurumen-kontrol, -zaintza eta -ikuskaritzako lanak egiteari buruzko artikuluaren idazketarekin. Gure iritziz, gaztelaniazko idazkeran, ordezko aukera adierazten duen formula saihestea komeni da («podrá realizarse directamente… o bien por entidades de colaboración…»). Izan ere, nolabaiteko nahasmena eragin dezake. Horren ordez, ikuskaritza-jarduera (artikuluaren tituluaren arabera) horretarako izendatu diren administrazio publikoko langileei esleitzea proposatzen dugu, eta, ondoren, funtzionario publikoei erreserbatzen zaizkien ahalmen publikoak erabiltzea eskatzen ez duten kontrol-, zaintza- eta ikuskaritza-lanak erakunde kolaboratzaileei esleitu ahal izango zaizkiela gehituko da. Kasu horretan, sektore publikoko kontratuei buruzko legeriaren arabera egingo da esleipena.

VI INGURUMEN-LEGEZKOTASUNA BERREZARTZEA ETA INGURUMEN-KALTEENGATIKO ERANTZUKIZUNA

266. Aurreproiektuak bere barnean hartuko ditu Europako zuzentarauen barneko ingurumen-politikaren printzipioak, eta horien artean nabarmentzen dira zuhurtasun-printzipioa, kutsadura sorburuan bertan zuzentzeko printzipioa eta «nork kutsatu, hark ordaindu» printzipioa.

267. Zuhurtasun-printzipioaren arabera, ekintza edo politika jakin batek giza osasunarentzat edo ingurumenarentzat arriskua ekar dezakeen susmoa edo zalantza zientifikoa baldin badago, beharrezkoak diren neurriak hartu behar dira ez dadin gauzatu arrisku-susmo hori. Produktu baten eragin potentzialki arriskutsuen kasuan, adibidez, ebaluazio zientifiko objektibo bat egin ondoren zalantzak ez badira uxatu, produktu horren banaketa eteteko agindua edo hori merkatutik kentzekoa eman daiteke.

268. Neurri horiek ez dute baztertzaileak izan behar; aitzitik, neurrikoak izan behar dute, eta informazio zientifiko gehiago edukitzen denean berrikusi beharko dira.

269. «Nork kutsatu, hark ordaindu» printzipioak helburutzat du espezie babestuei eta habitat naturalei, urari eta lurzoruari eragindako ingurumen-kalteak prebenitzea edo konpontzea. Printzipio horren arabera, operadoreek prebentzio-neurriak hartu behar dituzte ingurumenarentzako mehatxu berehalakoa dagoen kasuan, eta, kaltea dagoeneko eragin bada, hura konpontzeko neurri egokiak hartu beharko dituzte, eta kostuak ordaindu.

270. Sorburuan bertan zuzentzeko printzipioaren arabera, kutsatu denean, neurri zuzentzaileak aplikatu beharko dira ahalik eta azkarren eta kutsadura-iturritik ahalik eta gertuen. Horrez gain, hori gertatu eta ahalik eta denbora gutxienera aplikatu beharko dira.

271. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko apirilaren 21eko 2004/35/EE Zuzentarauak, ingurumen-kalteak prebenitzeko eta konpontzeko ingurumen-erantzukizunari buruzkoak, printzipio horiek garatzen ditu, eta horren transposizioa egin da barne-zuzenbidera, Ingurumen-erantzukizunari buruzko urriaren 23ko 26/2007 Legearen bitartez. Erantzukizun hori aplikatzeko, ez dira kontuan hartzen ingurumena kaltetzen duten jarduketei jar dakizkiekeen administrazio- edo zigor-zehapenak.

272. Kalteen ondoriozko erantzukizun orokorrarekin alderatuz, ingurumen-erantzukizunak zenbait ezaugarri espezifiko eta ezaguterraz ditu. Hasteko, izaera administratiboa du, eta, beraz, Ingurumen Administrazioak eska dezake zuzenean, horren aurka jar daitezkeen errekurtsoak gorabehera. Gainera, erantzukizun mugagabea da; izan ere, erreparatzeko beharraren bidez itzuli nahi dira hasierako egoerara baliabide naturalak, kasua bada, baliabide kaltetuak. Azkenik, erantzukizun objektiboa da, eta, beraz, bazterrean uzten da dolo, erru edo axolagabekeriarik egon den.

273. Aurreratu dugun bezala, ingurumen-erantzukizunaren araubidea ez dago zehapen-araubidearen mende. Azken horrek, zehapenak jartzeko xedeaz gain, disuasio- eta, beraz, prebentzio-xedea ditu.

274. Aurreproiektuak, haren sistematikaren barnean, gogoan hartzen du ingurumeneko diziplina-araubidearen eta ingurumen-erantzukizunaren arteko bereizketa, eta nabarmendu beharreko bi kontu sartzen ditu bigarren esparru horretan: alde batetik, ingurumen-legezkotasun berrezartzeko araubidea eta, bestetik, ingurumen-kalte ez adierazgarrien erantzukizuna.

275. Ingurumen-legezkotasunaren berrezartze-araubideak egoera jakin bat hartzen du abiapuntutzat, non ingurumenean ondorioak eragin ditzakeen jarduera bat ez baita egokitzen aurreproiektuan aurreikusten den ingurumen-arloko esku-hartzearen esparrura. Kasu horietan, bi hipotesi bereizten ditu: jarduera legeztatu daitekeen kasuak

eta jarduera legeztatu ezin den kasuak. Beraz, azken horiei dagokienez, behin betiko amaitu beharko da (96.1 artikulua)

276. 96. artikuluko 2. zenbakiak xedatzen duenez, legeztatzeaz edo itxieraz gain, neurri zuzentzaileak hartzeko agindua eman ahal izango da, edo ingurumenari kalte adierazgarriak eragin ez zaizkionean, aldatua izan den egoera lehengoratzeko agindua eman ahal izango da.

277. Horrenbestez, ingurumen-kalte adierazgarrietarako zehapen-araubideaz eta 26/2007 Legetik eratorritako ingurumen-erantzukizunaren araubideaz gain, aurreproiektuak, 96. eta 99. artikuluetan, babes handiagoko neurri gisa, hainbat neurri sartzen ditu adierazgarriak ez diren ingurumen-kalteen aurka, ingurumen-legezkotasuna berrezartzeko prozeduraren esparruan.

278. Azpimarratzekoa da 99. artikuluan aurreikusten diren neurriak kalte ez-adierazgarrietarako aurreikusi direla; izan ere, 96. artikuluko 3. zenbakiak hurrengo kapitulura bidaltzen gaitu ingurumen-kalte adierazgarriak egon diren kasuetarako edo halako kalteen mehatxua berehalakoa denerako.

279. Hala ere, inposatutako neurri zuzentzaileen egikaritzea subsidiarioa izan daitekeela aurreikusten du 100. artikuluak, «batez ere ingurumenari edo pertsonen osasunari kalte larriak eragiteko mehatxua berehalakoa denean». Baina kasu hori bat dator II. kapituluko ingurumen-erantzukizunaren araubidearekin; izan ere, 101. artikuluan, jarduera ekonomiko eta profesionalek eragindako ingurumen-kalte adierazgarriak konpontzeaz gain, horiek saihestu eta prebenitu behar direla zehazten da, kalte horiek gertatzeko mehatxu berehalakoaren aurrean.

280. Finean, bateragarriak direla irizten den arren, administrazioak ingurumen-legezkotasuna berrezartzeko gara ditzakeen jarduketak zehaztasun handiagoz mugatzea gomendatzen du batzordeak, baita II. kapituluan jasotzen diren kasuetan hartu ditzakeen edo behar dituen jarduketak ere.

281. Artikulu berari loturik (100. artikulua), batzordeak komenigarritzat jotzen du formari loturiko bi kontu proposatzea.

282. Lehen kontuak 1. zenbaki-amaierako tartekiarekin du lotura. Horren arabera, egikaritze subsidiariotik eratorritako gastuak premiamendu bidez exijituko zaizkio jardueraren sustatzaileari edo titularrari. Premiamendua beti denez subsidiarioa epe boluntarioan egindako ordainketetan, «exijitu ahal izango zaizkio» esaera erabiltzea gomendatzen da, edo abuztuaren 31ko 212/1998 Dekretuan xedatzen dena aipatzea, hots, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketa Erregelamendua onartzen duen dekretuan.

283. Bigarren kontuak ere idazketarekin du zerikusia, baina, kasu honetan, 2. zenbakiko lehen zatiko mezuen hurrenkera aldatzea baino ez da gomendatzen, argiago gera daitezen. Honela egin liteke: «Jardueraren edo instalazioaren sustatzaileak edo titularrak neurri zuzentzaileak aplikatzeari uko egiten baldin badio eta kalteak eragiteko mehatxua berehalakoa ez denean edo neurrien aplikazioaren atzerapenak ingurumena edo pertsonen osasuna arriskuan jartzen ez duenean, administrazio publiko eskudunak isun hertsatzaileak jarri ahal izango dizkio».

284. Zortzigarren titulu honen bigarren kapituluaren inguruan ez da inolako iruzkinik egin behar; izan ere, «blokean» ezartzen du lotura ingurumenaren alorreko erantzukizunari buruzko Europako araudiarekin (ingurumen-kalteen alorreko prebentzioari eta konponketari loturik) eta Euskal Autonomia Erkidegoan aplikagarri den transposizioaren araudiarekin (101.1 artikulua).

VII INGURUMEN-DIZIPLINA

285. Aurreproiektuak ingurumen-diziplinaren arloa nola arautzen duen aztertzen hasi aurretik, komenigarria iruditzen zaigu, sarrera gisa, zehapen-arloko eskumenaren inguruko konstituzio-doktrina labur-labur gogoratzea eta, era berean, ingurumen-arloko zehapen-araubideari buruzko doktrina espezifikoagoa gogoratzea.

286. Zehapen-araubideari loturiko eskumen-banaketak izaera instrumentala du eskumen substantiboen egikaritzeari dagokionez (KAE 48/1988, martxoaren 22koa, KAErr 1988, 48; 227/1988, azaroaren 29koa, KAErr 1988, 227 edo; 96/1996, maiatzaren 30ekoa, KAErr 1996, 96). Horrekin lotuta, autonomia-erkidegoek zehatzeko administrazio-arauak egin ditzakete dagokion arloaren gaineko eskumena izanik, xedapen horiek zehapen-zuzenbideko esparru horretan ezarritako konstituzio-bermeetara doitzen direnean (Konstituzioko 25.1 artikulua), eta ez direnean arrazoigabeki eta neurriz kanpo aldentzen lurraldeko beste toki batzuetan aplikagarria den araubide juridikoari dagokionez lortu nahi den xedetik (Konstituzioaren 149.1.1 artikulua; KAE 87/1985, uztailaren 16koa, KAErr 1985, 87; 196/1996, azaroaren 28koa, KAErr 1996, 196).

287. Autonomia-erkidegoek arau-hausteak eta zehapenak erregulatzen dituztenean, Estatu ordenamenduaren oinarrizko printzipioek mugatuko dute jarduna (KAE 227/1988, abenduaren 29koa, KAErr 1988, 227) eta, nolanahi ere, Konstituzioaren 149.1.1 artikuluan xedatzen denari eutsi beharko zaio.

288. Ea berean, zehazpen-prozedura «administrazio-prozedura erkidera» egokitu beharko da. Azken horren konfigurazioa, bide batez, Estatuaren eskumen esklusiboa da (EKren 149.1.18 art.). Horrek ez du esan nahi, hala ere, administrazioko zigor zuzenbidearen erregulazio osoak, oinarrizko eskubideen eremuari eragiten dionez, Estatuaren eskumen esklusiboa izan behar duenik (KAE 87/1985, uztailaren 16koa, KAErr 1985, 87;

KAE 157/2004, irailaren 23koa, KAErr 2004, 157; KAE 81/2005, apirilaren 6koa, KAErr 2005, 81 eta; KAE 100/2005, apirilaren 20koa, KAErr 2005, 100).

289. Ingurumenaren arloko zehapen-araubideari dagokionez, eskumenen analisiari buruzko atalean jasotzen den eskema orokorrari jarraitzen zaio. Horrexegatik, Konstituzio Auzitegiaren abenduaren 28ko 196/1996 Epaiak adierazten duenez,«Espainiako Konstituzioaren 149.1.23 artikuluaren arloan, oinarrizko legeriak, ezaugarri teknikoen aldetik, babes-neurri minimoei erantzuten die, eta, beraz, arau osagarriak edo babes gehigarriak baimenduta daude. Horrenbestez, kasu honetan, Estatuaren oinarrizko legeriak ez du betetzen uniformetasun-erlatiboko betekizun bat, baizik eta gutxieneko batzuen bidez antolatzeko eginkizuna, eta gutxieneko horiek beti errespetatu behar dira, baina aukera eman diezaiekete autonomia-erkidegoei, arlo honetan eskumena dutenean, babes-maila handiagoa ezartzeko, hori egite hutsagatik Estatuaren oinarrizko araudiaren aurka joan gabe, ingurumen-babesaren arloan. Hala, agindu konstituzionalaren zentzua da Estatuko oinarriak gutxienekoak direla, eta, beraz, Estatuak haren garapenean ezar ditzakeen babes-mailak jaso edo hobetu egin daitezkeela arautze autonomikoaren bidez. Finean, Estatuko legeak emandako babesa handitu eta hobetu dezake lege autonomikoak; aldiz, Konstituzioaren arabera, desegokia da mugatzea edo murriztea». Doktrina hori geroago ere berretsi izan da, Konstituzio Auzitegiaren urtarrilaren 18ko 7/2012 Epaian.

290. Azken finean, eta ingurumen-arloko zehapen-arauei dagokienez:

a) Estatuko oinarrizko arauak «babes-neurri minimoak» dira, eta autonomia-erkidegoen esku jartzen dute «arau osagarriak edo babes gehigarria» emateko ahalmena.

b) Ez dute «uniformetasun-erlatiboko betekizun bat» betetzen, baizik eta beti errespetatu behar diren «gutxieneko batzuen bidez antolatzeko eginkizuna».

c) Gutxieneko batzuen bidez antolatzeko eginkizun horrek aukera ematen die autonomia-erkidegoei «babes-maila handiagoa» ezartzeko, eta arrazoi bakar horrengatik ez lirateke joango «Estatuaren oinarrizko araudiaren aurka, ingurumen-babesaren arloan».

d) Oinarrizko arauek ezartzen dituzten babes-mailak «jaso edo hobetu egin daitezke arautze autonomikoaren bidez».

e) Autonomia-erkidegoko legeriak ezin du Estatuko oinarrizko legeria «mugatu edo murriztu» zehapenaren arloan.

291. Testuinguru horretan, ingurumeneko diziplina-araubideari aurre egiten dio aurreproiektuak, eta zailtasun bat dakar horrek, egoera ugariri erantzun behar baitie, arauak ingurumen-babesari loturik jorratzen dituen ikuspegi desberdinetatik.

Horrenbestez, zeregin nahasi bat da hori, eta ahalegin berezia eskatzen du barne- eta kanpo-koherentzia mantentzeko.

292. Arauak edukian hainbat araubide sartzen dituelako esaten dugu hori: ingurumeneko esku-hartzearen araubidea, ingurumen-ebaluazioarena eta ingurumenaren legezkotasunaren berrezarpenarena. Gainera, era berean, lotura baten bidez den arren, ingurumen- kalte adierazgarrien ondoriozko erantzukizunaren araubidea ere sartzen da edukian. Zehapen-araubideari ikuspegi horietako bakoitzetik egin dakioke aurre, eta horren erakusle da Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legeak, Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legeak eta, gainera, Ingurumen-erantzukizunari buruzko Legeak hainbat xedapen zehatzaile jasotzen dituztela, titulu honen sarreran adierazi diren baldintzen arabera kontuan hartu beharrekoak.

293. Administrazioaren *ius puniendi* delakoa, hortaz, ingurumen-babeserako arlo horietara guztietara hedatu daiteke, eta, arau-hausteak tipifikatzeko orduan, bateratzeko ahalegin garrantzitsua eskatzen du horrek, beharrezkoa den koherentzia lortzeko, eta, gainera, erredundantzian erori gabe.

294. Xede horrekin, hurrengo gogoetak planteatzen dira jarraian.

A) Arau-hausteak eta zehapenak kalifikatzea

295. Ingurumeneko esku-hartzearen ikuspegitik, honako hau baino ez da oso astuntzat jotzen: jarduerak eta instalazioak eraikitzea, muntatzea, ustiatzea edo leku batetik bestera garraiatzea, derrigorrezkoa den ingurumen-baimen integraturik gabe. Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legean ez bezala, kalifikazio horretan ez da kontuan hartzen zer arrisku edo kalte eragiten diren, baina, gero ikusiko dugun bezala, arau-hauste astunetan, bai, kontuan hartzen da. Hala ere, kasu honetan, arau-hausteak bat egiten du Estatuak tipifikatzen duenarekin, eta, gainera, harago joan daitekeenez, babes handiagoko elementutzat jo daiteke.

296. Ez da berdin gertatzen, aldiz, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legeak arau-hauste oso astun gisa kalifikatu dituen gainerako kasuekin (31. artikulua).

297. Hala, funtsari eragiten dioten aldaketak egitea, baimenik lortu gabe egiten badira, astuntzat baino ez du jotzen aurreproiektuak [104.3.b) artikulua]. Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legean, aldiz, arau-hauste oso astuntzat jotzen da hori, betiere ingurumenean kalte edo narriadura larri bat eragin baldin bada edo pertsonen osasuna edo segurtasuna arrisku larrian jarri bada.

298. Ingurumen-baimen integratuan ezartzen diren baldintzak ez betetzea edo zehapen-prozedura baten esparruko behin-behineko neurriak ez betetzea ere oso astuntzat jotzen da Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legean, betiere ingurumenean kalte edo narriadura larri bat eragin baldin bada edo pertsonen osasuna edo segurtasuna arrisku larrian jarri bada. Aurreproiektuak, aldiz, arau-hauste astuntzat jotzen du [artikuluko f) eta g) apartatuak].

299. Gogoratu behar dugu, oinarrizko legean zehazten den kalifikazioaren arabera, autonomia-erkidegoko legegileak jokabide jakin batzuk arau-hauste oso astuntzat jo behar dituela beti. Horrek, hala ere, ez du gainditzen oinarrizko eremua (KAE 7/2012, urtarrilaren 18koa).

300. Ingurumen-ebaluazioaren ikuspegitik, aurreproiektuak barne hartzen du Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legean berdin kalifikatzen den kasu bakarra.

301. Arau-hauste oso astunen barnean ez da sartzen ingurumen-erantzukizunaren araubidearekin loturiko arau-hauste bat bera ere ez. Hasiera batean, pentsa daiteke, aurreproiektuko 101. artikuluan «blokean» egiten den loturarekin, Ingurumen-erantzukizunari buruzko Legearen V. kapituluko arau-hausteei eta aurreikusitako zehapenei buruzko xedapenak ere barne hartzen direla. Hala ere, lehen iritzi hori indargabetu egiten da 104.3 artikuluko h) apartatuan xedatzen den arau-haustearen ondorioz: ingurumenaren alorreko legezkotasuna eta ingurumenaren alorreko kalteengatiko erantzukizuna berrezartzeko prozeduretan inposatutako neurriak ez betetzea.

302. Batzordeak ez daki organo sustatzailearen asmoa ingurumen-arloko kalteengatiko erantzukizunarekin loturiko arau-hauste guztiak arau-hauste astun gisa kalifikatzea al den, edo adierazgarriak ez diren kalteekin loturiko neurriak (96.2 artikuluan aipatzen direnak) baino ez dituen kontuan hartzen, bereizketarik egiten ez duen arren. Lehen aukeraren kasuan, kontuan hartu beharko litzateke Ingurumen-erantzukizunari buruzko Legearen V. kapituluaren minimo-izaera. Saihestu edo eutsi nahi den ingurumen-kalteari loturiko ez-betetzeen kasuetan, aurreproiektuak baino isun handiagoak aurreikusten ditu lege honek, eta, horrez gain, baimenaren azkentzea ere; irizpenaren mende jarri den testuak, aldiz, ez du ondorio hori aurreikusten arau-hauste astunetarako.

303. Arau-hauste astunei dagokienez, 104.3 artikuluko h) hizkian aurreikusten den arau-hausteari buruz dagoeneko aurreratu dugunaz gain, ohartarazpen bat egin beharko litzateke o) apartatuaren inguruan; izan ere, bertan, arau-hauste astuntzat jotzen dira «aurreko atalean oso astun gisa sailkatutakoak, baina ingurumenean edo pertsonengan dituzten eraginengatik, arau hauste oso astuntzat hartzeko modukoak ez direnak.».

304. Kasu honetan, badirudi bereizketa bat egin nahi duela, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legean aurreikusten den ildotik. Hala, kalte edo narriadura larririk ez dagoenean edo pertsonen segurtasun edo osasunarentzat arrisku larririk sortzen ez denean, arau-hauste astuntzat joko dira, eta ez oso astuntzat. Hala ere, idazketa ez da batere zehatza, zehapenen eremuan gaudela kontuan hartzen bada.

305. Legezkotasun-printzipioak, zehapenen eremuan, ez du soilik adierazten zehatzeko ahalmena (*lex previa*) ematen dela lege-mailako arauekin; izan ere, horrez gain, maila jakin horretako arauak berak deskribatu beharko du, hain zuzen, jokabide zehatza (*lex certa*).

306. Xedea, aurreratu dugun bezalaxe, arau-haustearen kalifikazioa bereiztea baldin bada, kalte edo arrisku-egoerarik gertatu den kontuan hartuz, xedea argiago zehaztea gomendatzen dugu, atal honetan ez ezik, oso astuntzat jotzen diren arau-hausteen deskribapenean ere.

B) Arau-haustetik eratorritako efektuen konfiskazioa

307. 108. artikuluak aukera hau xedatzen du: «Zehatzeko ahalmena duten organoek arau-haustetik eratorritako efektuak, xede horretan erabilitako tresnak, euskarri materiala osatzen duten objektuak eta eratorritako irabaziak konfiskatu ahal izango dituzte, horiek guztiek hartu ahal izan duten itxura hartuta ere».

308. Bigarren zenbakiak, bere aldetik, honako hau zehazten du: «Ezin konfiskatu ahal izango da objektuak edo tresnak asmo oneko hirugarren batenak direnean, arau-haustearen erantzulea ez denean eta legez eskuratu dituenean, ez badago ingurumenari edo pertsonen osasunari kalte egiteko berehalako arriskurik».

309. Kasu honetan, konfiskazioak funtzio desberdina izan dezakeela ohartarazi behar du batzordeak, zehapen osagarria edo kautela-neurria izan daiteke-eta.

310. Lehen zenbakiak, agerikoa denez, zehapen osagarriaren funtzioa duen konfiskazioarekin du zerikusia; izan ere, arau-haustearen bidez lortutako irabaziak ere aipatzen ditu. Helburua ez da arau-haustea saihestea (dagoeneko egina baita), baizik eta arau-hausleak, horren bitartez, legez kanpoko ustiapenik ez gauzatzea.

311. Bigarren zenbakiak asmo oneko hirugarren bat babesten du efektu edo tresnen konfiskaziotik, baina, azken tartekian, berriz ere aipatzen du konfiskazioa. Hala ere, kautela-neurri gisa planteatzen dela dirudi, arau-haustearen erantzule ez diren asmo oneko hirugarrenek zehapenik jaso ezin dezaketela aipatzen duelako.

312. Beraz, bi egoera horiek bereiztea gomendatzen da, eta bigarren kasua 111. artikuluan aplikatzea, jasotzen diren behin-behineko neurriak nahikoa ez direla uste denean (zigilatzea, instalazioa aldi baterako ixtea edo jarduera etetea edo aldi baterako bertan behera uztea).

C) Isun hertsatzaileak eta betearazpen subsidiarioa

313. Aurreproiektuaren 113. artikuluak arau-hausleei isun hertsatzaileak jartzeko aukera aztertzen du, eragindako kalteak lehengoratzen eta konpontzen ez badituzte, edo eragindako kalteak eta galerak ordaintzen ez badituzte, (...) dagokion aginduan finkatutako epea igarotakoan. Kontuan hartu behar da formulazio hori (berdin-berdina edo aldaketa txikiekin) hainbat arautan egin izan dela; hau da, arau-hausleari inposatzen zaio egoera lehengoratzeko, kalteak konpontzeko edo azken horiek ordaintzeko betebeharra. Hala ere, komenigarria da horren harira azalpen bat ematea.

314. Nahitaez betearazteko bitartekotzat jotzen dira isun hertsatzaileak Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 100. artikuluan xedatzen diren administrazio-egintzetan, ondarearekiko premiamenduarekin, betearazpen subsidiarioarekin eta pertsonak derrigortzearekin batera.

315. Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 103 artikuluak, bere aldetik, modu espezifikoan aipatzen du nahitaez betearazteko bitarteko hau, eta administrazioak zer kasutan erabil dezakeen zehazten du. Zehazki, honako kasu hauek aipatzen ditu: a) egintza guztiz pertsonaletan, betebeharra daukan pertsona zuzenean derrigortzea egoki ez denean; b) derrigortzea egoki izanda ere administrazioak komenigarritzat jotzen ez duenetan; eta c) betebeharra daukanak beste bati egintzak betetzeko mandatua eman diezaiokeenean.

316. Zenbateko likido bat ordaindu behar denean, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 101. artikuluak ondarearekiko premiamendua jasotzen du nahitaez betearazteko bitarteko gisa.

317. Bereizketa horretatik abiatuz, batzordeak ez du uste zentzuzkoa denik isun hertsatzaileak jartzerik zor likido bat ordaindu ez denean, hala nola eragindako kalte eta galeren kalte-ordainak, eta, nolanahi ere, ez du uste behar bezala sartu daitekeenik Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean xedatzen den nahitaezko betearazpenaren esparruan.

318. Ez du zentzurik, zeren, isun hertsatzaileekin, zorra handitu baino ez litzateke egingo. Izan ere, premiamenduaren bideak disuasio-mekanismoak erabiltzen ditu dagoeneko

(errekarguak eta berandutze-interesak), administrazioarekin duten zor likidoa epe boluntarioan ordaintzen ez duten pertsonak zehatzeko.

319. Isun hertsatzaileak, ordea, zentzuzkoak dira interesdunari zerbait egiteko edo ez egiteko beharra inposatu nahi zaionean. Kasu horietan, hala nola lehengoratzeko eta kalteak konpontzeko beharraren kasuan, guztiz zentzuzkoa da nahitaez betearazteko bitarteko horretara jotzea. Hala ere, esan dugun bezala, ez da zentzuzkoa kalte-ordain ekonomiko zehatz bat ordaindu behar denean.

D) Kontratatzeko debekua

320. 114. artikuluak, «kontratatzeko debekua» izenekoak, kontratatzeko debekua eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren dirulaguntzak jasotzeko debekua jasotzen ditu. Artikulu horri dagokionez, hainbat ohartarazpen egin behar ditugu.

321. Lehenik, ezin dira plano beretik aztertu kontratatzeko debekua eta dirulaguntzak jasotzeko debekua. Dirulaguntzen kasuan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2.h) artikuluak onuradun izateko aukera debekatzen du kasu honetan: «Epai irmo bidez zehatuta ez egotea, eta beraz, lege honetan edo beste batzuetan zehaztutakoari jarraituz dirulaguntzak lortzeko aukera galdu ez izana.».

322. Esku artean dugun arauaren mailak, beraz, debeku hori ordenamenduan jasotzeko aukera ematen du.

323. Kontratatzeko debekuari dagokionez, kudeaketa zertxobait konplexuagoa da, baina berdin-berdin bidera daiteke.

324. Kasu horretan, debekua Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 71.1.b) artikuluan oinarrizko izaerarekin aurreikusten den debekuaren gainetik egongo litzateke, hots, debeku honen gainetik: zehapen irmo bat jaso izana oso arau-hauste astuna egiteagatik ingurumenaren arloan, araudi indardunean ezarritakoari jarraituz. Esan dugun bezala, kontratatzeko debeku berriak arau-hauste astunei ere eragingo lieke, eta neurri zuzentzaileak bete edo zehapen ekonomikoa ordaindu arte iraungo luke.

325. Batzordeak 97/2008 Epaian egin zuen interpretazioaren arabera, orduan indarrean zegoen Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legearen esparruan, legeak Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 49.2.c) artikuluaren oinarrizko izaera baztertzen zuenez —gaur egun indarrean dagoen Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 71.1.f) artikuluaren antzekoa da, zehapenaren administrazio-bidearen izaera irmoa kenduta—, inplizituki, legegile sektorialaren eskumena aitortzen zela adieraz zezakeen (autonomia-erkidegoko legegilea izan zitekeen), zehapenen

balizko zerrendan mota horretako zehapenak sartzeko, betiere kontratatzeko debekua haren eskumen-eremura egokituta.

326. Horren adibide da, nahiz eta Estatuari eragiten dion, duela gutxiko abenduaren 7ko 20/2018 Errege Lege-dekretua, Espainian industriaren eta merkataritzaren sektorean lehiakortasun ekonomikoa bultzatzeko premiazko neurriei buruzkoa. Horren bidez, Industriari buruzko uztailaren 16ko 21/1992 Legea aldatzen da, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 71.1.b) artikuluko kontratatzeko debekuak dakarren zehapena gehitzeko («Agintaritza zehatzaile eskudunak, gainera, arau-hauste astun eta oso astunetan, dirulaguntzak jasotzeko aukera galtzea eta administrazio publikoekin kontratuak egiteko debekua ezartzea erabaki ahal izango ditu, bi urterako arau-hauste astunetan, eta bost urterako arau-hauste oso astunetan»).

327. Sektore publikoko kontratazioa politika publikoak lortzeko elementu estrategikotzat jotzen denez, jarduera ekonomikoan duen pisua eta eragina erabili beharko dira kontratua betetzetik harago doazen helburuak lortzeko, bai zentzu positiboan –hau da, gizarteko, ingurumeneko eta bestelako elementuak balioetsiko dira esleipenean–, bai zentzu negatiboan –kontratu publikoetarako sarbidea ukatuko zaie arlo jakinetan legea hausten duten eta zehapenak jasotzen dituzten enpresei–.

328. Bestalde, debekuak zehaztean –batez ere, kontratatzeko debekua–, batzordeak ez du ulertzen aurreproiektuak zergatik mugatzen duen debeku horien aplikazioa Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikora.

329. Dirulaguntzen eremuan, erabateko ahalmen arautzailea dute foru-organoek, Estatuko oinarrizko legeriaren baldintzapean. Hala, mugaketa hori foru-araubideak berak konpon lezake, edo, bestela, dirulaguntzen deialdian konpon liteke, baina ez da berdina gertatzen kontratazioaren arloan.

330. Kontratatzeko debekuaren arabera, lege sektorialak zehaztu behar du debeku hori, kasu honetan ingurumen-legeak, eta, debekuaren eremua Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikora mugatzen denez, toki- nahiz foru-eremuei ez zaie aukerarik ematen, inolako justifikaziorik gabe, zehapen osagarri hori erabiltzeko. Hala ere, aurreproiektuak ematen dizkien eskumenen arabera, zehapenak jar ditzakete arau-hauste astunen kasuan, eta foru-organoek, gainera, arau-hauste oso astunen kasuan.

E) Arauak hausten dituzten pertsonen eta zehapenen argitalpena

331. Aurreproiektuaren 116. artikuluak arau-hausteen eta zehapenen argitalpena xedatzen du ondorengo baldintzen arabera.

332. Arau honetan nahiz ingurumenaren arloko beste sektore-legeria batzuetan aurreikusten diren arau-hauste oso astunen ondoriozko ebazpen zehatzaileak argitaratzea xedatzen du 1. zenbakiak. Argitalpena, labur azalduta, dagokion aldizkari ofizialean eta haren egoitza elektronikoan egin beharko da derrigorrez. Nahi izanez gero, hedabide sozialen bidez argitaratu ahal izango dituzte zehapenak jartzeko eskumena duten agintaritzek. Nolanahi ere, administrazio-bidean irmoak direnean soilik argitaratuko dira.

333. Bigarren zenbakiaren arabera, interes publikoko arrazoiak daudela irizten dutenean, zehatzeko ahalmena duten organoek arau hauste astunak egiteagatik ezarririko zehapenak argitaratu ahal izango dituzte, behin administrazio-bidean irmoak direnean. Kasu horretan, dagokien egunkari ofizialean, bere egoitza elektronikoan eta, nahi izanez gero, egoki irizten dituzten hedabide sozialen bitartez egin daiteke argitalpena.

334. Bi kasuetan, pertsona erantzulearen identitatearen, egindako arau haustearen eta ezarririko zehapenaren berri emango da, eta hala dagokionean, exijitutako lehengoratzeko eta kalte ordainak ordaintzeko obligazioen berri laburra emango da.

335. Artikulu horren 4. zenbakiak mandatu hau jasotzen du: Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ingurumenaren alorreko arauak urratzen dituzten pertsonen Erregistro bat sortuko du Euskal Autonomia Erkidegoan; bertan egongo dira jasota Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak epai irmoan oinarrituta zehatutako pertsona fisikoak edo juridikoak. Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduari dagokionez, etorkizunean egin beharko da araudia.

336. Artikulu horrek, lehenik eta behin, aplikazio-eremuaren inguruko zalantza eragiten du; izan ere, arau honetan nahiz ingurumenaren arloko beste sektore-legeria batzuetan xedatzen diren arau-hauste oso astunak aipatzen ditu 1. zenbakiak. Hortaz, antza denez, arloaren barnean «arau orokor» izatea da asmoa, beste gai batzuetan egin den bezala (adibidez, kontratazio berdean edo ingurumen-fiskalitatean).

337. Hala ere, ingurumenaren arloak zeharkako izaera duenez, hain zuzen, eta, batzuetan, modu lausoan, beste gai batzuekin bat egiten duenez, aplikazio-eremua, hala planteatuta, irekiegia da.

338. Gogoratu beharra dago ingurumenarekin loturiko kontuek «izaera konplexua eta polifazetikoa» dutela. Gainera, ingurumenaren-arloak zeharkako izaera ere badu, eta, beraz, espezifikotasuna duten beste gai batzuei eragiten die, hau da, «ingurunea osatzen duten elementuei (ura, atmosfera, fauna eta flora, mineralak) edo elementu horien gaineko zenbait giza ekintzari (nekazaritza, industria, meatzaritza, hirigintza, garraioa)».

339. Konstituzio Auzitegiaren 102/1995 Epaiak, ekainaren 26koak, gogoratzen zuen bezala, «Ingurumenaren arloko kontuek berezko izaera konplexua eta polifazetikoa dutenez, ordenamendu

juridikoko sektore anitzenei eragiten diete (KAE 64/1982). Horrek azaltzen du arlo honen gainean Estatuak duen eskumena nola bateratzen eta elkartzen den, poliedro baten moduan, autonomia-erkidegoen beste hainbat eskumenekin: lurralde-antolamendua eta hirigintza, nekazaritza eta abeltzaintza, mendiak eta ura, eta ehiza eta arrantza».

340. Lehen eta bigarren zenbakiek «lege honetan nahiz ingurumenaren arloko beste sektore-legeria batzuetan aurreikusten diren» arau-hausteak aipatzen dituztenean, ez dago argi aipatutako sektore guztietara edo batzuetara soilik heldu nahi den, edo «ingurumen-babesean baino ardazten ez diren » arloez soilik ari den; adibidez, hondakinez, zarataz, Natura Ondarea Kontserbatzeari buruzko Legearen Aurreproiektuan jasotzen diren arloez —aurreproiektuak, bide batez, batzorde honen irizpena jaso zuen— edo Klima Aldaketari buruzko Legearen Aurreproiektuan jasotzen diren arauez –lanketa-prozesuan dago legea, baina ez hain aurreratuta–.

341. Interpretaziorik zabalena, gure iritziz, gehiegizkoa da; izan ere, bat egiten duten eskubideen eta interesen artean beharrezkoa den neurria, eremu edo sektore horietan guztietan, oso desberdina izan daiteke publizitateak ukitutakoen arabera (dimentsio eta sektore desberdineko enpresak, pertsona fisiko eta juridikoak, partikularrak...).

342. Interpretazio zorrotzenak ematen du zentzuzkoena, baina, aplikazio-eremua ingurumen-babesean baino ardazten ez diren arloetara mugatuta ere, aurreproiektuak ez du nahikoa zehaztasunik eta ez dirudi dagoeneko aipatu diren bi aurreproiektuen izapidetze paraleloa kontuan hartzen duenik, hau da, Natura Ondarea Kontserbatzeari buruzko Legearen eta Klima Aldaketari buruzko Legearen aurreproiektuena.

343. Lehen aurreproiektuak zehapenak argitaratzeko berariazko araubidea jasotzen du, eta, klima-aldaketari dagokionez, ingurumen-diziplinaren inguruan «Ingurumen Administrazioari buruzko Legean ezartzen dena» modu osagarrian aplikatzea aurreikusten du aurreproiektuak.

344. Hondakinen arloan, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legearen 56. artikuluaren arabera, interes publikoko arrazoiak daudela irizten dutenean, zehatzeko ahalmena duten organoek arau hauste astunen edo oso astunen ondorioz batzordeak ezarririko zehapen irmoak argitaratu ahal izango dituzte, baita pertsona fisiko edo juridiko erantzuleen izen-abizenak eta sozietate-izena ere, dagokion egunkari ofizialean eta egoki irizten dituzten hedabide sozialen bitartez. Sektore horretan, beraz, ez da aurreproiektua ireki behar arauak hautsi dituzten pertsonen identifikazio-datuen eta jarritako zehapenen argitalpena ezartzeko; izan ere, erregelamendu-mailako arauak nahikoa dira horren aplikaziorako.

345. Batzordeak, beraz, aurreproiektuko 116. artikuluko argitalpen-arauen aplikazio-eremua birplanteatu behar dela irizten du, eta, hala, zehaztasun gehiagorekin mugatu behar dela, indarrean dauden arauekin bat eginez –lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legearekin, esaterako–, baita Euskal Autonomia Erkidegoan natura-ondarearen kontserbazioari eta klima-aldaketari loturik egiten ari denarekin ere.

346. Artikulu honen funtsaren edukiari dagokionez, lanketa-fasean zehar eragozpenen bat planteatu da haren proportzionaltasunaren inguruan; izan ere, datu horien argitalpena gatazkan egon daiteke Konstituzioko 18.4 artikuluan jasotzen den datu pertsonalak babesteko eskubidearekin.

347. Justifikazio gisa, neurri osagarri bat dela baieztatzen du jasotako alegazio eta proposamenen memoriak, hau da, zehapen-araubidea sendotzen duela eta astuntasun handiagoko kasuetara mugatzen dela. Era berean, jasotako oharretan planteatzen diren kautela-neurrietako batzuk txertatzea aztertzen du, eta beste eremu batzuetan duela gutxi egin diren garapenak gogoratzen ditu, hala nola eremu fiskalean edo hondakinen eremuan; izan ere, onespena lortzeko behar diren analisiak eta kautela juridikoak gainditu dituzte.

348. Guk emandako 9/2016 Irizpenean, 116. artikuluan jasotzen diren funtsezko bi kontuak aztertzen ditugu: zehapenen argitalpena eta arauak urratzen dituzten pertsonen erregistroaren sorrera.

349. Orduan argudiatu genuen bezala, dagoeneko indargabetuta dagoen Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoari dagokionez, zehapenak jartzeari loturiko datu guztiak ez daude datuen babesari buruzko legerian xedatzen denaren mende. Izan ere, indargabetuta dagoen legearekin gertatzen den bezala, egungo 3/2018 Lege Organikoak, abenduaren 5ekoak, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoak, aplikazio-eremua mugatzen du pertsona fisikoek datu pertsonalen babeserako duten funtsezko eskubidera, Konstituzioaren 18.4 artikuluaren arabera.

350. Banakako enpresaburu gisa jarduten duten pertsonei dagokienez, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko Legeak araubide espezifiko bat jasotzen du, hemen hizpide dugunari lotua. Aurreko erregulazioarekin, Datuen Babeserako Espainiako Agentziak (42/2008 txostena) eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoak (CN14-014) honako hau interpretatzen du: «Esparru pertsonaletik argi bereizita dauden, baina merkataritza- edo industria-jarduerari lotuta dauden eta enpresaburu-izaerarekin jarduten duten banakako enpresaburuen datuak dituzten fitxategiak ez dira datu-babesaren araudiaren mende egongo», banakako enpresaburuen datuak jarduera horren esparruan bakarrik erabiltzen badira. Jarduera

pribatua eta jarduera profesionala ezin badira ondo bereizi, orduan banakako enpresariaren datuak datuen babeserako legeriaren menpe egongo dira.

351. Kontu hori garrantzitsua da, aurreproiektuaren ingurumen-diziplinaren araubideak pertsona juridikoei eragiten dielako funtsean; pertsona fisikoen kasuan, banakako enpresariei eragiten die.

352. Hori esanda, batzordeak gogorarazten duenez, kasu honetan, arau baten lege-mailak ez du beti bermatzen haren eduki osoak izaera pertsonaleko datuen babeserako oinarrizko eskubidea errespetatzen duenik. Aipatutako irizpenean dagoeneko adierazi dugunez, gaikuntza bat behar da, lege-mailako arau bidez, pertsonek datu pertsonalen babeserako duten oinarrizko eskubidea mugatu ahal izateko. Gainera, «lege-mailaren» irizpidea bete beharko du, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak CN11-007 edo CN14-021 irizpenetan bezala.

353. Alde horretatik, datu pertsonalen bilketa eta trataera datuen kalitate-printzipioa eta proportzionaltasun-printzipioa kontuan hartuta egiteko eskatzen du: «Egokiak eta beharrezkoak baino ez diren datuak, zer xederako tratatzen diren kontuan hartuz ("datuen minimizazioa")» (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 erregelamenduaren 5.1.c artikulua).

354. Era berean, honako hau eskatzen du: «Datu pertsonalak mantendu egingo dira halako moldez, non pertsona interesdunak identifikatzeko aukera emango den, beharrezkoa den denboran soilik, datu pertsonalak tratatzeko helburuetarako(...) (gordetzeko epearen muga)» (aipatutako erregelamenduaren 5.1.e artikulua).

355. Horregatik, muga horiek ezartzen dituen legeak «murrizketak zehaztu beharko ditu, mugatzeko irizpide zehaztugabeak edo hedakorrak erabili gabe, mugak ezartzeak norberaren intimitaterako funtsezko eskubidea urratzen duelako, baldin eta muga horien ondorioz ezin baliatuzkoa bada eragindako funtsezko eskubidea, edo eraginkortasunik gabekoa Konstituzioak ematen dion bermea» (KAE 70/2009). Konstituzio Auzitegiaren arabera, eskubide horretan eskua sartzeko –intimitaterako funtsezko eskubidean bezala–, «ezinbestekoa» da lege-aurreikuspen batek «esku hartzeko oinarri eta baldintza guzti-guztiak adieraztea (…)»; edo gauza bera dena, nolabaiteko «lege-maila» izatea.

356. Hau da, ez da aski legean finkatzea orain eragindako funtsezko eskubidearekiko mugak, baizik eta, beharrezkoa da, halaber, «justifikazio objektiboa eta arrazoitua izatea, eta zorrotz betetzea proportzionaltasun-printzipioa, printzipioaren hiru alderdietan: egokitasuna, premia eta, zentzu hertsian, proportzionaltasuna».

357. Bada, aurreproiektuan xedatutakora itzuliz, alde batetik, arau-hauste oso astunen ondoriozko ebazpen zehatzaileak derrigorrez argitaratu behar direla ikusten dugu, eta,

bestalde, arau-hauste astunak argitaratzeko aukera dagoela, interes publikoko arrazoiak daudenean. Bi kasuetan, pertsona erantzulearen identitatearen, egindako arau-haustearen eta ezarririko zehapenaren berri emango da, eta hala dagokionean, exijitutako lehengoratzeko eta kalte-ordainak ordaintzeko obligazioen berri laburra emango da.

358. Adibide moduan, Datuen Babeserako Espainiako Agentziak (dopinaren arloan) aurreko araudiaren esparruan ondorioztatu zuenez –eta, hemen eragiten gaituenari dagokionez, araudiaren substantzia mantentzen da–, zehapenen argitalpenak ez dio aurka egiten datuen babeserako legeriari, betiere zenbait muga betetzen badira: I) argitalpena ezin da ulertu zehapen gehigarri bat balitz bezala —legeriak ez du zehapen espezifikotzat jotzen ohartarazpen publikoa—; aitzitik, zehapen-prozeduraren ezinbesteko ondorio gisa ulertu behar da; II) proportzionaltasun-printzipioa bermatu behar da, argitaratzen denaren irismenari eragiten baitio, argitara daitezkeen datuei loturik eta argitaratzeko uneari loturik; eta III) xede-printzipioa bermatu behar du argitalpenak; hau da, zehapena iragan ondoren, datua ezereztuko da.

359. Kasu honetan, arau-hauste oso astuntzat jotzen diren jarduketek ingurumenean edo pertsonen osasun eta segurtasunean kaltea edo arrisku larriak eragin baldin baditzakete, justifikagarria izan daiteke arau-haustea edo zehapena publikoki ezagutaraztea. Beraz, batzordearen ustez, aurreproiektuan hartzen den aukerak gainditu egiten du neurriaren proportzionaltasun-iritzia.

360. Haztapen horri dagokionez, kontuan hartu behar da, alde batetik, ingurumenaren arloko administrazio-zehapenen inposaketa esplizituki jasotzen dela Espainiako Konstituzioaren 45.3 artikuluan; izan ere, babestu nahi den ondasun juridikoak balio izugarria du, hain zuzen. Bestalde, sektore honetan, informazioaren sarbidea, gardentasuna eta herritarren partaidetza oso erroturik eta finkaturik daude. Aurreproiektuak, horrexegatik, orain arte aitortua izan den neurri bat baino ez du txertatzen, organo sustatzaileak azaltzen duen bezala, ingurumenaren arloko beste arau batzuetan.

361. Arau-hauste astunei dagokienez, beti ezin da zuzenean zehaztu arau-hausteak kalte edo arrisku larririk ekarriko al duen. Hala ere, argitalpen hori haztapen zehatz baten mende geratzen da kasu bakoitzean, eta, horren arabera, organo sustatzaileak justifikatu beharko du interes publikoko zer arrazoi direla-eta komeni den argitalpena egitea. Horrenbestez, aukera arautzaile proportzionatu baten aurrean gaudela uste du batzordeak.

362. Dena den, zalantza handiagoak sortzen dira arauak urratzen dituzten pertsonen erregistroarekin. Izan ere, hasteko, ez da argitzen izaera publikoa izango duen edo

horretara sartzeko arau minimorik egongo den. Gainera, ez da inolako mugarik adierazten erregistroaren edukiari loturik; beraz, badirudi arauak hausten dituzten pertsona guztiak inskribatu behar direla, arau-hauste arinak egiten dituztenak barne.

363. Arauak urratzen dituzten pertsonen erregistroak helburutzat izan behar du jarritako zehapenen informazioa eta kontrola administrazioaren esku egotea, berrerortzeak egoten direnerako edo zehapen osagarrien jarraipena egiteko (adibidez, kontratatzeko debekua). Horrek ez du inolako eragozpenik sortzen, baldin eta, erregistroaren mantentze-lanetan, datuen babeserako araudian xedatzen dena kontuan hartzen bada.

364. Aldiz, sarbide publikoa eta orokortua duen erregistro bat egingo balitz, 9/2016 Epaian ohartarazten dena errepikatu behar dugu, Turismoaren Legearen aurreproiektuak aipatzen zuen zehapen-erregistroaren inguruan.

365. Batzordeak uste duenez, beraz, erregistro horretarako aurreikusten den erregulazioak ez du nahikoa xehetasunik ematen jaso beharreko datuen edukiaren inguruan, ezarri nahi dituen betebehar eta mugen inguruan eta bertara sartzeko moduaren inguruan (hau da, ez luke beteko Konstituzio Auzitegiak eskatzen duen «lege-maila»). Arauak, beraz, honako hau baino ez du xedatzen: «EAEko ingurumen-arauak hausten dituzten pertsonen erregistro bat sortzea, non jasoko diren ebazpen irmoa jaso duten pertsona fisiko zein juridiko arau-hausleen izenak».

366. Hortaz, ez dago behar adina informaziorik erregistro horietan jasotako datuetara sarbidea izateko mugaketari buruzko ebaluazioa egiteko. Nolanahi ere, eztabaidaezina da ezen, erregistro horretan dauden datu pertsonalak eskuratzeko, datu horiek babesteko araudiari jarraitu beharko zaiola, kontuan hartuta, gainera, administrazio-arloko arau-hausteak izateagatik, datuak bereziki kontuzkoak direla (adibide gisa, Jendaurreko Ikuskizunena eta Jolas Jarduerena den abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 66. artikuluan eta Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 102. artikuluan, ohartarazi egiten da errespetatu egin behar dela datuak babesteari buruzko araudia).

VIII GAINERAKO GAI ZEHATZAK

367. I. tituluan, **2. artikuluak** hainbat definizio jasotzen ditu.

368. Artikulu horrek, azalpen moduan, hainbat kontzepturen definizioa jasotzen du; izan ere, ondoren, aurreproiektuaren testuan erabiltzen dira. Hala ere, ingurumen-ebaluazioari loturiko hainbat kontzepturen definizioak ez dira jasotzen artikulu horretan, II. G. eranskinean baizik. Definizioen azken eranskin hori, beraz, lanketa-prozesuan igorri diren hainbat ohartarazpenen ondorio da, 2. artikuluan jasotzen ez ziren zenbait kontzepturi lotua.

369. Hasiera batean, batzordeak positibotzat jotzen du bertan erabiltzen diren kontzeptuen definizioak arauan sartzea; izan ere, araua argiagoa, zehatzagoa eta irisgarriagoa izatea da helburua. Definizioak artikuluetan zehar eta arauan erregulatzen den gai bati buruzko eranskin espezifiko batean sakabanatzen badira (eta horrela da kasu honetan), argitasuna eta irisgarritasuna kaltetu daitezke.

370. Batzordeak, beraz, horiek bateratzeko gomendatzen du, baina, banaketa hori komenigarria edo beharrezkoa dela uste denean, gomendagarria da aurreproiektuaren 2. artikuluak argitasunez adieraz dezala ingurumen-ebaluazioarekin loturiko definizioak eranskin horretan jasotzen direla.

371. Era berean, 2. artikuluko n) eta o) apartatuetako definizioak berrikustea gomendatzen da (funtsezko aldaketa eta funtsezkoa ez dena). Lehen kasuan, segurtasunari buruzko aipamena mantentzeko eta pertsonen osasunari buruz ari dela argitzeko. Bigarren kasuan, segurtasunari buruzko aipamena mantentzeko baino ez, ingurumenarekin eta pertsonen osasunarekin batera.

372. Ingurumenerako Aholku Batzordeari ematen zaizkion funtzioen artean, **10. artikuluaren** g) apartatuan, barne-funtzionamenduko arauak bere egitearen eta, hala badagokio, atalak sortzearen funtzioa jasotzen da. Gaitasun hori ez da batzordearen funtzio bat, baizik eta antolamendu-eremuko gaitasun bat, zenbaki bereizi batean jaso beharrekoa.

373. Era berean, kasu horretan dagokion onespena jasoz gero, funtzio horien artean Ingurumen Esparru Programari buruzko informazioa ematea xedatzen dela ohartarazten dugu, baina ez da kontuan hartzen, aldiz, garapenaren plan espezifikoei buruzko informazioa ematea.

374. Aurretiazko kontsultei buruzko **21. artikuluari** dagokionez, informazioa emateko xedea baino ez duela ematen du, baina hori esplizituki zehaztea komeniko litzateke.

375. **33. artikuluan** ingurumen-baimen integratuaren eta ingurumen-baimen bakarraren edukia zehazten da. Zerrenda horretan ez da ezer adierazten Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen 12.1.12 artikuluan zehazten denari loturik. Artikulu horretan, Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistema ezarrita duten instalazioak aztertzen dira. Hori berrikustea eta, hala badagokio, proiektuan txertatzea gomendatzen da, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legean aurreikusten denaren arabera.

376. **35. eta 36. artikuluetan**, hilabeteko epea aurreikusten da jendaurreko informaziorako. Hau da, zertxobait urruntzen da oinarrizko araudian xedatzen denetik; izan ere, bere aldetik, 30 eguneko gutxieneko epea agintzen du ingurumen-baimen integratua emateko. Egun baliodunak direnez (Administrazio Prozedura Erkideari buruzko

Legearen 30.2 artikulua), ez litzateke beteko oinarrizko araudiak ezartzen duen gutxieneko epea (Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen 16.1 artikulua).

377. **41. artikuluan**, ingurumen-baimenetako igorpenen muga-balioari buruzkoan, irizpide desberdina ezartzen da ingurumen-baimen integraturako eta ingurumen-baimen bakarrerako. Lehen kasuan (1. zenbakia), kontuan hartu beharreko hainbat irizpide zehazten dira, teknika erabilgarri onenei dagokienez. Bigarrenean, aldiz, igorpenen muga-balioak zehazteko, honako hau zehazten da: teknika erabilgarri onenak kontuan hartu ahal izango dira, aurreko atalean zehazten denaren arabera. Hala adierazita, hautazko erabaki bat dela dirudi.

378. Hala ere, bilatzen den esanahia adierazteko, hobe da «hala badagokio» adierazpena erabiltzea.

379. **42. artikuluan**, ingurumen-baimen integratuaren eta ingurumen-baimen bakarraren edukiari buruzkoan, ez da jasotzen Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen 22.1.j) artikuluan izaera minimoarekin aurreikusten den edukia: lurzorura eta lurpeko uretara isurtzea saihesteko neurriak aldizka mantentzeko eta gainbegiratzeko betekizun egokiak, b) letran ezarritakoarekin bat, eta, hala behar denean, lurzorua eta lurpeko urak aldizka kontrolatzeko betekizun egokiak, ustez aurki daitezkeen substantzia arriskutsuei dagokienez, instalazioaren inguruko lurzorua eta lurpeko urak kutsatzea gerta litekeela aintzat hartuta.

380. Hemen ere, hori berrikustea eta, hala badagokio, proiektuan txertatzea gomendatzen da, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legean xedatzen denaren arabera.

381. Lanketa-prozeduran zehar adierazi den arren, ez da gatazka gaindiezinik ikusten aurreproiektuko **99.7 artikuluan** uraren eta energiaren hornidura etetearen aukerari loturik xedatzen denaren eta Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 52.4 artikuluko azken zatiaren artean. Azken horretan, abenduaren 26ko 24/2013 Legearen arabera funtsezko zerbitzutzat jo diren instalazioetan energia elektrikoaren hornidura eten ezin izango dela adierazten da. Gatazkarik egoten bada, bat datozen baldintzak aztertu beharko dira, eta, kasua denean, oinarrizko legeria errespetatu beharko da.

382. Hala ere, horrek ez du esan nahi, aurreproiektuaren baldintzak errespetatuz, neurria ezarri ezin denik.

383. **Xedapen gehigarri bakarrean**, administrazioek behar beste bitarte eskuratzeko mandatua, ez da beharrezkoa batzordearentzat; izan ere, administrazioak legearen

arabera dihardu (EKren 103. artikulua) eta, beraz, hori bete eta betearazi behar du eskuragarri dituen bitartekoekin eta, gainera, aurrekontuek urtero aurreikusten dutenaren arabera. Beraz, adierazitako xedapenak ezin du, ezta ere, inolako betebeharrik inposatu horien lanketan eta onespenean.

384. **Eranskinei** dagokienez, batzordeak, haien izaera teknikoa dela-eta, alderdi formalak baino ezin ditu balioetsi. Hala ere, arautu beharreko egoerak identifikatzeko funtsezkoak direnez, horiek ahalik eta arreta handienarekin definitzea gomendatzen du.

385. Hala ere, **I.A eranskinaren 5. puntuan**, ez da jaso Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen I. eranskinaren 5. puntuan aurreikusten den egoera hau: «50 tona hondakin arriskutsu baino gehiagorentzako lurpeko biltegia». Hori berrikustea gomendatzen dugu, kasua bada eranskinean sartzeko.

386. **I.C eranskinean**, sailkatutako jarduerarako lizentzia behar duten jardueren eta instalazioen zerrenda egiten da I. eranskineko «A., B. eta D. ataletan jaso ez diren jardueren kasuan». Bere aldetik, I.D eranskinak, antzeko mezua ematen du aurretiazko jakinarazpena behar duten jarduerei eta instalazioei dagokienez, kasu honetan A., B. eta C. eranskinei dagokienez. Hala, erreferentzia zirkular horrek nahasmendua baino ez du sortzen.

387. Aukerarik zentzuzkoena D. atalari egiten zaion aipamena I.C eranskinetik kentzea litzateke; hartara, kasuren batean lizentziaren edo aurretiazko jakinarazpenaren beharraren arteko zalantza egongo balitz, babes handieneko araubidea inposatuko litzateke: jarduera-lizentzia sailkatua.

388. **II.D eranskinaren 1. puntuak** adierazten duenez, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta egin beharko dute (…) 1. II.C eranskin horretako taldeetan jasotzen diren egoeraren batean dauden proiektuek.

389. Akats bat dela uste dugu; izan ere, II.C eranskinak ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua egin duten planek eta programek ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta behar dutela zehazteko irizpideak jasotzen ditu.

390. Hori berrikustea gomendatzen dugu, eta, kasua bada, zuzentzea.

391. Ingurumen-ebaluazioarekin loturiko definizioen artean (**II.G eranskina**), «ingurumen-dokumentua» definizioa sartzea gomendatzen dugu; izan ere, 33., 45. eta 49. artikuluetan eta azken xedapenetatik bigarrenean azaltzen da.

IX LEGEGINTZA-TEKNIKARI BURUZKO BESTE OHAR BATZUK

392. Gaztelaniazko testuan, 9.2 artikuluan mendeko esaldirik ez erabiltzea gomendatzen da, ulergarritasunaren mesedetan («El Programa Marco Ambiental, que podrán desarrollarse mediante planes específicos»…). Mezuak esaldi banatan banatzea gomendatzen da.

393. 13. artikuluan, «babes bereziko eremuak» aipatu beharrean, Euskadiko Natura-Ondarea Kontserbatzeko Legearen Aurreproiektuarekin bat etorriz, «naturagune babestuak» aipatu beharko lirateke. Kontu bera gertatzen da II.A eranskinaren 7. puntuan «gune babestuak» aipatzen direnean.

394. Gaztelaniazko testuaren 30.2 artikuluan «emisiones a la atmósfera» moldearen aurretik «y» lokailua falta da.

395. Era berean, 41. artikuluan «de conformidad a» moldearen ordez «de conformidad con» erabiltzea gomendatzen da.

396. Era berean, «apartatuak» beharrean, «zenbakiak» aipatu beharko dira teknika arautzailearen gure gidalerroek hala zehazten duten kasuetan.

397. Gaztelaniazko testuan, 67.2 artikulua honela hasten da: «sin perjuicio de lo señalado en el apartado 7 de este artículo». Horrek, beraz, 7. apartatuari egiten dio aipamen, kalterik gabe, eta nahasmendua baino ez du sortzen.

398. 114. artikuluaren tituluak kontratatzeko debekua baino ez du aipatzen, baina, edukiari dagokionez, dirulaguntzak jasotzeko debekua ere jorratzen da.

399. 91. artikuluan, «al personal… a que» moldearen ordez «el personal… al que».

400. 96. artikuluan, «se podrán» moldearen ordez, «se podrá».

401. 102. artikuluko 1. zenbakiaren azken tartekia kentzea gomendatzen dugu; izan ere, bertan aipatzen den 2. zenbakiak eduki orokorra du. Horren ildotik, 2. zenbaki horren mezua berrikus liteke; izan ere, 1. zenbakian aipatzen diren eskumenez gain, artikulua, oro har, ez da argia.

402. 110.1 artikuluan, «o» lokailua jarri behar da behin betiko itxiera «o» behin-behinekoa.

403. 118. artikuluan honako hau esaten da: «Lege honetan zehaztutako aurrekontu-sailean». 85.3 artikuluan aurreikusten den aurrekontu-saila izango dela suposatzen dugu –arauan

ez baita besterik aipatzen–, baina ingurumen-fiskalitatearen esparrukoa da hori. Hala bada, argiagoa izan dadin, zehatz mehatz adierazi beharko litzateke manua zein den.

ONDORIOA

Batzordearen irizpena da, txosten honen mamian egindako oharpenak kontuan hartu ostean, lege-aurreproiektua Gobernu Kontseiluari helaraz dakiokeela, onetsia izan dadin.

Eta hala ziurtatzen dugu, Gasteizen, 2019ko uztailaren 12an, jakin eta kontuan har dadin. Era berean, azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 30.2 artikuluak xedatzen duen betebeharra gogorarazi nahi dugu: azkenean onartzen den xedapen edo ebazpena Batzorde honi komunikatu behar zaio, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren antolamendu eta funtzionamenduaren Erregelamenduaren 34. artikuluak xedatzen duen moduan eta epean (irailaren 12ko 167/2006 Dekretuaren bidez onetsi zen erregelamendu hori).

O. E.:

Jesús María Alonso Quilchano,
Idazkaria

Sabino Torre Díez,
Presidentea